

historia y cultura

LOS TERRATENIENTES DE LA PAMPA ARGENTINA

una historia social y política

roy hora

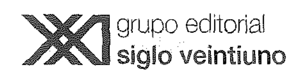
siglo veintiuno
editores

LOS TERRATENIENTES DE LA PAMPA ARGENTINA

una historia social y política, 1860-1945

roy hora





siglo xxi editores, méxico
CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310 MÉXICO, DF
www.sigloxxieditores.com.mx

siglo xxi editores, argentina
GUATEMALA 4824, C1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINA
www.sigloxxieditores.com.ar

anthropos
LEPANT 241, 243 08013 BARCELONA, ESPAÑA
www.anthropos-editorial.com

Hora, Roy
Los terratenientes de la pampa argentina: Una historia social y política, 1860-1945.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015.
392 p.; 23x16 cm.- (Historia y cultura // dirigida por Luis Alberto Romero; 66)

ISBN 978-987-629-556-7

1. Historia Argentina. I. Título.
CDD 982

Título original: *Landowners of the Argentine Pampas. A Social and Political History, 1860-1945*

Una primera versión castellana de este libro se publicó en 2002 en la colección "Historia y política" de Siglo XXI Editora Iberoamericana.

Diseño de cubierta: Peter Tjebbes

ISBN 978-987-629-556-7

Impreso en Altuna Impresores // Doblas 1968, Buenos Aires
en el mes de junio de 2015

Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina // Made in Argentina

Índice

Advertencia a la presente edición

Este libro es el primer trabajo que se propuso comprender, de manera detallada y sistemática, la trayectoria histórica de la gran burguesía terrateniente argentina. Estudia su ascenso en el período que se abrió con la Revolución de Mayo, su apogeo en las décadas de pasaje del siglo XIX al XX, y su declinación en los años que sucedieron a la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Intenta dar respuesta a un conjunto de interrogantes esenciales para determinar la naturaleza de lo que en su momento fue una de las clases propietarias rurales más opulentas del planeta, así como para comprender qué lugar ocupó y qué incidencia tuvo esta poderosa elite agraria en la historia de nuestro país.

Para ello, analiza en qué momento y por qué razones los grandes propietarios de la región pampeana comenzaron a percibirse como una clase terrateniente, cuál fue su gravitación económica y cuán dinámicos fueron en tanto empresarios, qué tipo de vínculos tejieron con los demás sectores propietarios (en particular, con la burguesía industrial), cómo fueron sus relaciones con las clases subalternas urbanas y rurales, cuál fue su imagen pública y qué visión tenían de sí mismos y de su lugar en la sociedad. El libro también explora un conjunto de cuestiones que giran en torno a la relevancia política de este grupo y a su influjo y/o participación en la cúspide del sistema de poder. En particular, se pregunta qué significó la política para los grandes terratenientes pampeanos, y qué significaron ellos en la vida política de nuestro país. Por último, analiza qué cambió en todos estos planos con el paso del tiempo, a lo largo de los ochenta años que corren entre las presidencias de Sarmiento y Perón.

Estos interrogantes poseen importancia historiográfica pero también cierta relevancia pública. De hecho, no es casual que este libro, aparecido por primera vez en inglés en 2001 y en castellano en 2002, y ahora reeditado gracias a una generosa invitación de Siglo XXI Editores, fuese imaginado y escrito en la década de 1990. Este breve texto introductorio intenta explicitar cuáles fueron esos estímulos y en qué circunstancias

cobraron forma. Al mismo tiempo, se propone poner de relieve las razones por las cuales las preguntas que orientaron esta investigación aún están vigentes y justifican su reedición.

Es importante recordar que, en esos años, una imagen simplificada y abrumadoramente negativa de los grandes terratenientes y de los tiempos de la Argentina agroexportadora todavía ocupaba una posición dominante en las representaciones sobre nuestro pasado. Esa visión, que había ganado un peso creciente en la conciencia colectiva entre la Gran Depresión y el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que se había vuelto hegemónica en los estudios académicos entre las décadas de 1940 y 1970, describía a los estancieros pampeanos como una clase rentista y parasitaria, carente de vocación o talento empresarial. Algunos autores disentían con aspectos específicos de este retrato, pero terminaban haciendo suyo otro punto nodal de esta narrativa: para todos ellos, las bases sociales del proyecto de país forjado por esta elite del poder y la riqueza habían sido muy estrechas. Desde este punto de vista, pues, siempre existió un hiato insalvable entre los intereses de la así llamada oligarquía terrateniente y los sectores mayoritarios de la comunidad nacional.

Por largo tiempo, esta manera de concebir a la clase terrateniente gozó de una amplia aceptación, en la que coincidían tanto expertos como legos. También ejerció un fuerte influjo sobre la política económica. Pues desde la década de 1940 la denuncia de la elite rural no sólo terminó afectando la imagen y los privilegios de este grupo, sino que también supuso una impugnación más general al patrón de desarrollo centrado en las exportaciones agropecuarias que había dado forma a la sociedad argentina desde los tiempos de la independencia y la apertura al comercio atlántico, y que fue descalificado por su sesgo favorable a los intereses agrarios de una elite concebida como dominante pero no hegemónica. Impuesta por una clase propietaria contraria al interés nacional e indiferente a la suerte de su gente, esa orientación exportadora fue señalada como un gravoso error que era imperioso reparar.

No es casual que esta interpretación ganara adhesiones entre la Gran Depresión y el fin de la Segunda Guerra Mundial, esto es, en medio de la contracción del comercio internacional más intensa y prolongada de todo el siglo XX. Los problemas que salieron a la luz en esos tiempos convencieron a muchos argentinos de que había llegado el momento de poner fin a la etapa de crecimiento impulsado por las exportaciones. Ello se confirma al constatar que, para entonces, una reforma agraria dirigida a forjar un orden productivo menos centrado en la gran propiedad, como la que las fuerzas de izquierda habían venido promoviendo

desde el comienzo del siglo XX, dejó de ser percibida como el camino más apropiado para modificar el estado de cosas existente, pues se trataba de atenuar la importancia no sólo de la elite rural sino también de un sector de la actividad económica que había perdido dinamismo y capacidad expansiva y, además, parecía mirar hacia el pasado. Desde mediados de la década de 1940, peronistas y antiperonistas, pero también militares y desarrollistas, hicieron suyo este diagnóstico y le dieron la espalda al agro. Y lo hicieron en nombre de las promesas de integración social y crecimiento económico contenidas en un proyecto de desarrollo alternativo, cuyo eje era la industrialización por sustitución de importaciones promovida desde el Estado.

Por cierto, los logros del *nuevo rumbo* consagrado en los primeros años peronistas, y mantenido sin mayores alteraciones por las administraciones posteriores, no deben subestimarse. Su perdurabilidad no fue sólo la consecuencia del poder seductor de la idea, típica de esos años, que entendía al avance industrial como el agente modernizador de la economía y la sociedad por excelencia, y como el mejor instrumento para elevar el nivel de vida de la población. Durante la vida de una generación, entre las décadas de 1940 y 1970, los incentivos a la producción manufacturera y el énfasis en el mercado interno como fuente de oferta y demanda sirvieron para atender la sed de justicia social y las expectativas de progreso que animaban a vastos sectores de nuestra comunidad. Si bien a la distancia parece razonable concluir que quizás hubiese sido aconsejable una estrategia de crecimiento menos sesgada contra el sector internacionalmente más competitivo de la economía y el único con evidente potencial exportador (cosa que se verifica al recordar los recurrentes problemas de balanza de pagos de esas décadas), lo cierto es que entonces los argentinos obtuvieron importantes beneficios y, por ende, pagaron sin culpa el precio de condenar a la marginalidad ya no sólo a los grandes terratenientes sino a todo el sector agroexportador.

En el último cuarto del siglo XX, sin embargo, esta manera de concebir al gran estanciero y a su mundo comenzó a recibir cuestionamientos, visibles tanto dentro como fuera de los ámbitos de investigación. Por una parte, los progresos de la historiografía invitaron a revisar aspectos centrales de la narrativa crítica hacia el patrón de desarrollo orientado por las exportaciones agropecuarias. Gracias a un valioso conjunto de estudios aparecidos en las décadas de 1970 y 1980, entonces se hizo evidente que la etapa de apogeo de la elite rural también había sido un período signado por un proceso de expansión económica que se contaba entre los más acelerados del mundo, por un igualmente importante fenóme-

no de diversificación del tejido productivo y de la estructura social y, tal vez más decisivo, por logros nada desdeñables en términos de movilidad social y de mejora del bienestar popular (incremento de la tasa de alfabetización, extensión de la esperanza de vida, reducción de la mortalidad infantil, etc.). Por todo ello, la Argentina de la era agroexportadora podía compararse favorablemente no sólo con los países latinoamericanos más dinámicos sino también con las naciones europeas de ingreso intermedio.

Las enseñanzas de esta literatura histórica sirvieron para constatar que el país que presidían los grandes terratenientes ofrecía un rostro más benigno que el tantas veces denunciado por las narrativas concebidas en el amanecer o la maduración de la era industrial. Ello, inevitablemente, invitaba a formular nuevas preguntas sobre la historia de este grupo, que en la década de 1990 también suscitaba un presente muy distinto al de dos décadas atrás. En esos años el ciclo histórico del patrón de crecimiento autocentrado parecía haberse agotado y, al calor de las reformas de mercado y la apertura al comercio internacional, el país buscaba a tientas la manera de redefinir su lugar en un mundo que dejaba cada vez menos espacio para los proyectos de desarrollo nacional concebidos en la etapa de inestabilidad internacional y contracción de los flujos comerciales y financieros que se abrió con la Crisis del Treinta.

En síntesis, este libro fue escrito bajo el influjo de un contexto en el que los grandes axiomas consagrados en los años de apogeo del proyecto industrialista habían perdido su condición de tales. Al igual que en otros planos de la reflexión sobre nuestro pasado, ese momento estimuló una ampliación del horizonte de preguntas que invitaba a analizar con más cuidado cuestiones tales como la naturaleza de los actores que habían contribuido a forjar el patrón de crecimiento de la Argentina exportadora, a sopesar mejor sus logros y limitaciones tanto en términos de eficiencia y crecimiento como de equidad y bienestar y, finalmente, a preguntarse por las razones tanto de su perdurabilidad como de su ocaso en los años posteriores a la Gran Depresión.

Como sabemos, esa coyuntura no fue la última estación en la deriva de nuestro país. El giro privatizador y pro mercado que signó la década de 1990 había encontrado apoyos en amplios sectores del empresariado que recelaban de la gravitación adquirida por el estado y el poder sindical, pero también en vastos sectores de la población cuyo malestar estaba asociado al hecho de que, a partir de la década de 1970, el rumbo adoptado desde fines de la Segunda Guerra Mundial había venido ofreciendo rendimientos decrecientes en lo que se refiere a la calidad de la oferta

de bienes públicos tanto como de crecimiento, bienestar y equidad. En rigor, el vuelco hacia el mercado de la década neoliberal fue menos el resultado deliberado de una nueva estrategia de desarrollo, afirmada sobre una sólida red de intereses y sostenida por amplios apoyos ciudadanos, que el producto de restricciones y dilemas que debían resolverse en el corto plazo, entre los que gravitaba con especial fuerza el peso agobiante de los compromisos financieros contraídos por el sector público durante la bonanza de los mercados de capitales de fines de los años setenta. Tanto es así que, apenas una década más tarde, cuando esas restricciones parecieron atenuarse, y en respuesta al elevado costo social del proyecto neoliberal y en especial de su dramático colapso, la Argentina nuevamente se embarcó en un experimento que aspira a recrear los años dorados del estado promotor del desarrollo y la sustitución de importaciones.

Obligada a jugar su suerte en los tiempos de la economía globalizada, y limitada por la escasa pericia profesional de sus cuadros dirigentes, esta última experiencia ha mostrado importantes limitaciones, en cuanto a su capacidad para sentar las bases de un proceso de crecimiento sustentable y para suturar las fracturas sociales que dividen a nuestro país. En la última década, el sector manufacturero ha tenido un desempeño decepcionante, que contrasta con la fuerte expansión del sector agrícola de exportación, del que la industria volcada sobre el mercado interno ha terminado dependiendo de manera muy estrecha. De hecho, la principal novedad de este período en el plano de las estructuras productivas se refiere a las potencialidades de la agricultura exportable. Desde los años noventa, este sector ha crecido a un ritmo semejante al que había alcanzado en la etapa que se cerró con la Gran Depresión, y promete seguir expandiéndose en la medida en que encuentre un marco institucional favorable.

Este horizonte de problemas públicos otra vez invita a interrogar críticamente lo que en su momento fue el sólido consenso que rechazaba toda propuesta tendiente a promover una mayor integración de la economía argentina en el mercado mundial. Las vastas movilizaciones agrarias del otoño de 2008 han mostrado, por otra parte, que el sector agrícola ha expandido sus bases geográficas y sociales, y que es capaz de movilizar apoyos considerables en la opinión pública.[1] Ello ha puesto de relieve que, en esta etapa de sostenida expansión del mercado mundial de alimentos, y gracias a la excepcional calidad de los recursos naturales con que cuenta nuestro país, el sector más dinámico de la economía puede volver a ocupar un lugar decisivo en la estrategia de crecimiento, ya no sólo como proveedor de las divisas que demanda el sector indus-

trial volcado hacia el mercado interno y como fuente de recursos para el fisco, sino como un motor del conjunto de la economía por derecho propio. Y si los últimos años han sido testigos del resurgimiento de una retórica crítica hacia los propietarios rurales –a los que con frecuencia se asocia a la oligarquía terrateniente de otros tiempos, y como promotores de un proyecto de sociedad excluyente–, también han puesto en evidencia la emergencia de una corriente de opinión que celebra las novedades tecnológicas y organizativas del campo y concibe a su empresariado como el más competitivo y dinámico del país.

Estas evaluaciones contrastantes reflejan visiones enfrentadas sobre qué patrón de desarrollo productivo resulta más apropiado para incrementar el bienestar de los habitantes de nuestro país, y también, a menudo, sobre cuáles han sido los momentos más destacados de nuestra trayectoria histórica. Los próximos años seguramente traerán novedades en la difícil tarea de encontrar una fórmula económica capaz de estimular el crecimiento y promover la equidad, y de colocar estos objetivos en la base de un proyecto de desarrollo sustentable y consensuado, inclusivo y duradero. Siempre y cuando se muestre sensible a lo que el pasado tiene de similar pero también de diferente, la reflexión sobre el camino recorrido puede ayudar a expandir los horizontes de esta búsqueda. La historia, lo sabemos bien, no tiene verdades para ofrecer. Pero además de servir para reforzar narrativas identitarias o para activar memorias de lucha y heroísmo, una mejor comprensión del pasado puede contribuir a evocar experiencias, sugerir argumentos y presentar evidencias que, amén de favorecer el desarrollo de la disciplina, promuevan un debate intelectual y de política pública más informado y por ende menos partisano. Dentro de este marco cobra relevancia el análisis de las circunstancias que hicieron posible el auge de la Argentina exportadora y de su poderosa elite propietaria, pero también de los motivos que, llegado cierto punto, las condenaron al ostracismo. Este libro pretende colaborar en esta tarea.

ROY HORA
abril de 2015

Advertencia a la primera edición castellana

El libro que el lector tiene entre sus manos es una traducción corregida y aumentada de la edición original publicada en inglés a comienzos de 2001. Gracias a una gentil sugerencia de Juan Carlos Torre, que me invitó a dar a conocer este trabajo en la colección "Historia y política" que él dirige, he terminado de darle forma a esta versión en castellano. En el lapso transcurrido desde que puse punto final al manuscrito en inglés, a mediados de 2000, he tenido la oportunidad de profundizar en el tratamiento de algunos problemas que merecían mayor atención que la que en su momento pude prestarle. En particular, me he detenido en el estudio de la relación entre empresarios rurales e industriales en las décadas del pasaje del siglo XIX al XX, de la relación entre terratenientes y poder político en esos mismos años, y de los patrones de inversión de la elite terrateniente entre 1880 y 1945. Cada uno de estos temas merece un tratamiento específico, que he intentado en una serie de artículos que he redactado durante este tiempo. He tomado la decisión de incorporar a esta edición castellana algunos argumentos desarrollados en estos estudios, en tanto confirman y vuelven más preciso el sentido general del relato presentado en la versión original de este libro. Por otra parte, a lo largo del texto he realizado pequeñas modificaciones que, además de corregir algún error, están guiadas por este mismo objetivo de dotar a esta edición de mayor respaldo empírico, claridad y precisión.

Buenos Aires, abril de 2002

Agradecimientos

Una de las mayores satisfacciones que brinda el ponerle punto final a la redacción de un libro radica en el hecho de que esta peculiar ocasión ofrece una excepcional oportunidad para reconocer las deudas contraídas con aquellas personas que han contribuido a su escritura. Quisiera mencionar, en primer lugar, a tres personas. Estoy especialmente agradecido a Alan Knight, que supervisó la tesis doctoral que está en la base de este libro. Su apoyo y su consejo durante los años que pasé como estudiante en la Universidad de Oxford resultaron de inmenso valor. Alan fue siempre un lector a la vez punzante y generoso, así como un estímulo para plantear preguntas ambiciosas y atrevidas, aun cuando uno no estuviera siempre seguro de poder responderlas adecuadamente. Igual reconocimiento merece Hilda Sabato, que ha sido una fuente de estímulo e inspiración desde mis días como estudiante de grado de la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires, a comienzos de la década de 1990. Ella me orientó en los momentos en los que descubrí mi interés por la investigación histórica, así como en los ejercicios iniciales en los que puse a prueba esta vocación. Desde entonces, Hilda siempre ha seguido mi trabajo con interés, y me he beneficiado regularmente con sus agudos comentarios. También quisiera dar testimonio de la deuda de gratitud que contraje con Tulio Halperin Donghi, cuya influencia, aunque más distante, fue de todos modos igualmente decisiva a lo largo de estos años. A él le debo una lectura particularmente generosa de algunos de mis trabajos iniciales, que me estimuló a continuar ahondando en la historia de la clase terrateniente argentina. De alguna manera, el libro que el lector tiene entre sus manos es un intento por responder preguntas surgidas a partir de la lectura de sus estudios sobre la historia de los terratenientes de la pampa y otros temas afines. Vista en perspectiva, la contribución de estos tres historiadores a la realización de este trabajo ha sido fundamental. No puedo menos que señalar que las sugerencias y el apoyo que de ellos he recibido me han permitido ampliar mis conocimientos y mis horizontes; de ellos he aprendido mucho sobre la natura-

leza y la complejidad del pasado, sobre cómo encarar la investigación y la escritura de la historia. Los lectores de este libro pronto descubrirán las deudas intelectuales que contraje con cada uno de ellos.

La lista de mis deudas es más extensa. Muchos profesores, colegas y amigos me prestaron su asistencia a lo largo de la escritura de este trabajo. No es posible nombrarlos a todos, pero quisiera recordar sobre todo a los miembros del PEHESA (Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana) de la Universidad de Buenos Aires, en especial a Juan Carlos Korol. Ezequiel Gallo, Horacio Giberti, Colin Lewis, Fernando Rocchi, Ricardo Sidicaro, Enrique Tandeter, Horacio Tarcus y Javier Trímboli me ofrecieron, en distintos momentos, su ayuda y su consejo. Los incisivos comentarios y el apoyo de Malcolm Deas también me resultaron de gran utilidad a lo largo de mi estadía en Oxford. Quisiera expresar mi gratitud también a Guillermo Colombo y Juan José Santos, y a mis amigos Clara Isabel Botero, Rodrigo Reyero y Markus Schultze-Kraft.

Quisiera dejar constancia de mi agradecimiento al personal de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Tornquist, la biblioteca de la Secretaría de Agricultura, el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, el Archivo General de la Nación, el Archivo de la Justicia Federal, el Museo Roca, la Biblioteca Juan B. Justo, y las bibliotecas del Jockey Club y la Sociedad Rural Argentina, que me ayudaron en la búsqueda de material en Buenos Aires. Ruth Hodges y Laura Salinas, del Latin American Centre, y el personal de la Bodleian Library, ambos de la Universidad de Oxford, merecen mi especial reconocimiento. Tengo una gran deuda con la Fundación Antorchas, cuya generosidad hizo posibles mis estudios doctorales en Oxford, y que más tarde me concedió diversos subsidios que contribuyeron a la redacción definitiva de este trabajo.

Mi última y mayor deuda es con Julieta del Valle. Julieta ha convivido con este emprendimiento durante los años que ha compartido conmigo, tanto en Buenos Aires como en Oxford. Ella ha contribuido más que nadie a que este estudio viera la luz. No sólo ha soportado sin queja la conducta antisocial que es propia del proceso de escritura de un trabajo de historia como este, sino que también ha contribuido como nadie a crear un clima en el que su elaboración fue siempre una tarea estimulante y placentera. Por este, y por muchos otros motivos, este libro le está dedicado.

Abreviaturas

ASRA	*Anales de la Sociedad Rural Argentina*
RLA	*Revista* (luego *Boletín*) *de la Liga Agraria*
BCACIP	*Boletín de la Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción*
BMA	*Boletín del Departamento* (luego *Ministerio*) *de Agricultura*
BMSA	*Boletín Mensual del Museo Social Argentino*
BIR	*Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani*
BULA	*Boletín de la Unión Industrial Argentina*
DE	*Desarrollo Económico*
DSCDN	*Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*
DSCDPBA	*Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires*
DSCSN	*Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación*
DSCSPBA	*Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aries*
ECS	*El Campo y el Sport*
ED	*El Diario*
EEA	*El Economista Argentino*
EN	*El Nacional*
JLAS	*Journal of Latin American Studies*
HAHR	*Hispanic American Historical Review*
LA	*La Agricultura*
LARR	*Latin American Research Review*
LE	*La Época*
LN	*La Nación*
LP	*La Prensa*
LPA	*La Producción Argentina*

LSR	*La Semana Rural*
LU	*La Unión*
LV	*La Vanguardia*
PE	*Periódico del Estanciero*
RACP	*Revista Argentina de Ciencias Políticas*
RE	*Revista Económica*
RDHL	*Revista de Derecho, Historia y Letras*
RRP	*Review of the River Plate*
ST	*Standard*

Introducción

Durante el siglo XIX, la pampa argentina, una inmensa planicie cubierta de pastos, y bendecida como pocos lugares en el mundo por una rara combinación de clima templado, fertilidad de la tierra y proximidad a puertos oceánicos, se incorporó a la división internacional del trabajo como exportadora de productos primarios de origen agrario. El empuje de la economía europea ayudó a transformar lo que hasta el siglo XVIII había sido un área muy marginal del imperio español en lo que para fines del siglo XIX era a todas luces la economía de exportación más exitosa de América Latina. Las transformaciones de la economía internacional en las últimas décadas de ese siglo dieron origen a enormes flujos de capital, trabajo y tecnología hacia la pampa, y ampliaron la demanda para los productos de esta región, creando así condiciones que hicieron posible el aumento sostenido de la producción agraria que estuvo en la base de la notable prosperidad argentina. El veloz desarrollo económico que entonces experimentó la Argentina la colocó en una posición de preeminencia en la América de habla castellana y portuguesa. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el comercio exterior per cápita de la Argentina triplicaba el promedio del resto de América Latina, era mayor que el de Canadá o Australia y se acercaba al quinto de las exportaciones totales de los Estados Unidos. En esos años, el ingreso per cápita en Argentina era cerca de cinco veces más alto que en Brasil o Colombia. En la década de 1920, la región pampeana generaba casi la mitad de las exportaciones totales de América del Sur, a pesar de que la Argentina sólo alojaba alrededor del 10% de la población del subcontinente.[1] La acelerada tasa de crecimiento del país, que reconocía pocos equivalentes a nivel mundial, también dio lugar a expectativas optimistas que insistían en que en dos o tres generaciones Argentina estaría en condiciones de emular los logros de los Estados Unidos.

Desde una fecha muy temprana, los grandes propietarios de tierras se contaron entre los principales beneficiarios de la integración de la Argentina al mercado mundial. Para comienzos del siglo XX, los terra-

tenientes de la pampa, conocidos como estancieros o hacendados, eran ampliamente considerados como la clase propietaria más rica de América Latina. Las historias de los nuevos ricos provenientes de esta remota región del mundo que, a fuerza de consumo conspicuo, compraron un lugar en la alta sociedad de las capitales de Europa, sugieren bien hasta qué punto la prosperidad de la economía agraria de la pampa beneficiaba a estos propietarios territoriales. De modo comprensible, la adquisición de fortunas cuyo descomunal tamaño no reconocía antecedentes en el pasado más bien humilde de las clases propietarias de la región concitó la atención de los observadores contemporáneos, e hizo de la clase terrateniente y de sus grandes propiedades rurales uno de los tópicos con los que, inevitablemente, la Argentina era identificada. Ello se advierte bien en la abundante literatura de viajeros aparecida entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que invariablemente se refería a las características y costumbres de la elite socioeconómica. Prácticamente no existe relato sobre la sociedad argentina de ese período que no incluya uno o varios capítulos sobre los rasgos que singularizaban a su elite terrateniente, o que pase por alto la descripción de la visita a alguna afamada estancia de la pampa.

Es indudable que estas narraciones contribuyeron a delinear imágenes algo estereotipadas acerca de la Argentina del ganado y de las mieses, pero también que esa centralidad de los grandes propietarios en el panorama social del país, que a los extranjeros se les presentaba como un dato, no era menos obvia para los observadores nativos. Esos relatos (a menudo algo superficiales) sobre las peculiaridades de la elite socioeconómica de la República no suelen hacer otra cosa que colocar en la voz de un analista externo consideraciones y certezas que resultaban corrientes para los propios nativos. En efecto, la idea de que esa augusta elite social que fundaba su primacía económica sobre la propiedad de la tierra constituía uno de los rasgos más distintivos y peculiares de la sociabilidad argentina, y que de distintas maneras este grupo hacía sentir su poderosa influencia sobre todos los aspectos de la vida de la República, formaba parte de las creencias compartidas por la inmensa mayoría de los miembros de aquella sociedad. Esta creencia se mantuvo inalterada por cerca de medio siglo; todavía en las vísperas de la aparición del peronismo, a mediados de la década de 1940, la visión que afirmaba que la elite terrateniente conformaba el grupo más rico y poderoso de la Argentina no había sido sometida a mayores desafíos.

Al tener en cuenta estos antecedentes, resulta algo sorprendente que aquellos que se interesan por el pasado argentino se hayan ocupado sólo

muy al pasar del estudio de la trayectoria y evolución de este grupo social. En las últimas décadas, la historiografía argentina ha realizado avances sustanciales en distintas direcciones, y gracias a ellos hoy poseemos una mejor comprensión de importantes aspectos del pasado del país. Sin embargo, la existencia de una producción historiográfica más sofisticada y más densa vuelve aún más llamativa la ausencia de estudios que aborden esta problemática. No parece del todo injusto afirmar que, en gran medida, la historia de los grandes terratenientes de la pampa en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX –la historia de cómo este grupo social se constituyó y transformó a lo largo del tiempo– todavía está por escribirse.

El libro que el lector tiene entre manos se aboca a este objetivo. Intenta ofrecer una visión históricamente fundada sobre cómo distintos procesos de cambio político y socioeconómico afectaron a los terratenientes de la pampa, y cómo a su vez aquellos procesos se vieron influenciados por la acción de este grupo social. En primer lugar, se propone discutir la visión que, porque presenta la historia de esta elite como un dato y no como un interrogante a dilucidar, enfatiza aquellos aspectos que señalan la inmutabilidad del mundo de los grandes señores de la pampa. Para esta interpretación, a veces ofrecida por los descendientes y panegiristas de los hombres de los que este libro se ocupa, una clase terrateniente que se describe como siempre igual a sí misma no habría sufrido mayores transformaciones a lo largo de más de un siglo de historia. De forma algo curiosa, núcleos centrales de esta visión han sido reforzados por la ola de críticas a los grandes terratenientes y la gran propiedad que, sistematizada por primera vez por los socialistas de comienzos del siglo XX, alcanzó creciente eco desde las décadas de 1920 y 1930, cuando muchos argentinos comenzaron a advertir que el país no parecía orientarse por el camino que le permitiría emular a los Estados Unidos. Esta interpretación fue, en esencia, la que se volvió dominante en las décadas que sucedieron a la segunda posguerra, cuando los estudios históricos comenzaron a desarrollarse en un clima más netamente académico.

Este libro toma distancia de estas visiones que retratan a una clase terrateniente poderosa y reaccionaria, que habría dominado la historia del país desde los tiempos coloniales hasta la emergencia del peronismo a mediados de la década de 1940.[2] Pero también se aparta de las interpretaciones revisionistas más recientes que, poco atentas a la evidencia histórica, se proponen desestimar el papel central desempeñado por la clase terrateniente en la historia de la Argentina. En las últimas décadas, algunos estudiosos han reaccionado contra aquellos relatos tradicionales

que enfatizan la preeminencia terrateniente sobre todos los aspectos de la vida nacional, argumentando que en rigor no nos encontramos ante una elite entre cuyos rasgos distintivos destacan la propiedad de la tierra y la actividad rural. Para estos autores revisionistas, la elite económica estaba presidida por un conjunto reducido de poderosos empresarios cuyos intereses comprendían un amplio espectro de actividades no sólo agrícolas, sino también industriales, comerciales y financieras.[3]

Ciertamente, esta corriente de interpretación ha permitido realizar algunos avances en el estudio de la clase capitalista argentina, y nos ha ofrecido una visión de su dinamismo económico y su capacidad empresarial que en algunos aspectos resulta más adecuada que la heredada de la narrativa socialista. A pesar de todo su atractivo, esta interpretación confunde más de lo que aclara, y en definitiva resulta errada. Si bien algunos terratenientes hicieron inversiones en los sectores secundario y terciario de la economía, a lo largo del período de apogeo de la Argentina agroexportadora la tierra siempre constituyó su principal y más segura base económica. Tanto los defensores como los críticos contemporáneos de la elite argentina de las décadas del cambio de siglo estaban en lo cierto cuando afirmaban que no eran las finanzas, el comercio o la industria, sino la tierra y la producción rural, las actividades sobre las que se fundaba la supremacía económica de aquellos que se encontraban en la cima de la elite empresarial y la sociedad argentinas. Lo que es igualmente importante, no fueron los emprendimientos urbanos sino los vinculados a la tierra los que resultaron centrales a la autopercepción de esta elite como un grupo superior y privilegiado.

Los profundos procesos de cambio que afectaron a la sociedad en su conjunto durante la etapa examinada en este libro también transformaron a los grandes propietarios. Tradicionalmente, la historiografía presentó una imagen de este grupo social poco atenta a esta dimensión, y que por tanto enfatizaba la estabilidad por sobre las transformaciones. En este trabajo argumentaremos que si bien los grandes propietarios, como colectivo, sufrieron importantes procesos de cambio en el tercer cuarto del siglo XIX, fue en las décadas finales del siglo que la clase terrateniente fue objeto de una profunda metamorfosis económica y social, de la que emergió renovada, dotada de mayor cohesión y de una identidad en muchos aspectos nueva.

De alguna manera, la historia de la clase terrateniente comienza en este período, puesto que fue recién en ese momento cuando el grueso de los grandes empresarios terminó por definirse como parte integrante de una clase terrateniente. Demasiadas veces se ha argumentado, en

la Argentina como en otras partes, que las clases altas suelen estar a favor del mantenimiento del statu quo mientras que las clases subalternas impulsan el cambio. Aun si esta afirmación posee elementos indudablemente ciertos, a veces puede impedir la percepción de ciertos fenómenos históricos relevantes. De hecho, el período final del siglo XIX asistió a una de aquellas raras ocasiones en la historia argentina en las que la clase propietaria se rehizo sustancialmente, demostrando a la vez una capacidad sin precedentes para reinventarse a sí misma como una influencia positiva para el desarrollo de la República, y como un actor económico dinámico y modernizante. El prestigio que rodeó a la elite argentina en ese período dorado le permitió irradiar su poderosa influencia más allá del restringido círculo de los grupos propietarios, y sus hábitos y costumbres se convirtieron en objeto de extendida emulación.

Este libro intenta mostrar que durante las últimas décadas del siglo XIX la clase terrateniente adquirió más unidad y conciencia de sí misma que en cualquier momento de su pasado, y que este fenómeno se hizo evidente tanto en la esfera social como en la política. Sin embargo, sus relaciones con la elite gobernante y el estado continuaron siendo algo ríspidas, a ratos incluso problemáticas. En este período, tradicionalmente considerado como de apogeo de un estado oligárquico colocado al servicio de los terratenientes, el poder de los grandes estancieros siguió estando mejor fundado en la sociedad que en el estado. Los terratenientes adquirieron, o continuaron conservando, cierta influencia política, pero esta se debía más a su lugar como cabeza visible de un sector agrario tan dinámico como socialmente complejo y a su ascendiente sobre las elites gobernantes que a su capacidad para movilizar seguidores. Significativamente, aun si los grandes terratenientes conformaban, más claramente que en cualquier otro momento del pasado, el grupo socioeconómico dominante de la sociedad argentina, sus intentos para dotarse de una organización política autónoma fracasaron una y otra vez. Como veremos en las páginas que siguen, la debilidad de los lazos políticos entre los terratenientes y la elite gobernante, sumada a la aparente invulnerabilidad de su posición socioeconómica, predispuso a muchos estancieros a aceptar, incluso a impulsar, la llegada de un orden político fundado sobre elecciones más honestas y mayor participación ciudadana.

La reconstrucción y consolidación de la clase terrateniente alcanzó su zenit en las últimas dos décadas del siglo XIX. Durante esos años, la sociedad rural pampeana sufrió profundas mutaciones económicas y sociales, que tuvieron a los grandes propietarios entre sus principales impulsores. En ese

período, la elite argentina se volvió más terrateniente, y se comprometió firmemente con la suerte del sector rural. La contribución de los grandes estancieros progresistas al proceso de cambio agrario que estaba haciendo surgir la civilización en medio del desierto ayudó a mejorar su imagen pública. Ello fue posible porque, a diferencia de lo sucedido en otros procesos de cambio en que las elites rurales también desempeñaron un papel destacado, la expansión de la frontera agrícola hizo que, por décadas, las relaciones entre los grandes propietarios y el resto de la sociedad rural fuesen, si no siempre armoniosas, al menos poco conflictivas. En primer lugar, porque los grandes propietarios progresistas se constituyeron en el principal canal de innovaciones tecnológicas, y su ejemplo fue crucial para que otros productores más humildes participaran en el proceso de modernización de la producción. Al mismo tiempo, si bien la expansión de la frontera pampeana en el siglo XIX no creó una sociedad enteramente nueva, de todas formas abrió un amplio espectro de oportunidades, tanto para los recién llegados como para los ya asentados, lo que contribuyó a quitar espesor a las tensiones sociales. Tanto los nativos como los inmigrantes exitosos pudieron lanzarse a la aventura del ascenso económico y social y, para fines de siglo, los más exitosos de ellos ya se habían ubicado con comodidad en la cima de la sociedad argentina.

A comienzos del nuevo siglo, las excepcionales condiciones económicas y sociales que habían posibilitado este proceso comenzaban a desaparecer. En esos mismos años, por otra parte, ya no resulta habitual encontrar las manifestaciones de dinamismo terrateniente que resultan tan típicas del cuarto de siglo anterior. Al mismo tiempo, la expansión de la frontera tocaba a su fin y la estructura social en el mundo rural se tornaba más rígida. Para comienzos de la década de 1910, el descontento con un orden rural cada vez menos hospitalario con las expectativas de mejora social comenzó a ganar fuerza entre las clases subalternas, especialmente entre los agricultores arrendatarios; para la década de 1920, primero los fuertes altibajos, y poco más tarde la contracción de la demanda externa impulsaron a los productores ganaderos pequeños y medianos a expresar abiertamente sus quejas contra los grandes propietarios. Como resultado, los grandes estancieros y la gran propiedad se convirtieron en objeto de fuerte censura y, para comienzos de la década de 1930, ya eran ampliamente reconocidos como un obstáculo que impedía la construcción de un orden rural más justo. La elite terrateniente no logró sobrevivir intacta a la fuerte crisis provocada por la Gran Depresión, y desde ese momento sus días estaban contados. Para fines de la década de 1930, difícilmente pueda describírsela como el grupo que se encontraba en la cúspide de la elite económica de

la Argentina, en parte porque para entonces el sector industrial ya comenzaba a dominar la economía. La reforma agraria impulsada por el gobierno surgido del golpe militar de 1943, que puso en marcha un lento pero decisivo proceso de división de la gran propiedad, terminó de marginar a la vieja elite terrateniente.

La Argentina de las décadas del cambio era una sociedad en construcción. Si en ella había un grupo dotado de alguna identidad y cohesión, este era sin duda el constituido por los mayores señores de la pampa. Las propiedades rurales de los miembros de esta elite se concentraban en la provincia de Buenos Aires (de cuyas tierras provenía más de la mitad de la producción exportable nacional), pero también se diseminaban por el resto de las provincias pampeanas y por todo el país. Este libro examina algunos aspectos de la vida de esta elite terrateniente. En cierta medida, se aproxima a este tema de manera algo tradicional: no se ocupa de cuestiones de la vida privada, se resiste a un enfoque de género, y aborda muy lateralmente el problema de los patrones de consumo suntuario tan característicos de la elite terrateniente en su momento de mayor gloria. Estas son problemáticas poco conocidas aunque de gran importancia para la comprensión de la historia y características de la clase propietaria, y por su propia envergadura y complejidad reclaman que se las aborde mediante estudios específicos.

Este libro se ocupa, en cambio, de problemas más familiares. Analiza la historia social y política de los grandes propietarios, y enfatiza el papel público que estos desempeñaron en tanto grupo social. Hace algunas referencias a la historia económica del período, tanto del sector agrario como del industrial, pero no intenta ofrecer una historia de la agricultura, mucho menos de la industria. El trabajo presta especial atención a la participación de los terratenientes en la vida política, y se detiene en particular en el análisis de la organización y trayectoria de los partidos políticos de base clasista que los estancieros de la pampa intentaron impulsar en distintas oportunidades en los años del cambio de siglo. La historia de la participación de los terratenientes en la vida electoral no ha atraído la atención de los historiadores, y la reflexión sobre el problema permanece aún como un verdadero vacío historiográfico. Aunque no es sencillo ofrecer una explicación de las razones de esta injustificada ceguera, no puede dejar de señalarse que la visión que insiste en la unidad entre estado y clase terrateniente, que ha sido tan central a la historiografía argentina por muchas décadas, ha dificultado el análisis del problema. Es momento de encararlo.

Este estudio también explora cómo los estancieros de la pampa fueron retratados, tanto por miembros de otros grupos sociales como por

sus propios congéneres, así como la forma en que estas imágenes evolucionaron a lo largo del tiempo. Pocos son los historiadores que se interesaron por el mundo de representaciones de los hacendados, o por su imagen pública. Un extendido consenso (tanto historiográfico como político) que se consolidó en la década de 1930 presenta una imagen muy negativa de los estancieros que, según se afirma, habría sido la que la propia sociedad argentina habría tenido de este grupo a lo largo de toda su historia. Si aceptamos esta aseveración tal como nos es presentada, parece difícil dar cuenta de la actitud más bien ambivalente del arribista social que, a la vez que denunciaba los rasgos parasitarios de las antiguas familias terratenientes, no por ello dejaba de envidiarlas y emularlas, en tanto estas aparecían como el epítome de cuanto la Argentina podía ofrecer en términos de vida distinguida.

Al mismo tiempo, esta visión cerradamente negativa sobre los grandes propietarios hace difícil explicar cómo y por qué el conjunto de actividades productivas y recreativas que tenía por centro a la estancia alcanzó un lugar tan central (y ciertamente nada negativo) en la cultura argentina. En este sentido, este trabajo sostiene que durante las últimas décadas del siglo XIX se hizo perceptible un cambio muy marcado en la percepción social del valor de la vida rural, y que los empresarios rurales más dinámicos comenzaron a ser considerados verdaderos ejemplos de modernidad económica y distinción social. Quizá convenga señalar que el autor de estas páginas está lejos de aceptar la visión por demás complaciente que los propios terratenientes del período tenían de sí mismos, y cuya difusión en aquellas décadas no fue menor, como muestran los ejemplos que se citan en las páginas de este libro. La contribución de los grandes empresarios rurales a la transformación agraria y el desarrollo económico seguirá dando origen a discusiones y disputas académicas, en especial entre los historiadores de la economía. Sin embargo, para el análisis de los terratenientes como grupo social, lo que no debe perderse de vista es el hecho de que uno de los aspectos más distintivos del período final del siglo XIX es la emergencia de una visión que evaluaba positivamente la contribución de los terratenientes al desarrollo económico del país. Este proceso tuvo ciertas consecuencias sociales y políticas que deben ser exploradas con cierto detenimiento.

Todo estudio de la clase terrateniente debe prestar cierta atención a la historia de las principales asociaciones rurales. Muchas veces se ha enfatizado la importancia de la Sociedad Rural como representante de los intereses de los grandes propietarios. Sin negar este dato, este estudio sugiere que la relación entre los terratenientes y esta asociación fue

más compleja de lo que a menudo se supone. Por una parte, sólo tras dos décadas de tenaces esfuerzos, los ruralistas lograron que la Sociedad Rural se convirtiese en la voz autorizada de los terratenientes de la pampa. E incluso cuando alcanzaron este objetivo, la relación entre los renombrados ganaderos progresistas que lideraban esta asociación y el conjunto más heterogéneo de grandes propietarios que aquellos pretendían interpelar nunca dejó de ser compleja. Si bien los grandes terratenientes eran un grupo de indudable poder e influencia, muy pocas veces se mostraron dispuestos a seguir a quienes se propusieron incitar y encauzar sus aspiraciones políticas. Para desarrollar este punto, este trabajo examina brevemente la historia de la Liga Agraria. Dicha asociación ruralista, que ha permanecido injustamente olvidada, fue fundada por algunos de los mayores terratenientes del país, con el objetivo de lanzar un programa de activismo político que la Sociedad Rural se resistía a encarar. Aunque por momentos vista con simpatía, esta asociación nunca logró concitar la adhesión de la mayoría de los estancieros, por lo que los liguistas siempre mantuvieron lazos algo tenues con el resto de sus pares.

A lo largo de las páginas de este estudio, la trayectoria histórica de los terratenientes de la pampa aparece colocada en el panorama más general de las fuerzas que moldearon a la Argentina moderna. Aunque no se trata de un estudio comparativo, este trabajo también se propone resaltar algunas similitudes y contrastes con otras sociedades rurales y clases dominantes de América Latina y del mundo atlántico, con la esperanza de que ello pueda servir para destacar algunas peculiaridades de la elite terrateniente pampeana y de su relación con el estado y la sociedad.

Este libro está dividido en cinco capítulos. El primero ofrece una breve descripción de la sociedad pampeana en el tercer cuarto del siglo XIX, y de la posición de los terratenientes en la sociedad rural. Argumenta que la aceleración del desarrollo capitalista que se produjo en esos años creó condiciones que hicieron posible la emergencia de una conciencia terrateniente entre los miembros de un pequeño grupo de estancieros progresistas que se reunieron en torno a la Sociedad Rural Argentina. Muestra, al mismo tiempo, que estos cambios sólo afectaron de modo muy superficial a la mayoría de los empresarios con intereses rurales, que continuaron administrando sus negocios de modos más tradicionales. El capítulo analiza también la relación entre terratenientes y poder político, y hace especial referencia a las novedades introducidas por el nuevo orden inaugurado en 1880, con la llegada de Julio A. Roca a la presidencia de la República.

El capítulo 2 considera la metamorfosis sufrida por los señores de la pampa en las décadas finales del siglo, y explora con cierto detenimiento la relación entre el papel desempeñado por los estancieros en los procesos de transformación agraria que entonces alcanzaron gran dinamismo, y la adquisición de una posición de prestigio y poder que no reconocía antecedentes en el pasado. Afirma que, en esos años, los estancieros de la pampa lograron recrear aspectos significativos de su imagen pública, presentándose como un agente económico especialmente dinámico, y que ello contribuyó a definirlos como un grupo dotado de mayor unidad de acción y conciencia de sí mismos.

El capítulo 3 estudia algunos desarrollos políticos que indican el nuevo estatus alcanzado por la clase terrateniente. Para el cambio de siglo, por primera vez en la historia argentina, encontramos formas muy claras de acción política clasista entre los grandes propietarios. Este apartado analiza la aparición de dos partidos organizados sobre la base de principios de clase y, más en general, la relación entre clase terrateniente y orden político oligárquico. También examina la reacción de los terratenientes frente a la emergencia de la industria doméstica y del proteccionismo arancelario.

El capítulo 4 estudia la actitud de los estancieros en relación con las principales novedades de las décadas de 1910 y 1920: el proceso de democratización, el aumento de la tensión social y política, y el debilitamiento de la demanda externa para la producción de la pampa. Allí se afirma que la respuesta inicial de los terratenientes hacia la creación de un sistema político más transparente no fue hostil, pero que la creciente intensidad que alcanzó el conflicto social en esos años, así como la frustración de las promesas de regeneración política que estaban en la base de la reforma de 1912, hicieron que la reacción de muchos estancieros fuese cada vez menos entusiasta. El capítulo también sugiere que el ascendiente de los grandes propietarios sobre el resto de los productores ganaderos resultó erosionado como consecuencia de la pérdida de dinamismo del mercado de carnes, y que para el fin de la década de 1920 habían pasado a ser una elite asediada.

Por último, el capítulo 5 estudia las reacciones de los terratenientes al nuevo clima surgido tras el desencadenamiento de la Gran Depresión. Sugiere que los grandes estancieros (como en general todos los productores rurales) se vieron hondamente afectados por la crisis. En esos años, por otra parte, la crítica a la gran propiedad terrateniente alcanzó una intensidad inusitada. Durante la década que precedió al peronismo, la crisis agraria y el avance del proceso de expansión industrial se combina-

ron para impulsar cambios fundamentales en la estructura de clases de la República, que hicieron que, para comienzos de la década de 1940, los magnates territoriales de la pampa ya no se encontraran solos en la cúspide de la elite económica. El capítulo se cierra con una breve consideración de los motivos que explican la desaparición de la elite terrateniente tradicional y el fin del sistema de gran propiedad en la pampa.

Lo que sigue, entonces, es una exploración de dos de los mayores temas de la historia argentina: la construcción y transformaciones de su elite socioeconómica a lo largo de casi un siglo de vida, y las peculiaridades de la relación entre terratenientes, poder político y estado durante el ascenso, apogeo y ocaso de la Argentina agroexportadora. He escrito este libro motivado por el deseo de entender mejor aspectos claves del pasado de mi país, y lo he hecho con la esperanza de que revele no sólo la importancia de los terratenientes y su mundo en la historia argentina, sino también la necesidad de renovar las preguntas y repensar los puntos de partida a partir de los cuales encarar el tema. Antes de invitar a los lectores a juzgar por sí mismos los méritos de este esfuerzo, sólo quisiera agregar que su escritura ha sido siempre una tarea estimulante; si sus páginas invitan a otros investigadores a explorar de modo más profundo y más original en ese capítulo decisivo de la historia argentina que es la historia de los terratenientes de la pampa, habrá cumplido su principal objetivo.

1. La emergencia de una conciencia terrateniente

Durante las décadas de 1850 y 1860, el veloz desarrollo de la ganadería ovina aceleró el proceso de organización capitalista en la pampa argentina. La cría de rústicos vacunos había sido la principal actividad del nuevo país desde el momento en que el Río de la Plata se independizó de la dominación española y se abrió plenamente al mercado mundial en la década de 1810. Por varias décadas, el crecimiento de la ganadería vacuna fue veloz. Fue sólo hacia mediados de siglo, empero, que la transformación de la primitiva ganadería pampeana verdaderamente se inició, impulsada por la creciente importancia alcanzada por una actividad más compleja como fue la cría de ovinos. La expansión de la ganadería lanar hizo de la gestión de las empresas rurales una actividad más sofisticada, que demandó mayores inversiones y nuevas destrezas. Ello creó condiciones para la emergencia de una identidad más genuinamente terrateniente entre un grupo de grandes estancieros que estaban a la vanguardia del proceso de desarrollo de la producción rural. Estos terratenientes progresistas se reunieron en la Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866.

Liderada por un grupo de dinámicos estancieros, la Sociedad Rural se propuso impulsar el proceso de cambio tecnológico, y a la vez representar los intereses de los propietarios rurales *vis-à-vis* el estado y la elite política. Para hacer arraigar este programa, los hombres que formaban esta asociación insistieron en la necesidad de dotar a los propietarios rurales de la pampa de una nueva conciencia progresista. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en gran medida vanos, y por largos años la Sociedad Rural permaneció apenas vinculada al grupo social que ella misma aspiraba reformar y representar. Ello se debía, hasta cierto punto, a que los grupos dominantes de la Argentina tenían una pobre opinión de las actividades rurales. Durante gran parte del siglo XIX, al igual que en el período colonial, el mundo rural nunca atrajo a una clase propietaria con fuertes raíces urbanas, que se veía a sí misma como una elite ciudadana antes que como una clase terrateniente. Es por ello que la trans-

formación de la campaña que tuvo lugar cuando se iniciaba el último cuarto del siglo no resultó sólo de la acción de los propios estancieros, y no hubiera sido posible sin la decidida intervención de la elite política que emergió en la década de 1870 y alcanzó el control de la República en la década siguiente.

LOS TERRATENIENTES Y SUS LÍDERES: LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

En el invierno de 1866, un pequeño grupo de estancieros ilustrados encabezados por Eduardo Olivera y José Martínez de Hoz se congregaron en Buenos Aires, entonces capital de la mayor y más rica provincia argentina y sede del gobierno nacional, con el fin de sentar las bases de una asociación que velase por los intereses de la campaña y de la producción rural. La creación de la Sociedad Rural fue parte de la gran expansión de asociaciones civiles que la Argentina litoral experimentó en los años que sucedieron al derrocamiento de la larga dictadura de Juan Manuel de Rosas, que comprendió desde asociaciones mutuales hasta sociedades literarias, desde clubes sociales hasta logias masónicas.[1]

Como no podía ser de otra manera tratándose de una asociación de empresarios y propietarios, consideraciones eminentemente prácticas impulsaron la formación de la primera agrupación ruralista que registra la historia del país. La Sociedad Rural fue fundada en un período de crisis para la ganadería lanar, entonces la actividad más importante y dinámica que tenía lugar en la pampa, y que causó honda inquietud entre muchos productores. A mediados de la década de 1860, una fuerte caída de los precios mundiales de la lana interrumpió, por algún tiempo, una fase expansiva que ya llevaba dos décadas, y cuyo fin incitó a los empresarios rurales a organizarse en defensa de sus intereses.[2] Sin embargo, la intención de los fundadores de la Sociedad Rural no se limitaba a reclamar al gobierno la sanción de medidas destinadas a superar las dificultades que en ese momento enfrentaban los ganaderos. Los ruralistas partían de la premisa de que la creación de una institución que representase los intereses terratenientes resultaba imprescindible para superar los obstáculos inmediatos que frenaban la expansión de la producción ovina, pero también para eliminar aquellos mayores que impedían su pleno desenvolvimiento en el largo plazo. Más aún, la Sociedad Rural fue establecida con la intención de favorecer la creación de una clase

terrateniente económicamente más moderna y políticamente más activa. Los ruralistas se proponían impulsar, más allá de toda división partidaria o de otra índole, la construcción de una conciencia de clase entre el empresariado rural. En síntesis, su ambicioso proyecto tenía por norte la creación de una organización política e ideológica capaz de representar los intereses terratenientes, incrementar el poder del empresariado rural y, al mismo tiempo, transformar a los estancieros en sujetos económicamente dinámicos y políticamente más activos.[3]

Los miembros más activos de la Sociedad Rural –un grupo encabezado por hombres como Eduardo Olivera, José Martínez de Hoz, Ramón Vitón, José María Jurado, Ricardo Newton, Ernesto Oldendorff, Felipe y Pastor Senillosa– se distinguían de la mayoría de los grandes estancieros de la pampa por diversas razones. Poseían un interés no sólo práctico en los problemas de la empresa rural, y repetidamente demostraron su disposición a hacer conocer y debatir sus conocimientos teóricos y sus experiencias concretas como productores agrarios. Eduardo Olivera –el más activo de los líderes de la Sociedad Rural, y pronto su presidente honorario– era de hecho el experto agrícola más afamado del país, y se contaba entre los pocos que había obtenido un título superior, que le había sido expedido por la Escuela de Agricultura de Grignon. Otros impulsores de la asociación, aunque carecían de estudios formales en este campo del saber, se dedicaron a estudiar y discutir con la pasión (y las limitaciones) del autodidacta. Vistos en conjunto, puede afirmarse que los fundadores de la Sociedad Rural pertenecían a las filas de la elite socioeconómica de la Argentina; pero dentro de este grupo no se destacaban tanto por la cantidad de hectáreas o animales que poseían, o por su importancia como productores, sino más bien por la posesión de destrezas intelectuales y empresariales poco comunes entre sus colegas. Es significativo que grandes terratenientes como los Anchorena o los Unzué, que en esos años no manifestaron especial interés en la innovación agrícola *per se*, y que encaraban su actividad de modo más rutinario, no se contaron entre los iniciadores de la Sociedad Rural.

De hecho, la Sociedad Rural reunió a estancieros que ocupaban lugares de liderazgo en el proceso de cambio agrícola que tenía lugar en la campaña de Buenos Aires, y que se había acelerado pasada la mitad del siglo XIX. Durante el período colonial, la actividad económica del Virreinato del Río de la Plata giraba en torno de la producción minera del Potosí, en el Alto Perú. En esos años, la expansión de la producción rural en la campaña de Buenos Aires encontró un techo en el limitado tamaño del mercado, compuesto fundamentalmente por la demanda doméstica

y la proveniente de la metrópoli. Cuando se produjo la revolución de independencia, en 1810, la plata del Potosí representaba alrededor de cuatro quintos de las exportaciones totales del Río de la Plata, mientras que los productos rurales, especialmente los cueros vacunos, apenas daban cuenta del quinto restante. Tras la crisis de la relación colonial y de una década de guerra de independencia, para comienzos de la década de 1820 la producción ganadera ingresó en una etapa de crecimiento, y a poco andar se convirtió en el motor de la economía rioplatense. La apertura plena de la Argentina a la economía atlántica produjo una transformación traumática, pero profunda y duradera. Las exportaciones del Río de la Plata después de 1810 ya no incluían metales preciosos, pues Potosí había quedado fuera de la jurisdicción de las nuevas autoridades republicanas que tenían asiento en Buenos Aires. De todas maneras, las exportaciones rurales se decuplicaron entre 1810 y 1850. Para esta última fecha, los productos pecuarios representaban cuatro quintos del total de las exportaciones, de los cuales casi dos tercios eran cueros vacunos.

Esta expansión se dio sobre la base de la incorporación de tierras de frontera, pues la tierra, y no el capital o el trabajo, era el factor más abundante en aquella economía. Para mediados de siglo, la pampa era predominantemente una región de cría de rústico ganado vacuno, poblada por animales de largos cuernos, y cuero grueso y resistente. Una ganadería lanar incipiente, a la que se sumaba la producción de ganado caballar, completaban el panorama de la producción ganadera. A este cuadro se sumaba la producción hortícola y cerealera. La presencia de la actividad agrícola en el Plata se detecta ya en el período colonial, pero gradualmente perdió importancia tras la apertura al comercio internacional y la expansión de la ganadería vacuna, y para mediados de siglo no siempre alcanzaba a cubrir la demanda doméstica. Los vacunos, que conformaban el corazón de la economía agraria del período, eran criados con el objetivo de producir cuero y carne salada. Criados en praderas que carecían de cercos artificiales, los vacunos eran de muy baja calidad, y lo siguieron siendo por décadas. El cambio tecnológico fue lento, no tanto como consecuencia de la hostilidad de los productores hacia la mejora del ganado y de los métodos de cría, sino porque la inversión en mejoramiento no resultaba rentable. De hecho, los mercados para la producción ganadera no estimulaban el refinamiento del rodeo. La principal demanda provenía de los saladeros, donde los cueros, la carne salada, el sebo y otros derivados eran preparados para la exportación. Los mercados externos reclamaban cueros pesados y resistentes, y animales de carnes magras, que se adaptaban bien al proceso de salazón.

Por este motivo, no tenía mayor objeto reemplazar los ganados criollos por razas de cuero más delicado y mayor volumen de carne. La escasez de trabajo y de capital también contribuyen a explicar las rudimentarias características de esta ganadería.[4]

El desarrollo de la producción ovina introdujo un cambio importante en este panorama. Hacia mediados de siglo, la demanda externa para el ganado mayor de la pampa perdió dinamismo. La gran expansión del mercado para cueros llegó a su fin, y la demanda de carne salada, cada vez más restringida a las decadentes economías esclavas de Cuba y Brasil, también mostraba signos de estancamiento. Mientras tanto, la producción ovina se encontraba mejor posicionada para conquistar nuevos mercados, y para estimular el mejoramiento del rodeo. La presencia del ovino no era nueva en la pampa (se remontaba al período colonial), pero por largo tiempo cumplió un papel subsidiario respecto del vacuno. La historia de su mejora comienza en las décadas de 1820 y 1830, cuando algunos estancieros de origen extranjero, en su mayoría británicos o alemanes (entre ellos Stegmann, Harrat y Sheridan), se lanzaron a cruzar las razas criollas con ejemplares traídos de Europa, con el fin de aumentar la calidad y la cantidad de la lana. En las décadas de 1840 y 1850, la cría de ovinos encontró un contexto favorable para expandirse, gracias a la creciente demanda de lana proveniente de la industria textil europea, por lo que estos pioneros fueron imitados por otros hacendados, que también realizaron esfuerzos por obtener animales de mayor rendimiento. Gracias al incremento de los precios y a una demanda en alza, la cría de ovinos creció aceleradamente. Cuatro millones de ovejas, en su mayor parte de baja calidad, pastaban en las tierras de la provincia de Buenos Aires en 1850. Una década más tarde, este distrito, que conformaba el núcleo central de la economía agraria argentina, alojaba catorce millones de ovinos. En 1865, el rodeo ya estaba compuesto por cuarenta millones de ovejas, en su mayor parte mejorados gracias a la cruza con razas europeas. Para el momento de la fundación de la Sociedad Rural, la lana había desplazado al cuero como el principal producto de exportación de la República. El valor de las ventas de lana al exterior pasó de representar el 1% de las exportaciones totales en 1820 al 45% en 1865.

El ovino imponía una organización de la producción más compleja que el vacuno, y hacía un uso más intensivo del capital y del trabajo. Con el fin de adaptarse a la cría de lanares, la estancia ganadera fue dividida en puestos, en los que una majada de ovejas quedaba a cargo de un pastor y su familia. Muchos cascos de estancia también fueron reacondicionados, y en ellos se construyeron corrales y galpones de esquila. Todo

ello aumentó la demanda de fuerza de trabajo. Por décadas, los empresarios rurales se habían quejado de la falta de trabajadores dóciles y calificados. Tras la independencia, el estado sancionó un conjunto de leyes diseñadas para combatir la vagancia e imponer orden en la campaña, para empujar a los trabajadores hacia el mercado y para dotar al ejército de reclutas. Esta legislación represiva no siempre resultó efectiva, por lo que la falta de una oferta suficiente de trabajadores, ya notoria en el período colonial, se hizo más acusada en ese contexto expansivo. Durante muchas décadas, muchos trabajadores rurales sólo se integraron parcialmente en el mercado de trabajo. La existencia de una frontera abierta y la ocupación todavía parcial del suelo permitió que los pobres rurales escapasen a la dura disciplina del trabajo asalariado, y que tuviesen acceso a medios de consumo y de producción no controlados por las clases propietarias y el estado. Desde la década de 1840, la situación comenzó a cambiar, pues la inmigración europea, aunque moderada, ayudó a los empresarios a contrarrestar la falta de hombres deseosos de emplearse como asalariados. Los irlandeses fueron particularmente bienvenidos como pastores, y también los inmigrantes vascos y gallegos. Al mismo tiempo, la presión de la gran propiedad sobre la tierra libre fue limitando la independencia de los campesinos y pobladores de la campaña.

En las décadas de 1850 y 1860, el cambio más significativo impulsado por la expansión de la ganadería ovina quizá se refiera a la mejora del rodeo por medio de la introducción sistemática de ejemplares de raza europea. Con el fin de obtener una mayor cantidad de lana, y de mejorar su calidad, varios estancieros importaron animales de raza; algunos de ellos, incluso, crearon establecimientos de cría de reproductores, conocidos con el nombre de cabañas. En 1854, Samuel Hale importó doce reproductores, que conformaron la base de su establecimiento El Tatay, y Tomás Chas creó su propio criadero de reproductores. Cuatro años más tarde, Eduardo Olivera trajo de Alemania carneros Negrette, que destinó a ampliar la cabaña de su familia. En 1859, los jóvenes hermanos Felipe y Pastor Senillosa fundaron una cabaña en su estancia El Venado. Otros estancieros siguieron tras sus pasos.[5]

La producción ovina representó un cambio sustancial en la historia del agro en la Argentina, pues aceleró el proceso de modernización rural y la organización capitalista de la producción. Este proceso no pasó inadvertido para los contemporáneos. José María Jurado observaba en 1875 que "desde que han empezado a estrecharse nuestros campos, a introducirse razas estrangeras con grandes costos para mejorar nuestros gana-

dos, y sobre todo desde que se ha hecho nuestra principal ocupación la *cría de ovejas*, la *manera de administrar* una estancia ha variado completamente. [...] De veinte años acá, la estancia es una cosa completamente distinta de lo que fué antes".[6] Jurado no se equivocaba cuando llamaba la atención sobre las transformaciones impulsadas por la producción lanar sobre el conjunto de la economía agraria pampeana. En esos años, por ejemplo, terratenientes de grandes recursos económicos se interesaron por la mejora de las razas vacunas. Leonardo Pereyra introdujo toros Shorthorn británicos en 1856, y el primer Hereford en 1864. Juan N. Fernández, Miguel Martínez de Hoz, Bonifacio Huergo, Antonio Demarchi y Carlos Urioste mejoraron sus rodeos vacunos a fines de la década de 1850 y comienzos de la siguiente. Cuando, hacia mediados de la década de 1870, Carlos Guerrero desembarcó en Buenos Aires con los primeros Angus que pisaron el Plata, ejemplares de las tres grandes razas vacunas del período ya se encontraban presentes en el país.[7] En esos años, la experimentación con métodos modernos de cultivo, en especial de cereales, también atrajo a estos empresarios rurales. Chapeaurouge, Hannah, los Stegmann, Pereyra, Oldendorff y los Olivera se contaron entre aquellos estancieros que demostraron gran interés teórico y práctico en esta actividad.[8]

En síntesis, como consecuencia de la rápida expansión de la economía lanar, de las mayores exigencias organizativas que acarreaba y de los elevados beneficios que esta ganadería más compleja reportaba, se hicieron presentes, por primera vez en la historia de la Argentina rural, incentivos y condiciones propicias para que los grandes propietarios rurales actuasen como agentes mayores del proceso de cambio tecnológico en el agro. Hasta cierto punto, la aparición de la Sociedad Rural puede ser vista como uno de los efectos de este proceso de cambio rural. De hecho, sus directivos vieron a la Sociedad como la primera y la principal institución interesada en fomentar los intereses de la campaña, en particular la introducción de mejoras tecnológicas en el proceso productivo.[9] Sin embargo, también insistieron en que los problemas del sector rural no eran sólo técnicos o económicos. Para estos hombres, una campaña dominada por funcionarios locales poco idóneos, jaqueada por la amenaza de ataques indígenas y seriamente afectada por la escasez de fuerza de trabajo no era un campo especialmente propicio para que allí fructificase un programa de modernización de los empresarios y las unidades de producción basado simplemente en la mejora de las técnicas productivas. El éxito de esta tarea requería también una transformación sociopolítica muy profunda del mundo rural.

Desde la perspectiva de la Sociedad Rural, los estancieros debían desempeñar el papel fundamental en este proceso de reforma. Para los ruralistas, eran los propios terratenientes, antes que el estado, los que debían constituir la fuerza principal que contribuiría a crear un medio en el que no hubiese espacio para todos aquellos integrantes de la población de la campaña, como los pobres rurales, los grupos indígenas o los funcionarios locales de la maquinaria estatal, que se opusieran al mejoramiento de la producción y la expansión de la economía de la estancia, la difusión de las relaciones salariales o la consolidación del orden social. Este objetivo, argumentaban, sólo se lograría mediante una profunda renovación de la propia clase terrateniente. El grupo que se reunía en torno a la Sociedad Rural no se percibía como una expresión de la madurez de los grandes propietarios. Por el contrario, los ruralistas una y otra vez pusieron de manifiesto el hiato que separaba a los terratenientes progresistas del resto de sus pares. De acuerdo con esta visión, la transformación de la campaña dependía de la regeneración de una clase terrateniente declaradamente hostil al progreso técnico, carente de compromiso con la reforma social del medio rural, y políticamente tímida, si no impotente. El ausentismo, que era la regla entre los grandes propietarios, resumía los aspectos más negativos de esta situación, en tanto imposibilitaba el establecimiento de *lazos firmes y perdurables* entre los terratenientes y el medio rural.

Para modificar esta situación lamentable, los propietarios debían abandonar la ciudad y desempeñar un papel de liderazgo en la vida de la campaña. Eduardo Olivera insistió repetidamente en la necesidad de "vivir en el campo, mejorar nuestras propiedades, descentralizar nuestra vida urbana, dar a nuestros paisanos el ejemplo del trabajo y pruebas prácticas de nuestros deseos mejoradores".[10] Estos objetivos eran parte de un programa orientado a convertir a la propiedad de la tierra en una fuente no sólo de riqueza, sino también de prestigio social y poder político. Olivera fue el más decidido vocero de este proyecto, para cuya articulación sus viajes por la campaña europea en las décadas de 1840 y 1850 resultaron decisivos. Lo que el futuro presidente honorario de la Sociedad Rural vio y admiró allí iba a tener una influencia perdurable en su pensamiento. Su paso por Europa coincidió con una etapa muy particular del desarrollo agrario del Viejo Continente, pues en las décadas centrales del siglo el sector agrario atravesaba un período de modernización, que tuvo a las clases terratenientes tradicionales entre sus impulsores principales. A pesar de las claras diferencias entre los terratenientes rentistas de la Alemania occidental y los *Junker* de Pomerania, entre los

propietarios burgueses de Francia y la poderosa aristocracia rural inglesa (muchas de las cuales no dejó de advertir), Olivera fue hondamente impactado por el cuadro que se ofrecía ante sus ojos. Allí creyó ver una sociedad rural en la que las clases propietarias actuaban como vanguardias del cambio tecnológico, que organizaban sus empresas de forma *moderna y eficiente*, y que utilizaban sus recursos de poder de una manera que consideraba beneficiosa para la población rural en su conjunto.[11]

Eduardo Olivera se vio aún más gratamente sorprendido por lo que concibió como la capacidad de las clases terratenientes europeas para ocupar un lugar de preeminencia como motores del cambio tecnológico sin por ello poner en cuestión sus posiciones tradicionales de prestigio y poder (incluso, razonó Olivera, reforzándolas gracias al ascendiente que resultaba de su papel como vanguardias del progreso técnico). El decano de los ruralistas insistió en que la activa participación de las clases altas europeas en la mejora de las prácticas agronómicas constituía una de las bases de su preeminencia social. Esta era una lección especialmente valiosa, de particular relevancia para pensar cómo redefinir la relación entre la elite argentina y la sociedad rural pampeana. Según este razonamiento, impulsar y conducir las fuerzas del cambio rural no resultaría en la erosión del poder y el prestigio de las clases propietarias, sino que, por el contrario, contribuiría a consolidar esas posiciones.[12] El modelo de sociedad y de organización de la producción que Olivera –y, tras él, varios de sus colegas ruralistas– quería ver surgir en las pampas articulaba estos elementos. Su objetivo era impulsar un proceso de cambio que tuviese a los propietarios como sujetos privilegiados, y que en su propio despliegue contribuyese a modernizar la producción, a la vez que a reforzar el poder y el prestigio de sus abanderados, ellos mismos transformados como consecuencia de su acción reformadora. Para los hombres de la Sociedad Rural, la modernización, y no la defensa del statu quo, estaba en el centro de su programa.

En tanto aspiraba a modificar sustancialmente el lugar de los terratenientes en la vida de la campaña, este programa de transformación económica era, en gran medida, un proyecto político. Sin embargo, la Sociedad Rural se definió a sí misma como representante de los intereses del sector rural en su conjunto y, más fundamentalmente, como una asociación de naturaleza civil y técnica antes que política. Desde su origen, los ruralistas se propusieron mantenerse alejados del conflictivo terreno de la lucha partidaria. Hasta entrada la década de 1890, la debilidad de la Sociedad Rural y de sus bases de apoyo, así como el carácter faccioso de la política argentina, contribuyeron a que esta

actitud no se modificase. Los ruralistas siempre se mostraron decididos a proteger a su institución de las fracturas que inevitablemente se producirían en caso de que esta secundara alguna de las opciones políticas en competencia.[13] Ello era en especial importante, dado que los estancieros (o al menos los políticamente más activos entre ellos) tenían distintas afinidades partidarias: algunos seguían al partido liberal liderado por Bartolomé Mitre, otros al autonomista de Adolfo Alsina, otros se inclinaban por los federales, etc.

El consenso liberal afirmado tras la caída de la dictadura republicana de Juan Manuel de Rosas en 1852 conformaba el sustrato del sistema político argentino. En 1853, la Confederación Argentina se dio una Constitución liberal, que sentó las bases de una estructura política federal. Durante la década de 1850, Buenos Aires permaneció separada de la Confederación, pero ambos estados se fusionaron en una sola unidad política en 1861. Los liberales y los autonomistas tenían sus principales baluartes en Buenos Aires; los federales, en el interior del país. Más allá de su fortaleza relativa en estas dos regiones de predominio, en verdad había pocas diferencias entre las fuerzas que competían por el control del gobierno en cuanto a los intereses sociales que articulaban, o a las características de sus líderes y seguidores. El amplio consenso sobre la orientación económica que el país debía adoptar, que se apoyaba sobre el éxito de su economía de exportación, sumado a la ausencia de conflictos sociales abiertos y de reclamos populares irreductibles a ser integrados en los proyectos de las elites, contribuyeron a que la vida política del período girara en torno a problemas específicamente políticos, tales como cuestiones de liderazgo y tradición, que siempre alcanzaron mayor importancia que los que evocaban demandas sociales o económicas. El gran dilema político del período se refería a la consolidación del estado central y a la implantación de su autoridad en todo el territorio del país. Este proceso no fue sencillo, y despertó hondas resistencias; en otros aspectos de la discusión pública, la unidad fue la característica dominante.

La creencia en que la Argentina debía darse una organización política de tipo democrático y liberal nunca suscitó mayor debate entre las clases dirigentes postindependentistas. Tampoco hubo discusiones sobre qué orientación económica debía primar. El liberalismo, sobre todo el económico, concitó la adhesión de los sectores exportadores, entre los que se destacaban los grandes propietarios rurales. Pero este credo también interpeló a grupos menos prominentes, en especial en la región pampeana y litoral. Para cuando la Sociedad Rural apareció en el escenario

público, ya medio siglo de crecimiento, impulsado por las exportaciones rurales, había moldeado la Argentina. Después de que la crisis del Virreinato del Río de la Plata desorganizara los circuitos mercantiles que unían a las tierras litorales con el Alto Perú, la economía se orientó a la exportación de cueros y otros bienes pampeanos. A pesar de los obstáculos impuestos por guerras civiles e internacionales, por las presiones del estado y las incursiones de los indígenas, las exportaciones rurales crecieron rápidamente, haciendo que la región pampeana desplazara al interior como el eje económico del país independiente. La recuperación fue muy difícil para aquellas provincias interiores que habían servido más directamente a la economía del Potosí. Sin embargo, para las décadas de 1820 y 1830 la expansión de la producción agraria en las regiones litorales comenzó a ofrecer un mercado en expansión para las actividades manufactureras del interior, y hasta cierto punto, para su producción agraria, así como también un polo de atracción para sus trabajadores. Las provincias del oeste también establecieron lazos más estrechos con el mercado transandino de Chile.

A diferencia de lo sucedido en México o Perú, los grandes centros de la economía minera del período colonial, que sufrieron duramente en la primera mitad del siglo XIX, la economía agroexportadora de la pampa se expandió en forma notable gracias a la apertura al mercado mundial, creando en el camino un conjunto muy poderoso de intereses que dependían de ella. Por este motivo no puede sorprender que la causa proteccionista encontrase pocos seguidores. Contra lo que algunas veces se ha afirmado, la expansión de la producción rural en la pampa no era un juego de suma cero en el que las ganancias de los productores de bienes exportables igualaban las pérdidas de agricultores y artesanos afectados por la competencia externa.[14] Después del impacto producido por el choque de la Argentina independiente con el mercado mundial en las décadas de 1810 y 1820, las regiones y los grupos sociales que sufrieron la expansión de la economía de exportación encontraron formas de adaptarse a ella y de sacar ventaja de su gran dinamismo, o, en su defecto, perdieron poder económico y presencia pública. A pesar de dificultades ocasionales, en parte consecuencia de la inestabilidad política reinante en el período, la mayoría de los productores domésticos, en especial en las provincias litorales, debía su existencia a las oportunidades creadas por el sector de exportación. En este contexto, la ley de aduanas de 1835 (parcialmente revisada en 1838) fue concebida como una corrección menor, que apuntaba a contemplar los intereses de artesanos y otros fabricantes de bienes de consumo doméstico, dentro de un orden

económico muy abierto, dominado por los exportadores de productos rurales.[15]

Para mediados del siglo XIX, las clases propietarias estaban unánimemente comprometidas a favorecer la expansión de la economía primaria exportadora. Cuando en 1852 los porteños se separaron de la Confederación tras la caída de Rosas, y el estado de Buenos Aires siguió su propio rumbo por casi una década, los dos estados adoptaron políticas económicas similares, ambas basadas en impulsar una mayor integración con el mercado mundial. En el Río de la Plata no puede hallarse nada comparable a los conflictos sobre proteccionismo y librecambio que dividieron a las elites políticas en economías en las que la apertura al mercado mundial resultó más traumática o menos exitosa, como Perú y México.[16] Resulta significativo que la primera gran agitación proteccionista de la Argentina independiente, la campaña de mediados de la década de 1860 en favor de la creación de una fábrica textil destinada a industrializar lana, fuese impulsada no por empresarios manufactureros, sino por estancieros a quienes les preocupaba la caída de los precios internacionales de esta materia prima, y el alza de las tarifas arancelarias en los Estados Unidos y Francia. Tampoco puede sorprender que, cuando mejoraron los precios de la lana, los estancieros tomasen distancia de las posiciones proteccionistas que habían adoptado circunstancialmente.[17]

El hecho de que la amplia aceptación de que gozó la expansión de la economía agraria formara parte del sustrato de creencias compartidas por todas las fuerzas políticas creó condiciones que hicieron posible que los terratenientes tuviesen distintas adscripciones políticas. Considerados como grupo, sin embargo, sus relaciones con el estado no siempre eran armónicas. Es importante recordar que el estado republicano no puede ser descripto como un instrumento de poder al servicio de las clases propietarias. El consenso generado en torno a la economía de exportación era lo suficientemente amplio como para definir los rasgos básicos de la orientación económica del país, pero no para estabilizar el orden político, ni para volcar la fuerza del estado en favor de los grandes propietarios rurales.

Durante la mayor parte del siglo XIX, el permanente conflicto político y militar tensó una y otra vez la relación entre las clases altas y el estado, e impuso una fuerte presión sobre el sector agrario. La militarización que acompañó el nacimiento del país independiente pesó con fuerza sobre las finanzas públicas, y a la vez sembró semillas de inestabilidad política. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y las prolongadas guerras de independencia movilizaron y politizaron a la población, debilitaron el orden

político y social, dando impulso a acusados procesos de democratización. Ello resultó en una distribución del poder mucho más amplia que la que había caracterizado al orden colonial. Esta situación no se modificó sustancialmente en años posteriores. Tras dos décadas de inestabilidad política, Juan Manuel de Rosas impuso una larga dictadura, que se extendió entre los períodos 1829-1832 y 1835-1852. Rosas fue elegido gobernador de Buenos Aires con la esperanza de que su figura contribuyese a poner fin a largos años de luchas, y a traer paz y seguridad. Pero el régimen rosista, que contaba con fuertes apoyos populares, exacerbó aún más el conflicto político, y además se mostró dispuesto a atacar a sus enemigos no sólo en el territorio de la Confederación, sino también en Uruguay y Bolivia, amén de combatir a las fuerzas británicas y francesas que bloquearon el comercio exterior durante largos años en la década de 1840. Por otra parte, Rosas advirtió que la movilización de las clases subalternas se había convertido en un rasgo definitorio de la política rioplatense, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y es por ello que su gobierno se basó tanto en la movilización como en el disciplinamiento de su principal base de poder.

Dos décadas de dictadura republicana y disciplinamiento social contribuyeron a afirmar el control del estado sobre las clases populares, llamando a la obediencia a una sociedad que había sido profundamente trastocada por la crisis de independencia. Sin embargo, el conflicto no cesó tras la caída de Rosas en 1852 y el triunfo de los liberales en Caseros. La derrota del rosismo perturbó el equilibrio político alcanzado en los años previos. Durante la década de 1850, Buenos Aires, convertida en un estado independiente, repetidamente chocó con la Confederación que reunía al resto de las provincias. Tras la reunificación, durante las décadas de 1860 y 1870, el ejército nacional libró la larga y sangrienta Guerra del Paraguay (el mayor conflicto internacional de Sudamérica en el siglo XIX), y al mismo tiempo combatió repetidas disidencias internas.

Durante todas esas décadas, la lucha política y la guerra tensaron la relación entre terratenientes y estado, pues obligaron a este último a organizar y mantener ejércitos de miles de hombres, y a consumir recursos que podrían haber sido empleados de modo más productivo (en la expansión y control de la frontera, en obras de infraestructura, en crédito a la producción, etc.). Al mismo tiempo, los empresarios rurales y el ejército compitieron por el acceso a una fuerza de trabajo que la expansión de la economía rural y las propias necesidades militares tornaban siempre escasa. Los terratenientes, al igual que otros habitantes de la campaña, se veían afectados por la arbitrariedad del aparato administrativo y ju-

dicial en el nivel local (que muchas veces servía mejor los intereses del gobierno que los de la localidad o los empresarios), y por el fracaso del estado en sus intentos por pacificar y expandir la frontera indígena. Es por ello entendible que muchos terratenientes no tuviesen una buena opinión de la política y de los líderes partidarios. Asertos como el de Fermín Ortiz Basualdo, que insistía en que "la mayor parte de los hombres públicos sólo son malos *caudillos, y no otra cosa*" podrían haber sido suscriptos por más de un terrateniente.[18] En definitiva, y a pesar de que empresarios rurales y estado tenían intereses y visiones de largo plazo en gran medida coincidentes (articulados por su sólido acuerdo en torno a la conveniencia de impulsar la expansión de la economía agraria en un marco institucional liberal), la existencia de distintos puntos de fricción entre ellos resulta un rasgo que no debe subestimarse.[19]

Sería errado describir a la Sociedad Rural, en especial en este período, como una institución destinada sólo a representar los intereses de los propietarios rurales. En primer lugar porque, como luego tendremos ocasión de estudiar más detenidamente, concitaba más indiferencia que adhesión entre los propietarios rurales, por lo que, más que representar sus intereses, debía en todo caso constituirlos y articularlos, y convertirse en su voz autorizada. Y, en segundo lugar, porque, al igual que muchas otras asociaciones civiles surgidas en la Argentina posrosista, que eran consideradas como promotoras de la civilización y como expresiones de una sociedad moderna y liberal, la Sociedad Rural hablaba en nombre del bien común antes que en el de un grupo específico.

Los ruralistas tenían por objetivo interpelar a los terratenientes, pero también apuntaban a representar los intereses del mundo agrario en su conjunto. Su modo de concebir la sociedad rural quizás ayudaba a darle credibilidad a este proyecto. La Sociedad veía a los terratenientes como a los líderes naturales de toda la campaña, y repetidamente insistió en la armonía de intereses entre todas las clases productoras y los habitantes del campo. Desde esta perspectiva, no había mayores diferencias entre los problemas que preocupaban a los terratenientes y los que afectaban a los demás habitantes de la campaña.[20] No puede negarse que hubiese algo de verdad en esta afirmación, en parte porque los temas que los ruralistas preferían subrayar tocaban a los hacendados, pero también a otros grupos menos prominentes. Problemas como la arbitrariedad de los funcionarios locales, la falta de seguridad, o la precariedad de la red de transportes y comunicaciones convocaban críticas entre los propietarios, pero también afectaban al común de los habitantes de

la campaña. Por ello no sorprende encontrar al *Standard,* un órgano de prensa vinculado a la comunidad de habla inglesa en la Argentina, que prestaba especial atención a los temas que interesaban a los numerosos productores rurales de ese origen (que eran, en su mayoría, oriundos de Irlanda), celebrando calurosamente la creación de la Sociedad Rural. El *Standard* veía a esta asociación como un centro destinado a representar no sólo a los grandes terratenientes, sino también a todo el *camp* (la palabra angloargentina para referirse al campo): "Como consecuencia de la falta de una asociación de estas características, debido a la clara ausencia de todo cuerpo representativo capaz de llamar la atención sobre los abusos y defender los intereses del campo, nos encontramos con que han sido aprobadas leyes de lo más absurdas, que oprimen y subyugan al *farmer,* que está falto de toda representación. En demasiadas ocasiones, violencias y crímenes de la más escandalosa naturaleza han descendido sobre el pobre pastor como la verdadera ley del país".[21]

En otro sentido, también, los ruralistas anhelaban crear una amplia base para su institución. En tanto intentaban colocarse como intelectuales orgánicos de la clase terrateniente, los ruralistas concebían a su organización no como un instrumento destinado a defender una situación de poder dada, sino como un motor destinado a transformar completamente a los terratenientes y a la vida rural. El atractivo de este programa era claro para aquellas figuras que estaban interesadas en impulsar cambios sociales en el mundo rural según líneas inspiradas en los ejemplos de Europa y América del Norte. Entre ellos se contaba Domingo F. Sarmiento, presidente de la Argentina (1868-1874) y autor de la famosa biografía de Facundo Quiroga titulada *Facundo, o civilización y barbarie* (1845). El interés de Sarmiento en la reforma social y económica del mundo rural ofrece testimonio de sus esfuerzos de toda la vida por crear un orden más igualitario, que reconocía a la sociedad rural norteamericana como modelo a imitar.[22] Sarmiento siguió los primeros pasos de la Sociedad Rural con entusiasmo, y pronto se contó entre sus socios honorarios. Esta institución convocó a sus filas a hombres de ciencia, algunos de ellos también en calidad de miembros honorarios. En una era en la que el prestigio del conocimiento científico era grande, y se lo concebía como un instrumento especialmente apto para subyugar al mundo natural, la invocación a la ciencia se convirtió en un elemento central del proyecto modernizador de los estancieros progresistas.

La invocación a las fuerzas del progreso y de la modernización puede fácilmente observarse en muchas de las iniciativas impulsadas por la

Sociedad Rural. En aquellos años, en los que el estado todavía carecía de un plantel de funcionarios y burócratas competentes, esta asociación asumió diversas tareas administrativas y de asesoramiento, aconsejando al gobierno en temas vinculados con la producción y la comercialización agraria: precios y mercados, condiciones de la producción, reformas a la legislación, etc. El gobierno pudo así sacar provecho de las energías y talentos de los hombres que entonces formaban el único centro de expertos en materias rurales (aunque inevitablemente los informes, sugerencias y propuestas que estos les hicieron llegar a las autoridades no podían sino reflejar sus intereses particulares). La parte más sustancial de la acción de los ruralistas, sin embargo, estaba dirigida a sus propios colegas. Iniciativas tales como la creación de la mayor biblioteca argentina sobre temas rurales, la realización de conferencias y debates, la organización de exposiciones agrícolas, y la redacción de un órgano periódico de difusión, se convirtieron en medios a través de los cuales los estancieros modernizadores exhortaron a sus colegas a seguir el evangelio de la reforma rural.

El escaso eco que alcanzó su revista, bautizada con el nombre de *Anales de la Sociedad Rural Argentina,* indica hasta qué punto esta no era una tarea sencilla. "A pesar de su mérito", se lamentaba el periódico *El Nacional* en 1869, los *Anales* "soportan una existencia precaria. [...] Quisiéramos, sí, que nuestra culta sociedad compensara con usura los esfuerzos de sus ilustrados directores, dando así una prueba de que las publicaciones literarias y científicas no son una planta exótica de difícil cultivo en nuestro suelo".[23] Los ruralistas veían la situación desde una perspectiva similar, y en 1871 deploraban "la apatía con que la generalidad de nuestros hacendados miran la corporación", evidente en el hecho de que para *Anales* "ni viene apoyo en suscripciones, ni en colaboración".[24] Reconociendo los pobres resultados alcanzados por su publicación, en varias ocasiones la Sociedad Rural intentó incrementar su circulación, incluso ofreciéndola gratuitamente, pero sin lograr mayor éxito. Para comienzos de la década de 1880, *Anales* poseía apenas 140 suscriptores.[25] Aun si los ruralistas se abstenían de hacer comparaciones con el *American Agriculturist* de los Estados Unidos (la publicación en la cual *Anales* se inspiraba), que entonces vendía unos 190 000 ejemplares anuales, era claro que su revista estaba muy lejos de haber alcanzado sus objetivos.

Algo similar puede decirse sobre las exposiciones agrícolas organizadas por la Sociedad Rural. Al igual que en Europa y los Estados Unidos, también en la Argentina las exposiciones fueron consideradas como uno de los instrumentos más adecuados para reunir a los productores, difun-

dir conocimientos y generar estímulos e incentivos para la mejora de las técnicas agrícolas. Durante este período, sin embargo, las exposiciones de la Sociedad Rural no lograron concitar demasiado entusiasmo entre los productores o el público. Aunque la organización de estos eventos se encontraba entre los objetivos prioritarios de la Sociedad Rural desde el momento mismo de su creación, la realización de la primera muestra se demoró más de diez años, entre otros motivos por falta de fondos. La primera exhibición tuvo lugar en 1875 en la ciudad de Buenos Aires, en un terreno sobre la calle Florida que pertenecía a Leonardo Pereyra. Se la describió repetidamente como de una gran precariedad, "de una pobreza casi franciscana".[26] Las exhibiciones que se sucedieron no fueron muy distintas, y la de 1876 fue descripta como "pobremente instalada y pobremente concurrida".[27] Debido a la falta de interés, después de 1876 los intervalos entre cada muestra se extendieron. En la de 1878, otra vez, "el público que concurrió fue muy escaso".[28] En la exposición de 1881, el presidente de la Sociedad Rural se lamentó amargamente porque la asociación "no había sido correspondida en su empeño por los criadores".[29] Como consecuencia de estos reiterados fracasos, a partir de 1881 las exhibiciones fueron suspendidas por un lustro, hasta 1886.

LAS ELITES ARGENTINAS Y LA TIERRA

La magra performance de los dos emprendimientos que consumían las principales energías de los ruralistas no debiera sorprender, pues reflejaban la generalizada indiferencia de los terratenientes hacia la institución que decía hablar en su nombre. El fracaso de *Anales* y de las exposiciones rurales no puede aislarse del fracaso más general de la Sociedad Rural para concitar la adhesión de los grandes propietarios, y para convertirse en su voz autorizada. Esto se evidencia, sobre todo, en sus dificultades para incrementar la cantidad de asociados. Se ha repetido muchas veces, con notable desconocimiento de lo que entonces sucedía, que la Sociedad Rural deliberadamente restringió el ingreso de nuevos socios desde el momento mismo de su fundación.[30] Aun cuando esta afirmación es cierta para algunos períodos posteriores, está lejos de describir adecuadamente lo sucedido en el siglo XIX. Una y otra vez, los empresarios rurales, y no sólo los grandes, fueron invitados a sumarse. Muchos productores rurales, sin embargo, no encontraron razones valederas para hacerlo. A pesar de una política de incorporaciones muy agresiva,

la cantidad de socios se mantuvo muy reducida: los 231 miembros de 1868 apenas subieron a 235 en 1874.

Las repetidas campañas de afiliación lanzadas por la Sociedad Rural no lograron doblar el número de sus asociados en casi dos décadas. Que los productores rurales carecían de interés en incorporarse no era entonces un secreto, y se repitió muchas veces. A comienzos de la década de 1880, el Departamento de Agricultura estimaba que había unos 6000 estancieros que estaban en condiciones de afiliarse a la Sociedad, pero que no mostraban inclinación alguna por hacerlo.[31] El "egoísmo enervador" de los hacendados, afirmaba un artículo publicado en *El Nacional* en 1878, era el responsable de esta "apatía".[32] En 1880, otra vez, argumentos similares, aunque más hirientes para la Sociedad Rural, volvieron a escucharse: "Un número de cuatrocientos socios, una cuota mezquina, como la que pudiera pagar una sociedad carnavalesca, no puede representar los grandes intereses de la riqueza rural de la provincia. Pero no es culpa de ella si abriendo de par en par las puertas, son remisos los colegas o compañeros del gremio para presentarse allí".[33]

Tulio Halperin Donghi ha insistido justamente en que la negativa de los hacendados a prestar su apoyo al ambicioso programa de reforma política impulsado por la Sociedad Rural se encuentra vinculado a la fragilidad de la base de poder de los grandes propietarios. Los ruralistas instaban a los hacendados a actuar como líderes de la campaña, pero no parecían capaces de advertir que estos no estaban en buenas condiciones para desempeñar este papel.[34] Ello se debía a que, contra lo que algunos autores han sugerido, la pampa no alojaba una estructura social polarizada, compuesta por un conjunto de magnates territoriales y los trabajadores asalariados de sus estancias, que se encontraban unidos por lazos de carácter tradicional o paternalista.[35] En rigor, los grupos propietarios de la pampa eran muy heterogéneos, y la estructura social presentaba una importante complejidad. Si bien los grandes hacendados eran actores económicos de gran importancia, coexistían con una gran variedad de propietarios menores, cuya existencia se remontaba a los tiempos coloniales, cuando la campaña rioplatense era, fundamentalmente, una sociedad poblada por familias campesinas. La apertura al mercado mundial y la expansión ganadera postindependiente hicieron que la gran propiedad ganadera creciese a costa de la sociedad campesina que la precedía. Pero también tuvieron lugar importantes fenómenos de articulación o coexistencia entre estos dos elementos, inevitables en una sociedad de frontera abierta y en la que la fuerza de trabajo era escasa.

Al inicio de la segunda mitad del siglo XIX (o para el caso, antes o después), la pampa no puede describirse tan sólo como el reino de la gran propiedad. Los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, especialmente hacia el norte, estaban dominados por chacras agrícolas que proveían de granos, hortalizas y verduras a un mercado urbano en expansión, y que existían desde tiempos coloniales.[36] De modo paralelo a la expansión de la estancia, la campaña asistió a nuevos procesos de diversificación económica y social, tanto en tierras nuevas como viejas. En algunos partidos bonaerenses (las unidades políticas y administrativas más pequeñas de cada provincia) como Chivilcoy, Baradero, Bragado y 25 de Mayo, se estaban produciendo procesos de fragmentación de grandes propiedades ganaderas, que daban lugar a la aparición de un número significativo de pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Una miríada de pequeñas y medianas explotaciones, centradas en la cría de ovejas, se expandían a gran velocidad por toda la provincia.[37] Para estos años, los pequeños ganaderos que ponían la tierra a producir en calidad de arrendatarios, aparceros o propietarios, o a veces como simples ocupantes, eran comunes. De acuerdo con Jonathan Brown, en 1854 "los arrendatarios y los propietarios representaban aproximadamente el 28% de la población masculina adulta de la campaña".[38] Las cifras ofrecidas por Tulio Halperin para un momento algo posterior, basadas en el censo de 1869, sugieren un cuadro similar.[39]

Una sociedad en la que más de un cuarto de los hombres en condiciones de trabajar organizan sus propias explotaciones difícilmente puede ser concebida como una sociedad polarizada entre estancieros y peones, en la que la propiedad o el acceso a la tierra se encuentra concentrada en pocas manos. Antes bien, la diversidad de esa estructura social va a la par de la presencia de un importante sector de productores medios independientes. Este rasgo singularizaba a la campaña pampeana, así como a muchas otras sociedades de frontera, en las que el acceso a la tierra era más sencillo que el acceso al capital o la fuerza de trabajo. Estos productores medios poseían una considerable independencia respecto de los grandes propietarios, tanto en términos económicos como sociales y políticos. Rasgo típico de las sociedades nuevas, la pampa carecía de las relaciones deferenciales que caracterizaban a sociedades rurales más antiguas y jerárquicas, en las que la mayoría de la población aceptaba, o estaba forzada a aceptar, el derecho de los grandes propietarios a dominar la vida rural. El mundo pampeano se distingue, por ejemplo, de la sociedad rural del valle central de Chile de ese período, donde los observadores extranjeros repetidamente señalaban el respeto, incluso la

sumisión, con la que los habitantes rurales trataban a los terratenientes.[40] A diferencia de lo que sucedía al otro lado de los Andes, en las pampas argentinas el acceso a la tierra, o a los recursos que permitían su explotación, no estaba limitado al círculo de los grandes propietarios.

Más aún, la fuerte expansión de la producción ganadera hizo que la fuerza de trabajo siempre resultara escasa, al menos desde la perspectiva de los empleadores. En consecuencia, y como nos lo sugieren los continuos lamentos e irritación de los empleadores, los trabajadores que decidían emplearse por un salario obtenían altas remuneraciones y, al mismo tiempo, podían mantener un elevado grado de libertad personal. Desde el inicio, los empresarios rurales se vieron obligados a adaptarse a esta situación, por lo que las estancias de la pampa siempre hicieron un uso intensivo del factor tierra. El resultado fue la conformación de estancias inmensas, sobre todo en las tierras nuevas, pero de una muy baja densidad de población. Para la segunda mitad de la década de 1830, sólo había 14 estancias en la provincia de Buenos Aires con más de 40 habitantes permanentes. La población total de Camarones, la mayor de las estancias de la pampa, perteneciente a los Anchorena, alojaba apenas a 410 almas. Esta cifra, significativa en las pampas, sin embargo no alcanzaba al 10% de la población de las estancias del norte de México de ese período estudiadas por Jan Bazant.[41]

Por otra parte, no todos los habitantes que vivían dentro del perímetro de una propiedad rural estaban sometidos a la disciplina del trabajo asalariado, o más en general, a relaciones de subordinación bien definidas. Dentro de ellas era habitual encontrar diversos tipos de aparceros o arrendatarios, algunos de ellos muy independientes, o simples ocupantes, sobre quienes la estancia tampoco ejercía demasiado control. Durante gran parte del siglo XIX, mientras la tierra fue para los empresarios un recurso más fácil de adquirir que de dominar efectivamente, la posesión legal de una gran propiedad no permitía controlar todos los procesos productivos que tenían lugar en ese espacio, ni tampoco a los hombres que lo habitaban. Y, por otra parte, la importancia de la gran propiedad en el conjunto de la sociedad rural era relativa, pues las estancias acogían dentro de su perímetro sólo a una pequeña parte de la población total; la mayoría vivía en pequeños poblados, o en sus tierras (propias, arrendadas o simplemente ocupadas), y en consecuencia bastante lejos del control que sobre ellas pudieran ejercer los grandes estancieros. El primer censo nacional, realizado en 1869, indica que menos de dos de cada diez hombres adultos de la campaña eran trabajadores permanentes de la estancia: el resto se ocupaba de tareas de diversa índole, en el comer-

cio, el transporte, la producción por cuenta propia, el empleo asalariado circunstancial, etc.[42] Aun si algunos poderosos estancieros tenían incidencia en la oferta de crédito, y dominaban algunas redes comerciales en la campaña, ello tampoco les permitía ejercer gran influencia sobre los habitantes. En síntesis, los grandes propietarios estaban muy lejos de ser los dueños de la vida de los habitantes rurales, y ello inevitablemente conspiraba contra cualquier aspiración de liderazgo político.[43]

Un análisis de algunos aspectos del gobierno local ayuda a evaluar mejor la posición de los grandes propietarios. Durante este período, los jueces de paz, cuyo nombramiento dependía del gobierno provincial, reunían en su persona diversas atribuciones administrativas, policiales y judiciales. Estos hombres eran las autoridades más importantes en cada uno de los partidos y, por este motivo, resulta interesante saber quiénes eran. Para ello, hemos comparado los nombres de los jueces de paz con los de los mayores terratenientes de cada partido, para tres años distintos: 1869, 1873 y 1875.[44] La lista de 1869 comprende autoridades para 48 partidos. En ese año, 18 jueces pueden describirse como miembros de una familia de grandes propietarios, mientras que otros 13 poseían propiedades pequeñas o medianas. Los restantes 17 no poseían ninguna propiedad de consideración en el partido donde ejercían funciones. En 1873, el número de grandes propietarios es aun más reducido que cuatro años antes. De los 47 jueces de paz, 11 son claramente grandes propietarios, mientras que 16 pertenecen a los sectores medios de la sociedad rural, y 20 carecen de propiedad. La lista de 1875 confirma el mismo patrón para las 46 designaciones analizadas. Sólo 6 jueces eran miembros de importantes familias terratenientes, 11 poseían propiedades pequeñas o medianas, y 29 no poseían ninguna propiedad identificable.

Si bien la información disponible está lejos de ser exhaustiva, el patrón general que emerge de estos datos es claro. Los grandes propietarios no sólo eran una minoría entre las autoridades locales, sino que su número decreció a lo largo del período. Ello no debiera sorprender, y en rigor resulta coherente con otros indicios sobre las características de esa sociedad. Sabemos que la mayoría de los propietarios rurales eran ausentistas, y por lo tanto, que no desempeñaban ningún papel de relevancia en los asuntos locales. Había, sin embargo, unos pocos miembros de importantes familias terratenientes que sí tenían mayor compromiso con lo que sucedía en su distrito (muchos de ellos, significativamente, miembros de la Sociedad Rural). Algunos de estos hombres solían vivir de forma permanente, o al menos por largas temporadas, en sus propiedades rurales. Federico Martínez de Hoz, por ejemplo, dirigía en persona su gran

estancia en Castelli, donde vivían unas 250 personas. Claudio Stegmann residía con su familia en su afamada estancia en Pila, sobre el río Salado. Germán Frers también vivía en su propiedad en Baradero. En tanto residentes en el medio rural, estos estancieros seguramente eran más propensos que los propietarios ausentistas a involucrarse en la vida local, por lo que no es del todo sorprendente encontrarlos como funcionarios de la administración. Sin embargo, la residencia permanente de un miembro de la clase alta en la campaña era atípica, a punto tal que en más de un caso este fenómeno llamó la atención de distintos observadores.[45] Si un integrante de una familia propietaria moraba en la campaña, lo más común era que se tratase de un joven, con frecuencia un hijo (o tal vez de un miembro de una rama secundaria), a cargo del establecimiento familiar. Esto era especialmente cierto cuando la propiedad estaba situada lejos de Buenos Aires, en los partidos del oeste o del sur. En estos casos, no es extraño hallar a estos jóvenes estancieros residentes como jueces de paz. Así, en 1873 encontramos a Pedro Sáenz Valiente (h) como juez en Lobería, a Matías Ramos Mexía (h) en Monsalvo, a Juan Vitón en Vecino, y a José Vitón en Azul. Dos años más tarde, en 1875, también vemos a Carlos Guerrero (h) administrando las tierras de su familia en Castelli, y haciendo las veces de juez de paz. Algunos años más tarde, Guerrero fue designado juez en Tuyú, donde estaba al frente de las extensas propiedades de su padre.

En términos generales, los grandes estancieros eran una minoría entre las autoridades locales, y de sus filas salían menos de uno de cada tres o cuatro jueces de paz. El peso de la administración local solía estar colocado en figuras social y económicamente menos prominentes. Resulta difícil rastrear a estos individuos, así como descubrir, de haberlos habido, los lazos que los unían a los grandes propietarios de cada zona. Sin embargo, el patrón general parece claro: "El juez de paz, en los distritos rurales, es en general un almacenero o un criador de ovejas", observaban los hermanos Mulhall, ofreciendo una descripción bastante precisa de la posición social de gran parte de las autoridades locales.[46] La gran mayoría de estos funcionarios era reclutada entre los habitantes permanentes de la campaña, sobre todo entre productores rurales o comerciantes del sector medio de la sociedad. Veamos algunos ejemplos. En 25 de Mayo, por ejemplo, Victorino Abrego fue designado juez en 1869 y otra vez en 1873. Abrego poseía una casa sobre la que pagaba impuestos, y una propiedad de tamaño medio. En Baradero, Fermín Rosell, también nominado para servir como juez de paz en varias ocasiones, poseía una propiedad relativamente pequeña. En San Pedro, el juez designado en 1869

poseía una propiedad de tamaño mediano, pero los que lo sucedieron en el cargo en 1873 y 1875 sólo tenían casas en el pueblo. Estos hombres eran, probablemente, comerciantes. Juan García, juez de Cañuelas, poseía una casa en el pueblo, pero ninguna propiedad rural. En San Vicente, la situación era similar: los jueces Pardo y Godoy pertenecían a los estratos medios de la sociedad rural.[47]

Para entender las características de la administración local, es preciso atender otro aspecto. Como el propio Carlos Guerrero en su momento lo manifestó abiertamente, su designación como juez de paz no dependía de su pertenencia al mundo de los grupos propietarios, sino a sus lazos con las elites políticas. Guerrero era pariente de Adolfo Alsina, el líder autonomista, y en esos años frecuentaba a Mariano Acosta, que fue gobernador de la provincia en la primera mitad de la década de 1870.[48] Lo mismo vale para los Stegmann, que eran amigos y seguidores de Alsina, y cuyo partido siempre apoyaron "moral y pecuniariamente".[49]

La importancia de los lazos políticos se vincula con las funciones de la autoridad local. La tarea de un juez de paz era conservar el orden en la localidad. Sin embargo, también se esperaba de ellos que actuaran como jefes políticos locales, manipulando las elecciones en beneficio (y con el apoyo) de las autoridades provinciales que los habían designado, y de las que en definitiva dependían. Independientemente de su posición en la sociedad rural, los jueces de paz solían actuar como los agentes electorales del gobierno. Esta relación solía causar irritación, y fue repetidamente denunciada. En la campaña, se quejaba el *Standard*, "las elecciones están completamente en manos de los jueces de paz"; estos funcionarios, afirmaba Jorge Stegmann con conocimiento de causa, "sólo se ocupan de elecciones, sirviendo así a las miras políticas o particulares de quien los nombra".[50] Esta verdad quizá nunca fue expresada con tanta crudeza y claridad como en el diario oficialista *El Nacional*. En 1866, la recientemente creada Sociedad Rural elevó al gobierno una lista con nombres de figuras de prestigio, a los que consideraba los mejores candidatos para cubrir los cargos de jueces de paz. Esta petición fue considerada temeraria. Para el vocero oficial, "el Gobierno no debe olvidar que ha prometido al pueblo gobernar con los hombres de su partido. [...] Los intereses del partido que lo ha elevado al poder ha de consultarlos siempre, mientras no sea posible como no lo es hoy sin cometer una gran imprudencia separar la política de la administración".[51]

En síntesis, no eran los grandes propietarios sino las elites políticas y sus aliados locales, reclutados entre los sectores medios de la sociedad rural, los que dominaban el aparato político en la campaña.[52] Aun si muchos

terratenientes pueden haber desaprobado este estado de cosas, no se trataba para ellos de un problema particularmente dramático. La campaña podía resultarles ajena, pero ello no la volvía peligrosa. La mayoría de los estancieros seguramente percibía que había poco que ganar (y mucho que perder) si tomaban parte activa en el rústico mundo de la política local, sobre todo porque los magnates territoriales en este período jamás sintieron que su posición privilegiada se encontraba sujeta a cuestionamientos desde abajo. El conflicto social nunca adquirió formas abiertas, en parte porque la expansión de la frontera y los altos salarios tendieron a diluir todo atisbo de lucha de pobres contra ricos. Aun si las bases políticas de los terratenientes en la sociedad rural eran endebles, la ausencia de manifestaciones abiertas de tensión social, o de amenaza a la gran propiedad, los predisponía, no a tomar parte en la vida local sino, por el contrario, a alejarse de ella. Esto también era posible porque si bien las raíces políticas de los grandes propietarios eran débiles en la campaña, no sucedía lo mismo en la ciudad. Ello era especialmente cierto en Buenos Aires, el hogar de los propietarios más ricos de la República y de la elite política que se mantuvo al frente del estado provincial y nacional entre 1810 y 1880. En esta ciudad donde tenían su residencia permanente, los mayores señores de la pampa disfrutaban de estrechos vínculos tanto con la elite política que gobernaba la Argentina como con los representantes de los intereses extranjeros vinculados al transporte y comercialización de la producción rural. El poder de los principales empresarios rurales se vinculaba con el lugar central que habían alcanzado en la economía de exportación antes que con cualquier forma de liderazgo que pudieran ejercer sobre las clases subalternas.[53]

La debilidad de la base de poder de los propietarios rurales en la campaña condenó al fracaso al programa político del ruralismo, y ayuda a entender por qué la mayoría de los terratenientes lo tenía en poca estima. De todas maneras, lo que todavía precisa ser explicado es la falta de compromiso de los terratenientes con la Sociedad Rural: como hemos mostrado más arriba, esta asociación hacía hincapié en un programa de transformación no sólo política, sino también económica y social de los terratenientes y el mundo rural. Este proyecto tampoco concitó grandes apoyos en la clase propietaria, cuyos miembros se mostraron notablemente indiferentes frente a las voces que los llamaban a modernizarse como empresarios. Ello contrasta con lo sucedido más tarde. Como veremos en los capítulos que siguen, desde la segunda mitad de la década de 1880 la Sociedad Rural acrecentó su membresía, y para el cambio de siglo había adquirido un notable ascendiente sobre el conjunto de los estancieros y las clases propietarias. Y es significativo que para enton-

ces los problemas (en primer lugar los políticos) que supuestamente debían despertar la energía asociativa terrateniente habían sido finalmente resueltos, y de un modo muy favorable al interés de este grupo. Sin embargo, ello no impidió que, en distintos momentos, los líderes ruralistas de las décadas del cambio de siglo se abocasen a la tarea de movilizar políticamente a los terratenientes, y que lo hiciesen con más éxito que en el pasado.

Hay aquí lo que parece una paradoja, cuyo estudio debe ser abordado. La etapa comprendida entre la fundación de la Sociedad Rural y el ascenso de Julio A. Roca al poder estuvo signada por recurrentes conflictos políticos. A primera vista, este período, debido a su gran inestabilidad, parecería haber generado condiciones propicias para estimular la acción colectiva terrateniente, que sin embargo nunca alcanzó vuelo. A pesar de sus reiteradas invocaciones, la Sociedad Rural fracasó a la hora de movilizar a sus pares. Como veremos en el capítulo 3, fue el período del cambio de siglo, económicamente más próspero y políticamente más estable que el anterior, el que asistió a la aparición de fuerzas políticas terratenientes, impulsadas desde dentro y desde fuera de la Sociedad Rural. Significativamente, para entonces se había afirmado un estado capaz de garantizar paz y orden, y muy atento a las demandas del sector rural. En síntesis, lo que precisa explicación es por qué la Sociedad Rural –o, para el caso, cualquier otro representante del interés terrateniente– sólo logró afirmarse plenamente después de que los principales problemas que afectaban a la economía agraria fueran resueltos, y que la posición de los terratenientes en la esfera social y económica se consolidase como nunca antes en el pasado.

Las explicaciones centradas en el poder y la política son necesarias pero insuficientes para explicar esta paradoja, y deben ser complementadas por razonamientos y evidencias que atiendan a dimensiones económicas, sociales y culturales de la experiencia terrateniente. Durante las décadas de 1860 y 1870, la mayoría de los empresarios con intereses agrarios no sólo se mantuvieron a distancia de la Sociedad Rural porque su programa político resultaba poco menos que inviable. Más fundamentalmente, las dificultades de esta asociación que aspiraba a construir una clase terrateniente moderna se explican porque su proyecto debía legitimarse frente a una elite socioeconómica para la cual la actividad rural no sólo resultaba menos importante de lo que a menudo se supone, sino también culturalmente poco atractiva. Es apenas exagerado afirmar que, cuando Olivera y sus colaboradores fundaron la Sociedad Rural, la clase terrateniente pampeana todavía no había terminado de nacer.

Esto se debía en parte a que la metamorfosis de la elite socioeconómica, que pasó de ser de base mercantil a terrateniente, era muy reciente, y en verdad para fines del segundo tercio del siglo XIX todavía no había terminado de completarse. Durante el período virreinal, la clase propietaria fundaba su supremacía no en la tierra, sino en el comercio y el servicio a la corona.[54] La prosperidad de la elite porteña tardocolonial dependía de la posición de Buenos Aires como puerto de salida de la producción minera del Alto Perú, y también de las funciones de esta ciudad como lugar de paso obligado para todo el comercio internacional del Virreinato. Las estancias del período tardocolonial y republicano temprano solían ser pequeñas, y sus dueños no obtenían de ellas recursos importantes, ni tampoco poder o prestigio.[55] La posición marginal de los hacendados coloniales de fines del siglo XVIII se hace evidente cuando recordamos que, a pesar de que las exportaciones pecuarias se encontraban en alza, la producción granífera todavía contribuía tanto como la ganadera al valor total de la producción agraria.[56] En el ocaso del orden colonial, los grandes comerciantes estaban cómodamente ubicados en la cima de la jerarquía de preeminencia social, y permanecerían en ese lugar por bastante tiempo más.

El capital mercantil inició su desplazamiento hacia la producción rural recién en las décadas de 1820 y 1830, y entonces lo hizo con mayor lentitud de lo que a menudo se supone. El giro hacia la actividad rural por parte de la elite mercantil de Buenos Aires fue estimulado por la crisis del sistema político y económico colonial sobre el que esta había fundado su supremacía. Esta nueva orientación hacia la tierra no resultó sólo del atractivo intrínseco de la actividad ganadera. Después de 1810, una avalancha de comerciantes extranjeros, muchos de ellos británicos, que supieron sacar ventaja de sus contactos con los nuevos mercados nordatlánticos y de formas de comerciar más atrevidas, desplazó parcialmente a la elite socioeconómica nativa del comercio de importación y exportación, cuyos beneficios hasta entonces había monopolizado. Al mismo tiempo, la revolución dañó gravemente el aparato administrativo, eclesiástico y judicial del Virreinato, haciendo que este perdiera gran parte del atractivo que había tenido en el pasado.

En este contexto de caos y derrumbe, la tierra apareció como una alternativa que ningún empresario del período podía dejar de considerar. Pero la misma inestabilidad de las décadas que sucedieron a la crisis del imperio impulsó a los grandes empresarios a actuar con extrema cautela, y aquellos que se volcaron a la producción rural se resistieron a abandonar sus otros emprendimientos. Las razones son comprensibles:

las recurrentes crisis políticas de la primera mitad del siglo, las guerras civiles y externas, los bloqueos que por largos años sufrió el comercio de exportación, la depreciación de la moneda, aconsejaban no depender de una única fuente de ingresos. En un contexto de fuerte inestabilidad institucional como el entonces vigente, la diversificación de activos permitía dispersar riesgos, y resultaba más segura y atractiva que la profundización sectorial. Un estudio reciente de Juan Carlos Garavaglia sobre los patrones de inversión de grandes propietarios en el período entre 1820 y 1850, que toma por base un grupo significativo de empresarios con intereses rurales, permite precisar esta afirmación. Según este autor, para estos grandes empresarios la inversión rural era una más entre varias opciones, y de hecho apenas alcanzaba al 42% de sus activos. Estos se componían también por inversiones en propiedad urbana por un 30,3% del patrimonio, dinero en efectivo por un 10%, créditos activos por un 5%, y chacras y quintas por un 3,5%. En síntesis, la inversión en la actividad ganadera que sucedió a la independencia puede describirse como la incorporación de una nueva actividad productiva que, aunque de importancia capital, no desplazaba, sino que se sumaba a emprendimientos diversos: comercio de importación y exportación, actividades financieras y mercantiles, renta urbana.[57]

La combinación de una serie de desafíos (la aparición de una nueva competencia comercial por parte de extranjeros, la destrucción de riqueza causada por la guerra, la pérdida del mercado altoperuano) forzó a la golpeada elite de Buenos Aires a girar parte de sus recursos hacia la actividad rural, y gracias a ello la producción pecuaria para exportación emergió como la actividad productiva más dinámica de la nueva República.[58] Algunas trayectorias ilustran bien este proceso. Los Anchorena, quizá la mayor familia terrateniente de la Argentina decimonónica, movieron capital del comercio a la tierra por primera vez hacia 1820. Advirtiendo que los tiempos en los que habían gobernado un imperio mercantil que se extendía desde Europa hasta el Potosí habían llegado a su fin, los hermanos Anchorena continuaron invirtiendo en tierra en las décadas siguientes.[59] Pero también mantuvieron fuertes inversiones en otros sectores, que de hecho siguieron teniendo primacía por sobre sus activos rurales hasta bien pasada la mitad de siglo.[60] Algo similar puede decirse respecto a otras familias de grandes terratenientes, como los Martínez de Hoz, los Pereyra y los Unzué, que tampoco cortaron sus lazos económicos con las actividades que tenían por sede el mundo urbano.[61] El resultado fue que, desde las décadas de 1820 y 1830, una nueva raza de grandes hacendados comenzó a sumarse al grupo, hasta entonces más bien humilde, de los propietarios

rurales de origen colonial. Pero en el caso de estos nuevos señores de la pampa, la producción ganadera no desplazaba, sino que complementaba otras actividades rentísticas, comerciales, financieras y de transporte, que tenían su sede y se dirigían desde la ciudad. Mucho más que sus antecesores coloniales, estos nuevos terratenientes siguieron siendo empresarios urbanos de primer orden.

Estos propietarios ausentistas permanecieron como criaturas urbanas también en lo que se refiere a su identidad social. Los miembros de este grupo se percibían a sí mismos, antes que nada, como una elite comercial. En 1850, Felipe Senillosa, fundador de una de las familias más conspicuas de la Buenos Aires rosista y padre de Felipe y Pastor Senillosa, a quienes vemos apenas dos décadas más tarde entre los más entusiastas ruralistas, se describía a sí mismo como un "comerciante en los negocios de ultramar", aun cuando al morir dejó más de 40 000 hectáreas de tierra, que representaban casi la mitad de su fortuna (el resto estaba colocado en emprendimientos comerciales y urbanos).[62] Esta forma de identificación era entonces corriente. Los almanaques de Blondel de los años 1826, 1829 y 1830 señalan a Nicolás Güiraldes y Norberto Quirno como "pulperos", y a Tomás y Juan José Anchorena, Vicente Casares, Celedonio Pereda, Ezequiel Paz, José Guerrico, Francisco Atucha, Bartolo Leloir, y muchos otros que habitualmente concebimos como terratenientes, como comerciantes.[63]

Esta identificación reflejaba no sólo la importancia del comercio, sino también la preeminencia de las actividades mercantiles sobre las rurales a los ojos de las clases propietarias del período. Es por ello que observadores extranjeros como Scrivener, que visitó Buenos Aires en 1825, solían afirmar que "los comerciantes constituyen la clase más respetable de la comunidad".[64] Lucio V. Mansilla no tenía dudas acerca de este punto, sobre el que insistió en varias ocasiones. En 1904, el sobrino de Rosas recordaba que "tener tienda durante el coloniaje y aun después, medir las telas, despachar tras el mostrador, alternar con las señoras así era adquirir hábitos de cultura y era una profesión bien vista. [...] Las mejores familias de Buenos Aires veían así a sus jefes o a sus hijos, haciendo lo que ahora sólo hace una clase intermedia".[65] No es casual que, en los años cuarenta, el joven Mansilla fuese colocado por su padre como ayudante de un comerciante, ya que esta actividad era considerada más adecuada que cualquier tarea rural para educar a un joven de elite: "¿El campo, la estancia? El epígrafe era: para que se embrutezca más ¡Eh! En algunas era escasa hasta el agua y no había más leña que bosta seca –aún mucho después– como en el Tibet, donde jamás se lavan, ni en ello piensan".[66]

Comentarios y actitudes tan despectivos hacía la actividad rural como los de Mansilla eran habituales hacia mediados de siglo, e incluso después. En esos años, Nicolás Anchorena era considerado como el más grande de los propietarios rurales argentinos. Este *primus inter pares* había llevado el ausentismo hasta su limite último, y hacía de ello un motivo de orgullo. Vicuña Mackenna, un viajero chileno que visitó Buenos Aires a comienzos de la década de 1850, relataba que "los estancieros de Buenos Aires visitan muy rara vez sus estancias. Y es un hecho sabido que don Nicolás Anchorena no conoce ninguna de sus numerosas haciendas, cuyo territorio general me aseguran pasaba de 100 leguas cuadradas".[67] El hecho de que Anchorena jamás haya pisado ninguna de sus muchas propiedades ha sido considerado a veces como una manifestación de arcaísmo. Ello no parece cierto. En primer lugar, y contra lo que afirma una creencia muy extendida, hay que señalar que Anchorena era fundamentalmente un empresario urbano. Y ello, a punto tal que los bienes rurales que dejó a su muerte en 1856, que comprendían unas 200 000 hectáreas, representaban (según precios de inventario) alrededor de un tercio de su patrimonio total.[68] Teniendo en cuenta este dato capital, se entiende mejor por qué el mayor señor de la pampa no consideraba necesario visitar sus propiedades rurales.

Pero también conviene colocar el exabrupto de Anchorena en el contexto cultural que le da sentido. Considerando que, para esa elite, muy poco positivo podía esperarse de la vida en una estancia o, más en general, de la sociabilidad rural, esta actitud no era sino un reclamo de distinción social, que seguramente pocos de sus colegas terratenientes estaban en condiciones de emular. Entre ellos, quizás, estaba Gregorio Lezama, dueño de una de las más hermosas residencias de Buenos Aires (convertida luego en el parque público que lleva su nombre), comerciante y gran propietario rural, que parece no haber visitado nunca su estancia de 125 000 hectáreas de extensión, ubicada a unos 400 kilómetros de la ciudad.[69] A comienzos de la década de 1860, una guía publicada en Buenos Aires bajo el nombre de *El Avisador* describe a la mayoría de los miembros de la elite socioeconómica que allí figuran no como terratenientes, sino como comerciantes o como profesionales. Es llamativo, también, que la guía no ofrezca una distinción clara entre "propietarios" y "hacendados", lo que sugiere (además de la importancia de la percepción de renta como modo principal de relación con la producción rural) que la gestión de una empresa rural no era siempre concebida como una actividad autónoma.[70] En la tercera parte del siglo XIX, la actividad rural todavía era vista como inferior y menos prestigiosa que los emprendimientos urbanos.

Había razones muy bien fundadas para que hombres como Nicolás Anchorena hicieran estos reclamos de distinción social. Para entonces, la reputación de la campaña, y en particular de las estancias, estaba lejos de ser buena. En la década de 1850, "la mayor parte de los establecimientos apenas tenía una casa central hecha de dos o tres piezas de adobe con una ramada anexa que servía como cobertizo para distintos fines, uno o dos corrales para las majadas principales que estaban a cargo de un peón, una cocina para los trabajadores, un aljibe y algunos árboles. En la periferia de la propiedad, cada uno de los puestos, ranchos de adobe de una pieza, estaba rodeado de un corral, un aljibe, tal vez un par de árboles".[71] Quizá la característica más llamativa de la actividad ganadera era que la acción humana sólo había modificado muy ligeramente el desolado paisaje pampeano. Como medio totalmente inadecuado para "servir de morada agradable a personas de hábitos cultos" –según se quejaba un británico–,[72] el campo sólo podía embrutecer a quien lo frecuentara. Según afirmaba un observador extranjero para nada hostil, la vida en las planicies volvía a los hombres "relativamente independientes de lo que en Inglaterra se conoce como comodidades".[73] Y Ezequiel Ramos Mexía, un terrateniente que asistió a la gran transformación que la pampa habría de experimentar poco más tarde, señalaba en sus memorias que "los jóvenes que salieron al campo tan sólo veinte años más tarde [hacia el cambio de siglo] no pudieron hacerse a la idea de lo que era la vida de campo en el 60 y en el 80, que poco difería de la del tirano Rosas [...] podía galoparse decenas de leguas en todas direcciones sin encontrar un poblado o un árbol".[74]

Estas descripciones reflejan en particular el paisaje de las tierras nuevas, incorporadas al territorio controlado por los colonizadores a lo largo del siglo XIX. El orden militarizado de la estancia de frontera, con sus cañones atentos a las incursiones indígenas, pero también con su inserción en un mundo de intensos intercambios con las tribus amigas, imponía normas muy severas a la vida en los distritos más periféricos.[75] Inevitablemente, su existencia llamó la atención de numerosos observadores. Las descripciones de "estancias que parecen fortines, de tierras de pastoreo sin alambrar, de encuentros con indígenas, de cacerías en tierras salvajes", resultan habituales antes de los años ochenta.[76] Ciertamente, en regiones de más antiguo poblamiento la propiedad y las personas se encontraban más seguras, y las comodidades que podían encontrarse en las grandes unidades de producción eran menos sumarias. Pero aun allí, y hasta bien pasada la mitad del siglo, la vida no era demasiado sofisticada (a excepción, quizás, de algunas estancias de propietarios europeos que

intentaron reproducir en la pampa algunos rasgos de las sociedades de las que provenían). A pesar de todas las novedades traídas por la actividad lanar, a pesar del impetuoso crecimiento de la producción, algunos rasgos de la vida en la campaña se modificaron poco. Los árboles y la madera eran escasos, y en algunos lugares debía hacerse fuego con cardos o con bosta lanar, que se cortaba en trozos y se secaba a la intemperie.[77]

El desplazamiento tampoco resultaba sencillo. Con sus primeros 11 kilómetros inaugurados en 1857, la Argentina no fue el primero, sino el quinto país de América del Sur en ingresar en la era ferroviaria, detrás de Brasil, Colombia, Perú y Chile.[78] Los caminos no solían ser más que huellas, y los puentes, prácticamente inexistentes.[79] Fenómenos naturales como las inundaciones y las sequías afectaban tanto a la producción como al desplazamiento de los hombres. La infraestructura de la pampa era tan elemental como la economía que servía. Hasta la construcción del primer puente en 1873, los ricos distritos ovinos ubicados al sudeste del río Salado se volvían difíciles de alcanzar durante los meses más lluviosos.[80] Las sequías eran aún más problemáticas. Los hermanos Mulhall afirman que más de cuatro millones de ovejas (una décima parte del rebaño) perecieron en la inundación de 1859.[81] En las décadas de 1860 y 1870, incluso en estancias importantes, las construcciones de barro y paja eran más habituales que las de ladrillo. Hasta fines de la década de 1870, la pampa casi no tenía alambrados, ni ninguna otra manera de mantener separados a los rebaños de forma permanente.[82] Las comodidades que los terratenientes chilenos y brasileños poseían en sus fundos y *fazendas* estaban ausentes en esta campaña. En definitiva, si bien la mayoría de los propietarios rurales no alcanzaba los extremos a los que llegaban Nicolás Anchorena o Gregorio Lezama, de todas maneras tenían muy buenas razones para hacerse notar por su ausentismo, y también para limitar al mínimo los lazos con ese mundo, visto como poco menos que bárbaro.

Las imágenes dominantes sobre la pampa reflejan bien este cuadro de situación. El primitivismo que dominaba a los distritos ganaderos contribuyó a configurar un cuadro en el que la campaña aparecía como un lugar en el cual las condiciones que hacían posible una existencia civilizada no se encontraban presentes. La visión que insistía en que las grandes estancias y los estancieros tenían responsabilidad por esta situación gozaba de gran eco. Para los Mulhall, "los estancieros ricos suelen vivir en la ciudad, rodeados de grandes lujos, pero dejan sus establecimientos a cargo de un mayordomo [...] se trata de hombres de modales refinados, buena educación, incluso muchas veces miembros de las profesiones más ilustradas. Su gran defecto es un rechazo absoluto a mejorar la situación

y la cultura de los paisanos de sus estancias".[83] Repetidamente se señaló a la estancia como ejemplo de atraso y arcaísmo. En vez de catalizador de cambio, la estancia era la médula de aquella sociedad alejada de las luces. Era habitual afirmar que "las estancias no poseen todas las mejoras que debieran, ni tampoco se gasta mucho dinero en ellas de modo sistemático".[84] Al igual que los observadores ilustrados de fines del siglo XVIII, algunos críticos de ese orden de cosas creían que, para alentar la mejora de la sociedad rural, la ganadería debía dar lugar al cultivo del suelo, considerado como más progresista, incluso a veces como más rentable. Los extranjeros, sobre todo aquellos familiarizados con sistemas agrarios más complejos, solían sostener esta opinión. Wilfrid Latham, por ejemplo, afirmaba que "las actividades ganaderas corresponden a las tribus nómadas y, si están desvinculadas de la agricultura, a las naciones en su etapa infantil".[85] Debe señalarse que las elites culturales y políticas también solían ver los problemas rurales desde una perspectiva similar. Durante las décadas de 1860 y 1870, la noción de que "un país que no tiene más industria primordial que la ganadería es un país inculto"[86] formaba parte del mundo de creencias de estos grupos.

Las elites políticas, en particular aquellas inspiradas en los ejemplos de los modelos de colonización agraria estadounidense y australiano, ocupaban un lugar prominente entre los críticos del mundo de las estancias y los estancieros. Su modo de ver los problemas rurales se puso de manifiesto cada vez que se discutía la política de tierras. En 1876, por ejemplo, el ministro Aristóbulo del Valle describió a las grandes estancias simplemente como "la barbarie".[87] Durante los años centrales de la década de 1870, un período de dificultades para la ganadería ovina, algunas voces se alzaron contra la concentración de la producción en un número muy limitado de productos agrarios para la exportación, y tomaron distancia de las supuestas ventajas de la división internacional del trabajo.[88] Pero incluso cuando ese período de crisis llegó a su fin, la imagen de la ganadería como una actividad primitiva no se modificó. "¡Pobre ganadería!", exclamaba el senador Manuel Gache en 1878, "nunca dejará de ser lo que es hoy: la ganadería nómade, la ganadería del indio. Rodeos de animales abandonados a sí mismos en vasta estensión de territorio".[89]

Los que denunciaban los aspectos negativos de un mundo rural que veían modelado a imagen y semejanza de la estancia nunca desafiaron el amplio acuerdo alcanzado en torno a la centralidad de la economía de exportación, y tampoco cuestionaron los derechos de los grandes propietarios a contarse entre los principales beneficiarios de esa economía. Estos críticos sabían bien que la prosperidad de la Argentina se fundaba,

bien o mal, en lo que la ganadería podía ofrecer. A partir de esta premisa, incluso podía juzgarse a la gran estancia ganadera desde perspectivas diferentes y más positivas. Por ejemplo, algunos observadores justificaron la forma en que los estancieros organizaban la producción. Para ello solían adoptar un enfoque pragmático, destacando que el uso intensivo del factor tierra y la predominancia de técnicas simples resultaban inevitables en un contexto caracterizado por la escasez relativa de capital y de trabajo. Y argumentaron, de igual forma, que la cría de ganados debía su victoria sobre la agricultura a su mejor adaptación a las condiciones locales. Estas visiones fueron expresadas tanto en los recintos parlamentarios como en la prensa periódica.[90] En 1875, por ejemplo, "un estanciero" firmó una serie de artículos en el diario *República*, en los que alababa el papel civilizador desempeñado por la gran estancia, insistiendo en que esta se encontraba muy bien adaptada a un medio rural extremadamente hostil. "La gran propiedad en nuestra provincia ha tenido la parte principal en la conquista de la pampa", afirmó, faltando a la verdad sólo a medias (puesto que esa "conquista" también había sido llevada adelante con la colaboración de actores menos poderosos, como los pequeños productores que poblaban la campaña).[91]

Sin embargo, incluso estas voces que hablaban a favor del estado de cosas existente aceptaban que en un futuro no muy lejano la era ganadera debía dejar lugar a emprendimientos económicos no sólo más rentables, sino también más progresistas, entre los que la agricultura debería tener un lugar central. Y es muy probable que algunos de estos voceros del interés terrateniente hubiesen coincidido con la visión más ecuánime, y seguramente más compleja, expresada en 1876 por el senador Dardo Rocha. Para él, "la pampa que ha sido un inconveniente para nosotros, bajo cierto punto de vista, porque ella ha fomentado la barbarie por la clase de trabajos que se hacían, ha sido bajo otro punto de vista una fuente de riqueza, y algunos la han considerado como una mina de oro teñida de verde, porque en ella se alimentan los numerosos rebaños que constituyen la principal riqueza de la República".[92]

Las palabras de Rocha resumen bien la idea de que la ganadería de la pampa era vista a la vez como el motor de la economía del país y como un obstáculo para el desarrollo de una sociedad más civilizada. Lo que este y otros miembros de la elite letrada entendían por civilización y barbarie tenía profundas implicancias sociales y políticas, como las que Sarmiento había explorado en su *Facundo*. En efecto, para entonces existía un amplio consenso en torno a la noción de que las condiciones socioeconómicas prevalecientes en la campaña habían hecho posible la larga

tiranía de Rosas. Como las palabras de Rocha lo sugieren, la ganadería, tal como allí existía, era vista como un factor de barbarización, y la sociedad rural que ella contribuía a crear, como una suerte de forja en la que la dictadura rosista había sido modelada. Es por ello que, para las elites del período posrosista, la condena de ese mundo rural se articulaba con una crítica más general a lo más negro que tenía la trayectoria histórica argentina.

La visión que afirmaba que la sociedad de las pampas se encontraba alejada de las luces poseía sólidos fundamentos, a punto tal que incluso los propios estancieros no se encontraban ajenos a las marcas que ella imponía sobre la sociabilidad en la campaña. En 1873, por ejemplo, la Sociedad Rural convocó una reunión para discutir el modo de hacer frente al robo de ganado. Antes de la difusión del alambrado en la década de 1880, "la manía de 'carnear ageno'" era considerada "una costumbre generalizada".[93] Lo que llama la atención, sin embargo, es que la crítica de los ruralistas no iba dirigida a las clases subalternas, cuya falta de respeto por la propiedad la Sociedad Rural solía deplorar. Significativamente, los ruralistas apuntaban a sus propios pares cuando denunciaban "la repugnante y perniciosa costumbre que tienen muchos ganaderos en nuestra campaña de matar animales agenos para el consumo de sus establecimientos". Hábitos como este eran justamente calificados como un obstáculo para la emergencia de una clase terrateniente que estuviese a la altura de su misión tutelar sobre los sectores subalternos. De allí que *Anales* insistiera en que "es preciso hacer resaltar la dependencia vergonzosa en que [el estanciero] se pone de sus subalternos por el temor de la delación, teniendo en muchos casos que tolerar desmanes y desórdenes, que perjudican tanto la buena administración de un establecimiento, y que importa muchísimo más siempre, que la carne de algunos animales".[94] Un gran propietario como Manuel Guerrico afirmaba "que en el Sud se dice que se carnea ageno en casi todas las estancias. No debemos, pues, culpar al peón y al buhonero que roban un cordero, puesto que se roba también por los ricos". Este mundo de rasgos hobbesianos concitaba las críticas de otro propietario, que argumentaba que "los estancieros ricos son los que han dado ejemplo de inmoralidad".[95]

El extendido hábito de robar ganado, incluso por parte de propietarios "ricos", sugiere bien que la debilidad de la conciencia de clase de los propietarios rurales era evidente en relación no sólo con el ambicioso proyecto ruralista. E indica hasta qué punto el desarrollo de una nueva conciencia terrateniente entre un significativo pero re-

ducido grupo de grandes propietarios progresistas de fuerte vocación pública estaba lejos de impactar a muchos de sus pares. Aún en la década de 1870, gran parte de los empresarios con intereses rurales todavía encontraban conveniente seguir métodos muy tradicionales de gestión de sus empresas, y estaban lejos de interesarse por seguir las admoniciones de los ruralistas que los invitaban a asumir un papel de liderazgo político y social. Para entonces, fenómenos tales como la importancia de los intereses extraagrarios de la elite económica, las primitivas condiciones de vida y trabajo propias de la pampa, el prestigio muy relativo de las actividades rurales, y las implicancias sociales y políticas que las imágenes que ese bravío mundo rural continuaba evocando seguían obstruyendo la emergencia de una conciencia terrateniente entre las elites sociales. Es por ello que, todavía a fines de la década de 1860, algunos visitantes extranjeros como Virgilio Tamaulipas podían referirse a la base económica de la elite porteña en términos de dinero antes que de tierra, y a su apariencia como urbana antes que rural.[96] En este contexto, se entiende que fuesen insuficientes las repetidas exhortaciones de los ruralistas para hacer que quienes miraban con desprecio o distancia sus emprendimientos rurales se transformasen en una clase terrateniente orgullosa de su vínculo con la tierra. Para que un cambio en este sentido pudiera abrirse paso, no bastaba con una toma de conciencia por parte del propio empresariado rural; al mismo tiempo, era precisa una profunda transformación de la campaña, que los estancieros no estaban en condiciones de operar por sí mismos, y que por lo tanto requería ser impulsada también por otros actores.

LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS DE LA DÉCADA DE 1880

Tras la caída de Rosas en 1852, se inició una era política que favoreció la consolidación del estado federal. Sin embargo, a lo largo de las siguientes tres décadas, el proceso de centralización del poder suscitó resistencias abiertas. La secesión de Buenos Aires en la década de 1850, y luego los levantamientos que se sucedieron en las décadas de 1860 y 1870, pusieron repetidos obstáculos que frenaron la afirmación del estado central. Si esta avanzó, fue en parte porque las elites del interior poco a poco cayeron en la cuenta de que sus intereses podían ser servidos mejor ayudando y no impidiendo la cons-

titución de un poderoso estado central, pues ello les otorgaría a las pobres pero numerosas provincias mediterráneas una cuota de poder que excedía en mucho su importancia económica.[97] Tras la presidencia de Bartolomé Mitre, que se inició con la conquista del interior por Buenos Aires, esta provincia perdió importancia política. Ello se advirtió con la elección del sanjuanino Sarmiento como presidente en 1868. Este fenómeno se hizo más claro en 1874, cuando una coalición con fuerte respaldo en el interior del país elevó a la primera magistratura a Nicolás Avellaneda, un hijo de Tucumán. En 1880, el nuevo Partido Autonomista Nacional (PAN), que le dio vida permanente y mayor poder a la alianza esbozada seis años antes, sostuvo la candidatura de otra figura del interior, el General Julio A. Roca, contra la candidatura eminentemente porteña de Carlos Tejedor. A comienzos de 1880, un diplomático británico afirmaba que "por dos términos presidenciales, la provincia de Buenos Aires, habiendo perdido las elecciones, ha tenido poca influencia en el gobierno. En este momento, Buenos Aires está prácticamente unida en la crítica de tales influencias [del interior] y en la oposición al gobierno actual. Detrás de esta oposición subyace la sensación universal de que Buenos Aires debe asegurarse su turno en el gobierno, pues de lo contrario el gobierno por las demás provincias terminará por consolidarse".[98]

Incapaz de vencer al PAN en las elecciones presidenciales, el gobernador de Buenos Aires se alzó contra Roca. Según recordaba Ezequiel Ramos Mexía, "todos los jóvenes conocidos de la sociedad porteña" se sumaron a la guardia civil que fue convocada para desafiar la victoria del PAN.[99] Este último y desesperado intento de hacer de Buenos Aires la base política de un proyecto nacional terminó derrotado. En el invierno de 1880, el ejército federal venció a las milicias de la Primera Provincia en una serie de duras batallas que dejaron unas tres mil bajas, entre muertos y heridos. Buenos Aires fue intervenida por el gobierno federal y, un poco más tarde, las elecciones convocadas para restaurar sus autoridades se realizaron bajo el estricto control del poder central. El resultado fue una clara victoria del brazo provincial del PAN. Roca también impulsó la federalización de la ciudad de Buenos Aires, sacándola de la jurisdicción provincial y colocándola bajo la órbita del poder central. La provincia, desvinculada de su histórica capital, se vio obligada a darse una nueva sede administrativa, que se ubicó en La Plata, una nueva ciudad creada a tal efecto. La dolorosa derrota de 1880 dio lugar a insistentes reclamos que llamaban a conciliar los espíritus para sentar las bases de una paz duradera.

La revolución de 1880 terminó de dar forma a una evolución de largo plazo de la vida política: el desplazamiento del centro de poder desde la provincia de Buenos Aires hacia el gobierno federal, que a su vez reconocía fuertes bases políticas en el interior del país. Como consecuencia de estos cambios, la elite política porteña se vio desplazada de la posición privilegiada que durante siete décadas mantuvo al frente de la vida pública del país independiente. Y así fue percibido por muchos observadores. En 1880, Estanislao Zeballos concluía, "la influencia de Buenos Aires [...] desapareció por desgracia".[100] No es por ello sorprendente que muchos porteños recibieran a Roca como a un invasor que había masacrado a los mejores hijos de la provincia. Horace Rumbold, el representante diplomático británico, advertía poco antes de la asunción de Roca que "la *élite* de Buenos Ayres, su clase más exclusiva, airosa aun en su derrota, se ha retirado a sus tiendas, y por el momento no se exhibe en público. En este momento preciso se encuentran en un estado de gran descontento [...] dentro de pocos días el hombre cuya elección los ha conducido a la secesión y la guerra asumirá el gobierno, y su caída del poder será total".[101]

Es indudable que la clase alta de Buenos Aires perdió poder e influencia cuando Roca llegó al gobierno. Muchas familias tradicionales juzgaban al presidente tucumano con abierta sospecha.[102] En Buenos Aires, afirmaba un biógrafo de abierta simpatía por Roca, el General "se movía con cierta disimulada desconfianza entre los antiguos dueños de casa".[103] Leonardo Pereyra y los Anchorena –cuyas fortunas se encontraban entre las mayores de aquel tiempo– vieron declinar su influencia sobre el gobierno.[104] Sin embargo, otros porteños de gran riqueza, como Diego de Alvear, establecieron buenos lazos con Roca y los "'bárbaros del norte', como se les llamaba, que venían como a su casa a radicarse, a actuar en toda clase de actividades y a gobernar a la Nación".[105] No parece desacertado describir el modo en que la elite socioeconómica se relacionaba con el nuevo presidente como esencialmente pragmático. Las evidencias de este pragmatismo son muchas. En esos años, el gobierno provincial le donó tierras a Roca en la región poco tiempo antes conquistada, donde más tarde el presidente establecería una gran estancia, a la que bautizó La Larga. Este regalo violaba la ley, pero nadie, dentro o fuera de la Legislatura, pareció dispuesto a discutirlo demasiado. Hubo también ofrendas (o sobornos) más directos. En 1885, el hijo de Roca recibió "mil ovejas Lincoln y dos manadas de yeguas de padres traquenes" que le obsequió un miembro de la familia Unzué.[106] Roca, por su parte, recibió un caballo de pedigree, regalo de Cambacèrés.[107]

Estos presentes, que seguramente no fueron los únicos que Roca recibió, nos hablan de la vigencia de una tradición de vinculación personal con el poder que siempre había sido un componente de la relación entre los gobernantes y la elite socioeconómica. Es importante, sin embargo, que estos elementos de continuidad no impidan advertir las novedades que produjo la consolidación del poder central. Pues desde la década de 1870, y en particular desde 1880, la posición política de la elite socioeconómica de Buenos Aires fue significativamente modificada. La victoria de Roca puso de manifiesto la madurez de un nuevo orden cuyo centro de gravedad se había desplazado desde Buenos Aires hacia las provincias del centro y del norte y hacia el propio aparato de estado. Desde ese momento, las redes políticas de Buenos Aires se volvieron más autónomas de la elite porteña y al mismo tiempo perdieron importancia en la vida pública nacional.

Es por ello que Roca, muy ocupado organizando sus apoyos en el interior del país (de lo que su abundante correspondencia es una prueba muy visible), se mostró menos interesado que sus predecesores en gastar su tiempo cortejando a la clase alta porteña. Así, por ejemplo, mientras que el más débil Avellaneda siempre se había mostrado solícito hacia la Sociedad Rural, el nuevo mandatario no asistió a las ceremonias de inauguración y clausura de la Exposición Rural de 1881. Estas ausencias merecieron varios comentarios en la prensa.[108] Actitudes como esta seguramente colaboraron para que en repetidas oportunidades los nuevos gobernantes concitaran la ira de los ruralistas. En 1882, la Sociedad Rural criticó al gobierno provincial por el incremento de los impuestos rurales, y por la participación de miembros de la policía y la justicia de paz en el robo de ganado. *Anales* se quejaba de que "lejos de ser libertada nuestra administración rural de tan malos elementos, hanse dejado en sus puestos, dando así mas latitud, impunidad y descaro a tan bochornoso estado de cosas".[109] En 1883, un nuevo incremento de impuestos encendió otra ronda de críticas. "Los Gobiernos no deben olvidar jamás que las grandes revoluciones no han tenido otro origen que la exageración de los impuestos", advirtió con gravedad el vocero terrateniente.[110] En ese momento, los ruralistas también alzaron su voz contra la elección de autoridades locales que, afirmaban, había sido hecha sobre la base del clientelismo político, e impidiendo la libre expresión de la voluntad popular. *Anales* entonces se quejaba de que "la autoridad no es muy respetuosa, que digamos, de los derechos de los ciudadanos".[111] Poco tiempo después, la policía volvió a ser reprendida por su ineficiencia.[112]

La elección de Enrique Sundblad (1880-1882 y 1884-1886) y Leonardo Pereyra (1882-1884) para presidir la Sociedad Rural ofrece nuevos tes-

timonios de la crítica actitud de los ruralistas hacia el gobierno. Ambos eran hombres de conocidos antecedentes opositores: Sundblad había sido un fiel seguidor del Partido Liberal de Mitre, y Pereyra, por entonces también mitrista, se volvería algunos años más tarde un defensor entusiasta de la Unión Cívica Radical, lo que incluso lo llevaría al destierro.[113] Lo mismo puede decirse de José María Jurado, quien ocupó la dirección de *Anales* durante parte de este período, y que alcanzó la presidencia de la sociedad en 1886. Durante su gestión al frente de *Anales*, Jurado endureció la línea editorial de esta revista. A fines de 1885, por ejemplo, invitaba a los terratenientes a "levantar la propia estimación de nuestros ciudadanos que da el vigor necesario para apartar lo malo que trepa a la dirección de los negocios comunes".[114]

Para entonces, las tensiones entre los ruralistas y el gobierno se habían acentuado, pues Miguel Juárez Celman, gobernador de Córdoba y concuñado de Roca, aparecía como el ganador de la carrera por la candidatura presidencial desatada dentro del PAN. El amplio control que este partido ejercía sobre la política nacional, en especial en el interior, significaba que era más que probable que Juárez fuese consagrado como sucesor de Roca. Juárez era percibido como un gobernante cuyas bases y lealtades políticas se habían forjado, y en gran medida continuaban centradas, en el interior del país y en la maquinaria estatal antes que en Buenos Aires.[115] Es por ello que muchos terratenientes juzgaron su ascenso como otro factor que contribuía a consolidar un orden más autónomo de Buenos Aires, y más dependiente de sus apoyos en el interior.

A comienzos de 1886, el presidente de la Sociedad Rural dio rienda suelta a su descontento, y argumentó abiertamente que el gobierno se hallaba divorciado de la opinión pública, y que se fundaba sobre la violencia y la imposición. Jurado se preguntaba "¿por qué con espíritu serio y levantado, no se deja expresar libremente con lealtad y con verdad la voluntad mayoritaria de los ciudadanos? Con la mentira, con la falsía, perdida la confianza y la fe mutuas ¿qué queda al fin? Las insidias, la pillería ruin, despreciable en cualquier otro acto de la vida, el lodo arrojado a manos llenas, la cachiporra, el puñal del compadrito, la fuerza bruta".[116] Para Jurado, ello había traído problemas adicionales, pues la irresponsabilidad del gobierno, incapaz de evitar "situaciones vergonzosas, denigrantes", había dañado la reputación internacional del país, en especial entre los inversores extranjeros. Ello, argumentaba, había traído como consecuencia la contracción del crédito externo, lo que a su vez había obligando a la suspensión de la convertibilidad de la moneda.[117]

Este comentario sugiere bien que algunos problemas económicos vividos durante los años 1885 y 1886 contribuían a amplificar las críticas terratenientes. El fin de la presidencia de Roca había coincidido con una crisis comercial y financiera originada en la caída temporaria en los créditos externos, que obligó a suspender el régimen de convertibilidad puesto en marcha en 1883. No era esta, sin embargo, la razón principal de la animosidad terrateniente hacia el gobierno. A pesar de la incertidumbre que la crisis trajo consigo y de los problemas que les causó a aquellos que habían contraído deudas en oro o moneda extranjera, con la interrupción de la convertibilidad y la depreciación de la moneda local los exportadores gozaban de ingresos extraordinarios, ya que los precios domésticos (que definían lo esencial de sus costos de producción) no aumentaron lo suficiente como para compensar la depreciación de la divisa nacional. Como algunos voceros terratenientes no dejaron de advertir, un régimen de papel moneda inconvertible significaba depreciación de la moneda nacional, y por lo tanto, ingresos más altos para aquellos que recibían oro o divisas extranjeras a cambio de productos cuyo costo de producción se fijaba en la moneda del país.[118]

La política, más que la economía, era percibida como el problema. En las elecciones presidenciales de febrero de 1886, la maquinaria política del PAN obtuvo una victoria previsible sobre el conjunto de fuerzas bonaerenses coaligadas en los Partidos Unidos. *La Prensa* entonces informaba que "la mayoría de la población, especialmente las clases ilustradas, se han mantenido en la abstención, no han concurrido a los atrios, dejando librada la suerte de las elecciones a las pequeñas masas regimentadas de los partidos".[119] La abstención de las clases propietarias y la participación activa de los grupos subalternos en la vida electoral no eran fenómenos nuevos. Desde una etapa muy temprana, un sistema de sufragio muy amplio, forjado al calor de las movilizaciones del período revolucionario, había asegurado el voto a todos los varones nativos o naturalizados. Aunque la importancia de la movilización popular en el interior es materia de debate, en Buenos Aires las clases populares participaban activamente en la vida política. Tras el derrocamiento de Rosas, surgió en Buenos Aires un sistema de competencia de partidos en el que la movilización de clientelas populares, reclutadas en parte entre los sectores inferiores de la administración, se volvió un rasgo característico de la vida pública.[120] Desde 1880, este sistema de competencia entre los partidos porteños desapareció, sepultado por el dominio del PAN. Como resultado de su control indisputado del interior, así como del creciente poder del estado federal, el PAN alcanzó un elevado grado de autonomía res-

pecto de la sociedad civil de Buenos Aires. Desde entonces, las elecciones se tornaron, aun más que en cualquier momento del pasado, un tema de estricta competencia de las maquinarias electorales. Desde 1880, muchos porteños lamentaban el fin de "esos días de noble lucha democrática en que la prensa, el Club y el sufragio tenían la palabra".[121]

La dificultad para controlar al PAN, y en alguna medida también al resto de los actores del sistema político, dio lugar a abiertas muestras de inquietud por parte de voceros de la elite socioeconómica.[122] En el editorial de *Anales* que resumía los principales sucesos acontecidos en 1886, Jurado denunció los "tremendos y desgraciados movimientos electorales" que habían tenido lugar ese año. "Parece que fuésemos un pueblo inepto para el gobierno propio, que no sabemos ni respetar la voluntad de la mayoría, ni manifestarla en términos convincentes", sostenía el presidente de la Sociedad Rural. Y luego agregaba que "un acto electoral de los partidos activos que se disputan el poder cada día es más difícil para la gente honorable. Las arterías más repugnantes, los fraudes más vergonzosos, los actos de imposición y de fuerza mas descarnados, parecen cosa muy natural en las elecciones. [...] Hay una perturbación mental, a este respecto, que raya en verdadera locura, y que nos muestra de una manera vergonzosa ante otros pueblos".[123] Algún tiempo más tarde, Jurado volvió a insistir. La política, afirmaba, "todo lo ha desquiciado en la administración pública".[124] Algunos observadores incluso afirmaban que la calidad de la política argentina estaba muy por debajo de la de otros países latinoamericanos. "La costumbre de reemplazar las urnas electorales con la voluntad de los mandatarios", por ejemplo, concitó el rechazo abierto del colombiano Antonio Samper. "Nada tenemos que aprender de la Argentina en materia de gobierno", concluía orgulloso este representante diplomático.[125]

La correspondencia familiar de los Senillosa nos ofrece la oportunidad de introducirnos, desde una perspectiva privada, en el mundo de representaciones políticas de los grandes terratenientes. En una carta a su cuñado, un terrateniente uruguayo, Pastor Senillosa no ocultaba su pesimismo sobre la situación argentina. En marzo de 1887, le escribía a Juan Antonio Chopitea que "si algún cambio saludable se llega a operar, el que sube se rodea del circulillo que responde a los propósitos que él lleva. Al poco tiempo, tanto él como su circulillo se ocupan del bolsillo y políticas rastreras". En las elecciones nacionales de 1886, continuaba Senillosa, "tuvimos el asesinato en las provincias, el fraude inicuo en la Capital y 10 000 bayonetas que declararon legal aquella miseria humana.

El '86, tratándose de la cuestión gobernación de la provincia se han visto miserias de todo género, gente que se ha vendido varias veces, el Banco de la Provincia y el Hipotecario que, sirviendo de instrumento a algunos miserables, abrían sus arcas y acordaban ingentes sumas a personas sin responsabilidad y que el Banco no ha vuelto a ver más".[126]

Estas denuncias no carecían de fundamentos. Esos años fueron testigos de sonados episodios de corrupción, que en no pocos casos se referían a figuras cercanas al poder. La legislación de centros agrícolas, destinada a favorecer el desarrollo de la agricultura y la pequeña propiedad, dio lugar a abusos notorios.[127] Como señalaba Senillosa, los bancos oficiales fueron puestos al servicio del enriquecimiento de los amigos, pero también sirvieron para aceitar los engranajes de la maquinaria política dominante. En 1887, por ejemplo, salió a la luz el hecho de que el Banco de la Provincia mantenía 28 empleados "únicamente con fines electorales, y que alrededor de 8 millones de pesos habían sido desviados para cubrir los gastos electorales de la administración saliente".[128]

Pastor Senillosa no sólo hablaba por sí mismo cuando condenaba al gobierno. Pero es igualmente significativo que su reacción frente al problema, que podría resumirse en la palabra resignación, resultase característica de la actitud general de los terratenientes. Pues si algo llama la atención es que sus airadas denuncias nunca se tradujeron en una oposición abierta. Como señalaba un agudo observador como Emilio Daireaux en 1884, "las clases que están en posesión de la tierra o de la fortuna pueden estar descontentas; su descontento no es peligroso, ni siquiera molesto; sus quejas discretas llenan los salones, pero no turban la vida política; esas clases se quejan de no tomar parte en la formación de las leyes, pero son incapaces de quebrantarlas".[129] Ello no se debía sólo a que la fuerza militar alcanzada por el estado –las "10 000 bayonetas" a las que hacía mención Senillosa– y el poder electoral del PAN mantenían a los disidentes pasivos y desarticulados. Había también razones más fundamentales que explican la resignación terrateniente, e incluso, en no pocos casos, su apoyo a las nuevas autoridades surgidas después de 1880.

En más de un sentido, los propietarios rurales tenían más motivos para elogiar que para criticar al gobierno del PAN. Los años ochenta constituyen un punto de inflexión crucial en la historia argentina. Esa década asistió al fin de una larga era caracterizada por recurrentes conflictos políticos y militares, que habían afectado a la producción rural, consumido energías y recursos, y causado un estado de permanente inquietud entre los empresarios (estos eran, precisamente, algunos de los motivos que habían impulsado la creación de la Sociedad Rural).

La década se inauguró con una noticia auspiciosa: la incorporación de 30 000 000 de hectáreas de tierra nueva. Durante las dos décadas anteriores, la necesidad de sumar nuevos campos de pastoreo se había hecho más acusada por la expansión del rodeo lanar, precisamente cuando, tras la caída del sistema de negociación con las "tribus amigas" implementado por Rosas, la presión indígena sobre la frontera se había hecho más aguda.[130] En 1879, el ejército federal bajo el mando de Roca lanzó una gran ofensiva, que empujó las fronteras de la República hasta el Río Negro, y poco más tarde hasta cerca de sus límites actuales. Con la "Conquista del Desierto", Roca hizo realidad una de las aspiraciones más hondamente sentidas de los grupos terratenientes. En poco tiempo, la cuestión indígena fue resuelta de un modo que excedía sus expectativas más optimistas.

En 1875, el presidente Avellaneda, partidario de un avance pausado, describía la conquista de las tierras indígenas como "el programa aún de muchas administraciones y de dos o tres generaciones".[131] Cinco años más tarde, los indígenas habían sido reducidos o aniquilados, y las tierras que antes señoreaban podían ser incorporadas al dominio del estado, y pronto al dominio privado. Entre 1878 y 1882, unos 20 000 000 de hectáreas fueron vendidos en grandes unidades, y no sorprende que algunos de los principales terratenientes se contase entre los mayores compradores. Así, Saturnino Unzué adquirió 270 000 hectáreas; Tomás Drysdale, 320 000; Antonino Cambacèrés, 120 000; los Leloir, 110 000; los Luro, 140 000; los Alvear, Diego y Torcuato, 97 500 cada uno; Joaquín Chas, 60 000; Ernesto Tornquist, 90 000; Carlos Guerrero, 70 000.[132] Inevitablemente, y al igual que había sucedido con las anteriores ventas de tierra pública, como la impulsada por Rosas luego de 1836, este patrón de distribución de las tierras saqueadas al indio en el corto plazo dio lugar a importantes negocios especulativos. Pero en el mediano y largo plazo reforzó la importancia de los grandes terratenientes de Buenos Aires y de la gran unidad de producción ganadera en el conjunto de la economía argentina.

El gobierno no sólo se ocupó de que el acceso a la tierra –el factor de producción cuya abundancia singulariza a la economía de la pampa– resultase más seguro y sencillo; también lo volvió más accesible promoviendo la construcción de una gran red de transporte y comunicaciones. Durante los años ochenta, la inversión extranjera, sobre todo la británica, experimentó un crecimiento espectacular. Antes de esta década, el lazo económico entre la Argentina y Gran Bretaña había estado centrado en el intercambio comercial. Desde los años ochenta, tomó gran

impulso la inversión de capital, que fue acompañada por la expansión del sistema bancario. Se ha estimado que en 1875 el capital británico invertido en Argentina totalizaba unos 23 millones de libras; para 1885 se había duplicado, y para 1890 alcanzaba a 174 millones.[133] Gran parte de estas inversiones estaban orientadas a mejorar y ampliar ferrocarriles y puertos. Después de dos décadas de un crecimiento relativamente lento de la red ferroviaria, la década de 1880 asistió a una veloz expansión. Para mediados de esa década, Mendoza en el oeste y Tucumán en el norte ya estaban incorporadas en el sistema ferroviario nacional. Más importante, al menos desde la perspectiva de los productores rurales, en esos años el ferrocarril se expandió por la pampa con gran rapidez. El gobierno provincial de Buenos Aires, por ejemplo, presionó a las compañías para que abrieran nuevos ramales y extendieran la red. Durante la gobernación de Dardo Rocha, entre 1881 y 1884, la red vial prácticamente se duplicó, pasando de 1082 a 1889 kilómetros.

Logros como este fueron considerados por los ruralistas como claros indicadores de que una nueva relación entre estado y empresarios rurales tomaba forma. En pocos años, la percepción de que algo había cambiado se tornó una certeza. Así se advierte en los juicios expresados por *Anales* en 1883. "Si hubiésemos de hacer el inventario de las obras que han realizado en la campaña los gobiernos que se han sucedido en el mando de la Provincia durante los últimos veinte años [...] Sería en realidad inventario pobre y mezquino!", afirmaba el vocero terrateniente. "Hoy las cosas han cambiado [...] la profunda y glacial indiferencia con que hasta hace poco se han mirado los asuntos rurales [...] empieza a ser reemplazada por un movimiento de creciente interés."[134]

Los ruralistas no eran los únicos que hacían afirmaciones de este tenor. Un año antes, en 1882, Luis Sáenz Peña señalaba que "lo que se llama movimiento de opinión pública está postrado completamente, todos los actos electorales [...] son eminentemente oficiales en toda la República". Y sin embargo, concluía este hombre de Buenos Aires, "los intereses materiales se desarrollan de una manera sorprendente".[135] Para él, también el orden político nacido en 1880 daba forma a una nueva relación entre elites socioeconómicas y estado. El programa gubernamental de "paz y administración" –el lema de Roca–, así como los apoyos sobre los que se sostenía, implicaban a la vez una creciente distancia entre la clase propietaria pampeana y el estado, y al mismo tiempo, un apoyo muy activo para el desarrollo de la actividad empresarial. Es por ello que en el mismo editorial de 1886 que hemos citado

más arriba, en el que Jurado denunciaba agriamente el divorcio entre gobierno y opinión pública, no podía sino señalar que

> hacen seis años que ocupaba la provincia de Buenos Aires de 6 á 7000 leguas cuadradas, con sus ganados. De entonces ha obtenido perfectamente seguras del peligro de tres siglos (Indios) una mitad mas de tierra en las mismas condiciones, para el mismo negocio. Ha traído al mercado cerca de un cincuenta por ciento mas de tierras y la Nación quince mil leguas mas al Sud. [...] Y si a esto agregamos nuestra líneas de ferrocarriles de los Andes á Buenos Aires, de Tucumán á Bahía Blanca; nuestros puertos ya construidos en el Riachuelo, o en construcción en La Plata, esa ciudad maravillosa de palacios, levantada en tres años y con 30 000 habitantes, tenemos en cinco o seis años manifestaciones de progreso que no se ven en ninguna otra parte en la misma escala.[136]

Aun cuando la política era habitualmente considerada como una actividad degradada, y a pesar de "la desconfianza en nuestra situación política, en nuestra estabilidad, en nuestro buen juicio, en nuestras aptitudes para el Gobierno propio y para la transmisión regular sin violencia del P. E.", los dirigentes de la Sociedad Rural se congratulaban de que "nuestros progresos nos sorprenden a nosotros mismos".[137] Es significativo que Pastor Senillosa también compartiese este humor que mezclaba resignación y optimismo. A comienzos de 1887, señalaba que el tiempo que le tocaba vivir era malo para actuar en política, pero bueno para hacer negocios: "La mejor política hoy es no mezclarse en nada, ocuparse de los negocios y dejar que los ladrones llenen sus bolsillos, escoltados por los remingtons".[138] Durante la década de 1880, entonces, los empresarios rurales se beneficiaban de un contexto muy favorable para la actividad empresarial, que en aspectos muy sustanciales era garantizado por una elite gobernante cuya legitimidad y acciones muchos de ellos preferían criticar.

En síntesis, en los años ochenta, los terratenientes, así como la Argentina toda, ingresaban en una nueva era. Una enorme distancia, que no se medía sólo en años, separaba la década de 1860 de la de 1880. La expansión territorial y la consolidación del estado habían asegurado un lugar muy central para los mayores propietarios y para la gran estancia ganadera en la economía nacional. En 1885, ese hombre perceptivo que fue José María Jurado ya había advertido que los principales problemas que los empresarios rurales habían enfrentado en el pasado se habían poco menos

que desvanecido: "Las grandes cuestiones sociales y administrativas, indios, servicio de la Guardia Nacional, legislación agraria que eran problemas a resolver en otro tiempo, son problemas resueltos en la actualidad".[139] Jurado prefería no interrogarse demasiado sobre cómo se habían solucionado. Sin embargo, era claro incluso para él que, contra lo que habían sido los presupuestos de los terratenientes modernizadores nucleados en la Sociedad Rural, la acción colectiva de los estancieros había contribuido poco a dar nacimiento a un orden de cosas "sociales y administrativas" que les era extremadamente favorable. Más bien, el actor central de ese proceso había sido la coalición política liderada por Roca, que impulsó el programa de reforzamiento de la autoridad central, gracias al amplio sustento que encontró en el interior del país y en el propio aparato estatal. El malestar con el que los terratenientes de Buenos Aires asistieron a la implantación de este nuevo mundo político nunca desapareció del todo en los años posteriores a 1880. Pero los empresarios rurales pronto advirtieron que una relación más productiva entre terratenientes y estado comenzaba a definirse. Las pruebas de su efectividad estaban a la vista: los derechos de propiedad se habían consolidado, se había aplastado a los indígenas, se habían incorporado nuevas tierras a la producción, ferrocarriles y telégrafos cubrían cada vez más densamente el territorio.

Para los ruralistas, la afirmación de este nuevo orden significaba que muchos de los objetivos que los habían lanzado a unirse en 1866 habían perdido relevancia. Por otra parte, las nuevas oportunidades para acumular capital en el agro abiertas en la década de 1880 hacían que el programa que llamaba a los terratenientes a desempeñar un papel como líderes políticos y sociales de la campaña apareciese menos urgente y menos atractivo que dos décadas antes. No sorprende, entonces, que en la primera mitad de la década de 1880, la Sociedad Rural contara con menos de 400 socios, muchos de los cuales, por cierto, eran particularmente pasivos. Todavía entonces, los ruralistas deploraban el hecho de que la disposición para ejercer roles de liderazgo, que habían venido reclamando todos esos años, no hubiese ganado la partida contra las actitudes más rutinarias y conservadoras de la mayor parte de los terratenientes. Sin embargo, un cambio de esta situación, que retrospectivamente sorprende por su profundidad y rapidez, estaba a la vuelta de la esquina. Analizar cómo y por qué, en las décadas del cambio de siglo, los hacendados de Buenos Aires se convirtieron en un grupo de productores más modernos y más conscientes de sí mismos, así como más orgullosos de sus raíces rurales –lo más parecido a una clase terrateniente que alguna vez tuvo la Argentina– es el tema del capítulo que sigue.

2. La construcción de una nueva clase terrateniente

La llegada de Roca a la presidencia señala la emergencia de un estado más poderoso y más autónomo de la sociedad civil y, al mismo tiempo, mejor preparado para favorecer la acumulación de capital. Durante su administración, el nuevo mandatario puso los recursos del estado que presidía al servicio de la expansión de la economía rural y de la consolidación de un marco institucional que asegurara mejores condiciones y mayores incentivos para el desarrollo de la actividad empresarial. La así llamada Conquista del Desierto y la activa política de expansión del capital social básico que dominó a la década de 1880 ayudaron a impulsar una veloz transformación de la actividad rural. En la provincia de Buenos Aires, corazón de la economía agraria argentina, la ganadería estuvo a la vanguardia de este proceso. Modernas técnicas agrícolas, que en esos años se volvieron más accesibles y menos costosas, hicieron que la rústica cultura ganadera pampeana acelerara su transformación. La década de 1880 asistió a un proceso de innovación técnica y especialización productiva cuya profundidad y extensión no tenía precedentes.

Estos cambios hunden sus raíces en décadas anteriores. Al calor de la expansión ovina del tercer cuarto del siglo XIX, se habían generado condiciones que prepararían los progresos posteriores. Como hemos señalado en el capítulo anterior, hacia los años sesenta comenzó a percibirse la emergencia de un sentimiento de identidad colectiva entre un pequeño grupo de propietarios territoriales que se encontraban a la vanguardia del proceso de mejoramiento en el agro. Fue durante la década de 1880 que este nuevo espíritu ganó adeptos, y cada vez más estancieros se sumaron a las filas de los modernos empresarios rurales. Gracias a los progresos tecnológicos de la ganadería, el pesimismo que esta actividad solía concitar dio lugar a una muy extendida vena optimista. En los años ochenta, repetidamente se señaló que la ganadería estaba superando su pasado bárbaro, y que las nuevas condiciones en las que se desenvolvía la actividad rural invitaban como nunca antes a la práctica de la innovación empresarial.

Estos cambios favorecieron, en primer lugar, a los mayores propietarios. Los grandes empresarios modernizadores fueron repetidamente celebrados como los constructores de una ganadería en veloz transformación que para fines de la década de 1880 era habitualmente descripta como una actividad moderna, y que para el cambio de siglo terminaría por conformar uno de los sistemas ganaderos más eficientes del mundo. En esos años, además, la elite económica se definió más plenamente como un empresariado rural, y concentró cada vez más sus activos e intereses en este sector. Como veremos en ese capítulo, este proceso creó condiciones para la emergencia de una elite terrateniente no sólo más opulenta, sino también más comprometida con la suerte del sector rural, a la vez que más moderna y progresista. La riqueza y el poder alcanzados por esta nueva y poderosa elite, y su capacidad para aparecer como económicamente dinámica y socialmente prestigiosa, la colocaron en el centro de la clase alta por muchas décadas.

LAS TRANSFORMACIONES DE LA GANADERÍA HACIA LA DÉCADA DE 1880

En 1881, el gobierno de la provincia de Buenos Aires comisionó a José Hernández para que viajara a Australia con el fin de redactar un informe sobre los sistemas agrarios de esta colonia británica, que entonces eran considerados como más avanzados que los vigentes en el Río de la Plata. Este proyecto tenía un fin eminentemente práctico, ya que el análisis de la experiencia australiana debía servir de base para la redacción de un manual capaz de satisfacer las necesidades de asistencia técnica de los productores de la provincia. El autor del *Martín Fierro* rechazó la propuesta de desplazarse hasta un lugar tan lejano, y en cambio se ofreció para dar cuenta de sus saberes sobre el negocio ganadero en un *Tratado completo de la planeación y manejo de un establecimiento de campo,* que dio a la prensa al año siguiente.[1] La comisión rechazada por Hernández recayó sobre dos estancieros de prestigio. Tras dos años de viaje por el Viejo y el Nuevo Mundo, Ricardo Newton y Juan Llerena presentaron un largo informe sobre lo que habían observado en Inglaterra, Australia y los Estados Unidos.[2]

Estos hechos dan testimonio de una nueva actitud del estado hacia la problemática rural, pues ilustran el ingreso pleno de los problemas técnicos de la producción agraria en la agenda de cuestiones que preocupaba a las autoridades. El interés de las elites gobernantes en la mejora de los métodos de producción vino a desplazar una preocupación

anterior por la promoción del cultivo del suelo, la pequeña propiedad y la reforma social de la campaña, visible ya en las autoridades del período colonial tardío, pero que fue primordial para todos los gobiernos de la Argentina independiente, y que alcanzó quizá su punto más alto con la ley de tierras de Avellaneda.[3] Durante los años ochenta, esta tradición perdió gran parte de su vigencia, pues el gobierno giró su atención desde los proyectos de transformación social hacia los de cambio económico. La concentración de las políticas públicas en un arco más reducido de cuestiones, centradas en los problemas económicos y técnicos de la producción, vino así a clausurar una larga y poco exitosa historia de proyectos de reforma rural impulsados por el estado. Hasta cierto punto, ello no era más que un ejemplo de lo que entonces se llamaba el paso de la política a la administración, que presidió la política más general del nuevo elenco gobernante.

Este giro era un fenómeno de escala continental, visible por ejemplo en el programa de orden y progreso de la Regeneración colombiana y en el lema "más administración y menos política" del México de Porfirio Díaz. Al igual que en este último país, en la Argentina de Roca el gobierno también impulsó un programa con acusados rasgos de desarrollismo autoritario. Como no podía ser de otra manera, ciertos elementos específicos singularizan el caso argentino. Así, por ejemplo, el novedoso interés del estado en los aspectos técnicos y económicos de la producción, a los que hicimos referencia en el párrafo anterior, debe ser contextualizado en el marco de las transformaciones rurales que entonces tomaban cuerpo, y del mundo de representaciones que las reflejaba y estimulaba.

A fines de la década de 1870 y comienzos de la década de 1880, el proceso de transformación económico se aceleró. En esos años, grandes extensiones de tierra arrancadas al indio se volcaban hacia el mercado y quedaban a disposición de la ganadería; los ferrocarriles se expandían, y el capital ingresaba al sector rural en cantidades crecientes. Ello desató poderosas fuerzas de cambio. Como Godofredo Daireaux observaría en 1908, con la perspectiva que le otorgaban tres décadas de acelerada transformación agraria, "el año 1878 marca el principio de una era de evolución extraordinaria en la estancia argentina".[4] No todos los observadores enfatizaron de igual modo que Daireaux la importancia que el inicio de la gran campaña de exterminación de los indígenas había tenido para la actividad empresarial. Sin embargo, los propios contemporáneos no tardaron en advertir la profundidad de los cambios entonces en marcha, así como la creciente importancia que adquiría la mejora técnica en la producción rural. Es por ello que la Sociedad Rural, que

se proponía incitarlos, advertía en 1879 que "la época de los negocios simples o primitivos ha pasado ya. La más simple, la más primitiva de todas las industrias, la pastoril y ganadera, ya hoy entre nosotros mismos, que muy poco o nada tenemos de *yankee* ha comenzado visiblemente su evolución transformista".[5]

La Sociedad Rural estaba en lo cierto cuando afirmaba que la ganadería se encontraba en los prolegómenos de una gran transformación. Durante los años ochenta, la inversión en el sector ganadero se intensificó. Las construcciones de ladrillos, y ya no de adobe, se hicieron más habituales, tanto en los cascos de estancia como en los puestos y demás construcciones. En algunos casos, ello coincidió con la desaparición de la amenaza indígena. En la estancia fronteriza de los Vitón, en Azul, la casa de adobe fue reemplazada por otra construcción de catorce habitaciones en 1880.[6] Durante esos años entraron al mercado nuevos implementos de trabajo, entre los que se cuentan esquiladoras mecánicas más sofisticadas y bombas para extraer agua del subsuelo. Las bombas hidráulicas impulsadas por molinos de viento fueron introducidas por primera vez al país por Miguel Lanús en 1880.[7]

Estos artefactos, junto con sus característicos tanques, ayudaron a los productores a regularizar la provisión de agua para los animales y a enfrentar mejor las temibles sequías, volviendo a la ganadería más independiente de los caprichos de la naturaleza. La revista *La Agricultura* afirmaba que para mediados de la década de 1890 su uso se había vuelto corriente en la campaña.[8]

"Entre las grandes reformas introducidas de algunos años a esta parte en los establecimientos de campo, la de la generalización de los cercados es tal vez la que mayores ventajas ha reportado", informaba acertadamente Alfredo Birabén en 1885.[9] Todavía a fines de la década de 1870, la cría a campo abierto era la norma, a punto tal que ni siquiera los mayores hacendados alambraban sus propiedades.[10] Caro y de uso muy limitado todavía en 1875, el cerco de alambre se expandió con rapidez a comienzos de la década de 1880. Nicolás y Juan Anchorena, por ejemplo, que se contaban entre los mayores propietarios de la pampa, comenzaron a alambrar sus propiedades a fines de la década de 1870 y comienzos de la siguiente.[11] De acuerdo con los datos de Prudencio Mendoza, en 1876 se introdujeron 5,5 millones de kilos de alambre para cercos; la importación subió a 13,5 en 1880 y a 40 en 1889.[12] A lo largo de estos años, también aparecieron alambres de mejor calidad, más flexibles y de menor peso, lo que permitió aumentar el área cercada por kilo de producto.

Gracias al alambrado, la pampa tuvo por primera vez un sistema relativamente económico y eficiente para fijar con precisión el perímetro de una propiedad, e impedir el paso de extraños y transeúntes, lo que contribuía a consolidar y reforzar los derechos de propiedad. También permitió contener a los animales, y así aseguraba la defensa de las áreas cultivadas. Al volver más sencilla la protección de árboles y plantas, el alambrado contribuyó de modo decisivo a cambiar el paisaje pampeano. Hasta entonces, las plantaciones se habían poco menos que limitado a los alrededores de los puestos y cascos de las estancias y demás poblaciones, donde podían ser protegidos de los animales mayores. Gracias al alambrado, en esos años la agricultura encontró mejores condiciones para expandirse. Al mismo tiempo, un conjunto de especies exóticas, entre las que por su resistencia a los insectos y su veloz crecimiento se destacaba el eucalipto, se convirtieron en los típicos proveedores de sombra y reparo en un medio hasta entonces muy pobre en árboles.

Más importante, el cercamiento de los campos ayudó a transformar a la ganadería. En primer lugar, porque redujo la necesidad de trabajadores, lo cual hizo más sencillo el manejo del ganado, y contribuyó además a amansar a las haciendas. En segundo lugar, porque facilitó el cruzamiento controlado del ganado, puesto que gracias al alambrado los animales de distinta calidad podían ser aislados o reunidos a muy bajo costo. Como resultado, la mezcla indiscriminada de ganados, que por décadas había constituido un serio obstáculo a la mejora de las razas, podía superarse sin mayor dificultad. La eliminación del sistema de cría a campo abierto permitió un mejor aprovechamiento de todo el terreno de una propiedad, y con ello la capacidad de carga de la tierra se incrementó. Gracias al cercado y el énfasis en la mejora del ganado que la acompañaba, las estancias, hasta entonces a veces no más que una colección de puestos muy independientes entre sí, adoptaron formas de gestión más centralizadas.[13] Por todos estos motivos, un observador informaba en 1882 que "el alambrado es tan primordial en esta época, como anteriormente el buen campo. El alambrado importa seguridad, economía de brazos, amanzamiento [sic] de las haciendas, y tranquilidad para el animal cuyo engorde viene fácilmente".[14]

Mayor productividad del trabajo, mejores técnicas de manejo del rodeo, construcciones más sólidas y confortables, así como máquinas y herramientas más sofisticadas, caracterizan a la estancia alambrada y más centralizada de los años ochenta.[15] Esa década asistió también al nacimiento de la moderna industria de exportación de carne (un desarrollo que, a su vez, aceleraría otros cambios productivos). Durante la década de 1870, los barcos de vapor y de casco de acero entraron a servir las ru-

tas del Atlántico Sur, reduciendo los costos de transporte y tornando el servicio más económico, seguro y previsible. Ello estimuló diversos proyectos para enviar carne enfriada a Europa. El primer intento serio de crear un sistema que preservase la carne en el largo viaje a través de los trópicos se dio en 1876, cuando el buque *Le Frigorifique* zarpó del puerto de Ruan hacia Buenos Aires, llevando un cargamento de este producto en sus bodegas refrigeradas. En 1883, los progresos en las técnicas de refrigeración hicieron posible la inauguración de la primera planta frigorífica en Buenos Aires. En los siguientes dos años se erigieron otros dos establecimientos de faenado y procesamiento de animales, que pronto comenzaron a exportar al Reino Unido.[16]

Esta etapa inicial del desarrollo de la industria frigorífica fue liderada por la carne ovina, pues era más fácil de congelar y procesar que la vacuna y además se veía menos afectada en cuanto a presentación, sabor y calidad que la de los animales mayores. Tradicionalmente, los ovinos en la pampa habían sido criados con vistas a la obtención de lana, pero ahora también debía ponerse especial énfasis en el tamaño de la res, en el gusto de su carne y en la velocidad con la que incorporaba peso. En consecuencia, los criadores se lanzaron a adaptar sus majadas a la demanda de las empresas frigoríficas (que desde ese momento pasaron a desempeñar un papel decisivo como orientadoras de las tendencias predominantes en el mercado de carnes). Para ello, desplazaron sus compras de reproductores desde el mercado de Europa continental hacia el británico. Desde entonces, los ovinos de raza Lincoln, mejor adaptados que los merino a producir tanto carne como lana, fueron introducidos en grandes cantidades, por lo que el proceso de cruzamiento alcanzó una velocidad que no reconocía precedentes. El cambio de las razas merino a las multipropósito fue sorprendentemente rápido, y se aceleró a fines de la década de 1880, cuando los frigoríficos comenzaron a reclamar una parte sustancial de la oferta ovina. En 1893, el ganadero y experto agrícola Herbert Gibson señalaba con sorpresa y admiración que "los años de 1888 a 1893 son testigos de la conversión de 50 000 000 de ovejas de un tipo al otro –una conversión probablemente sin paralelos en los anales de la cría lanar–".[17] Para comienzos de la década de 1890, en el mercado de Londres la carne de carnero congelado argentina alcanzaba precios superiores a la australiana y se acercaba a los obtenidos por la proveniente de Nueva Zelanda, que siempre dominó la franja superior del mercado.[18]

La ganadería vacuna también experimentó un proceso de mejora. Antes de que la exportación de ganado en pie y congelado se volviera rentable (hacia mediados de la década de 1890 y comienzos de la de 1900,

respectivamente), un mercado doméstico en expansión y más exigente se convirtió en su principal estímulo por el lado de la demanda. La cría de ganado refinado para el mercado de Buenos Aires, que entonces consumía unas 600 000 reses al año, se volvió un negocio muy atractivo.[19] La mejora del ganado vacuno fue más tardía que la del ovino, pero los cambios organizativos de la estancia en la década de 1880 también la estimularon. Entre 1881 y 1888, el número de animales cruzados con razas extranjeras en la provincia de Buenos Aires creció nueve veces, mientras que el ganado criollo apenas aumentó un 50%.[20] En esos años, muchos estancieros se vieron tentados a desplazar de sus mejores tierras (en especial las bien comunicadas por la red ferroviaria o las localizadas cerca de la ciudad) a los animales criollos que todavía pastaban en ellas, y a reemplazarlos con vacunos cruzados con reproductores importados, que producían más y mejor carne.[21] La expansión de la frontera hacia el sur y el oeste permitió el traslado del ganado criollo hacia las nuevas tierras arrancadas al indio, donde solía hacer las veces de "arado vivo", favoreciendo la eliminación de los duros pastos naturales de la pampa, y preparando el suelo para la posterior llegada de las ovejas. En las tierras cercadas y más próximas a Buenos Aires, al lado de los rodeos de ovejas refinadas, los vacunos mejorados eran criados y engordados para servir las necesidades de la ciudad. Poderosos estancieros tomaron participación activa en este negocio, conocido con el nombre de "invernada".[22] Esta actividad (como más en general toda la cría de ganado) también resultaba atractiva para estancieros de recursos más modestos o para personas de la ciudad sin mayor experiencia en la actividad, pero con capital (o conexiones para conseguirlo). A comienzos de la década de 1880, Hipólito Yrigoyen, el futuro líder del Partido Radical, se contaba entre ellos. Su designación como diputado oficialista y sus contactos en el mundo político le abrieron el camino para que el Banco de la Provincia le diera un crédito con el que inició su actividad como invernador.[23]

La creciente importancia atribuida al refinamiento acrecentó la importancia de las cabañas. En décadas anteriores, "la falta de interés [en el mejoramiento del ganado] se advierte en el hecho de que por un largo tiempo los ganaderos más progresistas habían tenido dificultades en vender los animales que criaban".[24] En un período tan tardío como el que va de 1871 a 1877, las importaciones de ganado proveniente de Gran Bretaña, que siempre conformó la principal fuente de vacunos de raza, apenas alcanzaron a los 113 ejemplares.[25] En 1879, la *Revista de Ganadería* todavía se preguntaba si las cabañas eran lo suficientemente rentables como para sobrevivir sin ayuda oficial, "debido a la limitada escala en

que se hacen las operaciones".[26] Pero para entonces la cría y venta de animales de raza se tornaba rentable, en gran medida por el aumento de la demanda de sus productos. Con el fin de dar respuesta al incremento de los pedidos provenientes de los ganaderos, varias cabañas creadas en décadas anteriores para servir a las necesidades internas de cada empresa empezaron a expandirse y a colocar regularmente sus productos en el mercado. La cabaña El Retiro, de Narciso Vivot, creada en 1864, comenzó a vender sus productos en 1878; El Venado, de los hermanos Senillosa, en 1879.[27] Y en esos años varios estancieros sentaron las bases de sus propias cabañas: Bernardo de Irigoyen en 1880, Estanislao Zeballos en 1883, Gregorio Villafañe en 1885, Jorge Bell en 1886.[28]

Los ganaderos también invirtieron enormes sumas en animales importados, adquiridos por medio de agentes o directamente por ellos mismos en las principales cabañas europeas. En 1883, Zeballos compró ovinos que habían obtenido primeros premios en la exposición de la Real Sociedad de Agricultura de Inglaterra; seis años más tarde, Felipe Senillosa adquirió toros Shorthorn premiados en la Exposición de París.[29] Entre los mayores compradores estaba Domingo Frías, que fue el primer estanciero en llevar un detallado libro de registros genealógicos (un Herd Book) en su cabaña Santa Catalina. A mediados de la década de 1880, Frías importó 300 ejemplares de raza en unos pocos años, una cifra que excedía las importaciones totales realizadas hasta 1878.[30] Y si bien es cierto que la mayoría de los estancieros no realizó desembolsos tan significativos como Zeballos o Frías, la práctica de comprar ejemplares importados se volvió habitual. De hecho, para 1886 los estancieros argentinos se habían convertido en los mayores compradores de Shorthorn británicos en todo el mundo.[31] No es casual que uno de los centros de compras más pretenciosos de la Argentina contemporánea, el Patio Bullrich, ocupe lo que antes fuera la sede de la principal casa importadora de ganado de raza, que alcanzó gran importancia precisamente en este período.

El continuo alza del precio de la tierra es quizás el mejor indicador de las oportunidades para la acumulación de capital abiertas en el sector rural, así como de la confianza con que los empresarios rurales se lanzaron a aprovecharlas. A pesar de que la "Conquista del Desierto" puso en el mercado una gran cantidad de tierra nueva, que la veloz expansión de la red de transportes pronto habría de incorporar para la producción ganadera, los precios del suelo no cayeron sino que, por el contrario, aumentaron a lo largo de toda la década de 1880. De acuerdo con Gibson, "tierra de buena calidad, situada en la Provincia de Buenos Aires y ubicada convenientemente cerca de un ferrocarril, cambió de manos a alrede-

dor de 12 chelines por acre en 1882, 30 chelines en 1886, 45 chelines en 1889".[32] En esos últimos años de la década, el precio del suelo siguió subiendo, ahora impulsado por una fiebre especulativa que terminó en la crisis a la que más adelante nos referiremos. Es importante recordar, más allá de lo sucedido a fines de los años ochenta, que fueron las optimistas perspectivas las que impulsaron la suba de los valores inmobiliarios. Esta se tradujo en un aumento de los impuestos territoriales. Sin embargo, y a pesar de protestas breves y esporádicas de parte de algunos voceros de los propietarios rurales (como los que hemos mencionado en el capítulo anterior), la disposición de los estancieros a pagar mayores impuestos sugiere tanto su optimismo como su solvencia.[33]

Como advirtió bien José María Jurado en 1886, el aumento de los precios de la tierra era consecuencia no sólo de la derrota de los indígenas y de la expansión del ferrocarril, sino también del alza de la rentabilidad agraria, hecha posible por los cambios tecnológicos y organizativos de la estancia reformada.[34] Y es que para producir ganado ovino y vacuno de mejor calidad, las estancias se estaban transformando en unidades de producción dotadas de un sistema de gestión más centralizado, del que el alambrado era un elemento fundamental. De forma simultánea, el fuerte incremento de los saldos migratorios en la década de 1880 ayudó a los empresarios rurales a limitar las constricciones que les imponía la escasez de trabajadores, y gracias a ello reforzaron su poder de negociación. La inmigración neta, que pasó de registrar 90 000 ingresos en la década de 1870 a 650 000 en la de 1880, erosionó la capacidad de negociación de las clases subalternas rurales.[35] Como consecuencia, las distintas formas de aparcería y arrendamiento que en el pasado habían favorecido a los trabajadores, constituyéndose no pocas veces en los escalones iniciales de una carrera que podía llevar incluso hasta el acceso a la gran propiedad, se redefinieron sensiblemente, siempre a favor de los dueños del suelo.[36]

El efecto acumulado de todos estos cambios fue consolidar a las grandes estancias como las unidades de producción más eficientes, modernas y rentables, y a los estancieros como los principales protagonistas de esta nueva fase de desarrollo agrario. Como el senador Baldés predijo en 1878, cuando afirmó que "el tiempo en que los pobres poblaban las estancias se acabó", los grandes productores estaban mejor preparados que los pequeños para sacar partido de las nuevas y más exigentes condiciones de producción.[37] Los ganaderos y agricultores menores, que habían logrado mantener un elevado grado de independencia desde los tiempos coloniales, que la expansión de la gran estancia ganadera

en las décadas que sucedieron a la independencia estuvo lejos de anular, se encontraban ahora en retroceso. En 1891, al volver su mirada sobre las dos décadas anteriores, Charles Leonardi enfatizaba que tanto los momentos de auge como los de crisis que había atravesado el sector rural habían tenido el mismo efecto en cuanto a la concentración del suelo: ambos habían fortalecido la posición de los grandes terratenientes. "Durante los últimos 20 años se ha concentrado en grande escala", señalaba sin hesitación.[38] Una rápida comparación de los mapas catastrales confeccionados en las décadas de 1860 y de 1890 indica que esta afirmación estaba lejos de ser cierta (excepto en las tierras de frontera recientemente incorporadas, donde siempre había predominado un patrón altamente concentrado de tenencia del suelo), y que la aparición de nuevas propiedades y nuevos propietarios, en gran medida producto de la partición hereditaria, seguía su avance. Pero la seguridad con la que Leonardi sacaba esta conclusión da cuenta de un clima de opinión generalizado, uno de cuyos presupuestos era que se había iniciado el tiempo de los grandes empresarios. Y también que había llegado a su fin la etapa en la que los pequeños productores y las técnicas primitivas de producción, al alcance de todos, singularizaban el paisaje de la ganadería pampeana.

El incremento del precio de la tierra y la mayor seguridad jurídica de la propiedad del suelo eran una amenaza para los ocupantes sin título, y más en general para los pequeños productores, sobre todo para aquellos que arrendaban. En esta nueva era, mayores inversiones de capital se volvían necesarias para alcanzar estándares de producción más exigentes. Las economías de escala de la gran propiedad, la mayor facilidad relativa para acceder al crédito por parte de los productores de mayor tamaño, en fin, la mayor capacidad para invertir e innovar que caracterizaba a los empresarios más poderosos estaba abriendo una brecha entre estos y los productores de menor tamaño que era más profunda y más visible que en cualquier momento del pasado. Refiriéndose indirectamente a este problema, en 1882 el *Periódico del Estanciero* señalaba que "una gran parte de nuestros hacendados se amedrentan de los fuertes desembolsos que, en la adquisición de buenos reproductores [...] tienen que hacer".[39] Y algo similar puede decirse sobre el alambrado o el molino, o para el caso, sobre todos los componentes del nuevo paquete tecnológico de la ganadería pampeana, pues todos ellos tuvieron a los grandes terratenientes entre sus principales impulsores.[40] Como consecuencia, para la década de 1880 los grandes estancieros aparecían claramente a la vanguardia del conjunto de productores,

impelidos por su superior capacidad y su más clara vocación para invertir en la mejora de sus establecimientos.

Los procesos de cambio que tenían por centro a la economía ganadera afectaban también otros aspectos de la vida rural. Para Jurado, ello era especialmente notable en la transformación de los pueblos de la campaña en "verdaderas ciudades" y en la creciente seguridad y confort de las propias estancias.[41] La confianza con que los terratenientes reflexionaron sobre la transformación de la campaña en esa década merece ser resaltada. Los temores que algunos estancieros habían expresado algunos años antes en torno a si la economía de la estancia podía seguir el ritmo de expansión de la frontera habían desaparecido por completo a mediados de los años ochenta. Jurado, por ejemplo, advirtió que sus inquietudes de algunos años atrás no tenían fundamento. El fin de la leva, que sucedió a la eliminación de los indígenas, no les dio a las clases subalternas de la frontera la oportunidad de escapar al trabajo asalariado. Los temores de este gran propietario de la frontera (que recuerdan a los de Edward Wakefield en Australia) de que una tierra de nadie, poblada de "vagos y malentretenidos", podía emerger en las tierras recientemente arrebatadas al dominio indígena, también resultaron incorrectos.[42]

Por algún tiempo, los ocupantes sin título fueron habituales en las nuevas tierras del oeste y el sur. En la estancia del presidente Roca, cerca de Guaminí, por ejemplo, varios ocupantes hacían pastar sus rodeos, en parte porque esta todavía no había sido alambrada en toda su extensión. En 1889, luego de que La Larga contase con alambrado perimetral, algunos ocupantes todavía vivían en tierras públicas vecinas a la estancia.[43] Fenómenos de este tipo no inquietaron a Roca, ni a la Sociedad Rural, ni (presumiblemente) a la mayoría de los estancieros. El creciente poder del estado, la veloz transferencia de tierras públicas al dominio privado y la difusión del alambrado cercenaban todas las formas de acceder a la tierra que no estuviesen sancionadas por el derecho de propiedad. Con grandes oleadas de inmigrantes volcándose sobre el país, con derechos de propiedad mejor asegurados, y con terratenientes que podían ejercer un control relativamente estricto de las nuevas tierras, la escasez de fuerza de trabajo y la indisciplina laboral dejaron de ser problemas relevantes para los empleadores. En este contexto, la posición económica de los grandes estancieros se volvió más segura y sólida que en cualquier momento del pasado.

Es por ello que la década de 1880 representa un punto de inflexión en la historia de la ganadería en la pampa, en especial para las grandes estancias, que entonces se transformaban a una velocidad sin preceden-

tes. Por los mismos motivos, en los años ochenta un número creciente de poderosos estancieros que hasta el día anterior formaban parte de aquella legión que había sido criticada por su desidia y atraso, comenzó a ser percibida como un agente positivo en el desarrollo agrario. El hecho de que durante este período de veloz transformación ganadera la pampa permaneciera libre de conflictos sociales debe destacarse. En Uruguay, donde no existía frontera abierta y prevalecía una ganadería más tradicional, el alambramiento se convirtió en un instrumento de pauperización y expulsión de la población rural, que contribuyó a sembrar las semillas de inestabilidad que alimentaron las guerras civiles orientales hasta bien entrado el nuevo siglo.[44] En la pampa argentina, se advierte un cuadro de situación muy distinto, caracterizado por la paz social. Efectivamente, en esos años terminó de forjarse una fuerza de trabajo más estable y disciplinada (proceso al que la expansión agrícola, aunque todavía modesta en la provincia de Buenos Aires, también colaboró). Ello se reflejó con rapidez en la literatura costumbrista del período, por ejemplo en obras como *Calandria* (1896) de Martiniano Leguizamón, que describe el cambio que "hizo del gaucho alzado y pendenciero un buen criollo trabajador".[45]

La ausencia de conflictos sociales abiertos seguramente reforzó la visión positiva de la modernización de la estancia. Esta se advierte con claridad, por ejemplo, en los juicios de los funcionarios del Departamento de Agricultura. Durante los años setenta, el agrónomo español Manuel Vázquez de la Morera había sido un duro crítico de la falta de vocación modernizante de los terratenientes. Pero en la década siguiente este agrónomo, que luego alcanzó a dirigir esta repartición, transformó sus acusaciones en elogios. En varios artículos escritos en 1886, describió las cabañas de algunos de los principales empresarios rurales del país, señalando que la provincia de Buenos Aires podía presentar "una nómina de ilustres criadores que haría honor a cualquier nación de las que se tienen por más adelantadas".[46] Vázquez de la Morera consideraba que "acaudalados e ilustrados criadores" como Pereyra, Casares, Guerrero, Quirno, Chas, Frías, Saavedra, Irigoyen, Senillosa, Bosch, del Carril, Newton, Cambacèrés, Lozano, Guerrico, Zeballos "y tantos otros que podríamos citar, constituyen la lúcida y brillante falange que se ha lanzado de lleno a la tarea de levantar la ganadería argentina a una altura tal que no tenga que envidiar a ninguna nación del mundo".[47]

La prensa periódica fue un observador particularmente atento de este cambio en la imagen de los grandes propietarios, a quienes tampoco ahorró elogios. En 1882 y comienzos de 1883, *La Prensa* publicó varios

artículos celebrando los progresos de la ganadería, e instando a los estancieros a seguir por ese camino. La Sociedad Rural vio estos artículos como parte de "un cambio que en pro de nuestros intereses rurales, se está operando en lo más serio e ilustrado de la prensa diaria del país".[48] En 1886, este diario, quizás el de mayor importancia del país, dio a conocer un artículo en el que señalaba que "es maravilloso el movimiento que se manifestó en estos últimos años para dar incremento a todo lo que puede acrecentar o mejorar la cría. Se va propagando el estudio y la cultura teórica y práctica de los caracteres y cualidades de las razas".[49] Los elogios a los estancieros no provenían sólo de *La Prensa,* y en rigor todos los grandes periódicos tenían una visión similar. *La Nación,* por ejemplo, observaba a comienzos de 1886 que "hanse convencido nuestros hacendados de la necesidad y de las ventajas del cruzamiento y de la aplicación de ciertos métodos modernos a la cría y cuidado de las especies. Hoy, la reproducción de los ganados ya no se deja librada a la sola acción de la naturaleza, como sucedía antes [...] El arte del criador, del hacendado, es un arte nuevo".[50] Y en la misma vena *El Nacional* señalaba que "han pasado los tiempos del pastoreo rudimentario".[51]

Durante las décadas de 1860 y 1870, todos los intentos de establecer escuelas agrícolas habían terminado en el fracaso. En la década de 1880, la complejidad creciente de la gestión de una gran empresa agraria, y la mayor conciencia de la importancia de la mejora de los métodos agrícolas, crearon condiciones propicias para el éxito de un proyecto de estas características. En 1883 se inauguró el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria. A diferencia de intentos previos de crear escuelas de agricultura, en general orientados a instruir a miembros de las clases subalternas, en este caso se trataba de una institución de educación superior. Pocos años más tarde, los primeros agrónomos, provenientes de los sectores medios y altos de la sociedad, desarrollaban su labor en las estancias argentinas. Para entonces, los estudios universitarios por primera vez eran considerados necesarios para dirigir exitosamente una gran empresa agraria. Felipe Senillosa, por ejemplo, les recordaba a sus colegas en 1885 que "muy pronto los hacendados tendrán que ser, si no agrónomos, por lo menos haber cursado los estudios preparatorios y haber practicado en establecimientos modelos".[52] Siguiendo el ejemplo de Bernardo de Irigoyen, que había contratado los servicios de un agrónomo para administrar la cabaña que había establecido en 1880, Senillosa también convocó a un profesional para dirigir su estancia El Venado. El elegido fue Pedro Pagés, uno de los primeros graduados del Instituto. Pagés trabajó para Senillosa durante largos años, y luego de in-

dependizarse adquirió merecida fama como cabañero, e incluso alcanzó la presidencia de la Sociedad Rural en la década de 1920. En 1890, junto con dos jóvenes colegas –Carlos Girola y Enrique Nelson–, Pagés abrió la primera firma que ofrecía servicios de consultoría sobre temas rurales.[53]

Este nuevo interés en la gestión de una empresa agraria creó un clima propicio para la aparición de una prensa especializada.[54] Nuevos periódicos como la *Revista de Ganadería* de Huss y Shaw, la *Revista Argentina de Ganadería y Agricultura, El Noticiero Agrícola* y el *Periódico del Estanciero* vieron la luz a fines de la década de 1870 y comienzos de la siguiente. Los manuales también fueron una novedad de ese momento. El de José Hernández, de 1882, se contó entre los primeros en salir de la imprenta.

Si bien notoriamente deficiente como guía para productores deseosos de obtener asesoramiento, el *Tratado* fue un hito por el modo en que representaba la actividad productiva. En su *Martín Fierro* (1872), Hernández describió la campaña de Buenos Aires desde una perspectiva en la cual faltaba toda referencia a la empresa rural. En ese texto que giraba en torno a las desdichas de un pequeño productor de ganado en tierras arrendadas que debía enfrentar las arbitrariedades de la maquinaria estatal, no había siquiera una mención a la figura del gran estanciero. El enfoque que dominaba su texto de una década más tarde es notoriamente distinto, ya que, como el propio Hernández señalaba al prologarlo, Buenos Aires iba en camino a dar una solución definitiva a los problemas que antes se había ocupado de denunciar. En su visión, la mejora de la ganadería se erigía como la principal tarea a la que la campaña bonaerense debía abocarse. Hernández formulaba estas apreciaciones desde una perspectiva que tomaba distancia de las visiones, muy comunes en décadas anteriores, que enfatizaban el primitivismo de la ganadería y de la campaña. "Una estancia es en nuestra época, en todo rigor, un grande establecimiento industrial", afirmaba Hernández, rechazando toda idea de superioridad de la agricultura o la manufactura sobre la ganadería.[55] Para el autor del *Martín Fierro*, "hoy la industria pastoril representa también civilización, empleo de métodos científicos, inteligencia esmerada, y en nuestra época el estado de cultura industrial de una sociedad se prueba lo mismo por una obra de arte, por una máquina, por un tejido o por un vellón".[56]

El tosco manual de Hernández pronto cayó en el olvido. Pero las demandas de asistencia técnica creadas por las transformaciones en curso invitaron a otros autores a probar suerte. En 1885, se publicó un manual que llevaba por título *Estudios prácticos sobre la cría y refinamiento del*

ganado lanar, escrito por un conocido criador de ovejas llamado Juan Harrat. Este trabajo había permanecido inédito por décadas. En 1885, Miguel Lima dio a conocer su *El hacendado del porvenir,* un trabajo que dedicó al presidente Roca en muestra de gratitud hacia el estadista que había traído la paz y el orden que los negocios rurales tanto necesitaban. Estos trabajos fueron seguidos por el manual de Godofredo Daireaux titulado *La cría de ganado en la pampa* (1886), y por el de Carlos Lemée, aparecido bajo el nombre de *El estanciero argentino* (1887). El tratado de zootecnia de Andrés Sauson también fue publicado, y reimpreso en 1890.[57] El éxito de estas publicaciones no pasó desapercibido. Un comentario de Miguel Lima sugiere bien algunos elementos del nuevo ambiente. En un libro dado a conocer en 1888, este prestigioso estanciero contrastaba la indiferencia que hasta la década de 1870 esperaba a todo libro sobre cuestiones productivas, con el ambiente muy favorable que campeaba en la década siguiente. Este cambio, afirmaba, era sobre todo notable entre los miembros de la elite política. Para Lima,

> Fuera de nuestro círculo no era bien ni de buen tono ocuparse del modo de criar vacas, ovejas y demás animales, ni saber cómo se siembran las papas [...] De cierto tiempo a esta parte, todos leen tratados sobre ganadería, agricultura, etc., etc., en el Club, en la prensa, y en las cámaras, se tratan estas saludables cuestiones con detención, y los diputados y senadores de la Provincia de Buenos Aires se encuentran hoy con sorpresa de ellos mismos, obligados a saber cómo se mata el *acarius,* se siembra en *pelos,* o se ventean los linos, trigos, *cebadas* y avenas.[58]

A comienzos de la década de 1890, Alois Fliess confirmaba las opiniones de Lima: "en las clases elevadas de la sociedad se ha desarrollado en los últimos años una fuerte inclinación á los trabajos rurales y al estudio de la agricultura, ante todo combinándola con la ganadería. Los libreros que he consultado han declarado que toda obra ó publicación que versa sobre agricultura, es inmediatamente vendida".[59]

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ESTANCIEROS

Las transformaciones que hemos descripto en el apartado anterior ofrecieron un nuevo marco para el desarrollo de la actividad empresarial en

el sector rural pampeano, que dio lugar a una profunda metamorfosis de la clase propietaria, y a la aparición de nuevos tipos de empresarios. Para los hombres de negocios del medio siglo que sucedió a la independencia, acostumbrados a desenvolverse en un clima económico plagado de incertidumbres, afectado por guerras civiles, bloqueos comerciales, crisis políticas recurrentes, inestabilidad monetaria y gobiernos escasamente confiables, la diversificación de activos y la dispersión de riesgos tomaron primacía por sobre la apuesta a largo plazo al crecimiento de un rubro particular de actividad. En las décadas que sucedieron al derrocamiento de Rosas, las perspectivas mejoraron, y el estado crecientemente logró imponer su autoridad. Pero este cambio fue lento y nada sereno, y sólo se afirmó definitivamente en la década de 1880. Es en ese momento cuando se advierte con claridad un cambio fundamental en la estrategia económica de los grandes empresarios de la pampa. Esta pasó de estar presidida por una lógica empresarial orientada a minimizar riesgos diversificando las inversiones a otra signada por la profundización de la inversión en aquel rubro de actividad que prometía mayores beneficios. En el último cuarto del siglo XIX y hasta el derrumbe de la economía agraria pampeana en la Depresión de la década de 1930 –esto es, en una era de gran estabilidad y buenas perspectivas de largo plazo– el patrón de inversiones dominante entre los empresarios rurales se caracteriza por la profundización sectorial.

Esta evolución fue impulsada por otras transformaciones que también maduraron en el último cuarto de siglo, y que invitaron a los empresarios a ceder espacios en los circuitos de financiación y comercialización en los que muchos de ellos habían tenido una participación tan destacada en el pasado. En esos años, terminó por consolidarse un sistema bancario y financiero, que fue sin duda el más avanzado de América Latina. Su desarrollo redujo la importancia, y a veces incluso eliminó, los circuitos prebancarios de crédito que habían servido (y explotado) las necesidades de financiación de la producción agraria. La expansión del sistema bancario tomó impulso en la década 1860, pero fue en los años ochenta cuando alcanzó verdadera importancia, en especial en la provisión de crédito a mediano y largo plazo para la producción. En 1880, por ejemplo, el Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires abandonó la cautelosa política crediticia que había mantenido desde su fundación en 1871, y se dio una clara política de expansión, bajando además su tasa de interés del 8 al 6% anual.[60] Un año más tarde, abrió sus puertas la River Plate Trust, Loan and Agency Co. Ltd., la primera casa de origen británico que ofrecía préstamos hipotecarios, cuyos créditos fueron utilizados

de modo privilegiado por estancieros de Buenos Aires y Santa Fe para alambrar y mejorar sus rodeos.[61] Para fines de la década de 1880, operaban en Buenos Aires alrededor de veinte bancos, muchos de los cuales estaban comprometidos con la financiación de la producción agraria, ofreciendo crédito a largo plazo y a tasas sustancialmente más bajas que las vigentes en décadas anteriores.[62]

El otro cambio de relevancia se refiere a la comercialización de la producción. Al mismo tiempo que el crédito se institucionalizaba y se volvía más barato y accesible para los productores, los circuitos de comercialización se tornaban más complejos y especializados. El desarrollo del ferrocarril poco a poco cercenó el campo de los negocios vinculados al transporte interno de mercancías (en el que Ramón Santamarina, uno de los mayores terratenientes del cambio de siglo, había iniciado su fortuna antes de moverse hacia la producción rural). Más importante, la creciente sofisticación de los mercados locales e internacionales, así como el formidable aumento del comercio de exportación, dieron lugar a la aparición de poderosas empresas, en su mayoría de capital extranjero, que alcanzaron una presencia dominante en rubros tales como la consignación y acopio de ganados y frutos del país, la importación de productos manufacturados extranjeros, la exportación de lanas y cueros, y un poco más tarde, de carnes y granos. En el caso de la lana, todavía el principal producto de exportación de la Argentina, el reemplazo de las antiguas y poco especializadas casas de importación y exportación por compradores directos subordinados a los industrializadores europeos se produjo en las décadas de 1870 y 1880. Esta transformación contribuyó "a mejorar la posición de los productores *vis-à-vis* los circuitos de comercialización", lo que beneficiaba en especial a los grandes estancieros que trataban directamente con los agentes de las casas metropolitanas.[63]

Fenómenos similares se observan también para otros productos de exportación, pues todos fueron afectados por la transformación de las redes de comercialización de la producción agraria. En el proceso de especialización del comercio de granos tomaron parte poderosas empresas como Bunge y Born y Dreyfus, que a fines de la década de 1880 ingresaron de lleno en este negocio, desplazando o subordinando las redes de comercialización existentes, hasta crear en pocos años un virtual monopolio del comercio de exportación. Otro tanto puede decirse sobre el comercio de carnes y demás derivados del ganado, desde los años ochenta crecientemente controlado por un puñado de firmas que se ocupaban no sólo de la faena, sino también del transporte y la venta en los mercados de destino. En síntesis, para la década de 1880 el aumen-

to de volumen y la especialización de las transacciones internacionales sentó los rasgos básicos de una estructura de comercialización más compleja y eficiente, ampliamente dominada por unas pocas empresas de capital extranjero, cada una de las cuales tejió en su terreno una densa red que le permitió controlar el grueso de la actividad de comercialización (y en el caso de los granos, en que la presencia de productores más humildes, marginados del circuito de crédito institucional, era grande, ingresar también en la financiación) de la producción agraria.[64]

La consolidación de un sistema institucionalizado de crédito y la transformación de los circuitos de transporte y comercialización de la producción agraria indujeron a los empresarios nativos a modificar sus patrones de inversión. Empresarios como los Senillosa, que habían actuado en el comercio internacional por medio siglo, se retiraron de este terreno para concentrarse en la producción agraria, seguramente porque ya no podían competir con las grandes empresas que empezaban a controlar el mercado. Sólo unos pocos terratenientes, como los Santamarina o los Martínez de Hoz, con sus casas consignatarias, lograron mantener alguna presencia, aunque muy menor, en el ámbito de la circulación, pero limitada al mercado local. E incluso para empresarios como estos, la actividad rural pasó a conformar el corazón de sus emprendimientos. El caso de Ramón Santamarina ilustra esta evolución. Cuando este empresario murió, hacia mediados de la década de 1900, sus 280 000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, junto con sus 150 000 hectáreas en otras provincias, representaban el 82% del valor de sus propios bienes y de los de la firma Santamarina e Hijos; sólo un 13% de su patrimonio estaba compuesto por créditos, acciones y títulos.[65] No todos los empresarios que se volcaron decididamente hacia la tierra fueron tan exitosos como Santamarina, pero es probable que la mayoría de los estancieros, que en el último tercio de siglo se vieron obligados a ceder posiciones en los circuitos de comercialización y financiación, viese este cambio sin mayor dramatismo: la alta rentabilidad y las buenas perspectivas de largo plazo que ofrecía la producción rural seguramente operaron como un incentivo para concentrarse en este terreno.

Los cambios económicos y políticos finiseculares, pues, impulsaron a los grandes empresarios con intereses rurales a girar desde un patrón de inversiones diversificado hacia uno especializado. Puede obtenerse una idea aproximada de la profundidad de esta transformación –que está en la base de la metamorfosis de la elite de negocios en una clase terrateniente–, comparando el patrón de inversiones dominante en la primera mitad del siglo XIX que hemos analizado en el capítulo anterior con el

que caracteriza a los empresarios rurales del último cuarto del siglo XIX y comienzos del XX. Para ello nos referiremos a la composición del patrimonio de 26 grandes propietarios rurales fallecidos entre 1880 y el fin de la Primera Guerra Mundial. Esta muestra incluye a varios de los mayores terratenientes de la pampa. Comprende, por una parte, a descendientes de empresarios de la primera mitad de siglo, que heredaron importantes fortunas, así como una extensa red de relaciones sociales. Entre ellos se cuentan Saturnino y Mariano Unzué, Nicolás Anchorena, Leonardo Pereyra, José Prudencio Guerrico, Benjamín Martínez de Hoz y Félix de Álzaga. Incluye, también, a varios empresarios que hicieron fortuna por sí mismos, como Emilio Bunge, Diego de Alvear, Pedro Luro, Urbano Duhau, Julio Pueyrredón, Tomás Duggan, Julio y Ataliva Roca, y Ramón Santamarina. ¿Qué panorama nos presenta el análisis de estos patrimonios? Rápidamente se advierte que la propiedad constituye la base sobre la cual se fundan, sin excepción, todas estas fortunas. Si bien el peso de la inversión urbana es mayor entre las fortunas más antiguas, la estructura de todas ellas es, a grandes rasgos, muy similar. Para los 26 sujetos en consideración, la inversión en propiedad y empresas rurales supera los tres cuartos del patrimonio, y representa un 76% del total. La inversión en propiedades urbanas y suburbanas alcanza al 16% del total. La inversión en activos líquidos (créditos, depósitos bancarios, acciones, títulos públicos) y empresas comerciales y financieras es notablemente pequeña, y apenas comprende al 6%.[66]

En síntesis, podemos concluir que las transformaciones políticas y económicas del período final del siglo XIX, que pueden resumirse en los procesos paralelos de consolidación del estado y de maduración de un pacto neocolonial (que implicaba una división de tareas por la cual los empresarios nativos asumían un papel primordial en el sector de producción y dejaban en manos del capital extranjero el grueso de las actividades de transporte, comercialización y financiación de la producción agraria), crearon incentivos y presiones que operaron una profunda metamorfosis de la elite empresaria. Estas transformaciones favorecieron la constitución de un empresariado más especializado que en cualquier momento del pasado, y más claramente comprometido con la suerte de un sector que, para el cambio de siglo, se había convertido en la fuente principal de sus ingresos y en el depositario de sus mayores activos.

La orientación decidida de los recursos de este grupo hacia la producción agraria constituye un dato relevante para explicar la velocidad de las transformaciones que tuvieron lugar en el sector agrario en las últimas

décadas del siglo, a las que nos hemos referido en la primera parte de este capítulo. Esta reciente pero decidida vocación rural, a cuyo servicio parecen haberse puesto gran parte de los recursos que estos hombres podían movilizar, resulta muy importante para comprender, también, el nuevo papel de los propietarios como líderes de la modernización de la producción agraria. Pues las transformaciones que estamos considerando tuvieron consecuencias de la mayor importancia no sólo desde la perspectiva que nos ofrece la historia económica. La profundización del perfil rural de la elite de negocios del país tuvo efectos más amplios, pues en definitiva contribuyó a recomponer la identidad de este grupo social. Como ahora veremos, la definición de un actor económico especializado en la actividad rural se acompañó por transformaciones igualmente marcadas en el mundo de representaciones de y sobre los terratenientes.

En la primera parte de la década de 1880 se advierten los primeros síntomas de un cambio de envergadura en la forma en que los terratenientes percibían su relación con la campaña. La prosperidad del período y, más fundamentalmente, el deseo de profundizar sus raíces rurales, impulsó a muchos terratenientes a gastar con el objetivo de elevar la calidad de su vida rural. La primera y más clara expresión de esta nueva actitud fue la construcción de cascos de estancia y parques más grandes y más lujosos. Los primeros surgieron en los años ochenta. A comienzos de esa década, los Olivera construyeron una importante mansión de estilo renacentista en su estancia de Las Acacias; en esos mismos años, los Ramos Mexía erigieron una gran casa en sus tierras de Miraflores.[67] En Santa Fe, la segunda provincia agraria argentina, las primeras grandes residencias rurales también fueron construidas a lo largo de la década de 1880.[68] Es por ello que hacia 1884 Emilio Daireaux observaba que "el lujo de las casas de campaña es enteramente moderno. Hace apenas algunos años que ha nacido. En otro tiempo ateníase la gente a la frescura del patio y se pensaba, no sin razón, que durante la estación cálida, de Noviembre a Febrero, se hallaba más frescura aun en las calles estrechas de la ciudad que en los campos casi desprovistos de sombra y en las casas de campaña expuestas a todos los ardores del sol".[69] A comienzos de la década de 1890, Fliess vio en la campaña "hasta palacios y casas realmente grandiosas".[70] Estos cambios se reflejaron en la literatura naturalista del período, por ejemplo en autores como Eugenio Cambacèrés. Su novela *Sin rumbo,* publicada en 1885, fue quizá la primera que describió la campaña desde una perspectiva positiva, y seguramente la primera que hizo de la gran casa rural de su protagonista el escenario de parte de los sucesos de que se ocupa.

La construcción de suntuosas residencias rurales indica que la campaña comenzaba a percibirse como un medio apropiado para el despliegue de un nuevo y más sofisticado estilo de vida. Ello se advierte, por ejemplo, en las observaciones que Alfredo Birabén dio a publicidad en 1882, cuando recorrió los partidos del norte de la provincia de Buenos Aires. Estas descripciones de la zona de colonización más antigua de la provincia constituyen un punto de inflexión en la percepción social de estancias y estancieros. En la estancia de los Güiraldes, a Birabén le llamó la atención el gran parque, de 50 hectáreas. Este observador fue aún más gratamente sorprendido por el estilo de vida señorial de su dueño, una "vida del *gentilhomme campagnard* que va ganando poco a poco sobre los antiguos hábitos del Estanciero".[71] Birabén describió el establecimiento de Manuel Guerrico desde una perspectiva similar: este también formaba parte de la "categoría de las residencias de *gentleman farmer*".[72] Algunos años más tarde, Alois Fliess también advertía los cambios culturales experimentados por los terratenientes de Buenos Aires. Es significativo que, al igual que Birabén, este observador proveniente del centro del continente europeo destacase la fuerte influencia británica en la modernización de las costumbres de las clases propietarias rurales. Para Fliess, "el argentino de buena familia que vive en el campo adquiere generalmente los mismos hábitos y costumbres de los ingleses".[73]

El eco de las transformaciones económicas y culturales que habían tenido lugar en la pampa en el lapso de unos pocos años puede advertirse claramente en la exhibición organizada por la Sociedad Rural en 1886. Esta exposición fue un verdadero hito en la historia de la asociación ruralista y, hasta cierto punto, de la clase terrateniente. Después de los pobres resultados de la muestra de 1881, la Sociedad Rural había preferido suspender la realización de este tipo de eventos.[74] Cinco años más tarde, quizás acicateados por los cambios a que hemos hecho referencia, los ruralistas se dispusieron a organizar su Primera Exposición Internacional. Un formidable éxito coronó sus esfuerzos. "La exposición de 1886 es triple y quizás cuádruple por su importancia a las anteriores", observaba *La Prensa*.[75] Ello se advierte, por ejemplo, en la cantidad de animales exhibidos, que saltó de 224 en 1881 a 894 en 1886.[76] Varios observadores advirtieron que existía una relación muy directa entre el éxito de la exhibición y el cada vez más generalizado interés en la mejora de los métodos de cultivo y, en especial, de cría de animales.[77] *El Nacional* señalaba que "los resultados de esta exposición sobrepasan las esperanzas de sus organizadores [...] ya ningún hacendado de cierta importancia se limita a

dejar procrear los ganados criollos, demostrada como está la ventaja que reportan las cruzas con reproductores de buena sangre".[78]

La exposición también sugiere cuán profundamente se estaba modificando la percepción que la propia elite socioeconómica tenía sobre los asuntos rurales. El prestigio de los modernos métodos de trabajo rural, en particular de aquellos más directamente vinculados a la innovación técnica y al dominio y transformación de la naturaleza (entre los que destacaba la cría "científica" de animales) indicaban tanto el nuevo umbral alcanzado por la empresa rural como el interés que concitaba entre las clases altas. Para los años ochenta, la cría de animales aparecía como una actividad rentable y prestigiosa, y por tanto capaz de atraer capitales, pero también de convocar la atención de aquellos que unas décadas antes la habían rechazado con indiferencia o desdén. Como advertía *La Prensa*,

> cada uno de los tipos expuestos indica que hay hombres ilustrados dedicados al negocio. Los comerciantes, los rentistas, los abogados, los médicos, los ingenieros no desdeñan las labores pastoriles, a imitación de los lores y la alta nobleza inglesa [...] Antes se creía que la crianza era digna solamente del gaucho enlazador y las mejores estancias tenían a su frente a un mayordomo inculto [...] Esa etapa de nuestra evolución pastoril pasó para no volver, reemplazada por otra bajo la cual la industria se ennoblece, llamando al trabajo a los hombres estudiosos e instruidos, miembros de la alta sociedad metropolitana.[79]

Visiones como esta indican que nuevas y más sofisticadas formas de organización y gestión de una empresa rural estaban concitando el interés de las elites. Esta era una novedad cuyas consecuencias sociales y culturales conviene remarcar. Como la opinión del principal medio de prensa de este período lo sugiere, por primera vez en su historia la actividad rural estaba cambiando en una dirección tal que permitía que sus impulsores más visibles pudieran compararse con la rica, poderosa y prestigiosa aristocracia territorial inglesa. Para la década de 1880, los terratenientes modernizadores, la verdadera punta de lanza de la nueva cultura ganadera, comenzaban a asociarse con la modernidad económica y la distinción social, y a ser percibidos, en tanto grupo, como los empresarios más modernos y dinámicos que poseía el país. Este cambio, que señala la consolidación de la figura del moderno empresario rural, se basaba en la asociación con una actividad ganadera que, en términos de esta-

tus, aparecía a la vez que como rentable, prestigiosa y sofisticada. La Argentina de la década de 1880 no sólo tenía un empresariado rural más especializado y dinámico que en cualquier momento de su pasado; ese empresariado hacía de su definición como terrateniente un elemento central de distinción social.

En este contexto, no debe sorprender que el Club del Progreso fuese desplazado por el Jockey Club como el principal centro de sociabilidad de la clase propietaria.[80] El nacimiento de esta institución revela un cambio en la condición e intereses de las clases altas. El Jockey Club fue fundado con la intención de contribuir a la formación de una suerte de aristocracia republicana basada en el éxito y el talento, y tenía por fin sensibilizar a la clase propietaria, nueva y vieja, hacia la alta cultura europea.[81] Desde el inicio, el Jockey Club se identificó con los nuevos valores vinculados a la mejora de las razas (equinas, en este caso). En décadas anteriores, la cría de caballos de raza no había despertado mayor entusiasmo, y había permanecido confinada a los miembros más prósperos de la comunidad británica, que habían sido los primeros en importar regularmente padrillos en las décadas de 1850 y 1860. Por muchos años, los intentos de crear asociaciones que promoviesen las carreras de caballos no habían logrado trascender los confines de esta comunidad de extranjeros.[82] Algunas peculiaridades del medio local ayudan a entender estas dificultades. En Europa, y sobre todo en Gran Bretaña, el caballo fue por siglos un emblema del mundo aristocrático, de su riqueza, poder y estatus, a punto tal que, en más de una lengua, la palabra que designa al hombre que monta un equino también designa una posición social expectable.

En Europa, pues, la cría de caballos de raza había sido siempre una actividad esencialmente aristocrática.[83] En la Argentina, en cambio, los caballos no eran especialmente relevantes como índices de posición social, lo que explica también por qué las asociaciones que tenían a las actividades hípicas por objeto aparecieron más tempranamente en otros países latinoamericanos como Chile, Brasil y México.[84] Ello se debía, en parte, a que en la pampa no había mayor distinción entre el caballo de silla, por definición elegante y distinguido, y el pesado caballo de tiro, típico de las sociedades agrarias europeas; el carácter marginal del cultivo del suelo tornó opacas las diferencias entre estos dos tipos de equino, usadas respectivamente por el rico y el pobre, el hombre que ocupa su tiempo en cultivar su espíritu y mandar, y el trabajador manual. La abundancia de caballos, sin embargo, era aún más importante. De acuerdo con el censo de 1881, unos 2 400 000 equinos pastaban en la provincia de Buenos Aires, donde vivían apenas 526 000 habitantes. La cifra de 4,4 caballos por habitante

contrasta no sólo con la de las sociedades europeas que hacían del caballo un símbolo de distinción (Gran Bretaña y Alemania poseían 0,1 caballos por habitante), sino también con los Estados Unidos, que también poseía su propio mito ecuestre (0,25 caballos por habitante).[85]

El uso del caballo no podía conferir mayor prestigio en una sociedad en la que se afirmaba que hasta los más menesterosos poseían sus propias cabalgaduras, e incluso mendigaban a caballo, y en la que ningún hombre que se tuviese por tal podía montar una yegua (que eran mantenidas sólo con fines reproductivos).[86] En una de sus agudas observaciones, Emilio Daireaux afirmaba que "la extrema baratura de los caballos al generalizar su uso entre todas las clases sociales, y por otra parte, la extensión del país haciéndole necesario, han convertido la equitación en una costumbre más que en un *sport* elegante".[87] Y es quizá por ello que durante varias décadas no fue posible determinar con certeza si los caballos de raza europeos eran más veloces que los ejemplares criollos, a punto tal que las carreras entre exponentes de estos dos tipos no eran extrañas en las décadas de 1860 y 1870.[88] Sólo cuando pudo comprobarse fehacientemente que los pura sangre superaban a los ejemplares criollos, algunos poderosos terratenientes mostraron un interés más abierto en las carreras de equinos, lo que dio lugar a la creación de los primeros haras. El primero de ellos, Ojo de Agua, de Santiago Luro, fue fundado en 1873; San Jacinto, de Saturnino J. Unzué, lo siguió cuatro años más tarde. Recién entonces el turf se volvió parte central de la vida de las clases altas (el éxito del polo fue aún más tardío).[89] En el ultimo cuarto de siglo, el desarrollo de nuevos medios de comunicación, como el tren y el tranvía, en especial en la ciudad de Buenos Aires, contribuyó a limitar el uso de los equinos como medio de transporte urbano y suburbano, haciendo que su presencia se volviera menos extendida en la vida porteña. Pese a todo, en la campaña, por largo tiempo el caballo no tuvo rivales como medio de transporte local (lo que quizá contribuya a explicar el muy temprano interés de muchos propietarios por llevar automóviles a sus estancias).[90]

El Jockey Club, fundado en 1882 con la intención de colocar a la mejora de los animales entre sus actividades principales, encontró una cálida recepción entre la clase alta nativa. Para fines de esa década, esta institución contaba con unos 700 miembros, y su nueva pista de carreras en el barrio de Palermo la proveía de un ingreso sustancial.[91] Las carreras de caballos también le dieron a los miembros de la clase alta un destacado papel como objeto de atención popular, en tanto eran los propietarios, quizá más que los jockeys, los protagonistas del espectáculo (un fenóme-

no que sólo iba a modificarse radicalmente en el más democrático clima de la entreguerra, y que creó condiciones para la emergencia de verdaderos ídolos populares como el uruguayo Irineo Leguisamo). La imagen del estanciero *sportsman* (entre los que se destacan apellidos como Unzué, Martínez de Hoz, Luro, Alvear y Atucha) conduciendo de las bridas a su pura sangre entre los aplausos de la multitud se volvió uno de los rituales del espectáculo turfístico.[92]

El cambio más notable en la actitud de los grupos económica y socialmente predominantes hacia el mundo rural se refiere a la Sociedad Rural. La exposición de 1886 constituyó un hito en la forma en que las clases propietarias percibían a esta institución. Desde ese momento, la Sociedad pudo finalmente cosechar los frutos de su preocupación de larga data por todo lo referido a la agricultura moderna. La Exposición Internacional de 1886 operó como un catalizador del interés por los temas rurales que se venía desarrollando en los años anteriores, y colocó a la Sociedad Rural en el centro de la atención de las clases altas de una forma que no había sucedido en ningún momento de su pasado. La muestra, afirmaba Emilio Frers, uno de los principales dirigentes ruralistas del período, "fue la consagración definitiva de la Sociedad Rural Argentina en el concepto público; a la indiferencia de los anteriores tiempos sucedió un movimiento de adhesión y creciente popularidad [...] La Exposición de 1886 la puso de moda".[93]

En 1885, después de dos décadas de vida, la Sociedad Rural apenas había logrado reunir unos cuatrocientos socios; cuatro años más tarde había doblado esa cifra. Gran parte de los nuevos asociados eran estancieros u hombres de la ciudad, vinculados de una u otra manera a la actividad rural, pero también había excepciones. En aquellos años, como Frers advirtió bien, se produjo una modificación en el perfil de algunos de sus miembros. El prestigio adquirido por la Sociedad Rural, y más en general por la actividad rural, hizo que "más de una vez los hombres políticos del país fueron a buscar popularidad o cuando menos notoriedad en sus filas".[94] La Sociedad Rural debe haber tenido cierto atractivo para hombres del mundo político que pertenecían a la oposición. Como hemos visto, en esos años la Sociedad se contó entre los críticos del gobierno de Juárez Celman. Así, no sorprende que Leandro Alem, que poco tiempo después lideraría al Partido Radical, se afiliase en 1889.[95] Lisandro de la Torre, un activo participante en la Revolución del Noventa, y luego el conductor del Partido Demócrata Progresista, ya se había sumado un año antes.

De todas maneras, esta vinculación entre el ruralismo y la oposición no debería exagerarse. Incluso en esos años, en los que la Sociedad manifestó

abiertamente su disgusto con el gobierno, la moderación y el equilibrio seguían marcando sus posiciones y pronunciamientos. En tanto aspiraban a permanecer al margen de toda identificación partidaria, los ruralistas estaban dispuestos a incorporar hombres de cualquier filiación política. Estanislao Zeballos, un cabañero progresista, pero también un mitrista que se había acercado a Roca, alcanzó la presidencia de la Sociedad Rural en 1888. Los nombres de algunos nuevos socios indican, de modo aún más claro, no sólo que los miembros de la nueva elite política estaban interesados en asociarse, sino también que eran bien recibidos. Emilio Civit y Benito Villanueva, por ejemplo, se contaban entre ellos. Villanueva, un cuyano de larga trayectoria política, se convirtió en esos años en un reconocido estanciero y criador de caballos de raza, que llegó a presidir el Jockey Club. Ramón J. Cárcano, el hombre que el presidente Miguel Juárez Celman había elegido para sucederlo en el cargo, también se sumó a la Sociedad en el mismo año que Alem.[96]

La incorporación de estas figuras ofrece indicios reveladores sobre cómo algunos miembros de las elites del interior fundían sus intereses económicos con los de las clases altas de la pampa, y a lo largo de ese proceso adoptaban los valores y estilos de vida que estaban transformando al segmento más rico de la clase propietaria. Julio Argentino Roca estuvo entre los primeros hombres del interior en seguir este camino. El presidente Nicolás Avellaneda (1874-1880), recordaría luego uno de sus nietos, "nació, vivió y murió sin tener una sola legua de campo".[97] La actitud de su sucesor, así como el tiempo que le tocó vivir, fueron distintos. Roca era hijo de una familia tradicional de Tucumán, con más linaje que recursos económicos. La adquisición de una gran fortuna por parte de los Roca estuvo estrechamente ligada a los éxitos de la carrera política de Julio. En la década de 1880, este se convirtió en un gran propietario rural en Buenos Aires gracias a la donación de tierras que le hicieron sus partidarios en la legislatura provincial, a la que en años sucesivos le siguieron nuevas compras. La generosidad de los miembros de la nueva elite política no se limitó al propio Roca. Su hermano Ataliva e Ignacio Sánchez, uno de sus hombres de confianza, también recibieron grandes propiedades en el territorio de La Pampa, "donadas por la Nación", mientras Julio ocupaba la presidencia.[98] Cuando fallecieron a comienzos de la década de 1910, Julio y su hermano Ataliva dejaron grandes fortunas, que superaban en cada caso los diez millones de pesos, y que estaban compuestas en forma predominante por tierra. Inicialmente, Julio Roca no demostró el tipo de disposición para invertir e innovar que los ruralistas gustaban elogiar. En breve, sin embargo, descubrió las ventajas de

invertir en cercados, animales de raza y mejoras. En 1887, tras alejarse de la Presidencia, viajó a Europa, y en su paso por Inglaterra se ocupó personalmente de recorrer cabañas y comprar animales de raza. Una década más tarde se jactaba de que había hecho plantar "más de medio millón de árboles".[99]

La historia de Miguel Juárez Celman nos revela una trayectoria similar. A pesar de todo el desdén que muchos miembros de la clase propietaria de Buenos Aires pueden haber sentido por su figura, este abogado cordobés se ganó un lugar entre los protagonistas de la modernización rural del período. En 1887 mandó a construir una gran mansión en su estancia de Capitán Sarmiento, que fue a veces considerada como "el primer casco de estancia de arquitectura europea palaciega en la provincia".[100] Durante su presidencia, Juárez Celman solía pasar los meses estivales en La Elisa; allí se recluyó por largos períodos tras su renuncia en 1890, y allí murió en 1909.

Es quizá Ramón Cárcano el que nos ha dejado el testimonio más explícito del atractivo que la figura del estanciero aristocrático y modernizante ejerció sobre las elites del interior. Cárcano era hijo de un profesor de música italiano, pobre pero educado, que arribó a Córdoba en 1849, y que logró abrirse camino en esa tradicional sociedad mediterránea. El joven Ramón dejó su provincia nativa en los años ochenta para seguir una carrera política en Buenos Aires, al lado de su protector Juárez Celman. Fue en esta gran ciudad que esta criatura esencialmente urbana sintió la atracción de la vida rural, y donde descubrió su vocación por las tareas agropecuarias. "En el fondo de toda alma argentina hay un estanciero, y sigo virilmente, y con profunda fe, la tendencia nativa", escribiría más tarde en sus memorias.[101] Cárcano compró tierra (seguramente gracias a crédito de la banca oficial al que accedió por su posición prominente en el séquito presidencial) y en 1886 estableció Ana María, en las ricas tierras del sur de Córdoba. Pese a que no poseía mayor experiencia en la gestión de una empresa rural, se tomó su nueva actividad con seriedad e interés: invirtió en mejoras, asistió a cursos de veterinaria mientras estaba en París, intercambió ideas sobre cómo alimentar sus toros de raza con algunos de los cabañeros más prestigiosos del país.[102] La descripción que ofreció de su estancia como "taller de trabajo, centro de estudios y cultura, fuente de serenidad y amor", podría haber salido de la boca de muchos propietarios rurales menos improvisados.[103] Cárcano permaneció asociado a la Sociedad Rural toda su vida, e incluso ocupó un sillón en su comisión directiva a comienzos de siglo.

Tras la muestra de 1886, la exposición de 1890 fue el otro gran evento en el que los progresos de la ganadería alcanzaron gran resonancia pública. Las tensiones con Juárez Celman entonces volvieron a notarse, pues el presidente prefirió no concurrir a la ceremonia de apertura. En esa ocasión, los discursos del presidente de la Sociedad Rural y los comentarios del público demostraron el desagrado hacia la gestión presidencial.[104] La reunión, sin embargo, fue algo más que una excusa para criticar al gobierno. La exposición, se afirmó, "supera, sin dudas, a todas las anteriores juntas, pues desde 1886 la importación de tipos selectores ha tomado un desarrollo inesperado".[105] Para los redactores de *El Diario,* la ganadería era la actividad económica más moderna de la República, a punto tal que podía igualar los logros de cualquier otro país ganadero. Y continuaba afirmando que "Lozano, Newton, Frías, Bosch, Gibson, Olivera, Senillosa, Zeballos, y cien más que sería prolijo enumerar son los que están al frente de este progreso industrial, el más sólido, aunque sea el más paulatino, de los que se operan en nuestro estado económico".[106] Una perspectiva similar se encuentra en *La Prensa,* que describió la muestra como una expresión de una actividad que "va haciendo progresos enormes, incalculables, asombrosos".[107]

Como en las exhibiciones anteriores, las "razas *d'élite*" otra vez constituyeron la principal atracción del torneo.[108] Incluso segmentos muy amplios de la población urbana se vieron seducidos por el encanto de la cría moderna. La ganadería se había ganado un lugar en el corazón de las clases propietarias, pero es de destacar que su influjo también se hacía sentir sobre un público mucho más amplio. Unas setenta mil personas (alrededor del 10% de la población de la ciudad) consideraron que valía la pena afrontar el costo de la entrada para visitar la exposición, y en particular para ver el ganado de raza. Ello se advierte bien en el comentario del diario *La Unión,* entonces un vocero de la Unión Cívica. "Si un observador se detiene algunas horas a presenciar en el primer salón de la exposición el gusto que prevalece en los visitantes, fácilmente podrá sacar esta consecuencia: los animales son más visitados que las demás producciones que se exhiben. ¿Por qué? La afición general se dirige más bien hacia los animales porque los niños, los jóvenes, las señoritas, todos en fin, suponen que es más elegante, más *chic,* decir que la yegua tal es alta, que el caballo cual es delgado, que el toro aquel es más grueso, que la vaca de más allá es de sangre entera."[109] De acuerdo con el redactor de *La Unión,* para la mayoría de estos habitantes de la ciudad, el atractivo de los ejemplares de ganado de raza no resultaba de ningún interés específico en la producción rural, ni tampoco de un conocimiento directo de

ese terreno, sino que era producto del nuevo clima de ideas que atribuía un valor especial a los emprendimientos rurales. Es por ello que afirmaba que "lo más particular es que esos mismos entendidos y admiradores de animales no entienden nada, absolutamente nada, de lo que no tienen a menos alabar o criticar públicamente".[110]

Testimonios como este sugieren que la ganadería, y en particular la cría de animales de raza, estaba ganando una posición particularmente prestigiosa. Especialmente visible e intensa entre las clases altas, también irradiaba su influencia hacia sectores mucho más vastos. Este fenómeno resulta muy peculiar de la Argentina. En Europa y América del Norte, las exposiciones (esos eventos donde la civilización burguesa se festejaba a sí misma) solían ser grandes celebraciones de los progresos de la manufactura y la producción industrial. En la Argentina del cambio de siglo, las exposiciones honraban los triunfos de la ganadería y de los empresarios agrarios. Considerada por *La Prensa* como "un gran hecho, no sólo desde el punto de vista agrícola, sino también bajo el de la Civilización de la República Argentina",[111] la exposición de 1890 ponía de manifiesto que no eran los empresarios urbanos sino los grandes propietarios rurales modernizadores los que constituían el sector más renombrado y dinámico de la burguesía nacional. Durante la década de 1880, la economía se expandió a un ritmo febril, impulsada por el ingreso de migrantes y capital extranjero y por el aumento de las exportaciones rurales. Se ha estimado que a lo largo de esa década el producto bruto interno creció a una tasa cercana al 7% anual.[112] Los contemporáneos no conocían esas cifras, pero percibían bien que asistían a un formidable proceso de crecimiento. Los hacendados constituían no el único pero sí el más visible motor de esa expansión, de una velocidad notable para el mundo prekeynesiano, que ciertamente encuentra pocos paralelos en el siglo XIX. Era el formidable dinamismo de esa economía agraria el que autorizaba al presidente de la Sociedad Rural a afirmar que los estancieros argentinos podían parangonarse con la clase terrateniente británica, tenida por la más dinámica y augusta de cuantas habitaban el Viejo Continente. Para Zeballos, "la campaña argentina se ennoblece bajo la influencia de las iniciativas distinguidas y del capital que realizan en ella su evolución trabajosa y lenta, pero edificante y segura. No de otra manera ha transformado y embellecido a la campaña de Inglaterra la acción personal de la aristocracia británica".[113]

Afirmaciones como esta indican que los principales terratenientes de la pampa del período finisecular podían reclamar reconocimiento como algo más que como una elite de la riqueza. También habían logrado

forjar una identidad empresarial progresista, y ello los volvía, al mismo tiempo que un poder económico, una fuerza sociocultural de primer orden. Para fines de la década de 1880, el gran estanciero modernizante y aristocrático se había colocado como la figura que coronaba la cima de la sociedad.

Es preciso hacer algunas consideraciones adicionales sobre este punto. En el último cuarto del siglo XIX, la visibilidad y dinamismo del gran empresariado se hizo más clara que nunca. Este fenómeno concitó la atención de Jorge Sábato, que afirmó que la colocación de activos en distintas esferas de inversión, con fuerte énfasis en el comercio y las finanzas, constituía el rasgo más distintivo de la elite empresarial.[114] Considerado el problema con cierta atención, se advierte que esta visión resulta errada. En primer lugar, porque como ya hemos indicado, al calor de la expansión agraria, en este período la elite no disminuyó sino que aumentó su especialización en la actividad rural. Pero también porque es fácil advertir que la inversión simultánea en distintos campos de actividad estaba lejos de ser peculiar del caso argentino. Las clases propietarias latinoamericanas, así como las de otras partes del mundo, colocaron regularmente sus activos en distintos campos, con fuerte énfasis en el comercio y las finanzas. Por cada Tornquist en la Argentina encontramos un Prado o un Mayrink en Brasil, o un Gómez en México.[115] En Chile, Brasil, México y Colombia, las elites económicas invirtieron al mismo tiempo en producción rural, comercio, industria y finanzas, haciendo gala de características empresariales similares a las que Sábato considera típicas de los empresarios argentinos.[116] El corazón de la Europa industrial presenta un panorama en algunos aspectos similar. Como Eric Hobsbawm ha señalado apoyándose en las investigaciones de W. Rubinstein, "el comercio y las finanzas eran el corazón de la gran riqueza burguesa incluso cuando Gran Bretaña era 'el taller del mundo'".[117] Y en la periferia agraria de Europa, por ejemplo en Hungría, "la amalgama de propiedad fundiaria, industria manufacturera, banca y comercio" era muy corriente en el estrato burgués superior.[118] En los Estados Unidos, antes de que la industrialización de fines de siglo diera lugar a la aparición de una nueva elite plutocrática, los grandes empresarios solían tener simultáneamente intereses en distintos rubros de inversión.[119]

Este rápido recorrido nos indica que lo que Sábato considera típico de la elite empresarial argentina es en rigor un rasgo muy generalizado entre las clases propietarias decimonónicas. Y es a partir de esta constatación que parece inevitable concluir que, cuando se coloca a la gran elite empresarial argentina en un contexto comparativo, lo que debiera

enfatizarse es, precisamente, la centralidad que la tierra y la propiedad rural tuvieron para este grupo, para la que es difícil hallar paralelos en otras partes del mundo. Pues en pocos países el sector agrario tuvo la importancia económica que poseyó en la Argentina, y es probable que en ninguno de ellos los mayores dueños del suelo alcanzasen un lugar tan preponderante en la captación del excedente agrario. Ello explica por qué la formidable fortuna de Ernesto Tornquist (cercana a los 25 millones de pesos), siempre considerado como el más importante de los grandes empresarios diversificados del cambio de siglo, no logró superar a la de terratenientes como Mariano Unzué (35 millones de pesos) o Tomás Duggan (29 millones). Y mientras que la Argentina del período no parece haber producido ningún empresario diversificado de la talla de Tornquist, el número de grandes terratenientes de familias tales como Unzué, Díaz Vélez, Alvear, Anchorena, Álzaga, Guerrero, Santamarina o Pereyra que alcanzaron fortunas que no estaban tan lejos de la de este zar de las finanzas se cuenta por docenas. Ello indica bien que la elite propietaria de las décadas del cambio de siglo fue, en lo esencial, una burguesía terrateniente, y que los empresarios diversificados conformaron un apéndice significativo pero en definitiva secundario de este grupo social.[120]

Es preciso recordar, asimismo, que la actividad rural, y en especial la ganadería, no sólo ofreció la fuente principal de ingreso para la clase propietaria. También contribuyó decisivamente a la definición misma de este grupo como una elite superior. En esos años, la prensa una y otra vez presentó a los terratenientes progresistas como ejemplos de valores y conductas juzgados positivamente –trabajo duro, talento empresarial, determinación, capacidad para innovar– y como hombres que sacaban el mayor provecho posible de las oportunidades que les ofrecía la economía. Este *ethos* del esfuerzo y el triunfo personales, típico de una sociedad nueva, de frontera, debe haber permitido que *self-made men* como los Luro, los Santamarina, los Duhau o los Duggan encontrasen avenidas de ascenso social que les permitieron alcanzar la cima de una clase alta todavía muy abierta. La identificación con la actividad rural, sin embargo, no sólo puede advertirse en relación con la nueva riqueza; las fortunas más tradicionales se vieron igualmente transformadas por la profundización de sus raíces rurales. Este proceso contribuyó a dar origen a una clase empresaria tenida por más moderna y progresista. Ello fue posible, al menos en parte, porque esta transformación se hizo visible en un momento en el que los grandes propietarios ocupaban un lugar muy destacado como líderes de la modernización rural, que no habría de ser

puesto en cuestión por conflictos con los grupos subalternos por cerca de un cuarto de siglo. Además de sus ventajas económicas –y el hecho de que la mayoría de los empresarios más exitosos del período fuesen grandes terratenientes dice mucho al respecto–, los emprendimientos rurales se volvieron tan centrales a la visión que estos grupos estaban forjando de sí mismos porque la organización y gestión de una moderna empresa rural validaba su imagen como una elite socioeconómica modernizante y progresista, capaz no sólo de enriquecerse, sino también de impulsar a la República hacia una fase superior de desarrollo.

Teniendo en cuenta estos elementos, podemos advertir algunas peculiaridades de esta clase propietaria. Muchas veces se ha insistido sobre las diferencias entre los terratenientes pampeanos y los productores rurales de otras regiones de poblamiento reciente (los Estados Unidos, Canadá, Australia). La concentración de tierra e ingreso que disfrutaban los estancieros argentinos no encuentra paralelos en la historia de la agricultura del norte del continente americano o de Australasia, y sólo puede compararse –en una escala mucho más reducida– con la de Uruguay.[121] Los grandes ganaderos de los estados del oeste de los Estados Unidos, que poseían propiedades en algunos casos más extensas (pero menos valiosas) que las de sus colegas argentinos, carecían de la centralidad que estos tenían en su propia sociedad, pues estaban lejos de rivalizar con las mucho más ricas y refinadas clases propietarias de los antiguos estados de la costa este. En este sentido, la posición de los señores de la pampa se asemejaba más a la de las clases terratenientes europeas. Sin embargo, los estancieros pampeanos diferían sustancialmente de las viejas clases rurales europeas, entre otras cosas, debido a su reciente prosperidad, que no era sino un producto de la expansión del capitalismo a escala mundial. Los estancieros del cambio de siglo también se distinguían de sus colegas europeos porque su preeminencia social le debía poco a la tradición. Mientras que en Europa los terratenientes solían fundar sus intentos de construir o mantener posiciones de poder en la identificación con antiguas tradiciones señoriales, en la Argentina ello resultaba, en primer lugar, de la acción de poderosas fuerzas económicas vinculadas a la expansión del sector agrario, de nuevos mercados y de nuevas tecnologías.

Si existía en Europa alguna clase terrateniente que los propietarios argentinos deseaban emular, ella no era la conformada por los *Junker* de Prusia ni tampoco ninguna otra elite agraria continental. Como varias citas que hemos destacado en páginas anteriores sugieren, el ejemplo de la clase terrateniente británica era aquel que más atraía a los estan-

cieros de la pampa. Al volver sobre esos testimonios, se advierte que el prestigio y el poder sancionados por siglos de dominio señorial no eran lo que les resultaba especialmente atractivo, o lo que en su caso consideraban más relevante. Ello no se debía simplemente a que la mayoría de los grandes propietarios argentinos tenía dificultades para rastrear los orígenes rurales de sus antecesores más allá de una generación, o a que su prosperidad era tal vez más reciente. Los estancieros de la pampa se sentían particularmente atraídos por el ejemplo ofrecido por la clase terrateniente inglesa porque la veían como la más innovadora y progresista de todas las clases propietarias europeas, nobles o plebeyas. Como lo sugiere el comentario de Zeballos que hemos citado más arriba, los estancieros progresistas entendían que la preeminencia social del señor inglés debía tanto a los poderes y privilegios que detentaban desde tiempo inmemorial, como a su papel impulsor de la innovación agrícola. Si bien resulta indudable que el terrateniente británico estaba bastante lejos de ser la figura heroica del progreso rural que tantos victorianos alabaron (de hecho, durante el último cuarto del siglo XIX la agricultura alemana realizó avances más sustantivos en la incorporación de nuevas tecnologías a las actividades agrícolas),[122] la principal lección que los ruralistas intentaban extraer del ejemplo inglés era precisamente esta, en tanto era una lección que se adecuaba a la perfección a los deseos y expectativas de aquellos que se veían a sí mismos como parte de una aristocracia del mérito en proceso de construcción. En este sentido, la forma en que los terratenientes argentinos describían a sus pares ingleses ofrece una perspectiva reveladora sobre sus propias expectativas y ambiciones. El lugar privilegiado que los grandes señores de la pampa ocupaban como modernizadores de las prácticas agrícolas conformaba la base a partir de la cual reclamaban para sí el papel de principal motor de la economía agraria argentina, sobre el cual a su vez afirmaban la legitimidad de sus reclamos de preeminencia social.

CRISIS Y CONSOLIDACIÓN

Durante los años ochenta, la Argentina asistió a un período de expansión económica y de consolidación política. Ello permitió que los estancieros mejoraran y expandieran sus establecimientos rurales, y también que reforzaran su posición en la sociedad. Antes de que la década se cerrara, se produjo un abrupto cambio de escenario: una profunda crisis

económica y el resquebrajamiento del partido gobernante pusieron en cuestión los parámetros generales del orden que había asegurado casi diez años de prosperidad. Sobre la gestión de Juárez Celman llovieron fuertes críticas, a las que muchos terratenientes se sumaron. El clima de denuncia de la irresponsabilidad de las elites políticas que caracterizó a los años finales de la década se advierte bien en las palabras con las que en 1889 el presidente de la Sociedad Rural manifestó su malestar con los hombres que se ocupaban de los asuntos públicos. Para Zeballos, "ser cabañero es más importante que ser hombre de Estado".[123]

Las palabras de Zeballos dan testimonio tanto del prestigio adquirido por las actividades agrarias como de la insatisfacción terrateniente hacia el gobierno de Juárez Celman. Hasta el momento, los historiadores no han prestado mayor atención al conjunto de dilemas políticos que inquietaron y movilizaron a los empresarios rurales en esa peculiar circunstancia histórica, que encontraban su origen en el hecho de que el proceso de consolidación de la identidad terrateniente, y la nueva confianza en su papel como fuerzas orientadoras de la sociedad, los volvía más propensos a tomar un lugar más central en la vida política. Y ello adquiría una particular urgencia en esos años precisamente porque el gobierno parecían incapaz de asegurar las condiciones que habían permitido la expansión de la década de 1880. En el capítulo siguiente, que se ocupa de la posición política de los terratenientes del cambio de siglo, abordaremos este problema. Lo que aquí debemos analizar es cómo la crisis económica de 1890, y en particular el modo en que fue resuelta, terminó por consolidar la posición de los grandes propietarios en la cumbre de la sociedad argentina.

Cuando Juárez Celman asumió la presidencia en 1886, lanzó un ambicioso programa de obras públicas, financiado gracias a la llegada de capitales extranjeros en gran escala. Durante su gestión se otorgaron más concesiones para la instalación de líneas ferroviarias que durante toda la era ferroviaria argentina, que se remontaba a la década de 1850. Se ha calculado que entre 1886 y 1890 la inversión extranjera cuadruplicó la de la presidencia de Roca. Los contratos que aseguraban una garantía oficial de ganancias mínimas a las empresas ferroviarias, muchas de ellas fijadas en oro, incrementaron sustantivamente el costo del servicio de la deuda pública. El estado no estaba en condiciones de servir sus obligaciones hasta tanto las nuevas obras entraran en plena operatoria y, en consecuencia, la capacidad económica del país se expandiera. Desde 1888, una fuerte caída de los precios de los productos exportables hizo que el servicio de la deuda dependiera del ingreso continuo de capital extranjero, con el que

el gobierno afrontaba los vencimientos que periódicamente se producían. Se trataba de una situación particularmente riesgosa, pues la evolución de los mercados de capitales, por definición siempre volátiles, estaba en gran medida fuera del control de la Casa Rosada. Frente a una contracción del crédito externo, estas no tenían margen de maniobra. La crisis estalló a fines de 1889, cuando la casa Baring, una firma británica, fue incapaz de atraer inversores para suscribir un nuevo empréstito. Este fracaso dio lugar a un pánico generalizado, y el flujo de inversiones externas cesó de forma abrupta. El gobierno, endeudado en exceso, pronto se encontró en grandes dificultades, ya que el oro comenzó a salir del circuito financiero, y el papel moneda se depreció aceleradamente, creando fuertes presiones sobre la balanza de pagos. Todos los intentos de la administración Juárez Celman para mantener bajo control el tipo de cambio (el "premio del oro") fracasaron estrepitosamente. La profundización de la crisis erosionó los apoyos políticos del presidente, incluso dentro de su propio partido. La oposición, que había permanecido desarticulada y a la defensiva a lo largo de toda la década de 1880, comenzó a movilizarse, y de su seno surgió el levantamiento militar del invierno de 1890. La Revolución del Noventa fue vencida militarmente, pero Juárez Celman se vio obligado a renunciar.[124]

La Crisis del Noventa constituyó la depresión económica más grave sufrida por la Argentina desde su incorporación plena al mercando mundial. Durante la década de 1880, la inversión extranjera en transportes, obras públicas y construcciones privadas, así como el crédito para la producción, habían alimentado la expansión de toda la economía. Al contraerse la inversión extranjera, se inició un período plagado de dificultades. Para evitar la cesación de pagos, el gobierno debió negociar una moratoria de la deuda en 1891, y renegociarla otra vez en 1893. Las grandes instituciones bancarias estatales, el Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, debieron cerrar sus puertas, y con ello el crédito se restringió aún más. La crisis financiera se acompañó por una profunda depresión en la actividad comercial, que se extendió a todos los sectores de la economía, y cuyas consecuencias se sintieron por casi una década. El programa de obras públicas se interrumpió. La construcción perdió impulso, y todas las actividades con ella vinculadas sintieron el impacto. Las importaciones se contrajeron, y sólo recuperaron el nivel de 1889 quince años más tarde, en 1904.[125] La profundidad de la crisis se advierte también cuando giramos la atención hacia el mercado de trabajo. En 1889 ingresaron al país unos 200 000 inmigrantes; un año más tarde la llegada de extranjeros se había detenido, y en 1891 arrojaba una pérdida neta de 30 000 hombres.

Todavía carecemos de estudios específicos sobre los efectos de esta depresión económica sobre el sector agrario. La crisis debe de haber tenido algún efecto positivo, pues la depreciación de la moneda y la caída de los costos laborales aumentaron el ingreso de los exportadores.[126] Sin embargo, sabemos por distintos testimonios que muchos terratenientes se vieron seriamente afectados por ese derrumbe, en parte porque la expansión de la década previa había sido posible, entre otras cosas, por el aumento de la oferta de crédito, que después de 1890 se contrajo bruscamente.[127] Es por ello que los terratenientes endeudados, sobre todo los que tenían deudas denominadas en oro, se encontraron en serias dificultades. En 1894, el propio ex presidente Roca se lamentaba porque una casa financiera le había negado un crédito hipotecario.[128] Ezequiel Gallo ha observado que, en Santa Fe, varios grandes empresarios rurales no pudieron enfrentar la situación, y muchos de ellos fueron a la quiebra.[129]

Los años finales de la década de 1880 y la primera mitad de la década de 1890 fueron años muy duros por otros motivos, no vinculados directamente con la crisis financiera, pero que contribuyeron a volver más oscuro el panorama para el sector rural. La sequía más aguda en treinta años devastó la campaña en 1893 y 1894.[130] Si bien la difusión del molino de viento estaba atemperando algunos de sus efectos más dañinos, de todos modos la seca redujo los rendimientos de los cultivos, contrajo las pasturas, y obligó a los estancieros a desprenderse de animales en condiciones poco ventajosas. Los precios agrarios también se contrajeron en esos años por razones ajenas a los sucesos en la Argentina. Los precios de la lana, entonces el principal producto de exportación, cayeron a la mitad entre 1889 y 1893. Los precios de los granos también se derrumbaron, y no se recuperaron hasta mediados de la década de 1890. Como consecuencia de la baja de las cotizaciones, los productores no pudieron cosechar muchos beneficios de la devaluación de la moneda y de la baja de los costos laborales. Es razonable que entonces se verificase una caída en la inversión. Las importaciones de alambre para cercos cayeron de 40 a 10 millones de kilos entre 1889 y 1890.[131] Las dificultades del sector se advierten con claridad cuando consideramos la situación del mercado de tierra. Después de una década de incremento sostenido, el precio del suelo se derrumbó. De acuerdo con las estimaciones de Gibson, los precios cayeron más del 60% entre 1889 y 1891, y desde entonces permanecieron deprimidos por tres o cuatro años.[132] La pronunciada baja de los valores inmobiliarios redujo sensiblemente los patrimonios territoriales, e hizo muy poco atractiva la liquidación de activos en ese momento, incluso para los que tenían fuertes deudas. "Gentes que uno suponía muy

ricas están luchando para sostenerse un tiempo más, con la esperanza de que aumente el valor de las tierras o papeles, para liquidar sin tanto desastre", le informaba entonces un corresponsal a Juárez Celman.[133]

Ante un panorama tan desolador como este, la desesperanza y el malestar se extendieron. En el largo plazo, sin embargo, la situación estaba lejos de ser mala, y para mediados de la década de 1890 el país se encontraba en camino a la plena recuperación. La Argentina todavía poseía una gran reserva de tierra fértil que en esos años estaba siendo puesta en producción gracias a la extensión de líneas férreas que habían sido concesionadas y parcialmente pagadas en años previos. Si bien varios proyectos ferroviarios fueron abandonados, entre 1890 y 1892, en el momento más dramático de la depresión, la longitud total de vías creció más del 25% (un ejemplo típico de los rasgos inerciales de los grandes proyectos de infraestructura). Ello contribuyó a aumentar el volumen de las exportaciones. Y al cabo de un tiempo también aumentó el valor. Para mediados de la década, el precio de la lana se había recuperado. Este período también asistió a la organización del negocio de exportación de ovinos en pie, que desvió los mejores ejemplares fuera del circuito frigorífico y pagó mejores precios por ellos.

Fueron la agricultura y la cría de vacunos las actividades que más decididamente impulsaron la recuperación del sector rural, y por su intermedio de la economía en su conjunto. La ganadería bovina, que había mejorado de forma sustancial en la década anterior gracias a la demanda doméstica, fue estimulada por la expansión de las exportaciones de ganado en pie y, a comienzos del nuevo siglo, por el incremento de la demanda de las empresas frigoríficas. Hasta entonces, los Estados Unidos constituían el primer proveedor de carne vacuna de Gran Bretaña, el principal mercado consumidor de este producto. A mediados de la década de 1890, el aumento sostenido de la demanda interna estadounidense comenzó a presionar sobre los saldos que se exportaban al mercado británico. Para entonces, la producción del Río de la Plata estaba en condiciones de compensarlos.

Para ganar posiciones en este mercado, los productores argentinos debieron producir un animal de mejor calidad. Para ello fue necesario, en primer lugar, aumentar la capacidad de carga de la tierra y mejorar las pasturas. Ello lanzó a los empresarios rurales a experimentar más decididamente con técnicas agrícolas mixtas, alternando la cría de animales con el cultivo de granos y forrajeras, entre las que por su adaptabilidad al suelo pampeano pronto destacó la alfalfa. Si bien los costos laborales deben haber caído en la primera mitad de los años noventa, muchos

empresarios se mostraron reacios a hacer fuertes desembolsos en salarios, y optaron por promover formas de asociación mediante las cuales intentaban acceder a trabajo a cambio de la cesión de parte de la cosecha o de los beneficios. La asociación entre agentes económicos dotados de tierra y de trabajo (en general familiar), que recorre toda la historia del agro pampeano desde el período colonial, alcanzó entonces una de sus formas más típicas. Tradicionalmente se atribuye a Benigno del Carril la difusión de una de las modalidades más conocidas de esta variante. En 1892, este estanciero publicó en los *Anales* una carta en la que describía cómo había alfalfado sus tierras de pastoreo sin mayores desembolsos monetarios. Sus sugerencias rápidamente atrajeron la atención de sus colegas.[134] Siguiendo su ejemplo, muchos propietarios se lanzaron a dividir parte de sus estancias en lotes cercados y a contratar con aparceros o arrendatarios la siembra de maíz, trigo o lino durante períodos de tres a cinco años, al cabo de los cuales estos últimos debían dejar el lote sembrado con alfalfa. En ese momento, los cultivadores se movían hacia otras tierras, y los lotes sembrados con forraje pasaban a tener un uso ganadero. Gracias a este y otros sistemas, el cultivo granífero se expandió a gran velocidad. La expansión de los forrajes crecientemente desplazó el viejo sistema que mejoraba lentamente la calidad de los duros pastos por medio de la acción del ganado mayor. Entre 1888 y 1895, la cantidad de hectáreas alfalfadas saltó de menos de 400 000 a 700 000. Para 1900, la superficie sembrada con alfalfa volvió a duplicarse.

La mejora del rodeo vacuno, impulsada por la importación masiva de razas británicas, complementó la expansión de los forrajes y la transformación de las pasturas. La Argentina ya se había constituido en el principal comprador de la producción de razas Shorthorn en la segunda mitad de la década de 1880. Después de la crisis, el número de reproductores importados volvió a incrementarse (seis veces entre 1892 y 1896).[135] Entre 1898 y 1908, unos 9000 vacunos de raza ingresaron al país: esta cifra contrasta fuertemente con los 177 ingresos registrados entre 1871 y 1877.[136] La demanda de equipamiento agrícola también creció de modo sostenido.

Entre 1893 y 1899, el valor de las exportaciones se duplicó. Para el cambio de siglo, la depresión había llegado a su fin, y el sector rural se encontraba en vísperas de una nueva etapa de expansión. El éxito alcanzado por las exposiciones de la Sociedad Rural en la segunda mitad de los años noventa ofrece un testimonio elocuente sobre este hecho, y sugiere bien que el clima de opinión entre los terratenientes era otra vez optimista. En esos años, las exposiciones anuales de la Sociedad Rural al-

canzaron gran importancia, en primer lugar, porque se constituyeron en el principal orientador de un proceso de cambio ganadero de gran profundidad.[137] Las exposiciones, y las ferias que las sucedían, constituían un gran mercado para ganado de raza, así como un espacio donde se exhibían los mejores ejemplares de la ganadería argentina y extranjera. Estas exposiciones establecieron "los cimientos del verdadero mercado de transacciones entre exportadores, estancieros y cabañeros".[138] El valor del ganado de raza vendido en las exhibiciones de la Sociedad Rural ofrece una buena prueba de la conciencia que los terratenientes tenían de este hecho. Entre 1895 y 1905, las transacciones saltaron de $150 000 a casi $3 000 000, y la cantidad de animales exhibidos se multiplicó diez veces.[139] Para comienzos de siglo, la exposición de Palermo era considerada el mayor mercado de animales de raza del mundo. Con motivo de la muestra de 1899, un periódico que servía a la comunidad británica de negocios afirmaba que "los precios que aquí se pagan son suficientes para demostrar que no hay mercado para el ganado de raza como la República Argentina".[140]

Las exposiciones rurales –un símbolo del poder del sector rural, y de su centralidad en la vida argentina– presentaban a los grandes terratenientes como una fuerza dinámica y progresista, y como los principales agentes de la mejora de la ganadería pampeana. Sin embargo, estos grandes eventos, así como la institución que los organizaba, prosperaron no sólo gracias a su contribución a la mejora de los métodos de cría. En esos años, el sector agrario demostró su capacidad para sacar a la Argentina de la difícil situación en la que había caído durante la Crisis del Noventa. Ello ayudó a afirmar la posición de prestigio que las actividades agrarias habían alcanzado en la década anterior, y a la vez tuvo profundas consecuencias para la consolidación del ideario terrateniente como uno de los rasgos que definían a la elite de la República.

En los años noventa, las actividades rurales aparecían como una fuerza regeneradora. Para algunos, la gestión de una empresa rural podía aparecer como un refugio contra un mundo urbano hostil. Un prestigioso cabañero como Francisco Bosch, que después de 1890 debió pagar el precio de su cercanía a Juárez Celman, era de esta opinión: "Si no fueran mis malditos compromisos me dejaría llevar por mi inclinación y la Cabaña sería mi refugio. [En la ciudad] hay cierta atmósfera que no es nada agradable de respirar *¡y es tan puro el campo!*".[141] Pero la actividad rural no era vista sólo, ni predominantemente, como un retiro del mundo. La Crisis del Noventa fue percibida como un fenómeno esencialmente urbano, muchas veces como un producto de la

especulación y la corrupción (moral para algunos, política para otros), que había dejado al sector rural muy dañado, pero con recursos suficientes como para renacer. El sector agrario, se argumentó repetidas veces, sacaría al país de la crisis en la que se abatía. No sorprende que los ruralistas estuviesen entre los más enfáticos defensores de este punto de vista. Diego Baudrix, un dirigente de la Sociedad Rural, argumentaba en 1891 que "es indudable que una gran parte de los capitales que se salven de la catástrofe de la presente crisis, desengañados de los resultados ruinosos de las especulaciones ilusorias, buscarán su aplicación en el campo fecundo y positivo".[142] Argumentos como este fueron amplificados por la prensa. El *Periódico del Estanciero,* por ejemplo, señalaba ese mismo año que "interrumpidas las especulaciones de la Bolsa y los negocios fáciles, hechas con sólo el cambio de palabras, disminuido considerablemente el número de empleados en las reparticiones nacionales como en las casas de negocio, no queda más porvenir que cultivar la tierra, que criar ganados, que establecer nuevas industrias, y descubrir y explotar minas".[143]

Gracias a una moneda nacional depreciada y a impuestos aduaneros más elevados, el sector industrial creció de modo sostenido en los años noventa, a una tasa cercana al 10% anual.[144] Sin embargo, a nadie se le ocultaba que la suerte de la industria dependía de lo que sucediese con el sector agroexportador. Incluso la propia Unión Industrial Argentina, el principal representante de los intereses manufactureros, reconocía que la industria a lo sumo podía desempeñar un papel secundario en la recuperación de la economía, puesto que su orientación hacia el mercado interno no ayudaba al país a aliviar el peso de sus deudas. En 1891, su voz oficial reconocía que "la riqueza agrícola y ganadera son el cuerno de la abundancia para derramar el oro al esterior", y que "las industrias propias" sólo "reducirán esa necesidad".[145] La búsqueda de metales preciosos con las que afrontar las obligaciones externas de la República no era una alternativa realista, por lo que las referencias a la minería pronto perdieron peso. Es entendible, entonces, que el énfasis se pusiese en destacar el dinamismo del sector rural, cuyas potencialidades solían contrastarse con la aguda depresión que afectaba a muchos sectores de la economía urbana. En 1891, el *Periódico del Estanciero* señalaba que "hoy que la crisis llega a su apogeo, que la situación se oscurece momento por momento [...] hoy que el desaliento cunde [...] creemos el momento más apropiado para hablar de todo lo referente a la agricultura y ganadería, único tópico verdaderamente rico, que anima y retempla el espíritu del más

pesimista".[146] La solución de los problemas de la Argentina, afirmaba Charles Leonardi en las páginas de *Tribuna* en la primavera de 1892, vendría del sector rural, "única y esencial esperanza solucionadora".[147] Algún tiempo antes, Ángel Silva había percibido con agudeza el humor dominante. A fines de 1891 observaba que "se nota un convencimiento general en todas las esferas sociales respecto de que nuestro todo está en el campo".[148]

Ello dirigió la atención hacia el mundo de la producción agrícola pampeana, lo que posibilitó la emergencia de una nueva y más desarrollada prensa especializada. La década de 1890 asistió a la aparición de varias publicaciones periódicas que se ocupaban de modo preferencial del sector rural, de mayor densidad y envergadura que las revistas publicadas antes de la crisis. *El Economista Argentino* (1891), *El Campo y el Sport* (1892), *La Agricultura* (1892), *La Semana Rural* (1894), *Gaceta Rural* (1896) y *La Producción Argentina* (1896) se cuentan entre las más importantes. Estos periódicos constituyen una fuente de enorme valor para el estudio de la economía rural y del mundo de representaciones que este contribuyó a crear.

No puede sorprender que *El Campo y el Sport* hablase en términos elogiosos del papel de los grandes terratenientes como líderes de la mejora del sector. De hecho, esta revista (descripta positivamente como "un periódico para el agricultor amateur y deportista, más que para el hombre que trabaja duro"),[149] que se propuso contribuir a educar a los estancieros, una y otra vez celebró la figura del ganadero aristocrático que emulaba al terrateniente británico. Otras revistas menos pretensiosas, como *La Agricultura* o *La Semana Rural,* no eran sin embargo menos entusiastas cuando juzgaban a los grandes terratenientes progresistas, a punto tal que dedicaron secciones enteras a trazar estilizados perfiles biográficos de muchos de ellos, a poner de manifiesto sus logros, y a describir sus estancias. Estas publicaciones siguieron con atención la expansión de la producción granífera. Pero es indudable que todo lo relacionado con la ganadería conformaba el principal foco de interés de sus editores, que a veces eran ellos mismos productores ganaderos y que, en la mayor parte de los casos, tendían a identificarse con los puntos de vista de los terratenientes progresistas.

En este punto, es preciso hacer una breve aclaración. Durante los años del cambio de siglo, la producción granífera creció a un ritmo notable. En 1895 la superficie cultivada en la provincia de Buenos Aires rondaba el millón de hectáreas; para 1907 había alcanzado los tres millones, y se acercaba a los cinco en 1913. Gracias a este avance, en vísperas de la

Primera Guerra Mundial la agricultura había desplazado a la ganadería como la fuente principal de las exportaciones argentinas. A pesar de esta gran expansión, que modificó sustancialmente el perfil productivo de la pampa, la fuerte identificación entre clase alta y producción ganadera se mantuvo, cristalizada en sus rasgos básicos. Ello no se debía sólo a que durante esa época la ganadería también atravesó un período de rápido desarrollo y sofisticación. En esos años, la elite también comenzó a observar la expansión del cultivo y el nuevo mundo que este contribuía a crear con cierta ambivalencia. Desde los tiempos coloniales, siempre se había considerado que la agricultura era una actividad culturalmente superior a la ganadería. Muchas veces se había argumentado que iba a ser el cultivo del suelo, y no la cría de ganado, lo que permitiría civilizar la pampa. Durante las décadas de 1870 y 1880, esta creencia fue horadada, pues entonces la ganadería reformada se reveló como el agente más efectivo de transformación rural en la pampa (con la excepción de los distritos de frontera de Santa Fe, donde la agricultura dio lugar a la aparición de un nuevo mundo de pequeños propietarios). De este modo, la supuesta superioridad de la agricultura comenzó a ser de hecho cuestionada. Ello se reafirmó en los años noventa, cuando la producción cerealera avanzó rápidamente en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos agrícolas. El cuadro que entonces tomó forma indicaba que esa expansión impetuosa daba lugar a prácticas culturales menos sofisticadas que las que predominaban en la ganadería reformada.

En efecto, la pampa presentaba un caso particularmente curioso de una agricultura técnicamente más sencilla que la ganadería, lo que contrasta con lo que sucedía en las principales comarcas de Europa Occidental y América del Norte. La agricultura pampeana, muy mecanizada, pero que requería de trabajos culturales muy superficiales y sumarios, ofrecía poco margen para la innovación técnica. Para aquellos que carecían de capital o de conocimientos, resultaba más sencillo ingresar en el negocio agrícola que en el ganadero, pues allí podían hacer valer su principal recurso: el trabajo familiar. En consecuencia, los principales protagonistas de la agricultura de exportación fueron productores de escasos medios, en su mayoría arrendatarios, que ingresaron en relaciones de subordinación con los dueños de la tierra, las compañías colonizadoras, los proveedores de crédito e insumos, etc. Durante varias décadas, la agricultura ofreció oportunidades de enriquecimiento para estas figuras subalternas, pero en tanto aparecía como técnicamente poco sofisticada y al mismo tiempo dominada por sujetos sociales ajenos al mundo de la elite, nunca logró constituirse como una actividad prestigiosa.

En consecuencia, si bien la agricultura se tornó cada vez más importante en la canasta de productos de exportación, y como fuente de renta para los propietarios rurales, estos terminaron por rechazarla como una actividad inferior, propia de agricultores incultos, y permanecieron culturalmente identificados con la ganadería, en especial con la cría de animales de raza. El "Rey del Trigo" argentino no fue un gran terrateniente modernizador, sino un inmigrante, Giuseppe Guazzone, que nunca se insertó en la elite local. De hecho, hubo pocas grandes unidades de producción agrícola operadas por sus dueños como empresas centralizadas. Tras una etapa inicial en la que los terratenientes dirigieron activamente la introducción masiva del cultivo de granos, para el cambio de siglo muchos de ellos se habían convertido en simples perceptores de renta de tierras arrendadas a pequeños y medianos cultivadores. Pero la ausencia de un grupo de grandes empresarios ligado a la producción granífera, así como su simplicidad técnica, impidió que el lugar de los terratenientes progresistas como líderes de la modernización rural fuese desafiado por la expansión agrícola. En síntesis, la expansión agrícola que sucedió a la Crisis del Noventa contribuyó a incorporar un nuevo rubro de actividad de la mayor importancia económica y a mejorar las finanzas de muchos terratenientes, pero no modificó demasiado su identificación primordial con la tierra y con el mundo de la ganadería consagrada en la década de 1880, y que desde entonces conformó un rasgo definitorio de lo que algunas visiones críticas posteriores calificaron como una "aristocracia con olor a bosta".[150]

Para el cambio de siglo, la confianza en el potencial del sector rural se tornó sentido común. Ello se advierte, por ejemplo, al observar la evolución de los precios del suelo. Después de la crisis de la primera mitad de los años noventa, la expansión agrícola y ganadera impulsó un alza sostenida de las cotizaciones de la tierra. Se ha estimado que en la provincia de Buenos Aires estas se triplicaron entre 1894 y 1903, y luego continuaron subiendo a un ritmo igualmente veloz.[151] Para comienzos del nuevo siglo, los contemporáneos no abrigaban duda alguna sobre el valor de la tierra, que se había vuelto otra vez una inversión segura y rentable (para muchos de ellos, por lejos la más segura y rentable en el largo plazo). Los Senillosa, a quien Jorge Sábato ha retratado erróneamente como miembros típicos de una elite económica diversificada, no podrían haber tenido mayor confianza en las ventajas económicas que reportaba la tierra, a la que se aferraban con singular tenacidad.[152] Así, en 1904, Eduardo le relataba a su tío que su hermano

> Felipe aún tiene a Santa Isabel sin arrendar pero ya le ofrecen el doble de lo que antes le pagaban. Por su campo en La Pampa le han ofrecido el triple de lo que le costó, por los del Chubut le han querido dar $10 000 la legua. Tú sabes como es Felipe, nada quiere vender. Yo le digo que venda todo menos Santa Isabel y entonces con todo lo que saque se compre una casa central para vivir y con todo centavo que le caiga a la mano ensanche su campo en Mercedes, pero él no cede: "¡vender tierra es un pecado!", y de ahí no lo saca nadie.[153]

De hecho, Felipe se describía a sí mismo como "más fisiócrata [*sic*] que el buen [David] Ricardo", y argumentaba que "la tierra se compra pero no se vende, aun a riesgo de comer cáscaras, pues que la renta no está en proporción con el capital que representan los campos ni muchísimo menos".[154] Su padre no estaba menos convencido de las ventajas de adquirir tierra, y en 1906 observaba que "cualquier capital empleado en tierra aunque por ahora no produjese renta es un gran negocio. A la vuelta de un par de años se encuentra en el valor de ella acumulado los intereses y una pingüe ganancia".[155] Para Pastor Senillosa, como luego recordaría su viuda, la tierra era "una mina, la vaca lechera".[156] Para 1910, la opinión de un gran terrateniente que insistía en que "en Argentina los cuerdos son los que conservan sus tierras y compran nuevas; los locos los que las venden"[157] era tenida por una verdad de sentido común.

La tierra era una inversión segura y rentable, que podía ser arrendada a productores ganaderos o agrícolas, o hipotecada para obtener crédito. Por sobre todas las cosas, aseguraba valorización en el largo plazo (un fenómeno que contrasta marcadamente con lo que sucede en otros sectores de la economía, donde los activos siempre tienden a depreciarse con el tiempo). Es por ello que no debe sorprender que en una fecha tan tardía como 1905, y a pesar del continuo proceso de la fragmentación de la propiedad rural impulsada por un mercado de tierras particularmente dinámico y por la legislación argentina que obligaba a la división del patrimonio de modo igualitario entre los herederos, un cuarto de la tierra en la provincia de Buenos Aires todavía estaba concentrada en unidades de más de 10 000 hectáreas (la situación en otras provincias pampeanas era similar).[158] Las ventajas económicas de la propiedad rural eran grandes, y explican bien por qué, en este período, los empresarios rurales siguieron apostando por la tierra, y también por qué aquellos que habían hecho dinero en otras actividades, como la industria, solían invertir parte de sus excedentes en propiedad fundiaria. La tierra también

tenía un plusvalor cultural, al que pocos miembros de la elite (o de los que aspiraban a integrarla) podían permanecer indiferentes. Ni los Bunge, la dinastía intelectual más prominente de la Argentina del período, fue indiferente al llamado de la tierra; el propio Augusto, un destacado intelectual y líder socialista, sentía especial aprecio por la vida rural. En esos años, Augusto le escribía a su hermana Delfina que "estoy en una estancia muy modesta pero el trato encantador que se recibe y la paz del campo la hacen deliciosa para mí, que adoro el campo".[159]

En este contexto, es comprensible que, después de los años más severos de la depresión de comienzos de la década de 1890, muchos terratenientes recomenzaran los proyectos de ampliación o mejora de sus residencias rurales. La expansión de los sistemas de comunicación y el alza de los ingresos rurales empujó este proceso.[160] Para entonces, la gran ola de construcción de líneas telegráficas y ferroviarias de fines de los ochenta y comienzos de los noventa había vuelto más sencillo el acceso, incluso a los distritos más remotos de la pampa.[161] Todo ello hizo que los propietarios rurales se vieran impulsados a invertir más dinero y a gastar más tiempo (en particular, tiempo de ocio) en sus establecimientos rurales.

El uso de la estancia como residencia veraniega formaba parte de un nuevo estilo de vida que revela un profundo cambio en el sistema de valores de los sectores económica y socialmente predominantes. Hasta los años ochenta, el verano solía pasarse en las quintas que rodeaban a la ciudad, o en la ciudad misma.[162] Emilio Daireaux señalaba en 1884 que "es muy escaso el número de personas que dejan la ciudad para pasar en el campo la estación cálida que no es acaso la más bella".[163] En los noventa, veranear en la estancia se volvió distinguido, por lo que a partir de esos años las descripciones de estancias suelen hacer referencia a este nuevo aspecto de la sociabilidad de elite. Para que las estancias pudieran alojar a dueños cada vez más prósperos y exigentes, la realización de grandes mejoras edilicias se tornó necesaria. La estancia de Vicente Casares fue transformada en esos años. En 1892, tenía un "grandioso parque de 50 cuadras, enteramente trazado, bien que estado de simple formación".[164] Tres años más tarde, los trabajos estaban muy avanzados, y la estancia, con su "extenso parque" y sus "hermosos jardines", era descripta por *La Agricultura* como "alegrada en tiempos del estío y de las vacaciones por un grupo encantador de frescas y preciosas criaturas".[165] En esos mismos años, Manuel Guerrero edificó una casa y un gran parque en La Raquel, sobre el Río Salado, que luego ampliaría en 1905. Allí los Guerrero pasaban "cinco meses enteros" al año.[166] Rafael Herrera Vegas, un venezo-

lano que se integró en la clase alta argentina y fue por décadas uno de sus médicos más prestigiosos, invirtió parte de su ingreso en la compra de tierra y para la década de 1890 se encontraba retirado, pasando "muchos meses del año" en su Cabaña Luján.[167] Para entonces, los Sansinena veraneaban regularmente en la residencia que habían edificado en Los Dos Talas.[168] En la década de 1890, Tomás Severino de Anchorena seguía viviendo, como era habitual algunas décadas antes, en el piso superior de una casa de altos de su propiedad, cuya planta baja, ocupada por un almacén, lo proveía de una renta urbana. Pero ya había hecho construir una importante residencia en su Tres Lomas. En esta estancia de 24 000 hectáreas que había sido el "generador de todos los bienes y de la amplia vida llevada en todo momento" por su familia, Anchorena había mandado edificar "una casa habitación de 2 pisos, construida de materiales de primera calidad", con diez dormitorios.[169] La profundización, a veces incluso la creación de las raíces rurales de la elite en este período, se advierte también en guías sociales como la *Guía de Familias* de 1899, que ofrecía información tanto sobre las residencias urbanas como sobre las rurales de las familias de clase alta.

La construcción de una residencia confortable y espaciosa en la estancia de Pastor Senillosa, en el partido de Ayacucho, ofrece un buen ejemplo de esta transformación, algunos de cuyos detalles podemos seguir gracias a la abundante correspondencia de la familia en Buenos Aires con los jóvenes que se educaban en los Estados Unidos. Hasta comienzos de la década de 1890, San Felipe no tenía una casa en la que los Senillosa pudieran alojarse, y de hecho sólo era visitada por los varones adultos de la familia por motivos siempre vinculados a su funcionamiento como empresa.[170] A comienzos de la década de 1890, la estancia sufrió un gran cambio, pues entonces fueron construidos un gran parque y una casa confortable, donde por primera vez los Senillosa pasaron la estación estival en 1895. Para ellos, como para muchos otros terratenientes, se trataba de una experiencia novedosa. "A mamá y los nenes les ha sentado divinamente el campo. Van ya tres meses que están y no han sentido ni un resfrío siquiera, así que están contentísimos con la estancia, pensando en volver el verano próximo, con más comodidades, puesto que estarán listos los chalets y el nuevo parque", escribía uno de ellos cuando el primer verano de estancia llegaba a su fin.[171] Después de 1895, los Senillosa se desprendieron de su quinta suburbana y concurrieron regularmente a San Felipe de diciembre a abril (salvo cuando se encontraban en Europa). El veraneo en la estancia no atraía sólo a los varones de la familia; las mujeres no eran menos entusiastas al respecto. "Estamos ya en abril y

no permito se hable de viaje a la ciudad", Emilia Chopitea, la esposa de Pastor, le escribía a su hermano.[172] Para el cambio de siglo, la casa contaba con línea telefónica y un equipo generador de electricidad, un gran parque, capilla, cancha de tenis, y llegó a albergar (incluido el personal doméstico que acompañaba a las visitas) unos cuarenta huéspedes.[173] Para entonces, los Senillosa creían que su San Felipe "se puede contar entre las estancias de mayor embellecimiento".[174]

Formar parte de este grupo selecto no era sencillo y de hecho la estancia de los Senillosa no se hallaba entre las más impactantes. La notable prosperidad de la década y media que precedió a la Gran Guerra hizo que el gasto en la ampliación y mejora de las residencias de la elite se volviera habitual. Al igual que otras clases propietarias latinoamericanas, los grandes terratenientes del cambio de siglo se lanzaron a edificar fastuosas mansiones en el nuevo Barrio Norte y en Palermo. Lo que llama la atención, sin embargo, es la construcción de residencias rurales no menos extravagantes. Casi sin excepción, las grandes residencias de la pampa fueron edificadas (o profundamente remodeladas) en este período: Villa María, de Celedonio Pereda; La Biznaga, de los Blaquier; Huetel, de Concepción Unzué de Casares; La Candelaria, de los Piñeiro; y Chapadmalal, de Miguel A. Martínez de Hoz, se cuentan entre las más magníficas, y constituyen verdaderos testimonios de la existencia dorada que llevaban sus dueños. Estas y otras grandes casas de campo se erigieron en medio de parques y jardines no menos impactantes, como el que Concepción Unzué hizo construir en Huetel. En esta estancia de más de 65 000 hectáreas su dueña mandó hacer un parque de 400 hectáreas, donde plantó unos 400 000 árboles. Muchos de estos parques fueron diseñados por Charles Thays, el gran paisajista del período.[175]

Un establecimiento modelo, sin embargo, era algo más que un lugar de recreo. Para una elite socioeconómica tan orientada hacia el mundo de los negocios, lo que volvía a un terrateniente prestigioso era, en primer lugar, el éxito empresarial, en especial (y esto seguramente valía más para los entendidos en los asuntos rurales) si este era obtenido en el terreno más exigente, costoso y técnicamente sofisticado: el de la cría de reproductores de raza.[176] Una descripción contemporánea de la producción de animales finos sugiere bien qué imágenes evocaba la cabaña. De acuerdo con *El Campo y el Sport,* se trataba de "un negocio; y mucho más que eso todavía [...] escuelas de trabajo; y mucho más aun [...] campos de honor. De allí está surgiendo la aristocracia argentina, la noble raza del terrateniente ganadero y agricultor".[177] Para Pastor Senillosa,

esta actividad también tenía un atractivo particular: "Papá obtuvo primer premio en la Feria Exposición con una yunta y una potrilla de la estancia ganó el 14 una carrera en el Hipódromo. Te lo digo por si cuando escribes quieres halagarlo", le recordaban a su cuñado en 1899.[178] Los comentarios de James Bryce sugieren que lo que gratificaba a Senillosa no era menos importante para sus colegas. Este miembro de la aristocracia británica observaba que "tener animales de primer orden es aquí una cuestión de orgullo, quizá más que una cuestión de negocios".[179] Desde la perspectiva de muchos terratenientes, orgullo y negocios, prestigio y ganancias, tal vez no entraban en contradicción. La descripción de Miraflores, la estancia de Ezequiel Ramos Mexía, sugiere la "íntima unión de la teoría con la práctica, de lo positivo con lo agradable, de lo ideal con el negocio", al que muchos terratenientes aspiraban.[180] El joven Adolfo Bioy, que pasó largas temporadas en la estancia de Ramos Mexía a comienzos de siglo, recordaba que

> Miraflores era la estancia modelo que Ezequiel Ramos Mexía había realizado en treinta años de trabajo inteligente, introduciendo los métodos más modernos de cultivo de los campos, así como los sistemas más perfeccionados de crianza del ganado y de su mestización, hasta llegar a la pureza [...] La vida que llevábamos en esos veraneos [...] era casi de *château*; de sala, corredor y parque; a la bombacha y la bota las reemplazaban los *breeches* y polainas, al pañuelo al cuello la corbata a doble vuelta, al chambergo la gorra jockey.[181]

Miraflores era una de aquellas estancias en las que, como Paul Groussac había observado con aprobación algunos años antes, todo lo que recordaba el pasado primitivo de la pampa había desaparecido, y en las que la vestimenta de etiqueta era de rigor a la hora de la cena.[182] En ese mundo, señalaba con orgullo Ramos Mexía, "¡ando como pez en el agua!".[183] Este prominente miembro de la clase terrateniente, destacado productor agrícola, varias veces secretario de estado y abogado de diversas empresas ferroviarias británicas, fue el primer latinoamericano en ser aceptado como miembro de la Real Sociedad de Agricultura de Gran Bretaña. Ramos Mexía también presidió la Sociedad Rural por varios años en la década de 1900, cuando no era raro que esta fuese descripta como "la sociedad más poderosa en esta parte del mundo".[184] En 1910, cuando la Argentina se preparaba para celebrar su centenario, esta institución reunía unos tres mil asociados, entre los cuales hallamos a casi todos aquellos que disfruta-

ban de riqueza y prestigio social, así como a muchos otros que deseaban imitarlos. Para entonces, su gran exposición anual, se había convertido "quizá en el evento más importante del calendario argentino".[185]

El ascenso de la Sociedad Rural no es más que un aspecto de un proceso de cambio mucho mayor: aquel que impulsó la transformación de la actividad rural en la pampa, y que creó las condiciones que hicieron posible la identificación de la elite argentina con los valores del mundo rural y ganadero. En el grupo económica y socialmente predominante del cambio de siglo ya no quedan rastros de las visiones, todavía comunes en las décadas de 1860 y 1870, que describían a la cría de ganado como un obstáculo para el desarrollo económico y la vida civilizada, y a la agricultura como una empresa técnica y culturalmente superior a la ganadería. Cuando en 1908 Herbert Gibson y Godofredo Daireaux trazaron un panorama de los cambios que la pampa había atravesado en el medio siglo previo, ambos señalaron que la construcción de una nueva civilización rural no se había fundado sobre el arado. Por el contrario, afirmaban, esta había sido impulsada, en primer lugar, por la transformación de la ganadería.[186] Habían sido los grandes estancieros modernizadores los que habían constituido la cara más visible de ese notable proceso de cambio rural. Ello había hecho a la ganadería tan central a la definición misma de la clase propietaria que la Sociedad Rural podía por fin vanagloriarse de que "nada hay más netamente nacional, en este país [...] que la ganadería, cuya culminación entre nosotros es ya evidente".[187]

Como resultado de este proceso, una clase terrateniente profundamente renovada se había colocado en el centro mismo de la vida nacional. Desde esa augusta posición, dictaba el tono de la sociabilidad de clase alta, extendía su poderosa influencia más allá de las filas de los mayores privilegiados de ese orden, y ejercía una considerable influencia sobre la elite política que regía los destinos de la República. Durante la década que precedió a la Gran Guerra, la economía creció a una tasa que ha sido estimada en cercana al 8% anual, una cifra que pocos países del momento podían emular.[188] Para 1913, las exportaciones argentinas, compuestas casi exclusivamente por productos de la pampa, representaban cerca de un tercio de las ventas al exterior de toda América Latina. No era un logro menor para un país que, como la Argentina de entonces, tenía menos del 10% de la población de la región.[189] Ello explica que el ingreso per cápita fuese casi cinco veces más alto que en Brasil, y que, si bien estaba lejos del de otros países de poblamiento reciente como Canadá o Australia, se ubicase por encima del promedio de Francia.[190] Datos como este confirmaban que la Argentina podía calificarse con

cierta justicia como una nación exitosa. Los grandes terratenientes habían presidido sobre una impetuosa expansión rural que había transmitido su dinamismo a otros sectores de actividad y a otras regiones, y que había dado lugar a la emergencia de nuevas fortunas, construidas en el sector rural, pero también en otras esferas (en el comercio, las finanzas, la industria). De todas maneras, varias décadas de incremento desigual pero a largo plazo sostenido del precio de la tierra habían dejado por legado una situación en la que el éxito en otros terrenos de actividad difícilmente podía generar una masa de riqueza capaz de emular los niveles de consumo conspicuo de los mayores señores de la pampa, mucho menos permitir compras masivas de tierra como las que conformaron la base principal y más sólida de las fortunas de las grandes familias terratenientes. Es por ello que una clase alta que apenas treinta o cuarenta años antes había permitido que inmigrantes exitosos como los Santamarina, los Duggan, los Duhau o los Luro ingresaran en sus estratos más selectos gracias al puro poder del dinero, para el nuevo siglo se había tornado cada vez más exclusiva y elitista. Como varios observadores entonces percibieron, los grandes terratenientes se estaban separando del resto de la sociedad argentina más claramente que en cualquier momento del pasado.[191] Los estratos superiores de la clase terrateniente incluso encontraban a las elites europeas mucho más receptivas a la nueva riqueza proveniente de esta parte del mundo. Algunos ya se educaban en colegios como Eton, e incluso habían logrado ingresar al mercado matrimonial de la nobleza continental.[192]

Para los argentinos de comienzos del siglo XX, la clase terrateniente aparecía como pilar del orden socioeconómico. El hecho de que la llegada a la cima de la sociedad *implicara casi obligatoriamente* la compra de una estancia indica bien la seducción que la tierra ejercía sobre aquellos que deseaban integrarse a su estrato superior. Incluso los líderes de la Unión Industrial, que entonces ya era reconocida como la más importante asociación de empresarios manufactureros del país, aceptaban sin ninguna reserva que los grandes terratenientes conformaban "el exponente más alto de la cultura ciudadana, la cúspide de la pirámide social, el punto de mira hacia el cual convergen las miradas de las capas inferiores".[193] Invariablemente, los que visitaban el país a comienzos de siglo destacaban la centralidad de los terratenientes en la vida argentina, que muchas veces consideraban, erróneamente, como un dato presente desde tiempos inmemoriales. Georges Clemenceau, por ejemplo, observaba en 1910 que la Argentina era "un país donde todo hombre que se respete se debe a sí mismo poseer algunas leguas cuadradas".[194] La inclinación

por imitar rasgos de este grupo social era también señalada por James Bryce, que se vio igualmente sorprendido por la importancia que los emprendimientos rurales tenían en la vida de las clases propietarias. Para este observador, no era la participación en la vida pública, o la actividad financiera o industrial, sino "la estancia, sus ganados y sus cosechas, y las carreras de caballos, con sus apuestas, las que están siempre en la mente y las conversaciones, y las que moldean el carácter de la clase más adinerada".[195]

"Todos los 'grandes argentinos' con quienes he tenido el honor de conversar me han hablado de sus estancias con un lujo de detalles que mostraba su atención siempre presente y su actividad en busca de mejoras".[196] Estas afirmaciones de ese hombre de mundo que fue Georges Clemenceau sugieren bien que, para 1910, todas las ambigüedades propias de la relación entre la elite argentina y la tierra eran cosa del pasado. Y es por ello que, como afirmaba Mabel Senillosa en 1907, "un lacayito, lindos caballos, buena casa confortable" junto con "una agradable estancia de recreo" eran necesarios para satisfacer "las vanidades sociales".[197] Ello indica que, para entonces, la recreación de una clase propietaria urbana que por décadas había considerado a las tareas rurales como actividades poco menos que denigrantes, laboriosamente iniciada en los años en que la Sociedad Rural había sido fundada, había sido alcanzada.

Si fuese necesario buscar un acontecimiento que simbolice la comunión final entre la elite y la tierra, quizás este debería ser la elección de Joaquín Samuel de Anchorena como presidente de la Sociedad Rural. En 1866, los Anchorena asistieron a la creación de la Sociedad Rural con notoria indiferencia, y sólo algunos años más tarde algunos miembros de la más famosa dinastía propietaria del siglo XIX se sumaron a sus filas. Durante largas décadas, muchos de ellos permanecieron como ejemplos típicos del terrateniente ausentista que los ruralistas deseaban transformar. Cuando Juan Anchorena falleció en 1895, se lo recordó como uno de los hombres más ricos del país (en su patrimonio se contaba la propiedad de cerca de un millón de hectáreas). Su muerte no fue lamentada por muchos, en gran medida porque este anciano era considerado como uno de los últimos exponentes de un tiempo oscuro, de una era que estaba fatalmente condenada a morir. Uno de los obituarios que le dedicó la prensa afirmaba, con franca hostilidad, que "no podríamos afirmar que sus acciones en pro del bienestar de sus contemporáneos, o sus propios compatriotas, estuviesen en relación con la riqueza que el país le confió, o al menos le permitió disfrutar. Dueño de muchas estancias, nunca visitó ninguna de ellas".[198]

Dos décadas más tarde, Joaquín Samuel de Anchorena fue ungido presidente de la Sociedad Rural. Este hombre, el primer Anchorena en ocupar la presidencia de esta asociación, pertenecía a un tipo humano muy distinto. Un cabañero de renombre, un modelo de estanciero progresista, por largo tiempo decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, miembro destacado del Jockey Club (y también su presidente), alguna vez intendente municipal, Anchorena fue elegido para ocupar la presidencia de la Sociedad Rural en tres ocasiones consecutivas. Este logro, para el que no existían antecedentes, da cuenta de la transformación del clan terrateniente más prominente de la historia de la República. Colocado en un contexto más amplio, también ilustra la metamorfosis de una elite que eligió a un hombre como Joaquín de Anchorena –símbolo de riqueza y prestigio, tradición y modernidad– para regir los destinos de la más prestigiosa institución terrateniente en su momento de apogeo.

3. Terratenientes y política en el cambio de siglo

La profundidad y la velocidad de la transformación social impulsada por la expansión agraria, que alcanzó su momento de mayor dinamismo desde la década de 1880, produjeron una diferencia cualitativa en la historia del proceso de formación de clases en la Argentina. En esos años, la economía de mercado terminó de consolidarse, y los contornos de la sociedad capitalista se volvieron más nítidos. El desarrollo de una clase terrateniente más poderosa, y también más consciente de sí misma, fue un producto típico de este período. Por un tiempo, sin embargo, algunas consecuencias políticas de este cambio permanecieron ocultas. A lo largo de la década de 1880, los estancieros mantuvieron una notable unidad de miras: cualesquiera hayan sido sus sentimientos personales hacia la administración del PAN, todos parecían advertir muy bien que desafiar al gobierno era una tarea que estaba más allá de sus posibilidades. Si bien las críticas a las autoridades no faltaron en esos años, los estancieros nunca mostraron interés en adoptar una actitud más comprometida en la vida pública. Las razones son comprensibles. El orden estatal nacido en 1880 no sólo era demasiado poderoso como para ser desafiado; el clima particularmente favorable para el desarrollo de la actividad rural que el PAN había contribuido a crear también hacía que el activismo ruralista resultara menos urgente que en el pasado. Como muchos estancieros entonces percibieron con claridad, los años ochenta fueron una década ventajosa para hacer negocios, y a la vez mala para impulsar cualquier proyecto de activismo político.

Durante esos años de crecimiento y estabilidad, este modo de relación entre terratenientes y estado produjo beneficios para ambos: permitió a los empresarios concentrar sus energías en sus asuntos privados, y le aseguró a la nueva coalición dominante la adhesión, no siempre activa pero en todo caso bien firme, de la elite socioeconómica. Los años ochenta, sin embargo, terminaron en una fuerte depresión económica, que se acompañó de una crisis política no menos profunda. La expansión económica se vio súbitamente interrumpida, y con ello creció el número de

los descontentos. En consecuencia, las fuerzas que habían contribuido a cementar la alianza entre terratenientes y orden político se debilitaron. A aquellos estancieros que afirmaban que un grupo social que había crecido en poder y prestigio debía ocupar una posición política más prominente que la que hasta entonces poseía, la convulsionada década de 1890 les ofreció la posibilidad de agitar y movilizarse en favor de la creación de un lazo más estrecho entre terratenientes y poder político. Para aquellos que veían a la participación política con menos entusiasmo, que sin duda conformaban el grupo mayoritario entre los terratenientes, la situación también había cambiado radicalmente, pues el costo de la indiferencia parecía cada vez mayor. Aun a disgusto, también a ellos la crisis política y económica de la primera mitad de los años noventa los obligaba a considerar nuevas alternativas al dominio autonomista.

Este contexto explica por qué una clase terrateniente renovada y más poderosa impulsó en 1893 la formación de un partido de clase, bautizado con el nombre de Unión Provincial. La historia de esta organización, que contó con el apoyo decidido de la Sociedad Rural, indica bien que la relación entre tierra y política era compleja incluso cuando el poder de los terratenientes se encontraban en su apogeo. La experiencia de la Unión terminó con un humillante fracaso, y de allí en adelante la Sociedad Rural se mostró remisa a participar de manera directa en la política electoral.

Este no fue el único problema que afectó a los terratenientes del período. La década de 1890 también asistió a la definición de un nuevo espacio de tensión entre terratenientes y estado. En esos años, el proceso de crecimiento industrial abrió el camino para el surgimiento de nuevos grupos empresarios, así como de nuevos puntos de vista y grupos de interés que tuvieron influencia en la definición de la política económica. Ello suscitó una discusión muy viva en torno al problema del proteccionismo. La emergencia de un clima industrialista, particularmente fuerte en el Congreso, causó cierta inquietud entre los grupos terratenientes, pero todos los proyectos de crear un partido librecambista terminaron en el fracaso. Para el cambio de siglo, nuevas circunstancias históricas modificaron la forma en que los estancieros definían sus intereses y su relación con el sector industrial y la política económica proteccionista, y en ese nuevo contexto sus antiguos temores dieron paso a una actitud menos hostil. Durante la expansiva década de 1900, los terratenientes llegaron a la conclusión de que el crecimiento de la industria no implicaba amenaza alguna a su posición privilegiada. Y sin embargo, como lo indica la fundación de otro partido de clase en 1911,

la relación de este grupo social con la elite política continuó plagada de tensiones hasta el final del orden oligárquico.

LA UNIÓN PROVINCIAL

A comienzos de la década de 1890, las referencias a la falta de poder político de los estancieros se volvieron corrientes. En diversas ocasiones, distintos dirigentes ruralistas llamaron la atención de sus pares sobre las diferencias que los separaban de los productores agrarios de Europa y los Estados Unidos, a quienes veían como actores políticos de peso. En la asamblea anual de 1891, el presidente de la Sociedad Rural censuró duramente a los gobernantes, destacando el poder e influencia de los agricultores norteamericanos.[1] A fines de ese año, Ernesto Quesada, el estanciero y hombre de letras, firmó un artículo en *Anales* en el que criticaba de manera abierta a Herbert Gibson y a aquellos de sus colegas que se quejaban de los problemas rurales pero que se abstenían de participar en los asuntos públicos. Para asegurar una buena administración, argumentaba Quesada, "sólo se requiere que el Sr. Gibson y todos los que tienen intereses en la campaña ó que la habitan, intervengan honestamente en elegir autoridades adecuadas".[2] La prensa también colaboró en la creación de un clima de denuncia, que a mediano plazo se revelaría favorable para el ingreso de los terratenientes en la arena política. El *Periódico del Estanciero*, por ejemplo, urgió a las clases poderosas a salir de su pasividad, argumentando que "el elemento conservador está obligado a actuar seriamente, y puede y debe hacerlo en homenaje a la felicidad de todos. Es tiempo ya de que abandone esa actitud de mero espectador, que no cuadra en absoluto a sus intereses".[3]

Con el correr de los meses y la profundización de la crisis económica, los argumentos que insistían en la necesidad de impulsar a los terratenientes a la acción ganaron fuerza. La caída de Juárez Celman en el invierno de 1890 había dejado una escena política muy fragmentada, en la que ningún partido tenía primacía.[4] Uno de los intentos más serios de reorganizar al PAN, entonces quebrado en varias facciones, tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, que había permanecido al margen del alzamiento de 1890. Julio Costa, el gobernador autonomista de este estado, había heredado una importante fuerza política, que a su vez reforzó con vistas a competir por la presidencia en 1892. Gracias a su control absoluto del gobierno provincial, Costa construyó una poderosa maquinaria

alimentada con los recursos del estado. En cada elección, su Partido Provincial podía contar, afirmaba uno de sus críticos, con "la ayuda de las bayonetas provinciales, y los votos de los barrenderos, los matarifes y los empleados provinciales".[5] Si bien el gobernador y sus aliados modernistas no pudieron hacerse con la presidencia en 1892, de todas maneras conservaron a Buenos Aires bajo férreo control, y la mantuvieron así en un clima de creciente aislamiento y autoritarismo.[6] En su mayoría, la opinión pública consideraba ilegítimo al gobierno de Costa, y otro tanto hacían las fuerzas de oposición: ello, junto con la extrema debilidad en la que había caído el gobierno federal, hizo que la violencia volviese a conformar (como había sucedido en el período previo a 1880) un rasgo característico de la competencia partidaria. A comienzos de 1893, los seguidores de Costa se impusieron violentamente en un llamado electoral, en el que finalmente la oposición decidió abstenerse. Para ese momento, las principales fuerzas de oposición, los mitristas y los radicales, ya habían decidido que no valía la pena concurrir a elecciones, y se dispusieron, sin más trámite, a preparar un levantamiento armado.[7]

Para entonces, la crisis económica, iniciada hacia fines de la década anterior, se había profundizado. Los precios de la tierra cayeron más del 60% entre 1889 y 1891, y permanecieron bajos por tres o cuatro años.[8] Como consecuencia, los terratenientes vieron que el valor de su principal activo se reducía a menos de la mitad. La caída de los precios de la lana y los cereales también contrajo su ingreso. La provincia no pudo servir su deuda, y cesó sus pagos. Los bancos Hipotecario y de la Provincia se vieron obligados a cerrar sus puertas, lo cual afectó seriamente el mercado de capitales.[9] Estos bancos habían sido una importante fuente de crédito para la expansión de la actividad rural en la década de 1880, y cayeron cuando la provisión regular de crédito barato era más necesaria que nunca. El pánico creció, y con él vinieron las recriminaciones. Las acusaciones de corrupción gubernamental se escucharon por doquier. En 1891, un terrateniente habitualmente moderado como Emilio Frers le escribía a un amigo que "en los últimos días nos ha tenido a mal traer, aquí, la idea de la liquidación del Banco de la Provincia, el coloso argentino que era nuestro orgullo y que tantos servicios ha prestado al país [...] ¿no le vienen impulsos de pedir una colgatina de juaristas [...] y todos los demás *istas* que nos han traído o han contribuido a traernos esto?".[10]

Desde la perspectiva de los terratenientes, la percepción de que el gobierno se encontraba totalmente aislado de la opinión pública y de que actuaba irresponsablemente se tornaba muy inquietante precisamente

porque las condiciones políticas y económicas que les habían permitido prosperar en la década anterior se hallaban amenazadas. Es comprensible entonces que el malestar ganara a muchos de ellos. Así lo testimonia una nota de *La Prensa*, que informaba, a mediados de 1892, que "la situación política y administrativa de la provincia es objeto de la censura unánime de la opinión pública [...] El gobierno camina por el peor de los senderos, acentuando día a día su divorcio con la opinión [...] Es necesario oír lo que se habla en los centros de hacendados para formarse una idea de las impresiones del gremio y del temple de su espíritu respecto de las cosas de la Provincia".[11]

Por un tiempo, los terratenientes no hicieron otra cosa que quejarse y protestar. Su actitud cambió luego de los levantamientos del invierno de 1893. A mediados de ese año, el presidente Luis Sáenz Peña, muy debilitado por las desavenencias que dividían a sus principales sostenes, sorpresivamente decidió dejar el gobierno en manos de la oposición. Para ello nombró a un radical, Aristóbulo del Valle, como ministro de Guerra, y lo dotó de poderes que lo volvían un jefe de gabinete de facto. La hostilidad del nuevo ministerio hacia los gobiernos provinciales, que en su mayoría seguían en manos de hombres del PAN, lanzó a los radicales y a los mitristas a la acción, y a fines de julio de 1893 estos se levantaron en armas en varias provincias. En Buenos Aires, la insurrección obligó a Costa a encerrarse en La Plata, donde –rodeado por sus seguidores– se resistió a renunciar. Unos días más tarde, los levantamientos llegaron a su fin cuando Pellegrini, de fuerte influencia sobre el Congreso, volcó al Parlamento contra el ministro Del Valle, a quien el presidente quitó la confianza e instó a abandonar el cargo. Estos sucesos fueron seguidos por una intervención federal que desarmó a los alzados de Buenos Aires.

Sáenz Peña nombró a Eduardo Olivera, entonces presidente honorario de la Sociedad Rural, a cargo de la intervención. Al designar a un hombre de gran prestigio entre las clases acomodadas, Sáenz Peña parecía querer dar una señal de neutralidad, y al mismo tiempo convocar a los propietarios rurales a colaborar en la restauración del orden. De hecho, Olivera designó de inmediato a importantes terratenientes entre sus colaboradores, y llenó los puestos de comisionados municipales (interinamente a cargo de los gobiernos locales) con hombres provenientes de las filas de la burguesía terrateniente. De los 75 nuevos comisionados, al menos 31 pueden hallarse en el listado de socios de la Sociedad Rural confeccionado en 1890; tal vez 7 u 8 más, si bien no eran miembros de esta asociación ruralista, pertenecían a importantes familias propie-

tarias.[12] Los terratenientes nunca habían estado tan bien representados en la administración local.

Este contexto terminó de convencer a un grupo de propietarios rurales de que el momento de entrar de lleno en el pantanoso terreno de la política criolla finalmente había llegado. El prestigio de Olivera, y su simpatía hacia la causa terrateniente, pueden haber impulsado a muchos estancieros a dar los primeros pasos en este sentido. Si bien a poco andar Olivera fue acusado de favorecer a los radicales y a los cívicos, y debió dejar el cargo, su sucesor Lucio V. López, pronto reconocido como un interventor recto e imparcial, era un hombre en quien los terratenientes también podían depositar su confianza. Estas circunstancias ayudan a explicar por qué un inédito proyecto terrateniente de descender sobre la arena política con una fuerza propia cristalizó en ese preciso momento. Pero esta acción debe ser entendida desde la perspectiva más amplia que ofrece el proceso de desarrollo y maduración de la clase terrateniente pampeana.

El factor decisivo que impulsó a los estancieros a tomar parte en la política electoral fue la conjunción de una situación que juzgaban como de alta peligrosidad –una combinación de crisis política y depresión económica– con una nueva forma de percibir su lugar en la sociedad rural y en la Argentina toda. En esos años, su prestigio social, su poder económico y su compromiso con el sector rural se habían profundizado al calor de las transformaciones de la década anterior. Procesos de corto y largo plazo se potenciaron para impulsar a los grandes estancieros a la acción: una clase terrateniente más poderosa y prestigiosa se sintió repentinamente amenazada por una crisis que se desplegaba en varios frentes. Para los estancieros, la combinación de crisis económica y caos político siempre había sido peligrosa, pero situaciones de este tipo nunca les habían dado a aquellos que tenían ambiciones de liderazgo la oportunidad de guiar a sus colegas hacia la lucha política. En 1893, el contexto era distinto, pues los terratenientes, como colectivo, habían ganado poder y confianza en sí mismos. El dinamismo alcanzado por la economía rural en la década de 1880 y la consolidación de la clase terrateniente que resultó de ella crearon las condiciones que hicieron posible esta iniciativa dirigida a redefinir la relación entre grandes estancieros y poder político.

A fines de agosto de 1893, los estancieros comenzaron a organizarse. Entonces *La Prensa* informaba que "un grupo de personas conocidas, formadas en su totalidad por estancieros de los principales de Buenos Aires trabaja ya en la organización de un comité electoral".[13] En el pasado, muchos de los hombres a los que este diario se refería

habían manifestado distintas preferencias políticas. Mariano Unzué, por ejemplo, que en esos momentos ya se destacaba entre los líderes terratenientes, había sido durante largo tiempo simpatizante del general Mitre. Unzué era seguramente apreciado por los cívicos por sus contribuciones monetarias más que por su poder electoral o su capacidad para liderar. Se contaba entre los estancieros más ricos de la Argentina, y dejó a su muerte en 1906 unos $35 millones, cuatro quintas partes de esta cifra en propiedad rural. Aparte de poseer un cuarto de millón de hectáreas, Unzué dejó una hermosa residencia urbana, la "quinta Unzué", que en la década de 1930 pasó a ser la residencia oficial del presidente de la República, y el lugar donde Evita murió. Ezequiel Ramos Mexía, otros de los líderes terratenientes, era un autonomista y un amigo de Pellegrini, y habría de tener una carrera pública más distinguida que la de Unzué (que fue, por sobre todas las cosas, un empresario preocupado por su propio engrandecimiento patrimonial). Sus destrezas técnicas y administrativas le abrieron, en reiteradas oportunidades, las puertas del Congreso, así como también de los ministerios de Agricultura y Obras Públicas. La falta de unidad partidaria, sin embargo, no era vista como un obstáculo por los iniciadores de este movimiento, pues su intención era presentar una candidatura independiente de todas las fuerzas en pugna, concebida como "más administrativa que política".[14] En consecuencia, todos los terratenientes fueron invitados a sumarse, sin que importaran sus compromisos y fidelidades anteriores. Con el fin de afrontar los gastos de la elección, los estancieros aseguraron que reunirían la suma de $1 000 000, equivalente a una décima parte del presupuesto provincial de 1893.[15]

El anuncio del lanzamiento de los terratenientes a la arena política concitó grandes expectativas. "Se inicia la formación de un centro político accidental, independiente, fuera de los partidos, con personas de posición alejadas de sus filas", reportaba con aprobación el diario *La Prensa.* Y el principal diario del país, cuyas simpatías entonces estaban con los radicales, continuaba afirmando que "los hacendados, los propietarios del suelo, las grandes fortunas son fuerzas sanas y con influjo sólido y legítimo en todos los pueblos constituidos de la tierra. [En la Argentina] es deplorable que esos elementos no hagan vida permanente de partido [...] debe celebrarse como un acontecimiento cívico la incorporación de los hacendados a las luchas electorales".[16] Con similar entusiasmo, la *Review of the River Plate* señalaba que "es grato observar que los hombres más ricos de la provincia por fin toman conciencia del hecho de que participar en política es su obligación, pues deben impedir que la horda de especuladores continúe arruinando y robando la provincia a sus anchas".[17]

El partido de los estancieros, bautizado con el nombre de Unión Provincial, no era nuevo sólo porque se proponía movilizar a las clases propietarias. Esta fuerza también constituía una novedad en tanto rompía con algunos axiomas de la tradición política liberal que conformaba la base de la política argentina. El país nunca había asistido a la aparición de un partido de base clasista, y muy pocos estaban dispuestos a sostener que un cambio en ese sentido era deseable, mucho menos necesario. Algunos observadores estuvieron lejos de mostrar entusiasmo con la creación de un partido identificado con un grupo social específico antes que con la sociedad en su conjunto. Es entendible que los voceros partidarios mostrasen mayor preocupación con la aparición de una fuerza de estas características que, inevitablemente, amenazaba su monopolio de la vida pública. *Tribuna,* que expresaba los puntos de vista del roquismo, no veía con simpatía la cristalización de una propuesta que podía "acusar exclusivismo".[18] Este exclusivismo, deploraba también *La Nación,* era contrario a "los preceptos igualitarios que son entre nosotros el fundamento tácito de todas las asociaciones".[19] Pero es importante advertir que, a pesar de todas estas reservas, incluso los voceros partidarios celebraron el descenso de los estancieros desde su augusto lugar hacia la arena política, pues compartían la creencia de que una participación más activa de las clases propietarias era necesaria para mejorar la baja calidad de la vida pública del país. *La Nación,* por ejemplo, enfatizó que "hemos sido los primeros en lamentar la actitud prescindente, la especie de huelga política a que se habían reducido los grandes propietarios [...] Hemos de estar de parabienes de que se hayan decidido, por fin, a hacer sentir el peso de su influencia en las luchas electorales".[20]

Los estancieros de la Unión pronto ganaron el apoyo de una parte significativa de sus colegas. Para mediados de septiembre, dieron a la prensa un manifiesto electoral que llevaba las firmas de más de cien terratenientes, y que comprendía a una gran parte de los principales propietarios de tierra y ganado de la provincia. Los Anchorena, los Unzué, los Luro, los Martínez de Hoz, los Cambacèrés, los Baudrix, los Duggan, los Pradère, los Díaz Vélez, los Santamarina, los Casares y muchos otros estamparon sus nombres.[21] Las principales ausencias eran, probablemente, las de aquellos terratenientes de reconocida identificación con alguna fuerza política. Un ejemplo era el de Leonardo Pereyra, a quien ya hemos visto como presidente de la Sociedad Rural en la década de 1880. Considerado por muchos como el hombre más rico del país (dejaría más de 20 millones de pesos al morir en 1899), Pereyra era un activo militante del partido radical, que lo nominaría como candidato a vicegobernador en las elecciones que se avecinaban.[22]

Habiendo obtenido el apoyo de muchos de sus pares, los hacendados de la Unión se dispusieron a organizar su partido. Esta no era una tarea sencilla, en gran medida porque la mayoría de ellos carecía de experiencia en esos asuntos. Como ya hemos señalado, algunos estancieros contaban con una historia política. Pero se trataba, casi sin excepción, de notables antes que de políticos populares, que no se sentían a gusto ni tenían mayor destreza en la tarea de organizar y movilizar hombres. Ramos Mexía, por ejemplo, cuyos talentos administrativos fueron reconocidos por varias administraciones, más tarde iba a recordar que "las luchas electorales nunca han suscitado mis entusiasmos".[23] E incluso para los "vacunos" (el mote con el que los miembros de la Unión Provincial comenzaban a ser designados) que tenían un pasado militante, el mayor desafío que debían afrontar era construir una base política propia. Para esta tarea, su paso previo por el mundo político no ofrecía un punto de partida demasiado seguro. En la mayoría de los casos, las posiciones que en el pasado habían alcanzado en el Congreso, en la Legislatura provincial, en la administración provincial o nacional, dependían más de sus vínculos con las elites políticas nacional y provincial que de sus credenciales como terratenientes o líderes locales. La tarea que los vacunos debían afrontar en 1893 era ciertamente compleja: debían dotarse de una organización política no sólo independiente, sino también opuesta a las maquinarias políticas existentes.

En décadas anteriores, los estancieros no habían hecho esfuerzo alguno por alcanzar este objetivo, en alguna medida porque advertían, seguramente con razón, su debilidad política. Ello invita a preguntarse si los profundos cambios experimentados por la campaña de Buenos Aires en la década de 1880 habían modificado de forma sustancial su posición. Como vemos visto en el capítulo anterior, en esos años la clase terrateniente sufrió un hondo proceso de recomposición: la creciente especialización del empresariado en la actividad rural profundizó sus raíces en la campaña, y el papel desempeñado por los estancieros como modernizadores de la ganadería contribuyó a mejorar su imagen pública. La confianza y el orgullo que los terratenientes comenzaron a expresar desde los años ochenta sin duda era la fuerza que los impelía a avanzar en esta inédita aventura de creación de una fuerza clasista. Ello explica por qué la Unión Provincial –el primer partido de clase que registra la historia argentina– apareció precisamente en esa coyuntura de crisis. La combinación de un clima de profunda inquietud con otro más permanente de confianza en el valor de sus propias fuerzas, todo ello en un contexto de fractura política que ofreció incentivos adicionales para la acción colec-

tiva, abrió el camino para que los terratenientes se lanzaran de lleno a la arena política. Que ello pudiera ofrecer una base adecuada para el éxito de esa aventura no era más seguro en 1893 que un cuarto de siglo antes.

Para proponer una explicación de este hecho conviene hacer algunas consideraciones sobre la sociedad pampeana del período finisecular. Veamos, en primer lugar, la posición económica y social de los terratenientes. Como la Sociedad Rural había señalado muchas veces, el ausentismo resultaba un obstáculo para la constitución de una clase terrateniente poderosa en el nivel local. Esta práctica perdió importancia en la década de 1880, gracias al nuevo papel de los estancieros como modernizadores rurales, a las visitas más regulares, a los veraneos en la campaña. Este cambio, sin embargo, no contribuyó a crear una clase propietaria que actuase como líder rural. Al respecto, las mansiones que los terratenientes mandaron edificar en sus estancias desde comienzos de la década de 1880 ofrecen indicios muy sintomáticos, pues en sí mismas indican que los estancieros le seguían volviendo la espalda a la sociedad local, y que se negaban a desempeñar el papel de una clase gobernante rural. Aisladas geográficamente del resto de la sociedad local, en general ocultas de la mirada de los vecinos por extensos (y con el tiempo frondosos) parques, las grandes casas de campo estaban diseñadas no para funcionar como centros de sociabilidad, sino para satisfacer los caprichos de confort y privacidad de sus dueños. De todas maneras, algo parece haber cambiado en esos años. Ciertos indicios sugieren que algunos estancieros contaban con el respeto y la estima de los habitantes locales, y que ello podía ser transformado en capital político. Por ejemplo, cuando un líder local de apellido Hay Sarmiento le describía a su jefe Dardo Rocha cómo era la situación en su partido, le señalaba que allí había algunos grandes propietarios –"Dughan [sic], Morgan, Duffi, Samuel Hale"–, y le señalaba "la influencia moral que esa clase de elementos ejerce en la opinión de las localidades".[24]

Esta influencia, sin embargo, era limitada, como el propio Hay Sarmiento sabía bien. Ello se debía a que ciertos rasgos estructurales de la sociedad pampeana no habían sido modificados por la expansión de la estancia moderna. Como hemos visto en el capítulo 1, la pampa nunca había sido un mundo rural simple, polarizado entre un pequeño grupo de poderosos estancieros y la masa de sus trabajadores, y soldado por lazos deferenciales o paternalistas. Y si bien la expansión de las décadas finales del siglo contribuyó a crear una elite terrateniente más poderosa y cohesionada, también puso en marcha procesos que acentuaron la complejidad de la estructura social.

No es fácil ofrecer un panorama preciso de los grupos propietarios basado en datos estadísticos. Pero no pueden caber dudas sobre su heterogeneidad. El censo de 1895 califica a 23 697 personas como "estancieros" y "hacendados", una cifra que representa el 7% de la población económicamente activa de esta provincia.[25] El censo no desagrega este grupo en categorías más específicas, y ello nos impide focalizar la atención en los grandes estancieros. Los cálculos de Hilda Sabato para 1890 indican que, en la zona de antiguo poblamiento al norte del Río Salado, las propiedades de más de 5000 hectáreas reclamaban para sí un tercio de la superficie, y que dos tercios estaban ocupados por propiedades pequeñas y medianas.[26] Una estimación conservadora indica que en las tierras de poblamiento más reciente (de todas maneras menos importantes políticamente), las propiedades de más de 5000 hectáreas ocupaban, al menos, la mitad de la tierra. Aun así, ello dejaba bastante lugar para propiedades más pequeñas. Un estudio de Emilio Lahitte en 1901 muestra que en la provincia había casi 1000 propiedades de entre 5000 y 10 000 hectáreas, y casi 500 de más de 10 000 hectáreas. Estas propiedades eran la base sobre la cual se erigieron las principales fortunas del país. Pero Lahitte también muestra que había 4240 propiedades de entre 650 y 2500 hectáreas, junto con otras 32 000 propiedades de entre 10 y 650 hectáreas.[27] En síntesis, las tierras de los mayores estancieros de Buenos Aires coronaban una estructura de propiedad compleja. Su diversidad se pone de manifiesto cuando la comparamos con la de otras sociedades rurales latinoamericanas. En Chile, por ejemplo, los grandes terratenientes controlaban alrededor del 80% de toda la tierra agrícola, y prácticamente la totalidad de la tierra irrigada. En la mayor parte de Brasil, si bien las estimaciones son más difíciles debido a la falta de títulos legales, la concentración de la tierra también era extrema (la dinámica zona cafetalera de San Pablo, donde los patrones de tenencia de la tierra, aunque más concentrados, no diferían tanto de los de la pampa, era quizá la principal excepción).[28]

Es claro que la posición política de los grandes estancieros no puede deducirse simplemente de la estructura de propiedad. Los lazos entre estos y el resto de los habitantes de la campaña son quizá más relevantes que el número preciso de propietarios, o la cantidad de tierra que cada uno de ellos poseía. A este respecto, debe recordarse que tanto en las regiones de poblamiento antiguo como en las de frontera, la sociedad pampeana estaba lejos de constituir un bloque social dispuesto a seguir la guía de las elites propietarias. Aun en los distritos más antiguos, la pampa alojaba una sociedad nueva, o profundamente transformada, en

la que los lazos deferenciales, nuevos o tradicionales, carecían de mayor relevancia. Si una sociedad deferencial existía en la Argentina, esta debe buscarse no en la pampa, sino en las provincias del noroeste.[29] Así lo comprobaron diversos hombres del litoral que en este período recorrieron las tierras donde se había iniciado y enraizado mejor la dominación española. Cuando en 1905 el positivista Carlos Octavio Bunge conoció la finca de Indalecio Gómez, en la provincia de Salta, pudo experimentar lo que era una verdadera sociedad jerárquica. Tras visitar la propiedad de este conspicuo miembro de la elite política nacional, Bunge observó que "ellos conservan su modo de ser de grandes señores españoles del tiempo de la Conquista [...] sin duda en Buenos Aires no he encontrado hasta ahora gente tan clásica y distinguidamente hidálguica".[30]

En alguna medida, la pampa no era como Salta por la debilidad de ciertas instituciones como la iglesia católica. Una fiel aliada de las clases terratenientes en otros lugares de Europa y América Latina, en la Argentina, y sobre todo en la pampa, la iglesia era pobre en términos de recursos, personal y organización. Tanto los primeros gobiernos independientes como las administraciones que los sucedieron contribuyeron a debilitar una iglesia que había sido frágil incluso en tiempos coloniales. No se trataba sólo de que la iglesia, como institución, estuviese lejos de ser poderosa; la práctica religiosa, tanto de elite como popular, tampoco era particularmente vigorosa. Es por ello que en la segunda mitad del siglo XIX, los reformadores liberales pudieron empujar el programa secularizador más lejos que en otros países. A diferencia de lo sucedido en México, Brasil o Perú, este proyecto avanzó no sólo más rápido, sino también, como recordaba Miguel Cané, "con más limpieza pues no tenemos obstáculos sociales seculares que nos obstruyan el camino".[31] Cuando algunos militantes católicos denunciaron las políticas de secularización y de aceptación del pluralismo religioso lanzadas desde el estado, sus lamentos cayeron en saco roto. La Argentina nunca experimentó una *Kulturkampf* como la Prusia de Bismarck ni una rebelión cristera como la del México posrevolucionario. Si bien nunca alcanzó los niveles de secularización de la vecina Uruguay (una sociedad con rasgos similares a la Argentina pampeana), el cambio de siglo en la religión era, en esencia, un asunto de la vida privada antes que un elemento central de la cultura colectiva con influencia en la vida política.[32] Los religiosos carecían de la autoridad para usar el confesionario y el sermón dominical para instruir a los habitantes rurales sobre sus obligaciones sociales y políticas. En la pampa argentina estaba ausente la escena, familiar en otros lugares de América Latina, de la hacienda con su propia capilla donde las familias

de los propietarios y de los trabajadores se reunían para escuchar misa, y con su párroco residente, que se sentaba regularmente a la mesa del propietario y que predicaba desde el púlpito en favor de la moralidad y la obediencia.[33]

Este contraste indica una diferencia más general, y también más sustantiva, respecto de la norma latinoamericana, referida a la fuerza de trabajo. Durante los años ochenta, el proceso de centralización de la estancia se aceleró, y ello puede haber favorecido la creación de lazos más poderosos entre trabajadores, capataces, y administradores y propietarios. La estancia parece haber incrementado su control sobre los trabajadores, y mostrado mayor capacidad para inculcarles actitudes y valores que favorecían la docilidad y la subordinación al ritmo de trabajo de una producción modernizada. Sin embargo, el alto nivel salarial propio de una sociedad de frontera, hizo que el uso intensivo de la tierra respecto del trabajo siguiese constituyendo un rasgo característico de la producción rural. La mayor abundancia relativa de fuerza de trabajo desde la década de 1880 no modificó este patrón, por lo que Godofredo Daireaux podía afirmar con razón en 1908 que "reducir el personal a su más simple expresión ha sido siempre uno de los propósitos más caros a todo estanciero".[34] Aunque toda comparación es difícil, se ha estimado que los salarios rurales en la pampa eran los más altos de América Latina, de ocho a diez veces más altos que en Chile.[35] Ello compelía a los empleadores a utilizar la fuerza de trabajo de modo más eficiente. Victor Bulmer-Thomas estima que el producto agrícola neto por trabajador en la Argentina de comienzos de siglo XX era seis veces más alto que en Brasil y casi cuatro veces más alto que en México.[36] Este notable contraste indica que parte de la enorme riqueza generada y apropiada por el sector agroexportador argentino iba a parar a los bolsillos de los menos poderosos. También ofrece un indicio de la importancia de las relaciones de mercado en la definición de los vínculos entre trabajadores y empresarios rurales.

Aun si aceptamos la hipótesis de que los terratenientes podían ejercer influencia sobre sus empleados, los límites de su poder resultan igualmente visibles. Si bien la fuerza de trabajo permanente en las estancias de Buenos Aires es difícil de calcular, puede estimarse que, como mucho, sólo uno de cada diez varones adultos trabajaba para un gran propietario.[37] Ya Emilio Daireaux había notado en 1884 que las grandes estancias comprendían varias decenas de miles de hectáreas, pero apenas algunas decenas de trabajadores permanentes. Aun si estos hombres estaban dispuestos a seguir a sus patrones a la mesa electoral, su número era insufi-

ciente como para volcar en su favor el resultado de una elección. Como advertía Daireaux:

> Hay dominios que tienen cien leguas cuadradas, doscientas cincuenta mil hectáreas, es decir, la superficie de esos departamentos franceses donde se mantiene holgadamente y trabaja una población de trescientos a cuatrocientos mil habitantes [...] Una legua cuadrada bien ocupada puede recibir dos mil quinientas cabezas de ganado mayor, una por hectárea; ahora bien para guardar cien mil cabezas bastan sólo treinta hombres, los cuales no forman un ejército de vasallos muy temible.[38]

El crecimiento de los centros urbanos también erosionó el poder de los propietarios rurales. La visión que describe a la pampa como dominada por estancias y otras empresas rurales simplifica excesivamente los rasgos de esa sociedad, y no permite advertir la importancia de otros centros de producción y sociabilidad. Desde los inicios de la expansión de la gran estancia, la especialización de estas empresas en la producción agraria estimuló la expansión de pueblos y pequeñas ciudades en la campaña. Junto con Uruguay, la Argentina poseía la tasa de urbanización más alta de América Latina.[39] En algunos partidos, los pobladores rurales habían sido superados en número por los habitantes urbanos ya para la década de 1880, y casi en todos lados la población estaba creciendo más rápidamente en los poblados que en la campaña.[40] De acuerdo con el censo de 1869, el 28% de la población de la provincia (excluida la ciudad de Buenos Aires) vivía en pueblos y ciudades. Para 1895, la población urbana había crecido al 40%.[41]

Estos centros urbanos se expandían porque proveían un complemento necesario para la economía de la estancia y de otras unidades de producción. Mientras que la estancia se concentraba en la cría de ganado, gran parte de las actividades económicas vinculadas a la producción pecuaria se desarrollaban fuera de su perímetro. En los pueblos, la estratificación social era más compleja que en las estancias. Comerciantes, empleados de la administración pública, artesanos, empleados administrativos y del sector de transportes superaban a los trabajadores permanentes de la estancia.[42] Desde el comienzo de la expansión de la economía ganadera, el crecimiento de estos poblados promovió la formación de un mercado de bienes y servicios, y una reserva local de fuerza de trabajo. Los pueblos de la provincia deben haber servido para hacer más flexible la oferta de fuerza de trabajo, incluso generando algunos empleos durante los meses

de menor actividad en la campaña. Teniendo en cuenta las necesidades de trabajo estacional de la economía lanar, todavía entonces el corazón del sistema de producción de Buenos Aires, una reserva local de trabajadores debía ser bienvenida. Pero una situación de este tipo seguramente no contribuía a asegurar una relación estable entre estancieros y trabajadores, a partir de la cual podían reforzarse las aspiraciones de liderazgo de los primeros. Por ejemplo, en el partido de Colón, donde la propiedad estaba bastante dividida, un político local afirmaba que, cuando de política se trataba, los habitantes del pueblo eran más importantes que los de las estancias.[43]

En conjunto, la pampa alojaba una sociedad muy móvil y mercantilizada, que contrastaba claramente con otras áreas rurales de América Latina, en las que el dominio de los terratenientes sobre sus inferiores sociales se encontraba mejor enraizado.[44] En Chile o en San Pablo, por ejemplo, gran parte de la población rural estaba excluida, o al menos sólo parcialmente integrada, en la economía de mercado. En esas sociedades rurales, los terratenientes ejercían su autoridad en diversos aspectos de la vida social. Los inquilinos y los colonos, que conformaban la parte mayoritaria de la población del Valle Central chileno y de la principal región cafetalera brasileña, no sólo dependían de los terratenientes para ganarse la vida, sino que en general residían dentro de los límites de las haciendas y las fazendas, donde se encontraban directamente sometidos a la mirada inquisidora y la influencia de sus amos. En la pampa, la complejidad de los sectores medios de la sociedad rural, la integración de la población en actividades productivas que tenían lugar fuera de la estancia, y la ausencia de instituciones que pudiesen garantizar la subordinación de las clases dominadas, impidió que los terratenientes pudieran recurrir a las fuentes de patronazgo y autoridad que disfrutaban sus colegas chilenos y brasileños. Las condiciones estructurales y las relaciones sociales necesarias para nutrir la "dialéctica deferencial" que encontramos presentes en otros lugares de América Latina estaban ausentes.[45]

Para completar este cuadro, es preciso realizar un breve examen de la vida política en la campaña y del funcionamiento de la maquinaria estatal en el nivel local. Este ejercicio nos permitirá poner de relieve algunas limitaciones de la base de poder de los terratenientes. En las décadas de 1860 y 1870, los jueces de paz reunían en su persona amplias atribuciones judiciales, políticas y administrativas. Como ya hemos visto, estos funcionarios solían surgir de los estratos medios de la sociedad, y debían su nombramiento a sus relaciones políticas más que a su lugar entre los grupos propietarios. En la década de 1880, antiguos reclamos de

descentralización por fin encontraron un clima favorable para su avance. En esos años, el régimen de gobierno municipal fue colocado en manos de los electores locales, mientras que las atribuciones de la justicia de paz se redujeron a cuestiones judiciales de segundo orden. La descentralización le dio a las municipalidades no sólo mayor independencia, sino también mayor autarquía en cuestiones impositivas.[46]

Sin embargo, la descentralización no produjo un cambio sustancial en la posición política de los terratenientes en el nivel local. Y es incluso probable que la reforma los haya debilitado. Ello se explica en parte porque, a medida que la campaña se hizo más segura y mejor organizada, el interés de los propietarios en los menudos asuntos locales seguramente decreció. Los grandes empresarios no precisaban tener incidencia en el gobierno municipal para hacer escuchar sus reclamos sobre aquellos temas que les preocupaban especialmente (y que además se volvieron más importantes en los años ochenta), como la construcción de ferrocarriles, de caminos, de obras de desagüe o de puentes. Todos estos asuntos solían decidirse en La Plata o en Buenos Aires, y en estos centros pesaban más los lazos de los terratenientes con las elites políticas que su influencia local. Y por otra parte, cuestiones tales como la construcción de ferrocarriles no siempre incentivaba la acción colectiva. A veces incluso podía suceder lo contrario, pues daban lugar a la creación de distintos grupos de interés que intentaban sacar provecho de los recursos estatales.[47]

Otros temas seguramente invitaban a los terratenientes a unirse. Una vez que el alambrado se extendió por la pampa, muchos estancieros abandonaron la costumbre de robarles ganado a sus vecinos. Los robos continuaron, de todas maneras, en parte porque el precio del ganado se incrementó conforme se refinaba el rebaño. El abigeato se convirtió en una actividad más organizada, que en no pocos casos funcionaba gracias a la colaboración entre cuatreros, autoridades y policías. Incluso importantes propietarios debieron sufrir sus consecuencias. "Es realmente escandaloso lo que pasa en la campaña de Buenos Aires con los ladrones y las autoridades", le escribía Roca al administrador de La Larga cuando este fue víctima de un robo.[48] Las estancias no sólo estaban al alcance de los ladrones; también estaban a merced de la policía. En 1893, el propio Mariano Unzué, presidente de la Unión, no pudo impedir que una partida policial ingresara en una de sus estancias, "atrepellando el Establecimiento", en busca de un peón en problemas con la justicia.[49] Entrar en un gran establecimiento rural, que seguía siendo difícil para las fuerzas de seguridad peruanas en la década de 1960, no presentaba mayores inconvenientes para la policía de Buenos Aires más de medio siglo antes.

Estas inconveniencias no tenían una hondura suficiente como para invitar a los terratenientes a volverse más activos en la vida de las comunidades locales. Incluso observadores que solían adoptar el punto de vista de los propietarios, y que juzgaban a este grupo con abierta simpatía, tenían clara conciencia de este hecho. Charles Leonardi, por ejemplo, afirmaba que "el estanciero se queja, casi siempre, de que no se administra bien pero rara vez se presta de una manera completa a regular la marcha del manejo".[50] La mayoría de los propietarios se mostraba indiferente, cuando no abiertamente hostil, a los dilemas y pequeños episodios que ritmaban la vida local, así como a las iniciativas de mejora urbana e institucional. Ello se debía, en gran medida, a que su vida social estaba enteramente concentrada en sus estancias, lejos de la mirada de sus humildes vecinos. "Solo agita a los pueblos el asunto local, el pequeño expediente de la aldea. Es este el síntoma común a toda la campaña", sostenía con abierto desdén Ramón Santamarina (h).[51] Sus palabras son todavía más notables viniendo de quien vienen: uno de los pocos miembros de la elite estanciera que fue benefactor del pueblo en el que su familia se había afincado a poco de arribar de España, antes de enriquecerse y cambiar Tandil por la Capital Federal. Como en la Colombia del siglo XIX, la idea de que la participación en el gobierno local debía ser entendida como una obligación era ajena al modo de ser de los terratenientes.[52] En su *Voces perdidas* (1907), el escritor y gran propietario Jorge Lavalle Cobo ofrece un relato que refleja bien la alienación de los terratenientes de la vida municipal. Este sentimiento era incitado por los impuestos municipales, que los estancieros siempre consideraron una carga muy molesta.

A la vez que la participación de los estancieros en un gobierno municipal que solían juzgar por debajo de su rango se volvía cada vez más esporádica, los antiguos agentes de la administración aprovecharon la retirada del poder central, que abría nuevos espacios para promover una vida política local más autónoma. Bien insertos en la propia sociedad local, estos líderes mantenían estrechos lazos con los habitantes del distrito. Su residencia permanente les daba un conocimiento muy íntimo de los problemas locales, del que los terratenientes, más remotos, siempre carecieron. Algunos de estos hombres del medio de la sociedad provinciana deben haber sido resistidos por muchos vecinos, mientras que otros debieron gozar de su aprecio. En todo caso, las fuentes de su poder no se limitaban al mundo pueblerino o rural circundante. Su posición dependía también de las redes políticas provinciales, que los autonomistas expandieron y reforzaron desde que dominaron la provincia en 1880.

En rigor, las transformaciones sociales y económicas que la provincia experimentó en esos años no fueron acompañadas por una vida política nueva y más democrática. El gobierno se impuso repetidamente en los llamados electorales. Si bien este fue generoso a la hora de incluir en la nueva coalición dominante a hombres que hasta el día anterior habían sido sus rivales, no dejó mayor espacio para la organización de la oposición. El *Standard* se quejaba en 1886 de que "en el campo, los votantes pueden comprometer sus ovejas y vacunos, y perder todos los caballos de su estancia si, en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos libres, osan votar por el hombre indicado en el lugar equivocado".[53] Y en todo caso, si un estanciero decidía emplear sus recursos económicos y su autoridad para movilizar a sus trabajadores y a sus vecinos con el fin de desafiar a un jefe local, y aun si lograba hacerlo con éxito, su victoria estaba lejos de estar asegurada. Su fortaleza en el nivel local seguramente contaba poco en un sistema electoral como el de Buenos Aires, que estaba diseñado para favorecer a las redes políticas que se extendían por todo un distrito electoral. Como advertía Francisco Oliver en 1899, el poder local sólo se volvía significativo si se integraba en una organización más amplia:

> Si la gran masa de los propietarios territoriales de la provincia tomara en los partidos políticos y en los comicios la parte principal que le corresponde, no quedaría librado todo a la acción de los politicantes sin escrúpulos y mucho se habría adelantado. Pero con el sistema actual de elección por listas toda concentración de fuerzas conservadoras en un punto dado es ahogada por los millares de votos nominales de los otros partidos de campaña que forman cada uno de los seis extensos distritos electorales.[54]

Por todas estas razones, las clases medias y bajas pesaban tanto como las altas en las redes políticas de la campaña. La historiografía del último cuarto de siglo ha mostrado que si bien las elecciones no movilizaban a las mayorías, tampoco se limitaban al círculo de los mejores. En la Argentina existía un sufragio particularmente amplio, sin restricciones censitarias. Todos los hombres adultos, con independencia de sus calificaciones o su propiedad, estaban habilitados para votar, y de hecho las elecciones fueron predominantemente ejercicios de movilización de las clases subalternas. El grado en el que las clases medias y altas tomaban parte en la vida electoral es materia de cierta controversia.[55] La escasa información

disponible para la década de 1880 sugiere que, al menos en la ciudad de Buenos Aires, la actitud predominante entre las clases respetables fue mantenerse a prudente distancia del momento electoral. En esos años, los porteños rápidamente aprendieron que los autonomistas eran demasiado fuertes como para ser desafiados.[56] Desde 1890, la situación cambió, pues el colapso del PAN y la emergencia de una vibrante oposición ayudó a que las clases acomodadas se lanzaran más abiertamente a participar en la vida pública. La competencia entre los radicales, los cívicos y los autonomistas estimuló el compromiso y la participación.[57] En la campaña, sin embargo, las cosas eran algo distintas. La política, sobre todo la local, siempre fue más plebeya en tono y estilo. Si en la ciudad sólo el 7,5% de los inscriptos en el registro electoral en 1889 figuraban como iletrados, en la provincia la cifra trepaba al 56%.[58]

La historiografía reciente ha enfatizado cómo, en muchos lugares de América Latina, las elecciones, y más en general la competencia política, despertaron el interés de la población, contribuyendo a la educación política del pueblo.[59] En la pampa, ello quizá no debería exagerarse. No sólo los que tomaban parte en los actos comiciales no eran habitualmente tantos, sino que las campañas electorales y los actos políticos eran excepcionales. La clave para alcanzar la victoria no residía, como sucedería luego de 1912, en la interpelación a una ciudadanía compelida o dispuesta a votar. Aun más que en la ciudad, dependía de la organización y movilización de bandas de partidarios, formadas por miembros de las clases subalternas. Con el fin de dotarse de apoyos y seguidores, los líderes políticos dedicaban sus mejores esfuerzos a concitar la adhesión no de las clases altas, sino de miembros del mundo popular. Para lograr tal objetivo, muchos de ellos estaban dispuestos a recurrir a toda clase de alianzas. En Bragado, por ejemplo, donde residían algunos indígenas, "Melinao, cacique de la tribu de aquí" fue convocado por un caudillo local "para que me acompañe en las próximas elecciones municipales".[60]

En este contexto, el poder de una organización partidaria dependía de su capacidad para movilizar a sus seguidores, y al mismo tiempo para asegurar las condiciones que permitían que estos sufragaran. Esto último era especialmente importante, pues la violencia y el hostigamiento de los votantes rivales era habitual. Las elecciones provinciales de 1894, ampliamente consideradas como un modelo de corrección política y competencia honesta, "apenas" dejaron diez muertos.[61] En San Pedro, el ex gobernador Rocha era informado por entonces, "los mitristas no tienen en ésta hombre resuelto, capaz de hacerse matar [...] en su mayoría son hombres [...] flojos".[62] La violencia, real o potencial, contribuyó

a hacer que el acto de sufragar resultase una acción colectiva antes que individual, a la que el carácter público del voto también contribuía. La emisión del sufragio era un acto colectivo en más de un sentido. Debido a que no existía obligación de registrarse para votar, el primer esfuerzo que convocaba a las energías de un partido estaba dirigido a acercarse a los votantes potenciales para persuadirlos a inscribirse en el registro.[63] La importancia de los agentes electorales se acrecentaba cuando llegaba el momento de los comicios. Los votantes de un partido o un candidato se reunían en un lugar determinado, y de allí marchaban hacia el atrio en formación cerrada, guiados por sus líderes. Si no mediaban inconvenientes, una vez frente a las autoridades comiciales, uno por uno, los votantes daban cuenta de su elección a viva voz. Sólo después de que los seguidores de un partido hubieran emitido su sufragio, se acercaban al atrio los electores de otra fuerza.

En síntesis, la producción del voto requería organización, y esta dependía en particular de los jefes políticos locales. Estos caudillos tenían una función central dentro de cada partido, pues constituían el verdadero lazo entre la elite partidaria y sus seguidores. Los partidos dependían de los líderes locales para asegurar que sus seguidores votaran, así como para controlar y coordinar las distintas fases de la acción electoral. Desde el momento de la inscripción hasta el conteo de los votos, los partidos descansaban sobre los políticos locales y sus maquinarias.

Todavía sabemos demasiado poco sobre las relaciones entre votantes y caudillos, y entre estos y la elite de cada partido. De todas maneras, parece seguro que sus vínculos se cimentaban gracias a una combinación de lazos materiales y simbólicos, que iban desde la entrega de dinero o la provisión de empleo o favores del estado, a la afinidad ideológica o el simple ascendiente personal. El control de la administración pública facilitaba la distribución de recompensas materiales. Los puestos en la administración, y en particular en la policía, eran cruciales, pues ofrecían no sólo empleos e ingresos permanentes para los caudillos, sino también posiciones de poder desde las cuales estos podían ejercer presiones sobre enemigos o indecisos, y ofrecer beneficios a votantes potenciales. Por este motivo, los proyectos de crear una carrera administrativa que librara a la burocracia y la fuerza policial de la influencia política nunca contaron con el apoyo decidido de las elites gobernantes. Hasta cierto punto, su desconfianza hacia el sufragio secreto también se vincula con su rechazo de un sistema electoral que, si se basaba en este principio, seguramente iba a resultar más impredecible y difícil de manipular. Los caudillos controlaban el voto de las localidades, pero dependían de los

políticos de La Plata y Buenos Aires para acceder a las principales fuentes de empleo y favores, que conformaban una de las bases sobre las que se asentaba su poder. Es importante recordar que estos lazos entre elites políticas, caudillos locales y clientelas populares solían tejerse en la esfera política, y por lo tanto resultaban relativamente autónomos de las jerarquías prevalecientes en otros campos de la práctica social.[64]

En la vida política, el dinero no carecía de importancia. La correspondencia entre los líderes locales y las grandes figuras de Buenos Aires o La Plata está poblada de testimonios que afirman que la mayoría de los votantes en la campaña eran "gente mercenaria",[65] que "sin dinero no es posible hacer política".[66] El dinero, un jefe local sostenía, "influye mucho en ciertos elementos", es decir, en "el paisanaje".[67] Ello sugiere, por una parte, que la elite política carecía de un control estricto sobre los miembros de las clases subalternas, cuya adhesión no era siempre firme, y debía ser negociada. Pero también habla de la complejidad de los lazos de la elite política con los jefes locales, que estaban lejos de constituir engranajes pasivos de una máquina mayor que se limitaba a cumplir las órdenes que recibían desde arriba.

En este aspecto, es significativo que los jefes locales fueran los que a menudo enfatizaban que se encontraban necesitados de fondos para pelear una elección, o asegurar una "situación". Es comprensible que los caudillos tuviesen interés en recibir fondos que les permitiesen hacer funcionar una maquinaria política, o reforzar su dominio sobre una localidad. En general, los caudillos locales no parecen haber sido demasiado precisos a la hora de especificar el destino que le daban a los recursos que recibían. Ciertas acusaciones sugieren que algunos de ellos orientaban parte de esos recursos para favorecer sus intereses personales.[68] Es más significativo que los caudillos locales tuvieran capacidad para decidir con bastante libertad cómo emplear esos fondos, pues ello indica que su relación con las elites no era de completa subordinación. "Si Ud. quiere que trabaje para las elecciones de diputados", Dardo Rocha era advertido en 1894, "me mandará recursos pues de lo contrario nos será imposible".[69] En rigor, el poder de la elite política sobre los caudillos locales no estaba fundado sobre su capacidad para proveer recursos económicos con los que afrontar los costos de los comicios. La correspondencia entre la elite política y los jefes locales indica que el ascendiente de los primeros sobre los segundos se aseguraba, en lo fundamental, gracias a otros mecanismos. Sus mayores fuentes de influencia (y de presión) surgían de sus vínculos con los estratos superiores del aparato judicial, la administración y la policía. Estos eran de enorme utilidad para liberar acólitos de

la persecución de la justicia o para hostilizar rivales, para ofrecer o negar empleo y favores, o para incrementar o moderar la carga tributaria.[70] En cualquiera de estos campos, los grandes terratenientes no tenían mucho para ofrecer, y ello constituía un obstáculo para imponer o legitimar su autoridad a los ojos de los habitantes comunes y de los caudillos de cada localidad.

En definitiva, el dinero, sobre todo si era provisto en grandes cantidades, podía favorecer el progreso de una carrera en el marco de las estructuras partidarias existentes. Pero difícilmente crease de la nada una organización política. Este era, en síntesis, el problema que los vacunos de la Unión Provincial debían enfrentar, pues sus recursos económicos eran mucho más amplios que la base política que podía alojarlos y ponerlos a trabajar. La unidad de los vacunos no era política, sino sobre todo social y económica. Bien enraizados en la elite urbana, en el mejor de los casos parcialmente rurales, los vacunos apenas podían contar con el apoyo de los trabajadores de sus estancias. Pero carecían de los medios para desplazar las lealtades e intereses políticos, que constituían las bases de las organizaciones partidarias. Y también carecían de una estructura política alternativa que pudiera reemplazarlas, enraizada en el nivel local y extendida por toda la provincia.

La falta de una base política propia incluso en aquellos lugares donde los miembros de la Unión tenían sus imperios territoriales pronto los lanzó, quizás a desgano, a la búsqueda de aliados. Estos aliados no podían sino encontrarse entre los hombres de peso político e influencia local. Entre ellos ocupaban un lugar prominente los que hasta ayer habían integrado la maquinaria política que había controlado la vida de la provincia: los seguidores de Costa. El alzamiento de julio y agosto de 1893 y la intervención federal que lo sucedió habían expulsado del poder a la rama local del PAN. El profundo descrédito en el que había caído el costismo, por otra parte, dificultaba la reaparición del Partido Provincial en la competencia electoral. Sus lealtades internas tampoco permanecieron incólumes, en gran medida porque carecía tanto de liderazgo como de cualquier posibilidad cierta de volver al centro de la escena. De todas maneras, era inevitable que el partido que se había sostenido en el poder por más de una década siguiera manteniendo fuertes raíces en el nivel local, así como también, como afirmaba el interventor Olivera, "en la administración y los tribunales".[71]

En este contexto, muchos jefes autonomistas caídos en desgracia comenzaron a ocuparse de su propia supervivencia. Los radicales y los

cívicos no estaban dispuestos a perder esta oportunidad y, sin demasiadas preguntas, incorporaron a muchos caudillos locales a sus filas. A comienzos de septiembre, uno de sus seguidores le informaba a Rocha que en La Plata, "los radicales no descansan y trabajan sin cesar sobre el elemento exgubernista, y con tan buena probabilidad de éxito que en la reunión que deben tener el lunes aquí los dichos exgubernistas se tratará la cuestión de unirse con los radicales".[72] En Altamirano, al igual que en otros lugares de la provincia, los caudillos y sus seguidores estaban "todos comprometidos con los radicales".[73] Pese a que se habían combatido por más de una década, algunos caudillos autonomistas también se acercaron a los mitristas.[74] A comienzos de octubre, el diario *Tribuna* describía así la situación: "los que ayer todavía eran personajes de la política, han caído estrepitosamente. Todos andan como se dice, de capa caída; algunos buscando acomodo en las filas de nuevas y apresuradas agrupaciones; muchos, confundidos, presas de estupor, no saben qué pensar, qué hacer, ni qué decir; los más, impacientes por reconquistar sus laureles, pugnan por entrar en lucha, sin decidirse por ningún partido".[75]

El "desquicio, desorganización y anarquía que hay en los provincialistas caídos"[76] ayudó a los radicales y a los cívicos a reforzar sus maquinarias políticas. Para los vacunos, la crisis de los autonomistas tuvo consecuencias de mayor importancia. El prestigio que los estancieros se habían ganado como guardianes del orden e impulsores del progreso hizo que, en más de una ocasión, fuesen cortejados por "todos los que aspiran a ser candidatos".[77] Pero los vacunos siempre rechazaron las ofertas que les llegaban desde todo el arco político. Su negativa a unir su destino al de otras fuerzas políticas se debía a que, al igual que los cívicos y los radicales, ellos también se estaban robusteciendo a gran velocidad gracias al ingreso de militantes autonomistas. Ya a mediados de septiembre, *La Prensa* informaba que los vacunos se encontraban "buscan[do] la adhesión, mediante diversas ventajas, de los elementos más importantes del partido provincial [...] aisladamente, es decir [...] se trata de que sus hombres de importancia ingresen a la agrupación de propietarios rurales desvinculados de su pasado político, si bien haciéndoles algunas concesiones personales".[78]

Sin embargo, lo que para los radicales y los cívicos apenas significaba la ampliación o el reforzamiento de estructuras políticas ya existentes (dotadas de fuertes liderazgos y cuadros medios) en las que los recién llegados siempre constituirían una minoría, para los vacunos implicaba la creación de una organización en la que estos actores políticos gravita-

ban de manera decisiva. La situación en Dolores, donde la Unión "puede decirse que no tiene más elementos que una parte de los amigos de Julio Costa, pues los otros no tienen más que sus nombres de ricachos"[79] no parece haber sido excepcional.

Los estancieros no eran ajenos a los riesgos implícitos en esta estrategia, y desde el comienzo se propusieron mantener a la Unión bajo estricto control. Así, por ejemplo, acordaron que el derecho de designar candidatos a cargos electivos se limitaría a los fundadores, excluyendo a todos aquellos que se habían sumado al partido con posterioridad.[80] Al inicio, la Unión pareció manejable con expedientes como este, pues el desembarco de los caudillos autonomistas no respondía a una estrategia unificada destinada a reagrupar fuerzas, y se parecía más a una desbandada en distintas direcciones que encontró a la Unión como un partido más hospitalario que el radical o el mitrista para con los militantes autonomistas. Para entonces, los autonomistas carecían de firmes liderazgos, tanto al nivel provincial como nacional. Con Costa y Roca como observadores antes que como participantes, y con Pellegrini imposibilitado o temeroso de fracasar en su intento de llamar al orden a las diversas fracciones en las que se anarquizaba el partido, los autonomistas parecían una "bolsa de gatos",[81] en la que ninguna fracción predominaba.

Si bien el ingreso de los autonomistas en la nueva fuerza tuvo mucho de espontáneo, y estuvo lejos de estar coordinado, la ausencia de cualquier tipo de estructura partidaria en la Unión pronto llevó a que los autonomistas reconstruyeran en ese nuevo marco, y sin encontrar mayores obstáculos, sus antiguas redes y *modus operandi*. La situación se volvió más transparente, y también más tensa, cuando se acercó el momento de definir candidaturas. "¿Qué es entonces la Unión Provincial?", se preguntaba *La Nación* a mediados de noviembre de 1893. "Si es el partido de los hacendados, sus candidatos son Luro, D. Manuel Guerrico, D. Mariano Unzué. Si es la resurrección del partido provincial, las simpatías rápidamente manifestadas por los sostenedores *à outrance* de la anterior situación designarán al general Bosch."[82] A pesar de la falta de liderazgo y de las rencillas entre los distintos grupos autonomistas, estos fueron tomando creciente distancia de los estancieros. A fines de noviembre, la Unión parecía a punto de quebrarse. Entonces *Tribuna* relataba que "con la entrada de numerosos y bravos elementos de la campaña ha sido perturbado el quietismo de algunos de los fundadores de esa agrupación, que si bien representaban mucho caudal, no son ricos en actividad y menos en experiencia en las luchas políticas".[83] En el partido vacuno, señalaba entonces el secretario del

interventor Lucio V. López, "se han admitido con poca cautela los elementos recién desalojados; digo con poca cautela, porque los hubieran tenido siempre agolpados a la puerta, como los mendigos al portalón de los conventos".[84]

Estos comentarios sugieren que la incorporación de los autonomistas no sólo obligó a los estancieros a ceder espacios. También provocó ira, desagrado y temor entre aquellos terratenientes que no se encontraban a gusto codeándose con los "bravos elementos de la campaña" que Santamarina juzgaba despectivamente como mendigos de la vida política. Ello instó a algunos estancieros a tomar distancia de un proyecto que mostraba sus aspectos menos agradables.[85] Para fines de noviembre, Federico Leloir, Manuel Guerrico, Tomás Anchorena y Ricardo Lavalle, que se contaban entre los impulsores de la Unión Provincial, ya se habían alejado, y muchos otros pronto los seguirían.[86] *La Prensa* entonces lamentaba que el "acercamiento a aquella región de la política electoral partidista, operó un retraimiento del gremio de hacendados".[87] No es sorprendente que los estancieros que se sentían más próximos a la Unión Cívica o al radicalismo se encontrasen entre los más molestos con la creciente dependencia de la Unión respecto del autonomismo. Como resultado de esta metamorfosis, la Unión adquirió una tonalidad crecientemente autonomista, que resultaba tanto de la incorporación de nuevos miembros como de la salida de muchos de sus fundadores.

Durante el mes de diciembre, tanto los radicales como los cívicos se aprestaban a convocar convenciones con el fin de elegir a sus candidatos. En reiteradas oportunidades, los nuevos militantes de la Unión señalaron cuán antidemocrática era la dirección de su partido, que no estaba a la altura de las costumbres políticas del siglo. Esta denuncia revela que los autonomistas desconfiaban de un comité central partidario que no podían controlar, y que incluía terratenientes cuyo corazón nunca había estado con ellos. Esta era la razón, argumentaba *Tribuna* (para entonces ya convertido en un vocero de los políticos autonomistas que se lanzaban a la conquista de la Unión) "que detiene a muchísimos autonomistas que desean ardientemente tomar parte en la lucha próxima, pero que de ningún modo quieren aceptar fórmulas que riñen con la educación política contemporánea [...] De allí que promuevan, dentro del comité, la idea de la reforma de aquellos estatutos". La revisión de la carta partidaria, continuaba *Tribuna,* "es sordamente resistida por un grupo de fundadores, que hace mucho tiempo no se mezclan en la política activa, y que juzgan mal de los progresos operados desde entonces".[88] Para fines de diciembre, los terratenientes apenas conformaban una minoría ais-

lada y sin margen de maniobra, descripta como un "marco decorativo" conformado por "los apellidos consulares –una buena parte de la comisión directiva de la Sociedad Rural–", dispuesta a contribuir al esfuerzo electoral "da[ndo] su apellido y gracias!".[89] Teniendo en cuenta este panorama, *La Prensa* especulaba que "el cálculo de las probabilidades dice que la Unión Provincial, a pesar de la voluntad de sus iniciadores, se presentará en la arena política disputando la Gobernación con candidatos partidistas [...] el mayor número de sus afiliados pugnará por imponerle su carácter".[90]

Otros sucesos contribuyeron a apurar la retirada de los hacendados. Después de septiembre de 1893, tras la caída del gobierno de Costa, el orden fue rápidamente restaurado en la provincia. Gracias a la ejemplar intervención de Lucio V. López, en poco tiempo el estado de tensión que dominaba a Buenos Aires se disipó. Todas las fuerzas políticas, así como muchos terratenientes, elogiaron en reiteradas ocasiones la gestión de López.[91] Si bien la situación económica siguió siendo mala, ganó espacio la idea de que el gobierno no podía hacer mucho para mejorarla. Es por ello que, una vez superado el momento de mayor inquietud, los vacunos enfrentaron crecientes dificultades para movilizar los apoyos comprometidos en los difíciles días del invierno de 1893. En la primavera, no fueron pocos los terratenientes que le volvieron la espalda al partido, sumergiéndose otra vez en la esfera de la vida privada. Con ello, el proyecto de organizar y movilizar a la clase terrateniente recibió un golpe de muerte.

A comienzos de 1894, los vacunos se reunieron para elegir candidatos. La discusión se centró en torno a la vigencia de las disposiciones que autorizaban a los fundadores de la Unión a designar candidatos con independencia de la opinión del resto del partido. Una dura campaña de hostigamiento se puso en marcha. La prensa autonomista argumentó que "los verdaderos representantes de la colectividad política se ven en una competencia *verbal* con un pequeño grupo que no tiene importancia electoral de peso en la provincia".[92] Los estancieros no tenían todas las de ganar, pues el estatuto los facultaba para designar candidatos, pero no para hacer funcionar el partido. "La Unión provincial se compone de una cabeza y de un cuerpo que están *juntos* pero no están *unidos*", decía *Tribuna*. "La cabeza querría mandar sola; pero el cuerpo no quiere ejecutar sin la esperanza de una recompensa [...] Si no se la dan, ni el cuerpo ni la cabeza irán al triunfo."[93] Había algo de verdad en esta afirmación, y los estancieros, no sin protestas, comenzaron a aceptar que debían someterse. Mariano Unzué, el más intransigente de los líderes terratenientes, finalmente admitió que debía renunciar a su candida-

tura a gobernador. Para entonces, todas las ambigüedades de la Unión habían desaparecido.

Despojado de su candidatura a gobernador, a Unzué sólo le fue ofrecida la posibilidad de competir por un premio menor (una diputación). Además, fue hostilizado y acusado, así como el resto de sus colegas estancieros, de estar de más. "Un comité formado accidentalmente para iniciar trabajos electorales", afirmaba Julio Llanos, una voz de importancia entre los costistas, "no podía en absoluto estar dirigiendo la política de la primera provincia argentina [...] los estancieros que por accidente van a ella no tienen más vínculos que los materiales, mientras que ellos [los políticos autonomistas], los verdaderos representantes rurales, estaban unidos moral y políticamente".[94] La Unión, la *Review of the River Plate* entonces lamentó, "establecida con las intenciones más encomiables, ha traicionado sus objetivos".[95] Muchos estancieros eran de la misma opinión. Disgustados con el rechazo de los autonomistas a nominar a un terrateniente como candidato a gobernador, pero también con las posiciones muy secundarias que les fueron ofrecidas en las listas de candidatos parlamentarios, la mayoría de los terratenientes que aún permanecían en la Unión decidió que había llegado el momento de abandonarla.[96]

La retirada de los estancieros y la creciente importancia de los autonomistas hizo que la Unión perdiera su peculiaridad en tanto fuerza política de clase. Apenas un puñado de terratenientes –Saturnino Unzué, Vicente Casares, Ezequiel Ramos Mexía y unos pocos más– permaneció en el partido cuando los vacunos fueron a los comicios. Estos hombres veían su inclusión en la lucha política como un asunto personal antes que como parte de un proyecto que expresaba los intereses de la elite propietaria. Es indudable que su educación, intereses y cultura definían los valores y puntos de vista que defendieron en la vida pública. Pero no se trataba de hombres dedicados a representar a sus pares; como en muchos otros casos, sus carreras eran movidas por el deseo de acumular poder político. En este sentido, no eran muy distintos de otros hombres públicos del período menos generosamente dotados en tierra y ganados. Más allá de su riqueza personal, para conducir a buen puerto sus carreras públicas, estos vacunos estaban dispuestos a confluir y aceptar las reglas de juego de una vida política en la que la riqueza no podía transformarse sin más en poder político.

Nacido como un partido de clase en el duro invierno de 1893, para fines de la primavera la Unión se había convertido, tanto en términos de estructura como en lo que se refiere a las características de sus dirigentes y militantes, en una organización muy similar a aquellas que habían

intentado desplazar. De modo nada sorprendente, la Unión entonces debió enfrentar los mismos problemas que afectaban a sus competidores. Gregorio Torres le escribía entonces a Roca: "Usted sabe que sin dinero no se gana elecciones y sabe también las dificultades que se tocan para conseguirlo, porque cuando se trata de *formar* son pocos los que se presentan".[97] Significativamente, fueron los vacunos, más que los mitristas o los radicales, los que hallaron a sus militantes y acólitos menos dispuestos a contribuir al esfuerzo electoral. En sus días de afiebrado entusiasmo, los terratenientes de la Unión habían asegurado que reunirían un millón de pesos. Cuando el momento de concurrir a los comicios finalmente llegó, y se volvió necesario aceitar la maquinaria política (con vino y carne con cuero, con regalos para los votantes), la Unión encontró mayores dificultades que sus rivales para recolectar una cantidad muchas veces menor. De hecho, sus líderes tuvieron que aguzar su ingenio y sus artes para reunir una suma que, en el mejor de los casos, alcanzaba a una veinteava parte de su presupuesto originario. Entonces Torres le relataba a Roca que "es increíble lo que pasa, la Unión Provincial no puede reunir un peso y los radicales gastan un dineral".[98] Algunos días más tarde, los radicales derrotaron a sus rivales en elecciones muy disputadas, que quedaron registradas como uno de los ejemplos más típicos del carácter competitivo de la política de la década de 1890. En esas jornadas, la Unión hizo una elección poco destacada, ubicándose detrás de los radicales y los cívicos. La victoria radical no pudo impedir que la Unión Provincial y la Unión Cívica se unieran en el colegio electoral para imponer al mitrista Guillermo Udaondo como gobernador de la primera provincia argentina. Sin embargo, para ese momento ya estaba claro que la participación autónoma de los terratenientes en la vida política permanecía como una promesa difícil de cumplir. Lo único que la Unión conservó de su efímera identificación con la clase terrateniente fue el nombre con el que por largos años iba a ser reconocida: el partido vacuno.

DESARROLLO INDUSTRIAL, ARANCELES Y PROTECCIONISMO

El proyecto terrateniente destinado a colocar a un gran propietario en el gobierno del distrito donde se encontraban los principales imperios territoriales de la Argentina terminó de mala manera. Muchos hacendados reaccionaron ante el fracaso del partido vacuno alejándose aún

más de la vida pública. Howard Vincent, un parlamentario británico que visitó la Argentina en 1894, advirtió este estado de los espíritus. A Vincent le llamó la atención la abierta negativa de los grandes propietarios a desempeñar el papel que, aseguraba, legítimamente les correspondía. Señalaba también que "los caballeros argentinos de carácter decidido, amplia cultura, gran inteligencia y extenso patrimonio escapan de la política como si se tratara de la Plaga".[99] En esos años, la indiferencia de la clase propietaria hacia la vida pública fue identificada como uno de los mayores problemas del sistema político. Esta visión encontraba eco en la propia elite gobernante, por ejemplo en figuras como Carlos Pellegrini. En sus observaciones sobre la situación de la provincia de Buenos Aires, Pellegrini lamentaba la debilidad de los grandes hacendados, y señalaba que "falta entre nosotros la burguesía política, la verdadera opinión pública inteligente y consciente. La masa electoral es compuesta sólo de las clases inferiores dirigidas por caudillos salidos de sus filas [...] La burguesía rica e ilustrada [...] no se mezcla en política".[100]

Sólo unos pocos estancieros se mantuvieron fieles a la idea de que la acción colectiva era capaz de revertir esta situación. Muchos de los terratenientes que hicieron suya esta visión se nuclearon en la Liga Agraria, una asociación de grandes propietarios surgida en 1892 en reacción a la negativa de la Sociedad Rural a desempeñar el papel de vanguardia política de los terratenientes. La Liga, cuya actividad comenzó a hacerse notoria desde el año 1895, tenía un programa particularmente ambicioso, orientado a reforzar la posición de los grandes propietarios en el sistema político. Sus voceros denunciaron una y otra vez la falta de representación de las clases propietarias en el Congreso, y también se alzaron contra lo que describían como un peligroso divorcio entre productores honestos y gobernantes corruptos. En esencia, los liguistas criticaban a una clase política aventurera y arribista que vivía a costa de los productores rurales, la auténtica base sobre la cual se erigía la sociedad argentina.[101]

En una economía agraria tan dinámica, los vicios que los liguistas y muchas otras voces condenaban no suponían amenaza alguna a la posición privilegiada de los grandes propietarios territoriales. Se entiende, entonces, que el proyecto de la Liga concitara más simpatías que apoyos efectivos, sobre todo cuando el recuerdo del fiasco de la Unión Provincial todavía estaba presente. Es por ello que la militante Liga Agraria siempre permaneció tenuemente ligada a la clase a la que aspiraba a representar. La evolución del escenario político también colaboró a aquietar los ánimos. Las elecciones de comienzos de 1894 en la provincia

de Buenos Aires fueron ampliamente consideradas como un paso crucial en el camino hacia la estabilidad política, que se fue afirmando con el paso de los meses.[102] Para 1896, ya era claro que la crisis política había cedido, y que el PAN, que había anulado la amenaza radical, y controlado la cívica, recuperaba parte del terreno perdido desde 1890. En este contexto, los incentivos para lanzarse a la actividad política se hicieron aún más tenues.

Para los estancieros, la década de 1890 presentó otros problemas. Esos años pusieron de manifiesto un hiato entre el gobierno federal y el interés terrateniente, vinculado al desarrollo de la industria. Como consecuencia de la Crisis del Noventa, el ingreso de capital extranjero cesó abruptamente, lo que generó serios problemas en la balanza de pagos. A poco de acceder a la primera magistratura tras la renuncia de Juárez Celman, el presidente Carlos Pellegrini lanzó un programa de reforma fiscal. Con la intención de incrementar los ingresos del estado y el saldo positivo de la balanza comercial, el gobierno impulsó la elevación de las tarifas aduaneras. En 1891, una nueva ley de aranceles entró en vigencia. En 1894 y 1896, otra vez, el gobierno favoreció el aumento de los derechos aduaneros. En 1898, una ley de compre nacional dio prioridad a los industriales locales en la adquisición de pertrechos militares.[103]

Estas medidas proteccionistas surgieron primordialmente como respuesta a la penuria fiscal. También indican el propósito de la elite gobernante de ampliar el campo de la acción estatal y contribuir a diversificar la actividad económica. Carlos Pellegrini simboliza esta postura. Como conocido defensor de la industria nacional, el presidente encontró en esos años de escasez un clima propicio para propagar sus ideas proteccionistas.[104] Otras circunstancias, no menos importantes, contribuyeron a favorecer el reemplazo de la producción importada por la nativa. La depreciación del peso que se verificó desde fines de la década de 1880 benefició a aquellos grupos sociales cuyo ingreso dependía directamente de las ventas al exterior, entre los que destacaban los empresarios rurales. Al tornar las importaciones más caras en moneda local, también le dio un impulso a la producción nacional.

En consecuencia, tanto las condiciones económicas como las políticas gubernamentales contribuyeron a crear un ambiente más favorable para el crecimiento de la industria. Hasta la década de 1870 la industria local, dominada por pequeños talleres manufactureros, había realizado avances muy discretos, en gran medida porque los mercados eran demasiado pequeños y los costos de transporte demasiado altos como para permitir la aparición de unidades de producción de gran escala.

En los años ochenta, esta situación se modificó. Lo que Warren Dean ha mostrado en su estudio pionero sobre la industrialización de San Pablo también resulta relevante para entender la expansión de la producción manufacturera argentina. Aquí también la expansión agraria creó condiciones favorables para el crecimiento industrial.[105] En los años ochenta, la Argentina asistió a la aparición de las primeras plantas industriales de envergadura.[106] De todos modos, la industria dio su primer gran paso adelante en la década siguiente. De acuerdo con cálculos recientes, a comienzos de la década de 1890, por primera vez, la producción industrial creció a una tasa más alta que la producción rural y que el producto bruto, cercana al 10% anual.[107]

En general, los grandes propietarios rurales mostraron escaso entusiasmo por las transformaciones asociadas al crecimiento manufacturero, que se acompañaron por la aparición de diversas asociaciones que, como la Unión Industrial (fundada en 1887), defendían los intereses de este sector. Las objeciones de los estancieros no comprendían a la totalidad del sector manufacturero. La industria argentina tenía una estructura dual. Las grandes unidades de producción que reclamaban para sí una porción significativa del mercado coexistían con talleres de reducidas dimensiones y poco capitalizados. A su vez, estas empresas se distinguían de acuerdo con los mercados en los que colocaban su producción. Algunas de ellas, en general de gran escala, elaboraban productos primarios destinados a la exportación. Saladeros, frigoríficos, molinos harineros y lavaderos de lana se destacan en este grupo. Los empresarios rurales alentaron la expansión de este sector que generaba eslabonamientos hacia adelante que valorizaban la producción primaria, y que reforzaba la orientación exportadora de la economía.

Un segundo grupo de industrias producía para el mercado interno. Dentro del mismo, conviene distinguir dos sectores: el que manufacturaba bienes no transables y el que producía bienes transables. El primero, para el cual el emplazamiento geográfico resultaba un factor crítico, elaboraba, por ejemplo, alimentos y bebidas que no soportaban altos costos de transporte desde el extranjero. El segundo, en cambio, competía con la producción importada. Como sucedió también en otros países de América Latina, este sector evidenció problemas de competitividad, y se vio obligado a refugiarse detrás de barreras arancelarias. Las industrias de la confección, la vitivinícola, la aceitera y la azucarera ofrecen ejemplos típicos de esta situación.[108] Actividades como esas eran las que concitaban el rechazo de los voceros rurales, que afirmaban que esos emprendimientos apenas podían sobrevivir gracias a la protección, que

en definitiva sólo servía para mantener en actividad industrias ineficientes, dependientes de la ayuda estatal. Aun cuando muchos investigadores han insistido hasta el cansancio en que los ruralistas reaccionaban contra el carácter "artificial" de estas industrias (ya fuera porque dependían de la protección o porque elaboraban materias primas importadas), conviene remarcar que el principal punto de conflicto no era este. Por sobre todas las cosas, a los estancieros les preocupaba que las tarifas aduaneras que protegían a estas industrias concitaran represalias contra las exportaciones rurales. En particular, temían que los países extranjeros que comerciaban con la Argentina reaccionaran a los obstáculos que encontraban sus exportaciones reduciendo sus compras de bienes pampeanos.

Estos temores no resultaban infundados. Aun cuando los obstáculos a la libre circulación de mercancías eran entonces menos graves que después de 1930, la economía internacional no carecía de barreras al intercambio, que por otra parte se encontraban en avance. En esos años, además, el principal mercado para las exportaciones argentinas no era Gran Bretaña, sino Europa continental. La lana, el principal producto de exportación de la República, iba dirigida fundamentalmente a los mercados de Francia, Alemania y Bélgica.[109] A diferencia de Gran Bretaña, donde el compromiso de las clases dominantes con el librecambio era firme, los países continentales estaban decididos a proteger sus sectores agrícolas de la competencia extranjera.[110] Al mismo tiempo, en los años noventa se produjo una caída en el valor de las compras argentinas en el exterior, producto de la crisis económica, pero que sin duda no pasó inadvertida, y que creó inquietud entre los principales socios comerciales del país. En este contexto, la amenaza de represalias comerciales contra la producción nacional comenzó a tomar formas nítidas. En 1894, Francia elevó los derechos aduaneros sobre el trigo importado, y el reino de España amenazó con cerrar sus fronteras al ingreso de carne salada en caso de que la Argentina elevase los derechos sobre el vino peninsular.

La actitud española representaba una amenaza digna de cuidado. Para entonces, la exportación de carne salada todavía constituía un rubro destacado dentro del paquete de productos exportables, y alcanzaba al 5% del total. La exportación de tasajo estaba concentrada en sólo dos mercados: la colonia española de Cuba y el Brasil.[111] No sorprende, entonces, que estancieros de peso hicieran sentir su inquietud frente a las amenazas españolas. La industria ganadera, según le informaron con alarma a la Cámara de Diputados, "se expone a perder uno de sus principales mercados".[112] En el caso de Brasil, la situación ofrecía motivos de preocupación, pues también allí la producción argentina era hostilizada. Brasil

constituía un mercado de importancia no sólo para el tasajo; también compraba más del 90% de las exportaciones de harina. En rigor, Brasil era el quinto socio comercial de la Argentina, y demandaba alrededor del 10% de sus exportaciones totales.[113] Considerando estos antecedentes, no eran pocos los que creían que el país se encontraba al borde de una guerra de tarifas, que se volvió más temible cuando amenazó afectar también a las exportaciones de lana.[114]

La crisis económica que todavía pesaba sobre el sector rural, a la que nos hemos referido en el capítulo anterior, volvió a estas amenazas aún más acuciantes. La "inquietud de los hacendados ante la amenaza del impuesto al tasajo",[115] y de modo más general sus temores frente a la posibilidad de represalias comerciales, dieron impulso a una campaña librecambista que encontró eco en diversos medios de prensa. En 1894, *El Campo y el Sport* comenzó a alertar contra los peligros del proteccionismo, y Walker Stegman llamó insistentemente a lanzar una campaña para reducir los aranceles aduaneros. La Sociedad Rural, afirmaba Stegman, "es la llamada a tomar la iniciativa en un movimiento de esta naturaleza".[116] Los radicales y los cívicos también se mostraron preocupados por el tema. A fines de 1894, Francisco Barroetaveña, el vocero parlamentario del radicalismo en este tema, señalaba que la "tarifa arancelaria exorbitante, prohibicionista" con que la Argentina protegía su industria contribuía a crear un ambiente favorable a "una hostilidad internacional contra los productos de la ganadería y de la agricultura".[117] En 1896, el diario *La Nación* dio a conocer un par de editoriales en las que convocaba a estancieros y agricultores a encarar "una activa campana política contra el actual régimen aduanero". Un partido librecambista, afirmaba *La Nación*, "debe congregar cuanto antes a los capitalistas de la industria rural".[118] Otros órganos de prensa, como *El Economista Argentino* y la *Review of the River Plate*, se sumaron a esta campaña, y ofrecieron puntos de vista similares.[119]

La década de 1890 dio lugar así a la constitución de un clima favorable para la emergencia de una fuerza librecambista liderada por productores rurales. La Sociedad Rural miró con simpatía la agitación contra el proteccionismo, pero permaneció renuente a liderarla. Ello no se debía a conflictos al interior del sector rural (por ejemplo, entre los intereses y posiciones de los grandes terratenientes y de otros agricultores menos prominentes). Como Ezequiel Gallo y Ernesto Laclau señalaron desde distintas posiciones, los mayores terratenientes de la pampa eran los principales (pero no los únicos) beneficiarios de la exitosa economía de exportación. De diversas formas, parte del excedente generado

por el sector rural se diseminaba por todo el espectro social, que en las regiones dominadas por la economía de exportación era particularmente complejo.[120] Hasta la segunda década del siglo XX, cuando estalló el movimiento de Alcorta, la expansión de la frontera funcionó como válvula de escape de muchas tensiones rurales, por lo que hasta entonces nunca se produjeron enfrentamientos abiertos entre terratenientes y pequeños agricultores. Más aún, en temas como el arancelario, todos los productores rurales, independientemente de su poder económico, compartían visiones y objetivos similares. Estas posiciones también hallaban buena acogida en el medio urbano, donde tenían lugar diversas actividades que giraban en torno al comercio de exportación-importación, mayorista y minorista, y donde el prestigio de las ideas librecambistas era considerable.

Es significativo que distintos voceros de la campaña por la rebaja de las tarifas aduaneras viesen a la Sociedad Rural como a la institución líder del sector agrario. La prensa rural presentó esta visión, que también compartieron órganos periodísticos más identificados con la posición de los agricultores que con la de los grandes terratenientes, como *La Agricultura*. La renuencia de la Sociedad Rural a liderar la lucha contra el avance proteccionista provocó críticas en las páginas de este órgano. En 1896, un artículo se preguntaba por los motivos del "silencio inexplicable" de la Sociedad Rural sobre derechos y tarifas aduaneras, y por su negativa a encabezar el combate contra el proteccionismo.[121] Al responder esta acusación, Julio Pueyrredón, presidente de la Sociedad Rural, señaló que los intereses industrialistas habían alcanzado una gran influencia en el Congreso nacional. La fuerza de acción de la Sociedad Rural, sostenía Pueyrredón, "es muy limitada, su intervención en el Congreso no daría resultados: las industrias protegidas están unidas y tienen allí elementos poderosos".[122] Poco después, *La Agricultura* volvió a la carga, insistiendo en que los ruralistas debían encabezar la lucha antiproteccionista, y denunciando que "en el orden político la acción de la Sociedad Rural ha sido nula".[123] Sin embargo, este reclamo no fue seguido de un análisis de la capacidad de la asociación ruralista para imponer sus puntos de vista. En cambio, *La Agricultura* sólo ofrecía una promesa algo vaga, y señalaba que "los beneficios de lucha semejante comienzan por la lucha misma".[124]

Pueyrredón apenas exageraba cuando llamaba la atención sobre la fortaleza de los grupos proteccionistas. La visión que afirma que en los tiempos de la República Oligárquica los intereses librecambistas eran políticamente dominantes precisa ser rectificada. En la década de 1890, un

clima proteccionista predominaba en el Congreso. Mientras en su mayoría los representantes radicales y mitristas se inclinaban por el librecambio, los autonomistas favorecían cierto grado de protección industrial. Hasta cierto punto, un clivaje regional explica estos posicionamientos. Los representantes radicales y mitristas encontraban sus mayores apoyos en el litoral, esto es, en aquella región que más se beneficiaba gracias a la profundización de los lazos con el mercado mundial. En temas como la tarifa aduanera, existía unidad de perspectivas e intereses entre todos los productores agrícolas, y ello no podía dejar de reflejarse en las ideas sobre el punto voceadas por las fuerzas políticas que aspiraban a representarlos.

El elevado grado de urbanización de la región pampeana sugiere también la presencia de una masa de consumidores urbanos que podría haberse movilizado contra la protección aduanera. El argumento de que el proteccionismo tenía un impacto negativo sobre el costo de vida de los sectores populares era bien conocido en la época, y gozaba de fuerte predicamento. Como se ha sugerido muchas veces, esto debería haber provocado la reacción de segmentos muy amplios de la población urbana, compuesta en proporciones significativas por inmigrantes afectos al consumo de bienes provenientes de sus zonas de origen. Sin embargo, ello nunca se tradujo en apoyo activo a la cruzada antiproteccionista. Para disgusto del radicalismo y del mitrismo –y en especial del socialismo, que desde su constitución a mitad de la década de 1890 hizo del librecambio una de sus propuestas más caras–, la movilización popular contra la protección aduanera siempre resultó débil.

Esta pasividad, que ha intrigado a muchos observadores, se explica en gran medida por el papel desempeñado por el sector industrial en la generación de empleo, que probablemente alcanzó en la ciudad de Buenos Aires a un tercio de la población económicamente activa.[125] Las agrupaciones de izquierda no fueron las únicas que intentaron ganarse la adhesión del mundo del trabajo. Los empresarios urbanos también lo hicieron, y quizá con mayor éxito, e incluso llegaron a movilizar a una parte significativa de sus trabajadores. En 1899, por ejemplo, la Unión Industrial organizó una gran manifestación en defensa de la industria nacional a la que asistieron más de cincuenta mil personas; esta opacó la gran marcha en favor de la baja de derechos aduaneros que comerciantes y consumidores habían protagonizado unos pocos días antes. La columna que desfiló por las calles de Buenos Aires estaba compuesta, en su mayoría, por obreros que salieron de las fabricas y marcharon disciplinadamente detrás de sus patrones. Si bien la adhesión de muchos

concurrentes a la manifestación industrial tuvo poco de espontánea, ello no la volvió menos significativa, pues dejó pocas dudas sobre la importancia de los intereses sociales que giraban en torno a la industria.[126] En definitiva, la población trabajadora se vio sometida a una marcada tensión entre su papel como consumidora y su papel como productora, y no parece errado concluir que este último constituyó el polo dominante. Ello asestó un golpe de muerte a cualquier proyecto de organizar una coalición antiproteccionista urbana. En esos años, las posturas librecambistas siempre encontrarían una recepción simpática, pero escaso apoyo en el mundo urbano.

Las provincias del interior mediterráneo mostraban un paisaje político y productivo bien distinto. Ni siquiera cuando el poder del radicalismo y del mitrismo se encontraba en su zenit, la oposición logró conmover el dominio que el PAN ejercía sobre la vida política de esta otra Argentina. En el interior, las ventajas derivadas de la gran expansión exportadora que estaba rehaciendo el litoral resultaban menos profundas. En consecuencia, los reclamos para proteger industrias locales existentes (o a crearse) se hacían escuchar con más fuerza. Las elites del interior –los grupos que protagonizaban estos reclamos, y que dominaban la vida política de sus lugares de origen, y que además tenían una marcada influencia en la política nacional– nunca rechazaron la expansión de la economía de exportación. Un proyecto de este tipo habría resultado suicida, ya que la economía pampeana proveía prácticamente la totalidad de las exportaciones de la República, y toda la actividad económica dentro del país estaba de una u otra forma vinculada a ella. En todo caso, lo que las oligarquías del interior reclamaban era asociarse a la prosperidad del litoral. Para ello, impulsaron la construcción de una red de transporte que lo conectara con el interior. Cuando los trazos gruesos de esta red estuvieron tendidos en la década de 1880, lo que restaba hacer era garantizar el desemboque de sus productos regionales en los prósperos mercados litorales. El instrumento privilegiado para lograr tal fin fue la protección aduanera.[127]

En 1894, Domingo Morón, un influyente político sanjuanino, le escribía a Julio Roca denunciando las bajas tarifas aduaneras como "una heregía económica", y a continuación reclamaba un "proteccionismo decidido" para estimular el desarrollo de la industria vitivinícola.[128] Los representantes de las provincias cuyanas de San Juan y Mendoza, donde se concentraba esta actividad, y Tucumán, que había encontrado un inesperado dinamismo gracias a la producción azucarera, conformaban el núcleo central de los grupos proteccionistas. A ellos se sumaban los

representantes de otras provincias del interior, que también esperaban encontrar algún nicho que les permitiese asociarse más plenamente al próspero circuito económico que giraba en torno a la economía pampeana. Los proteccionistas eran particularmente poderosos en el Congreso, sobre todo en el Senado, el lugar donde la sobrerrepresentación del interior se hacía más evidente.[129] En la Cámara de Diputados su presencia también era marcada. En la segunda mitad de la década de 1890, por ejemplo, esta Cámara era presidida por Marco Avellaneda, un poderoso industrial tucumano y destacado líder del PAN, que ejercía simultáneamente la presidencia de la Unión Azucarera.[130]

Sin embargo, la mayor parte de las manufacturas modernas que se desarrollaron desde la década de 1880 estaban localizadas en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, que reunía más de la mitad del capital invertido en la industria.[131] A diferencia de otros países latinoamericanos como México o Brasil, la Argentina no poseía ningún centro manufacturero de envergadura aparte de Buenos Aires. Ninguna otra ciudad o región podía competir con la Capital Federal, que reunía el mayor y más rico mercado doméstico (un quinto de la población total del país, la ciudad más grande de Hispanoamérica), y al mismo tiempo funcionaba como el eje de todas las redes comerciales, financieras y de transporte del país. Sólo Rosario, la otra gran ciudad litoral, volvía menos abrumador el predominio industrial porteño.[132] Los industriales del litoral, un grupo por demás heterogéneo, estaban menos estrechamente conectados al poder político que sus colegas del interior. Con todo, poseían recursos como para ejercer influencia sobre el Congreso y el gobierno, entre los que se destacaban (como ya hemos señalado) el que derivaba de su papel como empleadores, y su capacidad de presión sobre legisladores y funcionarios.[133] Una de sus armas preferidas era explotar el temor a la desocupación o a la emergencia de conflictos sociales en caso de que la protección aduanera, que había permitido que la industria "se convirtiese en proveedor de empleo de un gran número de hombres y mujeres", fuese reducida o eliminada.[134]

En tanto fuerza política dominante de la República Oligárquica, el PAN ofrecía el principal canal a través del cual los industriales hacían sentir sus demandas. Aun cuando el PAN estuvo lejos de ser un partido industrialista, su implantación en todo el país político, así como su carácter de partido gobernante, hicieron que de hecho funcionara como la fuerza dentro de la cual los reclamos de los grupos dominantes del interior y de los industriales del litoral encontraron acogida más favorable. El poder del autonomismo explica, en parte, la renuencia de la Sociedad

Rural a liderar la campaña antiproteccionista, que durante años permaneció restringida a debates periodísticos y parlamentarios. En 1898, por un momento, la situación pareció cambiar. Para entonces, el PAN se había recuperado de la crisis en la que se había hundido en la primera mitad de la década, reconquistando plenamente el control de la escena política. Para 1897, Roca había acallado toda oposición dentro o fuera del autonomismo: el desafío modernista había desaparecido, el Partido Radical se veía anarquizado y en desbandada, y los seguidores de Mitre perdían terreno en todas partes. A excepción parcial de la provincia de Buenos Aires, el autonomismo controlaba la totalidad del país. A fines de 1897, el PAN convocó a una convención, donde Roca fue ungido candidato presidencial. En esa ocasión, el partido dio a conocer un manifiesto electoral con un fuerte sabor proteccionista. "El fomento de las industrias existentes, propendiendo al establecimiento de otras nuevas" era uno de sus puntos centrales.[135]

La inquietud que el manifiesto del PAN causó entre los grupos terratenientes se vio acentuada pues en forma casi simultánea se conoció en Buenos Aires una noticia poco feliz. A fines de 1897, al inaugurar las sesiones del Congreso estadounidense, el presidente MacKinley confirmó que mantendría la elevada tarifa aduanera aprobada poco tiempo atrás. Además, aumentó los derechos que afectaban a las lanas y los cueros argentinos, que habían permanecido libres de impuestos desde 1894. Así, los aranceles aduaneros estadounidenses llegaron a su nivel más alto de la preguerra.[136] Casi al mismo tiempo, se anunciaron nuevos impuestos a la carne argentina en Brasil.[137]

En este contexto, en marzo de 1898, poco antes de las elecciones nacionales, la Sociedad Rural dio a conocer un "Manifiesto a los electores de la República". En él se decidió a "romper el silencio con que hasta ahora se ha consentido el desarrollo progresivo de una política económica cuya adopción es perjudicial á las verdaderas fuentes de riqueza nacional", criticando las políticas económicas seguidas desde la década de 1880, a las que calificaba como extremadamente nocivas para el sector rural. Los ruralistas denunciaban el proteccionismo con argumentos que venían voceando desde unos años antes. "A las altas tarifas aduaneras impuestas por esa política económica", afirmaba el manifiesto, "los países consumidores de nuestros artículos de exportación responden con la elevación de derechos á los productos de la ganadería y la agricultura, cuando no con represalias directas, que importan una prohibición de su importación". La Sociedad Rural llamaba a limitar la protección a la manufactura, para de este modo evitar "las represalias de los países

consumidores de nuestros productos". El manifiesto finalizaba invitando a los electores a votar por aquellos candidatos que defendieran el libre cambio, y a la ganadería y la agricultura, las industrias madres de la República.[138]

El manifiesto ruralista concitó gran atención, en gran medida porque por primera vez en su historia, la Sociedad Rural Argentina expresaba abiertamente sus opiniones sobre las opciones frente a las cuales debían pronunciarse los electores, y llamaba a negar apoyo al PAN. La forma en que el manifiesto fue recibido, sin embargo, ofrece un primer testimonio de un cambio de percepción sobre los peligros potenciales de la protección aduanera. Para entonces, el estado de los espíritus comenzaba a caracterizarse por una actitud de compromiso y resignación antes que por una oposición militante a la orientación que el PAN le imprimía a la economía y la política nacionales. Los órganos periodísticos en su totalidad se mostraron escépticos sobre las consecuencias prácticas del pronunciamiento ruralista. *La Prensa,* por ejemplo, lo consideró como un heraldo de "los partidos políticos del porvenir –de principios económicos, representativos de la fortuna nacional y reemplazantes del personalismo caudillesco–".[139] En lenguaje más pedestre, ello significaba que las buenas intenciones de los ruralistas resultaban irrelevantes en las circunstancias de ese presente. *La Nación* también coincidía con la posición de la Sociedad Rural, pero su confianza en la capacidad del manifiesto de convocar una activa cruzada antiproteccionista no era mayor que la que demostraba *La Prensa.*[140] "Los distinguidísimos caballeros de la Sociedad Rural pierden su tiempo", declaró un vocero del radicalismo.[141] Esta también fue la opinión de la *Review of the River Plate.* "No creemos que el manifiesto de la Sociedad Rural tenga el efecto deseado"[142], se lamentó este órgano de los intereses comerciales británicos.

Fueron los redactores del *Standard,* ellos mismos terratenientes, quienes señalaron mejor que nadie las razones por las cuales el pronunciamiento iba a encontrar una recepción favorable, pero nada entusiasta, incluso entre los propietarios rurales. No se trataba simplemente de que la reconstitución del PAN dejaba escaso margen para quienes quisieran disputarle el control de la escena. Para entonces, los estancieros comenzaban a percibir al proteccionismo como un tema de cierta importancia, pero que estaba lejos de plantearles problemas de una hondura tal que los incitara a la acción. Urgir a los estancieros a reaccionar contra el proteccionismo, sostenía el *Standard,* era predicar en el desierto. Los estancieros, este diario argumentaba, "continuarán andando graciosamente por la vida, embolsando tranquilamente el producto de su carne y su

lana y su cuero, y reuniéndose ocasionalmente en el amplio salón de la Sociedad Rural".[143]

Varias son las razones que explican este cambio de actitud. La primera, y más importante, se vincula a la gradual atenuación de las amenazas de una guerra de tarifas. Con el paso del tiempo, la Argentina se tornó menos vulnerable a las presiones externas. Durante los últimos años del siglo XIX, las pampas asistieron a un formidable *boom* exportador que se prolongó hasta entrada la década de 1910, impulsado por nuevos productos entre los que se destacan los granos y las carnes refinadas, que ampliaron la lista de los bienes de exportación tradicionales. El aumento de las remesas de ganado en pie y de carne congelada (y luego enfriada) contribuyó a disminuir la dependencia de las exportaciones argentinas de los mercados que absorbían sus lanas, cueros y carnes saladas. En 1894, las exportaciones de tasajo representaban el 37% de las exportaciones totales de carnes. Nueve años más tarde, para 1903, habían caído a sólo el 6%.[144] Al mismo tiempo, los nuevos bienes exportados (la carne en especial) se orientaban crecientemente no hacia los mercados protegidos de Europa continental, sino hacia la librecambista Gran Bretaña. En 1905 el diputado proteccionista Varela Ortiz podía afirmar, sin temor a ser desautorizado, que "la República Argentina puede perfectamente bien desenvolver su industria ganadera sin necesidad del mercado francés [...] el mercado de Inglaterra [...] absorbe con facilidad la mayor parte de nuestra producción".[145] Como resultado de estos cambios, a los que la expansión de la producción granífera contribuyó en forma decisiva, para comienzos del siglo XX las exportaciones argentinas se convirtieron, junto con las mexicanas, en las más diversificadas de América Latina, tanto por la variedad de bienes exportados como por su destino final.[146] En este contexto, la amenaza de represalias comerciales se volvió menos peligrosa que a comienzos o a mediados de la década anterior, hasta casi desaparecer. La Unión Industrial no perdió la oportunidad de señalarlo. Denunciando la falsedad de las predicciones en torno a las represalias comerciales, en 1912 este vocero industrial podía sostener confiadamente que "desde hace veinte años viene agitándose periódicamente ese fantasma, sin que en tanto tiempo se haya logrado nunca cohonestar el fundamento del temor con un solo hecho concreto".[147]

Desaparecida o atenuada la amenaza de represalias comerciales, se hizo evidente que el efecto negativo de la protección aduanera sobre la economía de exportación resultaba menos dañino de lo que algunos terratenientes sostenían. Al afectar el precio de los productos de consumo

importados o producidos localmente, la protección actuaba como un impuesto sobre el consumo. Por ello, su peso recaía con mayor fuerza sobre los miembros más pobres de la sociedad. Es cierto que el aumento del costo de los bienes de consumo popular incidía sobre los niveles salariales rurales y urbanos, y afectaba el precio de los productos de exportación. Sin embargo, para los empresarios rurales, las consecuencias nunca fueron graves, pues el sector de exportación no hacía un uso intensivo del factor trabajo. Al mismo tiempo, el sector rural recibía un tratamiento preferencial, ya que sus principales insumos importados (maquinaria agrícola, semillas, alambre y reproductores de raza) estaban eximidos o pagaban derechos muy bajos.[148] Las exportaciones rurales no soportaban gravámenes de magnitud, y desde 1906 fueron liberadas de impuestos. El diputado Francisco Oliver no se equivocaba cuando afirmaba que un sistema tributario de estas características "es un sistema perfectamente calculado para hacer liviano, casi insensible el tributo a las clases más poderosas".[149]

Lo que es más importante, el entusiasmo de los estancieros por el librecambio siempre se vio morigerado porque advertían bien que el gobierno federal debía recaudar recursos, y que cualquier alternativa a los impuestos sobre las importaciones era, en definitiva, más peligrosa. Es comprensible que las únicas alternativas reales a los gravámenes a las importaciones, los impuestos a las exportaciones o a la propiedad, les parecieran poco atractivas. Sus exaltadas reacciones frente a impuestos directos como la contribución territorial (que constituía la principal fuente de recursos de los estados provinciales) sugieren cuán desagradable podía resultarles un sistema tributario que pesase más sobre la propiedad o la renta. En repetidas oportunidades, la Unión Industrial Argentina se encargó de señalar las aporías de los estancieros frente a esta situación. En 1894, cuando la campaña librecambista estaba en su apogeo, el vocero de los industriales señalaba que "todavía ninguno de estos aficionados al cambio y a lo novedoso, ha descendido al terreno práctico y examinado por dónde ha de prorrumpir el fisco nacional para sacar la renta inmensa, colosal, que exigen las deudas acumuladas, ni si se puede acudir al terreno escabroso de los impuestos directos sin destruir el sistema federal".[150] Carlos Pellegrini también criticaba a los librecambistas, llamando su atención sobre el problema del financiamiento estatal. "Muchas veces me he preguntado", escribía en 1902, "¿qué es lo que entenderán hoy estos estadistas por *librecambio*, en oposición a *proteccionismo*?, ¿de qué manera aplicarían sus teorías a nuestra legislación aduanera, por ejemplo?".[151]

Los argumentos fiscalistas de Pellegrini nunca fueron sometidos a crítica. A pesar de sus agrios lamentos, los voceros del librecambismo no propusieron alternativa alguna al sistema impositivo basado en los derechos a los productos importados. En todo caso, terminaron conformándose con mantenerlo dentro de ciertos límites. En 1902, Emilio Frers, uno de los estancieros más respetados y un destacado campeón de la causa librecambista, escribió una serie de artículos en *La Nación* denunciando las "pretensiones casi siempre exageradas de los industriales del país y de los políticos de tierra adentro".[152] Pero esta figura rectora de la Sociedad Rural estaba dispuesta a aceptar que las tarifas no debían ser eliminadas, sino rebajadas. Para Frers, los impuestos aduaneros eran, en definitiva, un "mal necesario".[153] En su gran mayoría, los estancieros parecen haber coincidido con esta visión. Si bien a muchos de ellos les desagradaba la filosofía del proteccionismo, terminaron aceptando que una tarifa moderada era la única forma relativamente indolora de financiar los gastos del estado federal. En rigor, antes que partidarios del librecambio, los estancieros eran partidarios de un intercambio más liberal.

La creciente indulgencia de los estancieros hacia el proteccionismo fue favorecida por un contexto político y económico bien distinto que el que signó gran parte de los años noventa. Para fines de la década, se advirtió con claridad que no existían amenazas a un PAN renovado y fortalecido. En las elecciones presidenciales de 1898, el autonomismo sólo debió enfrentar una oposición nominal. En medio de la "abstención deliberada" de las clases altas, Roca volvió a ocupar la primera magistratura.[154] En su mayoría, los grandes propietarios rurales pampeanos recibieron a Roca con más simpatía en 1898 que en 1880. Para el cambio de siglo, las dificultades que las clases altas porteñas habían experimentado en 1880 para adaptarse a la aparición de una nueva y poderosa elite gobernante, venida del interior del país, eran un recuerdo del pasado. Roca ya no era visto como el hombre que había derrotado a Buenos Aires por la fuerza, enviando a la muerte a muchos hijos de la provincia. La opinión predominante entre las clases propietarias lo señalaba como el Conquistador del Desierto y como el hombre que había contribuido como nadie a traer una década de inusitada prosperidad. Después de largos años de inestabilidad política, estos logros comenzaban a ser mejor apreciados. Como señalaba *El Campo y el Sport*, la primera mitad de la década de 1890 había mostrado que todas las alternativas a la hegemonía del PAN, en lugar de proporcionar una mejor solución a los problemas de los terratenientes, habían contribuido a hundir el país en una grave crisis política, que amenazó destruir los logros de la década

anterior.[155] *El Economista Argentino* ofrecía una visión similar. Con mayor pertinencia que neutralidad, señalaba que "la gran mayoría de la opinión conservadora del país, cansad[a] de agitaciones y de promesas que nunca se realizan, tiene necesariamente que mirar con mejores ojos a los que han dado repetidas pruebas de aptitudes gubernamentales".[156] El pleno reingreso de las fórmulas "opinión conservadora" y "clases conservadoras" en el vocabulario político, una novedad de los tormentosos años noventa, ofrece una prueba adicional de este cambio en el clima de opinión, que por cierto no era exclusivo de los círculos terratenientes. En cuanto garantía de orden interno, el General también acrecentó sus apoyos debido a la amenaza de un conflicto internacional con Chile.

No se trataba sólo de que muchos estancieros hubiesen cambiado su visión sobre el líder del PAN. El propio Roca también se mostró dispuesto a ganarse el favor y el apoyo de este grupo social. A poco de acceder al gobierno, el nuevo presidente impulsó una reforma de la Constitución, que aumentó el número de ministerios y otorgó al Departamento de Agricultura rango ministerial. Emilio Frers fue elegido para presidir los destinos de la nueva repartición. Roca también invitó a dos directivos de la Sociedad Rural a incorporarse a la lista de candidatos a diputados nacionales de su partido.

Este intento de ganarse el favor de los círculos terratenientes fue ampliamente publicitado por la prensa roquista. "Despertamos al fin de nuestra larga siesta criolla, y nuestros estadistas, la prensa y el Congreso se ocupan preferentemente de cuestiones de vital interés", anunciaba *Tribuna*. "Hombres jóvenes, miembros de las asociaciones rurales, conocedores y representantes de los intereses ganaderos que es tiempo ya de tutelar",[157] continuaba el vocero roquista, estaban expresando las necesidades de este sector de la producción en la Cámara de Diputados. En su primer mensaje de inauguración de las sesiones parlamentarias, el presidente también se comprometió a no continuar impulsando la política proteccionista, argumentado que el país debía "esforzarse en aumentar y mejorar en calidad, cantidad y precio, aquellos ramos de producción que tienen ya fácil aceptación en los mercados extranjeros, absteniéndose de proteger industrias efímeras, en condiciones de irremediable inferioridad, con menoscabo de nuestras grandes y verdaderas industrias, la ganadería y la agricultura".[158] Esta postura, que coincidía con la posición que los voceros ruralistas venían manteniendo, sonó bien en muchos oídos. El editor de la *Revista de la Liga Agraria*, por ejemplo, afirmó que "las expresiones del mensaje relativas al punto [el proteccionismo] fueron muy bien recibidas por los hacendados y agricultores".[159]

Se entiende entonces que, a un año de la asunción de Roca, un medio tan crítico como *La Nación* reconociera que el nuevo presidente "ha tenido en su favor la opinión conservadora, más deseosa de verlo salir adelante, que de crearle tropiezos en su camino".[160] La deferencia de Roca hacia los productores rurales también dio lugar a la Ley de Convertibilidad de 1899. La misma, por otra parte, pone de manifiesto la compatibilidad entre algunas demandas del empresariado rural y del industrial. La recuperación económica de la segunda mitad de la década, impulsada por el aumento del volumen y el valor de las exportaciones, se tradujo en saldos favorables de la balanza comercial. Como consecuencia, el peso se apreció, trasladando ingreso desde las actividades de exportación y de las que sustituían importaciones hacia los asalariados y los importadores. La restauración de un sistema de paridad fija estaba orientado a detener este proceso. También tenía por objetivo hacer a la Argentina más respetable a los ojos de los mercados financieros externos que, luego de la Crisis del Noventa, abrigaban serias dudas sobre la probidad y solvencia de sus autoridades. La moneda fue atada al oro a un nivel que sobrevaluaba ligeramente el metálico, y por lo tanto estimulaba las exportaciones y las actividades que competían con la producción importada. Los beneficios de una moneda devaluada y estable eran claros tanto para los productores rurales como para los industriales. El retorno a la convertibilidad ayudó a impulsar un *boom* de inversiones extranjeras que superó al de la década de 1880, y que no se interrumpió hasta los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial.

Esa década de sostenido crecimiento manufacturero también contribuyó a precisar mejor algunos límites del proceso de industrialización argentino, y a poner de manifiesto su fuerte vinculación con la economía de exportación. Si bien la Argentina era para entonces el país más industrializado de América Latina, el sector manufacturero no sólo resultaba modesto en términos comparativos, sino también fuertemente vinculado al procesamiento de productos primarios de exportación. Se ha estimado que entre un 15 y un 20% del valor de la producción manufacturera resultaba de la elaboración de harina, lana, carne, lácteos y otros productos exportables.[161] Por varias décadas, la falta de fuentes de energía como el carbón y la hidroelectricidad constituyó un obstáculo a la diversificación de la producción industrial. La industria textil, cuyo papel fue central en la industrialización en Brasil y México, permaneció subdesarrollada hasta la década de 1930. El tamaño relativamente reducido del mercado interno y las dificultades para exportar obstaculizaron el crecimiento de industrias que dependían de un mercado de mayor escala, como el cemento y el

papel. Si bien la Argentina era el país más rico e industrializado de América Latina, el nivel de la producción manufacturera per cápita era más bajo que el de muchos países europeos de menor población e ingreso per cápita.[162]

En definitiva, entonces, lo que resulta decisivo para entender la creciente aceptación de la presencia industrial por parte de los terratenientes es que, superada la etapa de inquietud que se prolongó durante gran parte de los años noventa, para el cambio de siglo comenzó a advertirse mejor que el desarrollo industrial no perjudicaba sus intereses, y que resultaba inofensivo para la expansión agraria. Si bien las tarifas aduaneras continuaron indicando las intenciones proteccionistas de la elite gobernante, la ausencia de una política crediticia más favorable a la industria, así como el carácter asistemático de su apoyo a la manufactura, revelaban algunos límites de ese industrialismo. Para el cambio de siglo, ya resultaba posible poner algunos de estos datos en perspectiva histórica. Así, en 1900, el presidente de la Unión Industrial señalaba que el período posterior a 1880 había asistido al desarrollo de la industria y de una política arancelaria proteccionista, al mismo tiempo que la economía rural experimentaba la expansión más formidable de toda su historia. Para entonces, los industriales podían afirmar confiadamente que "hasta ahora el llamado proteccionismo no ha dañado la exportación y [...] en adelante tampoco la dañará".[163]

Cuando la economía rural ingresaba a una etapa de renovada prosperidad, los terratenientes aprendieron a apreciar mejor el valor de estos argumentos. El Congreso Industrial de 1900, que contó con la participación de prominentes propietarios rurales, iba a mostrar que este cambio de humor era muy generalizado. Algunos participantes, entre los que se contaban Lauro M. Castro y José L. Suárez, alzaron sus voces contra la industria y el proteccionismo, argumentando que este último invitaba a las represalias comerciales. Pero no fueron capaces de ofrecer pruebas concluyentes para sostener sus puntos de vista. En cambio, la mayoría de los participantes del congreso consideraron a la industria no como una amenaza, sino como un complemento del sector agrario.[164] Conforme pasaban los años, este diagnóstico se confirmaba. El *boom* de las exportaciones de la primera década de siglo ofreció pruebas irrefutables de que el crecimiento industrial y el desarrollo agrario no eran un juego de suma cero. En la década que precedió a la Primera Guerra Mundial, al mismo tiempo que la industria experimentaba una expansión sin precedentes, el sector rural recobró el dinamismo de la década de 1880, y creció a una tasa anual de casi el 8% (una cifra notable para economías prekeynesianas).[165]

En esa década, los productores rurales finalmente llegaron a la conclusión de que el desarrollo industrial resultaba compatible con la expansión agraria, y aprendieron a aceptar la presencia de una economía más compleja, que no sólo no presentaba amenaza alguna a su posición como los verdaderos motores de la economía argentina, sino que también ofrecía nuevas oportunidades para hacer negocios para estancieros emprendedores o con una base territorial insuficiente. Significativamente, la discusión de la Ley de Aduanas de 1905 pasó prácticamente inadvertida, a pesar de que consolidó una política arancelaria que estaba lejos del librecambio, y que se mantuvo en vigencia hasta la década de 1930. La reforma de 1905 reafirmó una política proteccionista que, según concluía un conocido estudio de la Liga de las Naciones editado en 1927, hizo que la Argentina tuviese tarifas arancelarias promedio por encima de las de Canadá, Francia y Alemania.[166] Ello explica por qué la Argentina fue descripta muchas veces durante esos años como un país "declaradamente proteccionista".[167] Por mucho tiempo, los estancieros no encontraron en ello un motivo de gran irritación. Desaparecida la amenaza del cierre de mercados externos, las diferencias entre estancieros e industriales encontraron un factor moderador en la formidable expansión agraria, que derramó prosperidad sobre el sector agrario y sobre todo el mundo de los negocios, y que fue percibida por todas las fracciones del empresariado como el motor del capitalismo nacional. De hecho, por dos décadas incluso los propios industriales nunca dejaron de reconocer que la ganadería y la agricultura constituían las "industrias madres", de las que dependía la totalidad de la actividad económica del país.

LA DEFENSA RURAL

En el cambio de siglo, el rechazo de muchos terratenientes hacia la participación política estaba estrechamente relacionado con la exitosa evolución del sector rural. A mediados de la década de 1900, el cónsul británico en Buenos Aires informaba a sus superiores que "1906 bien puede ser considerado como otro en la serie de brillantes años de ininterrumpida prosperidad con los que el país ha sido bendecido desde el comienzo del siglo. Progreso, y más progreso, marcan la tónica dominante".[168] Incluso la Liga Agraria, cuyo interés por la actividad política era manifiesto, advertía bien que la formidable expansión económica creaba un clima para nada propicio para el activismo político. En 1905, Pastor Senillo-

sa señalaba que "el país continúa en su apogeo, los negocios no faltan, todo el mundo contento, los valores en suba".[169] Su hijo Eduardo había advertido las consecuencias políticas de este clima de bonanza generalizada cuando le escribía a su tío que de "política nada puedo informarte porque aquí nadie sabe lo que significa tal palabra, tal es la saludable indiferencia que se nota en el pueblo alto, bajo y medio".[170]

Sin embargo, algunos propietarios continuaron experimentando una resignada incomodidad con el orden oligárquico. Pastor Senillosa expresa bien este sentimiento cuando afirmaba, en 1908, que "la política mal que mal va continuando en paz que es lo que el país precisa".[171] Es importante recordar que, para los terratenientes, la relación con el estado bonaerense fue siempre más problemática que la relación con el federal, en parte porque mientras que la política nacional se estabilizaba hacia mediados de la década de 1890, la provincial saltaba de crisis en crisis. Los años que sucedieron a la caída de Costa se caracterizaron por una competencia abierta entre cívicos, radicales y autonomistas, las tres facciones que se disputaban el control del estado provincial. De 1894 a 1898, Buenos Aires fue gobernada por Guillermo Udaondo, ungido por un acuerdo entre cívicos y autonomistas. En 1898, los radicales y los autonomistas se aliaron para elevar a Bernardo de Irigoyen al gobierno. A lo largo de esos años, los tres partidos mostraron fuertes conflictos y divisiones internas. En más de una ocasión, el Poder Ejecutivo tuvo dificultades para gobernar debido a la fuerte oposición parlamentaria. Estos conflictos, que trajeron repetidas intervenciones federales, causaron profundo malestar entre los terratenientes. En 1896, por ejemplo, la Legislatura forzó a Narciso Lozano, un estanciero muy respetado que había sido designado al frente de la policía, a renunciar a su cargo. Lozano, que libraba una exitosa batalla contra el abigeato, gozaba de todo el apoyo de sus colegas estancieros. Sin embargo, las presiones de la Sociedad Rural y de la Liga Agraria no fueron suficientes para reponerlo en su puesto.[172] La jefatura de policía era demasiado importante para la vida electoral de la provincia como para dejarla en manos de alguien que no gozaba de suficiente confianza política.

Para comienzos de la década de 1900, los autonomistas lograron neutralizar a sus rivales, y desde la gobernación de Marcelino Ugarte (1902-1906) ejercieron un férreo control sobre la provincia. En unos pocos años, Ugarte hizo de sus Partidos Unidos (originalmente una agrupación poco estructurada en la que se destacaban los autonomistas, pero que también recogía apoyos entre políticos cívicos y radicales que pugnaban por su supervivencia política) una fuerza sin rivales. La poderosa ma-

quinaria política de Ugarte dominó Buenos Aires hasta 1917, y entonces el gobierno radical debió recurrir a una intervención federal para eliminarla.[173]

El ascenso de los Partidos Unidos fue bien recibido por una parte sustancial de los grandes propietarios, que veían que esta fuerza podía poner fin a la permanente crisis política que signó a las administraciones de la década de 1890. A poco de consolidarse Ugarte en la gobernación, ese optimismo desapareció. El dominio indisputado de los Partidos Unidos, rebautizado Partido Conservador en 1908, generó cierta dosis de malestar, que incluyó también a los propietarios rurales. Ugarte pronto ganó merecida fama por el empleo sistemático de todos los recursos de la política criolla para consolidar el dominio de su partido. El gobernador creó una maquinaria política que no dependía del apoyo de las clases propietarias, y de una fama tan dudosa que incluso tiempo después *La Vanguardia* recordaría como "Marcelino Ugarte llenaba la legislatura provincial con personas semianalfabetas y la administración con capataces y ahijados de comité".[174] El matonismo y la distribución desigual de las cargas fiscales también generaron amplios resentimientos.

En 1908, algunas de estas tensiones salieron a la luz. En ese año, los conservadores decidieron auspiciar una lista en las elecciones internas de la Sociedad Rural. Poco antes de la renovación de las autoridades de la más prestigiosa de las instituciones ruralistas, más de cien hombres se afiliaron con la intención expresa de votar por una lista afín al conservadurismo provincial, encabezada por Santiago Luro y Juan Ortiz de Rosas.[175] Esta actitud no registraba antecedentes; incluso en períodos de aguda lucha partidaria, la Sociedad Rural siempre había logrado mantener su independencia frente a las facciones que se disputaban el control del estado. En las elecciones internas de la Sociedad Rural, habitualmente poco concurridas, rara vez se registraban más de cien votos. En 1908, la elección alcanzó una importancia inédita, pues fue vista como un plebiscito sobre los méritos de la gestión conservadora en Buenos Aires. En esa ocasión, más de seiscientos socios se hicieron presentes para emitir sus sufragios, y la lista auspiciada por el Partido Conservador resultó derrotada.[176] Significativamente, dos prestigiosos estancieros de simpatías mitristas –Emilio Frers y José M. Malbrán– fueron elegidos para presidir la Sociedad Rural.[177]

En 1911, las tensiones entre terratenientes y gobierno conservador alcanzaron mayor intensidad. El aumento del gasto público provincial se encuentra en el origen del problema. Durante la década de 1890, el gasto se mantuvo bajo. Una vez que la economía salió de la crisis, el presu-

puesto provincial creció a pasos acelerados. Acompañando la expansión económica, entre 1900 y 1905 el gasto público prácticamente se duplicó, y entre 1905 y 1910 creció un 300%. De 1910 a 1911 volvió a subir otro 40%.[178] Es por ello que, necesitado de mayores ingresos, a comienzos de 1911 el gobierno llevó adelante una revaluación de la propiedad inmobiliaria. Los propietarios pagaban la contribución directa, que gravaba la propiedad raíz, sobre la base de la valuación de 1907, que había quedado desactualizada tras varios años de aumentos sostenidos en el precio de la tierra. El incremento resultante de la valuación de 1911 fue de un 25%. Aunque relativamente modesto, el aumento fue denunciado por varias asociaciones de propietarios y por la prensa.[179] El nuevo impuesto territorial, insistió *La Nación* en enero de 1911, "resultará una verdadera extorsión para los ganaderos".[180] A pesar de algunas protestas, los propietarios se dispusieron a pagarlo.

Algunos meses más tarde, Cecilio López Buchardo, el ministro de Hacienda de la provincia, advirtió que los recursos generados por la revaluación resultaban insuficientes para equilibrar el presupuesto, y lanzó una nueva ronda de aumentos en las valuaciones fiscales. Estas fueron incrementadas entre un 50 y un 100% y, en algunos casos, por encima del 500%.[181] La *Review of the River Plate,* que siempre gustaba recordar a sus lectores que los propietarios rurales resultaban los grandes beneficiados del sistema impositivo argentino, admitió que "en la mayoría de los casos las propiedades han sido valuadas sin proporción alguna a su valor real".[182] *El Diario* ofreció ejemplos de aumentos muy sustantivos, entre los que destaca el de la propiedad de Carlos Alberto Mayol, en Balcarce, cuya valuación se había multiplicado casi quince veces, de $126 000 a 1 800 000.[183] La irritación de muchos grandes propietarios creció con la certeza de que el incremento estaba siendo distribuido de forma claramente desigual. El gobierno conservador de Inocencio Arias, se denunció repetidas veces, había "favorecido en exceso a sus propios amigos".[184]

Dado que a menudo se considera que en este período la propiedad rural no resultaba gravada con impuestos de consideración, conviene señalar algunas peculiaridades del sistema tributario argentino, que desmienten esta afirmación, y que contribuyen a explicar la reacción terrateniente de la que más abajo pasaremos a ocuparnos. Para comienzos de siglo, los terratenientes no tenían mayores objeciones al sistema tributario federal. La situación con las finanzas provinciales era bien distinta, y es por ello que las críticas de los ruralistas solían tenerlas por objeto. Careciendo de acceso a los recursos generados por el intercambio in-

ternacional, e imposibilitadas de gravar el movimiento de mercancías, las autoridades provinciales y municipales hicieron que la propiedad inmueble pagase el grueso del costo de la administración pública. En Buenos Aires (como en otras provincias), los impuestos directos conformaban la base del sistema fiscal, a punto tal que el gravamen sobre la tierra contribuía más del 50% de los ingresos provinciales totales.[185] El presupuesto de Buenos Aires era significativo, y reflejaba la centralidad de esta provincia en la economía nacional: representaba una cifra similar al de las demás 13 provincias juntas, y oscilaba entre el 10 y el 15% del presupuesto federal.[186] Publicaciones que habitualmente expresaban puntos de visita similares a los de los estancieros solían describir al sistema fiscal provincial como "abrumador e intolerable".[187] Para los niveles que alcanzó la presión tributaria en la segunda mitad del siglo XX, las demandas fiscales de este período pueden parecer modestas. En su propio contexto histórico, sin embargo, no eran percibidas como tales. El caso del impuesto del trigo en Santa Fe en 1891 ofrece un ejemplo valioso al respecto, que por otra parte tuvo a otro grupo social como protagonista principal. En las colonias agrícolas, un alza muy modesta de los impuestos sobre este cereal contribuyó a desencadenar una gran rebelión entre los agricultores, que culminó en un desafío abierto a la autoridad del gobernador.[188]

Desde la perspectiva de los propietarios, más perturbador que el monto total que debían desembolsar era quizás el hecho de que consideraban a las finanzas provinciales como un terreno que escapaba a su control. Ello era especialmente cierto en el nivel municipal, donde el grueso de las erogaciones se destinaba al mejoramiento urbano, un tema que interesaba poco a los grandes propietarios, cuya vida social se concentraba no en las "aldeas" de la provincia, sino en la ciudad de Buenos Aires y en sus propias estancias. Por otra parte, para muchos, los municipios no eran sino "una posición política y [...] un instrumento electoral".[189] Por esta razón, las denuncias sobre el uso indebido de los recursos por parte de los "políticos de aldea" llenan las páginas de las publicaciones del período, y no sólo entre aquellos con intereses rurales. Carlos Pellegrini ofrecía un ejemplo típico de esta visión cuando argumentaba que era necesario "quitarle a las municipalidades la facultad de crear impuestos, para evitar que en un día cercano las camarillas de aldea arruinen a los ganaderos y agricultores".[190] Una reforma de este tipo nunca fue llevada a cabo, y por razones bien comprensibles. Formas alternativas de financiar la administración (y la política) local no eran fáciles de encontrar. Es por ello que entre los terratenientes

no faltaron reacciones como las del ruralista Ricardo Newton, que se preguntaba amargamente si "¿suena por acaso un pito de agente de seguridad a diez leguas de una estancia? Ninguno [...] Pídese la inversión de las entradas de patentes de rodados en la campaña que fueron creados por ley *exclusivamente para la conservación de caminos.* ¿En qué se han empleado? En alumbrado, en fiestas, hasta en elecciones, menos en lo que manda la ley."[191] En definitiva, es entendible que los voceros terratenientes denunciasen una y otra vez la injusticia de las finanzas provinciales, y que las condenasen con mayor violencia que las de la administración federal.

En 1911, una sequía persistente provocó la pérdida parcial de la cosecha y redujo las pasturas disponibles, colocando a agricultores y ganaderos en una posición incómoda.[192] El fuerte incremento impositivo decidido por el gobierno de Inocencio Arias resultó una nueva presión sobre los productores, frente a la cual, por cierto, podían reaccionar. Debido a que se trataba de un asunto eminentemente "técnico", la revaluación no fue debatida en las cámaras, y hasta tanto no recibieron las boletas donde figuraban los nuevos montos a abonar, los propietarios no advirtieron el abrupto incremento del impuesto. Pero cuando las boletas fueron distribuidas en octubre, el fuerte y sorpresivo aumento dio lugar a una gran agitación y un "notorio malestar entre los grandes propietarios."[193] Incluso la propia prensa oficialista debió aceptar que el ministro de Hacienda, López Buchardo, se había ganado "el encono de todos los terratenientes de la provincia".[194] Tan airada fue la reacción de los estancieros de Buenos Aires que el Partido Socialista, que en general prestaba muy escasa atención a los sucesos de la provincia, tomó un súbito interés en el asunto. Sorprendidos por la agitación de los propietarios, los redactores de *La Vanguardia* destacaron que, a los terratenientes, "lo único que les falta para ser facciosos es empuñar armas".[195]

El generalizado descontento entre los hacendados incitó a las asociaciones ruralistas a organizar una protesta. Una vez que se hizo claro que el gobierno conservador no estaba dispuesto a volver atrás, la Sociedad Rural convocó a una asamblea para el 10 de octubre, que encontró un eco masivo. "Hace ya mucho tiempo que los propietarios territoriales no se levantan *en masse* como lo han hecho en esta ocasión", informaba la *Review of the River Plate.*[196] Por su parte, *La Prensa* señalaba que "no hay memoria de que el ruralismo acaudalado de la provincia de Buenos Aires se haya incorporado de igual forma para discutir leyes arancelarias que afecten a la propiedad raíz".[197] En esa ocasión, más de cuatrocientos terratenientes reclamaron airadamente la cancelación de la valuación.

Con la intención de redoblar la presión sobre el gobierno, también se autoconvocaron para una segunda asamblea.

Dos semanas más tarde, una reunión todavía más concurrida tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Para entonces, las autoridades de La Plata habían dado muestras de que estaban dispuestas a ceder a los reclamos terratenientes, y López Buchardo buscaba una manera elegante de renunciar.[198] Sin embargo, los estancieros no se reunieron sólo para celebrar su triunfo. El éxito de la convocatoria convenció a los ruralistas de que debían orientar sus esfuerzos hacia un proyecto político más ambicioso. Los estancieros habían sido ganados por una profunda desconfianza hacia el gobierno conservador, y temían que presiones impositivas similares se repitieran en el futuro. En la asamblea, uno de los oradores afirmó que "el problema no abarca solamente el momento actual. Tiene proyecciones para el futuro, pues debemos defendernos de asechanzas futuras, pues bien claramente se vislumbra que el gobierno, aflojando en sus exigencias transitoriamente, ante la fuerza de la protesta actual, nos esperará para el año venidero y aprovechará todo momento oportuno para desquitarse imponiéndonos nuevos gravámenes".[199] El hecho de que la maquinaria política conservadora hiciese abundante uso de los recursos estatales volvía a los estancieros sensibles especialmente a las demandas fiscales. Esta posición se advierte bien en el manifiesto con que convocaban a su primera asamblea (del que imprimieron 250 000 copias). Allí los terratenientes afirmaban que

> la llamada nueva valuación en la provincia es una amenaza contra el derecho de propiedad [...] es sabido que la renta pública se distrae en otros fines que los servicios indispensables del Estado, haciéndose de ella un medio de protección, en subsidios, pensiones, altos sueldos de la administración pública. Por ese camino los presupuestos seguirán creciendo y cada día subirán los impuestos, hasta hacer imposible la vida [...] en esta situación, cuando todos sufren, cuando los labradores carecen hasta de semillas para continuar sus labores, se lanzan teorías subversivas anunciando llevar una guerra social contra la propiedad y el capital.[200]

Este documento ofrece una idea clara del clima de opinión terrateniente, y numerosas fueron las voces provenientes de este sector que alertaban sobre esta "guerra social contra la propiedad y el capital" que incitaba el gobierno conservador. Los dirigentes de la Liga Agraria, por

ejemplo, consideraban que la presión fiscal era un ataque inaceptable sobre la propiedad privada, y apenas afirmaron que las demandas del estado eran más dañinas que la acción sindical o la agitación política de las clases subalternas. Diego Baudrix, el presidente de la Liga, denunció que "la clase social acomodada se está sintiendo oprimida, por dos fuerzas: la socialista que se siente desde abajo, y la comunista [*sic*] que se siente arriba, conceptuando a esta la más peligrosa por su manera y medios de actuar".[201] Saturnino Unzué, uno de los mayores propietarios del país, abonaba este razonamiento cuando afirmaba que con la nueva valuación el pago del impuesto territorial insumía el 55% del ingreso que obtenía por el arrendamiento de su campo de 52 000 hectáreas en Adolfo Alsina.[202]

Estos temores, probablemente tan exagerados como hondamente sentidos, fueron acompañados por una renovada confianza de los grandes propietarios en su capacidad política. A mediados de octubre, Adolfo J. Pueyrredón, un hombre de larga trayectoria ruralista, insistía en que "no es posible entrar en arreglos con el gobernador Arias. Este no sabe lo que quiere, ni a dónde va [...] más que nunca necesita su gobierno el control directo é inmediato del pueblo [...] vemos ahora en transparencia que la provincia gime bajo el peso de leyes anacrónicas y que su mandatario no inspira confianza porque carece de estabilidad en sus ideas! En esta situación no cabe sino la acción conjunta de todos los damnificados".[203] Saturnino Unzué se manifestaba de modo similar, y reclamaba la renuncia del gobernador.[204] Muchos otros también tildaron a Arias de desequilibrado e incapaz.

Al calor de estas opiniones extremas, la idea de organizar un partido pronto contó con amplios apoyos. Al describir la asamblea terrateniente de fines de octubre, el *Standard* advirtió que "considerando la posición, carácter y número de los organizadores de este movimiento es probable que conduzca a la formación de un fuerte partido en la provincia, que no limitará su acción a la disminución de las cargas fiscales".[205] Este diario estaba en lo cierto. Envalentonados por su triunfo, temerosos de nuevos asaltos conservadores, muchos terratenientes que acudieron al llamado de sus pares se mostraron dispuestos a lanzar una nueva fuerza política. El partido terrateniente, que fue bautizado con el nombre de Defensa Rural, tenía por objetivo dotar a las clases propietarias de Buenos Aires de un instrumento con el que mantener a raya a un gobierno percibido como una amenaza. Como advertían los socialistas, "los terratenientes proyectan todo un plan de acción política propia y directa, dirigida a tutelar exclusivamente sus intereses de clase [...] los terratenientes quie-

ren alejar el peligro de cualquier 'atentado' y estiman que la mejor manera de garantizar su privilegio es influir con un espíritu de clase más pronunciado y activo en la vida política".[206]

La Defensa Rural pronto comenzó a prepararse para las elecciones que iban a tener lugar en abril de 1912. Resulta importante ofrecer un somero panorama sobre cómo fue percibida la aparición de esta fuerza terrateniente. La Defensa Rural generó amplias expectativas en la prensa y la opinión pública, poco acostumbradas a observar la formación de un partido cuyos militantes conformaban "el núcleo más poderoso de elementos de riqueza territorial y ganadera de Buenos Aires".[207] Distintos periódicos, entre los que se contaban *La Nación* y *La Prensa,* celebraron la aparición de la Defensa Rural, a punto tal que *La Vanguardia* sostenía que toda la "prensa rica" asistía "incondicionalmente la campaña de los estancieros".[208] El partido terrateniente también concitaba apoyos entre los mitristas y los radicales, cuya inquina contra el conservadurismo, muy abierta, era producto de su total eliminación de la política provincial.

El vocero socialista no exageraba la simpatía con la que la prensa celebró la decisión de los grandes terratenientes de buscar un lugar en la vida pública provincial. *Caras y Caretas* condenó al gobierno conservador a través de una de sus caricaturas; se burló de los métodos autoritarios con los que el conservadurismo intimidaba a sus rivales, y describió al gobernador Arias preocupado por la Defensa Rural.[209] *La Razón,* por su parte, afirmaba que "no podemos sino saludar con aplausos la incorporación á la actividad pública de los valiosos factores que están representados en el centro de la Defensa Rural".[210] Como en otras ocasiones, la gran prensa argumentó que la decisión de los grupos propietarios de tomar un lugar en la vida política contribuiría a la eliminación de un sistema partidario fundado sobre maquinarias y caudillos electorales de dudosos antecedentes. El ingreso más pleno de las elites socioeconómicas en la escena pública permitiría estrechar el hiato entre una política corrupta y una sociedad pujante y saludable, favoreciendo la consolidación de una democracia más plena. *El Diario* señalaba que "ningún partido en el país, ni ahora ni hace mucho tiempo, levantó bandera más amplia, ni con mayores prestigios en la tradición en el presente y en el futuro".[211] *La Prensa* ofrecía un testimonio elocuente de esta perspectiva, y de la simpatía hacia la Defensa Rural que tanto enfurecía a los socialistas. Conviene citarlo en extenso. Para este diario,

> los hacendados que firman el manifiesto de la Defensa Rural, representan la clase conservadora de la provincia de Buenos Ai-

> res, su verdadera fuerza económica [...] *La Prensa* ha manifestado muchas veces la necesidad y la conveniencia de esta acción por parte de los hacendados [...] Su aislamiento, su inercia, significaban una gran fuerza perdida para el progreso ascendente de la provincia en que están afincados. La buena prédica constante no ha caído en el vacío [...] La Defensa Rural se presenta como una promesa en el presente y como un presagio para el futuro, pues ensaya el molde de los partidos argentinos del porvenir: agrupaciones de programas y propósitos puntualizados de alta administración, acaudillados por ciudadanos de arraigo y responsables que buscan las posiciones gobernantes, no para satisfacer un apetito, sino para realzarlas.[212]

Visiones como esta indican que la Defensa Rural encontraba eco favorable, y sin duda ello debe haber contribuido a que los terratenientes lanzaran su partido a la arena política. Desde otra perspectiva, la forma en que el gobierno conservador reaccionó frente a la movilización ruralista ofrece un valioso testimonio sobre cómo esta era percibida. El gobierno demostró temor frente a este inesperado desafío. No debe sorprender, entonces, que su prensa facciosa atacara a "los latifundistas de Buenos Aires, estos nuevos romanos de nuestra decadencia".[213] De todos modos, los conservadores prefirieron evitar ingresar en el terreno de la crítica social. Sus denuncias sólo lateralmente describieron a los terratenientes como parásitos o a la gran propiedad como un obstáculo para el progreso social. En cambio, optaron por considerar a los estancieros como figuras remotas, como una casta superior que se consideraba no sólo distante, sino también indiferente a la suerte del hombre común. Los terratenientes de Buenos Aires, decía *El Nacional*, "sólo se reúnen para fustigar y despreciar sus poderes constituidos, para protestar sus pagos y para descalificar al 'guarango' que es intendente o funcionario en la localidad y a los 'guarangos' en conjunto que bien o mal ejercen la dirección de la cosa pública".[214] En esta visión de tonos marcadamente populistas, los dirigentes conservadores se presentaban como figuras de rango social similar al que caracterizaba a los vecinos de la provincia.

Una vez confrontados con la gran movilización terrateniente, los conservadores fueron cambiando el ángulo de su análisis, pues creyeron más conveniente insistir en que los ruralistas no expresaban los verdaderos intereses del conjunto de los propietarios rurales. Así, *El Nacional* se refirió a la gran asamblea de fines de octubre sólo para negarle representatividad, y para denunciar que estaba movida por intereses políticos incon-

fesables.[215] La Liga Agraria, siempre más extrema que la Sociedad Rural, concentraba las diatribas de los conservadores, y no debe sorprender que su prensa afirmara (falsamente) que se trataba de la única organizadora de la protesta, y que humillara a sus miembros describiéndolos como un grupo de lunáticos que debían ser encerrados en un manicomio.[216] En definitiva, y a diferencia del conflicto entre estado y terratenientes que tuvo lugar en 1940 por motivos similares –que tendremos ocasión de analizar en el capítulo 5 de este libro–, en 1911 el gobierno consideró que podía obtenerse más rédito denunciando a los ruralistas como instrumentos de designios políticos anticonservadores que como auténticos representantes de su clase social. Ello sugiere que la figura del gran terrateniente como un parásito y como un explotador de la comunidad todavía no había ganado el peso que a menudo se le atribuye.

Cuando la Defensa Rural apareció en escena, algunos observadores pronosticaron que esta fuerza terrateniente iba a inaugurar una nueva era en la vida argentina: la de los partidos de clase. La necesidad de poner fin a una vida política basada en agrupaciones que se organizaban en torno a liderazgos antes que a ideas y programas, y que se definían como representativas de la sociedad en su conjunto antes que de alguna de sus partes, era uno de los grandes temas de la discusión en torno a la reforma política en el cambio de siglo. Por este motivo, es entendible que la aparición de la Defensa Rural concitara cierta atención entre algunos grupos reformadores, que insistieron en la novedad que significaba la presencia de este partido de clase. Los socialistas, que veían a la "política criolla" como uno de los signos más visibles del atraso argentino, hicieron repetidas afirmaciones en este sentido. Sus preocupaciones más inmediatas, sin embargo, estaban en otro lado. El Partido Socialista temía al ascenso de la nueva fuerza, a la que veía como una variante local de los partidos agrarios europeos que por entonces lanzaban a los campesinos a la arena política bajo la égida de los terratenientes, y que se habían convertido en un motivo de gran preocupación para los socialdemócratas alemanes y austríacos. En su conflicto con las autoridades de la provincia, insistía *La Vanguardia*, la victoria de los hacendados "está descontada de antemano. Primero, porque su movimiento no es contrarrestado por ninguna otra corriente de opinión. Segundo, porque los rebeldes son grandes electores, grandes señores feudales que aportan mesnadas al comicio".[217] Los socialistas incluso dieron crédito a una versión que afirmaba que la Defensa Rural podía recibir unos 30 000 votos (lo suficiente para ganar la elección en la provincia).[218]

Esta idea tomaba parte de su fuerza de la creencia socialista en el poder electoral de los grandes propietarios. Para *La Vanguardia,* "la peonada de los señores terratenientes es un gran renglón del cuerpo electoral bonaerense".[219] Otras voces, en este punto indudablemente más sabias, invitaban a una evaluación más cautelosa de las posibilidades de la Defensa Rural. Al comentar la decisión de los ruralistas de organizar su partido, *El Diario* observaba que "es tal su gravitación sobre la economía general de la provincia que, sin trepidar, debe asegurarse que el triunfo estará del lado a que se inclinen, si algo pesa en el concepto de las cuestiones políticas electorales los factores que son decisivos en todas las demás".[220] Ciertamente, *El Diario* tenía buenas razones para hacer esta afirmación de modo condicional. En las elecciones provinciales realizadas a fines de noviembre de 1911, menos de un mes después de la gran reunión ruralista, la maquinaria política conservadora funcionó con la eficacia acostumbrada. En el momento mismo en el que los hacendados se encontraban en el punto de mayor tensión con las autoridades de la provincia, y cuando era generalizada la convicción de que las autoridades de La Plata eran "particularmente impopulares, pues no han hecho otra cosa que robar dinero",[221] los conservadores ganaron en ochenta de los ochenta y cinco distritos en los que hubo comicios.[222] La ausencia de toda "corriente de opinión" que disputara la batalla de propaganda con las voces terratenientes, que los socialistas en su momento habían deplorado, no parece haber incidido en este resultado. Tras la avalancha conservadora, ni siquiera los socialistas dejaron de advertir que "la nueva hornada de municipales salió a gusto del gobernador Arias, buen maestro en el arte de dirigir y manipular la máquina electoral de la provincia".[223] Quien tuviera ojos para leer estas señales podía concluir que el futuro de la Defensa Rural se presentaba menos promisorio de lo que algunos de sus organizadores esperaban.

A medida que el momento de ir a las urnas se acercó, se hizo claro que la posición política de los estancieros no había mejorado respecto de 1893. Cuando la euforia inicial se evaporó, se advirtió bien que ni las características de la sociedad rural ni de su vida política auguraban nada bueno para los terratenientes. Si había habido algún cambio en el plano social, este no había reforzado, sino debilitado a los propietarios. Al igual que en el pasado, los trabajadores de la estancia eran el grupo que los terratenientes podían movilizar con mayor facilidad. Pero su peso como porcentaje del total de asalariados de la provincia no era significativo (seguramente menos del 10% del total), y además se encontraba en disminución. El censo de 1914 indica que en Buenos Aires había más

trabajadores permanentes en actividades manufactureras (152 627) que en tareas relacionadas con la ganadería y la agricultura (123 865). El número de los trabajadores en el sector de comercio y transporte también era elevado (89 993).[224] Este cuadro es incompleto, ya que no toma en consideración a los obreros temporarios que constituían el verdadero lazo entre los mercados de trabajo urbano y rural: esos trabajadores poco calificados que se desplazaban desde la ciudad al campo, siguiendo la demanda estacional pautada por la cosecha de granos y, en menor medida, por la esquila de la lana. Pero dejando de lado a los trabajadores temporarios (cuyos lazos con los grandes propietarios eran poco significativos), cuando comparamos la información provista por los censos de 1895 y 1914, la tendencia que se advierte es clara. En el lapso de veinte años, el empleo en el sector primario creció un 50%, mientras que en el sector secundario aumentó un 200%, y en comercio y transportes se duplicó.[225]

En síntesis, la economía bonaerense intensificó el patrón productivo que se basaba en la concentración de la estancia en la producción de bienes rurales, y que a su vez fomentaba el desarrollo de una sociedad más compleja en su entorno. Más aún, tranqueras adentro, la estancia de comienzos de siglo se había vuelto menos homogénea en sus lealtades sociales y políticas que la de veinte o treinta años atrás. Para cuando apareció la Defensa Rural, el cultivo cerealero se había extendido por todo Buenos Aires, que se había convertido en el principal distrito agrícola argentino. En la pampa, el cultivo de granos era llevado adelante bajo diferentes sistemas de tenencia, que incluían, como en el caso de algunas regiones de Santa Fe, la propiedad de la tierra en manos de la familia agricultora. En Buenos Aires, así como en el territorio de La Pampa, los agricultores arrendatarios predominaban por sobre los propietarios. Como hemos visto en el capítulo anterior, incluso después de la expansión de la agricultura cerealera que sucedió a la crisis de 1890, la ganadería permaneció como la actividad central de la estancia bonaerense. El interés inicial de muchos hacendados por la producción granífera estuvo vinculado a la necesidad de mejorar las pasturas con vistas a criar ganado refinado. Con este fin, impulsaron la expansión del cultivo, pero nunca abandonaron del todo su posición de rentistas para adoptar el papel de empresarios del cereal. Como consecuencia, las estancias típicamente combinaron la actividad ganadera, realizada por gestión directa de los terratenientes o de sus administradores, con el arrendamiento de lotes destinados al cultivo de granos. En general, los chacareros de la provincia trabajaban grandes unidades de producción (mayores que las de sus congéneres de Canadá o los Estados Unidos), con ayuda de trabajo

familiar durante todo el año y con trabajo asalariado durante la cosecha. La producción granífera estaba basada en contratos de corto plazo (habitualmente de dos a cuatro años), que no contribuían a afincar a los chacareros a la tierra, ni a desarrollar lazos perdurables con los propietarios del suelo.[226]

Para fines de la década de 1900, los chacareros habían superado en número a los trabajadores permanentes de la estancia.[227] Hasta entonces, la relación entre terratenientes y cultivadores nunca había desembocado en conflictos abiertos. Desde el inicio de la gran expansión granífera, la escasez de fuerza de trabajo les había garantizado a los agricultores arrendatarios términos contractuales favorables. De todas maneras, a diferencia de los asalariados permanentes de la estancia ganadera, los chacareros nunca desarrollaron sentimientos de lealtad hacia los hacendados. Lo inverso también parece cierto: a fines de la década de 1900 Godofredo Daireaux afirmaba con razón que "el estanciero actual odia cordialmente al colono, al agricultor, á esa gente que pulula".[228] Aun cuando muchos de estos eran extranjeros, y en su mayoría permanecían al margen de la vida electoral, parece claro que la expansión de la agricultura granífera debilitó la posición política de los terratenientes en la sociedad rural.

La Defensa Rural debía lidiar con una sociedad que se revelaba más diversa y compleja no sólo fuera, sino también dentro de las propias estancias. Lo que es más importante, también debía enfrentar una poderosísima maquinaria política, cuyo dominio sobre la vida de Buenos Aires no había enfrentado rival alguno por años. Para desafiarla, los estancieros debían organizar una red política que cubriese la provincia, y esta tarea requería de saberes propios del mundo político, que muchos estancieros no tenían, y que pronto descubrieron que tampoco estaban del todo dispuestos a adquirir. En este sentido, el desprecio con que muchos de ellos juzgaban el mundo político local –el del comité, el caudillo, el matón, etc.–, si bien inicialmente los debe haber impulsado la acción, en el mediano plazo seguramente operó como un obstáculo para que perseveraran en una tarea organizativa de cuyos aspectos más sucios y rutinarios siempre prefirieron no ocuparse. Los conservadores, por otra parte, nunca se mostraron dispuestos a hacerles las cosas sencillas a sus nuevos rivales. En diversas ocasiones, la Defensa Rural se quejó de que los conservadores les impedían desarrollar sus actividades proselitistas.[229] De todas maneras, los ruralistas encontraron más dificultades en su propia incapacidad para movilizarse y reclutar apoyos entre la población local. En Baradero, por ejemplo, los ruralistas contaban con tan pocos

seguidores que todos ellos "fueron nombrados vocales" del comité local.[230] En marzo, un mes antes de las elecciones provinciales, la Defensa Rural denunció airadamente que debido a la interferencia oficial no iba a presentar candidatos en ese llamado.[231]

Pronto se hizo evidente que los problemas de los estancieros no eran sólo consecuencia de la politiquería sucia del Partido Conservador. Luego de su renuncia a participar en los comicios provinciales, la Defensa Rural presentó candidatos en las elecciones federales que se llevaban a cabo de manera simultánea. Es importante señalar que estas elecciones fueron las primeras que se realizaban bajo el imperio de la nueva ley electoral que había sido sancionada a comienzos de 1912, que instituía el sufragio secreto y obligatorio, y que garantizaban una mayor traspa-rencia electoral. Por este motivo, estos comicios darían una imagen bien detallada del poder electoral de los grandes propietarios.

El compromiso del presidente Roque Sáenz Peña de garantizar elecciones honestas en el nivel nacional seguramente favoreció el ingreso del partido terrateniente en la arena política. Como se nota al seguir la pobre campaña de la Defensa Rural, sus líderes estaban mal preparados para una tarea de proselitismo y agitación que reclamaba dedicación y organización. De hecho, pronto se advirtió que el desempeño de ese partido no estaba a la altura de los desafíos que imponía el nuevo sistema. El éxito muy relativo de sus actos públicos sugiere bien las dificultades de los terratenientes para dotarse de una amplia base popular capaz de secundarlos. Es comprensible, entonces, que tras la euforia inicial, las adhesiones disminuyeran.

Algunos sucesos que estaban fuera del control de los ruralistas también contribuyeron a quitarles seguidores. La Defensa Rural había nacido en un momento en el que la oposición había desaparecido del escenario provincial. Ello le había permitido recolectar adhesiones, muchas de ellas interesadas, de todo el arco anticonservador. La situación cambió con la sanción de la nueva ley electoral en febrero de 1912, pues esta estimuló la reorganización de radicales y cívicos, que desde entonces se ocuparon más de sus propios proyectos que de celebrar a los terratenientes.[232] A partir de ese momento, las defecciones crecieron. La Defensa Rural había invitado a dos notables mitristas, Norberto Piñero y Luis María Drago, para que se sumaran a su lista de candidatos, pero estos desistieron.[233] Lo que es todavía más revelador es que los propios líderes ruralistas comenzaron a renunciar a sus candidaturas cuando se les hizo evidente que el partido marchaba indefectiblemente hacia la derrota. Dos semanas antes de las elecciones, el presidente de la Sociedad Ru-

ral, José M. Malbrán, súbitamente recordó que como afiliado a la Unión Cívica no le estaba permitido candidatearse por otro partido.[234] Esto no era más que una excusa, ya que Malbrán "nunca se había interesado en política".[235] La actitud de Julio Pueyrredón fue más franca. En la carta en la que comunicaba al comité central de la Defensa Rural su renuncia, aceptó sin rodeos que "la maquinaria administrativa está montada de tal manera que es imposible la lucha en el comicio".[236]

Este ex presidente de la Sociedad Rural estaba en lo cierto. Al igual que en noviembre de 1911, en abril de 1912 la victoria del Partido Conservador fue apabullante. En la Capital Federal, la Defensa Rural obtuvo 1600 votos, una cifra que representaba el 2% del total de sufragios emitidos.[237] En la provincia, el partido de los estancieros apenas reunió unos pocos centenares de votos.[238] Tras los comicios, la prensa conservadora se vengó de las afrentas sufridas, y se regocijó ante la humillación experimentada por los terratenientes. La Defensa Rural, decía *El Nacional*, "á base de la Liga Agraria y otras yerbas, que se atribuía en un momento dado la inmensa mayoría de la provincia. ¡Qué bonito papel ha hecho ayer! Es la agrupación que ha tenido menos adherentes de todas y eso que no le ha faltado propaganda y proclamaciones bombásticas de candidatos."[239]

Después de la derrota, la Defensa Rural rápidamente se disolvió. Para sus impulsores, la lección había sido dura, y de hecho cancelaría de manera definitiva toda propuesta de crear una fuerza política terrateniente. En un sentido más general, la experiencia de la Defensa Rural indica que los grupos gobernantes del régimen oligárquico estaban lejos de ser un instrumento que los grandes propietarios manejaban a su antojo, y que los terratenientes carecían del poder suficiente como para modificar esta relación. Cuando los ruralistas se lanzaron a desafiar las posiciones de la elite gobernante, se volvió evidente que no poseían los recursos necesarios para una tarea tan ambiciosa. Las bases políticas de los grupos gobernantes eran lo suficientemente amplias como para condenar estos esfuerzos terratenientes a una derrota inapelable. La humillación que los hacendados de Buenos Aires sufrieron a manos de la maquinaria política conservadora en 1912 explica por qué la Defensa Rural fue un capítulo de la historia de la clase terrateniente que sus propios protagonistas y sus descendientes siempre prefirieron olvidar.

4. Dos décadas de cambios

A comienzos de la segunda década del siglo XX, los magnates territoriales de la pampa constituían el grupo social más influyente y prestigioso del país. Visible y cohesionado, su distancia respecto de muchas de las vicisitudes del mundo industrial, y más en general del trabajo urbano, como también de los avatares cotidianos de la agricultura cerealera, hacía de ellos figuras remotas antes que antagonistas directos o blancos de la crítica de los segmentos preponderantes de las clases subalternas. El lugar central que la clase terrateniente poseía en la cima de la exitosa economía de exportación, así como sus lazos con los intereses económicos extranjeros, autorizaba a los miembros de este grupo a imponer límites a la acción de la elite política, y a la vez le permitía hacer sentir su influencia más allá del círculo de los grandes beneficiarios de la Argentina del cambio de siglo. En aquellos años, los cronistas de la vida nacional rara vez dejaron de referirse a la importancia de los grandes estancieros, a su enorme riqueza, a su lugar privilegiado en la cúspide de la sociedad, a su profunda identificación con la tierra y la producción rural. "El orgullo que provoca el ganado de raza de estas estancias es inmenso, y en caso de que uno sea invitado a alguno de estos lugares sin que se lo invite a recorrer las lujosas dependencias de los toros, los potros y los carneros de raza, bien puede afirmarse que el dueño o el administrador se encuentran en un estado de total distracción", reza una típica observación de esos años, en este caso formulada por un visitante británico.[1] La exposición anual de la Sociedad Rural, esa gran celebración que ofrece testimonio de la importancia de los grandes propietarios rurales y de la economía agraria pampeana, era entonces ampliamente considerada como "un suceso de relevancia nacional".[2]

A lo largo de más de un cuarto de siglo, la veloz transformación de las rústicas razas nativas en animales de gran calidad, y los profundos cambios que afectaron a las empresas agrarias prestigiaron a los terratenientes progresistas, y les dieron una imagen pública positiva. El clima celebra-

torio que caracterizó a los años del Centenario le permitía a Godofredo Daireaux afirmar que "la estancia argentina puede, en 1908, competir victoriosamente con los establecimientos similares de cualquier parte del mundo".[3] Mientras en 1895 la mitad del ganado vacuno en la provincia de Buenos Aires todavía era criollo, trece años más tarde el ganado sin refinar representaba menos del 10% del rodeo. Como observaba el director del censo ganadero de 1908, se trataba de un cambio extraordinario.[4] Es comprensible que los estancieros juzgasen logros como este con inocultable satisfacción. Pero en esos años comenzaron a hacerse visibles otros aspectos, sin duda menos agradables para los propietarios del suelo, que ponían de manifiesto que el fin de un ciclo histórico se acercaba. Para la década de 1910, las magníficas estancias y la ganadería refinada de la pampa ya no resultaban una novedad que reflejaba la modernidad de los terratenientes. Hasta cierto punto, para entonces ya conformaban parte del paisaje de la Argentina. Como los testimonios contemporáneos lo sugieren, había mucho que celebrar a la hora de evaluar todo lo que significaba la ganadería. Pero como consecuencia de los propios logros de la cultura ganadera, era dudoso que esta diera lugar, en el futuro cercano, a nuevos y más poderosos procesos de desarrollo. En la década de 1910, la ganadería estaba cerca de haber alcanzado una meseta tecnológica, en la que permanecería hasta bien pasada la Segunda Guerra Mundial. Y otro tanto puede decirse respecto de la agricultura cerealera, cuyos rasgos tecnológicos básicos no se modificarían hasta la década de 1950. Es por ello que, a partir de los años del Centenario, la admiración por los cambios impulsados por la empresa rural moderna, en particular por la actividad ganadera, que había sido tan típica de décadas previas, disminuyó de forma acusada.

La gradual desaparición del aura modernizante que la estancia reformada confería a los propietarios progresistas debe ser entendida como parte de un proceso mayor: la lenta pero irreversible erosión del poder y la influencia de los magnates territoriales. Como no podía ser de otra manera, el prestigio y el poder de los estancieros de la pampa se fundaban, en primer lugar, en la riqueza territorial acumulada a lo largo de una o dos generaciones. Pero también se basaba en un conjunto de circunstancias históricas que, hacia la década de 1910, se vieron crecientemente afectadas por diversos procesos políticos, económicos y sociales. La augusta posición de los terratenientes dependía del dinamismo de la sociedad rural, y en particular de su capacidad para generar amplias oportunidades para el enriquecimiento y el ascenso económico y social. Su ascendiente se fundaba, también, en el carácter no conflictivo de la

relación entre la elite propietaria y el resto de la sociedad argentina, tanto urbana como rural.

En las dos décadas que sucedieron al Centenario de la Revolución de Mayo, el contexto que hacía posible la preeminencia de los grandes terratenientes comenzó a modificarse. En consecuencia, las relaciones entre estancieros y sociedad argentina se tornaron más tensas. En esos años, llegó a su fin la larga paz social que había caracterizado a las pampas desde los albores de la expansión agraria. En 1912 se produjo el primer gran conflicto entre terratenientes y agricultores. Desde entonces, si bien no faltaron momentos de calma, la relación entre estos dos grupos se tornó conflictiva. El nuevo escenario político que tomó forma luego de 1912 potenció esta tensión. Al comienzo, la aprobación de una nueva ley electoral que instauró el sufragio obligatorio para todos los hombres adultos no fue resistida por los grandes propietarios. A poco andar, sin embargo, se hizo claro que la política argentina se volvía más plebeya en tono y estilo. En un clima marcado por un aumento de la politización y la participación, la movilización de las masas contribuyó a debilitar la posición política de los terratenientes. Finalmente, con la gran crisis ganadera de comienzos de la década de 1920, la ascendencia de los grandes estancieros sobre el resto de los productores ganaderos sufrió severas impugnaciones. Todos estos factores hicieron que, desde la década de 1910, el ascendiente de los terratenientes se disipara poco a poco, pues ya no les resultaba sencillo presentar sus intereses como coincidentes con los del resto de la sociedad rural. Los grandes estancieros se volvieron objeto de la animosidad de las mayorías, a punto tal que, para fines de la década de 1920, prácticamente todos los grupos de la sociedad veían en ellos un ejemplo acabado de una clase retrógrada parasitaria.

LA APARICIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL EN LA PAMPA

Uno de los procesos de mayor relevancia de los años del Centenario fue el cierre de la frontera agrícola. Desde los albores de la expansión agraria en las primeras décadas del siglo XIX, la pampa había sido considerada una tierra nueva, que demandaba trabajo y esfuerzo de quien la poblase, pero que ofrecía, a cambio, amplias posibilidades de progreso económico y social. Desde el comienzo, esta imagen exageraba las oportunidades que la región ofrecía a aquellos inmigrantes que se disponían a probar suerte en las actividades rurales, y prestaba escasa atención a algunos de

los obstáculos que se interponían en el camino del éxito. Las praderas argentinas estaban lejos de ser la tierra de ilimitada oportunidad con que a veces se ha asociado a la frontera, por ejemplo en la obra celebratoria de Frederick Turner.[5] En las etapas iniciales de la expansión agraria, sin embargo, el bajo precio del suelo contribuyó a limitar las barreras de entrada a la actividad rural, e hizo posible el éxito de muchos recién llegados. En las décadas centrales del siglo, inmigrantes emprendedores y exitosos, como Luro, Santamarina, Pradère o Duggan adquirieron grandes extensiones de tierra, y en el lapso de pocas décadas se hicieron de verdaderas fortunas. En apenas una generación, estas familias de nuevos ricos forzaron sin mayor esfuerzo su ingreso en una clase alta que estaba lejos de ser especialmente rica o exclusiva.

Los Santamarina ofrecen un ejemplo ilustrativo de la porosidad de la elite de las décadas centrales del siglo. Ramón Santamarina, afirmaba uno de sus nietos, "vino a este país en tercera clase, sin más fortuna que su cerebro ni más ayuda que la energía de su músculo".[6] Un origen tan humilde no fue obstáculo para que sus descendientes se unieran en matrimonio con familias de la alta sociedad. En apenas una generación, los Santamarina se emparentaron con las familias Gándara, Terrero, Pacheco, Avellaneda, Acosta, Saguier, Lezica Alvear, Quintana Unzué y Alvear. Algunos de los hijos de Ramón Santamarina, como José, no mostraron mayor interés en la vida pública, y pasaron sus días como empresarios rurales o como rentistas en París. Otros, además de ocuparse de la administración de sus fortunas, alcanzaron posiciones expectables en el mundo social y político: Ramón fue presidente de la Sociedad Rural y del Banco de la Nación, Enrique alcanzó la vicepresidencia del país a comienzos de la década de 1930, durante el gobierno de Uriburu, y Jorge presidió el Banco de la Nación en esa misma década. El éxito de esta familia se fundaba en la formidable fortuna que acumuló su fundador, que compró tierra en grandes cantidades desde la década de 1860, alcanzando para el fin de sus días un patrimonio territorial de más de 100 000 hectáreas.[7]

Después de la década de 1880, trayectorias como las de Ramón Santamarina se volvieron excepcionales, y la incorporación en los estratos superiores de la elite argentina, poco menos que imposible.[8] Para el cambio de siglo, ya no se registran historias de ascenso tan espectaculares, en gran medida porque la clase propietaria, enriquecida y consolidada, comenzaba a diferenciarse y a aislarse del resto de la sociedad más que en cualquier momento del pasado. Gracias a la enorme riqueza territorial que habían acumulado, los grandes estancieros se volvieron el segmento

más conspicuo y visible de la clase propietaria. Sus hábitos de consumo suntuario llamaron la atención de muchos observadores. Se convirtieron en el nodo central de una elite exclusiva, muchas veces descripta como "consciente de su rango", más de una vez como "altiva".[9] El dinero, afirmaba Gordon Ross en la década de 1910, "tiene mayor eficacia como llave para ingresar a la sociedad en muchas capitales europeas que en Buenos Aires".[10] Que ello sea cierto depende mucho de qué elites europeas uno tenga en mente. De todas maneras, comentarios como este indican bien que para ese momento ya no resultaba sencillo ingresar en la clase alta. Como Julio Monzó percibió con claridad, el alza del precio de la tierra, esto es, del principal activo de la elite propietaria, estaba en la base de este cambio.[11]

La rápida valorización de la tierra no sólo contribuyó a delinear mejor los rasgos de los grupos que estaban en la cima de la clase propietaria. También contribuyó a dotar de un perfil de clases más preciso a toda la sociedad rural. El aumento del precio del suelo signó la expansión de la agricultura granífera, que creció con fuerza desde la década de 1890. Entre 1894 y 1903, el precio de la tierra en la provincia de Buenos Aires se multiplicó por tres.[12] En diversas áreas, el cultivo granífero se integró plenamente como parte de las actividades que tenían su sede en la estancia ganadera, que se convirtió así en una explotación en la que la labranza del suelo adquirió un lugar más preponderante que el que entonces había sido tradicional. En estas estancias mixtas, la agricultura se expandió gracias a la conversión de praderas que ya estaban generando altos rendimientos gracias a la cría de ganado lanar en áreas destinadas a la producción de granos, forrajes y vacunos refinados. En consecuencia, pese al aumento de la superficie bajo cultivo, el acceso a tierra agrícola barata se hizo dificultoso para los agricultores. En las nuevas áreas de frontera, en particular en el sur y el oeste, los grandes dueños del suelo también se resistieron a fraccionar y vender, y en su mayoría prefirieron arrendar sus tierras. Para comienzos de la década de 1900, cuando este sistema ya había madurado sus rasgos esenciales, Francisco Latzina podía ofrecer una explicación convincente sobre los motivos que explicaban esta conducta. "El dueño de tierra buena y bien situada", afirmaba, "preferirá siempre el arrendatario al comprador á plazos ó al contado de pequeños lotes. Con el arrendamiento se constituye una renta, sin perder nada de su capital [...] mientras que, en la colonización, enajena parte de su capital en pagos á plazos, morosos y á veces inseguros, y pierde la renta".[13] Motivos como este explican por qué, hacia el Centenario,

dos tercios de los agricultores en los distritos cerealeros trabajaban tierra que no era suya.

Es claro que los agricultores arrendatarios también contribuyeron a definir los rasgos de este sistema. El arrendamiento, en sus diversas modalidades, formaba parte central de la historia de la producción agraria pampeana ya desde el período colonial. En una economía crónicamente falta de brazos, el arriendo venía a ofrecer una opción atractiva para las clases trabajadoras, pues les permitía participar en la apropiación de los beneficios de la producción agrícola. Cuando la agricultura cerealera se expandió a fines del siglo XIX, y al igual que había sucedido en otros ciclos productivos (en especial en las etapas iniciales, cuando la escasez de fuerza de trabajo se hacía sentir con más fuerza), el sistema de arrendamientos aseguró a los agricultores condiciones muy favorables. Para los inmigrantes que llegaron al país en las últimas décadas del siglo XIX, así como también para los migrantes del interior o de los centros urbanos, arrendar importantes extensiones de tierra, sobre la base de contratos que les permitían participar en los beneficios, constituía una opción tentadora y a veces muy lucrativa, seguramente más atractiva que inmovilizar su escaso capital en la adquisición de una pequeña parcela.

Con el paso del tiempo, primero en las tierras de más antiguo poblamiento, pero a poco andar también en las de frontera, el creciente flujo de inmigrantes transformó el mercado de trabajo, debilitando la posición de los agricultores. El cambio fundamental se dio en la década que precedió a la Primera Guerra Mundial, cuando tres millones de inmigrantes europeos arribaron al país. La fuerza de trabajo, que siempre había sido relativamente escasa, se volvió más abundante, y ello erosionó la posición de los trabajadores. Para comienzos de la década de 1910, el ferrocarril alcanzó definitivamente los límites de la tierra apta para el cultivo granífero y para la cría de animales de calidad. Así, llegó a su fin el proceso de permanente incorporación de nueva tierra fértil que había signado toda la historia de esta sociedad de frontera. Al congelarse la oferta de tierra, el precio del suelo tendió a elevarse, y lo mismo sucedió con la renta. La combinación de un alza de la renta de la tierra y de un aumento de la oferta de fuerza de trabajo tuvo un efecto devastador sobre la capacidad de negociación de las clases subalternas.[14]

Con el cierre de la frontera agrícola, la pampa comenzó a perder muchas de las características que la habían hecho una sociedad nueva. Este proceso, que ya se había manifestado en tierras de más antiguo poblamiento, hacia el Centenario limitaba las oportunidades de acceso a la tierra en condiciones muy favorables en las últimas fronteras al sur y al

oeste. En la década de 1910, ya no resultaba tan sencillo ascender en la escala social. Aludiendo a este problema, en 1912 el diario *La Vanguardia* afirmaba que "si Santamarina compraba hace 40 ó 50 años una legua por una petaca, ni un solo palmo de tierra es accesible hoy á la multitud laboriosa".[15] En esos años, el cambio agrícola, y más en general rural, que el agrónomo estadounidense Carl Taylor consideraba tan intenso en la pampa como en las praderas americanas del siglo XIX, perdió dinamismo.[16] Desde la década de 1910, la frontera sólo se expandió en áreas marginales: en las tierras subtropicales del Chaco y en la desértica región patagónica. En los distritos cerealeros, el alza de los precios de la tierra, así como el incremento de la renta y la abundancia de trabajo, limitaron las oportunidades de ascenso económico, afectando en particular a los chacareros arrendatarios que constituían el eslabón más débil del sistema agrícola. En el sur de Santa Fe, por ejemplo, la renta se elevó de alrededor de un quinto a un tercio de la cosecha entre 1904 y 1912. A comienzos de la década de 1910, dos años agrícolas particularmente malos, uno en el que fracasó la cosecha, y otro de precios muy bajos, colocaron a los chacareros del maíz en una posición por demás incómoda. Los arrendatarios se vieron atenazados por un alza de los costos de producción y una baja del ingreso. En 1912, una huelga de arrendatarios estalló en Alcorta, en Santa Fe, y se extendió por los distritos cerealeros del norte de Buenos Aires y el sudeste de Córdoba. Poco antes del momento indicado para el inicio de las labores, los chacareros se negaron a sembrar y reclamaron una baja de los cánones de arrendamiento. Al año siguiente, en 1913, los cultivadores otra vez fueron a la huelga.[17]

En aquel momento, y por primera vez en la historia de la agricultura argentina, se hicieron manifiestas tensiones sociales que en el pasado habían sido neutralizadas por la expansión de la frontera. Poco después del movimiento de Alcorta, los chacareros crearon su propia organización representativa, la Federación Agraria Argentina. Por varios años, la Federación se limitó a reclamar una rebaja de los arrendamientos, así como mejores condiciones para la comercialización de la producción agrícola, y dejó de lado los reclamos que, como los que impulsaban los hombres del Partido Socialista, hacían énfasis en la transformación de la estructura de propiedad. Este proyecto reflejaba el profundo compromiso de la Federación, y de los chacareros que la seguían, con el orden productivo que tanto los había beneficiado en el pasado.[18] Por otra parte, la Federación también incluía entre sus animadores a agricultores propietarios, cuyas reivindicaciones no siempre ponían en el centro de la mira a los dueños del suelo. Aun así, la capacidad de los grandes terra-

tenientes para hablar en nombre de *todo el sector rural, hasta entonces* nunca discutido por otros productores, fue puesta en cuestión por el nacimiento y desarrollo de la Federación Agraria. Después de 1912, llegaron a su fin los tiempos en los que toda la prensa agrícola retrataba a los estancieros modernizantes como a los líderes naturales de todos los productores rurales. Para *La Tierra,* el vocero de la Federación Agraria, Carlos Guerrero, el presidente de Liga Agraria, que contaba con una larga trayectoria como modernizador rural, ya no pertenecía a las filas de los "agrarios trabajadores", sino que formaba parte de los improductivos y explotadores "agrarios terratenientes".[19] Después de Alcorta, la Federación argumentó una y otra vez que los propietarios rentistas desempeñaban un papel pasivo, incluso negativo, en la organización de la producción cerealera. Desde entonces, la condena de los terratenientes ausentistas y la denuncia de la falta de disposiciones empresariales de los estancieros se hizo corriente.

La crítica a los males que surgían de la gran propiedad no era un fenómeno de esos años. Desde los albores de la expansión agraria en la pampa, las elites sociales y políticas, e incluso los dirigentes de la Sociedad Rural, habían denunciado muchos aspectos negativos que resultaban de la concentración de la propiedad. En la década de 1890, la agricultura cerealera se extendió a gran velocidad, pero a poco andar pudo advertirse que ello no iba a contribuir a dar nacimiento a una sociedad de agricultores independientes. Desde entonces comenzó a gestarse un amplio consenso que identificaba a la gran propiedad como a la culpable de este lamentable resultado. Sin embargo, durante muchos años el tono de la condena no fue del todo pesimista, en parte porque los contemporáneos advertían que estaban asistiendo a importantes procesos de partición de las grandes propiedades. En 1905, por ejemplo, un muy influyente y prestigioso funcionario del Ministerio de Agricultura como Emilio Lahitte firmaba un informe sobre los cambios en la estructura de propiedad en el que señalaba "el aumento comprobado en el número de propietarios".[20] Algunos años más tarde, Alberto Martínez y Maurice Lewandowski todavía creían que un proceso espontáneo de división del suelo resolvería los dilemas de la estructura de tenencia de la tierra en la pampa. En un libro que destilaba el entusiasta clima ideológico del Centenario, estos autores condenaban "el defectuoso sistema de propiedad [...] el más odioso sistema de *latifundia* jamás conocido". A pesar de sus duras críticas, no parecían muy preocupados por el futuro, y argumentaban con confianza que "felizmente no hay necesidad de ser demasiado pe-

simista sobre este punto, pues ya puede advertirse una tendencia a la subdivisión de la propiedad".[21]

Estas visiones, que criticaban al latifundio por atrasado y contrario a todo progreso, pero que al mismo tiempo solían exculpar a los terratenientes de toda responsabilidad por su perduración, se hicieron menos frecuentes luego de 1912, cuando los pequeños agricultores se lanzaron a expresar sus reclamos de forma abierta. Es preciso señalar, sin embargo, que este cambio en la mirada sobre los grandes propietarios no se dio de un día para otro. En las etapas iniciales de desarrollo del movimiento chacarero, la denuncia del terrateniente ausentista encontró un elemento moderador en la convicción, entonces bastante generalizada, de que la solución a los problemas que enfrentaban los cultivadores y la agricultura cerealera estaba en manos de los propios estancieros. Es significativo que varios observadores considerasen que los terratenientes no habían perdido la iniciativa, y que su colaboración era esencial para resolver los problemas que afectaban a los agricultores.

En 1913, por ejemplo, Florencio Molinas sostenía que algunos ajustes menores en la legislación podían ser suficientes como para estimular a los terratenientes ausentistas a abandonar su pasividad y a asumir el papel de empresarios agrícolas.[22] Un año más tarde, dos expertos agrícolas como Godofredo Daireaux y Roberto Campolieti no veían ningún antagonismo inevitable entre propietarios y arrendatarios, e insistían en que la crisis abierta en 1912 ofrecía la oportunidad para que los terratenientes reasumiesen su papel de líderes de un nuevo proceso de cambio rural. En su utopía agraria titulada *Las cien hectáreas de Pedro Villegas,* Daireaux afirmaba que los grandes terratenientes debían voluntariamente desempeñar el papel principal en el fraccionamiento de las grandes propiedades y que debían dirigir los esfuerzos de los pequeños agricultores, ayudándolos a organizar un sistema agrícola más productivo y más justo, basado en la propiedad familiar.[23] Campolieti también creía que la agricultura podía reformarse desde arriba, e insistía en que los terratenientes debían ayudar a los chacareros a mejorar los métodos de cultivo y a librarse de las opresivas relaciones que los ataban a los comerciantes locales y a los comercializadores de granos. "Una transformación agrícola", afirmaba Campolieti, "es posible únicamente si los dueños de la tierra toman la iniciativa [...] la intervención de los propietarios en la vida campestre es [...] un modo eficaz para solucionar el conflicto agrario latente en el país".[24] Los estancieros progresistas también dejaron entrever que si los terratenientes ausentistas asumían más plenamente las funciones empresariales que habían abandonado, los problemas de los

chacareros podían resolverse. Incluso los presidentes de la Sociedad Rural Argentina y de la Sociedad Rural de Rosario pronunciaron duras palabras contra los terratenientes ausentistas, a quienes acusaron de abandonar a su suerte a agricultores que carecían de capital o experiencia. "Es necesario", afirmaron en una declaración conjunta firmada en 1913, "que los propietarios de la tierra se convenzan que el dominio comporta obligaciones en la vida moderna".[25]

Unos años más tarde, la confianza en que los terratenientes poseían la capacidad de liderar una nueva fase de desarrollo agrario terminó por esfumarse. Para fines de la década de 1910, ya nadie osaba sostener que los grandes propietarios rurales podían o debían desempeñar un papel central en la mejora de la agricultura y de las condiciones de vida de sus arrendatarios. De igual manera, la posición crítica que los ruralistas habían adoptado hacia sus colegas menos comprometidos con la gestión de sus tierras pronto se convirtió en una defensa abierta de la propiedad privada y el statu quo. El cambio se vincula con la creciente agitación que recorrió el mundo chacarero, y que despertó inquietud y alarma entre las clases propietarias. En el lapso de pocos años, los hacendados comprendieron que la Federación Agraria no podía ser considerada como una presencia efímera en el mundo rural (algo así como el producto circunstancial de un malestar temporario), y advirtieron que debían enfrentar una organización con fuertes raíces en el mundo del cereal. Y también comenzaron a percibir que los chacareros se tornaban cada vez más hostiles hacia los terratenientes y el sistema de tenencia de la tierra. Desde entonces reaccionaron contra las críticas a la agricultura argentina de distintas maneras, pero todas ellas reveladoras de la incertidumbre y el malestar que los embargaba.

En 1914, Herbert Gibson dio a la prensa su *The Land We Live On*, un pequeño libro en el que denunciaba las "endebles bases" sobre las que se asentaba la agricultura pampeana. Este reputado estanciero y experto agrícola admitía que la situación de la agricultura cerealera era por demás preocupante, y que esta debía ser reformada. Pero Gibson afirmaba que el sistema de arrendamientos, sobre el cual se concentraban las miradas críticas, no estaba en el origen del problema. Para ello invocaba el ejemplo de Inglaterra, donde una agricultura capital-intensiva se había desarrollado exitosamente sobre la base de un sistema de arrendamientos.[26] Gibson, sin embargo, prefería no explorar las diferencias entre uno y otro sistema agrícola. Más importante, también elegía pasar por alto el hecho de que la agricultura británica, que tan exitosa había sido en el pasado, se encontraba en una grave crisis, de la que no iba a recu-

perarse jamás. Para cuando Gibson daba a la prensa *The Land We Live On*, la que había sido la primera nación agrícola de Europa a mediados del siglo XIX ya había rendido su mercado a la competencia extranjera, que proveía más de la mitad de la demanda de productos rurales, incluyendo cuatro quintos de sus necesidades de trigo y harina.[27]

Otros terratenientes optaron por presentar visiones alternativas del problema, pero su objetivo era el mismo que guiaba a Gibson: sacar a los terratenientes y al sistema de tenencia de la tierra del centro de la discusión. En 1914, Carlos Guerrero expresó su inquietud acerca de la agitación que había ganado a los agricultores desde 1912, a la que describió como "la semilla de la insubordinación social".[28] El introductor de la raza Angus concentró sus críticas en los sistemas de transporte, financiación y comercialización de la producción cerealera. Guerrero se inspiró en lo que entonces sucedía en los Estados Unidos, donde la denuncia de los "trusts" concitaba gran atención, a punto tal que incluso el presidente Roosevelt se había pronunciado al respecto. Para comienzos de siglo, la economía argentina comenzó a sufrir importantes procesos de concentración y, en parte por ello, el problema del monopolio atrajo atención en el mundo político y en la opinión pública.

Las quejas de Guerrero se inscribían en este clima de denuncia de los grandes especuladores. El presidente de la Liga Agraria describió a los chacareros como las víctimas no de los terratenientes sino del "trust de cereales y ferrocarriles", que ofrecía servicios tan caros como ineficientes. Y argumentó que, para volver a prosperar, la economía cerealera precisaba del apoyo de un banco agrario estatal que ofreciera crédito a tasas bajas, de un sistema de elevadores y depósitos, y de tarifas ferroviarias más baratas. Para Guerrero, los costos de la reforma del sistema de comercialización, financiación y transporte de la producción de granos debían ser afrontados no por los dueños del suelo, sino por las compañías ferroviarias y el estado. Tres años más tarde, Guerrero volvía a sostener que no había nada intrínsecamente problemático en la relación entre arrendatarios y dueños del suelo, y otra vez denunciaba a los "trusts, que acaparan lo que el suelo tan pródigamente recompensa al esfuerzo del colono".[29] Es significativo que en sus diatribas contra los oligopolios, Guerrero prefiriera no incluir a las empresas frigoríficas. Para estas firmas, Guerrero (que no casualmente era el mayor productor de ganado de la raza Aberdeen Angus del país, y uno de los principales proveedores de las empresas exportadoras), sólo tenía palabras de gratitud.[30]

Estas defensas del statu quo dan cuenta de la reacción de los terratenientes frente al clima de denuncia de la gran propiedad que comenzó

a ganar fuerza en la década de 1910. Esta crítica se vio opacada por la Primera Guerra Mundial, pero para fines de la década el malestar chacarero y la irritación terrateniente habían alcanzado una envergadura tal que Ezequiel Ramos Mexía no podía sino aceptar en 1921 que la voz "latifundio" era una "palabra mágica que tiene la virtud de erizar los pelos de horror hasta en los menos impresionables".[31] Para entonces, azuzadas por nuevas movilizaciones de arrendatarios, las reacciones terratenientes se volvieron más violentas e intemperantes. El estanciero Miguel Pueyrredón ofrece un ejemplo de esta intransigencia cuando insistía en que "ánimos de trabajo y de economía" de parte de chacareros a quienes calificaba de indolentes e ignorantes constituían la única "panacea" que aceptaba para poner fin a la movilización de los pequeños agricultores.[32]

Para entonces, los terratenientes se sentían perseguidos como nunca antes, y no sólo en el campo. Como afirmaba Emilio Coni (un hombre habitualmente poco afecto al dramatismo o la exageración), también en la ciudad la opinión pública se había volcado decididamente contra ellos. "Primero con extrañeza, luego con pesar", afirmaba Coni en 1920, "hemos visto nacer, crecer y desarrollarse en Buenos Aires [...] una propaganda colectivista [...] personas, muy bien intencionadas sin duda, no se cansan de combatir la propiedad privada de la tierra en todas sus formas [...] está de moda, aunque no se haya pasado de Flores o Belgrano, escribir semanalmente un artículo sobre 'La cuestión agraria'".[33] Este cambio en el clima de opinión se advierte en otras esferas en las que la sociedad daba cuenta de sus dilemas, por ejemplo en el teatro. Es significativo que las representaciones de la campaña dominantes en el teatro costumbrista, que en las dos décadas anteriores a la Gran Guerra giraban en torno a las relaciones entre inmigrantes y nativos (el objeto de obras como *La Gringa,* de Florencio Sánchez), cedieran espacio a nuevas problemáticas. Como recuerda Roberto Giusti, para 1920 ya se habían definido los rasgos básicos de un nuevo tópico, que hablaba del antagonismo entre dueños y trabajadores de la tierra: "El del colono desalojado sin piedad por el patrón cuando la seca, las malas cosechas, la baja de los cereales o la sórdida especulación hacen imposible el cumplimiento de los contratos de arriendo".[34]

El conflicto agrario se inscribía en un mundo político en profunda transformación. La importancia de la movilización chacarera iniciada en Alcorta radica no sólo en que marcaba que la pampa ya no era una sociedad relativamente ajena al conflicto de clases, ni tampoco en que ella desató una ola de denuncias de la gran propiedad y los terratenientes ausentistas que, a poco de andar, afectó a toda la clase terrateniente. La

huelga de Alcorta también mostró que un cambio en la relación entre estado y sociedad tomaba forma. La movilización de los arrendatarios tuvo lugar a pocos meses de que Santa Fe se convirtiera en la primera provincia que eligió a sus autoridades bajo el imperio de la ley electoral propiciada por el presidente Roque Sáenz Peña. La nueva legislación electoral, aprobada a comienzos de 1912, forzó a quien deseara alcanzar (o mantenerse en) el gobierno a prestar mayor atención a las demandas de un electorado que había crecido tanto en tamaño como en autonomía. Como resultado de la expansión de la participación electoral y de la mayor independencia de los votantes, la adhesión de los sectores bajos y medios de la población ya no podía tomarse como un dato, sino que debía negociarse permanentemente. Este nuevo contexto político contribuyó a que el gobierno radical santafecino, surgido de las elecciones de 1912, adoptase una posición favorable a los arrendatarios en huelga, y presionase a los terratenientes para que negociaran una reducción de los cánones de arrendamiento.[35] La actitud conciliatoria hacia los chacareros de parte del gobierno de Santa Fe contrasta con la posición más hostil que adoptó el gobierno conservador de la provincia de Buenos Aires, donde la ley Sáenz Peña todavía no había sido implementada. Las diferencias entre una y otra actitud ponen de manifiesto que, en un contexto de mayor conflictividad, la democratización planteaba de otro modo la relación entre terratenientes y poder político. Debemos ahora girar nuestra atención hacia este punto.

LA DEMOCRACIA PUESTA A PRUEBA

La ya mencionada sanción de la legislación electoral de 1912 transformó profundamente la vida política argentina. El camino hacia la reforma comenzó a delinearse en 1906, cuando la súbita muerte del presidente Manuel Quintana elevó al vicepresidente José Figueroa Alcorta a la primera magistratura. Una vez ungido presidente, Figueroa Alcorta se enfrentó a los roquistas y despejó el camino para que Roque Sáenz Peña, una figura de larga trayectoria reformista, lo sucediera a la finalización de su mandato en 1910. Consciente del avanzado grado de desprestigio del orden político, Sáenz Peña se decidió a lanzar una reforma electoral que dotase al estado de nuevos instrumentos y mayor legitimidad con los que regir los destinos de una sociedad cada vez más compleja. La ley de sufragio universal, secreto y obligatorio que impulsó el nuevo presidente

estaba destinada a construir una relación más transparente entre estado y sociedad mediante de creación de un sistema electoral independiente, en primer lugar, de la presión oficial. Al mismo tiempo, se proponía favorecer la organización de partidos políticos mejor implantados en la sociedad y menos dependientes del favor estatal. La relevancia de la Ley Sáenz Peña rápidamente se hizo clara para los contemporáneos, a punto tal que uno de ellos la describía como "quizá, el cambio más profundo de sistema electoral jamás implementado"[36] en el mundo.

Aquellas interpretaciones que describen el sistema político previo a 1912 como un orden férreamente controlado por la elite socioeconómica suelen afirmar que la reforma encarada por Sáenz Peña tenía por objetivo realizar algunas concesiones a la clase media y, de este modo, ampliar las bases del sistema de poder, garantizando la estabilidad política amenazada por una creciente movilización popular.[37] El descontento entre los trabajadores, se ha afirmado, "convenció a la elite gobernante conservadora de que algún tipo de reforma política era necesario para desactivar lo que se percibía como una inminente revolución".[38] Sin embargo, estas cuestiones eran secundarias para los reformistas, que estaban lejos de creer que los principales problemas políticos del país se debían a la movilización popular. Por otra parte, no debería exagerarse el grado en el que la reforma electoral desplazó el centro de gravitación hacia el electorado de clase media. Si bien la participación de este grupo creció después de 1912, también lo hizo, y más acusadamente, la de los sectores populares. En verdad, al hacer al sufragio obligatorio, la reforma de Sáenz Peña dejó a los sectores medios en el lugar de una minoría electoral permanente. Incluso en el litoral, donde una parte significativa de la población trabajadora era extranjera, y por tanto estaba formalmente excluida de la vida política, fueron los sectores trabajadores, más que los medios (ellos mismos también fuertemente marcados por la presencia inmigratoria), los que conformaron la mayoría de los nuevos incorporados a la vida electoral.

Que Sáenz Peña haya elegido esta forma de ampliación del sistema político, que contrasta con las "clásicas" reformas graduales que tenían lugar en otras partes del mundo, sugiere que su proyecto no era una respuesta directa a la presión proveniente del mundo del trabajo, frente a la cual, por otra parte, la elite política entonces respondía con una combinación de represión abierta y reformismo social.[39] Es importante destacar que la democratización del sistema político no se contaba entre los objetivos por los que luchaba el mundo del trabajo, al menos si consideramos a sus principales organizadores y representantes. Tanto

los anarquistas como los sindicalistas estaban más interesados en construir fuertes instituciones gremiales que en participar en la vida electoral. E incluso el pequeño Partido Socialista, que sí estaba firmemente comprometido con la democracia parlamentaria y la democratización del sistema político, recibió la reforma con más recelo que entusiasmo. Los socialistas criticaron la ley de reforma electoral y mostraron su desagrado hacia el sufragio obligatorio que esta sancionaba. Con razón, los socialistas advertían que, gracias a la reforma, los trabajadores pasaban a formar el corazón del cuerpo electoral. Ello, sin embargo, no era un motivo de alegría. Los socialistas atacaron la propuesta de Sáenz Peña, y en especial la cláusula de voto obligatorio, pues temían que al incorporar masivamente a sufragantes a los que consideraban de escasa cultura política, la reforma terminase por reforzar la posición política de los grupos propietarios.

Fiel a este razonamiento, durante la discusión parlamentaria, *La Vanguardia* argumentó que imponer el sufragio "como un deber, como una obligación a pesar de la voluntad contraria del ciudadano es, indudablemente, establecer una coerción legal de dudosa eficacia y aun de discutible aplicación. La virtud principal del voto reside, casualmente, en su espontaneidad y en su consciencia [...] obligar a votar [...] ni siquiera va a mejorar la calidad del voto [...] en las provincias el voto obligatorio va a servir admirablemente a los fines de una segunda explotación de grandes industriales y capitalistas que ejercen la primera en el trabajo de sus numerosas peonadas, comúnmente analfabetas".[40] Una vez sancionada la ley, el vocero socialista argumentó que "el voto obligatorio [...] que acaso constituya la característica principal de la nueva ley, es un salto en lo desconocido, que puede dejarnos malparados". Para los socialistas, la reforma era otra maniobra de "nuestro aristocrático presidente" que "ha hecho una reforma electoral para la burguesía, no para el pueblo".[41]

La interpretación que describe a la reforma como una concesión a los sectores medios destinada a restaurar la estabilidad política exagera las amenazas que se cernían sobre los privilegios de las clases propietarias. La década de 1880 había dado el primer impulso al desarrollo fabril, y con él habían aparecido las primeras formas de asociación obrera de alguna envergadura. Pero la crisis de la primera mitad de la década de 1890 trajo consigo elevados niveles de desocupación, lo que se reflejó en un marcado deterioro de la capacidad organizativa de los trabajadores. La "salida" antes que la "voz" marcó la principal estrategia de defensa de los asalariados frente a la crisis: antes que enfrentar a sus patrones, muchos de ellos abandonaron el país y retornaron a Europa, o se marcha-

ron a otros destinos en busca de mejores horizontes. A pesar del proceso de crecimiento industrial experimentado durante los años noventa, la paz industrial prevaleció hasta entrado el nuevo siglo.[42] Durante la expansiva década de 1900, retornó la prosperidad. La recuperación económica y la expansión de la industria trajeron un aumento de la demanda de fuerza de trabajo, y ello creó un contexto favorable para que los asalariados urbanos se organizaran y se lanzaran a reclamar mejoras en los salarios y las condiciones de trabajo. A lo largo de la primera década del siglo, la ciudad de Buenos Aires, y en menor medida otros centros urbanos, asistieron a un veloz proceso de organización sindical, que pronto se tradujo en diversos movimientos de agitación y en una seguidilla de importantes huelgas. Por su escala, esta movilización no reconocía precedentes. Al igual que en San Pablo, la concentración de obreros extranjeros con pocas raíces en el país que los alojaba favoreció la difusión del ideario anarquista, y permitió que fueran dirigentes de este signo los que lideraran las acciones obreras más resonantes. Los trabajadores dirigieron sus mayores reclamos hacia los empleadores urbanos y el estado antes que contra los parámetros generales de la economía de exportación, de cuyos frutos deseaban participar más plenamente. A pesar de la moderación del movimiento anarquista, el gobierno lo reprimió con brutalidad. La sanción en 1902 de una ley destinada a destruir la influencia ácrata debilitó la organización obrera, y en poco menos de una década dejó al anarquismo sin líderes de primera línea.[43]

Para 1910, los mayores temores de la elite se referían más a actos de violencia o terrorismo individual, por otra parte raros en la Argentina, que a la acción colectiva. Lo cierto es que durante el tratamiento de la Ley Sáenz Peña en el Congreso, ningún legislador manifestó mayor alarma por la acción obrera, por lo que algunos historiadores han tenido dificultades para inferirla de las palabras y las acciones de los parlamentarios. Durante la década de 1900, la acción sindical constituyó quizás en algún momento un desafío al orden público, pero fue siempre insuficiente para afectar severamente las bases del orden social y político. Así lo percibieron muchos contemporáneos. En 1909, por ejemplo, Mabel Senillosa expresó actitudes hacia la gran huelga general de mayo de 1909 que no revelaban alarma o angustia. Si bien lamentaba que algunos "envidiosos aprovechadores" habían tomado parte en la organización de la huelga, arrastrando al "trabajador honesto", esta joven en muchos aspectos tan típica de su clase insistía en que "el socialismo noble es muy lindo, y me declaro su partidaria".

Mabel Senillosa veía el ascenso del movimiento obrero no como una aberración o una desgracia, sino como un producto del desarrollo social, y argumentaba que "esto lo trae la civilización y sé que por todo el mundo hay lo mismo".[44] Su hermano Juan Antonio presentaba una visión similar. Para él, la actividad sindical era un resultado previsible de la evolución social, y la huelga no era sino un síntoma de la agonía de la vieja y desacreditada política criolla, que pronto sería reemplazada por un orden más moderno, basado en partidos de clase.[45]

Es dudoso que todos los integrantes de las clases propietarias compartiesen esta visión por demás optimista sobre las relaciones entre trabajo y capital. El conflicto seguramente afectaba más directamente a los empresarios industriales que a los rurales. Es significativo que Carlos Senillosa, un hermano de Mabel y Juan Antonio que dirigía una firma productora de tanques, casas, vigas y demás objetos de cemento armado, tuviese una visión menos entusiasta sobre el estado de las relaciones laborales. De todas maneras, Carlos no era particularmente pesimista, y veía a las huelgas y a "el cretino del melenudo Palacios" como molestias antes que como amenazas.[46] En varias ocasiones a lo largo de la década, los fabricantes nucleados en la Unión Industrial manifestaron su preocupación por las protestas gremiales, y reclamaron abiertamente que se reprimiera a los trabajadores más díscolos.[47] Pero no establecieron relación alguna entre la agitación obrera y la democratización, y tampoco vieron a la legislación electoral como parte de una estrategia transformista. Es significativo que algún tiempo antes de la aprobación de la Ley Sáenz Peña, la Unión Industrial también había señalado que la vida política estaba retrasada respecto de la evolución social del país. "La democracia argentina", afirmaba uno de los líderes industriales en 1908, en quince años "no ha podido anotar un solo signo de progreso en sus anales [...] en medio de tantas muestras de progreso, sólo la política, la misma política tradicional, se encuentra en plena decadencia".[48]

Los empresarios rurales tenían aun menos que temer, ya que la campaña, en particular el sector ganadero, no experimentó conflictos laborales de cierta envergadura hasta bastante después de la sanción de la reforma electoral. En 1905, cuando las huelgas se habían vuelto corrientes en Buenos Aires y otras grandes ciudades litorales, *El Campo y el Sport* afirmaba que "el campo se conserva todavía sano y sensato, sustrayéndose a las predicaciones extraviadas de la ciudad: el anarquismo es planta de tierra viciada y no prende allí donde la vida es lozana y pura".[49] Un par de años más tarde, el escritor Jorge Lavalle Cobo se hacía eco de una visión similar. En su *Voces Perdidas,* este terrateniente para nada propenso a romantizar la vida de la campaña de todas maneras contrastaba la paz

social que reinaba en los distritos rurales con los conflictos que animaban al mundo del trabajo urbano.[50] Este modo de juzgar las relaciones laborales en el campo se mantuvo inalterado en sus rasgos esenciales hasta entrada la década de 1910. Incluso poco después de la erupción de la primera huelga chacarera en Santa Fe, las visiones de los terratenientes no habían cambiado del todo. En 1913, la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Rosario todavía insistían en que "nadie dispone en el país del poder de convicción necesario para conmover el tranquilo trabajo de los campos".[51]

Cuando consideramos la reforma, es importante recordar que la relación entre la clase terrateniente y la elite gobernante era menos íntima de lo que habitualmente se supone, y que en ocasiones se había tornado problemática, incluso hostil. El poder de los grandes propietarios no se fundaba sobre los lazos que este grupo había tejido con la elite gobernante, sino sobre el amplio consenso generado por la economía agroexportadora. En lo esencial, la fortaleza de los terratenientes se basaba en su posición social y económica, no en sus vínculos con el orden político oligárquico, algunos de cuyos aspectos les resultaban irritantes. Ello explica por qué desde tiempo atrás distintos voceros terratenientes reclamaban reformas a la legislación electoral que se encontraban en sintonía con la impulsada en 1912. En 1899, por ejemplo, la Liga Agraria había hecho pública una propuesta para instaurar el sufragio secreto y obligatorio, y también para conceder el voto a los extranjeros.

Este proyecto salido del núcleo mismo del mundo terrateniente se adelantó en más de una década a la propuesta de Sáenz Peña. Es preciso señalar que los liguistas estaban lejos de conformar una elite progresista, dispuesta a renunciar alegremente a sus privilegios. Aun si aceptamos que estos hombres poseían, como cualquier mortal, cierta idea del bien común, conviene señalar que su compromiso con los principios democráticos no hace más que confirmar hasta qué punto creían que las clases subalternas, incluso si ingresaban más plenamente en la vida política, seguirían careciendo de la capacidad para organizarse de modo independiente y proponer un proyecto de sociedad alternativo. En su visión, un orden político más democrático no impugnaría los privilegios de los grupos propietarios. En rigor, en su proyecto de 1899 los liguistas admitían que hubiesen preferido restringir el derecho al sufragio, pero advertían bien que la Argentina había avanzado lo suficiente en el camino de la democratización como para hacer inviable esta propuesta. Por ello sostenían que "si este mal [el sufragio universal] no puede curarse radicalmente puede por lo menos atenuarse" mediante la educación del ciu-

dadano y "garantiendo el ejercicio del sufragio". La transparencia electoral era el punto clave de este programa, pues los liguistas confiaban en que un contexto que asegurase elecciones honestas estaba destinado no a debilitar, sino a reforzar el poder de aquellos ubicados en la cumbre de la pirámide social frente a los que dominaban, gracias a medios fraudulentos, la vida pública. Por este motivo, "constituir el sufragio en un deber, el cual, ningún ciudadano pueda evadirlo", junto a "todo género de libertad y garantía para que vaya a depositar su voto, en la seguridad de que ninguna presión se ejercerá sobre él, que su vida y la integridad de su persona no corren peligro alguno y que nadie sabrá jamás por quién ha votado", permitiría limitar el poder de "bandos o camarillas (llamados abusivamente partidos)", que apelaban a "turbas irresponsables y analfabetas".[52] Para estos terratenientes, una extensión del sufragio le permitiría a la sociedad librarse de la pesada tutela de las maquinarias políticas, lo que redundaría en beneficio de las clases propietarias. Al igual que en el Chile del cambio de siglo, la propuesta de la Liga apuntaba a erosionar los lazos entre las elites políticas y sus clientes electorales, en beneficio de los grupos social y económicamente dominantes.[53] En síntesis, este proyecto de reforma que apuntaba a instaurar un sistema basado en el sufragio secreto y obligatorio no tenía por fin abrir paso a formas más populares de gobierno, sino conferirle a las clases propietarias una posición política más sólida.

Transcurrida poco más de una década, la visión de muchos propietarios rurales no había cambiado demasiado. Como lo indica la formación de la Defensa Rural, en el mismo momento en el que la nueva legislación electoral estaba siendo tramitada en el Parlamento, los terratenientes que se nucleaban en la Sociedad Rural y la Liga Agraria se encontraban más preocupados por lo que percibían como una elite gobernante irresponsable que por una sociedad hostil. Todavía entonces los grandes propietarios percibían que una relación más transparente entre estado y sociedad, al eliminar a una clase política sospechada de proteger demasiado bien sus intereses, podía beneficiar a las elites socioeconómicas. De hecho, la Defensa Rural denunció las fracturas de la vida política del país, e insistió en que "la aspiración general es el resurgimiento de la vida cívica y la práctica de las instituciones, como lo ha proclamado el presidente de la República con el aplauso de la opinión pública".[54] Para la Defensa Rural, "la participación de los ciudadanos en la vida pública y de los extranjeros en la comunal es un deber, sin cuyo cumplimiento es imposible la marcha constitucional y regular de los Estados".[55] El hecho de que los terratenientes lanzaran su partido precisamente en la primera

elección que iba a desarrollarse bajo el imperio de la nueva ley sugiere que confiaban en que la reforma podía ayudar a reforzar su posición política.

Esta creencia estaba en sintonía con la visión entonces dominante sobre los principales problemas de la vida pública, y también con las ideas que primaban sobre cómo reformarla. Para el Centenario, la política argentina era criticada por su atraso respecto de la de los así llamados países civilizados. El país, que tan rápidamente había avanzado por el camino del progreso económico y social, presentaba, sin embargo, un notable atraso político. A partir de este diagnóstico, los reformistas se proponían darle fin a lo que entonces era visto como una larga historia de democracia artificial, de fraudes, imposición oficial y paternalismo político. La reforma buscaba reemplazar prácticas políticas tenidas por corruptas por otras que garantizasen formas más genuinas de representación de la voluntad ciudadana. En la optimista visión de Sáenz Peña y sus seguidores, la nueva legislación iba a contribuir a crear partidos fundados sobre bases más firmes y más legítimas que el caudillismo y el favor estatal, e iba a inculcar formas de participación democrática, incluso entre las clases "respetables".[56] Sáenz Peña debe haber compartido la visión de uno de sus interlocutores epistolares habituales, quien enfatizaba en 1907 que "la apatía [...] domina a la gente representativa en cuestiones políticas", que el partido gobernante "no ofrece garantías a la gente conservadora y al comercio en general".[57] La reforma electoral, entonces, estaba dirigida a combatir la indiferencia "hacia todos asuntos que no se refieren al comercio o la industria", a eliminar "el profundo descrédito en el que, como consecuencia de esa indiferencia, han caído las elecciones parlamentarias y locales".[58] En síntesis, a diferencia de lo sucedido en aquellos países europeos en los que la democratización avanzó como resultado de luchas y presiones populares, para Sáenz Peña, como para Francisco Madero en México, la sanción de una legislación que garantizase elecciones libres y honestas no estaba orientada a producir una redistribución del poder político, ni a impulsar o promover los intereses de grupos sociales determinados.[59] Pero a diferencia de la situación mexicana, donde la vieja elite porfiriana se mostró reacia a aceptar un régimen de mayor libertad electoral, en la Argentina los políticos antirreformistas –roquistas y de otras banderías– no lograron evitar que un sector de la elite gobernante con fuerte apoyo de la opinión pública impusiese la nueva legislación reformista.

Sectores significativos de los grupos gobernantes se mostraron renuentes a impulsar un cambio que irremediablemente iba a amenazar sus

posiciones. Pero incluso aquellos que manifestaron escepticismo sobre los beneficios de la democracia electoral no lograron evitar su llegada, y debieron librar una batalla que de antemano sabían perdida, en gran medida por falta de apoyos en la opinión pública. De hecho, la reforma no enfrentó oposición alguna de parte de las clases propietarias, que en general aceptaron e incluso impulsaron su avance. Hasta cierto punto, la posición de los terratenientes se presta a ser interpretada a la luz de algunas ideas de Barrington Moore. Ya que los grandes propietarios de la pampa no dependían de formas políticas sino de formas capitalistas de apropiación del excedente, la instauración de un régimen democrático no representaba en sí misma una amenaza a sus privilegios. Los terratenientes percibían que su posición social estaba mejor enraizada en la sociedad que en el orden político, y que por tanto era independiente de la suerte de los grupos gobernantes oligárquicos.

En todo caso, los terratenientes no parecen haber mostrado mayor preocupación frente a la democratización. Más aún, es significativo que importantes miembros de la clase alta la impulsaran abiertamente. Ezequiel Ramos Mexía, que ocupó el Ministerio de Obras Públicas durante el gobierno de Sáenz Peña, y que había presidido la Sociedad Rural en dos ocasiones en el pasado, fue uno de ellos. Incluso en la etapa final de su vida, cuando había renegado de las promesas de la democracia y se sentía más atraído por la causa fascista, no iba a dejar de recordar que como ministro había defendido la reforma "con empeñoso entusiasmo" ya que entonces veía que la participación popular formaba parte de "las ideas dominantes en el mundo" en ese momento.[60] Otro tanto puede decirse de Ricardo Lavalle, que acompañó activamente a Sáenz Peña en los años finales de su vida, y cuya actuación política, afirmaba su biógrafo, "corría llanamente sobre los principios de igualdad que Francia arrancara al 93". Este terrateniente, a quien ya hemos encontrado entre los líderes de la Unión Provincial, "que bajo tantos conceptos era un aristócrata, sostenía con tesón la democracia como sistema político el más eficiente en el siglo y en el país. [...] Políticamente era pues Lavalle el ciudadano convencido y entusiasta de una democracia".[61] El fin del gobierno del PAN siempre había formado parte de los objetivos de la Liga Agraria. Es comprensible, entonces, que los liguistas se contasen entre aquellos que celebraron las propuestas de Sáenz Peña (y, a la muerte de este, del vicepresidente Victorino de la Plaza, que era él mismo un socio honorario de la Liga Agraria, además de un gran terrateniente). Haciéndose eco de motivos generalizados en la discusión pública, en 1911 Carlos Guerrero celebraba la actitud de Sáenz Peña afirmando que "las oligarquías no son

de esta época, de tantos progresos materiales como intelectuales".[62] En 1915, en su mensaje anual a sus compañeros liguistas, Guerrero seguía celebrando "el sufragio libre, que triunfará ineludiblemente en el cuarto cerrado de las urnas".[63]

No sorprende, entonces, que el optimismo fuese la reacción más habitual en el momento en el que la nueva legislación fue puesta a prueba. El órgano del Museo Social Argentino, una institución de elite presidida por Emilio Frers (el conocido ruralista, que poco antes había presidido la Sociedad Rural, y que era además un reformista), celebraba tras las primeras elecciones libres que gracias a la reforma "la República Argentina es un pueblo que corona sus adelantos materiales con la exposición palmaria de una alta cultura cívica".[64] Dos años más tarde, el diario *La Nación* festejaba que gracias a la nueva legislación electoral había comenzado a "intervenir en la discusión de los negocios públicos la parte más consciente y más noble de la opinión".[65]

Estas expectativas demasiado confiadas no sobrevivieron a la dura prueba de la realidad. Al cabo de pocos años, el entusiasmo y la expectativa dieron lugar a dudas y estupefacción, y luego a profundo desagrado. Como iba a recordar un líder radical algo más tarde, "la reforma, acompañada con el establecimiento del voto secreto y con garantías de sinceridad en el escrutinio produjo resultados que sorprendieron a sus mismos autores".[66] Lo que sorprendió (y luego amargó) a las clases altas y a los políticos del viejo orden fue la emergencia, no de una política más "respetable" y civilizada, sino de prácticas políticas nuevas, mucho más plebeyas y populistas de lo que esos grupos estaban preparados para aceptar.

La nueva legislación electoral abrió una fase de movilización que no reconocía precedentes en la vida del país, y que los partidos políticos se vieron en la obligación, a la vez, de impulsar y encauzar. *El Diario* intuía bien las peculiaridades del nuevo sistema cuando en marzo de 1912 afirmaba que "el voto obligatorio y la tonificación del espíritu cívico va á llevar a las urnas una gran cantidad de pueblo que es masa á organizarse, á disputarse, á afiliarse, en una palabra. Elemento que no está acostumbrado al comicio y que hay que instruir y disciplinar. Todo esto reclama una acción cuyo despertar no se advierte aún. Reclama el espíritu de propaganda y de acción norteamericano".[67] Este fenómeno de movilización popular fue acompañado y potenciado por el creciente dominio que el radicalismo ejerció sobre la escena política. El Partido Radical, que para 1910 era apenas una secta política, rápida e inesperadamente se convirtió en una organización de masas. Gracias a la habilidad de su líder Hipólito Yrigoyen para adaptar al partido a las

nuevas condiciones impuestas por el sufragio secreto y obligatorio, que exigían a los partidos movilizar masas, no pequeñas máquinas electorales, el radicalismo se convirtió en la única alternativa real a las fuerzas que habían dominado la vida política por más de treinta años. Por este motivo, la UCR logró atraer a su campo gravitatorio a muchos de los que tenían cuentas pendientes con el orden oligárquico. Entre ellos se contó la Liga Agraria. Su acercamiento al radicalismo fue percibido por los liguistas como una alianza de conveniencia, estimulada por un último e infructuoso movimiento de protesta contra las políticas fiscales del gobierno bonaerense que tuvo lugar en 1915 y que volvió aún más tensa la relación entre los liguistas y el conservadurismo.[68] La reconciliación con el radicalismo los obligó a olvidar las críticas que otrora le habían formulado a sus nuevos aliados (a propósito, por ejemplo, de la política provincial en la década de 1890, o de la revolución de 1905). De todas formas, los liguistas condicionaron su apoyo electoral a los radicales a que estos aprobasen un programa de regeneración política y austeridad presupuestaria.[69]

Tras la victoria radical en las elecciones nacionales de 1916, los intereses terratenientes se encontraron bien representados en el nuevo gabinete. Honorio Pueyrredón, un importante estanciero, fue designado en la cartera de Agricultura. Domingo Salaberry, un exitoso empresario con intereses rurales (que poco más tarde alcanzaría la vicepresidencia de la Sociedad Rural), quedó al frente del Ministerio de Hacienda. José de Apellániz, otra figura que había presidido la Sociedad Rural, fue nombrado en el Banco de la Nación. Algunos miembros de la Liga Agraria también alcanzaron puestos de relevancia, entre ellos Felipe G. Senillosa, designado titular de la Dirección General de Agricultura y Defensa Agrícola. Tras la asunción de Yrigoyen en octubre de 1916, la provincia de Buenos Aires siguió en manos del autonomismo, que lideraba Marcelino Ugarte. Aquí, los conservadores mostraron capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia política, por lo que a comienzos de 1917 el gobierno nacional intervino la provincia y depuso a sus autoridades. El interventor federal atacó directamente las bases sobre las que se asentaba la maquinaria electoral conservadora (según se afirmó entonces, unos 3000 empleados públicos fueron removidos de sus cargos), y preparó el terreno para la victoria radical en las elecciones provinciales de marzo de 1918. José Crotto, un importante hacendado, fue elegido gobernador.[70]

Si bien no hubo ningún atisbo de resistencia terrateniente a la llegada de la democracia o a la victoria radical, es claro que para fines de la dé-

cada de 1910 la mayor parte de los miembros de este grupo advertía que el nuevo sistema no había cumplido con lo que esperaban de él. Arribar a esta conclusión les tomó cierto tiempo, en parte porque el nuevo gobierno no hizo ningún intento deliberado para amenazar los privilegios de las clases propietarias. Al igual que los gobernantes que los precedieron, los radicales siempre se mostraron dispuestos a mantener y consolidar los acuerdos sociales básicos que habían dado vida a la sociedad surgida gracias a la expansión de la economía agraria. Esta decisión parecía lógica, ya que ese camino le había asegurado a la Argentina varias décadas de crecimiento y prosperidad, y al mismo tiempo contaba con el apoyo no sólo de los grandes propietarios, sino también de todos los grupos sociales que se vinculaban de una u otra manera a la economía de exportación. Durante los años radicales, la prosperidad de la Argentina fue ampliamente percibida como un resultado de la continuación del proceso de expansión agraria e integración al mercado mundial que había alcanzado gran impulso bajo los auspicios del orden oligárquico. Sin dudas, esta circunstancia erosionó cualquier pretensión heterodoxa de parte del nuevo gobierno. Pero a diferencia de sus antecesores oligárquicos, los gobernantes radicales alcanzaron el control del estado en un nuevo contexto, signado por la competencia democrática, que inevitablemente los forzaba a actuar de manera menos distante frente a las demandas populares. En vez de promover la expansión de una política más "respetable" como había sido el deseo de los reformistas, la expansión del cuerpo político dio lugar a formas más plebeyas y populares de acción política. Y ello ocurría precisamente cuando la sociedad argentina adoptaba un perfil de clases más claro (en especial en el sector rural) y cuando la larga ola de prosperidad que había hecho al país tan exitoso mostraba sus primeros signos de agotamiento.

Los últimos años de la década de 1910 ofrecieron abundantes testimonios de este nuevo cuadro. Cuando Yrigoyen asumió la presidencia en 1916, el país sufría una profunda depresión económica. En 1913, la guerra en los Balcanes había provocado una retracción de los flujos externos de capital que eran tan fundamentales para el crecimiento de la economía argentina. La situación se volvió más grave cuando estalló la Gran Guerra. La falta de bodegas provocó serios inconvenientes en el comercio de exportación. En 1914, el costo del flete para enviar granos a Europa se incrementó seis veces. Aunque las carnes, más centrales al esfuerzo bélico de los aliados, no resultaron tan afectadas, el valor de las exportaciones cayó marcadamente. Al mismo tiempo, el precio de las importaciones se incrementó, afectando en particular al sector indus-

trial, muy dependiente de insumos importados. El valor alcanzado por las exportaciones en 1913 fue superado recién en 1917. Entre esos años, el producto bruto cayó casi un 20%, lo que constituyó un derrumbe aún más profundo que el de comienzos de la década de 1930. El sector industrial, que se estima creció a una tasa de más del 10% anual en los años *noventa*, y al 8% en la década de 1900, experimentó tasas de crecimiento negativas durante la guerra, y en total apenas creció un 2% durante toda la década de 1910.[71]

En las postrimerías de la Gran Guerra, los efectos del conflicto mundial sobre la economía argentina, así como también los ecos de los grandes movimientos de masas en Rusia y en toda Europa central y occidental, contribuyeron a desatar una gran ola de huelgas y conflictos obreros. En los primeros años de la guerra, la depresión económica y la inflación erosionaron el ingreso obrero, y los salarios reales cayeron alrededor de un tercio entre 1914 y 1917. La retracción económica dificultó la reacción de los trabajadores. Hacia 1917, el comercio de exportación comenzó a revivir, y ello creó un clima más favorable para la reivindicación laboral.[72] La combinación de salarios deprimidos y un fuerte incremento de la demanda de trabajo (en parte favorecido por la reducción de los flujos migratorios europeos durante la guerra) lanzó a los trabajadores a la acción. Pronto las mayores ciudades del país se vieron inmersas en una ola de agitación que alcanzó una escala sin precedentes, que no iba a ser superada hasta la década de 1940. Las huelgas afectaron a sectores cruciales de la economía de exportación como los frigoríficos y el sistema de transportes. Una gran huelga dejó a los ferrocarriles paralizados durante un mes entero, al inicio de la cosecha de trigo.[73]

La Liga Agraria siguió con creciente alarma la actividad sindical. Los liguistas denunciaron que la actitud del gobierno hacia los trabajadores era por demás afable, y que ello a su vez incitaba a estos últimos a redoblar sus reclamos. Cuando una huelga general ferroviaria estalló en septiembre de 1917, la Liga afirmó sin dudar que "jamás los obreros han estado más levantiscos".[74] Los liguistas no se equivocaban. Al lanzar a los asalariados al centro de la arena política, el nuevo sistema electoral obligaba al gobierno a considerar con más cuidado los reclamos del mundo del trabajo, siquiera por razones de puro electoralismo. Por consiguiente, la actitud de los nuevos gobernantes era, si no siempre favorable, sí menos hostil que la de sus predecesores oligárquicos, que no debieron preocuparse demasiado por ganar elecciones. El gobierno no se alineó sistemáticamente con los trabajadores, pero la tentación de hacerlo se volvió difícil de resistir cuando ello prometía traer beneficios en

las urnas. En esos casos, el gobierno no temió concitar la ira de los grupos patronales. Como advirtió Emilio Frers, el radicalismo en el poder fue especialmente benevolente hacia los elementos menos extremos del movimiento sindical (en particular con la tendencia conocida como sindicalista).[75] Los trabajadores pronto aprendieron a explotar las nuevas reglas del juego, aumentando en consecuencia sus presiones y demandas. Así, la democratización contribuyó a incrementar el conflicto social. A fines de 1917, Carlos Guerrero se quejaba de que "a los huelguistas se les ha dejado tomar tanta preponderancia que se consideran un nuevo poder en el país, tratando al gobierno de la constitución de potencia a potencia".[76] En esa ocasión, la Liga Agraria, junto con la Sociedad Rural, la Unión Industrial y otras organizaciones empresariales, enviaron una delegación a entrevistarse con Yrigoyen, con la intención de presionarlo para que utilizase el poder del estado para poner fin por la fuerza a la acción sindical.[77] Yrigoyen, que buscaba alcanzar un acuerdo con los trabajadores, tuvo a los representantes patronales en espera por una semana. Cuando finalmente los recibió, sus demandas fueron en su mayor parte desestimadas.[78]

Cuando nuevas huelgas estallaron en las plantas frigoríficas durante ese año 1917, los pedidos de la Sociedad Rural para que el gobierno doblegase a los huelguistas también fueron ignorados. El gobierno sólo respondió a los reclamos patronales cuando los directivos de las empresas frigoríficas amenazaron con trasladar sus operaciones al Uruguay si no recibían protección contra los "agitadores".[79] En mayo de 1918, la certeza de que el gobierno se había vuelto menos confiable llevó a un grupo de grandes empleadores urbanos a organizar la Asociación del Trabajo, cuyo objetivo primordial era reclutar rompehuelgas y proporcionar a sus afiliados seguridad y "trabajadores libres" en caso de conflicto laboral.

Para entonces, la insatisfacción de las clases altas con el gobierno radical era muy extendida, y los sucesos de la Semana Trágica de enero de 1919 no hicieron sino confirmarla. Este episodio comenzó con un conflicto limitado a la empresa metalúrgica Vasena, pero pronto se extendió hasta convertirse en una huelga general que afectó a toda la ciudad de Buenos Aires. La huelga, a su vez, dio lugar a una serie de violentos choques entre los trabajadores y la policía, enfrentamientos entre manifestantes y grupos de clase media, denuncias de conspiraciones revolucionarias y una caza de brujas de supuestos activistas comunistas. La Semana Trágica fue quizás el peor incidente de violencia laboral y social en la historia argentina de la primera mitad del siglo XX. El gobierno autorizó a grupos de voluntarios, en su mayoría de clase media, para que concurrie-

sen en ayuda del ejército; la represión dejó cientos de muertos. Las clases propietarias manifestaron disconformidad con cómo el gobierno había manejado la crisis. Eduardo Senillosa no precisaba ninguna prueba más de la incapacidad del gobierno, y en esos días le escribía a su hermano que "los disparates del famoso 'gobierno ejemplar' que prometió 'El Hombre' o 'el Apóstol', como quieran llamarle, son tan grandes que ya no cabe duda que el pobre bicho no tiene uñas para guitarrero".[80] Para entonces, un visitante habitual a la Argentina escribía que el Partido Radical había perdido la benevolencia de los terratenientes acaudalados.[81]

Las mayores inquietudes de los terratenientes, sin embargo, tenían por centro a la campaña. En gran medida, estos temores no se volvieron realidad. Contra lo que muchos afirmaron entonces, Yrigoyen no tenía intenciones de emular a Henry Lloyd George. A diferencia del político galés, el líder radical no parece haber sentido particular aversión hacia los terratenientes. La situación de los grupos subalternos rurales tampoco parece haberle preocupado demasiado. Y ello no sólo porque Yrigoyen fue por muchos años miembro de la Sociedad Rural. Otras consideraciones parecen haber incidido en su decisión de no desafiar a los propietarios. Después de la huelga de Alcorta, la hostilidad hacia los terratenientes ausentistas se hizo más acusada en los distritos cerealeros. Pero como lo sugieren los repetidos fracasos del Partido Socialista en sus campañas para ganarse el apoyo de los chacareros, en la pampa existía escaso potencial para movilizar a las clases subalternas rurales tras un programa de reforma agraria de envergadura. Aun cuando las tensiones sociales adquirieron un nuevo carácter tras el cierre de la frontera agrícola, nada sugiere que los arrendatarios podían conformar una base política lo suficientemente amplia como para impugnar o reformar el orden social. Los agricultores argentinos no produjeron ni un Daniel O'Connell ni un Emiliano Zapata. No debe extrañar, entonces, que un político tan hábil como Yrigoyen, más dispuesto a manipular o atenuar que a eliminar las tensiones sociales, prefiriese evitar todo proyecto que iba a alienar completamente a la clase propietaria sin producir mayores beneficios políticos o electorales para su propio partido.

En rigor, el gobierno radical estaba posicionado de una manera tal que le resultaba posible asegurarse el apoyo (o la tolerancia) de los agricultores sin necesidad de comprometerse en un proyecto de reforma agraria. Aun a disgusto, los chacareros no tenían mejor opción que apoyar a los radicales. Tras el derrocamiento del Partido Conservador en Buenos Aires en 1917, el radicalismo no debió enfrentar ningún desafío electoral de envergadura en Buenos Aires o en Santa Fe, las provincias en las que

el voto chacarero, si bien minoritario, se hacía sentir. En estos distritos, así como en la Cámara de Diputados, la posición de los radicales era mucho más fuerte que en la propia Capital Federal, donde el socialismo y los sindicatos obreros sistemáticamente obligaron a las autoridades a prestar especial atención a las demandas del mundo del trabajo. Es por ello que cuando los arrendatarios organizaron nuevas huelgas hacia el fin de la Gran Guerra, sus demandas no encontraron eco favorable en el gobierno.

Después de varios años de movilización, para 1922 el Congreso cedió a algunas demandas de los arrendatarios. Las más importantes fueron la sanción de una ley que aseguraba un período de vigencia mínimo para los contratos de arrendamiento, compensación parcial por las mejoras realizadas por los chacareros en los predios que arrendaban, y la prohibición de aquellos contratos que obligaban a los agricultores a comprar insumos o servicios, o vender la cosecha, al propietario o al agente que este designara. Los efectos de estas medidas resultaron muy limitados, ya que los terratenientes se dedicaron sistemáticamente a evadirlas, y el gobierno no hizo mucho para obligarlos a cumplirlas. Al mismo tiempo, poco se hizo para satisfacer las demandas de acceso a la propiedad, que desde la segunda mitad de la década de 1910 se volvieron más generalizadas, fundamentalmente porque el alza del arrendamiento que resultaba del cierre de la frontera agrícola presionaba con mayor fuerza sobre el ingreso chacarero. Y cuando el conflicto estalló, el gobierno actuó con mayor dureza que antes de la guerra. En 1917 y 1919, los chacareros se negaron a pagar arrendamientos, pero no recibieron mayor apoyo de las autoridades, y algunos de ellos fueron reprimidos e incluso deportados. El líder socialista Nicolás Repetto recordaría más tarde que "frente a la huelga declarada en el año 1919 por los agricultores los poderes públicos mostraron menos consideración que frente a las huelgas de los obreros urbanos".[82]

La actitud del gobierno de Yrigoyen frente a las demandas de los asalariados rurales fue todavía menos contemplativa, y no les ofreció a los terratenientes mayores motivos de queja. Antes de la Guerra Mundial, los trabajadores rurales no habían sido motivo de preocupación para los sectores propietarios. La gran ola de conflicto social de fines de la década de 1910 les hizo temer que los conflictos laborales, hasta entonces casi siempre limitados a la ciudad, alcanzaran también al campo. Durante las huelgas de 1917, la Liga consideró la posibilidad de que los asalariados urbanos influyeran "con su prédica anarquista a los trabajadores de la campaña". Ello, afirmaban, constituía "un grave peligro para estancieros y agricultores en el futuro".[83] Los propietarios nunca debieron preocu-

parse por los trabajadores de la estancia ganadera. El dominio de los terratenientes sobre la población permanente de la estancia no sufrió desafíos por décadas, a punto tal que es dudoso que la sanción del Estatuto del Peón a mediados de la década de 1940 modificase sustancialmente esta situación. Los obreros temporarios empleados en la cosecha y transporte de granos, más numerosos y menos dóciles que los trabajadores permanentes, constituían un motivo de conflicto potencialmente más significativo. El cultivo de granos no garantizaba empleo durante todo el año para los trabajadores asalariados, y estaba sujeto a grandes fluctuaciones anuales. La demanda de trabajo se acentuaba durante los meses de la cosecha; cada primavera, un ejército de migrantes provenientes del sur de Europa, de las provincias del interior y de las ciudades litorales surcaba la pampa de norte a sur en busca de empleo. Se calcula que medio millón de trabajadores estacionales eran necesarios para levantar la cosecha de granos hacia 1910.[84] Figuras itinerantes, y por tanto externas a la sociedad rural local, los braceros y los trabajadores de la cosecha eran recelados tanto por los estancieros como por los chacareros y los habitantes permanentes de la campaña. Por largo tiempo, la falta de una oferta suficiente de brazos reforzó la capacidad de negociación de los trabajadores estacionales (en especial cuando la cosecha se presentaba abundante), traduciéndose en salarios elevados. A pesar de una buena dosis de fricción, por muchos años este patrón de relaciones laborales parece haber satisfecho los requerimientos de los empleadores.

En la década de 1910, sin embargo, el deterioro de la situación económica de los chacareros incrementó sus tensiones con los trabajadores estacionales. Durante la Gran Guerra, la reducción del área cultivada y la elevada tasa de desocupación debilitaron a los trabajadores de la cosecha, que debieron aceptar fuertes bajas de salarios. Para el fin de la guerra, la normalización del comercio exterior y la expansión del área cultivada aumentaron la demanda de trabajo. Entonces, por primera vez, los sindicatos rurales lograron atraer masivamente a los trabajadores. Reclamando mejores condiciones laborales y salarios más altos, los obreros rurales se lanzaron a un ciclo de huelgas que afectó a los distritos cerealeros en 1919, 1920 y 1921.

Como lo sugiere la advertencia formulada por la Liga Agraria en 1917, cuando hablaba de "un grave peligro para estancieros y agricultores", el conflicto no iba a tomar la forma de un enfrentamiento directo entre terratenientes y trabajadores. Los asalariados de la cosecha debían enfrentar a un amplio conjunto de actores, que además tenía el apoyo de un estado bien consciente de la importancia de la cosecha de granos

para la salud de la economía. El núcleo principal de este bloque estaba formado por los sectores medios rurales: chacareros, comerciantes, habitantes de los pueblos de la campaña. Fueron estos grupos los que en los distritos cerealeros dieron vida a una organización antiobrera como la Liga Patriótica.[85] Cuando las huelgas estallaron, acusaciones de que los trabajadores eran liderados por "agitadores profesionales", así como llamados para que el gobierno garantizase el "trabajo libre", se escucharon en boca tanto de estancieros como de chacareros, y además encontraron respaldo generalizado entre los habitantes "respetables" de los distritos cerealeros.[86] El uso de la fuerza del estado (y en el caso de la Liga Patriótica, también de la paraestatal) para reprimir a los huelguistas fue un resultado previsible de este extendido consenso antiobrero. Fue un recurso empleado tanto por gobiernos provinciales conservadores como radicales (los primeros en Córdoba, los segundos en Buenos Aires y Santa Fe).[87]

La ola de conflictos laborales que afectó al mundo urbano, al sistema de transportes y a la industria frigorífica cedió en 1920; para 1921 se disolvió.[88] Ese año, en las tierras de frontera de la Patagonia la brutal represión a obreros rurales por parte de cuerpos del ejército federal dejó como saldo más de mil trabajadores asesinados, pero se trataba de una anomalía manifiesta en una situación que tendía a aquietarse.[89] La reanudación de la inmigración masiva, la ofensiva empresarial y por sobre todas las cosas la mejora de los ingresos (se estima que los salarios industriales crecieron un 40% entre 1919 y 1922) dieron fin al ciclo de movilización obrera en las mayores ciudades del país. La Asociación del Trabajo desapareció del escenario, y el ambicioso programa de ayuda social a los trabajadores impulsado por la iglesia católica, que monseñor de Andrea había promovido en el momento de mayor tensión social, dejó de interesar a las clases propietarias. Desde entonces, las relaciones laborales permanecieron tranquilas hasta el fin de la década.[90] Para 1924, los industriales hablaban de la existencia de una situación de "calma proletaria".[91] El fracaso del régimen soviético en extender su influencia sobre Europa central y occidental, y el reflujo de los movimientos obreros y socialistas europeos después de 1922, crearon un contexto internacional menos favorable, que también colaboró a poner fin a este período de grandes luchas sociales.

Gracias a la misma combinación de concesiones y represión, una evolución similar se verificó en la campaña. A partir de 1921, los precios de los granos se recuperaron de la depresión que sucedió al armisticio y se mantuvieron en valores altos hasta mediados de la década. Con ello mejoró el ingreso chacarero y de todos aquellos que dependían de la

agricultura granífera. El malestar agrario se atenuó.[92] Salvo incidentes menores, en especial en 1928, el mundo rural permaneció relativamente calmo hasta entrada la década de 1930. La Liga Patriótica, que en la crisis de la posguerra había ganado sólidos apoyos en los distritos cerealeros, perdió terreno. Para 1921, la Federación Agraria Argentina mostraba escasa disposición a desafiar a los terratenientes. La Federación advirtió que sus proyectos más ambiciosos habían fracasado, probablemente porque algunos chacareros habían mejorado algo su situación y porque el sentimiento de que poco podía lograrse por medio de la acción colectiva parecía generalizado. "Los federados somos unos doce mil y los que no son federados son más de cien mil", se lamentaban los dirigentes agrarios en 1922.[93] Haber nucleado este número de agricultores no era un logro menor, pero estaba lejos de ser suficiente como para montar un desafío de envergadura a los privilegios de los propietarios. De allí en más, la Federación Agraria prefirió concentrar sus esfuerzos en la consolidación de una base institucional menos dependiente del humor (y los aportes) de los chacareros, y se lanzó a ofrecer seguros y otros servicios para productores agrícolas, y más tímidamente, a presionar para obtener legislación favorable a los intereses de los agricultores.[94] De forma predecible, cuando el Congreso sancionó parte de esta legislación, la más inocua, los terratenientes la recibieron con desagrado. La Liga Agraria afirmó que "para el actual gobierno sólo los locatarios o arrendatarios que dan más votos, *que son los más,* les merecen su atención y consideración".[95] Pero la resignación con la que la aceptaron revela bien que no temían que la nueva legislación trajese grandes cambios.

Para comienzos de la década de 1920, se hizo evidente que el momento de mayor tensión social había pasado, y que las clases subalternas rurales habían resultado incapaces de poner en cuestión los privilegios de la gran propiedad. De forma significativa, aun antes de que el período de agudo conflicto social de la inmediata posguerra llegara a su fin, los empresarios rurales comenzaron a manifestar preocupación por lo que siempre habían considerado como la manifestación más odiosa de la irresponsabilidad de las elites políticas oligárquicas: el aumento del gasto estatal. No les faltaban razones para ello. A comienzos de la década de 1920, una vez pasada la depresión causada por la Guerra Mundial, el presupuesto estatal creció a paso veloz. En la provincia de Buenos Aires el aumento del gasto sobrepasó el 80% entre 1920 y 1922.[96] Al mismo tiempo, el gobierno también recurrió al endeudamiento externo de corto plazo, que la aparición de los Estados Unidos como una nueva fuente de préstamos había posibilitado; ello auguraba un aumento de las cargas

fiscales en el futuro. Lo que era aún peor, el gobierno orientaba el gasto según nuevas prioridades, con la intención de satisfacer demandas de los sectores medios y bajos de la población. Durante los gobiernos radicales, la inversión en infraestructura sufrió una fuerte retracción, mientras que las partidas destinadas a salarios y pensiones se incrementaron velozmente.[97] El gasto orientado por las demandas del clientelismo político no era nuevo. Pero antes de 1916 el gasto en infraestructura se vio poco afectado por las demandas del sistema político. En la década de 1920, ese equilibrio parece haberse perdido.

A mediados de 1920, los propietarios palparon algunas consecuencias del incremento del gasto público. Con el fin de hacer frente al aumento de sus erogaciones, en junio de 1920 el gobierno impulsó una revaluación de la propiedad.[98] La siempre exaltada Liga Agraria fue la primera voz terrateniente en hostigar al gobierno, denunciando "las exageraciones impositivas tanto en el orden nacional como provincial de los *regeneradores* gobiernos radicales", y reclamando "actos de gobernantes, no de piratas".[99] Para la Liga, el gobierno radical violaba el compromiso de austeridad que había prometido honrar en 1916, y adoptaba una posición demagógica que, con el fin de asegurarse la lealtad de sus votantes, lo impulsaba a expandir la burocracia y a incrementar los salarios. Al mismo tiempo, la Liga Agraria comenzó a condenar abiertamente la democratización, que había permitido "el acceso al Concejo de personas sin posición, consecuencia de la errónea aplicación del sufragio universal en las elecciones municipales que siempre fueron ventajosamente, como la lógica lo impone, de voto calificado".[100]

Dado este panorama, a los liguistas no les resultó difícil arribar a la desagradable conclusión de que la situación de las elites socioeconómicas no había mejorado tras la caída del viejo régimen: las clases propietarias eran "la presa de los politiqueros, como ahora medio siglo".[101] Librado a sus propios instintos, el gobierno radical estaba dispuesto a subordinar todo proyecto y todo interés sectorial al objetivo supremo de construir una maquinaria política invencible: "Todo lo que no sea ganar una elección, conquistar una situación política no mueve ni atrae las esferas oficiales".[102] Los liguistas ahora tenían plena conciencia de que la democratización de la vida política no sólo frustraba muchas de las expectativas con las que la marcha hacia un sistema electoral más transparente se había iniciado durante la presidencia de Sáenz Peña. También advertían que este proceso acentuaba precisamente aquel rasgo de la vida política que siempre habían visto como el aspecto definitorio de la relación entre estado y clases propietarias: la autonomía de la elite política.

Desde la perspectiva de la Liga Agraria, entonces, la democratización no había limitado el poder y la independencia del estado. De todas maneras, los terratenientes no dejaron de advertir que algo había cambiado en la situación política. Para comienzos de la década de 1920, sabían bien que todo intento de desafiar al gobierno era poco realista. A diferencia de lo que había sucedido en el pasado, ni los hombres de la Liga Agraria ni los de la Sociedad Rural consideraban que era factible impulsar a los terratenientes hacia la arena política. Aquellos que insistían en que había un lugar en el Congreso para "la plutocracia, que no es todavía un peligro entre nosotros", para "un Videla Dorna por el Monte [...] un Unzué por Mercedes, algún Duggan por Lincoln, elegidos directamente por sus electores y no por la patota sin arraigo que predomina en el comité",[103] eran nostálgicos incapaces de comprender el tiempo que les tocaba vivir. Tras varios años de vida política democrática, esta no era una alternativa viable. Si había algún lugar en la vida pública para hombres como Daniel Videla Dorna (activo en las filas del conservadurismo en la década de 1920, y aun después), ello no se debía al poder que le otorgaban sus tierras en el partido de Monte. Tras la sanción de la Ley Sáenz Peña, la dedicación plena a la actividad política, que necesariamente implicaba un contacto más fluido y cotidiano con los militantes, y una inserción más plena en las redes políticas que habían prosperado en ese clima más democrático, se había vuelto más decisiva que en el pasado para sostener una trayectoria exitosa. Ello era así a punto tal que Videla Dorna fue alguna vez descripto no como un hombre de estado, sino como "un político de armas llevar".[104] En síntesis, tanto en la ciudad como en la campaña la ley electoral de 1912 había dado lugar a la aparición de maquinarias políticas mucho más poderosas que aquellas que los terratenientes habían tratado infructuosamente de desafiar en el pasado. A diferencia de sus colegas chilenos en la década de 1920, los hacendados argentinos no podían recurrir a una campaña leal y poco afectada por la politización con el fin de contrabalancear el ascenso de las masas urbanas. En los distritos rurales, el dominio de la maquinaria política radical, y de la política de máquinas, era tan fuerte como en las ciudades.

La certeza de que este era el estado de las cosas, así como también el eco que alcanzaba la denuncia del latifundio y de la propia clase terrateniente, ayuda a entender por qué en la década de 1920 el humor de los terratenientes puede describirse mejor como melancólico, incluso como pesimista, antes que como desafiante. Como afirmaba Miguel Ángel Cárcano, "el democratismo, el plebeyismo imperante",[105] era el tono dominante de la vida pública, y ello no podía sino afectar la respuesta de los terratenientes,

hundiéndolos en un amargo silencio. En efecto, la censura del gobierno radical, que se volvió sistemática en los círculos de grandes propietarios, sólo ocasionalmente se expresaba en la forma airada y abierta que caracterizaba a los tiempos del régimen oligárquico. Ezequiel Ramos Mexía, que había recibido con entusiasmo la reforma electoral, a poco andar se mostró desencantado y pesimista, y ya no se consideraba un "demócrata convencido".[106] Estos eran, se lamentaba, "tiempos nublados", pero poco podía hacerse al respecto: "escribir, explicar, tratar de convencer [...] ¿para qué? Tarea inútil".[107] La propia Liga Agraria reconocía que "formar el partido económico, que prescinda de la politiquería y exija que se haga buena administración y grandes economías de dietas, sueldos y empleos" era "predicar en el desierto".[108] Cuando esta entidad se disolvió a mediados de la década, los terratenientes perdieron su voz más aguda e intransigente. Es significativo que una asociación como la Liga Agraria, que tenía por norte estimular a los terratenientes a participar en la vida política, fuese considerada poco menos que irrelevante en la década de 1920, y que nadie hiciera esfuerzo alguno por revivirla. Es cierto que en 1925 algunos grandes estancieros impulsaron la formación de una Liga Nacional de Contribuyentes, con el objetivo de combatir lo que ellos entendían como el ataque del gobierno sobre la propiedad privada. Esta asociación encontró amplia simpatía pero escasos apoyos efectivos entre los terratenientes, y por ello su importancia siempre resultó reducida.[109]

A poco del turbulento fin de la Gran Guerra, los terratenientes concluyeron que el gobierno radical no iba a impulsar ninguna transformación de envergadura del sistema tributario o de la estructura de propiedad. Es significativo que para fines de la década de 1920 las finanzas del estado central siguiesen siendo tan dependientes de los gravámenes del comercio exterior como antes de 1916. De todas maneras, una vez que la guerra quedó atrás, el gasto estatal creció aceleradamente. Entre 1916 y 1922, el gasto del estado central prácticamente se duplicó y la deuda pública creció de modo sustantivo. Como ya hemos señalado, el gobierno orientaba el gasto de acuerdo con nuevas prioridades, beneficiando en particular a los sectores medios y bajos antes que a los que se encontraban en la cima de la pirámide social. A comienzos de la década de 1920, el gobierno radical aprobó una ley de salario mínimo para los empleados públicos y la jornada laboral de ocho horas. Medidas como estas hicieron que el gasto en salarios y pensiones creciera más rápido que la inversión en infraestructura.[110] La Liga Agraria no fue la única voz terrateniente que reaccionó contra esta situación. "Es notorio", afirmaba Ezequiel Ramos Mexía en 1921, "que no se hace nada que pueda tener efectos útiles.

La presente administración carece en absoluto de programa [...] la vemos cruzada de brazos, pagando cuantiosas sumas de dinero a un ejército de empleados, que sería oportuno averiguar para qué los tiene".[111] En 1927, la Sociedad Rural denunció que entre 1917 y 1927 la provincia de Buenos Aires había expandido su planta de 15 854 a 25 583 empleados, y el gasto total en salarios de $20 782 000 a 57 315 000. Para entonces, el pago de salarios y de la deuda pública representaba cuarto quintos del presupuesto de la provincia.[112]

La trayectoria de la Liga Agraria ofrece un ejemplo claro sobre cómo incluso los propietarios que habían acompañado el proceso de democratización y el ascenso del radicalismo habrían de volverles la espalda. Para 1920, esta asociación advertía que la administración pública había sido más barata y eficiente durante los gobiernos "patricios", y que la burocracia se había convertido en un "refugio de partidarios y paniaguados".[113] Significativamente, la crítica al radicalismo hizo que la Liga Agraria se acercase a sus viejos enemigos, los herederos del PAN. A su vez, los políticos del viejo régimen, que entonces intentaban recuperar las posiciones que habían perdido a manos de los radicales, comenzaron a tratar a la Liga con mayor simpatía. En 1920, *El Diario,* un vocero del viejo partido mitrista que intentaba reunir a las fuerzas antirradicales, se sumó a la Liga Agraria en sus críticas al gobierno, y ambos denunciaron "la angurria fiscal, excitada por la impunidad sin el control de la opinión pública".[114] Ahora los herederos del antiguo régimen daban voz a lo que por décadas había constituido el motivo central de crítica liguista al orden político. Para *El Diario,* "en la legislatura de Buenos Aires no está representada en ninguna de sus bancas, la clase y la opinión de hombres como los que figuran en la Liga".[115]

Esta confluencia formaba parte de un reagrupamiento de consecuencias más vastas. Al mismo tiempo que el control del radicalismo sobre el estado se volvía más firme, se producía en paralelo un acercamiento mayor que en cualquier momento del pasado entre las clases propietarias y los sobrevivientes políticos del viejo orden. Esta asociación, a menudo presentada como típica del régimen oligárquico, resultó de circunstancias que sólo emergieron plenamente después de 1916. Ella fue motivada por la ola de conflicto social de la posguerra y las ambiguas pero cada vez más estrechas relaciones entre el radicalismo y las clases populares. En rigor, la convergencia entre los grandes capitalistas y los herederos del antiguo régimen no tuvo por objeto impedir el ingreso de la Argentina en la era democrática, sino, más tarde, limitar lo que los terratenientes veían como sus consecuencias y efectos más negativos.

Los primeros pasos en esta dirección comenzaron a andarse en 1914. En ese año, el Partido Socialista derrotó a radicales y conservadores en las elecciones realizadas en la ciudad de Buenos Aires para renovar la Cámara de Diputados. Este resultado alarmó tanto a la clase política como a la propietaria. Tras las elecciones, varios senadores temieron encontrarse en las vísperas de una gran marea roja. El diario *La Nación* informaba que en una reunión en la que participaron legisladores de distintos partidos, "se reconoció que el empuje de las fuerzas socialistas es fuerte, que avanzará sobre toda la república". Un senador por Catamarca afirmó que "el socialismo de la capital influirá considerablemente en la orientación de los grupos populares en todas las provincias", y otro legislador santafesino sostuvo que "el capital extranjero se alarmará ante estos avances populares, que proclaman la negación de la propiedad".[116] Movidos por estos temores, una serie de notables de la vida social y política, entre los que se encontraban Mariano Demaría, Norberto Quirno Costa, Indalecio Gómez, Carlos Guerrero y José María Rosa lanzaron una nueva agrupación capitalina, que poco después daría origen al Partido Demócrata Progresista.

Este acercamiento entre notables de la vida política y miembros de la elite social no sobrevivió demasiado tiempo, ya que los socialistas, que por otra parte pronto confirmaron su moderación, no sólo fracasaron en su proyecto de consolidar su dominio sobre la ciudad, sino que también fallaron a la hora de extender su influencia fuera de los límites de la Capital Federal.[117] No tardó en advertirse que los socialistas no presentaban ningún desafío de envergadura al orden social o al político. El programa del socialismo argentino era muy moderado en comparación con los de la mayoría de los partidos que formaban la Segunda Internacional. Aunque particularmente críticos de la gran propiedad rural, los socialistas no cuestionaban los fundamentos básicos de la economía argentina; defensores del librecambio y de una política monetaria ortodoxa, estaban más preocupados por la protección de los consumidores urbanos que con la socialización de la propiedad, a punto tal que Juan B. Justo, el eterno líder del partido, fue maliciosamente calificado como "el Lenin de la tarifa de avalúos". El proyecto de poder del partido tenía por eje la creación de una gran coalición urbana y, si bien su principal clientela electoral se encontraba entre los trabajadores calificados, también concitaba importantes apoyos en las clases medias. Su moderación fue pronto reconocida, y los temores que despertó hacia mediados de la década de 1910 rápidamente dejaron lugar a una visión más tolerante, que es la que el partido había despertado en su origen. Incluso la Unión Industrial,

siempre propensa a exagerar las amenazas al orden existente, consideraba al programa mínimo del socialismo como momentáneamente inofensivo. En 1914, un dirigente industrial argumentaba que

> los dirigentes del partido se han cuidado y se cuidarán muy bien de proponer cualquier iniciativa que hiera el sentimiento patriótico [...] se ha generalizado el concepto de que los socialistas no trafican con los puestos públicos que desempeñan; que no utilizan la política como cualquier otra profesión más ó menos lucrativa; que son los únicos que defenderán honestamente los intereses colectivos, dentro de los cuales se encuentran también los de las clases pudientes que ostensiblemente combaten, y por consiguiente es á este título, y no a título de revolucionarios económicos, que hasta los adversarios les dan sus votos.[118]

A diferencia de lo sucedido en Italia en el período 1918-1922, en la Argentina la amenaza socialista no era lo suficientemente poderosa como para precipitar la confluencia de las clases propietarias y los partidos políticos burgueses. Cuando Guerrero y otras "respetables y eminentes personalidades" advirtieron que el Partido Demócrata Progresista se tornaba un núcleo al cual acudían viejos militantes del PAN, se alejaron denunciando "lo deleznable de los cimientos en que se asentaba el incipiente partido".[119] Desde el comienzo, los líderes de la Unión Cívica, el viejo partido mitrista, rechazaron la invitación a unirse con los demócrata progresistas, ya que percibían que los radicales, y no los socialistas, eran sus rivales más temibles. Para entonces, Francisco Beazley, uno de los líderes cívicos, se proponía impulsar a su partido hacia la izquierda para competir con los socialistas por el voto popular independiente que había asegurado el ascenso electoral de la fuerza de Justo en 1912 y 1914.[120] Beazley incluso proclamó que era un lector regular de *La Vanguardia*, y que los socialistas y los mitristas tenían puntos en común.[121] Esta estrategia para dotar a los cívicos de apoyos populares más sólidos fracasó, y ya en las elecciones nacionales de 1916, sabiendo que no tenían oportunidad alguna de alcanzar la victoria en la ciudad de Buenos Aires, varios dirigentes de este partido instaron a sus adherentes a votar contra los radicales y a apoyar a los socialistas. Lisandro de la Torre, el líder del Partido Demócrata Progresista, impulsó un curso de acción similar.[122]

Para entonces, la Unión Cívica estaba por desaparecer de la escena como una organización autónoma, y la mayor parte de sus miembros buscaban nuevos horizontes en las filas conservadoras. Esta reconcilia-

ción no fue sencilla, pues al fin y al cabo la memoria de las falencias del orden oligárquico todavía estaba muy fresca, y al mismo tiempo cívicos y autonomistas arrastraban una larga historia de rencillas. Emilio Frers, por ejemplo, rechazó la invitación a apoyar a De la Torre en 1919, argumentando que "el régimen radical es peor que el anterior. Pero el anterior era malo y no me decido a dar un voto que pueda contribuir a su restauración".[123] Ya mayor, Frers prefirió tomar distancia de la vida política. Para aquellos que optaban por otra postura, las opciones no eran muchas. Por ello no puede sorprender encontrar a Beazley, que había fracasado en su intento de hacer girar al partido hacia la izquierda en 1914, como presidente de la Concentración Nacional conservadora en 1922. Al igual que Beazley, en el lapso de unos pocos años, las clases propietarias aprendieron que el radicalismo dominaba la escena política. A pesar de algunos encuentros o alineamientos ocasionales con los socialistas (víctimas ellos también, al igual que los conservadores, de las victorias electorales radicales), y de la vieja tradición de acercamiento individual, no partidario, al favor del estado, los terratenientes, así como más en general todos los empresarios, encontraron que los conservadores que tanto habían criticado en el pasado se estaban convirtiendo en sus mejores aliados o interlocutores. En síntesis, el amplio dominio que el partido radical ejerció sobre la vida política produjo una polarización de la escena pública similar a la generada por el peronismo un cuarto de siglo más tarde.

El acercamiento entre los políticos del viejo régimen y la elite socioeconómica resultó de la consolidación del régimen radical y del creciente peso político alcanzado por las clases subalternas después de 1916, y se hizo evidente luego de la gran ola de conflicto social de la inmediata posguerra. En distintas ocasiones a lo largo de los años de gobierno radical, en especial en el período de agudos conflictos del período 1917-1921 y durante la movilización contra la ley de jubilaciones del bienio 1924-1925, los empresarios rurales e industriales, así como toda la comunidad de negocios, constituyeron un frente de oposición contra el gobierno; esta contó con el apoyo del arco conservador. Es importante recordar, empero, que esta asociación no carecía de problemas. La aprobación de la Ley Sáenz Peña también forzó a los herederos del régimen oligárquico, al igual que al resto de la oposición, a adaptarse a nuevas condiciones. Luego de 1916, no sólo los gobernantes, sino también todos los hombres públicos, debieron tomar en mayor consideración demandas que antes podían ignorar con mayor facilidad.

Los cívicos no fueron los únicos que advirtieron que debían interpelar de nuevas maneras a su electorado potencial. Aun a desgano, muchos

conservadores también llegaron a la conclusión de que un cambio de estilo político, que debía incluir referencias más explícitas a los problemas sociales, era necesario para desafiar a los radicales. En 1917, un líder conservador de primera línea como Rodolfo Moreno instaba a sus partidarios a renovarse, señalando que "los tiempos imponen nuevas formas en la política, los partidos deben moverse a bases esencialmente populares, con formas democráticas y con el rumbo que marcan las mayorías".[124] En 1918, Moreno fue elegido para presidir el Partido Conservador en la provincia de Buenos Aires, y en esa ocasión promovió un programa que contemplaba las promesas habituales de austeridad fiscal y bajos impuestos. Pero Moreno también comprometió a los conservadores a establecer un impuesto sobre la renta, y a impulsar leyes de salario mínimo y de jornada de ocho horas para los empleados públicos. Durante la campaña electoral de 1920, Moreno propuso un programa similar.[125] En 1921, el gobierno conservador de Córdoba sancionó una ley de salario mínimo para los empleados públicos. La legislación reclamada por la Federación Agraria a comienzos de la década de 1920, a pesar de sus muchas limitaciones, fue aprobada por un Senado dominado no por los radicales, sino por los conservadores. En esa ocasión, Benito Villanueva, el presidente conservador del Senado, debió recibir a la delegación de chacareros que concurrió al Congreso a presentar sus reclamos.[126] Como luego recordaría el socialista Nicolás Repetto, "la nueva legislación agraria, de iniciativa socialista, contó en el Congreso con el apoyo de los radicales y conservadores".[127] Desde la perspectiva de los conservadores, la situación no se veía del todo distinta. Así, por ejemplo, José María Bustillo recordaba en sus memorias que aquellos que criticaban a los diputados conservadores por no haber "estado más decididos en su posición ideológica al discutirse leyes sociales" no advertían que "para mantener la posición electoral, no era posible ponerle siempre el pecho a la demagogia".[128] En síntesis, aun si muchos conservadores quizá desaprobaban el espíritu y la dinámica de la política democrática, de todas maneras estaban obligados a bailar al ritmo de esa música plebeya.

Es importante señalar que, en aquellos años, los conservadores alcanzaron mejores resultados electorales en los distritos donde la propiedad estaba dividida que en aquellos en los que dominaba la gran propiedad. Del mismo modo, es revelador que sus bastiones electorales se encontrasen en algunos distritos densamente poblados del Gran Buenos Aires, en primer lugar en Avellaneda, un suburbio industrial. Allí surgió un nuevo modelo de político, conservador y populista, que típicamente representó Alberto Barceló, y algo más tarde, Manuel Fresco.[129] A pesar de los bue-

nos resultados electorales alcanzados en estos distritos, considerados en conjunto, los conservadores no lograron presentar una alternativa viable al avance radical, y permanecieron en un estado de crisis recurrente. No podemos más que preguntarnos qué hubiera sucedido si los conservadores hubiesen sido más exitosos a la hora de concurrir a las urnas. De todas maneras, la transformación del conservadurismo en una fuerza más populista y más dispuesta a cortejar a sus bases plebeyas ofrece una clara indicación de que la posición política de los grandes propietarios estaba siendo erosionada no sólo por el ascenso radical, sino también por procesos que afectaban a todas las fuerzas políticas, con independencia relativa de su historia previa o de sus afinidades ideológicas. El sufragio popular no cambió radicalmente al país, pero sí contribuyó a crear un nuevo espíritu político, en el que tenían peso creciente las demandas de justicia social e igualdad económica. Al dar voz a una sociedad que se había vuelto políticamente más compleja y socialmente menos armoniosa, la democratización debilitó la posición de las clases propietarias. No parece desacertado afirmar que la reacción de los grandes terratenientes a la democracia se volvió menos tolerante no sólo por el ascenso radical, sino también porque la competencia democrática obligó a los herederos del antiguo régimen a replicar las estrategias y el estilo político de sus rivales.

TRANSFORMACIONES DEL MERCADO DE CARNES Y CONFLICTOS ENTRE LOS ESTANCIEROS

El aumento del gasto estatal, canalizado en su mayor parte hacia los sectores medios y bajos de la sociedad, y un clima social y político más hostil hacia los grandes propietarios, fueron algunos de los problemas que los terratenientes debieron enfrentar desde la década de 1910. Luego de la finalización de la Gran Guerra, los estancieros descubrieron que tenían otros problemas, más urgentes, de que ocuparse. El estallido del conflicto bélico señaló el fin de una larga etapa de expansión del mercado mundial para productos primarios. La inestabilidad del mercado una vez concluida la guerra hizo que las variaciones de precios de los productos exportables argentinos durante los años veinte fuese la más pronunciada del siglo 1860-1960.[130] Como consecuencia de esas bruscas oscilaciones, los ganaderos se vieron arrastrados hacia la crisis más severa de cuantas hasta entonces habían enfrentado. La depresión del mercado dio lugar a du-

ros enfrentamientos entre los productores y las empresas comercializadoras, así como entre los propios estancieros, que en definitiva erosionaron la ascendencia de los grandes terratenientes sobre el sector ganadero. Vista en perspectiva, la crisis ganadera de comienzos de la década de 1920 demostró tanto la fortaleza de las empresas industrializadoras como la debilidad de los productores, que fueron incapaces de dar respuesta alguna a la contracción del mercado británico, en el que colocaban el grueso de su producción. Para comprender los motivos que desencadenaron este conflicto, y las derivaciones que tomó, es preciso hacer primero algunas consideraciones generales sobre la relación entre las empresas frigoríficas y los productores ganaderos.

Las primeras plantas frigoríficas fueron instaladas en la década de 1880. Inicialmente, los frigoríficos se concentraron en el procesamiento de ovinos, pues estos, más refinados y más pequeños, resultaban más sencillos de procesar. Para entonces, el comercio internacional de carne vacuna estaba dominado por las exportaciones estadounidenses, en su mayoría de animales de pie, que se colocaban casi en su totalidad en el mercado británico. La expansión del mercado doméstico estadounidense contrajo el saldo exportable, por lo que los británicos se vieron obligados a buscar fuentes de abastecimiento alternativas. Las exportaciones argentinas de ganado en pie crecieron, alcanzando para fines de la década de 1890 unos 100 000 animales anuales, que representaban algo así como la mitad de las exportaciones totales de ganado. En 1900, las autoridades sanitarias británicas cerraron sus puertos a los animales vivos procedentes del Río de la Plata, donde se había declarado una epidemia de fiebre aftosa. Ello hizo que los frigoríficos se convirtieran en el único canal de acceso al mercado británico, ya que la carne industrializada no estaba sometida a la barrera sanitaria. Desde ese momento, los mejores ejemplares del rodeo, que antes se exportaban en pie, comenzaron a procesarse en las plantas frigoríficas. En pocos años, la Argentina eclipsó a Australia y se convirtió en proveedor de cuatro quintos de la carne vacuna que entraba en el mercado británico. Países como Francia, Bélgica y Alemania, que habían constituido grandes mercados para la lana argentina en la segunda mitad del siglo XIX, siempre permanecieron reacios a conceder libre acceso a la carne producida en el Río de la Plata, que competía con la oferta local. Es por ello que, en el nuevo siglo, las exportaciones ganaderas se volvieron muy dependientes del mercado británico, y de un reducido número de poderosas empresas que aseguraban el lazo transatlántico.

Los empresarios angloargentinos se destacaron entre los promotores de la industria frigorífica. Estos hombres poseían alguna experiencia de

gestión de grandes empresas (habían participado activamente, por ejemplo, en las primeras fases del desarrollo ferroviario en el Plata), y también conocimiento del mercado británico y de las oportunidades que allí existían para la producción rioplatense. La participación de los empresarios nativos fue tímida desde el inicio, y en el mediano plazo prácticamente desapareció. Al cabo de algunos años, también, los angloargentinos fueron desplazados por empresas de enorme tamaño y recursos, primero de capital británico y más tarde estadounidense. De este modo, la industria de la carne salió del área de influencia de los intereses locales. Los estancieros eran conscientes de los peligros implícitos en este pacto neocolonial, por el cual los empresarios nativos se ocupaban de la producción, y dejaban en manos de poderosas empresas extranjeras todo el ciclo de procesamiento y comercialización.[131] Pero también sabían que su mejor opción era concentrar sus esfuerzos en la expansión de sus establecimientos rurales, un negocio que conocían bien y que les resultaba más redituable, y que ofrecía el atractivo adicional de la valorización del suelo en el largo plazo. Es por ello que los estancieros se mantuvieron remisos a invertir en la industria. En la década de 1880, por ejemplo, la Sociedad Rural no pudo convencer a inversores locales para que colaboraran en la apertura de una planta. Hubo, sin embargo, algunos intentos de ingresar en el negocio, a veces asociándose con capital extranjero. La empresa Sansinena, creada en 1884, y también La Blanca, que abrió sus puertas en 1903, eran firmas dominadas por empresarios argentinos.[132]

Los Senillosa también exploraron este negocio. En 1904, se reunieron con los Armour en Nueva York, con el fin de interesarlos en iniciar operaciones en el Río de la Plata. Los Senillosa pronto advirtieron que la asociación que les proponían a estos grandes empresarios de la carne de los Estados Unidos no iba a funcionar, y concluyeron que si Armour "va al Río de la Plata lo hará con absoluta prescindencia de nuestros ofrecimientos, y con personal exclusivamente yankee y conocido de la empresa".[133] El fracaso de los Senillosa es indicativo de la posición de los productos argentinos respecto al capital extranjero. Los estancieros, por grandes que fueran, no tenían mucho que ofrecer en una asociación de este tipo, ya que la puesta en marcha y el éxito de una empresa frigorífica dependía de factores que estaban fuera de su control. Para ser rentable, el comercio internacional de carnes requería de enormes inversiones en plantas procesadoras, barcos equipados con instalaciones de frío, una cadena de distribución en el mercado de destino, y una estrecha coordinación entre los distintos momentos del proceso. La integración vertical pronto se impuso, pues permitía que las empresas frigoríficas

trabajaran a máxima capacidad, eliminando riesgos y tiempos muertos, e incrementando sus ganancias. El carácter perecedero del producto obligaba a las empresas a actuar con cuidado. Los acuerdos de reparto del mercado entre las pocas firmas que participaban del negocio eran habituales, pues servían para mantener bajos los precios de compra de ganado en Argentina y para evitar que la sobreoferta de carne deprimiera los precios de venta en Gran Bretaña. En el Río de la Plata, por otra parte, estos acuerdos se establecían con gran facilidad, en cierta medida por razones geográficas. A diferencia de lo que sucedía en Australia y Nueva Zelanda, donde las plantas, más numerosas y de menor tamaño, estaban distribuidas a lo largo de una extensa franja costera, en Argentina se concentraban en los alrededores de Buenos Aires, por lo que sus gerentes solían reunirse periódicamente para acordar el reparto del mercado. Dadas estas circunstancias, no sorprende que La Blanca resultara un fracaso para sus dueños argentinos, y que finalmente fuese adquirida por capital norteamericano.[134] Para sobrevivir, Sansinena adoptó otra estrategia: dedicó atención preferencial al mercado doméstico.

La industria de la carne no podía sino concitar la crítica de los productores, que en distintas ocasiones manifestaron su temor por sus características oligopólicas. Pero dado que hasta la Primera Guerra Mundial los ganaderos recibieron precios satisfactorios por sus productos, sus quejas siempre fueron moderadas. En ese período, las empresas frigoríficas tenían por objetivo principal expandir el mercado para la producción argentina. Todavía entonces la oferta de ganado de buena calidad se encontraba algo rezagada respecto a una demanda externa que crecía de modo sostenido. Es por ello que, tanto en momentos en los que las empresas competían entre sí como en aquellos en los que actuaban bajo acuerdos de reparto del mercado, la demanda empujaba hacia arriba los precios de los animales. En síntesis, por décadas la estructura oligopólica de la industria no impidió que los hacendados obtuvieran altas remuneraciones (compatibles, claro está, con elevadas ganancias para las empresas frigoríficas), ya que se trataba de un mercado dominado no por la demanda, sino por la oferta de ganado.

A partir de 1907, cuando las empresas de Chicago desembarcaron en Buenos Aires, no se produjo ningún cambio en esta situación. Para desplazar a la competencia británica y argentina, los norteamericanos se lanzaron a pagar precios más altos que los habituales. Ello era posible, en parte, porque los americanos dominaban una técnica, conocida como enfriado, que invitaba a procesar ganado de mejor calidad, por el que se obtenían precios más elevados en el mercado de destino. A diferen-

cia del congelado, que mantenía la carne en buen estado por meses, el enfriado reducía la vida útil de la carne a apenas cuarenta días desde el momento de faena al de consumo, pero conservaba mejor el gusto y la apariencia del producto. El enfriado obligó a las empresas a incrementar la coordinación entre las distintas fases del proceso de elaboración, transporte y comercialización.

La expansión del sistema de enfriado profundizó la especialización de las tareas de cría y engorde (o invernada) del ganado, que no siempre se llevaban a cabo en la misma estancia. El desarrollo de la red ferroviaria, para entonces muy densa, permitió que el engorde se independizase de la posición geográfica, y que los empresarios atendieran a la calidad del suelo por sobre la cercanía a los centros de procesamiento o consumo. La necesidad de mantener abundantes pasturas durante todo el año dio un nuevo impulso a las praderas artificiales, y la alfalfa se expandió con fuerza, en especial en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y las zonas contiguas de las provincias de Córdoba y Santa Fe, donde crecía excepcionalmente bien. Mientras que esta región aumentó su especialización en el engorde de ganado, la cría tendió a concentrarse en zonas menos aptas, como las de la cuenca del Salado. Cuando estalló la Gran Guerra, la carne enfriada representaba la mitad de las exportaciones de carne vacuna del país. La oferta argentina dominaba el mercado británico, y representaba el 90% de las importaciones totales de carne enfriada de Gran Bretaña.[135] Para entonces, el ganado de baja calidad, mestizo o sin refinar, que se utilizaba para la producción de carne conservada o enlatada, y para el consumo doméstico, había sido desplazado a áreas de pastoreo marginales, como las provincias de Corrientes y Entre Ríos.

La guerra provocó una reversión temporaria de este proceso. Cuando se iniciaron las hostilidades, el gobierno británico asumió el control del comercio de carnes, y le dio prioridad a las necesidades del ejército. La carne enfriada fue desplazada por la congelada y la enlatada, pues estas eran menos perecederas y más fáciles de almacenar y distribuir.[136] Al mismo tiempo, gracias al control de las bodegas y la centralización de las compras en un único organismo, el gobierno británico forzó los precios hacia abajo. Los frigoríficos, a su vez, transmitieron la caída de precios a los productores.[137] Aunque los ganaderos se beneficiaron con el aumento del volumen de las compras, debieron aceptar cotizaciones más bajas. En 1918, y a pesar de la inflación causada por la guerra, el ganado gordo se pagaba a precios similares a los de cuatro años atrás. En cambio, el ganado de calidad inferior, muy demandado, revirtió la tendencia a la baja de precios que lo afectaba desde tiempo atrás y hacia el fin de la

guerra se negociaba a valores más altos que antes del inicio del conflicto. Durante la guerra, los hacendados de áreas marginales se beneficiaron más que los productores de ganado de alta calidad, algo que causó en estos algo de "irritación y amargura".[138] Grandes propietarios se quejaron del tratamiento que recibían de las empresas frigoríficas, y protestaron contra el sistema de compras centralizado de los aliados.[139] En 1917, la Liga Agraria, que hasta entonces había hecho oídos sordos a las quejas contra los frigoríficos, protestó contra las ganancias excesivas de estas empresas.[140] Estanislao Zeballos también denunció el daño que la política aliada había infligido a los productores rurales.[141]

El armisticio concitó la esperanza de que el mercado de carne de calidad se recuperaría velozmente. Una y otra vez se afirmó que la destrucción del rodeo europeo durante la guerra daría lugar, una vez finalizado el conflicto, a grandes exportaciones de carne refinada.[142] A comienzos de 1920, Carlos Guerrero afirmaba que "todo confirma una vez más que la Europa está falta de carne y que aumentan cada año sus necesidades".[143] Muchos productores fueron de la misma impresión, y para 1922 el rodeo argentino había crecido un 50% desde el censo de 1914. Nunca se sembraron tantas hectáreas de forraje como en esos años. La competencia por las pasturas elevó los precios de arrendamiento, al mismo tiempo que aumentaba la demanda de animales de cría. La legislación de prenda agraria ofreció un instrumento para acceder al crédito que permitió la expansión de los emprendimientos existentes o la creación de nuevas empresas ganaderas. En síntesis, en los años de la inmediata posguerra se produjo una fuerte expansión ganadera fundada sobre bases demasiado frágiles. Las expectativas creadas en torno a una demanda en crecimiento y con precios altos, el fuerte endeudamiento prendario y el alza de la renta del suelo incrementaron la exposición de muchos ganaderos, volviéndolos blancos demasiado vulnerables si se desataba una crisis.[144]

A fines de 1920 se iniciaron los problemas. El primer cimbronazo vino con el fin de las compras del ejército británico. La demanda para la carne de baja calidad prácticamente desapareció de un día para otro. Desde entonces, y por varios años, los productores de áreas marginales se encontraron con que tenían animales que no podían colocar ni en Europa ni en el mercado interno, pues aquí la baja de los precios de la carne de mejor calidad permitió que muchos consumidores orientaran sus compras hacia esta última. Todavía en 1923, los estancieros de Corrientes enfrentaban una crisis "no sólo de precios, sino también de 'falta de ventas'".[145] En 1921, el gobierno británico puso fin al sistema de control de precios que había mantenido durante la guerra. Para entonces, la eco-

nomía británica se encontraba atravesando una fuerte depresión, por lo que las expectativas centradas en torno a la expansión de este mercado se vieron frustradas. La venta de grandes reservas de carne congelada y enlatada por parte del gobierno, acumuladas durante la guerra, deprimió aún más los precios.

Inmediatamente, las empresas frigoríficas trasladaron el ajuste a los productores, reduciendo la faena y bajando los valores de compra. En la Argentina, la situación no afectó a todos los ganaderos por igual. Aquellos que participaban en el negocio de engorde fueron los primeros en sufrir pérdidas. Pero como su ciclo era más breve que el de cría, para 1922 muchos de ellos ya se habían ajustado, y estaban en mejores condiciones para comprar y vender a precios más bajos. La posición de aquellos cuyos intereses estaban centrados en la cría no era tan flexible. El ganado producido con costos muy elevados en los dos o tres años anteriores estaba llegando a la madurez precisamente cuando el mercado colapsó, por lo que muchos ganaderos no tuvieron otra opción que desprenderse de sus animales con grandes pérdidas. El problema se hizo más grave pues no fueron pocos los que debieron vender gran cantidad de animales para afrontar obligaciones financieras, deprimiendo aún más el mercado. En 1922, los precios cayeron a menos de la mitad de los pagados en 1920.[146]

Los estancieros se dividieron en torno a cómo salir de la encrucijada. Algunos optaron por aguardar a que el proceso de ajuste del mercado se completara por si solo, mientras que otros comenzaron a reclamar que la industria frigorífica, a las que acusaban por la baja de precios, fuesen obligadas a afrontar parte del costo de la crisis. En general, los grandes terratenientes, que eran a la vez los que poseían mayores recursos y los clientes regulares de la industria frigorífica, se inclinaron por la primera de estas opciones. La gran mayoría de los empresarios más pequeños, que sintieron la crisis con mayor dureza y que carecían del mismo respaldo financiero, se inclinaron por cursos de acción más radicales, y colocaron a los frigoríficos en el centro de sus críticas. Este último grupo estaba compuesto también por un importante número de productores que habían ingresado al negocio recientemente, tentados por las expectativas de grandes ganancias despertadas en la inmediata posguerra.

Desde que la Sociedad Rural se había establecido como la voz autorizada de los estancieros casi medio siglo atrás, la posición de los grandes terratenientes como voceros del interés de todos los sectores propietarios rurales nunca había sido cuestionada desde dentro de estos grupos. Por décadas, los terratenientes progresistas que lideraron los procesos de cambio productivo habían sido imitados, nunca desafiados. Ni siquiera

Nemesio de Olariaga, el principal dirigente de los pequeños y medianos ganaderos en las décadas de 1930 y 1940 dejó de señalar que, hasta la Primera Guerra Mundial, la relación entre la elite estanciera y el resto de los ganaderos había carecido de antagonismos. Hasta entonces, afirmaba De Olariaga, "el productor ganadero no tenía prácticamente problemas [...] vendía las carnes y los subproductos a precios que compensaban ampliamente sus necesidades".[147] Con la crisis de la posguerra, la concordia finalmente se perdió. En ese momento, visiones alternativas sobre cómo enfrentar la crisis reflejaron la toma de conciencia por parte de los estancieros pequeños y medianos de que sus intereses y los de los grandes terratenientes comenzaban a divergir.

En 1921, los dirigentes de la Sociedad Rural adoptaron el punto de vista de los que recomendaban paciencia, instando al estado a ofrecer crédito barato a los ganaderos en problemas, para de ese modo evitar la oferta excesiva, que derrumbaba aún más los precios.[148] Cuando la baja de las cotizaciones se profundizó, muchos estancieros reclamaron acciones más enérgicas. Durante la crisis, la industria de la carne transmitió la baja a los productores, y siguió trabajando con ganancias. Inevitablemente, las principales críticas cayeron sobre ella. La Liga Agraria y otras asociaciones de productores reclamaron la fijación de un precio mínimo para el ganado. Diarios como *La Nación* también se volvieron críticos implacables de los frigoríficos. En la primavera de 1922, este diario convocó a los ganaderos a combatir el plan de estas empresas, "concebido hace dos años para lograr el dominio absoluto del país en lo atañedero a su ganadería". Este malévolo proyecto, afirmaba el diario de los Mitre con más dramatismo que argumentos, "va cumpliéndose estricta y eficazmente".[149]

En esos días, Pedro Pagés, "uno de los productores más caracterizados del país",[150] y que además tenía una larga trayectoria como líder ruralista, dictó una resonante conferencia, en la que atribuyó a los frigoríficos toda la responsabilidad por los males que aquejaban a los ganaderos.[151] Pagés, a quien ya hemos encontrado antes entre los primeros agrónomos graduados en el país y como administrador de la estancia de Felipe Senillosa en la década de 1890, se había convertido para el Centenario en un cabañero renombrado.[152] Saberes profesionales, éxito empresarial y un matrimonio afortunado le habían permitido escalar posiciones, aunque seguramente muchos miembros de la elite terrateniente no lo consideraban un par. Para desagrado de la mayoría de los grandes propietarios, Pagés fue ungido presidente de la Sociedad Rural en las elecciones que tuvieron lugar poco después de su duro ataque a los frigoríficos.

Desde ese momento, la Sociedad Rural y la mayoría de las asociaciones que nucleaban a los productores ganaderos se movilizaron contra la industria de la carne. Los ruralistas presionaron al gobierno para que sancionase una ley que obligase a los frigoríficos a pagar precios mínimos por el ganado. Los apoyos con que contaban no eran tan grandes. Además de los frigoríficos, el precio mínimo tenía demasiados enemigos. Una parte importante de los principales terratenientes se negó a suscribir una medida de este tipo, en algunos casos, porque se contaban entre los clientes privilegiados por las empresas frigoríficas y temían perder esa ventaja; en otros casos, porque juzgaban todo el proyecto impracticable. El gobierno tampoco demostró gran predisposición para confrontar con las empresas frigoríficas. Durante su gestión, Yrigoyen siempre se mostró remiso a sancionar una legislación que iba a enemistarlo con poderosos intereses extranjeros, y que al mismo tiempo iba a provocar el aumento de los precios de la carne en el mercado interno. Marcelo T. de Alvear, su sucesor, que asumió en octubre de 1922, no se apartó de este rumbo. Otros legisladores, en particular los socialistas, también se oponían a toda medida que pudiese aumentar el precio de un componente tan central de la dieta popular.[153] Esta oposición hizo que, por largos meses, los airados reclamos de los ganaderos no recibieran respuesta. "El estado", se quejaba un líder ruralista en abril de 1923, "se encuentra sujeto por dos fuerzas antagónicas, frente a las cuales se muestra pusilánime. Por un lado las fuertes organizaciones capitalistas a quienes no toca en nombre de la libertad de comercio y por razón de los intereses creados, y por el otro lado las masas proletarias agremiadas, a quienes teme".[154]

La legislación de precio mínimo recibía sus principales apoyos de representantes conservadores y radicales de las áreas más afectadas por la crisis ganadera. Pero fueron los conservadores, en particular figuras como Manuel Carlés, José Heriberto Martínez y Marcelo Sánchez Sorondo, los que se comprometieron más activamente en su defensa. Ello se debía, en parte, a que algunos de los dirigentes de la Sociedad Rural elegidos en 1922 pertenecían a las filas del mundo conservador: Rafael Emiliani había sido secretario de Carlos Pellegrini, José Sojo había ocupado la cartera de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires en la década de 1900, Ángel Allaria había sido ministro de Guerra de Roque Sáenz Peña. El propio Pagés tenía una larga trayectoria en el conservadurismo bonaerense, y se había desempeñado como legislador provincial y nacional. Es claro que, además de su interés en el bienestar de la ganadería, los conservadores tenían otros motivos para apoyar los reclamos de los ganaderos. Esta cruzada

también les ofrecía una buena oportunidad para criticar la gestión radical, a la que acusaban de pasividad, desinterés e ineficiencia.

En diversas oportunidades, los radicales sostuvieron que la industria de la carne no era responsable de la baja de precios, y que este fenómeno se debía a la libre acción de las fuerzas del mercado.[155] Ello no significaba que el gobierno radical creyera ciegamente que las cotizaciones se determinaban por puros mecanismos mercantiles, o que permaneciera pasivo frente a la danza de los precios. Como David Watson, gerente de una planta extranjera, recordaría en sus memorias, en más de una oportunidad Yrigoyen presionó a las empresas para que ofrecieran mejores cotizaciones por la carne que exportaban, y que compensaran sus mayores costos bajando el precio que pagaban por los animales que destinaban a satisfacer la demanda doméstica.[156] Esta actitud, que se proponía contentar tanto a los productores de ganado refinado como a los consumidores domésticos, pareció funcionar relativamente bien hasta que la severidad de la crisis reclamó soluciones más profundas.

Para entonces, sin embargo, Yrigoyen terminaba su mandato. Por un tiempo, los legisladores que le eran adictos continuaron insistiendo en que el mercado se ajustaría por sí mismo. Todavía en julio de 1923, *La Época,* el vocero yrigoyenista, señalaba que la baja de precios "no es un fenómeno arbitrario y circunscripto dentro de los límites de la economía nacional. Es una consecuencia de esa ley inalterable de la oferta y la demanda [...] la crisis se resolverá gradualmente, como consecuencia final del alza en la curva de la demanda".[157] Poco después, llamativamente, su posición se modificó. Este cambio se debía más a los conflictos internos del radicalismo que a la determinación de sostener las peticiones de los ruralistas. A poco de asumir, Alvear tomó distancia de la figura de su antecesor, y con ello las tensiones entre el nuevo mandatario e Yrigoyen crecieron. Pasada la mitad de 1923, se hizo clara la división entre los seguidores de Yrigoyen, conocidos como personalistas, y los que se oponían a su liderazgo, denominados antipersonalistas. Estos últimos buscaron nuclearse en torno a la figura del nuevo presidente. En ese momento, los legisladores personalistas decidieron quitarle su apoyo al titular del Poder Ejecutivo y, entre otras cosas, impulsaron la legislación de precio mínimo, que Alvear resistía. En octubre de 1923, una mayoría de yrigoyenistas y conservadores sumaron sus votos y aprobaron la ley.[158]

Los frigoríficos se opusieron frontalmente a la medida: cuando la norma entró en vigencia, cesaron por completo sus compras. Sólo siguieron procesando el ganado que habían adquirido en grandes cantidades poco antes, con el fin de morigerar posibles efectos de la interrupción

de la provisión de materia prima. La respuesta de los frigoríficos causó consternación y profunda inquietud entre los productores, que no estaban preparados para sostenerse frente al *lock-out.* Varios estancieros, muchos de ellos muy importantes, reaccionaron solicitando la suspensión de la ley de precio mínimo.[159] Incluso algunos ganaderos que habían apoyado el control de precios advirtieron que no podían librar una larga y costosa batalla contra la poderosa industria de la carne.[160] Humilladas, la Liga Agraria y la Asociación de Criadores de Ganado Shorthorn volvieron sobre sus posiciones, y reclamaron la suspensión de la medida.[161] Pocos días más tarde, a comienzos de noviembre, el gobierno suspendió el control de precios, a pesar de las protestas de la Sociedad Rural.[162]

Pedro Pagés dejó la presidencia de la Sociedad Rural en 1926, fracasado y frustrado, y desde entonces abandonó la vida pública. También sufrió severas pérdidas económicas, pues muchos de los terratenientes con los que había chocado en esos años dejaron de comprarle reproductores, contribuyendo a la bancarrota de su cabaña. Para entonces, Pagés era consciente de que no había sido sólo la falta de determinación del gobierno la que había impedido la aplicación del control de precios. Después de la dolorosa experiencia de fines de 1923, los estancieros se volvieron menos presumidos respecto de su propio poder y más conscientes de las divisiones que fracturaban sus filas. Con el paso del tiempo, también, el pedido de aplicación de la legislación de precios mínimos perdió urgencia, en parte porque las cotizaciones, luego de tocar fondo, lentamente comenzaron a recuperarse.[163] A ello contribuyó el propio ciclo ganadero, pues la excepcional matanza del trienio 1921-1923, que deprimió el mercado, también diezmó el rodeo de cría, lo que a mediano plazo elevó los precios del ganado.[164] Además, la demanda externa creció luego de 1923, en especial en Europa continental, y los frigoríficos incrementaron sus compras. El aumento de la demanda de los frigoríficos, aunque modesto, elevó los precios.[165] La propia Sociedad Rural admitió la mejora. En 1925, *Anales* dio a conocer una "carta de un estanciero" que afirmaba que "los frigoríficos se animan a pagarnos la carne a un precio que permite abonar los arrendamientos y comprar toros para los rodeos".[166] Considerando el tono apocalíptico que los ruralistas solían emplear para describir el estado de sus empresas, esta era una buena noticia. Aun si luego de 1923 el tiempo de las ganancias extraordinarias se había ido para siempre, y todo lo que los ganaderos podían esperar era un ingreso moderado, para aquellos que habían sobrellevado la crisis, el futuro se presentaba mejor que el pasado inmediato.

Es preciso señalar, sin embargo, que la recuperación del mercado fue lenta y errática. A muchos terratenientes no les resultó sencillo aceptar que el tiempo de las grandes ganancias se había acabado, por lo que las demandas de aplicación de la legislación de precio mínimo continuaron. Luego del estruendoso fracaso de 1923, los terratenientes prefirieron formular sus reclamos en un tono menos estridente. Por este motivo, muchas de ellas nos resultan desconocidas. Otras, en cambio, alcanzaron estado público. En mayo de 1924, por ejemplo, varios grandes propietarios que antes se habían opuesto a la legislación de precio mínimo se pronunciaron por su puesta en vigencia. En representación de este grupo habló Matías Errázuriz, un patricio chileno que se había emparentado con la rama más rica de la familia Alvear. Errázuriz argumentó que los precios pagados por los frigoríficos no eran suficientes para cubrir los costos, y que la ganadería estaba a punto de hundirse en la ruina. Su solicitud no fue atendida.[167]

La fragilidad de la recuperación del mercado de carnes se evidenció otra vez en 1926, cuando el mercado británico súbitamente volvió a contraerse. En la primavera de ese año, el precio de los novillos de exportación se derrumbó de golpe, causando gran inquietud y malestar entre los ganaderos con fuertes intereses en la actividad de invernada.[168] En octubre, un grupo de 23 grandes terratenientes elevó una petición al gobierno para que interviniese en el mercado y obligase a los frigoríficos a mejorar los precios del ganado.[169] Una buena medida de la importancia de estos estancieros lo ofrece el hecho de que manifestaban poseer 1 350 000 cabezas de ganado refinado. Esta cifra representaba más del 10% del rodeo total de la provincia de Buenos Aires, y alrededor del 5% del rodeo vacuno del país; se trataba, además, de ganado de calidad muy superior al promedio, lo que lo volvía aún más valioso. Poderosos estancieros como Enrique Santamarina, Leonardo Pereyra Iraola, Rafael Herrera Vegas, Celedonio Pereda y Ezequiel Ramos Mexía formaban parte de este grupo. Estos hombres habían visto con desagrado la campaña por el precio mínimo encabezada por la Sociedad Rural en 1923. En ese momento, sin embargo, hicieron saber que habían modificado su punto de vista. En una entrevista con *La Nación,* Diego Lezica Alvear, que habló en representación de sus colegas, afirmó que la puesta en vigencia del precio mínimo era "el único remedio para evitar un nuevo derrumbamiento de la ganadería. Estoy seguro de que una consulta que se hiciera hoy a los ganaderos daría casi la unanimidad a favor de la aplicación de esa ley [...] la ley de precio mínimo es la barra de contención a los excesivos apetitos a los acaparadores de los beneficios de nuestra industria".[170]

Esta demanda tampoco rindió fruto. Al igual que había sucedido con el reclamo encabezado por Errázuriz un par de años antes, en 1926 los mayores estancieros de la Argentina debieron retirarse de los despachos oficiales con las manos vacías. A pesar de las presiones de la elite terrateniente, las empresas se negaron a pagar mejores precios, y el gobierno se mostró reacio a secundar sus demandas de intervención.[171] Los ganaderos debieron soportar un año entero de bajos precios; las cotizaciones de los novillos de exportación sólo mejoraron hacia fines de 1927, gracias a la recuperación del mercado británico. En definitiva, el tratamiento que la industria de la carne les concedió a los mayores terratenientes del país sólo fue algo mejor que el que les ofreció a los ganaderos de menos renombre y posición.

Ejemplos como estos nos indican que los productores pequeños y medianos no fueron los únicos que sufrieron la crisis ganadera; esos años tampoco fueron sencillos para los principales terratenientes del país. Durante esa década, los estancieros advirtieron la debilidad de su posición, y ello seguramente afectó el modo en el que respondieron a la Depresión Mundial que se abatiría sobre ellos algunos años más tarde, dotándolos de reflejos que les permitirían enfrentar problemas aún mayores. Para todos, los años veinte fueron un período de resentimiento contra la industria de la carne y contra un gobierno que consideraban incapaz de ofrecerles soluciones. Es significativo que, en esos años, los Pereyra Iraola –una de las grandes dinastías terratenientes– mostrasen interés en colocar capital en otros sectores, y que invirtieran en una gran empresa cementera que poseía más de 500 empleados.[172] Esta estrategia de diversificación (habitual en momentos en los que prima la incertidumbre y flaquea la confianza en el futuro) quizá no fue del todo inusual, aunque, como veremos en el capítulo que sigue, fue la Gran Depresión la que lanzó a los principales estancieros a buscar alternativas con las que compensar la caída de sus ingresos rurales.

Como el presidente de la Sociedad Rural advirtió en 1923, los estancieros respondieron a la baja del ingreso ganadero diversificando sus emprendimientos dentro del propio sector rural, esto es, destinando más tierra a usos alternativos, entre los que se destacaba la agricultura granífera.[173] Este tipo de cambio de una actividad a otra no era nuevo: por décadas el sistema de arrendamientos que predominaba en la pampa le había otorgado a los empresarios gran flexibilidad para asignar más o menos tierra a la ganadería o a la agricultura (así como a distintas actividades dentro de cada uno de estos sectores) de acuerdo con las señales del mercado. Por su escala, el cambio hacia la agricultura y la

contracción de la ganadería luego de 1922 carecía de precedentes. Se ha estimado que, en la provincia de Buenos Aires, el rodeo se redujo cerca de un tercio entre 1922 y 1926: de 16 500 000 a 11 000 000 de cabezas.[174] El área sembrada con el más extendido de los forrajes de la pampa, la alfalfa, que luego de tres décadas de expansión había llegado a su punto máximo en 1922, declinó casi un 40%, cayendo de 8 500 000 hectáreas en 1922 a 5 400 000 en 1928. La agricultura granífera avanzó rápidamente sobre las tierras dejadas vacantes por el ganado mayor. Entre 1922 y 1928, la superficie cultivada con cereales y lino se incrementó de 11 500 000 a 19 400 000 hectáreas.[175]

Desde la década de 1880, la agricultura pampeana se había mecanizado a gran velocidad para favorecer las economías de escala. En la pampa, abundante en tierra y escasa en trabajo, el objetivo de obtener la mayor cantidad de producto por unidad de trabajo empleado estimuló la mecanización.[176] Durante la década de 1920, los agricultores intensificaron este patrón, e introdujeron nuevas tecnologías que ahorraban trabajo, en particular en las tareas de cosecha. Consideraciones de índole no estrictamente económica, vinculadas a la conveniencia de reducir al máximo el empleo de una fuerza de trabajo que, tras la Primera Guerra Mundial, se revelaba más indisciplinada y problemática, también deben haber estimulado la decisión de invertir en maquinaria.[177] La maquinaria representaba el 24% del stock de capital del sector en 1914, y el 40% para fines de la década de 1920. En esos años se introdujeron mejores semillas, que también ayudaron a aumentar la producción total y la productividad. Todo ello contribuyó a una fuerte expansión.

Entre 1920 y 1929, las exportaciones de trigo y maíz aumentaron casi un 50%, y las de lino prácticamente se duplicaron.[178] Las exportaciones de granos crecieron, se sobrepusieron incluso al ascenso del proteccionismo en el hemisferio norte y ganaron terreno a costa de otros países productores. Los agricultores argentinos incrementaron su participación en el mercado mundial de maíz: de alrededor del 40% antes de la Gran Guerra, llegó al 70% en 1928. En este mismo período, la producción de lino duplicó su participación en las exportaciones totales del mundo, pasando del 40 al 80%.[179] La formidable expansión de las exportaciones de granos en la década de 1920 no sólo compensó la caída de las exportaciones ganaderas, sino que también aumentó el valor total de las ventas al exterior, llevándolas en 1928 a cerca del doble de las de preguerra. Ello le dio un fuerte impulso al mercado interno y al sector industrial, que todavía estaban íntimamente ligados a la suerte de la economía de exportación. Este gran salto, empero, hizo más difícil

percibir que el clima internacional era cada vez menos favorable para los productos primarios, contribuyendo de ese modo a que el país hiciera poco para prepararse para el gran colapso que se produciría pocos años más tarde.

Así, en la década de 1920 la producción granífera emergió con inusitada fuerza como el motor de la economía argentina, dejando al sector ganadero en una posición muy secundaria. Durante el período 1923-1927, los granos representaron casi el 60% del valor total de las exportaciones, mientras que el sector ganadero contribuyó con menos del 40% del valor de las ventas al exterior, de los cuales las exportaciones de carne vacuna apenas sumaban el 15%.[180] La importancia de este cambio en la estructura productiva no pasó desapercibida para los contemporáneos. Cuando una delegación de parlamentarios británicos llegó el país en 1928, los legisladores fueron invitados a visitar algunas grandes estancias, donde "fueron gratamente sorprendidos por la calidad del ganado, tanto del de pedigree como del sin pedigree". Juicios como este no resultaban sorprendentes. Lo que sí resulta más llamativo es que los legisladores enfatizaron la "fuerte tendencia hacia 'el arado'" en áreas previamente destinadas a la ganadería. "Inmensas superficies nuevas", afirmaron los representantes británicos en su informe, "están siendo parceladas y preparadas para todo tipo de cereales, y advertimos que el Maíz es afectuosamente considerado como el 'Rey de los Granos'". En su visita a San Jacinto, la enorme propiedad de más de 60 000 hectáreas que Saturnino Unzué poseía en los partidos de Rojas y Mercedes, los parlamentarios fueron informados de que "27 000 acres de maíz, trigo y lino producían una ganancia dos veces y medio superior a la de 22 000 acres de pastura".[181] En 1928, cuando la Cámara de Diputados abordó la crisis del mercado de carnes, situaciones como esta se consideraron muy habituales.[182] "La crisis ganadera", sostuvo Pedro Pagés en 1928, "ha hecho agricultores a casi todos los hacendados".[183]

En verdad, como Pagés implícitamente aceptaba, la mayoría de los estancieros no había hecho otra cosa que arrendar a cultivadores parte de las tierras que en el pasado tenían un uso ganadero.[184] Es importante señalar que este giro hacia la producción granífera hizo más visible y omnipresente el papel de los grandes terratenientes como rentistas, erosionando al mismo tiempo sus credenciales como empresarios. De hecho, la prosperidad que la economía nacional alcanzó en los años centrales de la década de 1920, luego de superada la crisis de la inmediata posguerra, debió muy poco a las habilidades empresariales de los estancieros. Más bien, dependió de los recursos y talentos de una comunidad de agricul-

tores que en esas décadas se volvió más heterogénea: estaba compuesta por muchos hombres que a lo largo de los años habían logrado consolidarse y prosperar, pero también por una cantidad aún mayor de chacareros más vulnerables. Durante la primera mitad de la década, las buenas cotizaciones alcanzadas por los granos y una serie de cosechas abundantes, junto con el aumento de la oferta de crédito hipotecario para pequeños y medianos productores, permitieron que algunos arrendatarios se lanzaran a la compra de tierra, que en ciertos casos parece haber sido puesta en el mercado por aquellos estancieros que habían sufrido fuertes pérdidas durante la crisis ganadera.[185] De acuerdo con algunas estimaciones, entre 1912 y 1928 el número de unidades de producción explotadas por sus dueños en la pampa creció de 27 400 a 58 300.[186] Este aumento no era siempre el resultado del éxito. La división igualitaria de la tierra entre todos los herederos legítimos también incrementó el número de propietarios de parcelas cada vez más pequeñas. Sobre muchos de estos nuevos propietarios pesaban fuertes compromisos hipotecarios, cuya relevancia se advertiría en la década siguiente.[187] Lo que es de igual importancia, desde comienzos de la década de 1910 también se incrementó la cantidad de agricultores pobres que, por otra parte, tras el cierre de la frontera carecían de recursos como para acceder a la propiedad. La manifestación más evidente de esta situación es el crecimiento de la cantidad de chacareros que arrendaban la tierra que trabajaban, que entre 1912 y 1928 creció de 46 000 a 87 800.[188] Si bien la identificación entre la categoría de arrendatario y la de chacarero pobre peca de simplista, de todas maneras el fuerte incremento de la cantidad de arrendatarios indica que, al mismo tiempo que el agro pampeano seguía favoreciendo la consolidación de una burguesía rural media, también colocaba a una porción de los agricultores en una situación precaria.

Vista en una perspectiva de largo plazo, la evolución del sector agrario pampeano en la década de 1920, signada por la expansión del cultivo de granos y la contracción de la ganadería, testimonia el papel crecientemente marginal de los grandes propietarios como empresarios, así como la importancia cada vez mayor de su conducta meramente rentística. Por décadas, los grandes dueños del suelo habían arrendando parte de sus tierras para la actividad agrícola (e incluso ganadera). En los años veinte este proceso se aceleró y adquirió un nuevo significado, puesto que para entonces la ganadería modernizada había perdido relevancia como fuerza dinamizadora de la vida de la campaña, los terratenientes habían poco menos que abandonado su papel como organizadores e impulsores del cultivo de granos, y la crítica a los grandes propietarios alcanzaba gran

eco. Al mismo tiempo, esta expansión de la agricultura se llevó a cabo en condiciones particularmente frágiles. Precios del grano en baja y costos de producción más altos (vinculados al alza de la renta de la tierra), así como el peso de las deudas hipotecarias, dejaron a muchos agricultores sin mayor margen de maniobra en caso de que se produjera una baja de precios sostenida.

A fines de la década de 1920 y comienzos de la década de 1930, los peores temores de los chacareros se hicieron realidad. La Depresión Mundial trajo consigo una fuerte caída de las cotizaciones de la producción agraria, que desencadenó una profunda crisis en la pampa. La Depresión golpeó a todos los productores, y contribuyó aún más a erosionar los lazos que unían a los terratenientes con el resto de la comunidad de productores. En la década de 1930, los grandes propietarios tomaron plena conciencia de que ingresaban en una nueva era, y que formaban parte de una clase dominante que había perdido el seguro y confortable nicho que antes disfrutaba. En la década de 1880, terratenientes modernizadores como Estanislao Zeballos solían vanagloriarse de que el papel que los estancieros desempeñaban en el desarrollo de la ganadería los asemejaba a la augusta y todopoderosa clase terrateniente inglesa de los años centrales del siglo XIX. Casi medio siglo más tarde, ningún propietario osaba formular apreciaciones que conservasen siquiera un dejo de aquel optimismo. En el clima profundamente pesimista que los apresó en los años de la Gran Depresión, muchos grandes estancieros fueron ganados por la convicción de que, si había alguna trayectoria histórica que parecía delinear su propio futuro, esta era la que singularizaba a la clase terrateniente irlandesa, que no sólo había sido expulsada de la tierra que señoreaba, sino que sobre ella había caído la pesada condena de una sociedad que la juzgaba artífice de todos los males que aquejaban a esa isla atormentada. Hacia ese tema debemos ahora girar nuestra atención.

5. De la Gran Depresión al peronismo

El eco cada vez mayor que alcanzó el conflicto social en la pampa desde la década de 1910 dio impulso a la animosidad popular contra los terratenientes y la gran propiedad. La llegada de la democracia y la movilización política que este cambio desató abrieron el camino para el desarrollo de una vida pública más plebeya, en la que ganaron más espacio las visiones que retrataban a los estancieros como señores feudales que explotaban a los hombres que labraban sus tierras y cuidaban sus ganados. Estas imágenes, que pintaban a los estancieros como simples parásitos, aparecieron en el vocabulario de casi todas las fuerzas políticas, e incluso se filtraron en el discurso de las formaciones conservadoras. Para fines de la década de 1920, se había extendido la creencia de que el orden productivo basado en la gran estancia ya no resultaba aceptable. Incluso los empresarios industriales se sumaron al coro que censuraba a los terratenientes, y que los señalaba como los principales responsables de los males que aquejaban al país.

La denuncia de los grandes propietarios rurales fue un fenómeno habitual en distintos países de América Latina en los años que sucedieron a la Gran Guerra. Ciertos rasgos, sin embargo, singularizan el caso argentino. En Chile y los países andinos, por ejemplo, los dueños del suelo solían ser descriptos como los principales arquitectos de una agricultura atrasada e ineficiente, incapaz no sólo de generar saldos exportables, sino también de producir lo suficiente como para alimentar a una población urbana en crecimiento. En estos países, las tensiones sociales derivadas del pobre desempeño productivo del sector agrario eran mayores que en la Argentina, puesto que aquí los estancieros presidían sobre una economía agraria que, con todas sus falencias, seguía siendo muy exitosa. El vigor que esta mostró incluso en momentos de crisis debilitó los llamados a reformar el orden rural para volverlo más democrático, y también obstaculizó la emergencia de una ideología industrialista más poderosa y definida. Ello contribuye a explicar por que, si bien durante los años del gobierno radical los grandes propietarios debieron soportar

críticas cada vez más punzantes y directas, y en ocasiones se alarmaron frente a un gobierno que percibían como demagógico e irresponsable, sus peores temores nunca se hicieron realidad. Vista retrospectivamente, su inquietud frente al gobierno surgido del sufragio secreto y obligatorio se reveló exagerada, pero en sí misma es reveladora de la creciente hostilidad social hacia la gran propiedad. Para los estancieros, los años de gobierno radical constituyeron una etapa vivida con sobresalto e inquietud.

Durante la década de 1930, la situación económica empeoró, y la denuncia del gran terrateniente alcanzó una nueva cota. La Gran Depresión provocó una severa baja de los precios de exportación. Esta caída erosionó el ingreso de productores y rentistas agrarios e hizo que la situación de los agricultores arrendatarios se volviera más difícil e incierta que en cualquier momento del pasado. Ello contribuyó a agriar aún más las relaciones entre los estancieros y los chacareros que arrendaban sus tierras. Al mismo tiempo, el sector de exportación perdió dinamismo, y la industria doméstica lentamente lo desplazó como el principal motor del capitalismo argentino. Durante la Depresión, muchos terratenientes (entre los que se contaban miembros de las familias Olivera, Luro y Martínez de Hoz) sufrieron fuertes pérdidas; algunos de ellos, incluso, cayeron en la ruina. Un indicio del pesimismo de los empresarios rurales lo ofrece el hecho de que en 1932 el gran campeón de Palermo fuera rematado a un precio llamativamente bajo, inferior a cualquiera pagado por un animal similar en el cuarto de siglo previo.[1] En 1936, un gran terrateniente como Horacio Pereda podía dictaminar sin temor a equivocarse que "el reflejo que proyecta sobre nosotros la experiencia de generaciones pasadas, para quienes toda colocación de capital en tierras significó por lo menos una duplicación del mismo al cabo de algunos años", ya no era más que un espejismo.[2] Para la mayoría de los terratenientes, el tiempo de las grandes ganancias con poco esfuerzo había terminado.

El sentido de la década de 1930, sin embargo, fue bastante ambiguo para los terratenientes. Es por ello que algunos analistas han afirmado que esos años dieron lugar a una suerte de venganza de los grandes propietarios, que entonces recuperaron posiciones y privilegios perdidos. Aun si exagerada, esta visión logra captar algunos rasgos de ese período. Pues si bien es cierto que la Depresión puso de manifiesto que la economía rural había perdido mucho de su dinamismo anterior, también puso en marcha una serie de procesos que contribuyeron a reforzar la posición de los terratenientes, permitiéndoles enfrentar mejor aquellos tiempos adversos. En 1930 el gobierno radical fue derrocado, y desde entonces y hasta 1943 administraciones más sensibles a las demandas

de los grandes propietarios rurales se hicieron con el control del gobierno. Luego de un lustro de agria discordia, la alianza tácita entre los terratenientes y los empresarios industriales se reforzó. Tras la crisis, no fueron pocos los estancieros que respondieron a la baja de su ingreso rural probando suerte en la economía urbana. Ello contribuyó a redefinir los contornos de una clase propietaria que se tornó más cohesionada y menos marcada por la especialización que en las décadas del cambio de siglo. Dentro de esta elite, los empresarios con intereses predominantemente urbanos comenzaron a desplazar a los terratenientes de la cima de la riqueza.

Sin embargo, ello no afectó demasiado la imagen de la elite terrateniente como el grupo más exclusivo del país, que se mantuvo prácticamente inalterable a lo largo de todos esos años. La así llamada Década Infame dio repetidas pruebas del aislamiento de los grandes propietarios, y de su resentimiento contra una sociedad que veían cada vez más hostil, y en la que ganaba espacio la idea de que nada bueno podía esperarse de los dueños del suelo. Sin embargo, las clases subalternas rurales fueron incapaces de poner en discusión los privilegios de la gran propiedad. Su descontento no encontró canales de expresión política, por lo que su manifestación más visible fue una sostenida migración desde el campo hacia la ciudad. Es por ello que el fin del orden rural tradicional de la pampa se produjo de un modo peculiar: desde arriba, impulsado por un lento pero inexorable proceso de reforma agraria impulsada por los gobiernos industrialistas surgidos desde la década de 1940.

UNA ELITE ACOSADA

Ya en la década de 1920, la gran propiedad se había convertido en objeto de crítica tanto para los chacareros arrendatarios como para las clases subalternas urbanas. Dando cuenta del ascenso de este clima de denuncia, el ingeniero agrónomo Pedro Marotta advertía en 1924 que "hasta hace pocos años hablar mal del latifundio, entre nosotros, era una blasfemia: significaba sentar plaza de demagogo. Pero los tiempos han cambiado".[3] Tres años más tarde, este reconocido profesional volvía a insistir. "El latifundio", afirmaba Marotta, "ahoga", a tal punto que era sin dudas "el principal problema de la economía argentina".[4]

Para fines de la década de 1920, cuando la posición de los agricultores de granos de la pampa se deterioró aceleradamente como consecuencia

de las transformaciones que afectaban al mercado mundial de granos, este clima de hostilidad hacia los terratenientes alcanzó una nueva marca. La baja de los precios de los granos en los peores años de la Gran Depresión (una caída de casi dos tercios entre 1928 y 1932),[5] así como la contracción de los volúmenes exportados, colocó a los chacareros en una situación difícil. Las malas condiciones climáticas que se vivieron en esos años, particularmente duras en el sur y el oeste, crearon presiones adicionales sobre los agricultores. El ingreso de los terratenientes también declinó, y muy marcadamente, como consecuencia de la baja del volumen exportado y de las cotizaciones del grano, y de la caída de la renta del suelo. Empero, el mayor poder económico de los terratenientes hizo que los arrendatarios se vieran obligados a afrontar el grueso del costo del ajuste del mercado. La abundante oferta de trabajo chacarero y la intensa competencia por la tierra permitieron que los dueños del suelo llevasen la voz cantante en la fijación de los términos en los que se negociaban los contratos de arrendamiento.[6]

Varios observadores advirtieron el deterioro de las condiciones de vida en la campaña, y ello dio lugar a nuevas denuncias contra los terratenientes. El sistema productivo basado en la gran propiedad y en el arrendamiento –decía un crítico en 1931– hacía de la Argentina "un país condenado irremediablemente a una inferioridad en todos los órdenes".[7] Para entonces, el optimismo que por décadas había acompañado a la expansión agraria, puesto en duda luego de 1912, se había poco menos que evaporado. Para algunos analistas, incluso, quizá por primera vez se volvió razonable juzgar el mundo pampeano con el patrón de medida ofrecido por el binomio latifundio-minufundio, que dominaba la producción agraria en otras regiones de América Latina, y que inevitablemente remitía al atraso económico y la injusticia social. Tal era el caso de Luis Heysen, que habría de hacerse conocido más tarde como dirigente político en el movimiento reformista peruano. En la disertación escrita con la que alcanzó el título de agrónomo en la Universidad de La Plata, Heysen afirmaba que "el presente y porvenir del agro argentino es, con muy pocas variantes, el presente y porvenir del agro americano". La gran propiedad, continuaba Heysen, sólo servía para "enriquecer a unos pocos terratenientes y para enjugar la miseria de los pequeños agricultores y arrendatarios y el hambre insatisfecha de nuestro peón de campo".[8]

Es significativo que incluso aquellos analistas que en la primera mitad de la década de 1910 todavía argumentaban que los dueños del suelo estaban en condiciones de oficiar de líderes del proceso de transformación rural, para fines de la década de 1920 habían modificado su punto de vis-

ta. Roberto Campolieti es buen ejemplo de este cambio de perspectiva. Este respetado ingeniero agrónomo sostenía en 1929 que la endémica crisis agraria que tenía por víctimas principales a los chacareros sólo podía ser remediada con una reforma profunda y radical. Y afirmaba que "marchamos lenta, pero seguramente a la disolución de nuestra familia rural, que tan lozana había sido en el anterior período de prosperidad agraria".[9] Para Campolieti, los terratenientes habían abdicado de todas sus responsabilidades, y perseguían sus intereses de clase con inocultable egoísmo. Los grandes dueños del suelo pampeano se habían convertido en el mayor obstáculo para superar la crisis agraria. "El terrateniente hace lujo, se divierte, juega a la ruleta, y si algo le queda, especula", argumentaba con abierto desdén por esta figura social. "Ningún adelanto es posible", concluía, "mientras los dirigentes de la agricultura nacional sean los terratenientes asenteístas [...] lo primero que hay que hacer es reivindicar el territorio argentino de las manos en que ha caído".[10]

El gran tema que recorre la literatura de análisis de los problemas agrarios y de denuncia de los terratenientes en la entreguerra, de la que las intervenciones que hemos citado forman parte, no era el fracaso de la agricultura granífera de exportación sino, más bien, la crisis del agricultor independiente, y la frustración del sueño de ver nacer una sociedad de agricultores propietarios. La agricultura pampeana había dado lugar a la formación de una sociedad muy diversa, pero estaba singularizada por la presencia masiva de cultivadores que trabajaban tierras ajenas. Este sistema de relaciones productivas había sido muchas veces percibido como poco adecuado para sostener el crecimiento del producto agrícola en el largo plazo, pero hasta la década de 1930 la expansión de la producción había desmentido todos los diagnósticos sombríos. Significativamente, la agricultura pampeana incrementó su competitividad internacional durante el período de entreguerras, aumentando incluso su participación en el mercado mundial. Pero ello se logró, en gran medida, a costa del empobrecimiento de los agricultores. Es por ello que la mayoría de los analistas contemporáneos reflexionaron sobre el futuro de la agricultura desde una perspectiva social antes que puramente económica, que enfatizaba la interacción entre la eficiencia económica, el progreso social y la dignidad personal.

Este tipo de enfoque, aunque no era nuevo, alcanzó mayor importancia desde fines de la década de 1920. El sistema de tenencia de la tierra, se afirmó muchas veces, era el principal responsable de la existencia de una clase de productores itinerantes que carecían de incentivos para invertir en las tierras que arrendaban o para nutrir la vida comunitaria.

Este régimen de propiedad creaba una sociedad con poca participación de los chacareros en los asuntos comunitarios, y en la que la vivienda y los servicios de salud y educación eran precarios. Además de opresivo para los trabajadores de la tierra, este sistema agrario era incapaz de modernizarse, puesto que al impedir el acceso de los arrendatarios a la propiedad de la tierra, también dificultaba la obtención de crédito, así como la cooperación entre los agricultores a la hora de comercializar la producción. Una reforma agraria que crease una clase de agricultores propietarios haría posible desarrollar una agricultura más avanzada y competitiva, y también más próspera. Una comunidad rural compuesta por agricultores propietarios proveería asimismo un creciente mercado interno para la producción industrial y agraria del país (un objetivo de creciente relevancia en esos años de crisis del comercio exterior). Lo que es más importante, ella permitiría sentar las bases de una sociedad mejor. Antes que una mejora en la cantidad o calidad de los bienes exportables, la ventaja de una agricultura de base propietaria residía en que daría lugar a la aparición de un productor superior: próspero y educado, más responsable y mejor insertado en la vida comunitaria, y también más ahorrativo y trabajador. Un atractivo adicional de este modo de ver el problema era que la reforma agraria podía utilizarse como una barrera contra las ideologías revolucionarias. "Subdividamos, señores, la tierra", afirmaba Marotta, "y no habrá lenines".[11]

La denuncia del terrateniente no sólo ganó espacio entre los productores e intelectuales del mundo del cereal. Como hemos señalado en el capítulo anterior, la vulnerabilidad de las exportaciones ganaderas incrementó las tensiones entre los propios ganaderos, colocando a los mayores propietarios en el centro de las críticas de los estancieros menos prominentes. Cuando los precios del ganado se derrumbaron tras el fin de la Gran Guerra, las empresas frigoríficas le dieron a los ganaderos una dura lección sobre quién dominaba el comercio de exportación de carnes. Para fines de la década, por otra parte, muchos terratenientes parecían haber aceptado que las empresas frigoríficas no eran las principales responsables de la caída de las cotizaciones de la carne. Como el joven Raúl Prebisch ya había señalado en 1922, la baja de precios era consecuencia de fuerzas del mercado que, aunque los frigoríficos siempre manipulaban en su favor, en verdad estaban lejos de poder orientar.[12] Cuando los flujos comerciales internacionales se estabilizaron tras la depresión de la posguerra, se hizo claro que la demanda británica, que absorbía casi toda la producción argentina, no estaba creciendo al mismo ritmo que antes de la guerra, y que había alcanzado, o estaba por alcanzar, un punto de

saturación. La colocación en este mercado de una cantidad de carne por encima de determinado punto provocaba inevitablemente una baja de precios. El conflicto entre las empresas frigoríficas y los estancieros en la década de 1920 había sido consecuencia de este estado de cosas. Por lo tanto, el problema que los exportadores argentinos debían enfrentar no era la existencia de acuerdos entre las empresas frigoríficas para lograr el control del mercado, sino más bien, el lento o nulo crecimiento de la demanda británica.[13]

Las perspectivas de modificar esta situación orientando las ventas hacia el mercado continental, que para entonces reclamaba una porción muy menor de las exportaciones argentinas, eran descorazonadoras, puesto que allí estas eran asediadas por el proteccionismo agrícola. En busca de mercados alternativos, los terratenientes se volvieron hacia los Estados Unidos. De acuerdo con estimaciones de la Sociedad Rural, la conquista de un 5% de ese mercado, que la propia producción doméstica estadounidense no alcanzaba a satisfacer, permitiría incrementar las exportaciones argentinas de carne en un 30%.[14] Es por ello que en 1927 esta asociación lanzó la campaña "comprar a quien nos compra", destinada a forzar la apertura del mercado americano para la producción argentina, expulsada de él en 1926 como consecuencia de un brote de aftosa. Luis Duhau, el presidente de la Sociedad Rural, viajó especialmente a los Estados Unidos con el fin de presionar a favor de esta causa.[15]

La conquista del mercado estadounidense no era una tarea sencilla. En esos años, las importaciones provenientes de los Estados Unidos excedían las exportaciones argentinas a ese país. Durante la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos habían avanzado más allá de la cuenca del Mar Caribe, que hasta entonces había concentrado sus proyectos expansionistas, y emergieron como el nuevo poder económico en muchos países de América Latina. En la Argentina, la presencia económica estadounidense vino a satisfacer una fuerte demanda de bienes manufacturados que Gran Bretaña resultaba incapaz de suplir, compuesta de productos tales como vehículos automotores, maquinaria agrícola, productos eléctricos y químicos, etc. En el período entre 1921 y 1930, compañías automotrices estadounidenses como Ford, General Motors y Chrysler vendieron el 90% de los 436 000 vehículos que ingresaron al país (contribuyendo de este modo a hacer que la Argentina contase con más automóviles por habitante que Inglaterra).[16] El intercambio comercial entre estos dos países era muy desequilibrado, puesto que sus economías agrarias de clima templado eran competitivas antes que complementarias. A diferencia de Brasil, cuyo principal producto de

exportación (el café) encontraba amplia acogida en el mercado estadounidense, nuestro país sólo podía ofrecer bienes similares a los que allí mismo se producían, y que contaban con protección arancelaria y paraarancelaria. En la década de 1920, la Argentina se convirtió en el sexto mercado exterior en importancia para las empresas manufactureras estadounidenses, pero sólo lograba colocar allí una parte muy reducida de sus ventas al exterior. Los países europeos, y en particular Gran Bretaña, constituían sus mejores clientes. A largo plazo, esta triangularidad del comercio internacional sólo podía funcionar en un sistema multilateral de pagos, con monedas convertibles. Pero este sistema, así como la posición de Gran Bretaña como la principal fuente mundial de capital y crédito comercial, se encontraba en agudo deterioro en la década de 1920, lo que daba lugar a crecientes saldos negativos en su intercambio comercial con la Argentina.[17] La primera reacción organizada de los ganaderos argentinos al debilitamiento del sistema triangular fue presionar a la diplomacia y a los fabricantes norteamericanos para equilibrar el intercambio. Tal como fue originariamente planteada por la Sociedad Rural en 1927, la amenaza de desviar las compras argentinas fuera de los Estados Unidos, implícita en el lema "comprar a quien nos compra", intentaba volcar el peso de los exportadores norteamericanos contra el proteccionismo agrícola dominante en su país.[18] Los ruralistas creían que el embargo sanitario decretado en 1926 no tenía base científica alguna, y que no era más que una excusa para proteger a los agricultores estadounidenses. Por este motivo, afirmaban que era necesario presionar a los industriales de la Unión para que estos se movilizasen en favor de un intercambio más equilibrado.

A fines de la década de 1920, los ruralistas ya no abrigaban expectativas respecto a la apertura del mercado de los Estados Unidos, y caían en la cuenta de que las relaciones con la Argentina no figuraban entre las prioridades del gobierno de ese país.[19] Para entonces, Europa continental había reducido sus importaciones de carne en más de dos tercios respecto de las de 1924. Las exportaciones argentinas de carne estaban en su mayoría restringidas a Gran Bretaña, donde el proteccionismo (la Preferencia Imperial) también las hostilizaba.[20] En esos años, la preocupación por la pérdida de competitividad del sector exportador se había vuelto un tema candente en Gran Bretaña. Ello había inducido al gobierno del reino a revisar su anterior política de no interferencia en América Latina, y a mostrarse más agresivo en lo que a protección y estímulo a su comercio se refiere. El punto de inflexión en la relación con la Argentina fue 1929, cuando el gobierno británico envió a Buenos

Aires una misión presidida por el vizconde D'Abernon. La delegación británica encontró una cálida acogida entre los estancieros que, por necesidad antes que por elección, se veían obligados a concentrar sus esfuerzos en defender sus posiciones en el mercado del Reino Unido. Es por ello que para 1929 la campaña colocada bajo el lema "comprar a quien nos compra", inicialmente lanzada con la intención de forzar la apertura del mercado estadounidense, ya indicaba con claridad el deseo de los exportadores de carne de acordar un tratado bilateral con Gran Bretaña. Por su parte, el presidente Yrigoyen también dio una calurosa bienvenida a la misión D'Abernon, y rápidamente firmó un acuerdo que orientaba las compras argentinas hacia ese país. El acuerdo resultó víctima de los enfrentamientos políticos entre Yrigoyen y la oposición, y nunca recibió sanción parlamentaria.[21] De todas maneras, la campaña de los terratenientes a favor del comercio bilateral continuó. En 1931, por ejemplo, el vocero de la Sociedad Rural instaba a sus lectores a no comprar maquinaria agrícola americana, argumentando que los tractores importados podían ser ventajosamente reemplazados por caballos.[22] Para entonces, el lazo con Gran Bretaña estaba siendo defendido a costa de la eficiencia del sector de exportación.

Como hemos visto en el capítulo anterior, en la década de 1920 los pequeños y medianos productores de ganado comenzaron a percibir que sus intereses divergían de los de grandes propietarios, a quienes repetidamente acusaron de colaborar con las empresas frigoríficas. La inquina contra los grandes terratenientes y la Sociedad Rural, que tras el fin del mandato de Pagés se reafirmó en su papel de vocero de aquel grupo, se incrementó cuando la Depresión derrumbó los precios del ganado. A comienzos de la década de 1930, ya estaban dadas las condiciones para que los ganaderos que no pertenecían a la elite propietaria rompieran con la hegemonía de los grandes terratenientes, y en ese momento aparecieron nuevas asociaciones de ganaderos que tomaron distancia de la Sociedad Rural. La más activa de todas ellas fue la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Buenos Aires y el Territorio de la Pampa (CARBAP), conocida entonces como la sociedad rural de los pequeños estancieros.[23] La CARBAP les dio a los productores ganaderos medianos y pequeños una expresión propia, que se reveló especialmente crítica de los grandes propietarios y de la Sociedad Rural. Esta voz no pasó inadvertida. "La vieja alegoría del pez grande que se devora al chico, sigue siendo un campo fertilísimo para explotación demagógica", se quejaba en 1934

Luis Duhau, que en ese momento ocupaba el Ministerio de Agricultura. "En los últimos años" –continuaba Duhau, en un intento por refutar acusaciones recurriendo a la ironía– "se ha descubierto que es el gran ganadero de esta Sociedad Rural, abierta a todos, quien goza de una situación de privilegio, impide la investigación de los frigoríficos, malogra los esfuerzos de los pequeños".[24]

En esos años, los empresarios industriales también lanzaron duras acusaciones contra los grandes propietarios. Esta era una novedad en la historia de la relación entre intereses agrarios e industriales. Desde el cambio de siglo hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, la industria de transformación creció más rápido que la economía en su conjunto, observándose también la consolidación de algunas grandes empresas. En líneas generales, el proceso de crecimiento industrial en este período continuó líneas de desarrollo bosquejadas en la etapa iniciada hacia la década de 1880, aunque su estructura se hizo más concentrada y compleja. La creciente importancia de las firmas de mayor tamaño se reflejó en un cambio en la conducción de la Unión Industrial, que para la década de 1920 pasó a estar mejor controlada por grandes empresarios industriales.[25] En diversos sectores, la concentración de capital, la fusión de empresas y la formación de acuerdos de reparto del mercado profundizaron la división ya existente entre una miríada de pequeños y medianos talleres y unas pocas grandes empresas. Lo que Stephen Haber ha señalado para el caso de México también refleja rasgos de la industria argentina. También aquí el mercado interno era demasiado pequeño para la escala de las plantas industriales diseñadas en Europa o los Estados Unidos, por lo que el oligopolio y el monopolio se volvieron habituales.[26] Desde el comienzo, ello estimuló el desarrollo de una estractura industrial falta de competitividad, volcada sobre el mercado interno, y fuertemente dependiente de protecciones arancelarias, insumos y tecnología importados. Los elevados niveles salariales del mercado de trabajo argentino acentuaron los problemas de competitividad de la industria, reforzando su orientación hacia el mercado interno.

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, la industria del país no estaba en condiciones de satisfacer sus propias necesidades de capital, combustibles e insumos. Al igual que en Brasil, y a diferencia de lo que sucedería durante los años treinta, la industria de transformación aún no había desarrollado la capacidad de resistir a un colapso del mercado mundial, por lo que la guerra produjo una fuerte crisis, y manifestó su dependencia de los bienes importados.[27] Tras el armisticio, la industria se recuperó a gran velocidad. Al igual que en décadas

anteriores, el aumento de la demanda agregada que resultaba de la expansión agraria y el retorno de la inversión externa impulsaron el crecimiento de la producción manufacturera. Parte de esta expansión todavía se concentraba en sectores livianos y tradicionales, tal como la elaboración de comestibles y bebidas, continuando así el patrón establecido en décadas anteriores. Pero también apareció una industria más moderna, dedicada a la producción de bienes de mayor complejidad. Un importante número de empresas extranjeras, muchas de ellas de origen estadounidense, establecieron subsidiarias en la Argentina. Otras firmas extranjeras se asociaron con empresarios nativos, a los que proveyeron de apoyo financiero y técnico. El alza de la tarifa aduanera para bienes terminados de 1923, una tasa de cambio favorable, y, por sobre todas las cosas, un mercado interno que, a pesar de sus limitaciones, era por lejos el más solvente de toda América Latina, estimularon estas inversiones. Se ha estimado que las importaciones de maquinaria industrial durante la década de 1920 fueron las más altas para un período decenal hasta la década de 1970.[28] A diferencia de lo sucedido en períodos anteriores, cuando el grueso de la inversión industrial se había concentrado en el sector de alimentación, luego de la guerra la inversión se dirigió predominantemente hacia sectores más modernos como la química, los bienes de consumo durables, la electricidad y la metalurgia.[29] En síntesis, en la década de 1920, la Argentina asistió a una nueva etapa de expansión manufacturera, caracterizada por una mayor integración con el capital industrial internacional, que dio lugar a la emergencia de una estructura industrial más compleja. Es probable que, en esta nueva etapa, la reinversión de las ganancias ocupase un papel más importante en la expansión y diversificación del capital industrial, ya sea a través de la creación de empresas subsidiarias o mediante la inversión en otros sectores de la industria de transformación.

Durante la década de 1920, la inversión de origen estadounidense prácticamente duplicó la proveniente del Reino Unido. Los capitalistas americanos aumentaron su presencia en la Argentina, en especial como prestamistas del gobierno, pero también como inversores en la industria. Esta potencia en ascenso proveyó el capital y los conocimientos necesarios para el desarrollo de la actividad manufacturera en el país. Los avances en la sustitución de importaciones fueron modestos, por lo que el sector manufacturero mantuvo una fuerte dependencia de capital, insumos, equipo y combustibles importados. Como ya hemos señalado, en esos años el intercambio comercial con la Unión se

mantuvo muy desequilibrado, puesto que las exportaciones argentinas se orientaban hacia Europa. Durante el período de recuperación económica de 1922-1928, cuando la inversión estadounidense fluía a buen ritmo y compensaba el desequilibrio comercial, los industriales argentinos permanecieron poco menos que indiferentes frente al problema. Para fines de la década, el desequilibrio de la relación bilateral comenzó a preocuparlos más seriamente. La nueva actitud de los terratenientes frente a los dilemas del comercio internacional, evidente desde 1928, los sacó de su letargo. En ese momento, tras el fracaso de sus intentos por asegurar el acceso al mercado estadounidense para las exportaciones rurales pampeanas, los terratenientes comenzaban a presionar en favor del intercambio angloargentino. Esta campaña era acompañada por presiones británicas que iban en el mismo sentido, que tenían por fin dificultar la penetración estadounidense en el mercado argentino. Frente a este panorama, los empresarios industriales, en especial aquellos vinculados con capital extranjero no británico, con toda razón temieron que una alianza tan poderosa podía decidir al gobierno a darle tratamiento preferencial a las importaciones provenientes del Reino Unido, perjudicando no sólo a los inversores americanos, sino también a toda la actividad manufactura doméstica que dependía de su relación con el capital no británico.

Desde la aparición de la industria moderna, hacia la década de 1880, los empresarios manufactureros habían optado por no desafiar al sector rural. Bien conscientes de que el desarrollo de la industria estaba estrechamente ligado a la suerte de la economía de exportación, siempre buscaron un compromiso con el empresariado que representaba al sector más poderoso y dinámico del país. Es cierto que cuando la Primera Guerra Mundial reveló la profunda dependencia argentina de los servicios de transporte, el capital, los mercados y los insumos extranjeros, se alzaron muchas voces que insistieron en la necesidad de poner en marcha un programa proteccionista que contribuyese a reducir la vulnerabilidad de la economía nacional. Pero poco se hizo en ese sentido en la década de 1920, en gran medida porque la recuperación de la posguerra le quitó incentivos y urgencia a este programa. La gran expansión granífera de esa década impulsó el crecimiento de toda la economía, y creó nuevas oportunidades para los negocios también en el sector industrial. Por este motivo, las recetas económicas de los defensores del proteccionismo, como Alejandro Bunge y sus colegas que se nucleaban en torno a la *Revista de Economía Argentina,* permanecieron poco menos que ignoradas. Durante gran parte del período de administración radical, los empresarios rurales y los fabricantes no encontraron mayores motivos para disen-

tir, y más bien se unieron para oponerse al incremento del gasto público y a la posición proobrera del gobierno. Para fines de la década de 1920, sin embargo, la unidad de las clases empresarias, que el gobierno radical había involuntariamente contribuido a aumentar, se fracturó. Desde los sectores industriales, se lanzaron señales que indicaban que la prolongada alianza implícita de este grupo con los terratenientes había llegado a su fin. Temerosos de que el bilateralismo le diese un trato preferencial a las importaciones procedentes de Gran Bretaña, dificultando así el acceso de la industria a otras fuentes de capital, tecnología e insumos, los voceros industriales se embarcaron en una fuerte campaña de denuncia de los grandes propietarios y de la Sociedad Rural, los artífices locales de esta política.

A lo largo de la primera mitad de la década de 1920, la Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción (CACIP), una organización gremial dominada por grandes financistas, exportadores de productos agrarios y empresas de capital extranjero, se había manifestado muy preocupada por el aumento de los impuestos. Luego de 1927, CACIP le dio preeminencia a otros temas, y comenzó a insistir en que debía prestarse mayor atención a la industria y al mercado interno.[30] En un congreso realizado en 1928, CACIP afirmó que las tarifas arancelarias debían elevarse con el objeto de proteger la industria doméstica.[31] En esos años también se interesaron en propagar las ideas del economista rumano Mihail Manoilescu, uno de los primeros promotores del desarrollo centrado en el mercado interno.[32] La Unión Industrial Argentina, la principal representante del sector industrial, expresó más abiertamente su oposición a las propuestas impulsadas por los exportadores rurales. Durante los años finales de la década de 1920, y por casi un lustro, la Unión Industrial arremetió con dureza contra el bilateralismo, argumentando que este era dañino para los intereses nacionales, y presionó a las autoridades para impedir cualquier movimiento en esa dirección.[33] Luis Colombo, un enérgico empresario y líder gremial que presidió la Unión Industrial por más de veinte años (1925-1946), se convirtió en el principal acusador de la política bilateral. En marzo de 1929, Colombo afirmaba en un artículo titulado precisamente "Comprar a quien nos compra", dado a conocer en las páginas de *La Nación,* que un lazo económico más estrecho con Gran Bretaña como el reclamado por los terratenientes resultaría

> malo, malísimo y contraproducente [...] redundaría en perjuicio para nuestra economía, haciéndonos pagar más caro artícu-

> los que podríamos obtener más barato [...] entregaría nuestra industria a una competencia que la arruinaría [...] causaría desocupación [...] destruidas y estancadas las industrias y entregado el país al cultivo y al ganado, será país pobre, atrasado y sin horizontes.[34]

La Unión Industrial presidida por Colombo compartía las posiciones de la Sociedad Rural a la hora de denunciar al gobierno radical por sus políticas laborales y fiscales. En otros terrenos, sus críticas a esta institución y a los grandes terratenientes eran frontales. El líder industrial retrataba a los grandes propietarios recurriendo a temas y motivos que, como hemos visto más arriba, para entonces habían ganado amplia dilusión. En otro artículo de 1929, Colombo denunciaba a los terratenientes, ausentistas e improductivos, explotadores de los trabajadores y derrochadores de riqueza, como a los grandes responsables del atraso del país. Una pesada carga sobre las espaldas del trabajador antes que una fuerza promotora del progreso, los terratenientes eran también un obstáculo para la industrialización. "Nuestra campaña es en gran parte el latifundio, el feudo", sostenía Colombo. La "aristocracia" ganadera, continuaba, "no se interesa por el progreso del país sino por el propio bienestar a base de rentas que ha de gastar en Europa". De acuerdo con el presidente de la Unión Industrial, los terratenientes eran

> los que por esa mágica valorización producida por el esfuerzo de los laboriosos encontraron acrecidas sus fortunas sin haber contribuido en nada al progreso del país [...] los que protestan contra la industrialización son los mismos que hoy sólo se preocupan del novillo gordo y del precio caro, aun cuando sucumban todos los modestos obreros de la grandeza argentina. Los que así piensan son los eternos ególatras, son los afortunados herederos de una raza más sencilla cuyos ejemplos se han perdido en el sibaritismo o en las mansiones de tantos presuntos descendientes de sangre azul.[35]

Para fines de la década de 1920, entonces, los empresarios industriales se habían unido a los chacareros y a amplios sectores de la opinión urbana en la condena de la figura del gran propietario rural. Los aspectos negativos del estereotipo del terrateniente, que durante el apogeo de la economía exportadora habían permanecido apenas como elementos

residuales, ahora surgían con fuerza y se constituían en dominantes, dando así lugar a la emergencia de una poderosa impugnación del papel desempeñado por los grandes propietarios en la vida del país. Para entonces, la visión que afirmaba que los intereses de los señores de la pampa eran compatibles con los del resto de la sociedad ya no resultaba creíble. Casi sin excepción, los grandes propietarios eran descriptos como figuras egoístas, como verdaderos anacronismos cuyo único interés radicaba en incrementar el tamaño de su fortuna, y que se mostraban indiferentes al interés nacional o al bienestar de las mayorías.

Es comprensible que en un clima hostil como el que entonces prevalecía, muchos grandes propietarios optasen por no dar mayor publicidad a sus reflexiones sobre este y otros temas de relevancia pública. Sin embargo, diversos indicios nos recuerdan que muchos de ellos estaban al tanto de que su prestigio se encontraba en un punto muy bajo. Sus reacciones fueron, en algunos casos, indirectas. Entre los escritores de clase alta, este período revela un claro cambio de estilo a la hora de reflexionar sobre el lugar de los propietarios en la sociedad rural, que sugiere su incomodidad frente a ese presente. Los relatos naturalistas de la vida pueblerina y rural escritos por Jorge Lavalle Cobo a comienzos de siglo no hacían esfuerzo alguno por idealizar las relaciones entre los terratenientes y sus inferiores sociales. Como lo sugieren sus tétricas narraciones, este gran propietario rural nunca mostró mayor afecto por la vida de la campaña. Sin embargo, para Lavalle Cobo era claro que la sociedad rural no demostraba animosidad hacia los grandes propietarios. Una vez iniciada la era del conflicto social, los escritores provenientes de la elite terrateniente adoptaron un enfoque bien distinto que, a través de la idealización de algunos rasgos de la sociedad rural, sugería su creciente incomodidad. Desde los años veinte, por ejemplo, los terratenientes optaron por concebir a la estancia como un espacio de armoniosa modernidad o, en su defecto, se propusieron retratar al mundo rural y a los hombres que lo habitaban como encarnaciones de virtudes y estilos de vida que para entonces ya se habían extinguido.

Enrique Larreta ofrece un ejemplo del primer enfoque mencionado. En su juventud, este hombre de letras había simpatizado con el radicalismo. Gracias a su prestigio literario y sus conexiones, Larreta progresó en la carrera diplomática, y para 1910 lo encontramos al frente de la preciada embajada en París. Este profundo admirador de la cultura española se había casado con una de las hijas de Nicolás Anchorena, uno de los mayores propietarios de la segunda mitad del siglo XIX. Su inclusión

en una de las ramas más ricas del clan Anchorena le permitió llevar una vida fastuosa. De ella da cuenta la gran residencia que mandó construir en Belgrano, entonces un suburbio de Buenos Aires, en la actualidad convertida en museo. Más llamativa fue la mansión que hizo erigir en la década de 1920 en los campos de Acelain (Tandil), considerada a veces como "la más deliberadamente palaciega de nuestras estancias".[36] Se ha recordado justamente que en *Zogoibi,* su novela rural escrita en 1926, Larreta describe a la estancia ganadera "con ojos de propietario rico, de aristócrata hacendado".[37] Si bien el retrato que de ella nos ofrece destaca el sentimiento de profunda identificación que por generaciones ha unido al hacendado con la tierra, también celebra la modernidad de la estancia como empresa. En *Zogoibi,* Larreta describe a la estancia a la vez como una lujosa residencia y como una empresa moderna y eficiente, donde todo recuerdo del pasado criollo se desvanece. Del mismo modo, también ahorra referencias al mundo del trabajo rural, y en particular a los agricultores.

Ricardo Güiraldes también se propuso ofrecer una imagen idílica de las relaciones sociales en la campaña. Este gran propietario tenía un conocimiento muy acabado de la vida rural, que había recibido desde su infancia, transcurrida en gran parte en la estancia familiar. La vinculación de los Güiraldes con la tierra se remontaba al menos a dos generaciones atrás. Sus ancestros habían sido miembros de la Sociedad Rural desde la década de 1860, y dos de ellos habían presidido esta institución. La intensidad de su relación con el mundo rural adquirió forma literaria en su *Don Segundo Sombra,* publicado en 1926, que fue ampliamente reconocido como una de las obras mayores de la literatura criollista. La escritura de *Don Segundo Sombra* revela, sin embargo, que Güiraldes se sentía a disgusto en su propio tiempo. De hecho, con el fin de presentar una imagen armónica del mundo rural, Güiraldes se vio obligado a situar su relato en un tiempo algo difuso, pero que correspondía mejor a la década de 1890 –cuando la agricultura todavía no había aparecido en el escenario pampeano– que a la de 1920, marcada por la incómoda presencia de la conflictiva relación entre arrendatarios y propietarios. Estos recursos no pasaron inadvertidos, como tampoco el hecho de que el mundo de concordia que la novela presentaba era poco verosímil. Ramón Doll advirtió con perspicacia que Don Segundo, el resero que hace las veces de héroe en la novela de Güiraldes, ejemplificaba virtudes de los trabajadores, tales como la lealtad y la subordinación, que nunca habían existido o que en todo caso habían desaparecido tiempo atrás. "La exaltación sincera o ficticia de las costumbres tradicionales, por la

gente rica", señalaba Doll, era una respuesta a "cierta aprensión o irritación contra el trabajador actual".[38] Tiempo más tarde, Jorge Luis Borges señaló que en *Don Segundo Sombra* las referencias a los chacareros estaban notoriamente ausentes. Para Borges, este anacronismo era deliberado: "Ya la chacra y el gringo están ahí, pero Güiraldes los ignora".[39]

Además de la eliminación ficcional de lo que resultaba perturbador o indeseable, había también formas más directas de admitir que los tiempos habían cambiado. En 1934 salió a la venta un lujoso libro, titulado *Las grandes estancias argentinas*. Se trataba de uno de los primeros ejemplos de un género que se continúa hasta el presente, y que describe y rinde tributo a las estancias más elegantes de la pampa. *Las grandes estancias argentinas* se proponía captar el encanto y el esplendor de las grandes estancias que los señores de la tierra habían erigido como prueba de sus propios triunfos económicos y sociales (significativamente, casi todas ellas construidas antes de la Primera Guerra Mundial). El libro tenía una introducción escrita por Carlos Alberto Pueyrredón, un estanciero que pertenecía a una de las principales familias terratenientes del país. Su padre, uno de los grandes líderes ruralistas del cambio de siglo, había presidido la Sociedad Rural en la década de 1890. El propio Carlos Alberto había ocupado un sillón en la comisión directiva de esa institución a fines de la década de 1920, y a lo largo del período de entreguerras también actuó en el conservadurismo. Las palabras con las que Pueyrredón introducía a sus lectores al mundo de la gran estancia daban por sentado que los grandes terratenientes ocupaban el lugar que les estaba reservado a los que coronaban la pirámide social, y también que la posesión de una gran estancia ofrecía la prueba más palpable de que un individuo gozaba de prestigio y posición. Sin embargo, de su escritura había desaparecido todo rastro de la confianza y el orgullo algo insolente con los que, algunas décadas antes, los señores de la pampa se referían a su lugar en la sociedad argentina. Para ellos, se lamentaba este hacendado, el mundo había cambiado de modo radical, y todo lo que un estanciero podía hacer era "soporta[r] estoicamente" la nueva situación. Ahora, los dueños del suelo se habían convertido en una elite asediada. El estanciero, afirmaba Pueyrredón,

> no es político, más aun, es víctima de los políticos. Su influencia es nula, sólo cuenta para pagar los vidrios rotos. Cualquier circunstancia es propicia para aumentarle los impuestos [...] sus productos dependen de cuánto quieren pagarle, dos grupos de comerciantes, sus ganados, y tres firmas poderosas sus cereales

> [...] No solamente sufre en su bolsillo, también se le ataca en su moral; hoy está de moda llamarle "latifundista"; parecería que fuera delito tener estancia grande [...] la cruzada contra el latifundio está en auge, hay que poblar, se repite, y se presentan y sancionan proyectos de ley para poblar lo que está poblado.[40]

RESPUESTAS A LA GRAN DEPRESIÓN: BILATERALISMO, CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE UNA ELITE EMPRESARIAL MÁS UNIFICADA

Aunque extremas, las palabras de Pueyrredón dan cuenta del clima del momento, así como del malestar que embargaba a muchos propietarios. Durante la década de 1930, una y otra vez se afirmó que la historia del capitalismo en la pampa estaba lejos de ser un relato triunfal, y que sus muchas limitaciones pesaban duramente sobre las clases subalternas. Al mismo tiempo, sin embargo, en esos años se hizo evidente que los terratenientes no cederían posiciones ni privilegios con facilidad. Para ellos, la Gran Depresión no sólo trajo malas nuevas. Si bien los obligó a soportar inéditas penurias económicas, la crisis creó condiciones que hicieron posible la aparición de un gobierno más sensible al interés terrateniente; al mismo tiempo, también permitió la reconstrucción de su alianza con el empresariado industrial, que en esos años se hizo más fuerte que nunca.

Cuando la crisis mundial se desencadenó sobre la Argentina, la Depresión pareció similar a otras desgracias anteriores. Para proteger las reservas, en 1929 el gobierno decretó la salida del sistema de patrón oro y la suspensión de la convertibilidad. Poco o nada podía hacerse para impedir la caída de los precios de la carne o los granos o para vivificar el ingreso de capitales, que se había detenido en 1928, y rápidamente invertido su signo. Tampoco podía hacerse mucho para frenar la baja de los ingresos fiscales. Sin embargo, la elite socioeconómica consideró que la falta de firmeza del presidente Yrigoyen para bajar el gasto público era poco menos que intolerable. Para entonces, también, la situación política se desestabilizaba. La confianza que inicialmente gran parte de las clases media y alta habían depositado en el sistema democrático había sido erosionada por cerca de una década y media de gobierno radical. La gran victoria electoral de Yrigoyen en las elecciones presidenciales de 1928, que lo habían devuelto a la presidencia luego del interregno

de Alvear, contribuyó decisivamente a acentuar la desconfianza de estos grupos hacia el gobierno. La depresión económica amplificó este sentimiento de malestar, que se expresó en las elecciones de marzo de 1930, cuando el partido gobernante sufrió una humillante derrota en la ciudad de Buenos Aires a manos del Partido Socialista Independiente (un desprendimiento del Partido Socialista). En la provincia de Buenos Aires, la desafección popular con el gobierno radical también se incrementó, y allí los conservadores recuperaron parte del terreno que habían perdido en años anteriores.[41] En agosto de 1930, en la inauguración de la exposición de Palermo de la Sociedad Rural, el presidente Yrigoyen y su ministro de Agricultura fueron abucheados y silbados. Un mes más tarde, el general José Uriburu se alzó en armas. Uriburu encabezó un movimiento pobre y desorganizado, que triunfó sólo gracias al activo sustento que recibió entre la clase media porteña, que se lanzó a la calle para vivar a las tropas y reclamar el alejamiento del presidente. Gracias a este apoyo, Uriburu se instaló en la casa de gobierno. La caída de Yrigoyen puso fin a sesenta años de gobierno constitucional.

Las elites argentinas no habían opuesto resistencia a la llegada de la democracia. La movilización desatada en los años de gobierno radical modificó este panorama, por lo que, conforme pasaba el tiempo, muchos adoptaron una actitud más hostil hacia el gobierno popular. Las clases propietarias reprobaban al gobierno radical, al que calificaban de populista o más llanamente de demagógico. Sin embargo, la alternativa autoritaria que proponía Uriburu tampoco contaba con muchas simpatías en este grupo, ni en ninguno otro. En general, las elites parecen haberse mostrado favorables al regreso a un régimen constitucional expurgado de lo que veían como los vicios de la democracia popular. A diferencia de Italia, donde los terratenientes que se sentían amenazados por la movilización de izquierda y campesina no sólo festejaron, sino que también favorecieron la llegada de los fascistas al gobierno, en la Argentina la denuncia de la gran propiedad no dio lugar a un desafío social de envergadura. El golpe del 6 de septiembre de 1930 no era una respuesta a la agitación del mundo del trabajo, urbano o rural, que se mantuvo relativamente pasivo en la segunda mitad de la década, sino a la supuesta demagogia e incompetencia de los gobernantes radicales. Es por este motivo que el proyecto autoritario y antiliberal que impulsaba Uriburu encontró una fría recepción entre las clases medias y propietarias. A poco andar, ello lo obligó a abandonar su programa, y a aceptar, muy a su pesar, la restauración del orden constitucional. Sin embargo, para 1931 ya se había hecho claro que el Partido Radical seguía siendo

la fuerza política mayoritaria, y que estaba en condiciones de volver a triunfar en comicios libres. Por este motivo, el gobierno, entones bajo la influencia del general Agustín P. Justo, preparó el terreno para una elección que Yrigoyen y sus seguidores no pudiesen ganar.

Cuando a Marcelo T. de Alvear, el candidato radical, le fue impedido encabezar la fórmula presidencial, su partido decidió retirarse de la contienda. Gracias a la abstención radical, las elecciones fueron ganadas fácilmente por el general Justo y Julio A. Roca (el hijo del ex presidente Roca), que fueron nominados por la Concordancia, una alianza de conservadores, radicales antipersonalistas y los muy moderados socialistas independientes que habían abandonado el Partido Socialista en la década anterior. La Concordancia era, básicamente, un frente de las fuerzas de centro y derecha que habían sido obligadas a vegetar en la oposición en los largos años de gobierno radical. Esta alianza se constituyó en el partido de gobierno entre 1932 y 1943. Para permanecer en el gobierno, la Concordancia recurrió al fraude electoral en repetidas oportunidades, en especial en la provincia de Buenos Aires. El fraude, a veces abiertamente asumido como una necesidad patriótica para mantener a los radicales fuera del poder, permitió que la Concordancia disfrutara de más de una década en el poder. La falsificación de la voluntad popular terminó por erosionar la legitimidad del gobierno que la prohijaba, como también del orden político que la toleraba, afectando a todas las fuerzas partidarias, incluso a las de oposición.

El gobierno de Uriburu no había hecho nada demasiado original para enfrentar la Gran Depresión. Ignorante de la verdadera hondura y naturaleza de la crisis, el gobierno reaccionó poniendo en práctica una serie de medidas ortodoxas, prescriptas por la experiencia de crisis anteriores. Para equilibrar el presupuesto, redujo los salarios del sector público y elevó los aranceles aduaneros en un 10%. Sin embargo, el volumen y los precios de las importaciones se contrajeron más lentamente que el volumen y los precios de los productos exportados, por lo que una fuerte salida de metálico dejó al país falto de reservas. Para 1932, el valor de las exportaciones se había contraído dos tercios, mientras que el de las importaciones apenas bajó un tercio. La necesidad de restringir el ingreso de productos importados y la salida de metálico era especialmente seria, pues la crisis había cerrado el mercado de capitales, haciendo imposible el acceso al crédito externo para paliar los problemas de la balanza comercial. El servicio de la deuda, que el gobierno estaba firmemente dispuesto a honrar, complicaba aún más el panorama, puesto que pesaba cada vez más sobre unos ingresos fiscales muy disminuidos. Por este mo-

tivo, a fines de 1931 las autoridades decidieron intervenir en el mercado de cambios. Con el fin de reducir la demanda de moneda extranjera, crearon un sistema de permisos de importación destinado a limitar las importaciones y contener la salida de divisas.[42]

Las esperanzas de retornar a la normalidad se disiparon en 1932, cuando llegaron a Buenos Aires noticias de lo que sucedía en la conferencia celebrada en Ottawa. La división internacional del trabajo que tomaba la forma de un mercado mundial muy abierto a la circulación de bienes y capital, en el que la Argentina estaba tan bien integrada, sufrió un severo golpe cuando los británicos y sus dependencias de ultramar dieron vida a un sistema de comercio dentro del área de la libra. Este acuerdo le aseguraba a los miembros del Commonwealth que competían con la Argentina por una cuota del mercado británico para sus productos primarios, a cambio de un trato preferencial para las exportaciones procedentes del Reino Unido. El encierro del comercio británico en el área de la libra súbitamente volvió realidad los temores que los terratenientes habían abrigado desde fines de la década anterior respecto de la pérdida de ese mercado insular. Apenas conocido lo resuelto en Ottawa, la Sociedad Rural urgió al gobierno a actuar con energía y prontitud para concertar un acuerdo comercial bilateral con las autoridades británicas. "La crema de la aristocracia territorial argentina", informaba una publicación de la comunidad de negocios británica en el país, había dirigido una carta el presidente Justo afirmando que "este desastre con el que nos enfrentamos debe ser contemplado con calma, haciéndose esfuerzos para atenuar o anular sus efectos, ofreciendo a Gran Bretaña todo lo que sea necesario para evitar los daños que pueden surgir de la Conferencia de Ottawa".[43]

El gobierno de Justo, que había asumido en 1932, hizo de la salvación de la ganadería de exportación uno de sus objetivos prioritarios. Preocupado por las consecuencias negativas que inevitablemente surgirían de la pérdida del principal mercado de carnes, y también urgido a actuar por las presiones que recibía de los ganaderos, el gobierno argentino envió una misión al Reino Unido presidida por Roca. El vicepresidente en ejercicio firmó en mayo de 1933 el Acuerdo de Londres, también conocido como Pacto Roca-Runciman. El tratado aseguraba el mantenimiento de la participación argentina en el mercado de carnes británico en el nivel alcanzado en 1932, y también comprometía a los británicos a no conceder subsidios a los productores agrícolas del Commonwealth. Esto dio algo de respiro a los angustiados ganaderos de la pampa, y no sólo a los más importantes. Ciertamente, el entusiasmo que estos expresaron una

vez que la noticia llegó a Buenos Aires habla de la inquietud que los dominaba. Si bien reducida (dado que en 1932 las exportaciones argentinas se habían contraído respecto de las de fines de la década anterior), la cuota asegurada por el tratado garantizaba que las exportaciones no seguirían cayendo, por lo que esta fue ampliamente percibida como el piso a partir del cual podía comenzar a recuperarse la posición en el mercado británico. Con el paso del tiempo, empero, las esperanzas depositadas en la expansión de ese mercado desaparecieron, y se hizo evidente que no todos los ganaderos podrían beneficiarse con un volumen de exportación tan limitado. Como las propias autoridades británicas advertían, una cuota que estaba muy por debajo de la oferta potencial de ganado beneficiaba a los grandes ganaderos que eran a la vez los mayores y más confiables proveedores de las empresas frigoríficas.[44] Por este motivo, el tratado angloargentino sólo pudo acallar por un tiempo el resentimiento de los pequeños y medianos estancieros hacia los grandes ganaderos que había nacido durante la crisis ganadera de comienzos de la década de 1920 y que se había incrementado durante la Depresión.

Los industriales recibieron con gran disgusto la noticia de la firma del pacto. El acuerdo permitía que Gran Bretaña recuperase parte del terreno que había perdido luego de la Primera Guerra, y dio un golpe al comercio con el resto de Europa y con los Estados Unidos. A cambio de la cuota de carne, la Argentina se comprometía a utilizar todas las libras obtenidas de ventas a Gran Bretaña para pagarle importaciones y servicios financieros. Asimismo, se comprometía a no incrementar las tarifas aduaneras, y a rebajar los derechos a una gran cantidad de bienes manufacturados británicos.[45] Estas concesiones eran especialmente resistidas por los industriales argentinos, en particular por aquellos vinculados a capital extranjero de origen no británico, o que dependían de insumos importados.

Muchas veces se ha perdido de vista el hecho de que la negociación del acuerdo bilateral no se cerró con la firma del Pacto de Londres, que para alcanzar plena validez requería, además de la ratificación del Congreso argentino, la firma de un acuerdo complementario, cuyo capítulo más importante se refería a una convención sobre cuestiones aduaneras y arancelarias. Esta segunda parte de la negociación, más burocrática y menos visible que la llevada a cabo en Londres, pero no por ello menos importante, tuvo lugar en Buenos Aires a lo largo del invierno de 1933. Los industriales no pudieron hacer demasiado para incidir sobre las negociaciones que desembocaron en la firma del Pacto de Londres, pero la situación cambió cuando el escenario se trasladó a Buenos Aires.

Poco antes de que los equipos de especialistas británicos y argentinos se reunieran para discutir el acuerdo complementario, la Unión Industrial convocó a un gran acto de protesta en el Luna Park, destinado a colocar a los negociadores bajo presión.

Esta reunión fue el acto público más importante jamás realizado por los industriales argentinos, descripto incluso por la prensa probritánica como "un notable éxito". Contó con la asistencia de una muchedumbre estimada en 70 000 almas, que se apiñó dentro del estadio y se derramó por las calles adyacentes. La asistencia estaba compuesta en su inmensa mayoría por obreras y obreros que, habiendo dejado sus labores, habían marchado hacia el estadio en vehículos fletados por sus capataces y patrones, que también encabezaron las columnas de trabajadores.[46] Durante la reunión, el presidente de la Unión Industrial se opuso a las concesiones a Gran Bretaña, argumentado que la industria estaba en condiciones de sacar al país de la depresión. Alejandro Bunge, entonces uno de los más prestigiosos economistas argentinos, y un industrialista decidido (además de un empresario vinculado al capital estadounidense), denunció la "perjudicial supervivencia de la mentalidad pastoril". La reunión también contó con oradores obreros. Bailando al son del ritmo impuesto por sus patrones, estos se dirigieron a la audiencia para destacar que la prosperidad de la industria también beneficiaba a la fuerza de trabajo.[47] "El poder político que es ahora ejercido a través de los canales de la 'Industria Argentina' no es algo que pueda despreciarse", afirmaron los redactores de la *Review of the River Plate,* que habían quedado impresionados por el espectáculo.[48]

El acto del Luna Park demostró que los industriales poseían capacidad para organizarse y para movilizar a su fuerza de trabajo. La importancia de la manifestación no pasó inadvertida para el gobierno, tan ansioso de ganarse nuevos aliados como de evitar aumentar la lista de sus críticos. Los reclamos de los industriales, por otra parte, difícilmente podían ser ignorados por completo. Las autoridades estaban preocupadas por la baja de la actividad económica doméstica y por las negativas consecuencias sociales que resultaban de esa caída.[49] Si bien no poseemos información precisa al respecto, se ha estimado que la Depresión provocó una baja sin precedentes del nivel de empleo. Algunos estudiosos afirman que –en el peor momento de la crisis– la tasa de desempleo alcanzó a un cuarto de la fuerza laboral, lo que constituye una cifra notablemente alta para un mercado de trabajo que hasta unos pocos años antes seguía reclamando brazos del extranjero.[50] Una severa y prolongada depresión en el sector industrial, se temía, podría provocar descontento, y generar

presiones que, de una u otra manera, alcanzarían expresión política. Ello constituía un grave peligro para cualquier gobierno, más aún para uno cuya legitimidad era precaria. Por este motivo, el ministro de Relaciones Exteriores inauguró las sesiones de trabajo de la comisión tarifaria, previniendo que esta debía conducirse con "la más exquisita prudencia", puesto que los intereses industriales que podían ser afectados por su acción eran grandes.[51] Esta era también la posición de Luis Duhau, el ministro de Agricultura, Comercio e Industria, que, se quejaba la *Review of the River Plate*, "parece no advertir cuáles son los más importantes intereses que tiene bajo su cuidado, la agricultura, la ganadería y el comercio exterior, subordinándolos a algunos intereses manufactureros".[52]

Los industriales siguieron el trabajo de la comisión tarifaria con atención. Cuando en septiembre de 1933, tras varios meses de trabajo, esta terminó su cometido, el producto final resultó mejor de lo que esperaban. El alza de tarifas de 1931, a la que los británicos se oponían, no fue eliminada. Además, a fines de 1933, los industriales dieron la bienvenida a una devaluación de la moneda, que volvía más competitiva la producción doméstica frente a la importada. Más en general, para ese momento los fabricantes ya habían advertido que los privilegios acordados a las importaciones provenientes del Reino Unido no iban a provocar la bancarrota de la industria doméstica. A pesar de todas las concesiones a los intereses británicos que el tratado estipulaba, los temores que los industriales abrigaban desde fines de la década de 1920 no se hicieron realidad. Ello se debió a que el establecimiento de una relación más estrecha con la economía británica se dio en un contexto nuevo, que de una u otra forma iba a favorecer al sector industrial doméstico. Lo que modificó sustancialmente la situación fue la incapacidad de la economía británica, en severa crisis, para mantener sus compras en Argentina en los valores previos a la Depresión (y mucho menos para acrecentarlas). En el marco de una relación bilateral como la que tomó cuerpo después del tratado de 1933, ello colocaba un techo infranqueable a las exportaciones británicas al mercado argentino, que además eran menores que las exportaciones argentinas a Gran Bretaña (que comprendían importantes remisiones de capital británico radicado en el país). Como *The Economist* señalaba en 1936, la renuencia del Reino Unido a incrementar sus compras de carne pampeana limitaba la capacidad británica para exportar a la Argentina, por lo que este último país se veía obligado a incentivar la producción doméstica para suplir la contracción de las compras en el exterior.[53]

La Depresión, pues, creó condiciones que hicieron posible el estrechamiento de los lazos bilaterales y la supervivencia de la industria de capital doméstico e internacional radicada en el país, que al poco tiempo comenzó a expandirse, avanzando sobre los vacíos dejados por la retirada de la producción importada, incluso la británica.[54] Es probable que, tras Ottawa, el objetivo inicial de los encargados de la política económica argentina fuese simplemente proteger las exportaciones de ganado. Sin embargo, en poco tiempo cayeron en la cuenta de que la política económica británica se desenvolvía en un nuevo marco de referencia. La declinación económica de este país, acelerada por la Gran Depresión, terminó por fracturar los antiguos lazos de complementariedad entre estas dos economías, obligando a los argentinos a modificar su política económica. A fines de 1933, el gobierno dio a conocer un conjunto de medidas que respondían a este nuevo cuadro. Entre otras cosas, revisó el sistema de control de cambios y lanzó un programa de obra pública (que hacía uso intensivo de trabajo y materias primas nativos).[55]

Acrecentar la importancia de la industria de transformación formó parte de los objetivos de la política económica oficial. Este rumbo no despertó mayor oposición entre los terratenientes, puesto que ello no afectaba sus intereses (y, como veremos más abajo, en más de un caso los favorecía). Como signo inequívoco de este cambio, para 1933 el ministro Luis Duhau había abandonado su antigua confianza en la teoría clásica del comercio internacional, que tan firmemente había suscripto cuando presidía la Sociedad Rural a fines de la década de 1920. Ahora Duhau se había vuelto un propagandista del desarrollo fundado sobre el mercado interno.[56] "La etapa histórica de nuestro prodigioso desarrollo bajo el estímulo directo de la economía europea", sostenía el ministro a fines de 1933,

> ha concluido. Sacado de su rumbo por la guerra, el Viejo Mundo está actuando de una manera muy distinta [...] la idea de suficiencia económica prevalece en todas partes [...] Gran Bretaña no está en condiciones de ofrecer buenas perspectivas para la venta de nuestros productos, y lo mejor que puede ocurrimos es que nuestras exportaciones no se reduzcan sustantivamente [...] el país debe buscar remedio a sus dificultades presentes dentro de sí mismo y haciendo uso de sus propios recursos.[57]

Visiones como la de Duhau no implicaban una revolución en el modo de conducir la economía del país. Tampoco indicaban que el sector exportador hubiera perdido poder (la falta de un sistema de crédito de largo plazo destinado a fomentar el desarrollo industrial sugiere bien los límites del intervencionismo estatal a favor de la industria). Más bien, el incremento de la intervención del estado en la vida económica, en particular a favor de la actividad interna, da cuenta de cómo la Depresión forzó a las autoridades a tomar ciertas medidas de carácter proteccionista que tuvieron importantes consecuencias para recomponer las relaciones entre el estado, los terratenientes y los industriales. La caída del volumen del comercio bilateral angloargentino, y más en general del comercio internacional, generó condiciones propicias para un acercamiento entre empresarios rurales e industriales que, a su vez, hizo posible ampliar las bases de sustentación de la Concordancia.[58] En este contexto, el bilateralismo se volvió aceptable para los industriales manufactureros que tan duramente lo habían criticado por casi un lustro. La clave de tal cambio de actitud residía en la definición de una política que, si bien había sido lanzada en respuesta a la baja del comercio internacional, tenía la virtud de combinar concesiones a los británicos y protección a las exportaciones ganaderas, al mismo tiempo que prestaba apoyo a la industria orientada hacia el mercado interno.

La contracción de la capacidad para exportar y el cierre de los mercados financieros internacionales trajeron como consecuencia el encarecimiento y la reducción de las importaciones de capital, maquinaria e insumos. Por este motivo, la producción industrial sólo podía expandirse incorporando fuerza de trabajo. Esta limitación tuvo un aspecto positivo puesto que, en un contexto de alta desocupación, contribuyó a reducir la tasa de desempleo. Por otra parte, el incremento del volumen de producción no requería de fuertes inversiones, ya que la próspera década de 1920 había contribuido a dejar una planta industrial renovada y más moderna, que podía ponerse a funcionar más a pleno incorporando trabajo. En 1933, la economía pareció mostrar signos de recuperación, y para 1934 se percibía una caída en la tasa de desocupación, resultado en gran parte de la expansión del empleo industrial.[59] También, el flujo de inversión directa extranjera comenzó a renovarse (aunque fluyó a un ritmo menor que en la década anterior), respondiendo, en parte, al alza de los aranceles para bienes terminados y a una tasa de cambio discriminatoria. Las firmas de origen estadounidense (y, en general, no británico) afrontaron dificultades para colocar sus productos manufacturados en la Argentina, y ello las estimuló a saltar las nuevas barreras, profundizando

el proceso de inversión directa iniciado en los años veinte. Se ha estimado que para fines de la década de 1930 más de la mitad del capital invertido en la industria era de origen extranjero.[60] En rigor, lo sucedido en esta década no marca una ruptura abrupta con el pasado, como en algún momento se argumentó. Lo que resulta novedoso del período es que el dinamismo dentro del sector industrial se trasladó a nuevos rubros que sustituían importaciones, tales como el metalúrgico y el textil, que hasta entonces habían permanecido poco desarrollados.[61] Durante la década, se evidenció un avance en la sustitución de importaciones, puesto que estas como parte del consumo industrial total se redujeron del 34 al 22%.[62]

Como resultado de estos avances, la industria ganó en autonomía y se convirtió en el sector más dinámico, desempeñando un papel muy destacado en la recuperación de la Depresión. Mientras el sector agrícola poco menos que se estancó, el industrial creció un 35% entre 1930 y 1939. Durante la década de 1930, la industria creció más rápido que el producto bruto y –más claramente que en cualquier otro país de América Latina– lideró la recuperación de la economía tras la crisis.[63] Para 1939, la manufactura contribuía cerca de un cuarto del producto total, un porcentaje mayor que el del sector agrícola.

Durante la década de 1930, el capital local e internacional se combinaron para dar lugar a la consolidación de un sector industrial más complejo e integrado, que lentamente desplazó al sector rural como el principal motor del capitalismo argentino. De todas maneras, parece fuera de duda que el desarrollo de la industria fue en algunos puntos deficiente. Por ejemplo, los acuerdos bilaterales firmados por la Argentina discriminaban a favor de bienes finales e inversiones de capital provenientes de una economía en declinación como Gran Bretaña, que había perdido el liderazgo tecnológico que alguna vez ostentó, y lo hacían a expensas no sólo de capitales de otro origen, sino también de los consumidores y de la eficiencia de la industria en el largo plazo.[64] Este problema no parece haber quitado el sueño a muchos industriales. Más interesados en sacar ventaja de los nuevos espacios que se le ofrecían en el mercado interno que en asegurar el crecimiento óptimo del sector, desde 1934 juzgaron a la política oficial con abierta simpatía, y no volvieron a manifestar disidencias con los productores ganaderos, o con la política oficial hacia el sector rural. A comienzos de ese año, el presidente de la Unión Industrial afirmaba que "las industrias se desenvuelven con relativa ventaja debido a factores accidentales unos y a disposiciones del actual gobierno que está prestando constante atención al desarrollo y progreso de las industrias, así como también a la producción agropecuaria".[65] El vocero

oficial de los industriales sostenía que todavía restaba mucho por hacer en relación con las tarifas aduaneras y la legislación social aprobada por las anteriores gestiones radicales, pero señalaba confiadamente que "en nuestro país puede existir, entre los intereses agrarios y los intereses industriales, una armonía digna de figurar en el célebre libro de [Frédéric] Bastiat".[66]

Este espíritu fraternal fue compartido por los terratenientes, que repentinamente olvidaron los insultos e improperios que habían recibido poco tiempo atrás. Ello se advierte, por ejemplo, en el banquete ofrecido para honrar la labor de fomento industrial de Luis Colombo, celebrado a comienzos de 1934, que contó con la asistencia de conocidos dirigentes ruralistas. En esa ocasión, Adolfo Bioy, Horacio Bruzone, Herbert Gibson, Miguel Martínez de Hoz, José Poggio, Miguel Casares (entonces presidente de la Sociedad Rural), Antonio y Jorge Santamarina, Bartolomé Vasallo, Joaquín de Anchorena y muchos otros estancieros se contaron entre aquellos que aplaudieron a quien hasta 1933 había sido su gran censor dentro de la comunidad empresaria.[67]

Un nuevo contexto económico y políticas favorables a la expansión del sector industrial mitigaron los conflictos entre terratenientes e industriales. Es indudable, empero, que la Concordancia ofreció un trato preferencial a los grupos que se beneficiaban del comercio de carnes con Gran Bretaña.[68] Ello concitó amplias críticas, de las que incluso se hicieron eco algunos medios de prensa que trataban a los grandes ganaderos con respeto y simpatía. *La Prensa,* por ejemplo, se mantuvo a lo largo de la década como un duro crítico de esta política (así como, más en general, del fraude electoral y la intervención del estado en la economía). En 1939 denunciaba que "el régimen de los cambios y de los permisos de importación parece inspirarse en el propósito de [...] que permanezca tranquila la reducida minoría en cuyo beneficio prevalecen las orientaciones de la estrecha política del 'chilled beef'".[69] Además de los acuerdos bilaterales que aseguraban la compra de la carne argentina, otras decisiones también favorecieron a los mayores ganaderos. A fines de 1933 fue creada una organización oficial denominada Junta Nacional de Carnes, que contó con importantes poderes. La entidad, que tenía entre sus objetivos intervenir en el mercado para ayudar a mantener las cotizaciones de la carne, se mantuvo bajo el control de los grandes terratenientes, que dominaron su directorio.[70]

En otras ocasiones, también, el gobierno se alineó con los propietarios rurales, aun si ello le granjeaba la oposición de otros sectores del empresariado. La ley de moratoria hipotecaria de 1933 ofrece un buen

ejemplo. En esos años, alrededor de un tercio de la tierra de la provincia de Buenos Aires se encontraba hipotecada, y la situación en otras provincias no debía ser muy distinta.[71] El endeudamiento hipotecario no era un fenómeno nuevo, pero las dificultades surgidas como consecuencia de la crisis lo volvieron extremadamente peligroso para los dueños del suelo (aunque, es preciso recordar, no sólo para los grandes). La baja de los precios agrícolas y la caída del ingreso en concepto de ganancias y rentas dejó a muchos propietarios con deudas hipotecarias inflexibles, que resultaban cada vez más difíciles de servir. La venta de activos para cancelar las deudas hipotecarias no resultaba una opción atractiva, puesto que los precios de la tierra habían bajado fuertemente.[72] En septiembre de 1933 se afirmaba que "una avalancha de ejecuciones de hipotecas" iba a producirse si el gobierno no tomaba medidas para proteger a los deudores.[73] El gobierno se decidió a intervenir modificando los contratos hipotecarios, y el Congreso sancionó una moratoria hipotecaria de tres años, que luego extendió dos años más. La moratoria canceló los contratos pactados entre las partes y forzó a los acreedores a aceptar una tasa de interés máxima que resultaba más baja que la tasa de mercado. La medida se adoptó a pesar de la fuerte oposición de las instituciones financieras y de parte de la prensa, que argumentaron, no sin razón, que la medida violaba derechos adquiridos.[74] El proyecto fue considerado por *La Nación* como "quizá uno de los más avanzados que se han dado a luz en el país, puesto que inicia la injerencia del Estado en las transacciones privadas del comercio".[75] Aunque no fueron los únicos beneficiados (puesto que también favoreció a todos los propietarios que cargaban con deudas hipotecarias), medidas como esta ayudan a entender por qué los grandes ganaderos se mantuvieron entre los principales aliados de la Concordancia durante todo la década.

El auxilio que los propietarios recibieron del gobierno les ayudó a sobrellevar las duras condiciones que se abatieron sobre el sector como consecuencia de la Gran Depresión. De hecho, la decidida intervención del estado, que durante las décadas del cambio de siglo había sido poco menos que innecesaria, estaba indicando la severidad de los problemas que enfrentaba el sector, cuyos primeros síntomas podían percibirse algunos años antes. Para fines de la década de 1920, ya se advertía una importante caída de la rentabilidad agraria, y las perspectivas del sector estaban lejos de ser brillantes. "La producción ganadera en la Argentina", afirmaba un informe del Banco de Boston dado a conocer en 1928, "ya no es una actividad que asegure altas ganancias a cambio de un mínimo de esfuerzo e inteligencia. La etapa de gran crecimiento ha terminado".

El informe señalaba correctamente que las tierras "se han valorizado", y que "la salida para la producción medida por la capacidad de los mercados de exportación e interno se ha situado en un punto determinado, sin que pueda advertirse un cambio de la situación en el futuro cercano".[76]

Pero fue la Depresión Mundial la que hizo las cosas verdaderamente difíciles para muchos terratenientes. La versión que insiste en que los grandes ganaderos invernadores lograron sobreponerse a esta crisis sin una caída sustancial de sus ingresos gracias a los privilegios que le fueron otorgados con la celebración del tratado bilateral con Gran Bretaña no posee mayor sustento.[77] De acuerdo con una investigación sobre el mercado de la carne, realizada en el marco del Tratado Roca-Runciman, los beneficios de los grandes ganaderos cayeron de un promedio de 9% anual en la segunda mitad de la década de 1920 a menos del 2% entre 1931 y 1934.[78] Las finanzas de un gran ganadero como Mariano C. Unzué confirman este cuadro. San Carlos, una de sus estancias, sufrió pérdidas durante el año 1934, y los años anteriores seguramente estuvieron lejos de ser brillantes.[79] Significativamente, grandes terratenientes como Federico L. Martínez de Hoz, Ezequiel Ramos Mexía, Herbert Gibson y Rufino Luro, que fallecieron entre 1934 y 1935, dejaron situaciones económicas muy precarias. En los cuatro casos, se trata de personas que poseían el grueso de su patrimonio en propiedad rural, y que por su dependencia del ingreso agrario sufrieron la Depresión con dureza. Los herederos de Gibson y Ramos Mexía sólo recibieron deudas y los de Martínez de Hoz, después de saldar compromisos por cerca de $2,5 millones, debieron contentarse con dividir apenas unos $650 000.[80] Rufino Luro, hijo de uno de los hombres más ricos del cambio de siglo, "no dejó a su fallecimiento bien alguno de fortuna [...] puesto que reveses económicos que azotaron a los hacendados hace varios años, lo privaron de todos sus bienes".[81] Rentas y ganancias se recuperaron en la segunda mitad de la década, pero de todas maneras permanecieron en niveles muy inferiores a los previos a la Depresión. La información sobre grandes empresas organizadas como sociedades anónimas, como La Marietta (de los Pereyra y Herrera Vegas), Estancias y Colonias Walker, Pereda Ltda. y Estancias y Colonias Trenel indica que las ganancias se mantuvieron por debajo del 4% a lo largo de los años treinta.[82] Ciertamente, los buenos tiempos para los grandes propietarios, y más en general para el sector rural, habían pasado para no volver.

En un contexto marcado por la contracción de los mercados externos y la caída de los precios de la producción exportable argentina, una baja

tan pronunciada de los beneficios afectó la inversión en el sector rural. En esos años, la inversión en animales de raza se derrumbó. Los precios alcanzados por los reproductores se mantuvieron deprimidos durante toda la década, lo que sugiere tanto el pesimismo como las dificultades que atravesaban los estancieros.[83] Nicolás Repetto, que conocía bien los problemas del sector, y que no puede ser acusado de simpatizar con la causa terrateniente, afirmaba en 1935 que los cabañeros obtenían beneficios muy magros. "Desde el punto de vista de la remuneración pecuniaria, material", admitía el líder socialista, los cabañeros "han trabajado por el arte, aun cuando han beneficiado al país porque han contribuido a mejorar las razas y a dar a nuestros ganados características que los señalan como los mejores del mundo".[84]

La inversión en maquinaria, más importante que la inversión en reproductores, también se redujo. Se ha estimado que las importaciones de maquinaria y equipo cayeron del 4,9 al 1,5% de las importaciones totales entre los períodos 1925-1929 y 1930-1934, y desde entonces permanecieron en niveles modestos.[85] Los grandes propietarios contribuyeron en menor medida a esta caída de la inversión en maquinaria, ya que la producción granífera tenía por protagonistas principales a productores más humildes, y en muchos casos, los terratenientes se limitaban a percibir rentas sobre las tierras que cedían para el cultivo. Aun así, ello afectó su ingreso. En síntesis, con la baja del ingreso rural en los años treinta, el agro pampeano dejó de incorporar capital al mismo ritmo que en el pasado. Ello sin duda contribuyó a darle mayor credibilidad a las denuncias que destacaban el carácter atrasado del sector rural pampeano, y la falta de dinamismo empresarial de los terratenientes, temas que alcanzaron gran eco en esta década.

Considerando el clima de esos años, es comprensible que entonces se verificara una caída en la contribución de los grandes empresarios (así como del resto de los productores) a la inversión en la economía agraria. Ello plantea la pregunta de qué destino le dieron los terratenientes a los beneficios, ciertamente disminuidos, que obtenían en el sector rural. Sin un estudio comprensivo de la cartera de inversiones de los principales propietarios del período, toda respuesta a esta pregunta arriesga ser tentativa. Sin embargo, ciertos indicios sugieren que los beneficios (y a veces también parte del capital) se orientaron cada vez más hacia la economía urbana. En la década de 1930, la crisis del sector rural quitó incentivos a la inversión en tierra, mientras que la economía urbana se volvía más atractiva que en cualquier momento del pasado medio siglo para aquellos terratenientes que veían mermar sus fuentes de ingreso

rural. El ejemplo de las finanzas de Mariano C. Unzué resulta al respecto revelador: la información provista en su juicio sucesorio indica que, en 1934, sus propiedades urbanas (entre las que se contaban varios inquilinatos) rendían rentas cercanas al 10% anual, una cifra que doblaba la que le ofrecían sus arrendamientos rurales.[86]

El caso de su hermano Carlos es igualmente ilustrativo. En las últimas décadas de su vida, Carlos Unzué se dedicó a disfrutar de las rentas generadas por sus propiedades urbanas y rurales. Aunque no conocemos el rendimiento de sus inversiones, sabemos que se vio obligado a desprenderse de bienes para sostener su nivel de gastos. Significativamente, Unzué se aferró a sus rentas urbanas, y a la hora de liquidar activos prefirió vender tierra. Cuando falleció en 1946, "apenas" poseía 9500 hectáreas, un cuarto de lo que su hermano Mariano había dejado en 1935.[87] Las finanzas de Celedonio Pereda muestran una situación más brillante, pues murió próspero y sin deudas, pero a su modo también indican los cambios acontecidos en la década de 1930. Pereda falleció en 1941, dejando un patrimonio de $37 millones, en el que se destacaban sus casi $20 millones invertidos en empresas rurales. Desde fines de la década de 1920, Pereda dejó de comprar propiedad rural, y en cambio invirtió en títulos de renta y depósitos a plazo fijo, así como en propiedades urbanas. Al final de su vida, Pereda poseía títulos y depósitos por el 17% y propiedades urbanas de renta por otro 22% de su patrimonio. Es probable que Pereda haya sorteado mejor la Depresión que otros terratenientes gracias al enorme tamaño de su fortuna, y a una cuidada administración de sus empresas rurales (fue de los primeros en convertirlas en una sociedad anónima bajo control familiar). También parece razonable concluir que su giro hacia la inversión financiera y urbana debe haber incidido favorablemente en sus negocios.

Tanto los hermanos Unzué como Celedonio Pereda habían nacido antes del ascenso de Roca al poder y se desenvolvieron por largas décadas en una Argentina en la que el sector rural ofrecía enormes oportunidades para hacer fortuna. La Gran Depresión los encontró en la última estación de su ciclo vital, y por ello no extraña que sólo reaccionaran ante las nuevas circunstancias que aquella crisis generó poniendo en práctica estrategias conocidas, fundamentalmente defensivas. Otros terratenientes parecen haber tenido conductas más atrevidas. Muchos empresarios rurales se encontraban vinculados a emprendimientos urbanos desde tiempo atrás, pero sus intereses, en general reducidos, solían limitarse al mundo de las profesiones y la renta urbana. Durante la década de 1930, sus negocios urbanos se expandieron y

se volvieron más diversos que en cualquier otro momento de las cinco o seis décadas anteriores.

De forma significativa, el primer rascacielos del país, en su tiempo considerado el edificio de cemento armado más grande del mundo, fue construido con dinero proveniente de la tierra. A comienzos de la década de 1930, Cora Kavanagh, heredera de una rica familia terrateniente, contrató la construcción de un edificio de departamentos, que todavía se erige como uno de los más elegantes y lujosos de Buenos Aires, que pagó con el dinero proveniente de la venta de dos grandes estancias. Una comparación de la *Guía de Sociedades Anónimas* entre los años finales de las décadas de 1920 y de 1930 ofrece testimonios reveladores sobre cómo los mayores propietarios rurales de la Argentina ingresaron en nuevos campos de actividad, como inversionistas o directivos. Durante la década de 1930, los Luro invirtieron en el procesamiento de alimentos, los Herrera Vegas y los Álzaga en la industria editorial y en radiodifusión, y los Pradère en la actividad manufacturera. Los Leloir colocaron dinero en la aviación comercial, la industria textil y la construcción de trenes subterráneos, y los Pereda invirtieron en la industria química. Los Duhau demostraron interés en la industria editorial y en la química, los Martínez de Hoz en la construcción de obra pública, los Estrugamou en construcción y manufactura, los Bosch en la industrial del calzado y la construcción de carreteras. En esta última actividad, fueron acompañados por los Álzaga. Los Pueyrredón, a su vez, invirtieron en construcción, aviación comercial y alimentación. Los Ortiz Basualdo hicieron lo propio en radiodifusión, en la industria cinematográfica y en aeronavegación.[88]

Como se advierte, muchas de las actividades en las que se hizo más visible la presencia de integrantes de las grandes familias terratenientes fueron aquellas que mostraron mayor dinamismo en esos años signados por la crisis del mercado mundial y la expansión de la sustitución de importaciones. Sin duda, el giro hacia la inversión urbana pone de manifiesto la capacidad de los hijos de las familias terratenientes para adaptarse a las nuevas circunstancias impuestas por la Gran Depresión. Pero también sugiere que, para entonces, la producción rural ya no puede considerarse sin más como la principal fuente de ingresos de la elite socioeconómica.

Resulta difícil confirmar esta aseveración mediante un estudio sistemático de los patrimonios de los hombres de negocios del período, pues desde la década de 1940, y sobre todo desde la aparición del peronismo, el aumento de los impuestos sucesorios condujo a la puesta en práctica de distintas estrategias destinadas a eludirlos, que en definitiva tornan

ilusoria la posibilidad de determinar con precisión el monto y las características de una fortuna. Entre ellas se destacan las cesiones en vida y otras formas más o menos legales de defraudar al fisco. El desarrollo de las sociedades anónimas plantea problemas adicionales. De todos modos, la afirmación de que los grandes propietarios ya no coronaban la cúspide de la elite empresarial puede ser corroborada gracias a los resultados de un estudio oficial sobre los mayores contribuyentes de la República en la segunda mitad de la década de 1930 y comienzos de la de 1940, que alcanzó estado público en 1942. Esta trabajo vio la luz gracias a los oficios del propio líder conservador en la Cámara de Diputados, José Heriberto Martínez, por lo que resulta difícil dudar de su veracidad. El estudio en cuestión pone de manifiesto un cambio muy notable en la fuente de ingresos de los individuos más ricos del país. Conviene señalar que sus resultados deben ser interpretados con cuidado, ya que la información suministrada por el organismo recaudador gubernamental sólo hace referencia a la principal fuente de ingresos de las personas físicas y, por otra parte, no ofrece indicaciones sobre el tamaño de los patrimonios.

De todos modos, la evidencia que este estudio ofrece es decisiva. De los cien mayores contribuyentes de la Argentina en 1941, sólo dieciséis obtenían su principal ingreso del sector rural. Los empresarios industriales doblaban esta cifra. Ninguno de los seis mayores contribuyentes extraía su ingreso de la producción o la renta agraria. Empresas textiles y metalúrgicas generaban los principales recursos de los tres mayores contribuyentes, a los que les seguían dos dueños de casinos. Reflejando la complejización y diversificación económica que la Argentina había experimentado en el período de entreguerras, entre los hombres más ricos del país a comienzos de la década de 1940 encontramos cuatro financistas, cinco importadores, cuatro dueños de ingenios azucareros, tres empresarios de la actividad periodística, y también empresarios de la cerveza, de la radiofonía, de la industria cinematográfica, mineros y constructores de caminos.[89] Queda mucho por investigar sobre el origen de estas fortunas mayormente urbanas, y sobre en qué medida la antigua riqueza terrateniente conformaba un grupo significativo dentro de ellas. Pero no parece haber mayores dudas sobre el hecho de que, para fines de la década de 1930, la tierra ya no resultaba la principal fuente de ingresos de la gran burguesía argentina.

Teniendo en cuenta estos datos, se entiende hasta qué punto la Depresión obligó a muchos terratenientes a contraer sus gastos. Ello se advierte, por ejemplo, en el estilo de vida más modesto que a partir de ese momento prevaleció. En la década de 1930 no se registran grandes cons-

trucciones de residencias rurales, ni tampoco urbanas. El palacio edificado por Juan Acevedo e Inés Anchorena, terminado en 1929, fue "uno de los últimos grand hôtel que se construyeron en Buenos Aires".[90] Para entonces, más que construir, las grandes familias terratenientes estaban siendo forzadas (más por razones económicas que por las nuevas pautas culturales que favorecían otras formas del habitar) a desprenderse de sus residencias, que en su mayoría fueron demolidas para construir edificios de departamentos u oficinas, o transformadas en sedes diplomáticas, dependencias gubernamentales, clubes u hoteles. Los Bosch-Alvear fueron de los primeros en desprenderse de su palacio, que en 1929 se convirtió en la residencia oficial del embajador estadounidense. En 1935, dos de los palacios más espléndidos de Buenos Aires, que se enfrentaban sobre la Plaza San Martín, fueron vendidos por sus propietarios: la residencia de los hijos varones de Leonor Castellanos de Anchorena fue comprada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la residencia de la familia Paz fue adquirida por el Círculo Militar. Un año más tarde, los Unzué se desprendieron de su gran quinta sobre la avenida Las Heras, que pasó a alojar a la residencia presidencial. En 1937, el gobierno compró el palacio Errázuriz-Alvear, y lo destinó a sede del Museo de Arte Decorativo. La residencia Ortiz Basualdo, que había hospedado al Príncipe de Gales en su visita al país en 1925, fue comprada por el estado francés para su embajada. Algunos años más tarde, el palacio Atucha fue subdividido en varios departamentos y vendido. Cuando, tras la muerte de Celedonio Pereda, su mansión fue vendida a la embajada brasileña en 1944, pocas eran las grandes casas de Buenos Aires que permanecían en manos de sus dueños (la más importante de todas era quizá la de la familia Álzaga-Unzué, vendida en la década de 1990 a una cadena internacional de grandes hoteles).[91]

A pesar de las dificultades económicas que experimentaron los grandes propietarios, y también del ascenso de una nueva burguesía de origen urbano que por fin podía emular o incluso igualar en riqueza a la elite terrateniente, no es seguro que a los nuevos ricos les resultase sencillo comprar su ingreso a los reductos más exclusivos. Aquellos que lo lograron, lo hicieron adaptándose a una clase alta cuyos patrones de sociabilidad estaban bien definidos y cristalizados. Los emblemas que denotaban pertenencia a la clase propietaria siguieron siendo los mismos que en décadas anteriores. Tras la Depresión, los exponentes de la nueva riqueza no buscaron desafiar sino incorporarse a la clase propietaria tradicional, y para ello se afiliaron a la Sociedad Rural y compraron estancias con grandes jardines y parques. Torcuato Di Tella –un empresario

que se elevó desde la nada, alcanzando a poseer la mayor empresa metalúrgica de América Latina, y que fue también un destacado líder industrial– compró tierra y solicitó su ingreso a la Sociedad Rural y al Jockey Club. Hasta su muerte en 1948, Di Tella solía pasar los fines de semana en su estancia en Navarro.[92] Francisco Suárez, el dueño de una farmacia ubicada en el Barrio Norte, que hizo una fortuna gracias a la fabricación del popular analgésico Geniol, compró una estancia con un extenso parque donde exhibía un "oso polar con su permanente provisión de hielo, la casa de los faisanes y todo cuanto de exótico y refinando pudiera verse por entonces en una estancia argentina".[93] Suárez también desarrolló un marcado interés en la cría de reproductores de raza, y se volvió un activo participante en los certámenes ganaderos. Como se señaló en 1947, estos y otros "industriales de reciente prosperidad" estaban "cerca de eclipsar la opulencia de la aristocracia terrateniente, pero todavía no amenazaban su dominio de la 'alta sociedad'".[94]

Gran parte de estos nuevos ricos seguramente no aspiraba a entrar de lleno en los negocios agrarios, y veía a la estancia no como una fuente de ingresos, sino como una reserva de valor, y como un lugar apto para el recreo y la vida social. Aun así, la nueva riqueza urbana invertida en propiedad rural contribuyó a inhibir la aparición de una cultura industrial en conflicto con la terrateniente. Este proceso tornó menos visible la mutación que estaba afectando a los sectores más poderosos, y en particular la emergencia de grandes fortunas de orígenes no industriales. El predominio cultural de la elite terrateniente se advierte en el hecho de que la mayoría de los analistas de la década de 1930 no advirtió la complejidad que entonces estaba adquiriendo la cúpula de la clase propietaria.

Las principales novedades económicas de la década de 1930 –el bilateralismo, el estancamiento del sector agrario, y el crecimiento industrial– contribuyeron a la emergencia de una clase empresaria más cohesionada, en la que el conflicto urbano-rural no tenía mayor entidad. El término "fuerzas vivas" para referirse a la comunidad empresarial en su conjunto, que se hizo corriente en la segunda parte de esa década, sugiere la concordia entre los empresarios del sector rural y de la economía urbana. Sin embargo, las mismas fuerzas que impulsaron la formación de una clase propietaria más unificada también contribuyeron a aislarla del resto de la sociedad. Bajo el gobierno de la Concordancia, los señores de la pampa no fueron los únicos empresarios descriptos con rasgos negativos. En general, la imagen de todos los grandes capitalistas parece haberse deteriorado, y a muchos de ellos se los acusó de manipular al mercado y a un estado que había expandido su intervención en la economía en

beneficio exclusivo de sus intereses personales. No faltaban motivos para que así fuera. Por ejemplo, los fabricantes juzgaron la organización obrera con abierta sospecha, y la Unión Industrial, junto con el resto de las organizaciones gremiales empresarias, libraron una dura lucha contra todo tipo de legislación laboral que limitara las prerrogativas del capital. Es por ello que figuras como Otto Bemberg, quizás el mayor empresario del país, no debía tener una imagen pública mucho mejor que la de los tan vilipendiados terratenientes.[95] Es razonable que, en una década en la que los salarios declinaron y las oportunidades de ascenso social se volvieron más escasas, los sentimientos populares hacia la elite de la riqueza se hicieran más hostiles.[96] Como advirtió un observador estadounidense en 1942, poseer un gran nombre había pasado a ser una desventaja en la política argentina, algo que en líneas generales continuó, por lo menos, hasta la década de 1990.[97] Los estrechos lazos entre la elite empresarial y un gobierno justamente acusado de ilegitimidad dieron lugar a una creciente hostilidad hacia los ricos.

Luego de 1933, y salvando algunas rencillas menores, la armonía y la colaboración dan cuenta de los rasgos dominantes de la relación entre el gobierno y la comunidad de negocios. Sólo los problemas financieros que el estado debió afrontar como resultado de la caída del comercio internacional al inicio de la Segunda Guerra Mundial generaron fuertes tensiones entre estado y empresarios, puesto que entonces el gobierno buscó compensar la caída de sus ingresos aumentando las cargas fiscales sobre los poderosos. En esa ocasión, representantes de las "fuerzas vivas" reaccionaron conjuntamente, afirmando que la intervención del estado sólo adquiría legitimidad si servía al objetivo de favorecer el proceso de acumulación de capital.[98] No es necesario tomar al pie de la letra la visión algo sustancialista que afirma que los principales capitalistas de la Argentina eran "una elite completamente enajenada de la Nación" para aceptar que el hiato entre la clase propietaria y la sociedad se profundizó en la década de 1930.[99] Ello, sin duda, crearía un contexto que favoreció los profundos cambios políticos acontecidos a mediados de la década de 1940.

UNA CAMPAÑA SILENCIOSA

Mientras la Concordancia se ocupaba de atender con particular cuidado los reclamos de la comunidad empresaria, el apoyo que le prodigaba

a los agricultores era más mezquino. A propuesta de la bancada socialista, el Congreso aprobó en septiembre de 1932 una reforma a la ley de arrendamientos sancionada durante la primera gestión de Yrigoyen. El nuevo instrumento legal establecía un plazo mínimo de vigencia de cinco años para los contratos de arrendamiento, así como indemnización para las mejoras introducidas por los inquilinos en las tierras que arrendaban.[100] Desde el inicio, los terratenientes nunca se mostraron dispuestos a aceptar las obligaciones que les imponía la nueva legislación, y sistemáticamente evadieron sus disposiciones. La Concordancia, por su parte, no hizo nada para garantizar su vigencia. El censo de 1937 reveló que más de la mitad de los chacareros arrendatarios se veía obligada a acordar de palabra los términos de la relación laboral, por lo que no podía reclamar los beneficios que la nueva legislación supuestamente concedía.[101] Como en muchos otros aspectos, estos productores estaban a merced de los dueños del suelo o de sus agentes.

A diferencia de otros grandes exportadores de grano, como Canadá y Australia, el gobierno argentino no destinó mayores recursos para asistir a los productores durante la crisis.[102] Los diversos proyectos destinados a erigir un sistema nacional de elevadores que hubiese contribuido a librar a los agricultores de las garras de los monopolios que dominaban la exportación de granos, largamente debatidos desde la segunda mitad de la década de 1920, no salieron del papel.[103] Ello permitió que el oligopolio de los granos manipulase en su favor todas las debilidades del sistema de comercialización, a punto tal que estas empresas lograron importantes ganancias incluso en los peores años de la Depresión Mundial. Poco se hizo en favor de los agricultores hasta fines de 1933, cuando el gobierno se comprometió a pagar un precio mínimo garantizado para el cereal y el lino, a aplicarse cuando las cotizaciones de estos productos cayesen por debajo de cierto nivel. Esta medida tampoco fue de gran utilidad para los chacareros. Los precios mínimos fueron establecidos a un nivel muy bajo, y en el caso del trigo, pronto superado por la cotización del mercado, que se recuperó como resultado de una fuerte sequía que afectó a los distritos cerealeros de los Estados Unidos y Canadá. En consecuencia, cuando el esquema entró en vigencia le dio ganancias y no pérdidas al gobierno, que pudo vender el cereal que había comprado a los chacareros a precios más altos de los esperados.[104]

Los precios mínimos ayudaron a evitar que cayese el área sembrada. A lo largo de la década, la producción mantuvo su volumen, a pesar de que los precios nunca recuperaron los niveles previos a la Depresión. De hecho, en 1936-1937 la agricultura pampeana registró el mayor vo-

lumen de exportación de toda su historia, que por otra parte no sería superado por más de veinte años. En la década de 1930, la Argentina siguió siendo el segundo exportador mundial de trigo, y producía la mitad del lino exportado. En verdad, estos datos indican que la Concordancia, al igual que sus predecesores radicales, hizo realidad sus principales objetivos para el sector agrícola y que siempre se mostró más preocupada por la agricultura que por los agricultores. Las tibias reformas llevadas a cabo en los años treinta estaban orientadas, en primer lugar, a asegurar la supervivencia de la agricultura granífera; en todo caso apuntaban no a mejorar la situación de los cultivadores, sino a asegurar ciertas condiciones mínimas que les permitieran seguir sembrando y cosechando.

Este objetivo por demás modesto no siempre se alcanzó. Para 1933, tras varios años de precios bajos, la situación de muchos chacareros era angustiante. Jorge Santamarina, entonces presidente del Banco de la Nación, tuvo una impresión de primera mano de los problemas de algunos de ellos cuando visitó los distritos cerealeros en el verano de 1932-1933. Ese recorrido le dejó una impresión poco feliz. Muchos agricultores, decía, carecían de "recursos, estaban virtualmente en estado de indigencia, y compelidos a vender sus pertenencias personales, para hacer frente a sus necesidades más urgentes".[105] Santamarina no fue el único que advirtió el dramatismo de la condición de los pequeños cultivadores del suelo. Aquellos que dependían del poder de compra de los chacareros, como los comerciantes rurales, le manifestaron al gobierno que era necesario "salvar al agricultor de la absoluta miseria en que se está hundiendo".[106] No eran sólo los préstamos a los chacareros, o las ganancias que se esperaba obtener al vincularse económicamente con ellos, lo que estaba en juego. En más de una ocasión, se escucharon voces que advertían que las penurias de los cultivadores podían dar lugar a un aumento de la conflictividad social.[107]

Aparte de la miseria chacarera, había otras señales que apuntaban en el mismo sentido. Por largos años, la Federación Agraria se había mostrado renuente a embarcarse en una campaña de agitación de resultados inciertos. Pero en 1933 muchos agricultores tenían grandes dificultades para continuar labrando la tierra, y la Federación, respondiendo al malestar chacarero, se decidió a actuar. Representantes de los agricultores se reunieron en Las Rosas, en Santa Fe, y convinieron negarse a pagar sus arrendamientos, a menos que se alcanzara un acuerdo con los dueños del suelo que contemplase una reducción del canon de arrendamiento, así como una moratoria sobre las deudas, con una rebaja de la tasa de interés.

Sin embargo, la protesta chacarera no logró tomar forma. Nunca como en ese momento parecen tan claros los testimonios que indican que existía amplia conciencia de que la baja de los precios del grano no constituía un fenómeno temporario que podía corregirse en el corto y mediano plazo, y que por tanto el malestar agrario, lejos de descomprimirse en breve, había venido para quedarse. De igual forma, a lo largo de esos años, se escuchó repetidamente un coro de voces que, revelando la inquietud de algunos propietarios, denunciaba a los "agitadores profesionales", a los elementos subversivos que predicaban el odio de clase en la campaña. Las desgracias de los agricultores, incluso, se constituyeron en un tópico que se vio reflejado en obras literarias como *El campo arde* de Juan Manuel Prieto, que tematiza el carácter antagónico de las relaciones entre arrendatarios y dueños de la tierra.[108] Sin embargo, la penosa condición de los cultivadores no fue suficiente como para impulsarlos a la acción colectiva. A lo largo de todos esos años, las prerrogativas de los terratenientes nunca fueron puestas en tela de juicio por una comunidad de arrendatarios que nunca había sido tan agredida en el pasado, y que nunca se había revelado tan resignada a sufrir en silencio.

No se trataba de que los chacareros pobres se hubieran resignado a aceptar sin más su situación. Era el propio contexto que los empobrecía el que contribuyó a minar su capacidad de protesta. El hecho de que la huelga lanzada en Las Rosas nunca lograra ponerse en marcha habla de las limitaciones que afectaban al poder de negociación de los chacareros, que se habían esbozado en la década de 1910, y que la Depresión terminó de definir. Así como en otras economías de frontera, el factor que explica la gran capacidad de presión de los agricultores hasta la década de 1900 no era la organización y la solidaridad, sino la escasez relativa de brazos. El cierre de la frontera agrícola y la creciente abundancia de fuerza de trabajo debilitó irremediablemente a los chacareros, que desde entonces nunca lograron fundar sus reclamos sobre bases igualmente sólidas.

Desde la emergencia del movimiento chacarero en Alcorta en 1912, además, muchos observadores advirtieron que las condiciones estructurales que prevalecían en la agricultura pampeana, entre las que se destacan los contratos de corto plazo y la movilidad geográfica de los agricultores, volvían muy difícil toda acción colectiva, puesto que impedían la formación de una comunidad rural bien integrada. Otros factores, como el hábitat disperso y la diversidad de orígenes, tampoco favorecían la colaboración. "La cooperación es necesaria para mejorar la agricultura", observaba Campolieti en 1914, pero "la agricultura está hecha de tal

modo que no permite la cooperación".[109] En cierto sentido, la fundación de la Federación Agraria no fue tanto una expresión de la madurez política de los chacareros, o una manifestación de su conciencia de clase, sino una respuesta a la erosión de las oportunidades de ascenso social y mejora económica de que estos disfrutaron mientras la frontera se mantuvo abierta.

La Federación Agraria no logró dotar al mundo chacarero de una sólida organización. La mejora de los precios agrícolas en la primera mitad de la década de 1920 parece haber conspirado contra sus esfuerzos organizativos. En esos años, los agricultores hicieron importantes inversiones en maquinaria, incrementando el volumen cosechado y reduciendo los costos unitarios de producción. La inversión fue particularmente relevante en la mecanización de la cosecha, que era la tarea más intensiva en trabajo en la agricultura pampeana. Se ha estimado que para 1930 la Argentina poseía una cantidad de cosechadoras equivalente a la mitad de las que operaban en los Estados Unidos, donde el número de unidades de producción era mucho más grande.[110] La introducción del camión también redujo los costos laborales, en particular durante la cosecha, bajando además el precio del transporte.

La mecanización tuvo importantes consecuencias sociales. Contribuyó a definir un antagonismo más simple y polarizado entre los chacareros arrendatarios y los dueños del suelo. En décadas anteriores, los cultivadores y los trabajadores estacionales habían colisionado repetidamente, en especial en el período de cosecha. Con el avance de la mecanización, que por sobre todas las cosas ahorraba trabajo estacional, los trabajadores temporarios perdieron poder y presencia, por lo que la relación entre agricultores arrendatarios y dueños del suelo se volvió más central al sistema de producción y, en consecuencia, también adquirió mayor relevancia como la principal línea de tensión social de las cuencas graníferas. Procesos de cambio demográfico obraron en el mismo sentido. En las últimas décadas del siglo XIX, el grueso de los inmigrantes que se dirigieron a las cuencas cerealeras eran jóvenes, pero para las décadas que sucedieron a la posguerra muchos de ellos habían fundado familias y ya poseían hijos en plena edad productiva. Ello seguramente disminuyó la dependencia de estos agricultores del trabajo asalariado, puesto que ahora podían poner a trabajar en el campo a dos generaciones. Finalmente, la mecanización también debe haber ayudado a consolidar a un sector de granjeros prósperos que, por el mayor tamaño de sus unidades de producción o por otros motivos, estaban bien posicionados para sacar ventaja de las economías de escala que aquella favorecía. Pero al mismo

tiempo, y por las mismas razones, tendió a hacer más vulnerables a los agricultores más pequeños.

Para mediados de la década de 1930, las consecuencias de estos cambios se advertían con nitidez. En 1934, cuando el Congreso nacional encaró un estudio de los problemas del agro, tanto los representantes socialistas como los conservadores coincidían en que la mecanización y la baja de los precios del grano habían dado origen a altas tasas de desempleo en la pampa.[111] En esos años, regularmente se hablaba de gran cantidad de desempleados que vagaban alrededor de las estaciones de ferrocarril.[112] Ello no se tradujo, sin embargo, en un aumento de la conflictividad social. Los empobrecidos productores rurales no desafiaron a los dueños de la tierra, sino que en su mayoría –en especial, los jóvenes– optaron por abandonar la campaña, dirigiéndose a la ciudad en busca de mejores horizontes. Los chacareros de la pampa carecían de muchas de las "armas de los débiles" que en otras sociedades rurales los campesinos empleaban para vengarse de las afrentas de los terratenientes: faltos de organización comunal, o pagaban la renta o eran obligados a abandonar la tierra. En consecuencia, la mecanización, la baja de los precios del grano y el deterioro de las condiciones de vida expulsaron a muchos trabajadores de la tierra, mientras que la expansión de la industria los atraía hacia las grandes urbes, en particular hacia Buenos Aires. A diferencia de los campesinos españoles que en esos mismos años resistieron las injusticias del latifundio, los chacareros de la pampa, menos vinculados a la tierra que sus congéneres peninsulares, se inclinaron por escapar de ese mundo cada vez más ingrato.[113]

A diferencia de lo sucedido en la mayoría de los países latinoamericanos y europeos, el sector rural pampeano había sido un importador neto de trabajadores hasta comienzos de la década de 1910, y luego, aunque en menor escala, hasta la década de 1920. Cuando la Depresión hizo sentir sus efectos, el flujo de trabajadores cambió de signo. Se ha estimado que entre 1930 y 1938 la población rural total declinó en unos 200 000 habitantes, acercándose a su nivel de 1914 (3 212 000). En el mismo período, la población urbana creció en unos 1 800 000 habitantes, hasta alcanzar un total de 9 440 000.[114] En esos años en los que la inmigración europea prácticamente desapareció, la migración interna desempeñó un papel relevante en el crecimiento urbano, en particular en la ciudad de Buenos Aires y su gran cinturón industrial. La migración interna no era un fenómeno nuevo (su fuerza se advierte a lo largo de todo el siglo XIX, e incluso antes), pero su importancia se acrecentó desde los años iniciales de la Depresión. Entre 1935 y 1947, Buenos Aires atrajo

a 1,1 millón de inmigrantes, de los cuales cerca de dos tercios provenían de los campos y los pueblos de la región pampeana (Eva Perón, entonces Eva Duarte, estaba entre ellos). La migración de las provincias pampeanas tuvo un papel preponderante en la expansión de la ciudad de Buenos Aires, cuya población saltó de 3,4 millones en 1934 a 4,7 en 1947.[115] En síntesis, la principal consecuencia del malestar de los chacareros no fue un ciclo de conflicto social rural, sino una huida hacia la ciudad. Como advertía un representante socialista en 1935, "el campo no retiene a las nuevas generaciones, no les ofrece alicientes de ningún género".[116] Esta visión era ampliamente compartida. "La principal atracción de las ciudades", señalaba un diputado conservador algunos años más tarde, "es la falta de trabajo remunerador en la campaña".[117]

A comienzos de 1933, ya se advertía que las duras condiciones impuestas por la crisis estaban revirtiendo la tendencia hacia el acceso a la propiedad observada en la década de 1920.[118] En esos años, creció la proporción de chacareros arrendatarios y aparceros en el total de productores agrícolas: se ha estimado que pasó del 61 al 64% en apenas cuatro años, entre 1928-1929 y 1932-1933.[119] Lo que es igualmente importante, diversos indicios sugieren que la concentración de la tierra en las manos de los grandes propietarios seguía siendo tan marcada en los años treinta como un cuarto de siglo antes.[120] Un estudio llevado a cabo en 1942 por el gobierno conservador de Buenos Aires demostró que 259 propietarios individuales y 41 sociedades anónimas (que en más de un caso estaban bajo el control de una sola familia) poseían propiedades en esta provincia que en promedio alcanzaban las 20 000 hectáreas. Estos 300 propietarios –el núcleo íntimo de la burguesía terrateniente– poseían casi 6 000 000 de hectáreas de tierra, algo así como un quinto de la superficie total de la provincia más rica del país.[121] Ni siquiera la Sociedad Rural se atrevió a objetar estos cálculos. Cuando estas cifras se comparan con la lista de grandes terratenientes dada a conocer por Juan B. Justo en 1922 se advierte que, aun si algunos nombres habían cambiado, de todas maneras la tendencia fundamental en lo que se refiere a las grandes propiedades no había sido la división, sino la permanencia en pocas manos. De acuerdo con la información presentada por Justo en 1922, 317 propietarios poseían 5 686 533 hectáreas. Veinte años más tarde, un número algo menor de dueños del suelo, 300 propietarios, controlaban 5 979 000 hectáreas, esto es, una cantidad todavía mayor de tierra.[122] Aun si las listas de 1922 y 1942 no pueden ser objeto de comparación estricta, lo que se advierte es que en veinte años (y más allá del proceso de división de la propiedad que resultaba de la transmisión entre generaciones)

no se había producido ningún proceso significativo de fragmentación de la gran propiedad. En una sociedad rural más empobrecida y menos móvil, la presencia de la clase terrateniente y la gran propiedad seguía siendo tan visible como dos décadas atrás.

La investigación de 1942 fue llevada a cabo por el gobierno conservador de Buenos Aires, que se disponía a imponer impuestos más elevados a los propietarios que poseían más de 10 000 hectáreas. El incremento de los gravámenes a la gran propiedad estaba motivado por los recurrentes problemas financieros de la provincia, que se hicieron más agudos como consecuencia de la caída de la recaudación provocada por la baja de la actividad económica desencadenada por la Segunda Guerra Mundial. Además de contribuir a mejorar el estado de las finanzas provinciales, el gobierno argumentó que la medida tenía por objetivo favorecer la división del suelo. El proyectado gravamen sugiere que incluso el abiertamente fraudulento gobierno de Buenos Aires sentía la necesidad de cultivar apoyos populares y de ganarse cierta reputación como una administración comprometida con la suerte de los habitantes más desfavorecidos del distrito. A diferencia de la derecha chilena, los conservadores de Buenos Aires no podían contar con que los grandes propietarios rurales les aseguraran el voto de sus trabajadores y dependientes. Por ello, debían recurrir al fraude electoral, pero también se veían en la necesidad de prestar cierta atención a las demandas de los sectores trabajadores. Conscientes de la profundidad de los cambios económicos y sociales desencadenados por la crisis, en particular el crecimiento industrial y la migración hacia el Gran Buenos Aires, los gobernadores Manuel Fresco y Rodolfo Moreno impulsaron la sanción de una modesta legislación social para trabajadores urbanos, y también dieron cierto impulso a programas de vivienda popular y de mejora de la salud pública. Aceptando que la gran propiedad era un tema especialmente delicado, Fresco creó en 1936 el Instituto Autárquico de Colonización, una repartición que tenía por fin ofrecer lotes (en su mayoría de propiedad fiscal) a trabajadores sin tierra. La contribución de este programa oficial a paliar el problema del agro fue, empero, casi imperceptible.[123] Moreno (a quien ya hemos encontrado entre los conservadores reformistas) fue un poco más lejos. De hecho, el alza de los impuestos a la gran propiedad que impulsó en 1942 contó con una fuerte oposición terrateniente.

Los grandes propietarios y la Sociedad Rural optaron por no ofrecer una resistencia abierta a las iniciativas fiscales del gobierno conservador, prefiriendo presionarlo de formas más discretas. Este modo

de acción fue visto por un legislador comprometido con el proyecto oficial como un reconocimiento implícito de que el movimiento hacía una mayor justicia social (que la Segunda Guerra Mundial había acelerado tanto en la Argentina como en otras partes) no podía ser desafiado abiertamente. Durante la discusión parlamentaria, representantes conservadores retrataron a los terratenientes como individuos ambiciosos y egoístas, incapaces de comprender las exigencias del momento. Uno de ellos, por ejemplo, argumentó que tras el fin de la guerra la justicia social estaba llamada a ocupar el centro de las preocupaciones públicas. "¡Es tan sencillo criticar desde los sillones de los clubes, cuando se vive fácilmente! [...] el mundo que viene no va a admitir muchas cosas que hoy parecen aceptables."[124] Las críticas de los conservadores se dirigieron en particular hacia la Sociedad Rural, a tal punto que el debate sobre el impuesto a la gran propiedad fue percibido por algunos de los miembros de esta bancada como una verdadera divisoria de caminos entre el conservadurismo y los grandes propietarios. "¿Cómo no alarmarnos, cómo no sorprendemos, cómo no entristecernos", se preguntaba el diputado que defendía el proyecto oficial, "frente a miembros de sociedades que representan –o quieren representar– los intereses del campo argentino, haciendo oídos sordos al sentimiento de la nueva Argentina, que no reclama sino una mayor justicia social? La nueva conciencia conservadora los ve alejarse sin pena ni amargura; para formarla y para fortalecerla estarán en la labor los auténticos trabajadores de la tierra".[125]

La discusión parlamentaria sobre el impuesto a la tierra sugiere que las autoridades advertían bien la necesidad de cultivar adhesiones populares, aun si ello significaba desafiar a uno de los grupos que habían permanecido entre sus más fieles aliados a lo largo de la década. Y es que para comienzos de la década de 1940, la elite terrateniente no podía ser considerada sino como una carga política, de la que era prudente tomar distancia. La posición conservadora dio lugar a que un parlamentario radical la juzgase, no sin algo de exageración, como "un cambio fundamental en la política del viejo Partido Conservador, que siempre ha tenido predilección hacia la fortuna y hacia los privilegios y, sobre todo, hacia los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires".[126]

Esta nueva conciencia reformista conservadora, sin embargo, no estaba destinada a ir muy lejos. Es significativo que durante el debate parlamentario varios conservadores prefirieran centrar sus críticas no en los terratenientes tradicionales, sino en la expansión en

el sector rural de las sociedades anónimas y de las inversiones extranjeras, que describieron como ejemplos de un nuevo capitalismo rapaz e inescrupuloso, responsable de la concentración de la tierra en pocas manos. Quizás el aspecto más relevante de la expansión de las sociedades anónimas en el período era que con ella los terratenientes habían encontrado un instrumento legal con el que morigerar los efectos de la partición hereditaria de la propiedad, y que tal vez les permitía eludir impuestos. Su importancia, de todas maneras, era muy secundaria, puesto que la tierra en manos de propietarios no individuales representaba apenas el 17% del valor de los 6 000 000 de hectáreas poseídas por los mayores terratenientes de Buenos Aires.[127] Ello indica que el énfasis de los conservadores en las sociedades anónimas y en la supuesta actitud aviesa del capital extranjero (que despertaba sospechas generalizadas en esos años de guerra) respondía al deseo de sintonizar con el auge del sentimiento nacionalista que ganaba a la población. Sugiere, también, que con ello pretendían desviar la atención de los terratenientes nativos.

Puesto en perspectiva, el debate de octubre de 1942 no era sino una de tantas propuestas legislativas que se proponían favorecer la subdivisión del suelo y mejorar la situación de los cultivadores. Para fines de la década de 1930, no había fuerza política que no reconociese la necesidad de encarar una profunda reforma del orden rural. Ni siquiera defensores decididos de la gran propiedad como Alberto Caprile dejaban de advertir que "en la hora presente la necesidad de introducir reformas es, admitámoslo, apremiante".[128] Es por ello que, a lo largo de esa década, las Cámaras nacionales y provinciales trataron un gran número de iniciativas –de acuerdo con Bernardino Home, más de ochenta sólo en el Congreso nacional–,[129] algunas de las cuales alcanzaron a convertirse en ley. En 1938, la provincia de Córdoba, gobernada por el Partido Radical, sancionó una ley aumentando los impuestos sobre las grandes propiedades.[130] Dos años más tarde nació el Consejo Agrario Nacional, una institución destinada a repartir tierras públicas con fines de colonización. Similares proyectos de colonización se implementaron en Entre Ríos, gobernada por el radicalismo, y Buenos Aires, cuyos destinos eran regidos por el conservadurismo. En rigor, estas fuerzas no se distinguían demasiado en cuanto a su visión del problema rural. Tanto los radicales como los conservadores repetidamente señalaron que, en la década de 1930, la división del suelo se había detenido, y que las oportunidades de progreso individual que antes ofrecía el sector rural se habían poco menos que evaporado. Y

ambos coincidían en que esta situación no podía seguir tolerándose.[131] Sin embargo, la moderación fue la marca distintiva de las políticas agrarias tanto de la Concordancia como de la principal fuerza de oposición, que en los distritos que gobernaba hizo gala de la misma timidez que le reprochaba a sus rivales. En síntesis, si bien las principales fuerzas políticas de la Década Infame repetidamente argumentaron que el deterioro de la calidad de vida de los cultivadores debía revertirse, las medidas con las que intentaron hacerlo indican a las claras su renuencia a desafiar el statu quo.

EL FIN DEL VIEJO ORDEN RURAL: LA REFORMA DESDE ARRIBA

Por décadas, los gobiernos radicales y conservadores habían sido acusados de conservadurismo social por aquellos que se ubicaban a la izquierda del arco político e ideológico. Cuando Jacinto Oddone publicó su *La burguesía terrateniente argentina* en 1930, que fue precedido por una larga campaña en *La Vanguardia* donde se exponían adelantos de su principal argumento, los hombres del Partido Socialista ya no abrigaban mayores esperanzas sobre la posibilidad de poner en cuestión, en un futuro cercano, los privilegios de la gran propiedad. Muy a su pesar, el fracaso de los movimientos chacareros de comienzos de la década de 1930 confirmó esta visión pesimista. Poco a poco alcanzaron una visión más desencantada pero más justa de los motivos que explicaban la timidez de los proyectos de reforma del sistema de tenencia de la tierra. Si bien siguieron acusando al gobierno de mostrarse indiferente frente a las desgracias de los agricultores, terminaron por convencerse de que el problema radicaba en la debilidad del impulso en favor de una reforma de parte de quienes en verdad debían empujarla. Para la década de 1930, el movimiento de los arrendatarios ya había superado su etapa formativa, por lo que las dificultades de los chacareros para desafiar el sistema del que eran víctimas no podía achacarse simplemente a su inmadurez o al conservadurismo social del gobierno.

El problema fundamental residía, en definitiva, en las propias clases subalternas. Enrique Dickmann, uno de los principales líderes del Partido Socialista en los años de la entreguerra, y un conocedor de primera mano de los problemas agrarios (antes de cursar estudios universitarios, había sido obrero rural) dio voz a estos argumentos. En 1939,

Dickmann pronunció un discurso en el Congreso enfatizando que las injusticias propias de la sociedad pampeana no estimulaban la resistencia, sino que sumían a los oprimidos en la frustración y la pasividad. A diferencia del campesinado europeo, que había sido moldeado por un proceso secular de formación de clases, y cuyas luchas en los siglos XIX y XX habían transformado la campaña del Viejo Mundo, los agricultores argentinos carecían de los recursos materiales y culturales necesarios para desafiar el orden establecido. Su incapacidad para organizarse y reclamar los colocaba en una situación de impotencia, que los volvía más propensos a sufrir en silencio o a migrar que a rebelarse. Dado este cuadro, afirmaba Dickmann, la reforma debía tener por sujeto no a las clases subalternas, sino al estado. A diferencia de Europa, señalaba el líder socialista, en la pampa

> no hay población rural de siglos; no es densa, es casi advenediza, trabaja en la tierra desde hace una generación, o bien lo hacen directamente los inmigrantes. En realidad no tienen el derecho consuetudinario ni tienen el derecho histórico, ni tienen la cohesión nacional y racial necesaria, ni tienen el vigor ni el conocimiento para consumar hechos y después venga la ley a consagrarlos. Y entonces la revolución –si revolución hay en este terreno– debe venir desde arriba en vez de venir desde abajo.[132]

Dickmann no sólo ofreció una descripción acertada de algunos aspectos que contribuyen a explicar la debilidad de las clases subalternas rurales; también reconoció implícitamente que las fuerzas políticas de izquierda que levantaban la bandera de la reforma del sistema de tenencia de la tierra tenían asignado un papel muy menor en la lucha para definir el curso del desarrollo social en la pampa. El estado, que los socialistas de la década de 1930 ya se veían incapaces de conquistar, era el único actor que podía impulsar esa reforma.

Algunos años más tarde, las predicciones de Dickmann se hicieron realidad. Para ello fue necesario un drástico cambio del escenario político, que comenzó a gestarse con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y en el que la reforma rural adquirió una nueva urgencia. En mayo de 1940 la maquinaria de guerra alemana humilló al ejército francés, y en poco tiempo gran parte de Europa central y occidental cayó bajo el poder de los nazis. El estado de guerra, y en particular el bloqueo naval que Gran Bretaña impuso a las tierras conquistadas por los alemanes y sus aliados,

golpeó duramente a la economía argentina, provocando una caída del comercio internacional mayor que la causada por la Depresión una década antes. Si bien Gran Bretaña incrementó sus compras de carne, el mercado continental, que constituía el principal destino para los granos argentinos, se volvió inaccesible. Las exportaciones de granos cayeron de un promedio de 11,2 millones de toneladas en el período 1935-1939 a 3,6 en 1942 y 2,7 en 1943.[133]

En consecuencia, fue la producción agrícola, más que la ganadera, la que sufrió los efectos de la guerra con mayor intensidad. Cambios en los precios relativos estimularon un gran giro de la producción de granos a la de carne. Se ha estimado que la superficie bajo cultivo en la pampa se contrajo casi un 20% entre 1937 y 1942, cayendo de 21 000 000 a 17 250 000 hectáreas. Los más castigados fueron los cultivadores de maíz (que ya formaban el segmento más pobre de la comunidad de agricultores pampeanos), puesto que la totalidad de las ventas de este cereal en Europa tenían por destino el mercado continental. En 1940, las tierras sembradas con maíz ya habían declinado un 40%.[134] En el otoño de ese año, la prensa ya informaba sobre las dificultades de los agricultores y sobre expulsiones en las cuencas cerealeras. En abril y mayo de ese año, el diario *Crítica*, entonces el principal exponente de la prensa popular, dio a conocer una serie de artículos, denunciando las expulsiones y criticando la intransigencia de los propietarios. "Acostumbrados a vivir en medio del lujo y del derroche", afirmaba *Crítica*, los señores de la tierra "conspiran contra el desarrollo de la técnica, contra la implantación de la moderna agricultura, al exigir elevados arrendamientos y mantener en la más absoluta miseria y desamparo al colono. Parecería que el deseo más recóndito de los terratenientes es hacer retroceder a la Argentina a los tiempos en que la tierra se sembraba haciendo hoyos con un palo".[135] Las expresiones de *Crítica* dan cuenta de hasta qué punto había arraigado en la imaginación argentina la idea de una campaña atrasada, "feudal", de una comunidad agricultora explotada y huérfana de toda protección, y de los terratenientes como unos trogloditas reacios a aceptar todo progreso. La supuesta apatía de los agricultores también formaba parte de este cuadro, que de hecho pareció confirmarse puesto que los chacareros respondieron al empeoramiento de sus condiciones de vida tal como lo habían hecho en la década anterior, esto es, abandonando la campaña y migrando a la ciudad. Es probable que la situación poco hubiese cambiado de no haber sido por el golpe militar del 4 de junio de 1943, que dio un vuelco radical al panorama político nacional. En 1940, el proyecto de restauración de la democracia, que el presidente

Roberto Ortiz había dejado entrever al asumir en 1938, llegó a un punto muerto. Gravemente enfermo de diabetes, Ortiz debió alejarse del mando, y el vicepresidente Ramón Castillo ocupó su lugar. Castillo, que formaba parte de los sectores más conservadores de la Concordancia, dio marcha atrás en las iniciativas de liberalización política impulsadas por su antecesor. Bajo su presidencia, el fraude volvió a hacerse sentir masivamente en los actos eleccionarios. Ello causó la ira de los radicales y demás miembros de la oposición, pero también provocó el alejamiento de muchos antipersonalistas, por lo que el gobierno cayó bajo una dependencia cada vez mas clara de las fuerzas armadas, que para entonces habían perdido gran parte de su antiguo espíritu liberal. Muchos oficiales, en especial los del ejército, habían sido ganados por ideas nacionalistas y antiliberales, que habían emergido en la década de 1920 y que para fines de la década de 1930 ya se encontraban muy extendidas en las fuerzas armadas. La guerra contribuyó a acelerar este proceso, puesto que hizo crecer la conciencia de la necesidad de reforzar el sentimiento nacional y desarrollar una industria nacional de armamentos, que en muchos casos se asoció a un proyecto industrial más amplio. A su vez, la problemática de la justicia social ganó en importancia para el cuerpo de oficiales, en parte porque se vinculaba con preocupaciones más específicas referidas al poder militar de un estado. El renacimiento católico de esa década, que tuvo una fuerte incidencia en el ejército, también contribuyó a orientar las preocupaciones en el mismo sentido.[136]

Huérfano de apoyos civiles, carente de aliados en el mundo político, en junio de 1943 el gobierno de Castillo fue derrocado por un golpe militar. Por algunos meses, la actitud de las clases propietarias hacia el nuevo régimen, que carecía de rumbos claros en el plano de la política económica, no fue necesariamente hostil. Sin embargo, cuando en octubre de 1943 el coronel Juan Domingo Perón y un grupo de oficiales nacionalistas tomaron el control del gobierno y se propusieron dotarlo de una base de apoyo popular, las clases propietarias comenzaron a manifestar su desagrado. La necesidad de reformar las relaciones entre terratenientes y arrendatarios era ampliamente aceptada cuando los coroneles dieron su golpe de palacio. De hecho, en 1942 el gobierno de Castillo había enfrentado el problema, que se había vuelto acuciante tras el estallido de la guerra, mediante la sanción de una ley que rebajaba los arrendamientos rurales. Pero al igual que otras iniciativas similares en el pasado, esta medida tuvo pocos efectos prácticos, puesto que los chacareros carecían de la fuerza suficiente para demandar su cumplimiento, y el gobierno, por su parte, tampoco hizo nada para asegurarla.

El régimen nacido en octubre de 1943, cuya preocupación central se refería al desarrollo industrial y el mercado doméstico, y que colocaba en un lugar secundario los intereses del sector agroexportador, y que, por otra parte, aspiraba a dotarse de una amplia clientela popular, se propuso juzgar los asuntos rurales de manera muy distinta. En noviembre de 1943, el ministro de Agricultura, general Diego Mason, promovió la sanción de una ley sobre contratos de arrendamiento, que era particularmente favorable a los arrendatarios. La propuesta de Mason imponía una reducción compulsiva de las rentas agrícolas de un 20% que difícilmente podía ser evadida por los terratenientes. Además, las expulsiones fueron prohibidas, y los arrendatarios fueron beneficiados con el derecho a renovar sus contratos, aun contra la oposición de los propietarios. El modo en que estas medidas fueron dadas a conocer revela la intención de los militares de ganarse nuevos aliados para su causa. Las reformas fueron anunciadas en un mitin de la Federación Agraria realizado en el pueblo de Junín, en la provincia de Buenos Aires, que contó con la presencia del presidente y de varios de sus ministros.[137]

La legislación sancionada a fines de 1943 fue lo más parecido a una reforma agraria que tuvo la Argentina en toda su historia. De hecho, provocó un cambio profundo en las relaciones entre propietarios y arrendatarios que lenta pero irremediablemente subvirtió el sistema de grandes propiedades surgido un siglo antes. El gobierno militar optó por no librar una batalla frontal contra los grandes terratenientes, pero las medidas destinadas a incrementar la seguridad y el ingreso de los productores agrícolas más débiles, si bien no produjeron una división inmediata de las grandes propiedades, sí fueron suficientes para poner en marcha una transformación gradual pero irreversible de la estructura de propiedad. Estas medidas afectaron en particular a los propietarios rentistas, que constituían el segmento menos dinámico de la clase terrateniente; aquellos que administraban sus propias tierras, en general ganaderos, lograron escapar a sus efectos. Ello dificultó la articulación de una respuesta unificada de parte de todos los grandes propietarios, que podría haber puesto en cuestión el programa del gobierno.

Con reajustes poco significativos, la legislación sobre arrendamientos rurales de 1943 mantuvo su vigencia por más de un cuarto de siglo, hasta que se volvió poco menos que innecesaria por la desaparición de las formas tradicionales de relación entre propietarios y arrendatarios. La fuerte inflación de la posguerra fue decisiva para provocar este resultado, pues redujo a cifras irrisorias el monto de los arrendamientos, que se mantenían congelados desde 1943. Ello indujo a los chacareros a aferrar-

se a las tierras que arrendaban, de las que no podían ser expulsados, salvo por acuerdo mutuo con los dueños del suelo. Al cabo de algunos años, pues, las rentas congeladas se retrasaron respecto del resto de los precios de la economía. De acuerdo con cálculos del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, las rentas cayeron, dependiendo del destino de la tierra, entre el 40 y el 80% entre los períodos 1935-1939 y 1950-1954.[138] En consecuencia, los terratenientes no tuvieron más opción que venderles a precios bajos a sus arrendatarios, a quienes no podían expulsar, o a indemnizarlos para que abandonen la tierra (adoptando en este caso un papel más directo como organizadores de la producción). Las líneas de crédito oficial subsidiadas y de largo plazo, aunque escasas, también facilitaron el acceso de los arrendatarios a la propiedad.

Algunos pocos datos ofrecen una idea cabal de la escala de la transformación de la estructura de propiedad desatada por la legislación de 1943. Se ha estimado que entre los censos de 1937 y 1947, el número de propietarios en la provincia de Buenos Aires se incrementó un 24%, mientras que el número de arrendatarios se contrajo un 16%. En toda la región pampeana, el número de propietarios en esos mismos años pasó del 35,5 al 43,2% del total de los productores, sufriendo un incremento del 21,7%; la proporción de arrendatarios bajó del 58,6 al 49%, contrayéndose un 16,4%. Los efectos más profundos de la transformación se hicieron sentir en el período posterior, cuando los propietarios advirtieron que el congelamiento de los arrendamientos no iba a ser revertido con facilidad, lo que los instó a seguir desprendiéndose de sus propiedades. Entre los censos de 1947 y 1969, la cantidad de hectáreas arrendadas cayó a la mitad, de 27 a 13,5 millones, mientras que la cantidad de hectáreas trabajadas por sus dueños subió de 37,3 a 54,6 millones. Para 1969, los propietarios trabajaban el 73% de la tierra en las provincias pampeanas, mientras que los arrendatarios ocupaban sólo el 18% del suelo.[139]

La importancia de estos cambios difícilmente puede exagerarse. A diferencia de lo sucedido en otros países de América Latina en el período de posguerra, el sector rural pampeano no experimentó ninguna reforma agraria, ni mayores presiones para alcanzarla, en gran medida porque el cambio estaba en marcha. Ello fue resultado de la legislación de 1943, que contribuyó a fragmentar una parte significativa de las grandes propiedades, y a consolidar una nueva clase de propietarios rurales medios, surgida en su mayoría de las filas de los antiguos arrendatarios. El congelamiento de los contratos y la prohibición de expulsión dieron

por resultado un cambio en la estructura de propiedad que fue más lento pero más profundo y duradero que los estimulados por las reformas agrarias en Nicaragua, Perú o Venezuela en los años sesenta y setenta.[140] No todos los arrendatarios lograron alcanzar la propiedad, pero al hacerla asequible a un número significativo de ellos, la reforma hizo que las tensiones sociales que latían en el campo perdieran espesor. De hecho, los antiguos chacareros se volvieron cada vez más conservadores, y con el paso del tiempo su solidaridad con los grandes propietarios se incrementó. En este sentido, el período que sucedió a la Segunda Guerra Mundial estuvo caracterizado por el fin, lento y discreto, del viejo conflicto entre los arrendatarios y los grandes señores de la tierra. Desde los años cincuenta y sesenta, los antiguos arrendatarios convertidos en propietarios se volvieron firmes defensores del statu quo, a punto tal que los reclamos de reforma agraria desaparecieron de la agenda de la Federación Agraria, que desde entonces se convirtió, en esencia, en un vocero de los pequeños y medianos propietarios.

Las mayores preocupaciones de los gobiernos surgidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial se referían al desarrollo de la industria y la economía urbana, y colocaban en un lugar subordinado todo lo concerniente al sector agrícola de exportación. Es por ello que si bien los agricultores mejoraron su situación, y muchos de ellos alcanzaron la tan ansiada propiedad del suelo, no lograron apropiarse del grueso del excedente agrario que en el pasado había hecho la fortuna de los grandes propietarios y de sus principales socios, las compañías de capital extranjero que se ocupaban del transporte y comercialización de la producción exportable. A mediados de la década de 1940, el comercio de granos y los ferrocarriles fueron puestos bajo el control del estado. Desde esos años, el sector rural en su conjunto, pero en especial los productores de granos, se vieron perjudicados por una política de precios que extraía excedente del sector rural y lo volcaba en la economía urbana.

Las relaciones laborales también fueron reformadas. El coronel Perón, convertido en la figura dominante y el principal cerebro político del régimen de 1943, dedicó grandes esfuerzos a construir una base política en el mundo del trabajo, que hasta entonces había permanecido poco organizado. Como parte de su programa para ganarse el apoyo de este sector, en octubre de 1944 Perón, entonces a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, impulsó la sanción del Estatuto del Peón, que estaba destinado a mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores rurales. En esa ocasión, los grandes estancieros de-

bieron aceptar en silencio los insultos de Perón, que los acusó de haber "mantenido en el mayor atraso las condiciones del trabajador rural, permitiendo la coexistencia de un sistema casi medieval para ellos, en contradicción con el progreso de la técnica".[141] El Estatuto del Peón, así como las iniciativas de organización sindical promovidas por la Secretaría, irritaron a la Federación Agraria y a los cultivadores de granos, que comparativamente se perjudicaban más que los grandes ganaderos con el aumento de los costos salariales y la regulación estatal de las relaciones laborales, puesto que utilizaban trabajo asalariado con mayor intensidad. De todas maneras, su reacción ante al gobierno militar, y luego de las elecciones de febrero de 1946, frente al gobierno de Perón, siempre fue más amigable que la de los terratenientes, que invariablemente se contaron entre los críticos más duros del peronismo. Pues si bien los chacareros no abrigaban simpatía alguna por la política laboral peronista, la política sobre tierra y arrendamientos les daba buenas razones, quizá no para identificarse plenamente con esta administración, como hicieron los trabajadores, pero al menos sí para permanecer como sus aliados, en tanto esta contemplaba sus principales intereses. De hecho, tras el derrocamiento de Perón en 1955, los chacareros continuaron apoyando las políticas agrarias implementadas en 1943, y con eso contribuyeron en forma decisiva a su supervivencia hasta fines de la década de 1960.[142]

El período de aislamiento económico provocado por la Segunda Guerra Mundial dio impulso a una nueva etapa de expansión industrial, que el régimen militar de 1943 y luego el gobierno de Perón se propusieron estimular. La guerra favoreció, aun más que la Depresión Mundial de los años treinta, la profundización del proceso de industrialización por sustitución de importaciones. En esos años de crecimiento febril, la industria se volvió más desequilibrada, puesto que la infraestructura necesaria para sustentar su expansión mostró serias insuficiencias. Carente de fuentes externas de abastecimiento, en la guerra e inmediata posguerra las dificultades técnicas, los problemas de escala, y la falta de capital e insumos afectaron a la industria. El veloz pero desordenado crecimiento manufacturero de esos años llevó a los encargados de definir la política económica a afirmar que había llegado el momento de impulsar aún más el proceso de industrialización, y ello tanto por razones sociales como económicas.

Para entonces, ya no era el sector rural sino el industrial aquel que era percibido como el que abriría el camino para alcanzar una Argentina distinta y mejor, más independiente de las economías centrales, y

socialmente más justa. "Industrialización", advertía el embajador estadounidense en Buenos Aires, captando algunos de los sentidos que este término evocaba, "es una palabra que los argentinos aman usar. Los trabajadores la utilizan en sus conversaciones. Los profesionales y hombres de negocios con aire de éxito, que leen más y más revistas técnicas, la usan con gran familiaridad [...] Los argentinos, como muchos otros latinoamericanos, sienten que sólo a través de la industrialización pueden alcanzar su independencia y elevar sus niveles de vida".[143] Tras la llegada de Perón al poder, mientras la manufactura y las actividades urbanas ofrecían salarios elevados gracias al crédito público, la protección arancelaria y las políticas de precios favorables, el sector rural debía enfrentar políticas adversas, la contracción de sus mercados externos y la escasez de maquinaria agrícola. En el lapso de unos pocos años, y como muestra de cuánto había cambiado el país, la política económica oficial obligaba a los productores y rentistas agrarios a subsidiar los costos de la mejora de la calidad de vida de los trabajadores urbanos y de la expansión del sector industrial. En síntesis, la política pública le había dado la espalda no sólo a la elite terrateniente, sino también al sector rural y al patrón de desarrollo dominado por las exportaciones agrarias.

El agro pampeano, sin embargo, no podía ser completamente abandonado a su suerte. Y ello no sólo porque este producía bienes esenciales al consumo popular, como la carne y el trigo. La Argentina de la segunda mitad del siglo XX nunca logró librarse de su dependencia de las exportaciones rurales, que siempre constituyeron su principal fuente de divisas, por lo que recurrentes crisis de balanza de pagos recordaron, tanto al gobierno peronista como a los que lo sucedieron, que el sector rural seguía revistiendo una importancia que no convenía desconocer. De todas maneras, el cambio de prioridades de los gobiernos de la posguerra fue claramente advertido (y por siempre lamentado) por los empresarios rurales. Con independencia del efecto de las amenazas de expropiación formuladas por Perón en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 1946, todo parece indicar que, para los empresarios rurales. la inversión en la economía urbana se volvió aún más atractiva que en las décadas anteriores. Es quizá por ello que este fenómeno, que había permanecido poco advertido en la década anterior a la Segunda Guerra Mundial, se hizo más visible, también para observadores extranjeros. "Incluso los estancieros", escribía el embajador estadounidense en 1954, mostraban interés en la industrialización, y "algunos de los terratenientes más dinámicos están ingresando en la actividad manufacturera".[144]

La política económica peronista, sin embargo, no resultó de una estrategia de industrialización coherente y deliberada; sus rasgos básicos estuvieron determinados por las bases sociales del régimen. Este dependía del apoyo de los sectores trabajadores y populares, entre los cuales el movimiento obrero sindicalizado ocupaba un lugar privilegiado. A cambio de su lealtad, esta base de poder repetidamente presionó para asegurar una distribución más igualitaria del ingreso nacional y una política de empleo que garantizase plena ocupación. Inevitablemente, estos dictados que fijaban límites estrictos al margen de maniobra de las autoridades económicas hicieron posible la supervivencia e incluso el crecimiento de las pequeñas empresas, atrasadas tecnológicamente y pobremente capitalizadas, que habían florecido en el ambiente cerrado creado por la guerra mundial.[145] En el mediano plazo, esta estructura industrial se mostró incapaz de generar aumentos sostenidos de productividad, trabando así el crecimiento, por lo que tras algunos años de tregua los problemas económicos reemergieron, y la lucha social se vivificó. Durante el meteórico ascenso de Perón, los presidentes de la Sociedad Rural y la Unión Industrial habían ido a parar a la cárcel. Aunque su estadía tras las rejas fue breve, medidas como esta le sugirieron a la elite empresaria la conveniencia de manifestar su desagrado de modos muy civilizados e indirectos, por lo que luego de 1945 la resistencia abierta dio lugar a una notable pasividad, que no lograba encubrir la irreductible hostilidad del empresariado hacia el gobierno.[146]

Se trataba de algo más que de resistencia contra el estilo populista que caracterizaba al peronismo. De hecho, tras el derrocamiento de Perón en 1955, las clases propietarias, que para ese entonces podían expresarse públicamente sin restricciones, se mostraron poco dispuestas a convivir con la democracia de masas. Turbadas por la velocidad con la que se había producido el cambio social que llevó a las mayorías a tomar parte decisiva en el juego del poder, los grandes empresarios (tanto los industriales como los rurales, tanto los comerciantes como los banqueros), promovieron la reconstrucción de una estructura económica y un sistema de poder similar al de la Argentina preperonista. Sus intentos de volver al pasado fueron resistidos por el movimiento obrero, que bajo el peronismo había alcanzado un grado de cohesión política y de poder en el mercado que no reconocía paralelos en América Latina. Este enfrentamiento, detenido y reiniciado periódicamente, dio lugar a un extenso período de conflicto político y social que se prolongó por más de dos décadas. Afirmados en sus instituciones representativas, los hombres de negocios y los trabajadores libraron una larga guerra de clases, que sem-

bró las semillas de inestabilidad política e incertidumbre económica que afectaron a la Argentina hasta los años ochenta.[147]

En distintas ocasiones, los recurrentes conflictos de esos años encontraron a distintos sectores del empresariado en bandos opuestos entre sí. La principal línea de conflicto, empero, enfrentó a los sectores trabajadores con el gran empresariado, que se abroqueló en un intento por revertir las reformas políticas y económicas introducidas desde 1943. Pero en la Argentina semiindustrializada de las décadas que sucedieron a la caída de Perón no fueron los principales propietarios rurales, sino los grandes empresarios urbanos los que constituyeron el elemento más visible y poderoso del bloque propietario. La profundización del conflicto urbano e industrial permitió que los estancieros se retiraran con discreción de la primera línea de combate. Su desaparición, sin embargo, no fue completa. Ampliamente percibidos como el sector más reaccionario y aristocrático de las clases propietarias, los grandes estancieros siguieron presentes en la imaginación popular. La visión que hace de los señores de la pampa sinónimos de egoísmo y desprecio por lo popular, y que remarca su arcaísmo productivo y el infinito poder que ejercen subrepticiamente, fue revivida una y otra vez en la retórica política. Diversos aspectos de estas ideas fueron también evocados por analistas que, en muchos casos, no habían terminando de advertir los cambios acontecidos en la pampa en las décadas de posguerra, pero que de todas maneras dejaron una fuerte impronta en la cultura argentina.

No puede dejar de admitirse, sin embargo, que el prestigio de los magnates territoriales de la pampa era en cierto sentido más robusto y más duradero de lo que algunos de sus críticos estaban dispuestos a admitir. Ello no se debe sólo a que por largas décadas las familias terratenientes tradicionales (lo más parecido a una aristocracia republicana que tuvo la breve historia de este país nuevo) se erigieron como los únicos modelos posibles de todo lo que debe ser una vida de clase alta, y la estancia como el símbolo más potente de su dorada existencia. Parece comprensible que un país que desde hace décadas navega sin rumbo, y que además se ha hundido en episodios particularmente trágicos, alimente cierto gusto nostálgico por las glorias pasadas, que le impide librarse del todo de los muchos mitos que se forjaron en torno a la clase terrateniente. Quizá por ello, al mismo tiempo que las masas urbanas juzgaban negativamente al mundo de los grandes propietarios, tenidos por causa primera de las desgracias del país, no podían dejar de considerar con respeto o envidia, incluso con admiración, a los mayores emblemas de la Argentina terrateniente. Ysabel Rennie fue una de las primeras en advertir esta ambivalen-

cia, visible incluso cuando la industrialización impulsada por el estado se volvió la verdad del día. Para las clases medias, y hasta para los trabajadores industriales, el ganado de raza y la estancia moderna, confortable –las creaciones más típicas del gran terrateniente de la pampa– seguían estando en el centro de la imagen que la Argentina tenía de sí misma.[148] Todavía siguen allí, tiempo después de que la influencia de los grandes propietarios decimonónicos se ha desvanecido casi completamente.

Visión en perspectiva

Este libro se propuso analizar la historia de los grandes terratenientes de la pampa entre la década de 1860 y el ascenso del peronismo a mediados de la década de 1940. El relato toma por punto de partida el inicio de la segunda parte del siglo XIX, momento en el cual la economía ganadera comenzó a transformarse a un ritmo cada vez más acelerado. La profundización de la organización capitalista le otorgó un nuevo dinamismo a la producción agraria. Las relaciones de mercado no surgieron de la nada, y toda una historia anterior, que se remonta a la etapa tardocolonial, preparó el terreno para su implantación plena en la segunda mitad del siglo XIX. Pero fue la veloz expansión de la producción lanar, que alcanzó su momento de auge pasada la mitad de ese siglo, la que le dio un particular ímpetu a este proceso. Al mismo tiempo que la producción se transformaba, la organización y gestión de una empresa rural se volvía una actividad más sofisticada, que demandaba no sólo mayores inversiones de capital, sino también nuevas destrezas y mayor atención a los problemas técnicos. Este fenómeno generó condiciones que hicieron posible la emergencia de una identidad terrateniente entre los miembros de un grupo de grandes propietarios que estaban a la vanguardia de la mejora de la producción rural. Por primera vez en la historia de la Argentina, comenzaron a hacerse visibles claros signos de diferenciación funcional entre los miembros de una elite económica que, hasta entonces, se había caracterizado por un patrón de inversiones diversificado. El indicador más evidente de esta proceso fue la formación de la Sociedad Rural Argentina.

La Sociedad Rural fue fundada en 1866 por los estancieros más ilustrados de Buenos Aires. Como asociación inspirada por el credo del progreso económico y un espacio de interacción para la elite, pronto se volvió sede de una amplia gama de actividades, entre las que se contaban sus funciones de asesoramiento al estado (nacional y provincial) en construcción. La Sociedad Rural se propuso representar los intereses del conjunto de los propietarios rurales *vis-à-vis* el estado y la elite política. Tam-

bién tenía por objetivo favorecer el desarrollo de una nueva conciencia progresista entre los terratenientes ausentistas. La Sociedad Rural se propuso educar a los empresarios rurales en la mejora de los métodos de cultivo y de cría. El programa de regeneración de los grandes estancieros surgido del seno de esta asociación estaba subtendido por una serie de argumentos dirigidos a legitimar la hegemonía de este grupo. Estos argumentos presentaban a los estancieros como a la clase productora por antonomasia, y como a los líderes naturales de la campaña. Los hombres que animaban a la Sociedad Rural repetidamente insistieron en que los grandes propietarios, a quienes veían como reacios a aceptar toda propuesta de cambio, debían transformarse en empresarios más eficientes y racionales, y al mismo tiempo en líderes sociales y políticos del mundo rural.

El proyecto de dar vida a una institución fundada sobre una amplia base de clase, capaz de impulsar un programa de reforma de los estancieros y de su mundo, pronto se reveló demasiado ambicioso. En las décadas de 1860 y 1870, la falta de compromiso de la inmensa mayoría de los estancieros con la institución que decía representarlos era ampliamente reconocida (y lamentada) incluso por los propios ruralistas. Es indudable que había razones de orden político que ayudan a entender la renuencia de los propietarios a seguir los consejos de sus autotitulados líderes. Desde sus albores en el período colonial tardío, la economía de exportación de la pampa había moldeado una sociedad que en algunos aspectos podía ser poco sofisticada, pero que estaba lejos de conformar un orden social basado en la preeminencia indisputada de los que ocupaban la cumbre de la estructura económica. La frontera había dejado una marca indeleble tanto sobre los estilos de vida como sobre las relaciones entre los individuos y los distintos grupos sociales. La campaña pampeana no albergaba una sociedad jerárquica y deferencial, dispuesta a encolumnarse tras los principales propietarios.

La indiferencia de la mayoría de los estancieros frente al llamado a la acción formulado por los ruralistas reconoce también otros motivos. Los magnates territoriales deben haber advertido que los beneficios de asumir un papel protagónico en la vida local no eran tantos, en particular porque nunca sintieron que su posición privilegiada podía verse sometida a cuestionamientos por parte de las clases subalternas. En la campaña, la ausencia de fuertes tensiones sociales que amenazaran la expansión de la gran propiedad tornó a los estancieros poco propensos a involucrarse en la vida local. En definitiva, los rasgos del mundo rural pampeano que remitían a su carácter de sociedad de frontera restaban espacio a quienes

se proponían dar impulso a la acción política de los propietarios. Ello sin duda puso obstáculos a la emergencia y consolidación de organizaciones que representaran a los estancieros ante otros grupos sociales y ante el estado. Al mismo tiempo, retardó el proceso de formación de la identidad de clase terrateniente, y en todo caso, lo colocó en un camino distinto al signado por la relación (conflictiva o paternalista) con las clases subalternas.

Elementos que remiten a las dimensiones económicas, sociales y culturales de la experiencia de los propietarios también deben ser considerados a la hora de dar cuenta de las dificultades que encontraban los ruralistas para concitar la adhesión de sus pares. Los fracasos de los hombres que animaban a la Sociedad Rural también se debían a que la elite propietaria juzgaba todo lo referido a la vida y la producción rural con cierto desdén. Al mismo tiempo, es preciso recordar que la elite propietaria del período estaba lejos de haberse definido como eminentemente rural. La visión que afirma que desde los tiempos coloniales o de la inmediata independencia el país estaba dominado por una elite económica que fundaba su primacía en la propiedad de la tierra debe descartarse. Contra lo que se ha afirmado muchas veces, es necesario recordar que la expansión ganadera de la primera mitad del siglo XIX no dejó por herencia una clase terrateniente consolidada. En rigor, cuando la Sociedad Rural daba sus primeros pasos, la vocación rural de la elite propietaria recién comenzaba a definirse. Esta había despuntado en las décadas de 1820 y 1830, en gran medida como resultado de la repentina destrucción del orden económico virreinal. Desde entonces, y por varias décadas, la producción rural conformó un nuevo y dinámico campo de actividad para un gran empresariado de base urbana y de orientación fundamentalmente mercantil. La inestabilidad del Río de la Plata en el medio siglo que sucedió a la independencia explica los motivos por los cuales los capitalistas invirtieron en el campo pero también diversificaron sus inversiones. En rigor, el sector económicamente dominante de aquella sociedad puede describirse mejor como una elite diversificada que como una clase terrateniente.

Desde las décadas centrales del siglo, la actividad rural comenzó a ocupar un lugar cada vez más decisivo en el patrimonio y las fuentes de ingreso de la clase propietaria. Este proceso, sin embargo, fue lento, y no se completó hasta el último cuarto del siglo XIX. Por otra parte, el primitivismo de los distritos rurales, que impedía que allí se reprodujera el estilo de vida de la elite urbana, puso trabas que dificultaron la profundización de las raíces rurales de las familias más ricas de la Argentina. El

mundo bravío que todavía era la pampa, y la rusticidad y simpleza de los procesos de producción que allí tenían lugar, no podían provocar sino rechazo en una clase alta que se percibía como una elite urbana antes que como una clase terrateniente. En consecuencia, no puede llamar la atención que los ambiciosos proyectos de los líderes de la Sociedad Rural encontrasen una fría recepción en este grupo social. Vistos en perspectiva, los cambios experimentados por la campaña y la empresa rural en el tercer cuarto del siglo XIX fueron lo suficientemente profundos como para permitir la aparición de una conciencia terrateniente entre un grupo de estancieros progresistas que se encontraban a la vanguardia del cambio tecnológico. Sin embargo, esas transformaciones estuvieron lejos de afectar al grueso de los grandes propietarios, que siguió encarando la gestión de sus intereses rurales de modos más tradicionales. Otro tanto puede decirse respecto de su identidad, que en esos años no resultó mayormente modificada. Estos empresarios de estilo más tradicional no eran figuras menores, y entre ellos se destacaban algunos de los mayores propietarios del país. Grandes magnates territoriales como los Unzué y los Anchorena fueron renuentes a seguir los dictados reformistas de la Sociedad Rural. En síntesis, el peso creciente de los emprendimientos económicos en el patrón de inversiones de la elite porteña no se correspondió con ninguna transformación significativa de la identidad y de la apariencia de este grupo.

En el último cuarto del siglo XIX, este cuadro se alteró. En 1880, el Partido Autonomista Nacional alcanzó el control de todo el país, imponiendo una larga década de estabilidad política. La llegada de Julio Roca a la presidencia señaló la maduración de un nuevo orden político e institucional. El amplio arco de lealtades que la coalición que Roca encabezaba supo movilizar en el interior del país, sumado a los apoyos que encontraba en las provincias litorales y al poder militar que el ejército federal había alcanzado durante las dos décadas anteriores, pusieron fin a un largo período de inestabilidad institucional, y sentaron las bases definitivas para la victoria del estado central. Para alcanzar este objetivo, fue preciso doblegar la resistencia de la provincia de Buenos Aires, como efectivamente sucedió en las batallas de 1880. Tras el Ochenta, la autonomía de la principal provincia argentina fue drásticamente recortada por la nueva elite dirigente. Desde entonces, la posición de la elite porteña se tornó más precaria, ya que las redes políticas de la provincia perdieron peso en la vida nacional.

Los cambios inaugurados en 1880 no se limitaron a la esfera del poder. El programa de "paz y administración" que animaba al PAN tenía entre

sus objetivos principales el impulsar la consolidación de un estado más autónomo de la sociedad civil pero también más atento a las solicitudes de sus actores más poderosos. Aunque la aspiración de hacer del estado una herramienta capaz de impulsar el desarrollo económico no era nueva, en esos años el cierre de una larga etapa de conflicto y una situación internacional muy favorable sentaron las bases que permitieron hacerla realidad. De este modo surgió un nuevo orden bifronte, en el que tenían un peso decisivo (desproporcionado respecto de su poder económico) las fuerzas políticas surgidas en el interior del país que, sin embargo, estaba en inmejorables condiciones para dar respuesta a las demandas de la elite económica pampeana.

Algunos rasgos de este nuevo orden se advirtieron incluso antes de la llegada de Roca a la presidencia. En 1879, el ejército federal, que se encontraba bajo su comando, lanzó una agresiva campaña contra las tribus que señoreaban sobre miles de leguas de tierra pampeana. En pocos meses, los indígenas fueron exterminados o subyugados, y el ejército federal empujó las fronteras del estado en el oeste y en el sur hasta cerca de sus límites actuales. A la "Conquista del Desierto" le siguió el traspaso al dominio privado de las tierras apropiadas a los indígenas. Al igual que otros festines territoriales más modestos del pasado, las ventas de tierras que acompañaron a la campaña de 1879-1880 reforzaron el peso de los grandes propietarios y de la gran estancia en la economía nacional.

La derrota indígena y la política de desarrollo de infraestructura a la que el gobierno prestó atención preferente ayudaron a una rápida transformación del mundo rural. En esos años, las fuerzas del estado y del mercado se combinaron para dar un gran impulso a la producción rural y a la transformación de la campaña. En los años ochenta, nuevas líneas de ferrocarril y telégrafo comenzaron a adentrarse en la pampa a un ritmo que no reconocía precedentes. Al mismo tiempo que la propiedad privada recibía una decidida sanción estatal y que los medios de transporte se multiplicaban, el capital comenzaba a moverse más rápidamente hacia el sector rural. En el clima muy propicio de la década de 1880, alcanzaron gran ímpetu fuerzas que impulsaban la acción empresarial desde el decenio anterior, y que favorecieron la incorporación de reproductores de raza, la expansión del alambrado, la mejora de las construcciones. Estas nuevas tecnologías, que se volvieron menos onerosas y de uso más frecuente, ayudaron a convertir una economía ganadera –en la que en muchos aspectos todavía se reconocía la de medio siglo atrás– en una actividad más moderna y sofisticada. Aunque este cambio estuvo lejos de alcanzar a todos los productores, la década de 1880 fue testigo

de la emergencia de un notable proceso de especialización e innovación técnica en la actividad ganadera, que también impactó de distinta manera sobre otras actividades productivas.

La gran estancia, sede privilegiada de esta transformación, reforzó su lugar central en la economía ganadera. En este período, las grandes unidades de producción se consolidaron como las empresas más modernas, eficientes y rentables para la cría de animales. Algunas décadas atrás, las grandes estancias habían sido descriptas muchas veces como el meollo de una cultura ganadera atrasada y refractaria a todo progreso, aun como un obstáculo a la vida civilizada. Esta imagen cambió radicalmente en la década de 1880, cuando un número cada vez mayor de grandes propietarios cayó bajo el influyo de las ideas de cambio, progreso y mejora. El pesimismo que hasta entonces condenaba aspectos centrales de la cultura estanciera comenzó a dejar lugar a una extendida vena optimista, y no fueron pocos los que, de modo por cierto complaciente, se hicieron eco de las voces que señalaban que la estancia estaba dejando atrás su pasado bárbaro. En numerosas ocasiones los grandes propietarios fueron retratados como los impulsores de una ganadería en veloz transformación, que para fines de la década de 1880 era ampliamente reconocida como una actividad moderna y dinámica. Cuando despuntaba el nuevo siglo, la estancia pampeana se había convertido en una de las empresas de producción de carne refinada más eficientes del mundo.

Este fue, sin duda, el período dorado de la ideología terrateniente en la Argentina. Los cambios materiales y simbólicos que hablaban de la transformación de la estancia y la ganadería beneficiaron en primer lugar a los grandes propietarios. El dinámico capitalismo agrario finisecular hizo posible que los magnates territoriales alcanzaran fortunas espectaculares, considerablemente más grandes que las de mediados de siglo y a veces comparables con las de la elite de la riqueza europea. Al mismo tiempo, contribuyó a darle a la elite propietaria una legitimidad de la que antes carecía. En tanto aparecía como la fuerza más visible y poderosa que impulsaba el proceso de reforma rural, la figura del estanciero progresista comenzó a asociarse con la modernidad económica y la distinción social. No es sencillo determinar cuán profundo fue el cambio en la imagen del estanciero, ni cómo este fue percibido por las clases subalternas. El hecho de que la modernización de la estancia se llevase a cabo sin mayores conflictos sociales, y sin que ninguna voz se alzara para condenarla, debe haber contribuido a afirmar esta visión a los ojos de muchos. La atención que concitaron

las exposiciones de la Sociedad Rural –auténticas celebraciones de los logros de la Argentina terrateniente– sugiere que las clases medias y bajas urbanas no permanecieron indiferentes frente a los encantos de la ganadería, puesto que muchos de sus integrantes también formaron parte del coro que veía con simpatía o admiración a la elite terrateniente que animaba estos eventos. Es indudable, sin embargo, que la moderna actividad ganadera ejercía un influjo particularmente poderoso sobre aquellos que se encontraban más cerca de la cumbre. Fueron estos grupos los que consagraron al gran ganadero aristocrático y progresista como el segmento más prestigioso y dinámico de la burguesía argentina.

Así, los magnates territoriales de la pampa alcanzaron una posición que les permitía reclamar para sí algo más que aquellos privilegios que les están reservados a los hombres de fortuna. La identidad progresista que se definió en esas décadas les permitió constituirse también como una auténtica fuerza social y cultural, capaz de irradiar su influencia sobre toda la sociedad argentina. Este cambio en el clima público no pasó inadvertido para los grandes propietarios, a punto tal que las características más notables del estado de ánimo terrateniente en las tres décadas que sucedieron a la Conquista del Desierto (con la excepción parcial del período que sucedió a la depresión de 1890), pueden resumirse en tres vocablos: empuje, prosperidad y optimismo. En esas décadas, las visiones que retrataban a los terratenientes como sujetos reacios a todo progreso perdieron entidad. Repetidamente, los grandes propietarios modernizadores fueron caracterizados como figuras que encarnaban valores que gozaban de gran prestigio –esfuerzo, determinación, modernidad, capacidad de innovación– y como empresarios que sabían sacar provecho de los recursos y las oportunidades que ofrecía una economía en expansión. Esta ideología del *self-made man*, del triunfo alcanzado mediante el esfuerzo y la inteligencia personal, típica de una sociedad de frontera, seguramente ayudó a algunos de los nuevos ricos a trepar hasta la cumbre de la elite social. El clima de opinión que premiaba las conquistas de una trayectoria individual también contribuyó a transformar a los miembros más antiguos de la elite, que en esos años descubrían cuán atractivos podían resultar los emprendimientos rurales.

Es indudable, empero, que esta ideología coexistía con principios menos democráticos, sobre los cuales también se basaban los reclamos de reconocimiento y distinción a los que aspiraba la clase alta. Así, por ejemplo, el aura de prestigio que rodeaba a las elites propietarias europeas,

en particular a la británica, no dejaba de atraer a los que coronaban la cima de la sociedad. Es importante destacar, sin embargo, que la mirada de los terratenientes argentinos sobre las antiguas clases propietarias europeas solía destacar sus aspectos burgueses por sobre los referidos al linaje. En repetidas ocasiones los estancieros señalaron que la contribución de las elites territoriales europeas a la mejora de las técnicas agrícolas y de la sociedad rural conformaba una de las fuentes sobre las que se asentaba el poder sobre la tierra y los hombres del Viejo Continente.

A fines del siglo XIX, la figura del estanciero progresista apareció dotada de atributos que hacían de ella un elemento positivo para el desarrollo del país y un modelo digno de emulación. Fue en este contexto que el desprecio que la elite sentía por el mundo rural dio lugar a un novedoso interés en la producción agraria. La consolidación de la Sociedad Rural y la fundación de nuevas asociaciones que de distintas maneras expresaban el ideario terrateniente, tales como el Jockey Club y la Liga Agraria, datan de este período. Este clima también invitó a las clases propietarias a residir más regularmente en la campaña, en especial durante el verano, e inspiró la construcción de lujosas casas de campo.

Es claro que el descubrimiento del atractivo del mundo de la estancia no fue sólo el resultado de la búsqueda de distinción social. Consideraciones de tipo más pragmático desempeñaron un papel de primer orden en este proceso. Cuando los empresarios comenzaron a percibir que la economía argentina por fin alcanzaba estabilidad y buenas perspectivas de crecimiento en el largo plazo, la tierra se afirmó como una fuente de rentas y ganancias extremadamente segura, que se incrementaban con el tiempo, y que además podía complementar otros emprendimientos en el comercio, la industria, las finanzas o las profesiones liberales. Ello contribuyó a expandir la base de los grupos que tenían intereses en el sector rural y, hasta cierto punto, a recrear la imagen de los grupos propietarios. Lo que hemos visto en las décadas que sucedieron a la fundación de la Sociedad Rural es un proceso de creciente diferenciación entre los grupos empresarios. La profundidad de este fenómeno resultó, sin embargo, relativa. Los capitalistas con fuertes intereses rurales profundizaron su especialización, concentrándose en negocios dentro de este sector. Los frutos que esta estrategia reportaba no eran pocos, como lo testimonia el hecho de que la cúspide de la elite socioeconómica del cambio de siglo estaba mayoritariamente poblada por aquellos que perseveraron en este camino.

Dicha lección no pasó inadvertida para los hombres de negocios que actuaban en otras esferas, y no fueron pocos los que desplazaron recursos hacia la inversión en tierra. Es por ello que, si bien desde la década de 1880 la economía argentina se tornó más compleja, dando lugar a la aparición de un sector industrial que creció a un ritmo veloz, también puso en evidencia que muchos de los empresarios exitosos en otras esferas demostraban interés en la inversión rural. Por otra parte, este período no asistió a la aparición de actividades productivas capaces de eclipsar el prestigio de que gozaban la ganadería moderna y la actividad rural. En particular, la industria y los industriales no alcanzaron el mismo estatus que la tierra y los estancieros. Todo ello hizo que, concebida como una fuente de rentas y ganancias, pero también como un indicador que hablaba del éxito obtenido en otros terrenos de actividad, la propiedad de una estancia concitara los deseos de todos los grupos propietarios. Para el cambio de siglo, los grandes señores de la pampa coronaban una clase propietaria diversa y compleja, más propensa a emular que a desafiar el mundo de relaciones y representaciones que aquellos presidían.

El reconocimiento alcanzado por los grandes propietarios ofrece claves para entender su actitud hacia el estado y la política, que en este período cambió de modo sustantivo. Los gobernantes de la década de 1880 consolidaron un estado capaz de favorecer el proceso de acumulación de capital, y que prestaba especial atención a las necesidades de la economía agraria. La prosperidad que signó a esa década, así como las oportunidades que la expansión económica y la consolidación del estado ofrecieron a las oligarquías del interior para que expandieran sus intereses económicos hacia el litoral (tomando parte, por ejemplo, en la adquisición de la tierra que la Campaña al Desierto hacía ingresar al mercado) pueden haber contribuido a limar las asperezas y asimilar las visiones de los "Bárbaros del Norte" y la elite de Buenos Aires. Sin embargo, la relación entre elite política y elite socioeconómica no puede describirse sin más como armoniosa. La idea de unidad entre clases propietarias y estado sólo puede ser vista como plausible si se toma distancia de las visiones instrumentales del orden político. En rigor, esa unidad era antes que nada una unidad de objetivos, hecha posible gracias a la capacidad del estado de imponer un orden y promover unas políticas que contaban con la firme aprobación del empresariado rural.

Esta unidad de objetivos no debe hacer olvidar que existían, al mismo tiempo, una serie de puntos de fricción. En distintas ocasiones durante la década de 1880, voceros terratenientes denunciaron la ilegitimidad

del orden político. Estas críticas revelaban, por una parte, desconfianza hacia los gobernantes que alcanzaron el poder en esos años. Sugieren también que los terratenientes temían una regresión a la convulsiva vida política anterior a 1880. Las tensiones implícitas en la relación entre terratenientes y estado salieron a la luz cuando la expansiva década se cerró en medio de una profunda crisis económica, que a su vez abrió el camino para un severo cuestionamiento a la autoridad del estado. Esta doble crisis agrietó el cemento que había soldado la alianza entre la clase terrateniente y la elite gobernante. El colapso del orden político hegemonizado por el PAN y la crisis económica se hicieron sentir cuando los terratenientes venían de experimentar una larga década de consolidación social y económica. La depresión económica incentivó a los grandes dueños del suelo a adoptar una actitud más comprometida en la vida de la República, a la vez que el derrumbe de la fuerza política dominante en la década anterior dio argumentos a aquellos estancieros que insistían en que los actores económicos más poderosos y más prestigiosos de la Argentina no podían permanecer indiferentes frente a ese descalabro; por otra parte, este parecía abrirles inéditas oportunidades para el acceso al poder. En el clima enrarecido de la primera parte de la década de 1890, se hicieron más audibles las voces que insistían en que una clase terrateniente hondamente renovada, más poderosa y cohesionada, debía convertiste también en una clase gobernante.

Este programa fracasó. La historia de la Unión Provincial ofrece indicaciones precisas tanto sobre el nuevo estatus económico y social adquirido por los terratenientes, que impulsaba su proyecto de conquistar el estado provincial, como sobre las debilidades de su base política. El intento de dar vida a una organización de clase capaz de ganarse un lugar central en la vida pública pronto se reveló un gran fiasco. A pesar de su eminente posición socioeconómica, los vacunos fueron incapaces de competir en pie de igualdad con las fuerzas políticas que se disputaban el control del estado. Las características estructurales de la sociedad rural no favorecían el proyecto terrateniente. Es indudable que en los años previos la elite propietaria, que había profundizado su vocación rural, reforzó su posición en la campaña. Pero, en lo fundamental, la sociedad rural siguió siendo demasiado compleja y móvil como para que sobre ella pudiera erigirse el reinado político de la gran propiedad. La pampa no era, y nunca había sido, un mundo rural simple, polarizado entre un grupo de grandes propietarios y el conjunto de sus dependientes, cohesionado por lazos tradicionales o

paternalistas. Esta sociedad nueva pertenecía a un tipo histórico distinto, por ejemplo, del Valle Central de Chile, donde el indisputado dominio que los dueños del suelo ejercían sobre los hombres y la tierra había reunido a la elite terrateniente y a sus inferiores en sólidas y perdurables comunidades de opresión. Es probable que, en esos años, distintos mecanismos de subordinación social se hubiesen visto reforzados dentro de las estancias modernizadas, donde se hizo visible la formación de una fuerza de trabajo más estable y disciplinada. Las grandes estancias, sin embargo, sólo alojaban a una parte muy minoritaria de la población de la campaña. Más allá de sus tranqueras, la diversidad de los grupos propietarios y el desarrollo de una sociedad móvil y compleja impugnaban cualquier pretensión de liderazgo que los terratenientes pudiesen abrigar.

La debilidad de los estancieros frente las fuerzas políticas del orden oligárquico es quizás aún más relevante para entender el fracaso de la Unión Provincial. Mucho antes de la era de la política democrática, la campaña de Buenos Aires ya poseía una larga experiencia de competencia entre poderosas maquinarias electorales. Los estancieros pueden haber tenido algo de razón cuando enfatizaban la naturaleza subalterna de muchos políticos, y que la política tenía rasgos que hacían de ella algo muy distinto a la entrega desinteresada en aras del bien público (en palabras de Miguel Cané, que la política "consiste en cohonestar con pillos, ladrones y manos sucias").[1] Los vacunos pronto advirtieron también que el control que las maquinarias políticas ejercían sobre sus feudos electorales no resultaba sencillo de desafiar para quienes sólo poseían preeminencia social y peso económico, y que no podían establecer una relación meramente instrumental con los políticos del orden oligárquico.

El interés que movió a los terratenientes a ocuparse de los asuntos públicos en la primera parte de la década de 1890 es comprensible. Durante esos años el mundo terrateniente se sumió en un estado de inquietud que obligó a sus integrantes, aun a desgano, a considerar qué alternativas se ofrecían para reconstruir el poder del estado. Para mediados de los años noventa, la situación política perdió dramatismo, y la crisis económica y el pesimismo dieron lugar al renacimiento de la prosperidad y del optimismo. Ello conspiró contra los propósitos de aquellos estancieros que, como los nucleados en la Liga Agraria, todavía instaban a sus pares a hacer realidad el proyecto de crear una poderosa fuerza terrateniente. Para el cambio de siglo se hizo evidente que los miembros de esta asociación formaban un grupo aislado, y que

el grueso de los estancieros mostraba escaso interés en los proyectos políticos acariciados por Carlos Guerrero y sus compañeros de causa. Las agrias denuncias lanzadas por los liguistas contaron con la simpatía de muchos estancieros. Pero sólo en ocasiones bien definidas esta aprobación se tradujo en apoyo concreto a la cruzada de estos ruralistas. Para los prósperos años del cambio de siglo, los estancieros juzgaban negativamente muchos de los vicios del orden político oligárquico, pero al mismo tiempo mostraban muy poca disposición para desempeñar un papel relevante en su erradicación.

Algo similar sucedió con la actitud de los terratenientes hacia las transformaciones que experimentaba la economía argentina, que dieron por resultado la formación de una sociedad urbana más compleja. En las décadas de 1880 y 1890, la actividad manufacturera comenzó a dejar los pequeños talleres en los que hasta entonces se había desenvuelto, y a desplazarse hacia unidades de producción de mayor tamaño. La República avanzó por el camino de la industrialización. Este movimiento contó con importantes apoyos en la elite política, en particular en el interior del país, que de distintas maneras impulsó la sanción de una legislación proteccionista.

A pesar de sus temores iniciales, muy evidentes en la década de 1890, a mediano plazo los terratenientes advirtieron que la emergencia de un sector industrial más moderno y la aparición de nuevos grupos empresarios con intereses específicos, distintos a los del sector rural, y con cierta incidencia sobre el estado, no implicaba mayor desafío a su posición privilegiada. Cuando las amenazas de una guerra de tarifas que podía afectar a las exportaciones rurales comenzaron a perder peso hacia el cambio de siglo, el proteccionismo se reveló menos peligroso de lo que algunos terratenientes gustaban afirmar. Aun cuando estancieros y agricultores protestaron contra las tarifas aduaneras, siempre se mostraron firmes en su preferencia por los impuestos a las importaciones por sobre otras formas de financiar el gasto del estado central. A pesar de sus encendidas críticas al proteccionismo, los terratenientes nunca presentaron ningún proyecto digno de consideración para transformar el sistema impositivo. Es por ello que, en definitiva, una vez superada la depresión de la década de 1890, la tarifa aduanera creó condiciones propicias para articular los intereses de la industria doméstica y de la actividad exportadora. De allí en adelante, los terratenientes aprendieron a convivir con una economía más diversificada. Por su parte, los industriales nunca terminaron de percibir sus intereses como distintos a los del proyecto hegemonizado por el sector rural, y sólo hacia fines de la década de 1920 la

visión que afirmaba que la manufactura desempeñaba un papel secundario y subordinado al de la economía agraria de exportación comenzó a recibir impugnaciones. Considerando el problema desde la perspectiva que ofrecen los propietarios del suelo, es posible concluir que las relaciones de este grupo con el sector industrial en la era agroexportadora no reconocen un carácter antagónico. En rigor, estas relaciones pueden ser descriptas mejor como signadas por una dependencia estructural de la industria respecto del sector de exportación, y por conflictos circunstanciales, el más importante de los cuales estaba vinculado a los obstáculos que la protección podía crear al provocar represalias contra la producción exportable de la pampa.

A lo largo de este período, las demandas de los terratenientes sólo ocasionalmente dieron lugar a la acción colectiva. Más habitual aunque menos visible fue, sin duda, el discreto reclamo canalizado a través de relaciones personales con figuras ubicadas en la cúspide del estado. De diversas maneras, ello puso a los grandes propietarios en relación con las altas esferas del poder sin necesidad de trajinar los vericuetos de un mundo político que muchos de ellos percibían como en gran medida ajeno, y frente al cual siempre exhibieron desconfianza. Ciertamente, este sentimiento hizo que los grandes estancieros también contribuyeran a afirmar una larga tradición argentina que presenta a la política, y no sólo a la política local, como una actividad degradada, impropia de hombres de moral íntegra. Su distanciamiento de ese mundo, empero, no se fundaba sola ni centralmente en sus vínculos con la elite gobernante: estaba posibilitado por el marco más general de relaciones sobre las que se asentaba el poder terrateniente, que daban vida a una economía dinámica y exitosa, y a una sociedad rural escasamente conflictiva, en la que los grandes propietarios coronaban la cúspide de un orden que gozaba de más apoyos que impugnaciones.

En este sentido, es necesario insistir en que el rechazo de los terratenientes a los ambiciosos proyectos de conquista del poder voceados por los ruralistas, y su preferencia por hacer sentir sus reclamos mediante presiones puntuales sobre las elites políticas, no sólo fue compatible con la reproducción de ese orden, sino que permitió que los grandes señores de la pampa alcanzaran fortunas territoriales que podían compararse con las de las clases terratenientes más ricas del mundo. Ello dio un golpe mortal al ruralismo político. Pues si bien muchos estancieros compartieron la aprensión hacia el mundo político que expresaban experiencias como la de la Unión Provincial, la Liga Agraria o la Defensa Rural, los motivos para comprometerse en su reforma nunca alcanzaron

gran urgencia. Para muchos estancieros, la vida privada era demasiado cómoda y atractiva como para postergarla persiguiendo proyectos políticos que requerían dedicación y esfuerzo y que, en el mejor de los casos, eran de resultados cuando menos inciertos.

La fragilidad de los lazos entre la elite propietaria y el orden oligárquico se puso de manifiesto en 1912, cuando el sistema electoral fue reformado a instancias del presidente Sáenz Peña. La mayoría de los propietarios rurales no mostró mayor inquietud frente al curso que tomaban los acontecimientos, y ni rechazó ni resistió la creación de un orden más representativo. El hecho de que los líderes de la Sociedad Rural y la Liga Agraria se decidieran a lanzar la Defensa Rural en 1912 con el fin de desafiar al gobierno conservador ya sugiere su grado de alienación respecto de la elite política que reinaba sobre la provincia donde poseían sus más valiosos imperios territoriales. Como hemos visto, también sugiere que consideraban que el clima político del momento, singularizado por una extendida desconfianza hacia las autoridades conservadoras, resultaba favorable para sus proyectos. En efecto, los líderes de la Defensa Rural percibían que el ingreso de esta fuerza en el escenario político contaba con la simpatía de segmentos decisivos de la opinión pública, y que incluso estaba en condiciones de concitar apoyos sustantivos entre las mayorías. Ello explica la actitud expectante, pero en definitiva favorable, con la que los terratenientes asistieron a la llegada de la democracia.

Sería erróneo concluir, sin más, que los terratenientes formaban parte activa de una constelación de fuerzas prodemocráticas. En rigor, las clases propietarias rurales consideraban que su preeminencia económica y social estaba mejor enraizada en la sociedad que en el estado, y que por tanto esta era independiente de la suerte de la elite gobernante y del orden oligárquico. A diferencia de otras clases dominantes, como los *Junker* prusianos, los terratenientes argentinos no necesitaban recurrir a la coerción o al apoyo estatal para apropiarse de excedente agrario. Los dueños del suelo de la pampa, que presidían sobre una dinámica economía capitalista, se apropiaban de renta y de ganancia por medio de puros mecanismos de mercado. En este sentido, se asemejaban más a los terratenientes ingleses que a los alemanes. Como hemos visto, empero, su posición *vis-à-vis* el poder político era distinta a la de la elite rural inglesa del siglo XIX. Esta circunstancia histórica tuvo importantes consecuencias. La debilidad de los lazos políticos entre los terratenientes de la pampa y la elite política oligárquica, y la fortaleza de su posición socioeconómica, volvió a los estancieros propensos a aceptar una expansión del sufragio que volviera al orden político más transparente, esto es,

que reflejara mejor el peso de las fuerzas social y económicamente predominantes. Para el cambio de siglo, la Liga Agraria ya se había adelantado a la propuesta reformista de Sáenz Peña, reclamando un sistema de sufragio obligatorio y secreto para todos los hombres adultos. Su apoyo a una reforma de este tipo no resultaba de una ciega confianza en la responsabilidad cívica del hombre común; era, en esencia, una medida calculada para contrarrestar la autonomía de la elite política. La propuesta democrática e inclusiva voceada por estos terratenientes estaba fundada sobre la premisa de que la elite propietaria determinaría el papel que las clases subalternas estaban llamadas a desempeñar en la vida pública. Al igual que en el Chile del cambio de siglo, el proyecto de erosionar el lazo entre las elites políticas y sus clientelas electorales mediante la expansión de la participación no tenía por objetivo último incrementar la autonomía de las clases populares; por el contrario, apuntaba a conferir a las clases propietarias una posición política más sólida.

Esta visión se reveló errada. Cuando la Argentina marchó hacia un orden político basado en un amplio electorado dominado por el hombre común, la democracia, que hasta entonces no era más que una ilusión de un futuro mejor, perdió mucho de su atractivo para estos actores. La expansión de la participación popular trajo consigo el despertar político de las masas, que pronto comenzó a tomar formas inéditas. Orientar la movilización política de la población, que creció sustancialmente en el lapso de unos pocos años, no era una tarea para la que los terratenientes estuvieran bien preparados. Incluso más que en el pasado, en la era democrática no era el ascendiente fundado sobre el prestigio social o el éxito económico, sino el que se nutría de la dedicación plena a la actividad política (que obligaba a desarrollar estrategias proselitistas que debían interpelar a la mayor cantidad posible de grupos sociales), el elemento crucial para asegurar el éxito de determinada propuesta. Por este motivo, y contra las expectativas optimistas que en su momento algunos propietarios habían abrigado, la democracia no reforzó, sino que erosionó la posición política de los que coronaban la cumbre de la sociedad. Y ello ocurrió precisamente cuando el largo ciclo de expansión que había hecho a la Argentina tan exitosa mostraba los primeros signos de debilitamiento, y cuando las relaciones sociales en la pampa, que alcanzaba un perfil de clases más definido, se tornaban más rígidas y conflictivas.

La gradual erosión de la augusta posición de los señores de la pampa debe entenderse en el contexto de las grandes transformaciones políticas y sociales que afectaron a la sociedad argentina en el nuevo siglo. Para la década de 1910, la clase propietaria rural, enriquecida y consoli-

dada, había marcado la distancia que la separaba del resto de la sociedad con mayor nitidez que en cualquier momento del pasado republicano. "Uno no puede sino sonreír", advertía un observador atento en 1916, "cuando encuentra escritores que afirman que el ingreso en la Sociedad Argentina está al alcance de cualquiera que, como una vez se afirmó, está en condiciones de jugar bien una mano de bridge. De hecho, ningún extraño logra jamás convertirse en miembro de la mejor Sociedad Argentina".[2] A diferencia de lo sucedido un cuarto de siglo antes, la nueva riqueza se tornó cada vez menos corriente en los estratos superiores de la clase terrateniente. La ideología del *self-made man,* que había sido tan central a la imagen progresista de los estancieros, comenzó a perder su atractivo. Al mismo tiempo, la ganadería agotaba su capacidad para transformar la sociedad rural. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, los panegiristas que alababan el papel progresista desempeñado por los grandes propietarios desaparecieron del escenario. Los relatos que habían sido corrientes algunas décadas atrás, y que describían a los grandes estancieros como un dinámico empresariado rural, cedieron posiciones frente a nuevas visiones, que ponían de manifiesto que la fortuna de los dueños del suelo no se debía a su propio esfuerzo, sino al azar y al privilegio de la herencia. Al mismo tiempo, estos relatos describían a los estancieros no como un empresariado capaz de impulsar o acompañar el proceso de crecimiento económico y transformación social, sino como una clase parasitaria e improductiva, más propensa a derrochar que a crear riqueza.

La metamorfosis que afectó a la elite propietaria, y a la imagen que la sociedad tenía de ella, fueron parte de un cambio social más vasto. La consagración de una jerarquía de la riqueza más exclusiva fue acompañada por la definición de una estructura social más rígida en el mundo rural. Ello dio por resultado la gradual desaparición de las oportunidades de ascenso social características del período anterior. Para fines de la década de 1900, la incorporación de nuevas tierras dejó de tener el papel central que hasta entonces había desempeñado como el principal demento que dinamizaba la sociedad y la economía pampeanas. Este proceso afectó, en primer lugar, a los productores agrícolas, en particular a los más débiles. Durante décadas, distintos sistemas de aparcería o arrendamiento habían permitido que los trabajadores sacasen ventaja de la escasez de fuerza de trabajo que caracterizaba a la pampa. El cierre de la frontera y la continuación del flujo migratorio europeo modificaron este cuadro, volcando la situación en favor de los dueños del suelo. Desde los años del Centenario, los chacareros encontraron cada vez mayores obstáculos en

el camino del ascenso social, puesto que entonces debieron enfrentar un incremento de la renta y mayores dificultades para acceder a la propiedad de la tierra. Como consecuencia del aumento de las tensiones entre propietarios y arrendatarios que esta situación trajo aparejada, antiguos problemas que habían permanecido largo tiempo como temas de interés meramente intelectual tomaron una nueva urgencia.

A los terratenientes, sin embargo, les llevó cierto tiempo advertir que habían ingresado en una era nueva, signada por un incremento de la conflictividad social. De hecho, no fueron pocos los estancieros que reaccionaron con sorpresa frente al giro que tomaban los acontecimientos, a punto tal que los más idealistas todavía abrigaban la esperanza de que era posible movilizar las energías de los propietarios con el fin de enderezar la situación. En efecto, aquellos propietarios cuya mentalidad los hacía juzgar a los socialmente inferiores como personas necesitadas de guía consideraban natural concluir que una solución definitiva a los problemas de los chacareros no podía alcanzarse sin la intervención decidida de los propios dueños del suelo. A poco andar se hizo evidente que los estancieros eran reacios a hacer voluntariamente los sacrificios necesarios para impulsar un programa que tenía por fin último expulsarlos de la tierra. Al mismo tiempo, la aparición de la Federación Agraria puso fin al monopolio que hasta entonces los estancieros habían ejercido como representantes de los intereses del sector rural. Tras la huelga agraria de Alcorta, este vocero de las demandas chacareras una y otra vez insistió en que los terratenientes desempeñaban un papel pasivo, y en muchos casos negativo, en la agricultura argentina. De allí en adelante, la gran propiedad fue sometida a una crítica cuya intensidad varió de acuerdo con la coyuntura, pero que nunca desapareció.

En aquellos años, la historia de la clase terrateniente pampeana cambió de signo. Esta ya no puede relatarse como el proceso de construcción de una elite que, a la vez que se recreaba a sí misma, construía un modelo que muchos de los que ocupaban posiciones sociales más humildes aspiraban a emular. En lo fundamental, la trayectoria de los grandes señores de la pampa desde la década de 1910 fue la de un grupo social cristalizado, cuyo ciclo ascendente estaba agotado. De allí en adelante su historia fue la de una elite que, con notable tenacidad, se esforzó por conservar las posiciones que había conquistado en el pasado, y a demorar todo lo posible la disolución de su mundo dorado.

Luego de 1912, ganó fuerza en la Argentina la denuncia de los efectos nocivos de la gran propiedad, como también de la falta de espíritu empresarial de los dueños del suelo pampeano. Durante gran parte del

siglo XIX, la retórica política y la opinión pública habían descripto a los grandes propietarios como elementos antisociales, y como parásitos antes que como elementos positivos del desarrollo económico y social de la comunidad. La modernización de la estancia ganadera en las últimas décadas del siglo XIX ayudó a modificar esta visión, y por algo más de un cuarto de siglo los grandes propietarios disfrutaron de una mejor imagen pública. Los elogios al papel desempeñado por los grandes propietarios como impulsores de muchos de los cambios económicos que transformaron la campaña marcaron el tono del clima de ideas del cambio de siglo. Pero esta visión optimista no pudo sobrevivir en el nuevo escenario signado por el ascenso del conflicto social en el campo. En la década de 1910, resurgieron elementos de la corriente de crítica a la gran propiedad forjados a lo largo del siglo XIX. Para la década de 1920, estas visiones alcanzaron mayor eco. En esos años, los voceros reformistas ganaron la batalla ideológica, puesto que lograron asociar a la gran propiedad con la riqueza adquirida sin esfuerzo y con el privilegio hereditario. Las ideas asociadas al linaje y la antigüedad –que los propios terratenientes a su modo contribuyeron a crear en sus esfuerzos por dotarse de un pasado distinguido– ayudaron a dar forma a esta crítica que describía al latifundismo como un fenómeno que venía, sin mayores cambios, del fondo de los tiempos. Los terratenientes comenzaron a ser denostados a partir de las limitaciones que se hacían evidentes cuando se los comparaba con las nuevas formas de dinamismo empresario que asomaban en el mundo, en primer lugar el millonario estadounidense. En la clase alta argentina, sostenía uno de sus censores en 1915, "hombres de miras elevadas nunca habrá muchos [...] no hay aquí los Vanderbilts y los Carnegies".[3]

Para entonces, los terratenientes comenzaban a percibirse como una elite asediada. En el corto plazo, las consecuencias prácticas de esta situación no fueron relevantes para su situación económica. Por largas décadas, los agricultores arrendatarios fracasaron a la hora de modificar en su favor las relaciones que entablaban con los dueños del suelo. Los trabajadores asalariados, que protagonizaron grandes movilizaciones a fines de la Primera Guerra Mundial, fueron igualmente derrotados. Pero estas victorias no atenuaron sino que incrementaron el aislamiento de los grandes propietarios, percibidos cada vez más como una elite egoísta, que sólo atendía sus intereses particulares. La creciente hostilidad hacia la gran propiedad tuvo por consecuencia la progresiva retirada de los estancieros de una escena pública que les resultaba cada vez menos hospitalaria. Desde la década de 1910, los estancieros comenzaron a advertir que los tiempos en los que sus opiniones eran

recibidas con respeto y juzgadas con consideración habían terminado, y de allí en adelante comenzaron a encerrarse en un creciente mutismo, del que sólo ocasionalmente salieron en defensa de sus intereses corporativos.

La alienación de los grandes propietarios de la vida pública no se debía sólo a la emergencia de una era de mayor conflicto social. Contra las previsiones de algunos estancieros optimistas, la reforma del sistema político tuvo por efecto potenciar las demandas sociales, sobre todo en el mundo urbano, y erosionar el poder de las elites. La expansión de la participación política y la llegada de la democracia trajeron consigo un clima propicio para la formulación de reclamos de mayor justicia social e igualdad económica, que inevitablemente contribuyeron a poner en cuestión algunas prerrogativas de los más poderosos. Luego de las elecciones de 1916, el gobierno se vio obligado a adoptar una actitud más benévola hacia las demandas obreras, y de hecho favoreció la consolidación de las organizaciones sindicales más moderadas. Al mismo tiempo, las nuevas autoridades modificaron los patrones de asignación del gasto estatal, orientando sumas crecientes en función de los reclamos que surgían de los sectores medios y bajos de la población, que dieron por resultado la sanción de medidas tales como el salario mínimo para empleados públicos o la jornada laboral de ocho horas. Estas medidas apuntaban, al menos parcialmente, a favorecer la expansión de la base de apoyo del partido gobernante.

Por otra parte, los radicales mostraron gran respeto por los grupos social y económicamente más poderosos, y reprimieron con dureza los desafíos al orden social. También se abstuvieron de alentar o impulsar una reforma del régimen de tenencia de la tierra que inevitablemente hubiese afectado los intereses de la gran propiedad. Los terratenientes lanzaron airadas acusaciones contra el gobierno radical, que consideraban responsable de la inminente ruina del sector rural. Poco justificaba, empero, estos sombríos augurios. Al igual que José Batlle y Ordóñez en Uruguay, los radicales argentinos se abstuvieron deliberadamente de favorecer reformas que pudiesen afectar el orden productivo en los distritos donde se generaba la riqueza del país, y de cuya vitalidad dependían muchos de los experimentos de reformismo urbano a que eran tan afectos.

Los terratenientes de la pampa siempre juzgaron negativamente las políticas del gobierno radical destinadas a orientar los recursos públicos hacia los sectores medios y bajos, que poblaban al sector público con seguidores y clientes electorales, y que impulsaban la construcción

de una gran maquinaria política. Una y otra vez, los estancieros se manifestaron contra la demagogia política y la corrupción de la vida pública. No se trataba simplemente de un lamento angustiado que hablaba de una preeminencia política perdida. Las relaciones entre la elite social y la clase gobernante nunca habían sido sencillas, como lo sugiere el hecho de que las denuncias contra los políticos que se escuchaban en los años de gobierno radical recurrían a un arsenal retórico que los terratenientes habían desarrollado en el período previo a 1912. A partir de fines de la década de 1910, sin embargo, sus ataques a la elite política se volvieron parte de una denuncia más amplia del orden democrático, que había dado lugar a la emergencia de un grupo gobernante más plebeyo, como también a mayor participación popular. Para comienzos de la década de 1920, la actitud de los terratenientes hacia la democracia, a la que en su momento recibieron con expectativa y a veces con simpatía, se tornaba cada vez más hostil.

Para entender este cambio, es preciso tomar en consideración la ola de conflicto social desatada en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. En esos años, la agitación del mundo del trabajo alcanzó un nivel que no sería superado hasta mediados de la década de 1940. El incremento de la tensión social, junto con el dominio que el radicalismo ejerció sobre la escena política, acercaron a los magnates territoriales a las formaciones conservadoras. En líneas generales, la convergencia entre los grandes propietarios rurales y las fuerzas que reclamaban la herencia del viejo régimen se produjo no antes sino luego del amanecer de la democracia. Esta asociación no estuvo exenta de rispideces, ya que el clima democrático generado por la reforma obligó a todas las facciones políticas, entre ellas a las conservadoras, a comportarse de modo más receptivo hacia las demandas populares. Para sobrevivir, los herederos del régimen oligárquico debieron adaptarse a la política democrática, que obligaba a hacer esfuerzos especiales para interpelar al electorado popular. Así, representantes conservadores incluso afirmaron que el sufragio debía ser extendido aún más, hasta incluir (voluntariamente) a las mujeres alfabetizadas.[4] Esta actitud no siempre estaba fundada sobre principios ideológicos firmes, y se entiende mejor como un intento de ponerle límites a la hegemonía radical. De todas maneras, sugiere que en las filas conservadoras estaba presente la creencia de que no era sencillo retrotraer la vida política a los tiempos previos a la reforma de 1912. A pesar de los duros juicios que hicieron caer sobre el gobierno radical, el instinto de supervivencia obligó a los partidos de oposición a intentar emular

la forma de interpelar al electorado que caracterizaba al amplio movimiento popular encabezado por Hipólito Yrigoyen.

Tras la Primera Guerra Mundial, el lento crecimiento de las economías europeas, el ascenso del proteccionismo agrícola en Europa continental y la inestabilidad de los precios de los productos primarios en el mercado mundial generaron un clima más incierto para la economía de exportación argentina. El surgimiento de los Estados Unidos como el nuevo gran poder económico en la región complicó aún más las cosas, puesto que las economías de los dos países no eran complementarias sino competitivas. Ello impidió que las exportaciones de la pampa se orientaran hacia este dinámico mercado, obligando a la Argentina a reforzar sus lazos con socios comerciales que se encontraban en declive. El sector ganadero fue el más afectado por esta situación. Durante décadas, mientras la escasez relativa de carne de buena calidad hizo que el mercado favoreciera a los oferentes, los intereses de los grandes propietarios y de los productores menos prominentes en gran medida coincidieron. Las agudas fluctuaciones y luego la contracción de la demanda en las décadas de 1920 y 1930 quebraron esta armonía. En esos años, los terratenientes aprendieron, no sin dolor, que el poder relativo de productores y comercializadores se había modificado, y que el control del comercio de exportación de carnes se encontraba firmemente en manos de las empresas frigoríficas.

A pesar de que esta situación amenazaba la cohesión del sector ganadero, revertirla estaba fuera de las posibilidades tanto de los productores como de las autoridades. Los lazos que, como clientes privilegiados, los grandes estancieros habían tejido con las empresas industrializadoras, y su mayor poder económico y financiero, les permitieron afrontar la crisis mejor que otros productores más pequeños. Las acusaciones de complicidad con las empresas frigoríficas que muchos de estos lanzaron contra los grandes terratenientes pusieron de manifiesto divergencias, que no hicieron sino profundizarse con el tiempo. Desde la crisis ganadera de comienzos de la década de 1920, los estancieros medianos y pequeños comenzaron a percibir que sus intereses resultaban distintos, e incluso en más de un punto opuestos. A partir de ese momento, las voces que sindicaban a los grandes terratenientes como un obstáculo al progreso de la Argentina ya no sólo provenían del sector chacarero y de la opinión pública urbana. Argumentos similares surgían de los estratos medios e inferiores de la clase terrateniente. La Depresión Mundial no hizo más que expandir estas críticas.

Ampliamente concebidos como una influencia negativa para el desarrollo del país, para fines de la década de 1920 los mayores propietarios del suelo pampeano ya no podían presentarse como los líderes naturales del sector agrario, mucho menos del país en su conjunto. Para entonces, los grandes estancieros eran juzgados como una oligarquía tradicional, propensa a defender valores jerárquicos que concitaban el rechazo de las mayorías, carente de dinamismo empresarial, y dedicada a derrochar antes que a producir. Para muchos, los terratenientes habían abdicado sus responsabilidades y simplemente se dedicaban a gozar de la vida, en París, en Buenos Aires o en la estancia. Esta visión desencantada reflejaba el amplio consenso forjado en torno a la noción de que los grandes propietarios ya no podían desempeñar ningún papel positivo en la sociedad argentina.

Dicha perspectiva encontró seguidores en el propio empresariado, en particular entre los industriales. Cuando los conflictos en torno al proteccionismo perdieron intensidad hacia el cambio de siglo, los empresarios manufactureros reafirmaron su lugar como socios menores del modelo agroexportador. El acuerdo tácito de convivencia entre estancieros e industriales comenzó a ser objeto de cuestionamientos tras la Primera Guerra Mundial, cuando la posición internacional de Gran Bretaña declinó y los Estados Unidos aparecieron como la principal fuerza que impulsaba la profundización del proceso de industrialización. La vinculación con la economía estadounidense dependía de la vigencia de una relación económica (bilateral o multilateral) que comenzó a deteriorarse a mediados de la década de 1920. El fracaso de los ganaderos argentinos en sus intentos por colocar sus granos y sus carnes en los Estados Unidos los movió a asegurar su posición en el mercado británico, y para ello reclamaron abandonar la tradicional política abierta que presidía el comercio exterior de la República, reemplazándola por acuerdos bilaterales. La Unión Industrial se opuso tenazmente a esta propuesta, que amenazaba en particular la vinculación con la economía estadounidense, de la que la expansión y modernización de la industria doméstica dependía muy directamente. El rechazo de los empresarios manufactureros al bilateralismo angloargentino creó un contexto de competencia por la definición de la política económica que había estado ausente por un cuarto de siglo. La amenaza de conflicto dentro de la clase empresaria pareció tornarse realidad cuando los industriales comenzaron a redefinirse como rivales antes que como aliados dependientes de los grandes señores de la tierra.

La Depresión Mundial creó condiciones que, algunos años más tarde, permitieron la recomposición de los lazos entre los intereses agroexpor-

tadores y los de la industria doméstica. La crisis mundial derrumbó el orden económico que había hecho posible el notable crecimiento de la Argentina, afectando duramente a los productores agrarios de la pampa. El sector rural de exportación comenzó a contraerse, golpeado simultáneamente por la caída del volumen y del precio de los productos exportados. Los terratenientes vieron caer sus ingresos, a veces a menos de la mitad de los valores de algunos años antes. La primera reacción de los ganaderos al derrumbe del comercio exterior fue proteger su vinculación con el mercado británico, y para ello recibieron el apoyo del estado. Sin embargo, al cabo de un tiempo se hizo evidente que la declinación del comercio internacional forzaba a las autoridades a abordar la política económica desde una perspectiva más amplia. La Depresión obligó a la Argentina a reforzar su vínculo con la economía británica y, al mismo tiempo, a volverse más autosuficiente en la producción de bienes, en particular manufacturados.

Si bien el crecimiento industrial a lo largo de la década de 1930 no fue particularmente rápido, en esos años el sector manufacturero se erigió como el elemento más dinámico de la economía argentina, tanto por su contribución a la creación de empleo, como a la expansión de la producción y al reemplazo de bienes importados por otros producidos en el país. Este cambio en el escenario económico renovó profundamente a la gran elite empresaria. Para fines de los años treinta, los terratenientes ya no dominaban solos la cúspide de la riqueza argentina. En esos años, la inmensa mayoría de los individuos más ricos del país obtenían sus principales ingresos no de la campaña, sino de la ciudad, en particular de las actividades que habían ganado espacio gracias a la contracción del comercio internacional o que dependían de la expansión y complejización de la economía urbana.

Mientras que la economía urbana se tornaba la fuente principal de negocios para la elite económica, los grandes dueños del suelo ponían en práctica distintas estrategias para acomodarse a los cambios provocados por la Gran Depresión. Los terratenientes reaccionaron a la baja de su ingreso rural, en primer lugar, limitando al mínimo la inversión en el sector. Esta menor contribución terrateniente al desarrollo productivo en el agro (que durante todos esos años no sufrió ninguna mejora sustancial) no pasó inadvertida. Inevitablemente, en un contexto de empobrecimiento generalizado como el que entonces se vivía en la pampa, ello reafirmó la imagen del terrateniente como un mero extractor de riqueza producida por otros. No fue esta la única forma de enfrentar los tiempos difíciles. Entre los capitalistas rurales que tenían mayor margen de ma-

niobra, no fueron pocos los que comenzaron a desplazar recursos desde el sector primario hacia los sectores secundario y terciario. La velocidad con la que algunos propietarios rurales ingresaron en la economía urbana, acicateados por la crisis de sus fuentes tradicionales de ingreso, testimonia su capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias impuestas por la Gran Depresión. También sugiere que las destrezas adquiridas en la gestión de un establecimiento rural preparaban el camino para acceder al mundo de los directorios de las empresas urbanas (un terreno en el que el gran terrateniente, siempre atento a nuevas oportunidades de negocios, no se sentía del todo incómodo). Todo indica, sin embargo, que los hijos de las familias tradicionales de la Argentina se encontraban en minoría en la nueva elite surgida al calor de la industrialización y la urbanización. Ello no significaba, empero, que la elite rural estuviese por abdicar su posición social. Las viejas familias terratenientes conformaron quizás una parte minoritaria de la nueva elite económica, pero de todas maneras conservaron intacto su dominio sobre la alta sociedad.

La inmensa mayoría de los analistas contemporáneos no alcanzó a percibir la profundidad que alcanzó la transformación de la elite económica, y por mucho tiempo la tierra siguió siendo percibida como la base sobre la que se erigían las principales fortunas del país. En 1942, la *Review of the River Plate* llamaba la atención de sus lectores sobre "el creciente y generalizado interés y entusiasmo con el que cada año es observada la celebración del Día de la Industria Argentina en toda la República".[5] Los logros industriales del país, sin embargo, estaban lejos de eclipsar a los emblemas de la Argentina del ganado y de las mieses. Como advirtió un observador en aquel mismo año, "el día de la inauguración de la exposición de la Sociedad Rural Argentina en el parque de Palermo rivaliza con la función de gala del día de la Independencia que tiene lugar en la ópera como el acto oficial y social más importante del año [...] hermosas debutantes, cuyos nombres se ubicarán en primera fila 'entre las presentes' en la columna social del día siguiente, suspirarán sus excitados ¡ahs! y ¡ohs! mientras el gran campeón Shorthorn y el resto de los toros premiados son solemnemente paseados frente a miles de admiradores".[6] En la Argentina, algunas de las expresiones más acabadas de la supremacía social de la elite terrateniente se manifestaron cuando este grupo se encontraba sometido a fuertes críticas, y cuando su preeminencia económica se esfumaba.

La unidad de miras entre los grandes empresarios agrarios e industriales que signó a la Década Infame se afirmó en la medida en que hizo compatible el acceso al mercado británico, según reclamaban los terra-

tenientes, con un proteccionismo moderado pero efectivo que permitió la expansión de la industria doméstica. Esta alianza informal tuvo repercusiones que trascendieron el terreno de la política económica, pues le otorgó a la Concordancia una sólida base política en el gran empresariado. Los lazos entre los hombres de negocios y los políticos de las formaciones conservadoras, estrechados en los años del gobierno radical, fueron reforzados en la década de 1930, En efecto, la elite de negocios, en particular la rural, se contó entre los principales aliados políticos de la Concordancia a lo largo de toda la década que duró su fraudulento gobierno.

A cambio de su solidaridad, el gobierno ayudó a los magnates territoriales a que superaran la crisis desencadenada por la baja de los precios agrarios, que causó un marcado deterioro de la calidad de vida de los chacareros, y levantó una ola de críticas contra la gran estancia. A lo largo de ese período, el sistema basado en la gran propiedad ya no pudo garantizar condiciones de vida aceptables para los agricultores más pobres y sus familias, ni perspectivas de mejora en el futuro. Esta situación dio lugar a intensos debates en los que reiteradamente se señaló la necesidad de reformar el orden rural. Sin embargo, los intereses de los terratenientes permanecieron poco menos que intactos.

La supervivencia del statu quo no fue sólo ni centralmente resultado de la estrecha colaboración entre el estado y la comunidad de negocios. Aun cuando la imagen que describe a los chacareros arrendatarios como figuras políticamente pasivas no resulta justa, es indudable que estos nunca lograron poner en cuestión las prerrogativas de la gran propiedad. La pampa no experimentó el tipo de movilización que caracterizó a otras sociedades rurales latinoamericanas, como México luego de 1910, Colombia en la década de 1930, o Bolivia en los años cincuenta. Los chacareros arrendatarios debieron haberse sentido injustamente explotados en la década de 1930, pero no podían hacer mucho al respecto. La abundante oferta de trabajo y la competencia entre los agricultores por el acceso a la tierra colocaron a los dueños del suelo en una posición que les permitía fijar los términos de los contratos de arrendamiento e incrementar la presión sobre los cultivadores. La mecanización de la agricultura, que había alcanzado niveles destacados en la década de 1920, también tuvo por efecto debilitar a los asalariados y a los agricultores más pequeños, a muchos de los cuales expulsó del mercado de trabajo rural. Ello dio lugar a la definición de relaciones más polarizadas entre propietarios y arrendatarios. El empobrecimiento de la población subalterna y la expulsión de trabajadores

rurales no afectaron mayormente la estabilidad social de la campaña; más bien, dieron lugar a un fuerte proceso de emigración desde el campo hacia las grandes urbes, que en el período de entreguerras atravesaban importantes procesos de expansión.

Lo que es igualmente importante, los terratenientes se encontraban protegidos porque –a pesar de las falencias que se hicieron más evidentes que en cualquier momento del pasado– el sector rural mantuvo su viabilidad económica a lo largo de esta etapa de declinación. Como incluso algunos de sus más fervientes críticos no dejaban de reconocer, la economía de exportación conservó a lo largo de toda la década de 1930 su competitividad internacional. Es por ello que los gobiernos de la Concordancia, al igual que los radicales en el período anterior, mostraron gran respeto por el orden social y económico que sustentaba a la economía de la pampa, puesto que esta constituía el único sector con capacidad exportadora y, en consecuencia, el único proveedor de divisas con que contaba el país. Incluso en este período de crisis social y declinación económica, los grandes estancieros presidían sobre un orden productivo que probablemente seguía siendo el más moderno y más dinámico de América Latina.

Es por ello que, si bien los grandes propietarios debieron pagar el costo de su imagen pública cada vez más negativa, los intereses que impulsaban una reforma agraria (que, por otra parte, solían poner en el centro de atención los problemas sociales antes que los económicos) eran más débiles que en otros lugares del continente. Muchos de los estudiosos que analizaron la situación del sector agrario en la Década Infame se ocuparon de señalar que una reforma era tan necesaria como difícil de llevar a cabo. "No hay creencia más extendida entre los argentinos", afirmaba Carl Taylor en un trabajo clásico escrito en esos años, "que la idea de que una distribución más amplia de la propiedad del suelo ayudará a crear un orden social más democrático".[7] Sin embargo, ni Taylor ni otros observadores contemporáneos abrigaban mayores expectativas sobre la posibilidad de un cambio en ese sentido. En la década de 1930, la idea de que los grandes dueños del suelo constituían un impedimento para el progreso del país que no podía removerse fácilmente gozaba de amplio consenso.

Tanto es así que la puesta en marcha del proceso que fragmentó la gran propiedad en la pampa debió esperar a la aparición de una nueva constelación de fuerzas que modificó radicalmente los alineamientos políticos y las relaciones de poder en la República, y en la que las fuerzas armadas y los sindicatos ocuparon un lugar central. La irrupción

del régimen militar de 1943 y de su heredero el coronel Juan Perón marcaron el comienzo del fin del latifundismo. A poco de alcanzar el poder, el régimen militar se lanzó a conquistar una base política entre los arrendatarios rurales. Para ello, dio sanción legal a una serie de medidas que, gradual pero irrevocablemente, transformaron las estructuras de tenencia de la tierra en la pampa. El gobierno militar se propuso castigar en primer lugar a los terratenientes rentistas, que conformaban el segmento más parásito de la clase propietaria rural. La legislación sobre contratos de arrendamiento sancionada en la primavera de 1943 dio vida a un orden legal que limitaba severamente el derecho de los propietarios a disponer de sus tierras. Este sistema, que mantuvo su vigencia por más de un cuarto de siglo, impuso pesadas cargas sobre los propietarios, que en muchos casos sólo pudieron eludirlas vendiendo la tierra a los arrendatarios que la ocupaban en condiciones muy ventajosas para estos últimos. En la Argentina de la posguerra, no hubo nada parecido a una reforma agraria explícita. Sin embargo, la división de las grandes propiedades y el acceso de los arrendatarios a la propiedad de la tierra fueron mucho más profundos que en otros países del continente que atravesaron reformas agrarias más explícitas.

Las relaciones entre agricultores arrendatarios y terratenientes rentistas se transformaron completamente, al punto de que estas figuras sociales poco menos que desaparecieron en el lapso de un cuarto de siglo. La antipatía que los gobiernos de la posguerra manifestaron hacia los terratenientes y su mundo los llevó en repetidas oportunidades a favorecer a los chacareros, que incrementaron significativamente su control sobre la tierra productiva. El cambio de manos del suelo, que dio por resultado la disolución de una parte significativa de las grandes estancias y la formación de una nueva clase de productores propietarios, no estuvo lejos de representar una auténtica (aunque lenta y silenciosa) revolución social, que aceleró notablemente el proceso de fragmentación de la propiedad producto de la acción de las fuerzas del mercado o la partición hereditaria. Los nuevos propietarios surgidos de este proceso, que en muchos casos quizá siguieron juzgando con envidia al otrora poderoso estanciero, pronto se revelaron como una fuerza social conservadora. Al igual que los propietarios que lograron conservar la totalidad o parte de sus tierras, poco a poco se volvieron un pilar del orden y una barrera contra toda innovación política o social.

Luego de 1943, los arrendatarios incrementaron sus posibilidades de acceder a la tierra que labraban, y lo hicieron a expensas de los terratenientes. En otros aspectos, empero, sufrieron la misma suerte que sus

antiguos patrones, y que el resto de los productores agrarios. El clima de la posguerra no favoreció a los productores rurales, puesto que el sector agrícola ya no era percibido como aquel que resultaba crucial para asegurar el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de la población del país. Tanto los dirigentes o funcionarios encargados de orientar la política económica como el segmento mayoritario de la opinión pública consideraban que no era la agricultura de exportación sino la industria la que haría de la Argentina una nación moderna y pujante.

Así, la impugnación a la elite rural en ascenso desde la década de 1910 se transformó, en los años que corren entre la Gran Depresión y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en una condena más general al patrón de desarrollo centrado en el sector exportador. Todos los gobiernos del tercer cuarto del siglo XX, independientemente de sus preferencias ideológicas, pusieron en marcha políticas favorables al sector industrial. Estas últimas, que tenían por objetivo estimular la expansión de la industria y garantizar elevados niveles de empleo, se financiaron mediante transferencias de ingresos desde el sector agrario de exportación hacia la economía urbana. En la posguerra, la Argentina acentuó su perfil de sociedad predominantemente urbana, y el debate público se ubicó en torno a problemáticas tales como la igualdad social, el desarrollo industrial, o el lugar del peronismo en la vida del país. En este contexto, los problemas de la sociedad rural (entre los que la relación entre terratenientes y arrendatarios había perdido centralidad y rispidez) se tornaron cada vez más secundarios, y gradualmente se alejaron del centro del escenario político y de la atención de los gobernantes, las fuerzas partidarias y los intelectuales. Sólo los recurrentes problemas de la balanza de pagos, que periódicamente afectaron al país, volvieron a recordarles a los gobernantes y a sus críticos que el sector rural seguía mereciendo alguna atención. Pero una vez que estos obstáculos (que tenían un fuerte impacto sobre la expansión de la industria y los niveles salariales) parecían superados, los dilemas de la sociedad rural volvían a caer en el olvido. Ello explica por qué a menudo la historia de la Argentina a partir de la década de 1950 se ha narrado con unas pocas referencias menores a la sociedad rural o a la vieja elite propietaria.

En la actualidad, la vieja elite terrateniente está muy lejos de conformar el grupo más rico del país. Incluso aquellos propietarios que no fueron mayormente afectados por el congelamiento de arrendamientos no pudieron hacer mucho para evitar la fragmentación de la propiedad en el largo plazo. La división del patrimonio entre los descendientes de familias usualmente prolíficas contribuyó a reducir el tamaño de muchas

fortunas de base rural. Aun en el caso de aquellas pocas familias que han logrado contrarrestar los efectos de la fragmentación territorial, el tamaño de las fortunas rurales se vuelve insignificante si se lo compara con la riqueza más nueva de base industrial, financiera o comercial (o de una combinación de estos elementos). De hecho, ningún terrateniente tradicional (o más reciente) figura en la lista de los hombres más ricos del país; en la década de 1990, el mayor propietario rural de la Argentina no era un miembro de la elite tradicional, sino George Soros, un financista y especulador húngaro-estadounidense. Parte importante de las principales residencias rurales, cuya magnificencia ofrece un indicador elocuente del volumen de la riqueza apropiada por los terratenientes en los años dorados de la Argentina agroexportadora, se han transformado en hoteles para el así llamado "turismo de estancias", o han sido convertidas en sede de ambiciosos emprendimientos recreativos o residenciales. El cambio de destino de estas residencias sugiere bien la necesidad de muchos terratenientes de buscar fuentes alternativas de ingreso que les permitan conservar sus antiguas propiedades o mejorar su situación económica. En no pocos casos, los empresarios que llevan a cabo estos proyectos no pertenecen a las familias tradicionales, que en el curso del último medio siglo se vieron obligadas a desprenderse de muchas de sus propiedades. Si algunas familias terratenientes como los Cárcano, los Blaquier y los Martínez de Hoz han logrado mantener sus residencias para uso privado, ello ha sido porque han accedido a otras fuentes de ingreso, distintas a las provenientes del cultivo de la tierra, de las que se han vuelto en gran medida dependientes.

Sería quizás errado concluir este trabajo enfatizando sin más atenuantes la desaparición de la elite terrateniente. En el último medio siglo, la mayor parte de los estancieros tradicionales encontraron difícil mantener la integridad de sus propiedades, amenazadas por la legislación en vigencia y por la acción más antigua, lenta pero incesante, de la partición hereditaria. A pesar de la erosión de su base territorial, y de su expulsión del selecto grupo de los verdaderamente ricos, a pesar de la hostilidad política hacía la gran propiedad, los descendientes de la vieja elite terrateniente continuaron gozando de un notable prestigio social, que les permitió mantener por décadas sus credenciales como jueces naturales de las formas de sociabilidad de la clase alta. Quizá más importante, los grandes señores de la pampa no han sido eliminados de la memoria histórica del país. Aun si la vida de lujo y placer que hizo que los estancieros de la era agroexportadora alcanzasen un lugar muy visible entre las clases propietarias más fastuosas del mundo ha muerto

hace mucho tiempo, los grandes señores de la tierra siguen vibrando en las imágenes con las que repetidamente se los evoca. Todavía hoy, la vida dorada de los magnates territoriales de la pampa se erige como una de las imágenes más potentes que dan cuenta de la Argentina moderna. Despojado de los visos progresistas que los terratenientes supieron exhibir en el apogeo de la Argentina del ganado y de las mieses, el particular encanto de la vida de estancia sigue constituyendo un elemento central en la representación que la clase alta y, hasta cierto punto, la nación en su conjunto, ofrecen de sí mismos. No es del todo improbable, incluso, que la crisis cada vez más profunda que domina al país desde hace varias décadas abra nuevos espacios para la difusión de otras formas de juzgar el pasado, fundados sobre la nostalgia y la añoranza de tiempos tenidos por mejores, que inviten a evaluar de modos más positivos el legado de la Argentina terrateniente. ¿O acaso el interés por las suntuosas residencias rurales y el mundo que ellas evocan, que se ha renovado al calor de las transformaciones que el país ha sufrido en estas últimas dos décadas, no nos habla de un proceso de reconciliación, todavía en curso y de resultado incierto, entre el mundo de la elite tradicional y amplios segmentos de la sociedad argentina?

Notas

ADVERTENCIA A LA PRESENTE EDICIÓN

1 He analizado este problema en "La crisis del campo del otoño de 2008", *Desarrollo Económico,* 49:197 (2010), pp. 81-111.

INTRODUCCIÓN

1 Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence* (Cambridge, 1994), pp. 433, 439; Alejandro Bunge, *Una nueva Argentina* (Buenos Aires, 1940), p. 292.

2 Ejemplos típicos de esta tradición se encuentran en los trabajos de Jacinto Oddone, *La burguesía terrateniente argentina* (Buenos Aires, 1930); Horacio Giberti, *Historia económica de la ganadería argentina* (Buenos Aires, 1982); James Scobie, *Revolución en las pampas. Historia social del trigo argentino, 1860-1910* (Buenos Aires, 1968); Aldo Ferrer, *La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas actuales* (México, 1963).

3 Véase, entre otros, Jorge F. Sábato, *La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características* (Buenos Aires, 1991); Jorge Schvarzer, *Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina* (Buenos Aires, 1991).

1. LA EMERGENCIA DE UNA CONCIENCIA TERRATENIENTE

1 Sobre la aparición de una cultura asociativa en el período, véase Hilda Sabato, *La política en las calles. Entre el voto y la movilización ciudadana, Buenos Aires, 1862-1880* (Buenos Aires, 1998), pp. 49-74.

2 Sobre la crisis económica de 1866, véase José Carlos Chiaramonte, *Liberalismo y nacionalismo económicos en la Argentina* (Buenos Aires, 1971), pp. 45-69.

3 El programa de la Sociedad Rural Argentina ha sido analizado por Tulio Halperin Donghi en su libro *José Hérnández y sus mundos* (Buenos Aires, 1986), pp. 223-279.

4 Sobre la expansión agraria en la primera mitad del siglo XIX, véase Carlos Mayo, *Estancia y sociedad en la Pampa, 1740-1820* (Buenos Aires, 1995); Samuel Amaral, *The Rise of Capitalism on the Pampas. The Estancias of Buenos Aires 1785-1870* (Cambridge, 1998); Jeremy Adelman, *Republic of Capital. Buenos Aires and the Legal Transformation of the Atlantic World* (Stanford, 1999); Jonathan Brown, *A Socioeconomic History of Argentina, 1776-1860* (Cambridge, 1979); Juan Carlos Garavaglia, *Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830* (Buenos Aires, 1999). Para un análisis de algunos aspectos de esta literatura, Eduardo J. Míguez, "El capitalismo y la polilla. Avances en los estudios de la economía y la sociedad rural pampeana, 1740-1850", *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani* (en adelante, *BIR*), 21:1 (2000).

5 Sobre la expansión lanar, consúltese Hilda Sabato, *Capitalismo y ganadería en Buenos Aires. La fiebre del lanar, 1850-1890* (Buenos Aires, 1989). Sobre

El Tatay, *Anales de la Sociedad Rural Argentina* (en adelante, *ASRA*), XII:4 (1879), pp. 124-135; Michael G. Mulhall y E. T. Mulhall, *Handbook of the River Plate* (Buenos Aires, ed. de 1869), sección C, p. 45. Sobre Chas, *ASRA*, XII:1 (1879), pp. 7-10. Sobre Olivera, *ASRA*, XIV:3 (1881), p. 70; *Los establecimientos ganaderos de la sociedad anónima La Olivera* (Buenos Aires, 1911); Carlos Ravelio (pseud. de Carlos Olivera), *Eduardo Olivera (Reseña biográfica)* (Buenos Aires, 1928). Sobre los Senillosa, *ASRA*, XVIII:14 (1885), pp. 314-318; *La Argentina Rural. Retrospecto Anual de Ganadería y Agricultura* (Buenos Aires, 1911). La estancia de Oldendorff es descripta en Mulhall y Mulhall, *Handbook*, ed. de 1869, sección C, pp. 145-150. Otras descripciones de estos establecimientos y de sus dueños en Estanislao Zeballos, *A través de las cabañas* (Buenos Aires, 1888), pp. 70-134; y Herbert Gibson, *The History and Present State of the Sheep-Breeding Industry in the Argentine Republic* (Buenos Aires, 1893) pp. 33-36.

6 *ASRA*, VIII:6 (1875), p. 185.

7 Pereyra fue también el primero en introducir caballos de tiro Cleveland Bay de Gran Bretaña en 1858; a comienzos de la década de 1860 también introdujo distintas variedades de árboles en gran escala para su estancia San Juan. Véase *ASRA*, XI:11 (1878), pp. 565-570; Sociedad Rural Argentina, *Tiempos de epopeya, 1866-1966* (Buenos Aires, 1966). Sobre Urioste, *ASRA*, XIII:1 (1880), p. 24. Sobre Guerrero, *La Semana Rural* (en adelante, *LSR*), 24 de abril de 1895, p. 395; *ASRA*, LXV:9 (1932), p. 565; *El Campo y el Sport* (en adelante, *ECS*), 25 de noviembre de 1893, p. 1581.

8 *ASRA*, I:11 (1868), p. 323; II:4 (1869), pp. 141-143; III:9 (1869), pp. 348-349; IV: 11 (1871), pp. 354-357. *Standard* (en adelante, *ST*), 23 de diciembre de 1868, y 1° de enero de 1869.

9 *ASRA*, I:1 (1866), p. 1.

10 *Tribuna*, 21 de agosto de 1866.

11 Para una introducción a la historia de las clases terratenientes en Europa en el siglo XIX, pueden consultarse David Spring (ed.), *European Landed Elites in the Nineteenth Century* (Baltimore, 1977); Dominic Lieven, *The Aristocracy in Europe, 1815-1914* (Nueva York, 1990); F. M. L. Thompson, *English Landed Society in the Nineteenth Century* (Londres, 1963); Ralph Gibson y David Blinkhorn (eds.), *Landownership and Power in Modern Europe* (Cambridge, 1991); y Hanna Schissler, "The Junkers: Notes on the Social and Historical Significance of the Agrarian Elite in Prussia", en R. G. Moeller (ed.), *Peasants and Lords in Modern Germany* (Londres, 1986).

12 Eduardo Olivera, *Viaje agrícola en Francia, Alemania y Bélgica* (Buenos Aires, 1869). También su *Miscelánea. Escritos económicos, administrativos, economo rurales, agrícolas, ganaderos, exposiciones, discursos inaugurales y parlamentarios, viajes, correspondencia, historia y legislación* (Buenos Aires, 1910), en particular los trabajos "La exposición agrícola de Birmingham", y "La exposición de Salisbury".

13 Véase, por ejemplo, *ASRA*, III:11 (1869), pp. 426-427.

14 Mirón Burgin, *The Economic Aspects of Argentine Federalism, 1820-1852* (Cambridge, 1946), especialmente pp. 218-248.

15 Halperin Donghi, *Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla* (Buenos Aires, 1972; ed. definitiva, 2014), y "Argentina: Liberalism in a Country Born Liberal", en Joseph Love y Nils Jacobsen (eds.), *Guiding the Invisible Hand. Economic Liberalism and the State in Latin American History* (Nueva York, 1988), pp. 99-116; Jonathan Brown, *A Socioeconomic History of Argentina*, pp. 201-224; Carlos S. Assadourian, "El sector exportador de una economía regional del interior argentino, Córdoba 1880-1860", en *El sistema de la economía colonial* (México, 1983).

16 Paul Gootenberg, "The Social Origins of Protectionism and Free Trade in Nineteenth-Century Lima", *Journal of Latin American Studies* (en adelante, *JLAS*), 14 (1982); y del mismo autor, "Beleaguered Liberals. The Failed First Generation of Free Traders in Peru", en Joseph Love y Nils Jacobsen, *Guiding the Invisible Hand*, pp. 63-97; Guy Thomson, "Protectionism and Industrialization in México, 1821-1854", en Christopher Abel y Colin Lewis (eds.), *Latin America, Economic Imperialism and the State: the Political Economy of the External Connection from Independence to the Present* (Londres, 1985), pp. 113-142.

17 Chiaramonte, *Liberalismo y nacionalismo*, pp. 72-76.

18 Fermín Ortiz Basualdo a Juan Negron, 18 de mayo de 1873, en Archivo Senillosa, Archivo General de la Nación, VII (en adelante, Senillosa), 2-5-10.

19 Halperin Donghi, "Argentina: Liberalism in a country born liberal", pp, 99-116; y del mismo autor, "The Buenos Aires Landed Class and the Shape of Argentine Politics, 1820-1930", en Evelyne Huber y Frank Safford (eds.), *Agrarian Structure and Political Power* (Londres, 1995), pp. 39-66. También Marcela Ternavasio, "Nuevo régimen representativo y expansión de la frontera política. Las elecciones en el estado de Buenos Aires: 1820-1840", en Antonio Annino (ed.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX* (Buenos Aires, 1995), pp. 65-106; Marta Valencia, "La vanguardia de la Sociedad Rural y su actuación parlamentaria", en Marta Bonaudo y Alfredo Pucciarelli (eds.), *La problemática agraria. Nuevas aproximaciones* (Buenos Aires, 1993), p. 129.

20 *ASRA*, I:1 (1866), pp. 7-8.

21 *ST*, 4 de octubre de 1866.

22 *ASRA*, I:3 (1866), p. 76. La bibliografía sobre Sarmiento es extensísima. Una introducción puede encontrarse en Tulio Halperin Donghi, Ivan Jaksic, Gwen Kirkpatrick y Francine Masiello (eds.), *Sarmiento: Author of a Nation* (Berkeley, 1994).

23 *El Nacional* (en adelante, *EN*), 13 de septiembre de 1869.

24 *ASRA*, IV:8 (1871), pp.234-235; también VI:8 (1872), p. 273.

25 *ASRA*, XVI:9 (1883), p. 385.

26 Emilio Frers, *El progreso agrícola de la Nación y la Sociedad Rural Argentina* (Buenos Aires, 1916), p. 70. Véase también *ASRA*, XIV:4 (1881), p. 10; Horacio Giberti, *Historia económica de la ganadería argentina* (Buenos Aires, 1982), p. 167.

27 Frers, *El progreso*, p. 80.

28 *ST*, 29 de septiembre de 1878.

29 Citado en *La Prensa* (en adelante, *LP*), 30 de septiembre de 1881.

30 Ejemplos de esta visión pueden verse en Mirta Palomino, *Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina* (Buenos Aires, 1988); y Luigi Manzetti, "The Evolution of Agricultural Interest Groups in Argentina", *Journal of Latin American Studies*, 24:3 (1992).

31 *Boletín del Departamento de Agricultura* (en adelante, *BDA*), V (1881), p. 47. También *ST*, 4 de octubre de 1866.

32 *EN*, 21 de septiembre de 1878.

33 *EN*, 19 de abril de 1880.

34 Halperin Donghi, *José Hernández*, pp. 256-262.

35 Véase, por ejemplo, John Lynch, *Argentine Dictator. Juan Manuel de Rosas, 1829-1852* (Oxford, 1981), especialmente pp. 52-123.

36 Juan Carlos Garavaglia, "Ecosistemas y tecnología agraria: elementos para una historia social de los ecosistemas agrarios rioplatenses (1700-1830)", *Desarrollo Económico* (en adelante, *DE*), 28:112 (1989), pp. 549-575; y "Los labradores de San Isidro", *DE*, 32:128 (1993), pp. 123-145.

37 Sabato, *Capitalismo y ganadería*, pp. 183-202.

38 Brown, *A Socioeconomic History*, p. 151.

39 Halperin Donghi, *José Hernández*, p. 258.

40 Arnold Bauer, *Chilean Rural Society. From the Spanish Conquest to 1930* (Cambridge, 1975), p. 163.
41 Halperin Donghi, "La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires", en Torcuato Di Tella y Tulio Halperin Donghi, *Los fragmentos del poder* (Buenos Aires, 1969), p. 70; Jan Bazant, "Land, Labourer, and Tenant in San Luis Potosí, Northern México, 1822-1910", en Kenneth Duncan y Ian Rutledge (eds.), *Land and Labour in Latin America. Essays on the Development of Agrarian Capitalism in the Nineteenth and Twentieth Centuries* (Cambridge, 1977), p. 71.
42 Halperin Donghi, *José Hernández,* pp. 257-258.
43 Ibíd., pp. 257-262.
44 La lista de jueces de paz de 1869 fue tomada de Mulhall y Mulhall, *Handbook,* ed. de 1869, sección C. Las listas de 1873 y 1875, de *ASRA,* V:12 (872), pp. 394 395, y VIII:2 (1875), pp. 59-60. Los nombres de los mayores terratenientes de cada partido fueron consultados en diversas fuentes, entre ellas los mapas catastrales de 1864 y las listas de los mayores terratenientes de cada partido de las ediciones de 1869 y 1875 del *Handbook* de los hermanos Mulhall.
45 Sobre Stegmann, véase Zeballos, *A través de las cabañas,* pp. 112-118; y Mulhall y Mulhall, *Handbook,* ed. de 1869, sección C, p. 166. Sobre Martínez de Hoz, véase ibíd., sección C, p. 157.
46 Ibíd., sección B, p. 8.
47 Abrego era dueño de 2 leguas en Veinticinco de Mayo, un partido en el que la propiedad estaba bastante concentrada; Unzué poseía 18 leguas, Fernández 10, Atucha 7, Olivera, Peralta, Villanueva y algunos otros propietarios, alrededor de 5 cada uno. Rosell era dueño de ½ legua en Baradero, mientras que en ese partido Castex poseía 11 leguas, Carlos y Patricio Lynch 8 cada uno, y San Martín 3. En San Pedro, Facundo Quiroga poseía 1 legua. Manuel del Pardo y Miguel Molina sólo eran propietarios de casas sobre las que pagaban impuestos. En San Vicente, la familia Pardo poseía ²/₃ de legua y la Godoy, ¾. Véase el mapa catastral de 1864, y Mulhall y Mulhall, *Handhook,* ed. de 1869, sección C, pp. 72, 26, 102, 33, 124-127.
48 Carlos Guerrero, *Publicaciones prácticas de ganadería, agricultura e higiene agropecuaria* (Buenos Aires, s.f. [c. 1920]), pp. 217, 231, 482.
49 Agustín Rivera Astengo, *Carlos Pellegrini* (Buenos Aires, 1941), vol. II, p. 488.
50 *ST,* 27 de febrero de 1869; *ASRA,* IV: 11 (1871), pp. 354-357.
51 *EN,* 17 de noviembre de 1866.
52 Esta conclusión es coincidente con hallazgos recientes sobre el período previo. Véase Juan Carlos Garavaglia, "Paz, orden y trabajo en la campaña: la justicia rural y los juzgados de paz en Buenos Aires. 1830-1852", *DE,* 37:146 (1997), pp. 214-262. También Jorge Gelman, "Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX", *BIR,* III:21 (2000), pp. 7-31. Véase también Ternavasio, "Nuevo régimen", pp. 89-92; y Ricardo Salvatore, "Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización en la era de Rosas", *BIR,* III:5 (1992), pp. 25-49.
53 Halperin Donghi, "The Buenos Aires Landed Class", p. 63.
54 Halperin Donghi, *Revolución y guerra,* pp. 15-75. También Susan Socolow, *The Merchants of Buenos Aires, 1778-1810. Family and Commerce* (Cambridge, 1978), pp. 54-70; y *The Bureaucrats of Buenos Aires, 1769-1810. Amor al real servicio* (Durham, 1987); Raúl O. Fradkin, "El gremio de hacendados en Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XVIII", *Cuadernos de Historia Regional,* 8 (Luján), pp. 72-96; Gelman, "Sobre el carácter del comercio colonial y los patrones de inversión de un gran comerciante en el Río de la Plata del siglo XVIII", *BIR,* III:1 (1989), pp. 51-70.

55 Mayo, *Estancia y sociedad*, y "Landed but not Powerful: The Colonial *Estancieros* of Buenos Aires (1750-1810)", *Hispanic American Historical Review* (en adelante, *HAHR*), 71:4 (1991), pp. 762-779; Raúl O. Fradkin (ed.), *La historia agraria del Río de la Plata colonial: los establecimientos productivos* (Buenos Aires, 1993). La bibliografía sobre la historia agraria colonial es discutida en Garavaglia, "Historiografía de la historia agraria colonial", en *La historiografía argentina, 1958-1988* (Buenos Aires, 1990); y en Garavaglia y Gelman, "Rural History of the Río de la Plata: Results of a Historiographical Renaissance", *Latin American Research Review*, 30:3 (1995), pp. 75-105; y, de los mismos autores, "Mucha tierra y poca gente: un nuevo balance historiográfico de la historia rural platense (1750-1850)", *Historia Agraria*, 15 (1998).

56 Garavaglia, "Economic Growth and Regional Differentiations: The River Plate Region at the End of the Eighteenth Century", *HAHR*, 65:1 (1985), pp. 51-89.

57 Garavaglia, "Patrones de inversión y 'elite económica dominante': los empresarios rurales en la pampa bonaerense a mediados del siglo XIX", en Jorge Gelman, Juan Carlos Garavaglia y Blanca Zeberio (eds.), *Expansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina del siglo XIX* (Buenos Aires/Tandil, 1999), pp. 121-143, y especialmente pp. 126-128.

58 Halperin Donghi, "La expansión ganadera", pp. 21-74.

59 Brown, *A Socioeconomic History*, pp. 174-182.

60 Sucesión Tomás Manuel de Anchorena y sucesión Nicolás Anchorena, AGN.

61 Diana Hernando, *Casa y familia: Spatial Biographies in 19th Century Argentina*, tesis doctoral inédita, Universidad de California (Los Ángeles, 1973), pp. 321, 425, 511.

62 Felipe Senillosa a Angel Calderón de la Barca, 2 junio 1850, en Archivo Senillosa, AGN (en adelante Senillosa), 2-5-10. Halperin Donghi, "The Buenos Aires Landed Class", pp. 47-48.

63 Lucas Ayarragaray, *Estudios históricos, políticos y sociales* (Buenos Aires, 1927), pp. 288-290.

64 Juan H. Scrivener, *Impresiones de viaje: Londres, Buenos Aires, Potosí* (Buenos Aires, 1937), p. 18.

65 Lucio V. Mansilla, *Rozas. Ensayo Histórico-Psicológico* (París, 1898), p. 22. También del mismo autor, *Mis memorias. Infancia, adolescencia* (París, 1904), pp. 147-148.

66 Mansilla, *Mis memorias*, pp. 309-310. También Emilio Daireaux, "Aristocracia de antaño", *Revista de Derecho, Historia y Letras*, vol. II (1898), pp. 36-42; María Sáenz Quesada, *Los estancieros* (Buenos Aires, 1980), pp. 189-191.

67 Citado en Juan José Sebreli, *Apogeo y ocaso de los Anchorena* (Buenos Aires, 1972), p. 46.

68 Sucesión Nicolás Anchorena, AGN.

69 Yuyú Guzmán, *El país de las estancias* (Buenos Aires, 1999), p. 172.

70 *El Avisador* (Buenos Aires, 1862).

71 Sabato, *Capitalismo y ganadería*, p. 134. Véase también Ezequiel Gallo, *La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe, 1870-1895* (Buenos Aires, 1983), pp. 187-188.

72 *La República*, 13 de agosto de 1869.

73 Wilfrid Latham, *The States of the River Plate: Their Industries and Commerce* (Londres. 1866), p. 12.

74 Ezequiel Ramos Mexía, *Mis memorias* (Buenos Aires, 1936), pp. 30, 32.

75 Colin M. Lewis, "La consolidación de la frontera argentina a fines de la década del setenta. Los indios, Roca y los ferrocarriles", en Gustavo Ferrari y Ezequiel Gallo (eds.), *La Argentina. Del Ochenta al Centenario* (Buenos Aires, 1980), pp. 471-480.

76 Walter Larden, *Estancia Life. Agricultural, Economic, and Cultural Aspects of Argentine Farming* (Londres, 1911, reed. Detroit, 1974), p. 6; Henry Charles Ross Johnson, *A Long Vacation in the Argentine Alps or Where to Settle in the River Plate States* (Londres, 1868), pp. 36-39.
77 Latham, *The States of the River Plate*, p. 23; *Random Sketches*, p. 30.
78 Colin M. Lewis, *British Railways in Argentina, 1857-1914. A Case Study of Foreign Investment* (Londres, 1983), p. 8.
79 Mulhall y Mulhall, *Handbook*, ed. de 1869, sección C, p. 161.
80 Lewis, *British Railways*, p. 25. Mulhall y Mulhall, *Handbook*, ed. de 1869, sección C, pp. 104-105.
81 Mulhall y Mulhall, *Handbook*, ed. de 1875, p. 109, y ed. de 1892, p. 310.
82 Sabato, *Capitalismo y ganadería*, pp. 130-168.
83 Mulhall y Mulhall, *Handbook*, ed. de 1869, sección C, p. 12.
84 Frederick Woodgate, *Sheep and Cattle Farming in Buenos Ayres* (Londres, 1876), p. 22. También Rivera Astengo, *Carlos Pellegrini*, vol. I, pp. 122-123.
85 Latham, *The States*, pp. 134-137.
86 *Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires* (en adelante, *DSCDPBA*) (1871), p. 240.
87 *DSCDPBA* (1876), p. 350.
88 Véase, por ejemplo, *DSCDPBA* (1876), p. 600. La crisis de 1870 se originó en el mercado financiero, y afectó diversos sectores de la economía. En esos años, surgieron reclamos para impulsar políticas proteccionistas, algunos de los cuales dieron lugar a la creación del Club Industrial. Pero al igual que había sucedido durante la crisis de mediados de la década de 1860, una vez que la situación económica mejoró, la agitación proteccionista se desvaneció. Consúltese Chiaramonte, *Liberalismo y nacionalismo*, pp. 91-116 y 237-249.
89 *Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires* (en adelante, *DSCSPBA*) (1878), pp. 198-199.
90 *DSCSPBA* (1867), p. 17; *DSCSPBA* (1878), p. 1010.
91 *República*, 29 de agosto de 1875, y 8 de septiembre de 1875. También *ASRA*, VIII:9 (1875), p. 347.
92 *Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación* (en adelante, *DSCSN*) (1876), p. 154.
93 Ramos Mexía, *Mis memorias*, p. 36.
94 *ASRA*, VI:9 (1873), pp. 289-292.
95 Ibíd., pp. 308-309. También Noel H. Sbarra, *Historia del alambrado en la Argentina* (Buenos Aires, 1964), pp. 63-66.
96 *EN*, 1° de septiembre de 1868.
97 Para análisis de este proceso, consúltese Natalio R. Botana, *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916* (Buenos Aires, 1977); y Halperin Donghi, *Proyecto y construcción de una nación. Argentina, 1846-1880* (Caracas, 1980).
98 Harris Gastrell a Salisbury, FO-6/360, 28 de febrero 1880.
99 Ramos Mexía, *Mis memorias*, p. 74.
100 *Revista de Derecho, Historia y Letras* (en adelante, *RDHL*), II (1898), p. 156.
101 Horace Rumbold, *The Great Silver River: Notes of a Residence in Buenos Aires in 1880 and 1881* (Londres, 1887), p. 46. También Arthur Shaw, *Forty Years in the Argentine Republic* (Londres, 1907), p. 73.
102 Adolfo Saldías, *Civilia* (Buenos Aires, 1888), p. 292.
103 Citado en Rivera Astengo, *Carlos Pellegrini*, vol. II, p. 117.
104 Rivera Astengo, *Carlos Pellegrini*, vol. I, p. 308; *RDHL*, III (1899), pp. 298-300. Sobre Pereyra, véase *LSR*, 1° de mayo de 1899, p. 929. Sobre los Anchorena, Sebreli, *Apogeo y ocaso*; Brown, *A Socioeconomic History*, pp. 174-200; *ECS*, 26 de octubre de 1895, pp. 1055-1056.

105 Carlos Ibarguren, *La historia que he vivido* (Buenos Aires, 1955), p. 37. Diego de Alvear hizo una de las mayores fortunas de su tiempo, en gran medida gracias a la especulación en tierras en Santa Fe. Sobre Alvear, véase Gallo, *La pampa gringa,* pp. 159-160; Sáenz Quesada, *Los estancieros,* p. 228.
106 Julio A. Roca a Marcos Sastre, 5 de enero de 1885, en José Arce (ed.), *Origen de "La Larga" con apéndice documental* (Buenos Aires, 1964), p. 20.
107 Roca a Sastre, 6 de julio de 1886, en Arce, *Origen,* p. 26.
108 *LP,* 30 de septiembre de 1881, y 11 de octubre de 1881; *EN,* 29 de septiembre de 1881, y 10 de octubre de 1881.
109 *ASRA,* XV:11 (1882), p. 182; XV:5 (1882), p. 92.
110 *ASRA,* XVI:7 (1883), p. 148.
111 *ASRA,* XVI:16 (1883), pp. 362-363.
112 *ASRA,* XVI:17 (1883), p. 395.
113 Sobre Sundblad, véase *ASRA,* XXIII:6 (1890), pp. 297-300.
114 *ASRA,* XVIII:22 (1885), p. 509.
115 William Timothy Duncan, *Government by Audacity. Politics and the Argentine Economy, 1885-1892,* tesis doctoral inédita, Universidad de Melbourne, 1981, pp. 7984; Paula Alonso. *Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años 90* (Buenos Aires, 2000), pp. 72-78.
116 *ASRA,* XIX: I (1886), p. 2.
117 Ibíd., p. 2.
118 *ASRA,* XVIII:1 (1885), p. 1. Alec Ford, *The GM Standard: 1880-1914. Britain and Argentina* (Oxford, 1962), pp. 114-140.
119 *LP,* 11 de febrero de 1886.
120 Halperin Donghi, *Proyecto y construcción de una nación*; Hilda Sabato y Elías Palti, "¿Quién votaba en Buenos Aires?: práctica y teoría del sufragio, 1850-1880", *DE,* 30:120 (1990); Sabato, "Elecciones y prácticas electorales en Buenos Aires, 1860-1880 ¿sufragio universal sin ciudadanía política?", en Annino (ed.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica,* pp. 107-142.
121 Saldías, *Civilia,* p. 290.
122 Rivera Astengo, *Carlos Pellegrini,* vol. I, pp. 160-162.
123 *ASRA,* XX:1 (1887), p. 2.
124 *ASRA,* XX (1887), p. 235.
125 Citado en Rivera Astengo, *Carlos Pellegrini,* vol. II, pp. 375, 374.
126 Pastor Senillosa a Juan A. Chopitea, 9 de marzo de 1887, Senillosa, 2-5-11.
127 Noemí Girbal de Blacha, *Los centros agrícolas en la provincia de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1980).
128 Charles Jones, "The state and business practice in Argentina, 1862-1914", en Christopher Abel y Colin Lewis (eds.), *Latin America, Economic Imperialism and the State,* p. 189.
129 Emilio Daireaux, *Vida y costumbres en el Plata* (Buenos Aires, 1888), vol. I, p. 353.
130 Lewis, "La consolidación de la frontera", pp. 480-491.
131 Citado en Halperin Donghi, *Proyecto y construcción de una nación,* p. 352.
132 Romain Gaignard, *La Pampa Argentina. Ocupación - Poblamiento - Explotación. De la Conquista a la Crisis Mundial (1550-1930)* (Buenos Aires, 1989), pp. 258-266; Silvia Mallo, "¿Quién se quedó con el desierto?", *Todo es Historia,* 144 (1979), p. 86.
133 Roger Gravil, *The Anglo Argentine Connection, 1900-1930* (Boulder y Londres, 1985), p. 2.
134 *ASRA,* XVI:21 (1883), pp. 491-492.
135 Luis Sáenz Peña a Miguel Cané, 18 de agosto de 1882, en Archivo Miguel Cané, AGN, VII (en adelante, Cané), carpeta 3.
136 *ASRA,* XIX:1 (1886), pp. 1-2.

137 Ibíd., pp. 1-2.
138 Pastor Senillosa a Juan A. Chopitea, 9 de marzo de 1887, Senillosa, 2-5-11.
139 *ASRA*, XVIII (1885), p. 509.

2. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CLASE TERRATENIENTE

1 José Hernández, *Instrucción del estanciero. Tratado completo de la planeación y manejo de un establecimiento de campo destinado a la cría de hacienda vacuna, lanar y caballar* (Buenos Aires, 1882).
2 Ricardo Newton y Juan Llerena, *Viajes y estudios de la comisión argentina sobre la agricultura y la ganadería, organización y economía rural en Inglaterra, Estados Unidos y Australia* (Buenos Aires, 1882-1884).
3 Tulio Halperin Donghi, "¿Para qué la inmigración? Ideología y política inmigratoria en la Argentina (1810-1914)", en *El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires, 1987), pp. 193-211.
4 Godofredo Daireaux, "La estancia argentina", en *Censo Agropecuario Nacional*, vol. III, *La ganadería y la agricultura en 1908* (Buenos Aires, 1909), p. 4.
5 *ASRA*, XII:4 (1879), p. 154.
6 Yuyú Guzmán, *Estancias de Azul* (Azul, 1978), p. 22.
7 Noel H. Sbarra, *Historia de las aguadas y del molino* (La Plata, 1961), pp. 152-168.
8 *La Agricultura* (en adelante, *LA*), 13 de abril de 1893, cit. en Sbarra, *Historia de las aguadas*, p. 169; Sociedad Rural Argentina, *Tiempos de epopeya, 1866-1966* (Buenos Aires, 1966), p. 49.
9 Alfredo Birabén, "La estancia reformada", *ASRA*, XVII:3 (1885), p. 49.
10 Noel H. Sbarra, *Historia del alambrado en la Argentina* (Buenos Aires, 1964), pp. 73, 87-89.
11 Sucesión Nicolás Anchorena, AGN.
12 Mendoza, Prudencio de la Cruz, *Historia de la ganadería argentina* (Buenos Aires, 1928), p. 166. Las cifras que ofrece Zeballos son algo distintas: 15 millones de metros en 1877, 27,1 en 1879, 37,6 en 1880 y 62,1 en 1881, momento a partir del cual la importación se mantiene en valores estables hasta mediados de la década. Véase Estanislao Zeballos, *A través de las cabañas* (Buenos Aires, 1888), pp. 255.
13 G. Daireaux, "La estancia argentina", pp. 21-23; Sbarra, *Historia del alambrado.*
14 *ASRA*, XV:11 (1882), p. 180.
15 Hilda Sabato, *Capitalismo y ganadería en Buenos Aires. La fiebre del lanar, 1850-1890* (Buenos Aires, 1989), pp. 155-156.
16 Simon Hanson, *Argentine Meat and the British Market. Chapters in the History of the Argentine Meat Industry* (Stanford y Londres, 1938), pp. 53-54.
17 Herbert Gibson, *The History and Present State of the Sheep-Breeding Industry in the Argentine Republic* (Buenos Aires, 1893) p. 40.
18 Hanson, *Argentine Meat*, p. 85.
19 *ASRA*, XI:10 (1878), pp. 495-500; XII:5 (1879), pp. 166-167; XIII:1 (1879), p. 7; XXI:18 (1888), p. 460.
20 Hanson, *Argentine Meat*, p. 100.
21 *ASRA*, XII:4 (1879), p. 154.
22 *ASRA*, XXI:18 (1888), p. 460; *EN*, 19 de marzo de 1888.
23 Manuel Gálvez, *Vida de Hipólito Yrigoyen*, en *Biografías completas* (Buenos Aires, 1962), vol. I, p. 67.
24 Hanson, *Argentine Meat*, p. 14.
25 Ibíd., p. 14.
26 *Revista de Ganadería*, 1:9, 20 de septiembre de 1879, p. 41.
27 Zeballos, *A través de las cabañas* (Buenos Aires, 1888), pp. 74, 91-100.
28 Ibíd., pp. 122-134; 136-138; *LA*, 28 de febrero de 1895, p. 187; *ECS*, 11 de agosto de 1894, p. 2472.

29 Gibson, *The History and Present State of the Sheep-Breeding Industry*, p. 195; *LA*, 21 de febrero de 1895, p. 169.
30 *ASRA*, XVII:5 (1885), pp. 103-104; XVIII:13 (1885), pp. 298-299; XVIII:19 (1885), pp. 442-448.
31 *ECS*, 19 de enero de 1897, p. 83.
32 Gibson, *The History and Present State of the Sheep-Breeding Industry*, p. 96. También Roberto Cortés Conde, *El progreso argentino, 1880-1914* (Buenos Aires, 1979), pp. 162-166; Jeremy Adelman, *Frontier Development: Land, Labour and Capital on the Wheatlands of Argentina and Canada, 1890-1914* (Oxford, 1994), pp. 81-88.
33 *ASRA*, XVI:11 (1883), p. 243; XVI:18 (1883), p. 419.
34 *ASRA*, XIX:1 (1886), p. 2.
35 Carlos F. Díaz Alejandro, *Essays on the Economic History of the Argentine Republic* (New Haven, 1970), p. 23.
36 Sabato, *Capitalismo y ganadería*, pp. 111-125.
37 *DSCDPBA* (1878), p. 1045.
38 *ASRA*, XXIV:1 (1894), p. 16.
39 *PE*, 30 de diciembre de 1882, p. 28.
40 *ASRA*, XII:8 (1879), pp. 305-306; Sbarra, *Historia del alambrado*, p. 74.
41 *ASRA*, XVII:18 (1885), p. 410.
42 *ASRA*, X:12 (1877), pp. 476-477; XII:6 (1879), pp. 210-211.
43 Roca a Sastre, 1° de mayo de 1883, y 21 de febrero de 1889, en José Arce (ed.), *Origen de "La Larga" con apéndice documental* (Buenos Aires, 1964), pp. 15, 34.
44 José Barrán y Benjamín Nahum, *Historia rural del Uruguay moderno* (Montevideo, 1967), vol. I, pp. 559-560.
45 Roberto Giusti, "El drama rural argentino", *Nosotros*, II:20, noviembre de 1937, p. 246.
46 *BDA*, X (1886), pp. 394-395. Para críticas de Vázquez de la década anterior, véase *BDA* (1878), pp. 159-176, y *BDA* (1879), pp. 4-5.
47 *BDA*, X (1886), pp. 394-395. También *BDA*, X (1886), pp. 529-535 y 785-791.
48 *ASRA*, XVI:1 (1883), p. 6; también XVI:2 (1883), p. 27.
49 *LP*, 29 de abril de 1886.
50 *LN*, 3 de enero de 1886.
51 *EN*, 27 de abril de 1886.
52 *ASRA*, XVIII:14 (1885), pp. 314-318.
53 Pedro T. Pagés, *Primeras bases científicas y técnicas del progreso agropecuario del país* (Buenos Aires, 1937); *ASRA*, XXIII (1890), p. 196.
54 María Sáenz Quesada, *Los estancieros* (Buenos Aires, 1980), pp. 238-245.
55 Hernández, *Instrucción del estanciero*, pp. 4, XI.
56 Ibíd., p. IX.
57 *LP*, 15 de agosto de 1890.
58 Miguel A. Lima, *Los centros agrícolas* (Buenos Aires, 1888), pp. 55-56.
59 Alois E. Fliess, *La producción agrícola y ganadera de la República Argentina en el año 1891* (Buenos Aires, 1893), p. 145.
60 Sabato, *Capitalismo y ganadería*, pp. 273-277.
61 Charles Jones, *British Financial Institutions in Argentina, 1860-1914*, tesis de doctorado inédita, Universidad de Cambridge, 1973, pp. 106-109.
62 Carlos Marichal, "Modelos y sistemas bancarios en América Latina en el siglo XIX (1850-1880)", y Andrés M. Regalsky, "La evolución de la banca privada nacional en Argentina (1880-1914). Una introducción a su estudio", ambos en Pedro Tedde y Carlos Marichal (eds.), *La formación de los bancos centrales en España y América Latina (siglos XIX y XX)*, vol. I (Madrid, 1995). También Andrés M. Regalsky, "Banca y capitalismo en la Argentina, 1850-1930. Un ensayo crítico", *Ciclos*, 9:18 (1999), pp. 33-54.

63 Sabato, *Capitalismo y ganadería*, pp. 224.
64 Carlos Marichal, "La gran burguesía comercial y financiera de Buenos Aires, 1860-1914: anatomía de cinco grupos", trabajo presentado en las XVI Jornadas de Historia Económica, Quilmes, Argentina, 1998; Sobre el desarrollo de nuevas formas de comercialización de la producción lanera, véase Sabato, *Capitalismo y ganadería*, pp. 202-251, especialmente pp. 218-225. Para el caso de la producción de trigo, James Scobie, *Revolución en las pampas. Historia social del trigo argentino, 1860-1910* (Buenos Aires, 1968), pp. 127-145. Sobre las empresas frigoríficas, véase más adelante cap. 4.
65 Sucesión Ramón Santamarina, Archivo General del Poder Judicial de la Nación (en adelante AGPJN).
66 Sucesiones: Nicolás Anchorena, Diego de Alvear, Félix de Álzaga, Carlos Casares, Urbano Duhau, Pedro Luro, Benjamín Martínez de Hoz, Saturnino Unzué, Guillermo Udaondo, AGN, y Pedro Anchorena, Diego de Alvear, Alberto L. Bunge, Emilio Bunge, Tomás Duggan, José Prudencio Guerrico, José Manuel Guerrico, Santiago Luro, Ambrosio Olmos, Leonardo Pereyra, Julio Pueyrredón, Eduardo Olivera, Ataliva Roca, Julio A. Roca, Ramón Santamarina, Ramón Santamarina (hijo), José Santamarina y Mariano Unzué, AGPJN.
67 *Los establecimientos ganaderos de la sociedad anónima La Olivera* (Buenos Aires, 1911), pp. 73-74. César Aira, *Argentina. Las Grandes Estancias* (Nueva York y Buenos Aires, 1994), p. 120.
68 Ezequiel Gallo, *La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe, 1870-1895* (Buenos Aires, 1983), pp. 188-189.
69 Emilio Daireaux, *Vida y costumbres en el Plata* (Buenos Aires, 1888), vol. I, pp. 133-134.
70 Fliess, *La producción agrícola y ganadera*, p. 170.
71 *ASRA*, XV:19 (1882), p. 283.
72 Ibíd., p. 285.
73 Fliess, *La producción agrícola y ganadera*, p. 170.
74 Emilio Frers, *El progreso agrícola de la nación y la Sociedad Rural Argentina* (Buenos Aires, 1916), p. 88.
75 *LP*, 2 de mayo de 1886.
76 En las muestras anteriores, la cantidad de animales exhibidos fue la siguiente: 1875:198; 1876:270; 1878:313; 1880:277. Véase *LP*, 7 de mayo de 1886.
77 *LP*, 29 de abril de 1886; *LN*, 3 de enero de 1886.
78 *EN*, 29 de abril de 1886.
79 *LP*, 2 de mayo de 1886.
80 H. J. Iñigo Carrera, "El Club del Progreso: de Caseros a la 'belle époque'", *Todo es Historia*, 57 (1972).
81 El trabajo más perspicaz sobre el Jockey Club es el de Francis Korn, "La gente distinguida", en José Luis Romero y Luis Alberto Romero (eds.), *Buenos Aires. Historia de cuatro siglos* (Buenos Aires, 1980), vol. II, pp. 45-55. Véase también Jorge Newton y Lily de Newton, *Historia del Jockey Club de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1966), pp. 65-75.
82 Newton y Newton, *Historia del Jockey Club*, pp. 38-50.
83 F. M. L. Thompson, *English Landed Society in the Nineteenth Century* (Londres, 1963), p. 1; F. M. L. Thompson, "Nineteenth Century Horse Sense", *Economic History Review*, segunda serie, XXIX (1976); David Cannadine, "Nobility and Mobility in Modern Britain", en *Aspects of Aristocracy* (Londres, 1994), p. 55.
84 Arnold Bauer, *Chilean Rural Society. From the Spanish Conquest to 1930* (Cambridge, 1975), p. 206; William H. Beezley, *Judas at the Jockey Club and Other Episodes of Porfirian Mexico* (Lincoln y Nebraska, 1987), p. 27; Jeffrey Needell, *A Tropical 'Belle Époque': Elite Culture and Society in Turn-of-the-Century Rio de Janeiro* (Cambridge, 1987), pp. 74-75.

85 *Censo General de la Provincia de Buenos Aires, 1881* (Buenos Aires, 1883), pp. 249-250, 323, 350-351.
86 J. A. Beaumont, *Viajes por Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Oriental (1826-1827)* (Buenos Aires, 1957), p. 117.
87 E. Daireaux, *Vida y costumbres*, vol. II, 284.
88 Newton y Newton, *Historia del jockey Club*, pp. 46-49.
89 Ricardo Hogg, *Yerba Vieja. Episodios históricos y recuerdos del campo argentino* (Buenos Aires, 1940), vol. I, pp. 193-194.
90 James Scobie, *Buenos Aires. From Plaza to Suburb, 1870-1910* (Nueva York, 1974); "El carruaje auto-motor", *LSR, 20* de marzo de 1896, p. 544; "El automovilismo eléctrico", *LSR*, 1° de marzo de 1902, p. 1190; "El automóvil en la estancia", *ECS*, 26 de agosto de 1903, 401; Mabel Senillosa a Julio Senillosa, 12 de abril y 7 de mayo de 1909, Senillosa, 2-6-6.
91 Newton y Newton, *Historia del Jockey Club*, pp. 65-75.
92 Ibíd., pp. 169-172, 324-330; *LSR*, 1° de julio de 1904, p. 1 372.
93 Frers, *El progreso*, p. 91.
94 Ibíd., p. 91.
95 *ASRA*, XXII (1889), p. 533.
96 Agustín Rivera Astengo, *Juárez Celman* (Buenos Aires, 1944), p. 326.
97 *Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires* (en adelante, *DSCDPBA*), 1° de octubre de 1942, p. 1786.
98 Romain Gaignard, *La Pampa Argentina. Ocupación - Poblamiento - Explotación. De la Conquista a la Crisis Mundial (1550-1930)* (Buenos Aires, 1989), pp. 258-266.
99 Sáenz Quesada, *Los estancieros*, pp. 233-238. También Roca a Sastre, 4 de noviembre de 1887, en Arce, *Origen de "La Larga"*, pp. 32-33; Roca a Teodoro de Bary, 15 de marzo de 1901, en Archivo Tornquist.
100 Aira, *Argentina. Las Grandes Estancias*, p. 66; Rivera Astengo, *Juárez Celman*, p. 562.
101 Ramón J. Cárcano, *Mis primeros ochenta años* (Buenos Aires, 1965), p. 122; Rivera Astengo, *Juárez Celman*, pp. 240, 306.
102 Cárcano, *Mis primeros ochenta años*, pp. 192-197; Cárcano a Fagés, 30 de julio de 1902, Fagés, 1820-1912, n° 202. Agradezco a Germán Quaranta por haberme permitido acceder a la correspondencia de su familia. Sobre la estancia de Cárcano, véase *LA*, 29 de abril de 1897, pp. 252-254; 6 de mayo de 1897, pp. 264-265; y 20 de mayo de 1897, pp. 294-295.
103 Cárcano, *Mis primeros ochenta años*, pp. 122-124.
104 *La Unión*, 6 de mayo de 1890; *LP*, 6 de mayo de 1890; *El Diario*, 5 de mayo de 1890.
105 *ED*, 3 de mayo de 1890.
106 Íd.
107 *LP*, 3 de mayo de 1890.
108 *ED*, 3 de mayo de 1890. *La Unión*, 20 de mayo y también 30 de abril de 1890.
109 *La Unión*, 22 de mayo de 1890.
110 Íd.
111 *LP*, 3 de mayo de 1890.
112 Roberto Cortés Conde, *La economía argentina en el largo plazo (siglos XIX y XX)* (Buenos Aires, 1997), pp. 230-231.
113 Citado en *LP*, 6 de mayo de 1890.
114 Jorge F. Sábato, *La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características* (Buenos Aires, 1991), pp. 95-113.
115 Darell Levi, *The Prados of São Paulo: An Elite Family and Social Change, 1840-1930* (Atenas, 1987); Steven Topik, "Francisco de Paula Mayrink of Brazil: A Bourgeois Aristocrat", en Judith Ewell y William H. Beezley, *The Human Tradition in Latin America: The Nineteenth Century* (Wilmingdon, Delaware, 1987); Larissa Adler Lomnitz y Marisol Pérez-Lizaur, *A Mexican Elite Family, 1820-1980: Kinship, Class, and Culture* (Princeton, 1987).

116 Bauer, *Chilean Rural Society*, p. 108; Arnold Bauer, "Landlord and Campesino in the Chilean Road to Democracy", en Evelyne Huber y Frank Safford (eds.), *Agrarian Structure and Political Power* (Londres, 1995), pp. 31-32; Warren Dean, *The Industrialization of São Paulo, 1880-1945* (Austin, 1969), pp. 34-48; Emília Viotti da Costa, *The Brazilian Empire: Myths and Histories* (Chicago, 1986), p. 200; Eugene Ridings, *Business Interest Groups in Nineteenth-Century Brazil* (Cambridge, 1994), pp. 30-53; Stephen Haber, *Industry and Underdevelopment. The Industrialization of Mexico, 1890-1940* (Stanford, 1989), pp. 63-83; Marco Palacios, *Coffee in Colombia, 1850-1970. An Economic, Social, and Political History* (Cambridge, 1980), pp. 3, 25-30.

117 Eric Hobsbawm, "The Example of the English Middle Class", en Jürgen Kocka y Allan Mitchell (eds.), *Bourgeois Society in Nineteenth-Century Europe* (Providence y Oxford, 1993), p. 129; W. D. Rubinstein, "The Victorian Middle Class. Wealth, Occupation and Geography", *Economic History Review*, 30 (1977).

118 Györgi Ránki, "The Development of the Hungarian Middle Class: Some East-West Comparisons, en Kocka y Mitchell (eds.), *Bourgeois Society*, p. 444.

119 Edward Pessen, "Wealth in America before 1865", en W. D. Rubinstein (ed.), *Wealth and the Wealthy in the Modern World* (Londres, 1980), pp. 169-179.

120 Para un mayor desarrollo de este punto, remito a mi "Business Bourgeoisie or Landed Bourgeoisie? On the Peculiarities of the Argentine Economic Elite, 1880-1945", *JLAS*, 34:3 (2002).

121 Aldo Ferrer, *La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas actuales* (México, 1963), pp. 113-118; Donald Denoon, *Settler Capitalism. The Dynamics of Dependent Development in the Southern Hemisphere* (Oxford, 1983), pp. 94-124; Carl Soberg, *The Prairies and the Pampas. Agrarian Policy in Canada and Argentina, 1880-1930* (Stanford, 1987); M. H. J. Finch, *A Political Economy of Uruguay since 1870* (Londres y Basingstocke, 1981), pp. 63-90.

122 Dominic Lieven, *The Aristocracy in Europe, 1815-1914* (Nueva York, 1990), pp. 77, 96-100; Avner Offer, *The First World War: An Agrarian Interpretation* (Oxford, 1989), pp. 93-120; Charles O'Gráda, "Agricultural Decline 1860-1914", en Roderick Floud y Donald McCloskey (eds.), *The Economic History of Modern Britain* (Cambridge, 1981), pp. 175-197.

123 *ASRA*, XXII (1889), p. 171.

124 Alec Ford, "Argentina and the Baring Crisis of 1890", *Oxford Economic Papers*, VIII (1956); Henry Ferns, *Britain and Argentina in the Nineteenth Century* (Oxford, 1960), pp. 436-484, y "The Baring Crisis Revisited", *JLAS*, 24:2 (1992), pp. 241-275.

125 Fernando Rocchi, *Building a Nation, Building a Market: Industrial Growth and the Domestic Economy in Turn-of-the-century Argentina*, tesis doctoral inédita, Universidad de California, Santa Bárbara, 1997, cap. 1.

126 Eduardo Míguez, *Las tierras de los ingleses en la Argentina (1870-1914)* (Buenos Aires, 1985).

127 Adelman, *Frontier Development*, pp. 82-83.

128 Charles Jones, "The state and business practice in Argentina, 1862-1914", en Christopher Abel y Colin Lewis (eds.), *Latin America, Economic Imperialism and the State: the Political Economy of the External Connection from Independence to the Present* (Londres, 1985), p. 185.

129 Gallo, *La pampa gringa*, p. 183-185.

130 Sbarra, *Historia del alambrado*, p. 29-31.

131 Mendoza, *Historia de la ganadería argentina*, p. 166.

132 Gibson, *The History and Present State of the Sheep-Breeding Industry*, p. 96; Cortés Conde, *El progreso argentino*, pp. 164-166.

133 Gregorio Torres a Juárez Celman, en Rivera Astengo, *Juárez Celman*, p. 557.

134 *ASRA*, XXV:11 (1892), p. 274; *ECS*, 17 de diciembre de 1892.
135 *ECS*, 19 de enero de 1897, p. 83. Roberto Senillosa a J. A. Chopitea, 13 de enero de 1896, Senillosa, 2-5-11.
136 Herbert Gibson, "La evolución ganadera", en *Censo Agropecuario Nacional* (Buenos Aires, 1909), vol. III, p. 94. También Alberto B. Martínez, "Consideraciones sobre los resultados del censo ganadero", *Censo Nacional de 1914*, vol. IV, *Censo Ganadero* (Buenos Aires, 1917), p. XXXVIII.
137 *LP*, 10 de marzo de 1895, p. 4.
138 *LA*, 17 de enero de 1895, pp. 82-83. También *ECS*, 22 de septiembre de 1896, p. 935.
139 Frers, *El progreso*, p. 220. Un ejemplo de la importancia adquirida por las exposiciones rurales lo ofrece el hecho de que en las primeras cinco muestras (1875, 1876, 1878, 1880 y 1881) sólo se exhibieron un promedio de 32 vacunos y 125 ovinos, mientras que entre 1895 y 1899, el promedio fue de 835 vacunos y 1874 ovinos.
140 *RRP*, 23 de septiembre de 1899, p. 5. También véase Gibson, "La evolución ganadera", p. 96; *ASRA*, XLVI:6 (1913), pp. 515-518.
141 Francisco Bosch a Juárez Celman, 4 de septiembre de 1890, en Rivera Astengo, *Juárez Celman*, p. 560.
142 *ASRA*, XXIV:7 (1891), p. 160.
143 *PE*, agosto de 1891, pp. 1, 4-8, y septiembre de 1891, pp. 22-24.
144 Cortés Conde, *La economía argentina*, pp. 230-231.
145 *BUIA*, IV:197, 15 de enero de 1891, p. 1.
146 *PE*, octubre de 1891, p. 44.
147 *Tribuna*, 23 de septiembre de 1892.
148 *PE*, noviembre de 1891, p. 56. También consúltese *LSR*, 21 de agosto de 1894, p. 55; Fabián Palacios a Roca, 28 de febrero de 1892, Archivo Roca, AGN, VII (en adelante, Roca), carpeta 66.
149 Citado en *LSR*, 7 de agosto de 1894, p. 30.
150 Sobre este punto, me permito citar mi "Un aspecto de la racionalidad corporativa de la Sociedad Rural Argentina: el problema de la agricultura (1866-1930)", *BIR*, III:10 (1994), pp. 43-59.
151 Cortés Conde, *El progreso argentino*, pp. 164-166. También Adelman, *Frontier Development*, pp. 84-88.
152 Sábato, *La clase dominante*, pp. 195-196.
153 Eduardo Senillosa a J. A. Chopitea, 21 de noviembre de 1904, Senillosa, 2-6-1.
154 Felipe G. Senillosa a J. A. Eduardo y Julio Senillosa, 27 de julio de 1905, Senillosa, 2-6-7.
155 Pastor Senillosa a J. A. Eduardo y Julio Senillosa, 9 de abril de 1905, Senillosa, 2-6-2.
156 Emilia Chopitea de Senillosa a Julio Senillosa, 2 de enero de 1915, Senillosa, 15-4-6.
157 Jules Huret, *La Argentina. De Buenos Aires al Gran Chaco* (Buenos Aires, 1913), p. 576.
158 *BMA* (1906), p. 470. También véase *LSR*, 1° de julio de 1905, pp. 1468-1469; Adelman, *Frontier Development*, pp. 88-94.
159 Augusto Bunge a Delfina Bunge, s.f., cit. en Eduardo José Cárdenas y Carlos Payá, *La Argentina de los hermanos Bunge* (Buenos Aires, 1997), pp. 24, 203.
160 Algunos ejemplos en *ECS*, 17 de septiembre de 1892, p. 27; 24 de septiembre de 1892, p. 43; 18 de marzo de 1893, pp. 693-694. También *LA*, 8 de julio de 1895, p. 557; 5 de septiembre de 1895, p. 679; 10 de octubre de 1895, p. 795; 28 de noviembre de 1895, p. 152, y 28 de enero de 1897, pp. 58-59.
161 Colin M. Lewis, *British Railways in Argentina, 1857-1914. A Case Study of Foreign Investment* (Londres, 1983), p. 45-72.

162 *ST,* 1º de marzo de 1882; 16 de enero de 1886. Hogg, *Yerba vieja,* p. 194.
163 E. Daireaux, *Vida y costumbres,* vol. I, p. 130.
164 *ECS,* 24 de septiembre de 1892, p. 43.
165 *LA,* 18 de abril de 1895, p. 316.
166 Yuyú Guzmán, *El país de las estancias* (Buenos Aires, 1999), p. 59.
167 *LA,* 30 de junio de 1898, pp. 385-386.
168 Fernando Elizalde, *La heredad* (Buenos Aires, 1980), pp. 16-17, 77-78.
169 Sucesión Tomás S. de Anchorena, ff. 91, 64.
170 Sobre San Felipe, véase *ECS,* 18 de abril de 1893, pp. 808-809; y *LA,* 25 de julio de 1895, p. 571.
171 Ricardo Senillosa a J. A. Chopitea, 30 de marzo de 1895, Senillosa, 2-5-11.
172 Emilia Chopitea de Senillosa a J. A. Chopitea, 9 de abril de 1896, Senillosa, 2-5-11. También Hortensia Senillosa a Emilia Chopitea, 26 de septiembre de 1895, Senillosa, 2-5-11; y Mabel Senillosa a J. A. y Julio Senillosa, 9 de enero de 1907, Senillosa, 2-6-4.
173 Pastor Senillosa a J. A. y Julio Senillosa, 3 de febrero de 1907, Senillosa, 2-6-4.
174 Roberto Senillosa a J. A. Senillosa, 4 de marzo de 1906, Senillosa, 2-6-3.
175 Para descripciones de estas y otras estancias, consúltese Aira, *Argentina. Las Grandes Estancias;* Francisco Scardin, *La estancia argentina* (Buenos Aires, 1908); Carlos Blaquier, *La empresa agraria argentina. Biografía de un establecimiento de la provincia de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1967); *Nuestras Estancias. 50 estancias representativas de la República Argentina* (Buenos Aires, 1973); Reginald Lloyd (ed.), *Twentieth Century Impressions of Argentina* (Londres, 1911), pp. 548-552; W. H. Koebel, *Modern Argentina* (Londres, 1910), p. 194.
176 Huret, *La Argentina,* pp. 131-132.
177 *ECS,* 13 de septiembre de 1898, p. 719.
178 Felipe G. Senillosa a J. A. Chopitea, 17 de mayo de 1899, Senillosa, 2-5-11.
179 James Bryce, *South America. Observations and Impressions* (Londres, 1912), p. 321; Koebel, *Modern Argentina,* p. 193.
180 *ECS,* 24 de septiembre de 1892, p. 43.
181 Adolfo Bioy, *Años de mocedad* (Buenos Aires, 1963), pp. 47-51. Aira, *Argentina. Las grandes estancias,* p. 120.
182 *LN,* 23 de octubre de 1893.
183 Ezequiel Ramos Mexía a José L. Fages, 16 de diciembre de 1904, Archivo privado de J. L. Fages (en adelante Fages).
184 *RRP,* 29 de febrero de 1909, p. 309.
185 Gordon Ross, *Argentina and Uruguay* (Londres, 1917), p. 89. También Walter Larden, *Estancia Life. Agricultural, Economic, and Cultural Aspects of Argentine Farming* (Londres, 1911, reedición Detroit, 1974), p. 41.
186 G. Daireaux, "La estancia argentina"; Gibson, "La evolución ganadera".
187 Citado en Frers, *El progreso,* pp. 190-191.
188 Cortés Conde, *La economía argentina,* pp. 230-231.
189 Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence* (Cambridge, 1994), p. 61.
190 Ibid, p. 151.
191 Julio Monzó, "Las clases dirigentes", *RACP,* vol. VI (1913), pp. 392-394; Ross, *Argentina and Uruguay,* pp. 3-4; Halperin Donghi, "La integración de los inmigrantes italianos en Argentina. Un comentario", en Fernando Devoto y Gianfausto Rosoli (eds.), *La inmigración italiana en la Argentina* (Buenos Aires, 1985), pp. 90-93.
192 Lloyd, *Twentieth Century Impressions,* p. 552; *RRP,* 14 de junio de 1935, p. 9; Diana Hernando, *Casa y Familia: Spatial Biographies in 19th Century Argentina,* tesis doctoral inédita, Universidad de California, Los Ángeles, 1973, pp. 336, 517; Sáenz Quesada, *Los estancieros,* p. 290.

193 *BUIA*, XXIII:491, 15 de noviembre de 1909, p. 2.
194 Georges Clemenceau, *Notas de viaje por América del Sur* (Buenos Aires, 1986), p. 96. También Huret, *La Argentina*, p. 223; Adolfo Posada, *La República Argentina. Impresiones y comentarios* (Madrid, 1912), p. 420.
195 Bryce, *South America*, p. 345.
196 Clemenceau, *Notas de viaje*, p. 97.
197 Mabel Senillosa a Julio Senillosa, 30 de septiembre de 1907, Senillosa, 2-6-4.
198 *RRP*, 26 de octubre de 1895, p. 11.

3. TERRATENIENTES Y POLÍTICA EN EL CAMBIO DE SIGLO

1 *ASRA*, XXIV:8 (1891), pp. 168-171; *ASRA*, XXIV:9 (1891), pp. 203-208.
2 *ASRA*, XXIV:10 (1891), p. 247.
3 *PE*, nº 6, enero de 1892, pp. 81-82.
4 Paula Alonso, *Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años noventa* (Buenos Aires, 2000), pp. 72-99.
5 *RRP*, 25 de marzo de 1893, p. 5; 4 de marzo de 1893, p. 5; Ezequiel Gallo, "Un quinquenio difícil: las presidencias de Carlos Pellegrini y Luis Sáenz Peña (1890-1895)", en Gustavo Ferrari y E. Gallo (eds.), *La Argentina. Del Ochenta al Centenario* (Buenos Aires, 1980), p. 223.
6 Gallo, "Un quinquenio difícil", pp. 215-243; Roberto Etchepareborda, *Tres revoluciones* (Buenos Aires, 1968), pp. 136-140; Mariano G. Bosch, *Historia del Partido Radical. La UCR 1891-1930* (Buenos Aires, 1931), p. 46.
7 Sobre la política en la provincia, remito a mi "Autonomistas, radicales y mitristas: el orden oligárquico en la provincia de Buenos Aires (1880-1912)", *BIR*, III:23 (2001).
8 Herbert Gibson, *The History and Present State of the Sheep-breeding Industry in the Argentine Republic* (Buenos Aires, 1893) p. 96; Roberto Cortés Conde, *El progreso argentino, 1880-1914* (Buenos Aires, 1979), pp. 164-166.
9 Adolfo Saldías, *Buenos Aires en el Centenario* (Buenos Aires, 1988), vol III, pp. 195-200.
10 Emilio Frers a Pedro Agote, 10 de abril de 1891, en Emilio Frers, *Temas diversos* (Buenos Aires, 1919), vol. VII, p. 132.
11 *LP*, 18 de julio de 1892. También *EEA*, 2 de julio de 1892, p. 7.
12 Carlos Ravelio, *Eduardo Olivera (reseña biográfica)* (Buenos Aires, 1928), 134-135; *ASRA*, XXIII:1 (1890), pp. 86-96.
13 *LP*, 29 de agosto de 1893.
14 *LP*, 29 de agosto de 1893; 1º de septiembre de 1893; *RRP*, 16 de septiembre de 1893, p. 8.
15 *LP*, 2 de septiembre de 1893; Lucio V. López, *Intervención a la Provincia de Buenos Aires. Informe del Interventor Nacional de la Provincia de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1894), p. 22.
16 *LP*, 8 de septiembre de 1893.
17 *RRP*, 2 de septiembre de 1893, p. 8. También *LN*, 1º de septiembre de 1893.
18 *Tribuna*, 1º de septiembre de 1893. También *LN*, 17 de octubre de 1893.
19 *LN*, 1º de septiembre de 1893.
20 *LN*, 17 de octubre de 1893.
21 *LP*, 15 de septiembre de 1893.
22 *Tribuna*, 11 de enero de 1894; también *ST*, 23 de enero de 1894.
23 Ezequiel Ramos Mexía, *Mis memorias* (Buenos Aires, 1936), p. 55.
24 F. Hay Sarmiento a Rocha, 7 de mayo de 1893, Archivo Dardo Rocha (en adelante Rocha), legajo 93.
25 *Censo Nacional* 1895, vol. II, p. 139.

26 Hilda Sabato, *Capitalismo y ganadería en Buenos Aires. La fiebre del lanar, 1850-1890* (Buenos Aires, 1989), pp. 65-74.
27 *LSR*, 1° de julio de 1905, pp. 1468-1469.
28 Arnold Bauer, *Chilean Rural Society. From the Spanish Conquest to 1930* (Cambridge, 1975), p. 127; Warren Dean, "Economy", en Leslie Bethell (ed.), *Brazil. Empire and Republic, 1822-1930* (Cambridge, 1985), p. 233; Alfredo Pucciarelli, *El capitalismo agrario pampeano, 1880-1930* (Buenos Aires, 1986), pp. 254-255.
29 Sobre esta región, consúltese James Scobie, *Secondary Cities of Argentina: The Social History of Corrientes, Salta, and Mendoza* (Stanford, 1980); y Ian Rutledge, *Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy 1550-1960* (Buenos Aires, 1975).
30 Carlos O. Bunge a Julia y Delfina Bunge, enero de 1905, cit. en Eduardo José Cárdenas y Carlos Paya, *La Argentina de los hermanos Bunge* (Buenos Aires, 1997), p. 209. Sobre Gómez, Carlos Ibarguren, *La historia que he vivido* (Buenos Aires, 1955), pp. 241-244.
31 Eduardo Wilde a Cané, 24 de noviembre de 1884, en Cané, legajo 3.
32 John Lynch, "The Catholic Church in Latin America", en Leslie Bethell (ed.), *Cambridge History of Latin America*, vol. IV: *c. 1870 to 1930* (Cambridge, 1985), pp. 530, 568-570; Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, *Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX* (Buenos Aires, 2000).
33 Malcolm Deas, "The Role of the Church, the Army and the Police in Colombian Elections, c. 1850-1930", en Eduardo Posada-Carbó (ed.), *Elections before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America* (Londres, 1996), pp. 164-172; Bauer, *Chilean Rural Society*, p. 166; Richard Graham, *Patronage and Politics in Nineteenth Century Brazil* (Stanford, 1990), p. 64; Jan Bazant, "Land, Labourer, and Tenant in San Luis Potosí, Northern Mexico, 1822-1910", en Kenneth Duncan e Ian Rutledge (eds.), *Land and Labour in Latin America. Essays on the Development of Agrarian Capitalism in the Nineteenth and Twentieth Centuries* (Cambridge, 1977), p. 67.
34 G. Daireaux, "La estancia argentina", en *Censo Agropecuario Nacional*, vol. III, *La ganadería y la agricultura en 1908* (Buenos Aires, 1909), p. 15.
35 Bauer, *Chilean Rural Society*, p. 102.
36 Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence* (Cambridge, 1994), p. 122.
37 Estos cálculos están basados en mi *The Landowners of the Argentine Pampas: Associational Life, Politics and Identity, 1860-1930*, tesis doctoral, Universidad de Oxford (1998), pp. 95-96.
38 Emilio Daireaux, *Vida y Costumbres en el Plata* (Buenos Aires, 1888), vol. I, p. 361.
39 Nicolás Sánchez Albornoz, *The Population of Latin America. A History* (Berkeley, Los Ángeles y Londres, 1974), pp. 179-180.
40 Luis Alberto Romero e Hilda Sabato, *Los trabajadores de Buenos Aires. La experiencia del mercado: 1850-1880* (Buenos Aires, 1992), pp. 26-30.
41 Sabato, *Capitalismo y ganadería*, p. 84. Véase también *Censo 1895*, vol. II, pp. 56, 62.
42 *Censo 1895*, vol. II, pp. 139-142.
43 F. Hay Sarmiento a Rocha, 7 de mayo de 1893, Rocha, legajo 93.
44 Bauer, *Chilean Rural Society*, pp. 159-160.
45 Ibíd., pp. 81, 127; véanse también Thomas Holloway, *Inmigrants on the Land. Coffee and Society in Sao Paulo, 1886-1914* (Chapel Hill, 1980); Graham, *Patronage and Politics*, pp. 43-70.
46 Remito a mi "Autonomistas, radicales y mitristas". Véase también Andrés Allende, "La provincia de Buenos Aires", en Academia Nacional de la Historia, *Historia Argentina Contemporánea, 1862-1930*, vol. IV (Buenos Aires, 1967), p. 39; Ismael Bucich Escobar, *Buenos Aires. La gran provincia* (Buenos Aires,

1930); Eduardo Míguez, "Política, participación y poder. Los inmigrantes en las tierras nuevas de la Provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX", *Estudios Migratorios Latinoamericanos,* 6-7 (1986).

47 Algunos ejemplos en Lucio V. Mansilla a Roca, 9 de septiembre de 1894, Roca, legajo 68, y Correspondencia 1820-1912, vol. II, documento nº 15, 28 de julio de 1881, Fages.

48 Roca a Sastre, 10 de agosto de 1887, en José Arce (ed.), *Origen de "La Larga" con apéndice documental* (Buenos Aires, 1964), p. 30. También "Un robo a Tornquist y Cía", *EN,* 10 de febrero de 1888, p. 1.

49 Mariano Unzué a Lucio V. López, nº 6116, 20 de octubre de 1893, Archivo López, AGN (en adelante, López).

50 Charles Leonardi, "Autoridades de la provincia de Buenos Aires", *ECS,* 15 de mayo de 1894, p. 2171.

51 Ramón Santamarina a Estanislao Zeballos, 24 de diciembre de 1893, en *El Doctor Ramón Santamarina. Su vida y su obra* (Buenos Aires, 1909), p. 98. Sobre la política en Tandil, véase Míguez, "Política, participación y poder".

52 Malcolm Deas, *Del poder y la gramática* (Bogotá, 1993), pp. 207-231.

53 *ST,* 7 de febrero de 1886.

54 Francisco J. Oliver, "Reforma institucional de la provincia de Buenos Aires", *RDHL,* I, vol. III (1899), p. 588.

55 Véase Sabato, "La revolución del '90: ¿prólogo o epílogo?", *Punto de Vista,* 39 (1990); "Citizenship, Political Participation and the Formation of the Public Sphere in Buenos Aires 1850s-1880s", *Past and Present,* 136 (1995); y Alonso, "Politics and Elections in Buenos Aires, 1890-1898", *JLAS,* 25:3 (1993), pp. 465-487.

56 Ema Cibotti, "Sufragio, prensa y opinión pública: las elecciones municipales de 1883 en Buenos Aires", en Antonio Annino (ed.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX* (Buenos Aires, 1995), pp. 170-175.

57 Alonso, "Politics and Elections", pp. 474-480.

58 Germán Tjarks y otros, "Aspectos cuantitativos del estado económico y social de la ciudadanía Argentina potencialmente votante (1860-1890)", *BIR,* XI:18 (1969), p. 89; Alonso, "Politics and Elections", p. 477.

59 Véanse, por ejemplo, los trabajos reunidos en Annino (ed.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica,* y en Posada-Carbó, *Elections before Democracy.*

60 Budeon a Rocha, 1º de diciembre de 1894, Rocha, legajo 96.

61 Gallo, "El roquismo", *Todo es Historia,* 100 (1975), p. 25.

62 J. M. Mendia a Rocha, 18 de septiembre de 1893, Rocha, legajo 94.

63 A. Contreras a Rocha, 12 de noviembre de 1893, Rocha, legajo 93.

64 José N. Matienzo, *El gobierno representativo federal en la República Argentina* (Buenos Aires, 1910), pp. 234-236. Para una discusión de las prácticas electorales (en particular las urbanas), consúltese Natalio R. Botana, *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916* (Buenos Aires, 1977); Gallo, "Un quinquenio difícil"; Alonso, "Politics and elections"; Dolores Cullen Crisol, *Electoral Practices in Argentina, 1898-1904,* tesis doctoral inédita, Universidad de Oxford, 1994.

65 R. Vargas a Rocha, 1º de marzo de 1894, Rocha, legajo 97.

66 Aparicio Gudiño a Rocha, 5 de octubre de 1893, Rocha, legajo 93.

67 Facundo Lugones a Rocha, 14 de febrero de 1894, , legajo 96.

68 Elormendi a Saldías, 10 de julio de 1899, en Archivo del doctor Adolfo Saldías, AGN, VII (en adelante, Saldías), 3-6-5.

69 R. Vargas a Rocha, 1º de marzo de 1894, Rocha, legajo 97.

70 José Hernández a Roca, 7 de enero de 1880, Roca, legajo 9; Atucha Brian a Rocha, 4 de noviembre de 1893, Rocha, legajo 93. También Ibarguren, *La historia que he vivido,* pp. 150-151.

71 *LP*, 23 de septiembre de 1893.
72 Juan Dillon a Rocha, 2 de septiembre de 1893, Rocha, legajo 93; Tomas Mahon a Rocha, 14 de febrero de 1894, Rocha, legajo 97.
73 Tomas Mahon a Rocha, 14 de enero de 1894, Rocha, legajo 97.
74 Solano Larguía a Rocha, 19 de septiembre de 1893, Rocha, legajo 94; Gregorio Torres a Roca, 14 de enero de 1894, Roca, legajo 68.
75 *Tribuna*, 3 de octubre de 1893.
76 Octaviano Mencheca a Rocha, 21 de octubre de 1893, Rocha, legajo 94.
77 *Tribuna*, 29 de agosto de 1893; 1° de septiembre de 1893.
78 *LP*, 16 de septiembre de 1893.
79 Pedro Berro a Rocha, 19 de diciembre de 1893, Rocha, legajo 93.
80 *LN*, 1° de septiembre de 1893; *Tribuna*, 27 de noviembre de 1893.
81 J. B. Rodríguez a Saldías, 17 de noviembre de 1893, Saldías, n° 76, 3-6-4; Juan Maestre a Rocha, 5 de octubre de 1893, Rocha, legajo 94. Mariano de Vedia a Roca, 11 de enero de 1894, Roca, legajo 68.
82 *LN*, 17 de noviembre de 1893.
83 *Tribuna*, 27 de noviembre de 1893.
84 Santamarina a Zeballos, reproducido en *El Doctor Ramón Santamarina*, p. 86.
85 *LN*, 17 de noviembre de 1893.
86 *LN*, 22 de noviembre de 1893; 28 de noviembre de 1893.
87 *LP*, 22 de diciembre de 1893.
88 *Tribuna*, 21 de noviembre de 1893.
89 Santamarina a Zeballos, reproducido en *El Doctor Santamarina*, p. 86.
90 *LP*, 22 de diciembre de 1893.
91 Manuel Guerrico a López, 4 de octubre de 1893, Archivo López (en adelante López), legajo 31; Diego Baudrix a López, 6 de febrero de 1894, López, legajo 34.
92 *Tribuna*, 9 de enero de 1894.
93 Íd.
94 *LN*, 13 de enero de 1894.
95 *RRP*, 20 de enero de 1894, p. 11.
96 *LP*, 15 de enero de 1894.
97 Saturnino Unzué y Julián Martínez a Roca, 9 de febrero de 1894, Roca, legajo 68.
98 Gregorio Torres a Roca, 9 de febrero de 1894, Roca, legajo 68.
99 *ST*, 10 de enero de 1894.
100 Carlos Pellegrini a Estanislao Zeballos, reproducido en *RDHL*, vol. XXV (1906), pp. 184-185.
101 Sobre la Liga Agraria, véase mi *Landowners of the Argentine Pampas: Associational Life, Politics and Identity*, cap. IV.
102 *EEA*, 21 de abril de 1894, p. 3.
103 Jorge Schvarzer, *Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina* (Buenos Aires, 1991), p. 37; Fernando Rocchi, *Building a Nation, Building a Market: Industrial Growth and the Domestic Economy in Turn-of-the-century Argentina*, tesis doctoral inédita, Universidad de California, Santa Bárbara (1997), cap. I; Adolfo Dorfman, *Historia de la industria argentina* (Buenos Aires, 1986), p. 136.
104 Gallo, *Pellegrini* (Buenos Aires, 1997), pp. 36-39. Véase también Donna Guy, "Carlos Pellegrini and the Politics of Early Industrialization in Argentina, 1876-1906", *JLAS*, XI:1 (1979).
105 Warren Dean, *The Industrialization of São Paulo, 1880-1945* (Austin, 1969); Carlos F. Díaz Alejandro, *Essays on the Economic History of the Argentine Republic* (New Haven, 1970), p. 69; Gallo, "Agrarian Expansion and Industrial Development in Argentina (1880-1930)", en Raymond Carr (ed.), *St Antony's Papers*, 22 (Oxford, 1970).

106 Eusebio E. García, "Censo de las Industrias nacionales", en *Censo Nacional de 1914*, t. VII (Buenos Aires, 1917), p. 17.
107 Roberto Cortés Conde, *La economía argentina en el largo plazo (siglos XIX y XX)* (Buenos Aires, 1997), pp. 230-231.
108 Díaz Alejandro, *Essays*, pp. 209-214; Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence* (Cambridge, 1994), pp. 130-149.
109 Sabato, *Capitalismo y ganadería*, pp. 203-208; y Francisco Latzina, "El comercio argentino antaño y hogaño", en *Censo Agropecuario Nacional. La ganadería y la agricultura en 1908*, t. III, *Monografías* (Buenos Aires, 1909), pp. 561-610.
110 Avner Offer, *The First World War: An Agrarian Interpretation* (Oxford, 1989), pp. 95-96.
111 Ricardo Pillado, "El comercio de carnes en la República Argentina", en *Censo 1908*, p. 367. *Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación* (en adelante, *DSCDN*), 28 de agosto de 1905, pp. 559-560.
112 *LN*, 31 de octubre de 1894.
113 Latzina, "El comercio". Sobre la hostilidad brasileña a las exportaciones argentinas, *LN*, 3 y 9 de diciembre de 1897.
114 Carlos Lix Klett, "La lana. Su crítica situación", *LA*, 3 de enero de 1895, reproducido en Carlos Lix Klett, *Estudios sobre producción, comercio, finanzas e intereses generales de la República Argentina* (Buenos Aires, 1900), p. 49.
115 *DSCDN*, 9 noviembre 1894, pp. 488.
116 Walker Stegman, "El proteccionismo y las industrias rurales", *ECS*, 21 de agosto de 1894, p. 2511. También "Peligros del proteccionismo", *ECS*, 14 de agosto de 1894, p. 1485; "Las altas tarifas y las industrias rurales", *ECS*, 1° de diciembre de 1894, p. 1883; "Los derechos de exportación", *ECS*, 8 de diciembre de 1894, p. 2907.
117 *DSCDN*, 9 de noviembre de 1894, p. 488.
118 *LN*, 5 de agosto de 1896. También *LN*, 27 de julio de 1896.
119 Véase, por ejemplo, Joaquín M. Ruiz, "¿Deben los partidos políticos definir sus ideales económicos?", *EEA*, 4 de agosto de 1894, pp. 2-3.
120 Gallo, "Agrarian Expansion"; Ernesto Laclau, "Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación histórica a los casos argentino y chileno", *Revista Latinoamericana de Sociología*, 5 (1969).
121 *LA*, 1° de octubre de 1896, pp. 711-712.
122 *LA*, 8 de octubre de 1896, p. 729.
123 Forward, "La Sociedad Rural Argentina. Lo que hace y lo que puede hacer", *LA*, 15 de octubre de 1896, p. 743.
124 Ibíd., p. 743.
125 Fernando Rocchi, "La armonía de los opuestos: industria, importaciones y la construcción urbana de Buenos Aires en el período 1880-1920", *Entrepasados*, IV:7 (1994).
126 *LP*, 21 de julio de 1899. También *RRP*, 29 de julio de 1899, p. 10.
127 Jorge Balan, "Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y el mercado nacional en el desarrollo agroexportador", *DE*, 18:69 (1978); Rocchi, "El imperio del pragmatismo: intereses, ideas e imágenes en la política industrial del orden conservador", *Anuario IEHS*, 13 (1998), pp. 99-130; Guy, *Argentine Sugar Politics. Tucumán and the Generation of the Eighty* (Temple, 1980), p. 92.
128 Domingo Morón a Roca, 27 de diciembre de 1894, Roca, legajo 68.
129 Balan, "Una cuestión".
130 Ricardo Pillado, *Política comercial argentina. Contribución a su estudio* (Buenos Aires, 1906), p. 21.
131 Dorfman, *Historia de la industria argentina*, p. 220.

132 Michael Johns, "The Urbanisation of a Secondary City: The Case of Rosario, Argentina, 1870-1920", *JLAS*, 23:3 (1991), pp. 499-513; Rocchi, *Building*, caps. 4 y 6.

133 Rocchi, "El imperio del pragmatismo", pp. 109-121.

134 *RRP*, 26 de julio de 1899, p. 10. Las desigualdades entre los niveles arancelarios que protegían a distintas actividades parecen deberse, al menos en parte, a una modalidad de relación entre industriales y legisladores altamente fragmentada, en la que primaban los contactos y las presiones individuales de algunos empresarios por sobre la acción colectiva. Véase Rocchi, *Building*, cap. 6.

135 Cit. en Carlos R. Melo, "Los partidos políticos argentinos", *Historia Argentina contemporánea (1862-1930)*, vol. II (Buenos Aires, 1967), p. 97.

136 Carlos Lix Klett, "La tarifa Dingley", *La Producción Argentina*, 1° de diciembre de 1897, en Lix Klett, *Estudios*, pp. 373-375; *LN*, 8 de diciembre de 1897.

137 *LN*, 3 de diciembre de 1897.

138 "La Sociedad Rural Argentina a los electores de la República", *ASRA*, XXX :3 (1898), pp. 83-84.

139 *LP*, 31 de marzo de 1898.

140 *LN*, 31 de marzo de 1898.

141 *El Tiempo*, 31 de marzo de 1898.

142 *RRP*, 9 de abril de 1898, p. 7. Véase también *LA*, 7 de abril de 1898, p. 217; Aristarco, "Las elecciones y la Sociedad Rural. Tardía y platónica intervención", *EEA*, 2 de abril de 1898, p. 2.

143 *ST*, 1° de abril de 1898.

144 *DSCDN*, 28 de agosto de 1905, pp. 559-560.

145 *DSCDN*, 1° de septiembre de 1905, p. 594.

146 Díaz Alejandro, *Essays*, pp. 17-21.

147 *Boletín de la Unión Industrial Argentina* (en adelante, *BUIA*), XXVI:527, 15 de noviembre de 1912, p. 2.

148 Díaz Alejandro, *Essays*, p. 287.

149 *DSCDN*, 4 de septiembre de 1905, p. 638.

150 *BUIA*, VI:301, 15 de agosto de 1894, p. 2

151 Carlos Pellegrini, "Protección y librecambio", *BUIA*, XVI:404, 15 de agosto de 1902, p. 1.

152 Emilio Frers, *El prohibicionismo y la política comercial argentina. Cartas a un hombre de estado* (Buenos Aires, 1902), p. 26.

153 Ibíd., p. 21.

154 *RRP*, 16 de abril de 1898, p. 4. También *LP*, 11 de abril de 1898; *LN*, 8 y 12 de abril de 1898.

155 *ECS*, 18 de octubre de 1898, p. 825.

156 *EEA*, 17 de julio de 1897, p. 1.

157 *Tribuna*, 22 julio 1898.

158 Horacio Mabragaña, *Los mensajes. Historia del desenvolvimiento de La Nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes* (Buenos Aires, 1910), vol. V, p. 353.

159 *RLA*, II:11 (julio de 1899), p. 334.

160 *LN*, 12 de octubre de 1899.

161 Díaz Alejandro, *Essays*, p. 211.

162 Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America*, pp. 144-145; Colin Lewis, "Industry in Latin America before 1930", en Leslie Bethell (ed.), *Cambridge History*, vol. IV, p. 320.

163 *BUIA*, XIII:373, 20 de enero de 1900, p. 2.

164 Véase *BUIA*, junio de 1900, XIV:378, pp. 1-19; *ASRA*, XXXV:5, 31 de mayo de 1900, pp. 103-117; *LP*, 19 de mayo de 1900; *RRP*, 26 de mayo de 1900, p. 10.

165 Cortés Conde, *La economía*, pp. 230-231.
166 Díaz Alejandro, *Essays*, p. 284.
167 N. L. Watson, *The Argentine as a Market* (Manchester, 1908), p. 41. Otros ejemplos en Díaz Alejandro, *Essays*, pp. 279-280.
168 Walter Townley a Sir Edward Grey, febrero de 1907, Foreign Office, *General Report on the Argentine Republic*, 1906 (Confidential Print) nº 8877, p. 4.
169 Pastor Senillosa a Julio Senillosa, 10 de noviembre de 1905, Senillosa, 2-6-2.
170 Eduardo Senillosa a Juan A. Chopitea, 21 de noviembre de 1904, Senillosa, 2-6-1.
171 Pastor Senillosa a Roberto Senillosa, 31 de agosto de 1908, Senillosa, 2-6-5.
172 *LN*, 9 de marzo de 1895; 10 de octubre de 1896. Sobre Lozano, *ECS*, 17 de septiembre de 1892, p. 27; Emilio Frers, *El progreso agrícola de la Nación y la Sociedad Rural Argentina* (Buenos Aires, 1916), p. 181.
173 Sobre este punto, remito a mi "Autonomistas, radicales y mitristas".
174 *LV*, 8 de abril de 1933, p. 1.
175 *ED*, 5 de octubre de 1908; *LP*, 9 de octubre de 1908.
176 *LP*, 11 de octubre de 1908.
177 *ECS*, 14 de octubre de 1908, p. 518.
178 Eugenio Blanco, "Las finanzas de Buenos Aires", *Facultad de Ciencias Económicas. Investigaciones de Seminario* (Buenos Aires, 1925), vol. V, pp. 423, 440-445; *ED*, 19 de enero de 1911.
179 *ED*, 19 de enero 1911; *LP*, 10 y 21 de enero de 1911.
180 *LN*, 4 de enero de 1911; *ED*, 19 de enero de 1911; *LP*, 10 y 21 de enero de 1911.
181 *RRP*, 13 de octubre de 1911, pp. 945-946.
182 Ibíd., p. 945.
183 *ED*, 5 de octubre de 1911.
184 *ST*, 11 de octubre de 1911; *ED*, 10 de octubre de 1911.
185 Véase Eugenio Blanco, "Las finanzas de Buenos Aires", pp. 415-445; "Desarrollo y estructura del régimen impositivo en el país", *Revista Económica*, V:10 (noviembre de 1932).
186 Isidoro Ruiz Moreno, "Federalismo y unitarismo ante los gastos públicos", *RACP*, vol. II (1911), pp. 153-166.
187 *LP*, 2 de agosto de 1901; 16 de enero 1890.
188 Se ha calculado que el impuesto al trigo en Santa Fe en 1891, de 10 centavos por cada 100 kilos de trigo y lino, representaba menos del 2% de los ingresos brutos de los agricultores. Ezequiel Gallo, *La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe, 1870-1895* (Buenos Aires, 1983), p. 403.
189 *LP*, 19 de marzo de 1901; 10 de enero de 1901.
190 Carlos Pellegrini a Vicente L. Casares, 22 de febrero 1899, en Agustín Rivera Astengo, *Carlos Pellegrini* (Buenos Aires, 1941), vol. II, p. 521.
191 Ricardo Newton, "Estudio sobre los desagües del Sud", *LSR*, 12 de julio 1897, p. 748.
192 *LP*, 13 de enero de 1911; Aníbal Arcondo, "El conflicto agrario argentino de 1912: ensayo de interpretación", *DE*, 20:79 (1980), pp. 362-364.
193 *LP*, 4 de octubre 1911.
194 *La Tribuna*, 16 de octubre de 1911.
195 *LV*, 8 de octubre de 1911.
196 *RRP*, 13 de octubre de 1911, p. 945.
197 *LP*, 11 de octubre de 1911. También *ED*, 12 de octubre de 1911.
198 *LP*, 29 y 30 de octubre de 1911; *ASRA*, XLIV:5 (1911), pp. 266-268.
199 *ED*, 10 de octubre de 1911.
200 *ED*, 16 de octubre de 1911.
201 *LN*, 12 de noviembre de 1911. También *RLA*, XV:11-12 (1911), p. 227; Carlos Guerrero, "Plaga nativa", *RLA*, XVI:2 (1912), p. 25.

202 *ED*, 9 de octubre 1911.
203 *ED*, 14 de octubre 1911.
204 Íd.
205 *ST*, 31 de octubre de 1911.
206 *LV*, 29 de octubre de 1911.
207 *ED*, 1° de febrero de 1912.
208 *LV*, 9 y 10 de octubre de 1911.
209 *Caras y Caretas*, n° 685, 18 de noviembre 1911.
210 *La Razón*, 30 de octubre de 1911.
211 *ED*, 28 de octubre de 1911.
212 *LP*, 13 de noviembre de 1911.
213 *EN*, 9 de octubre 1911.
214 *EN*, 11 de octubre de 1911.
215 *EN*, 30 de octubre de 1911, p. 1.
216 *EN*, 17 de octubre de 1911, p. 1.
217 *LV*, 9 y 10 de octubre de 1911.
218 *LV*, 3 de abril de 1912.
219 *LV*, 12 de noviembre de 1911.
220 *ED*, 2 de febrero de 1912. También *La Argentina*, 30 de octubre de 1911.
221 *RRP*, 20 de octubre de 1911, p. 1010.
222 *ED*, 27 de octubre de 1911.
223 *LV*, 27 y 28 de noviembre de 1911.
224 *Censo Nacional 1914*, vol. IV, pp. 215-223.
225 *Censo Nacional 1895*, vol. II, pp. 139-142; *Censo Nacional 1914*, vol. IV, pp. 215-223.
226 José Boglich, *La cuestión agraria* (Buenos Aires, 1937), pp. 204-205. La descripción clásica de la vida del chacarero puede encontrarse en James Scobie, *Revolución en las pampas. Historia social del trigo argentino, 1860-1910* (Buenos Aires, 1968), especialmente cap. II.
227 *Censo Agropecuario Nacional en la República Argentina en 1908* (Buenos Aires, 1909), vol. I, p. 376, y vol. II, p. 385; *Censo Nacional 1914*, vol. IV, pp. 215-216.
228 G. Daireaux, "La estancia argentina", p. 15.
229 *ED*, 20 de noviembre de 1911.
230 *LN*, 11 de marzo de 1912.
231 *LN*, 19 de marzo de 1912.
232 *ED*, 23 de febrero de 1912.
233 *LN*, 22 de marzo de 1912.
234 *LN*, 30 de marzo de 1912.
235 Reginald Lloyd (ed.), *Twentieth Century Impressions of Argentina* (Londres, 1911), p. 388.
236 *LP*, 26 de marzo de 1912.
237 *LP*, *21* y 30 de abril de 1912.
238 *LP*, 29 de abril de 1912.
239 *EN*, 8 de abril de 1912.

4. DOS DÉCADAS DE CAMBIOS

1 W. H. Koebel, *The New Argentina* (Londres, 1923), p. 103.
2 Frank Carpenter, *The Tail of the Hemisphere. Chile and Argentina* (Nueva York, 1923), p. 221.
3 Godofredo Daireaux, "La estancia argentina", en *Censo Agropecuario Nacional*, vol. III, *La ganadería y la agricultura en 1908* (Buenos Aires, 1909), p. 5.
4 *BMA*, X:3, noviembre de 1908, p. 204.
5 Frederick J. Turner, "The Significance of the Frontier in American History", en *The Frontier in American History* (Tucson, 1986), pp. 1-38.
6 *DSCDPBA*, 7 de octubre de 1912, p. 1984.

7 *Ramón Santamarina y Valcárcel* (Buenos Aires, 1993), pp. 67-70. Sobre Ramón Santamarina, Andrea Reguera, "Biografía histórica de un inmigrante español en América: Ramón Santamarina y sus estancias de la Argentina (1840-1904)", *Revista de Indias*, LV:204, (1995), pp. 421-451.

8 Hilda Sabato, *Capitalismo y ganadería en Buenos Aires. La fiebre del lanar, 1850-1890* (Buenos Aires, 1989), pp. 292-293.

9 Julio Monzó, "Las clases dirigentes", *RACP*, vol. VI (1913), p. 394.

10 Gordon Ross, *Argentina and Uruguay* (Londres, 1917), p. 5.

11 Monzó, "Las clases dirigentes", p. 394.

12 Roberto Cortés Conde, *El progreso argentino, 1880-1914* (Buenos Aires, 1979), pp. 164-166; Jeremy Adelman, *Frontier Development: Land, Labour and Capital on the Wheatlands of Argentina and Canada, 1890-1914* (Oxford, 1994), pp. 84-88.

13 Francisco Latzina, *La Argentina. Considerada en sus aspectos físicos, social y económico* (Buenos Aires, s.f., c. 1904), p. 251.

14 Adelman, *Frontier Development*, p. 126-130. Sobre la zona de Tres Arroyos, véase Javier Balsa, "La conformación de la burguesía rural local en el sur de la pampa argentina, desde finales del siglo XIX hasta la década del treinta. El partido de Tres Arroyos", en Marta Bonaudo y Alfredo Pucciarelli (eds.), *La problemática agraria. Nuevas aproximaciones* (Buenos Aires, 1993), pp. 116-119.

15 *LV*, 23 de mayo de 1912.

16 Carl Taylor, *Rural Life in Argentina* (Baton Rouge, 1948), p. 371; Henry Ferns, *Argentina* (Londres, 1969), p. 123; Adelman, *Frontier Development*, pp. 260-262.

17 Sobre la huelga de Alcorta, véase Carl Solberg, "Rural Unrest and Agrarian Policy in Argentina, 1912-1930", *Journal of Inter-American Studies and World Affairs*, XVII (enero de 1971); Aníbal Arcondo, "El conflicto agrario argentino de 1912: ensayo de interpretación", *DE*, 20:79 (1980).

18 Adelman, "Una cosecha esquiva: los socialistas y el campo antes de la Primera Guerra Mundial", *Anuario del Instituto de Estudios Histórico-Sociales*, 4 (1989). Sobre la Federación Agraria, véase Marta Bonaudo y María Cristina Godoy, "Una corporación y su inserción en el proyecto agroexportador, la Federación Agrarla Argentina (1912-1933)", *Anuario 11* (Rosario, 1985).

19 *La Tierra*, 24 de marzo de 1916.

20 Emilio Lahitte, "La propiedad rural. Ventas, hipotecas, colonización, latifundio", *BMA*, III, junio de 1905, p. 72; *LSR*, 1° de julio de 1905, pp. 1468-1469.

21 Alberto B. Martínez y Maurice Lewandowski, *Argentine in the Twentieth Century* (Londres, 1910), pp. 128-130. También *BMSA*, I (1912), pp. 43-44.

22 Florencio T. Molinas, "El régimen de la economía agrícola nacional", *BMSA*, II (1913), pp. 345-352. Consúltese también Silvio Spangemberg, "El conflicto agrario del sud de Santa Fe", *BMSA*, I (1912), pp. 522-531.

23 Godofredo Daireaux, *Las cien hectáreas de Pedro Villegas* (Buenos Aires, 1914).

24 Roberto Campolieti, *La chacra argentina* (Buenos Aires, 1914), pp. 157, 175.

25 *ASRA*, XLVI (1913), p. 167.

26 Herbert Gibson, *The Land We Live On* (Buenos Aires, 1914), p. 11. Véase también Tulio Halperin Donghi, "The Argentine Export Economy: Intimations of Mortality, 1894-1930", en Guido Di Tella y D. C. M. Piatt, *The Political Economy of Argentina, 1880-1946* (Oxford, 1986), pp. 48-49.

27 Avner Offer, *The First World War: An Agrarian Interpretation* (Oxford, 1989), pp. 93-94.

28 Carlos Guerrero, "Los Trust de Cereales y Ferrocarriles" (1914), en *Publicaciones prácticas de ganadería, agricultura e higiene agropecuaria* (Buenos Aires, s.f. [c. 1920]), pp. 430-431.

29 Guerrero, *Prever es gobernar* (Buenos Aires, 1917), p. 9.

30 *RRP*, 19 de noviembre de 1904, p. 1069; Guerrero, *Publicaciones prácticas*, pp. 209, 230.

31 Ezequiel Ramos Mexía, *La colonización oficial y la distribución de tierras públicas* (Buenos Aires, 1921), p. 38. Véase también Alberto E. Castex, "El latifundio", *RLA*, XXIII:11 (1920), pp. 626-628.
32 Miguel A. Pueyrredón, "Panaceas", *La Razón*, 5 de mayo de 1919.
33 Emilio Coni, *¿Arrendamiento o propiedad?* (La Plata, 1920), p. 5.
34 Roberto Giusti, "El drama rural argentino", *Nosotros*, II:20, noviembre de 1937, p. 257.
35 Solberg, "Rural Unrest", pp. 25-26; Halperin Donghi, "The Argentine Export Economy", pp. 54-56.
36 Koebel, *The New Argentine*, p. 17.
37 Gino Germani, *Política y sociedad en una época de transición* (Buenos Aires, 1966), pp. 224-229; David Rock, *Politics in Argentina, 1890-1930. The Rise and Fall of Radicalism* (Cambridge, 1975), pp. 25-40.
38 Adelman, "The Political Economy of Labour in Argentina, 1870-1930", en Adelman (ed.), *Essays in Argentine Labour History, 1870-1930* (Londres, 1992), p. 25.
39 Sobre las elites políticas y la reforma social, véase Eduardo Zimmermann, *Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina, 1890-1916* (Buenos Aires, 1994).
40 *LV*, 8 de noviembre de 1911.
41 *LV*, 9 y 29 de febrero de 1912. También *LV*, 16 de agosto de 1911.
42 Roberto Korzeniewicz, "Labor Unrest in Argentina, 1887-1907", *LARR*, 24:3 (1989), pp. 71-98.
43 Juan Suriano, *Trabajadores, anarquismo y estado represor: de la Ley de Residencia a la Ley de Defensa Social (1902-1910)* (Buenos Aires, 1988).
44 Mabel Senillosa a Julio Senillosa, 7 de mayo de 1909, Senillosa, 2-6-6.
45 J. A. Senillosa a Julio Senillosa, 19 de mayo de 1909, Senillosa, 15-14-5.
46 Carlos Senillosa a J. A. Senillosa, 2 de diciembre de 1904, Senillosa, 2-6-1.
47 Véase, por ejemplo, *BUIA*, XIX:446, 15 de enero de 1906, pp. 2-3; XX:458, 15 de enero de 1907; XXI:462, 15 de junio de 1907, pp. 1-4.
48 Luis Pascarella, "Los extranjeros y la industria nacional", *BUIA*, XXI:470, 15 de febrero de 1908, p. 1.
49 *ECS*, 1° de marzo de 1905, p. 95.
50 Jorge Lavalle Cobo, *Voces perdidas* (París, 1907), pp. 104-105.
51 *ASRA*, XLVI (1913), p. 167.
52 *RLA*, III:6 (1899), pp. 143-144.
53 José Samuel Valenzuela, *Democratización vía reforma: La expansión del sufragio en Chile* (Buenos Aires, 1985), pp. 12-19, 106-121.
54 *LN*, 11 de noviembre de 1911.
55 *ED*, 30 de octubre de 1911.
56 Natalio R. Botana y Ezequiel Gallo, *De la República posible a la República verdadera (1880-1910)* (Buenos Aires, 1997), pp. 114-119; Carlos Ibarguren, *La historia que he vivido* (Buenos Aires, 1955), pp. 245-249.
57 Juan Simón Gómez a Roque Sáenz Peña, 23 de diciembre de 1907, Archivo Roque Sáenz Peña, 22-22-14, correspondencia 1890-1909.
58 Ross, *Argentina and Uruguay*, p. 36.
59 Geoff Eley, "The British Model and the German Road: Rethinking the Course of German History", en David Blackbourn y Geoff Eley, *The Peculiarities of German History. Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany* (Oxford, 1994), pp. 80-81; Alan Knight, *The Mexican Revolution* (Cambridge, 1986), vol. I, pp. 55-71.
60 Ezequiel Ramos Mexía, *Mis memorias* (Buenos Aires, 1936), p. 282. Sobre Ramos Mexía, Fernando Devoto, "De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma electoral y el momento político de 1912", *BIR*, III:14 (1996), pp. 106-107.

61 Guillermo Achával (h.), "Glosas políticas. Ricardo Lavalle", *RACP* (1911), II, p. 219.
62 *RLA*, XV:11-12 (1911), p. 223.
63 *RLA*, XIX:7-12 (1915), p. 452.
64 *BMSA*, I (1912), p. 96.
65 *LN*, 23 de marzo de 1914.
66 José Nicolás Matienzo, *Nuevos temas políticos e históricos* (Buenos Aires, 1928), p. 116.
67 *ED*, 6 de marzo de 1912.
68 *LP*, 8 y 16 de julio de 1915. También *BUIA*, XXIX:559, 15 de julio de 1915, pp. 38-39.
69 RLA, XX:1-3 (1916), p. 4.
70 Richard Walter, *The Province of Buenos Aires and Argentine Politics* (Cambridge, 1985), pp. 41-47; Ana María Mustapic, "El Partido Conservador de la Provincia de Buenos Aires ante la intervención federal y la competencia democrática: 1917-1928", Instituto Di Tella, *Working Paper* 25 (Buenos Aires, 1987), pp. 9-10.
71 Carlos F. Díaz Alejandro, *Essays on the Economic History of the Argentine Republic* (New Haven, 1970), p. 52; Cortés Conde, *La economía argentina en el largo plazo (siglos XIX y XX)* (Buenos Aires, 1997), pp. 207-209, 230-231.
72 Guido Di Tella y Manuel Zymelman, *Los ciclos económicos argentinos* (Buenos Aires, 1973), pp. 156-186; Alec Ford, *The Gold Standard: 1880-1914. Britain and Argentina* (Oxford, 1962), pp. 170-188; Paul Lewis, *The Crisis of Argentine Capitalism* (Chapel Hill y Londres, 1990), pp. 112-117.
73 Mirta Lobato, "Work and Conflict in the Meat-Packing Industry, 1900-1930", p. 137; y Adelman, "The Political Economy", p. 27, ambos en Adelman (ed.), *Essays*.
74 *RLA*, XX:9-12 (1917), p. 154.
75 Frers, "La inmigración después de la guerra", en *Temas diversos*, vol. VIII (Buenos Aires, 1922), pp. 25-26; David Rock, *Politics in Argentina*, pp. 125-156.
76 *RLA*, XX:9-12 (1917), p. 155.
77 Guerrero, *Prever es gobernar*, pp. 234-236.
78 Véase "Memoria", *BUIA*, XXXII:595, 15 de julio de 1918, pp. 18-20.
79 *ASRA*, LI:12 (1917), pp. 771-772; Rock, *Politics in Argentina*, pp. 145-153.
80 Eduardo Senillosa a Julio Senillosa, 12 de marzo de 1919, Senillosa, 15-14-6.
81 W. H. Koebel, *The Great South Land* (Londres, 1919), p. 235.
82 Nicolás Repetto, *Mi paso por la política (de Roca a Yrigoyen)* (Buenos Aires, 1956), p. 202.
83 *RLA*, XX:9-12 (1917), p. 156.
84 Ofelia Pianetto, "Mercado de trabajo y acción sindical en la Argentina, 1890-1922", *DE*, 24:94 (1984), pp. 297-307; Adelman, *Frontier Development*, pp. 116-130.
85 Luis María Caterina, *La Liga Patriótica Argentina* (Buenos Aires, 1995).
86 Castex, "Propaganda anarquista en la campaña", *ASRA*, LII:12 (1919), p. 1017; *La Tierra*, 26 de septiembre de 1919.
87 Solberg, "Rural Unrest", pp. 41-44; Waldo Ansaldi (ed.), *Conflictos obrero-rurales pampeanos* (Buenos Aires, 1993), en particular Eduardo Sartelli, "De estrella a estrella... de sol a sol. Huelgas de braceros en Buenos Aires, 1918-1922", vol. I, pp. 64-124; y Adrián Ascolani, "Guerra a muerte al chacarero. Los conflictos obreros en el campo santafesino 1918-1920", vol. II, pp. 129-174.
88 Rock, *Politics in Argentina*, pp. 209-217.
89 Sobre las masacres en la Patagonia, Osvaldo Bayer, *La Patagonia Rebelde* (México, 1980).
90 Colin Lewis, "Economic Restructuring and Labour Scarcity: Labour in the 1920s", en Adelman (ed.), *Essays*, p. 187.

91 *RUIA*, XXXVIII:665, 15 de mayo de 1924, p. 20.
92 Osvaldo Barsky y Alfredo Pucciarelli, "Cambios en el tamaño y el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas", en O. Barsky (ed.), *El desarrollo agropecuario pampeano* (Buenos Aires, 1991), pp. 340.
93 *La Tierra*, 7 de abril de 1922.
94 *Nuestra Tierra*, VI:102, septiembre de 1922, p. 227. Taylor, *Rural Life*, p. 409.
95 *RLA*, XXV:1-3 (1922), pp. 1-3.
96 Eugenio Blanco, "Las finanzas de Buenos Aires", *Facultad de Ciencias Económicas. Investigaciones de Seminario*, vol. IV (Buenos Aires, 1925), p. 423.
97 Karen Remmer, *Party Competition in Argentina and Chile. Political Recruitment and Public Policy: 1880-1930* (Nebraska, 1984), p. 157.
98 Tornquist, Informe del 31 de mayo de 1920, p. 6.
99 *RLA*, XXIII:8 (1920), pp. 497, 499.
100 Ibíd., p. 498.
101 *RLA*, XXIII:10 (1920), p. 581.
102 *RLA*, XXIV:1 (1921), pp. 1-2.
103 Julio A. Costa, *Entre dos batallas* (Buenos Aires, 1927), p. 25.
104 Ibarguren, *La historia que he vivido*, p. 382.
105 Miguel Ángel Cárcano, "Principios de política agraria", *Revista de Ciencias Económicas*, X:10-11 (1922), pp. 279, 276.
106 Ramos Mexía, *Mis memorias*, p. 281.
107 Ramos Mexía, *La colonización*, p. 11.
108 *RLA*, XXVI:4-6 (1923), pp. 41-42.
109 Véase *BCACIP*, I:8, abril de 1925, pp. 124-125; III:26, septiembre de 1926, pp. 496 508.
110 Remmer, *Party Competition*, p. 157. No es aventurado suponer, por otra parte, que el aumento de los niveles salariales en el sector público presionara hacia el alza a los salarios del sector privado.
111 Ramos Mexía, *La colonización*, p. 163.
112 Luis Duhau, *La revaluación en la provincia de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1927), pp. 14-15.
113 *RLA*, XXIII:12 (1920), pp. 634-635.
114 *ED*, 1° de octubre de 1920.
115 Íd.
116 *LN*, 24 de marzo de 1914.
117 Ibarguren, *La historia que he vivido*, p. 299.
118 *BUIA*, XXVIII:545, 15 de mayo de 1914, pp. 3-4.
119 Ibarguren, *La historia que he vivido*, p. 302; también Guerrero, *Publicaciones prácticas*, pp. 482-483.
120 La importancia del voto independiente en Buenos Aires queda de manifiesto si advertimos que, en las elecciones parlamentarias de 1912, el carismático Alfredo Palacios obtuvo unos 33 000 votos, 11 000 más que quien encabezaba la lista socialista, Juan B. Justo.
121 *LN*, 25 de marzo de 1914.
122 *El Pueblo*, 6 de septiembre de 1917; Ibarguren, *La historia que he vivido*, p. 311.
123 Emilio Frers a Octavio R. Amadeo, 21 de marzo de 1919, en Emilio Frers, *Temas diversos*, vol. VII (Buenos Aires, 1919), p. 156.
124 Cit. en Mustapic, "El partido conservador", p. 30.
125 Walter, *The Province of Buenos Aires*, pp. 49-50.
126 *LN*, 28 de agosto de 1921.
127 Repetto, *Mi paso por la política*, p. 204.
128 José María Bustillo, *Mi rumbo cívico* (Buenos Aires, 1942), p. 42.
129 Walter, *The Province of Buenos Aires*, pp. 63,88-94; Halperin Donghi, "The Buenos Aires Landed Class and the Shape of Argentine Politics, 1820-1930",

en Evelyne Huber y Frank Safford (eds.), *Agrarian Structure and Political Power* (Londres, 1995), p. 62.

130 Héctor Diéguez, "Crecimiento e inestabilidad del valor y el volumen físico de las exportaciones argentinas en el período 1864-1963", *DE*, 12:46 (1972).

131 Roger Gravil, *The Anglo Argentine Connection, 1900-1930* (Boulder, Colorado, y Londres, 1985), pp. 64-65.

132 *LSR*, 1° de julio de 1904, p. 1374.

133 Juan A. Senillosa a Felipe G. Senillosa, 12 de mayo de 1905, Senillosa, 2-6-2.

134 *RRP*, 13 de julio de 1923, p. 79.

135 Raúl Prebisch, *Obras completas* (Buenos Aires, 1991), vol. I, p. 244.

136 Ibíd., vol. I, pp. 244-245, 279, 285, 328-329.

137 Alejandro E. Bunge, *Los problemas económicos del presente* (Buenos Aires, 1920), pp. 224-225.

138 Koebel, *Great South Land*, p. 239.

139 *RLA*, XV II:7-12 (1915), p. 453; *RRP*, 26 de julio de 1918, p. 209; David Watson, *Los criollos y los gringos. Escombros acumulados al levantar la estructura ganadera-frigorífica* (Buenos Aires, 1941), p. 77.

140 *RLA*, XIX:3-6 (1917), p. 81; XIX:7-12 (1917), pp. 143, 152. También *RLA*, XXI:36 (1919), pp. 199-204. Compárese con *RLA*, XVII:10 (1913), p. 149.

141 Gravil, *The Anglo Argentine Connection*, pp. 133-134.

142 Tornquist, Informe del 31 de julio de julio de 1919, p. 3; *La República*, 12 de octubre de 1918.

143 *LN*, 21 de febrero de 1920.

144 Miguel N. Rostagno, "La crisis ganadera", *Revista de Ciencias Económicas*, X:10-11 (1932), pp. 323-332; Watson, *Los criollos y los gringos*, pp. 86-87; *RRP*, 5 de enero de 1923, pp. 45-48.

145 *ASRA*, LV:1 (1923), p. 41.

146 Simon Hanson, *Argentine Meat and the British Market. Chapters in the History of the Argentine Meat Industry* (Stanford y Londres, 1938), pp. 213-220; *Gaceta Rural*, XVI:191 (1923), p. 1038.

147 Nemesio de Olariaga, *El ruralismo argentino* (Buenos Aires, 1942), p. 99.

148 *ASRA*, LIII:17 (1921), p. 650.

149 *LN*, 24 de octubre de 1922. También 1° de noviembre de 1922, y 17 de noviembre de 1922.

150 *LN*, 30 de octubre de 1922.

151 Pedro T. Pagés, *Crisis ganadera argentina* (Buenos Aires, 1922).

152 Francisco J. Fernández, *Con motivo de los triunfos ganaderos obtenidos por el ingeniero Pedro. T. Pagés* (Buenos Aires, 1916); *LN*, 14 de septiembre de 1918; 19 de septiembre de 1918; Lloyd, *Twentieth Century*, p. 492.

153 La demanda doméstica de carne era ciertamente sensible a los cambios de precio. En la ciudad de Buenos Aires, el consumo de carne aumentó de 110 a 162 kilos anuales entre 1920 y 1923, en gran medida gracias a la baja de precios. Véase Hanson, *Argentine Meat*, p. 223.

154 *ASRA*, LV:7 (1923), p. 303.

155 *LE*, 10 de diciembre de 1921 y 31 de octubre de 1922.

156 Watson, *Los criollos y los gringos*, pp. 79-80.

157 *LE*, 29 de junio de 1923 y 1° de julio de 1923.

158 *LN*, 21 de octubre de 1923. *LE*, 20 de octubre de 1923; *LN*, 21 de octubre de 1923.

159 *LN*, 30 y 31 de octubre de 1923; 6 de enero de 1923 y 7 de noviembre de 1923.

160 Juan E. Richelet, *La ganadería argentina y su comercio de carnes* (Buenos Aires, 1928), p. 102.

161 *LN*, 19 de octubre de 1923; 3 y 4 de noviembre de 1923. *LP*, 3 y 6 de noviembre de 1923.

162 *ASRA*, LVI:22 (1923), p. 859, y LVI:23 (1923), pp. 887-889.
163 Sociedad Rural Argentina, *Anuario de la Sociedad Rural Argentina* (Buenos Aires, 1928), pp. 52-53, 270-272; *RE*, V:3, abril de 1932.
164 Hanson, *Argentine Meat*, pp. 212, 255.
165 Sociedad Rural Argentina, *Anuario*, p. 53.
166 *ASRA*, LVIII:8 (1925), p. 368. También *RRP*, 17 de octubre de 1924, p. 997; 17 de abril de 1925, p. 32.
167 *RRP*, 23 de mayo de 1924, p. 1247-1249.
168 Hanson, *Argentine Meat*, pp. 252-255; Smith, *Politics*, p. 112-116.
169 Hanson, *Argentine Meat*, pp. 252-253.
170 *LN*, 16 de octubre de 1926. También 13 de octubre de 1926.
171 Watson, *Los criollos y los gringos*, p. 83.
172 Fernando Rocchi, *Building a Nation, Building a Market: Industrial Growth and the Domestic Economy in Turn-of-the-century Argentina*, tesis doctoral inédita, Universidad de California, Santa Barbara (1997), cap. 2.
173 *ASRA*, LVII:12 (1924), p. 714; *RRP*, 6 de abril de 1923.
174 Hanson, *Argentine Meat*, pp. 212, 255.
175 Juan L. Tenembaum, *Orientación económica de la agricultura argentina* (Buenos Aires, 1946), p. 22.
176 Adelman, *Frontier Development*, pp. 235-256.
177 Carl Solberg, *The Prairies and the Pampas. Agrarian Policy in Canada and Argentina, 1880-1930* (Stanford, 1987), p. 107.
178 Di Tella y Zymelman, *Los ciclos económicos argentinos*, pp. 163-217.
179 Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence* (Cambridge, 1994), pp. 167-168.
180 *RE*, I:2, septiembre de 1928, p. 51.
181 Juan Richelet, *A Defense of Argentine Meat* (Londres, 1930), p. 46.
182 *DSCDN*, 8 de agosto de 1928, p. 118.
183 Pedro T. Pagés, *Defensa de la producción agropecuaria* (La Plata, 1928), pp. 50-51.
184 Ibíd., pp. 64-65.
185 Osvaldo Barsky, "La caída de la producción agrícola en la década de 1940", en O. Barsky y otros, *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales* (Buenos Aires, 1988), p. 96; María Bjerg y Blanca Zeberio, "Mercados y entramados familiares en las estancias del sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina) 1900-1930", en Jorge Gelman, Juan Carlos Garavaglia y Blanca Zeberio (eds.), *Expansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina del siglo XIX* (Buenos Aires y Tandil, 1999), pp. 292-295.
186 Barsky y Pucciarelli, "Cambios", cuadro 31. Datos similares en Emilio Massone, "La colonización oficial en el problema agrario argentino", *Hechos e Ideas*, II:13 (1937), pp. 11-34.
187 Lázaro Nemirovsky, *Estructura económica y orientación política de la agricultura en la República Argentina* (Rosario, 1931), p. 93.
188 Barsky y Pucciarelli, "Cambios", cuadro 31.

5. DE LA GRAN DEPRESIÓN AL PERONISMO

1 *RRP*, 9 de septiembre de 1932, p. 5.
2 Horacio Pereda, *Tierra, propiedad, arrendamiento* (Buenos Aires, 1936), p. 17.
3 Pedro Marotta, "Tierra y población" (1924), en *Tierra y patria: los argentinos debemos realizar la segunda expedición al desierto* (Buenos Aires, 1932), p. 103.
4 Marotta, "El agro argentino en la historia y en la economía del país" (1927), en *Tierra y patria*, p. 29.
5 Ibíd., pp. 195-196.
6 *RRP*, 29 de enero de 1932, p. 9.

7 Lázaro Nemirovsky, *Estructura económica y orientación política de la agricultura en la República Argentina* (Rosario, 1931), p. 97-98.

8 Luis F. Heysen, *Presente y porvenir del agro argentino* (Lima, 1933), pp. 7, 55.

9 Roberto Campolieti, *La organización de la agricultura argentina* (Buenos Aires, 1929?), pp. 6, 11.

10 Ibíd., pp. 119, 260.

11 Marotta, "Tierra y población", p. 135. Véase también Noemí Girbal de Blacha, "La Granja: una propuesta alternativa de coyuntura para el agro argentino (1910-1930)", *Revue Canadienne des Études Latino-Américaines et Caraïbes,* 14:28 (1988), pp. 71-115.

12 En el perspicaz estudio del mercado de carnes que escribió en 1922, cuando trabajaba para la oficina de investigaciones de la Sociedad Rural, Prebisch argumentó convincentemente que las empresas frigoríficas no determinaban de manera unilateral el nivel de precios. Sin embargo, estas firmas tenían poder suficiente como para incrementar sus beneficios cuando los precios se elevaban, y para transmitir parte de sus pérdidas a los productores de ganado cuando bajaban. Las peculiares características del mercado de carnes permitían que las empresas evitaran pagar el costo del ajuste del mercado. En un sector de actividad en el que unas pocas firmas concentraban la compra, industrialización, transporte y venta al menudeo, resultaba difícil, si no imposible, impedir la formación de acuerdos de precios o de reparto del mercado entre las empresas. Lo que es más importante, Prebisch afirmó que esos acuerdos eran necesarios e incluso benéficos para regular la oferta de carne, pues permitían que la oferta no se alejara de la demanda, volviendo más improbable la posibilidad de que se alternaran fases de exceso de oferta seguidas de otras de escasez. Gracias a los acuerdos, los precios podían mantenerse relativamente estables, y el negocio se tornaba más previsible y rentable. Aun si los frigoríficos se beneficiaban con los incrementos de precios, y también podían esquivar las pérdidas en los momentos de declinación de las cotizaciones, de todas maneras la capacidad de estas empresas para regular el mercado no era contrario *per se* al interés de los ganaderos. En rigor, concluía el joven Prebisch, los productores no debían combatir la formación de acuerdos, sino que debían tomar parte en ellos. Es indudable que ello hubiera traído beneficios muy tangibles para los productores, y de hecho a fines de la década de 1920 la Sociedad Rural intentó convencer a los industrializadores de la carne para que sumaran esfuerzos para coordinar el mercado. La propuesta fue rechazada rotundamente, puesto que no ofrecía ventaja alguna para los frigoríficos, ya que estas empresas no requerían de la ayuda de los productores para sacar ventajas de las oscilaciones del mercado. Véase Raúl Prebisch, *Obras completas* (Buenos Aires, 1991), vol. I, p. 322.

13 S. N. Broadberry, *The British Economy between the Wars: A Macroeconomic Survey* (Oxford, 1986), pp. 44-53; *RE*, II:7, julio de 1929, pp. 143-144; *RE*, V:3, abril de 1932, pp. 58-62.

14 Sociedad Rural Argentina, *Memoria 1926-1927* (Buenos Aires, 1927), p. 23.

15 Sobre la campaña "comprar a quien nos compra", remito a mi *The Landowners of the Argentine Pampas: Associational Life, Politics and Identity, 1860-1930,* tesis doctoral inédita, Universidad de Oxford, capítulo V.

16 Eduardo Jorge, *Industria y concentración económica* (Buenos Aires, 1986), p. 105.

17 El saldo negativo de la balanza comercial, empero, estaba cerca de compensarse gracias a ingresos provenientes de servicios de flete y seguros, así como también por la remisión de ganancias de empresas británicas que operaban en Argentina. Sobre la declinación económica británica, consúltese Rory Miller, *Britain and Latin America in the Nineteenth and Twentieth Centuries* (Londres y Nueva York, 1993), pp, 179-204.

18 *ASRA*, LX:8 (1927), p. 7.

19 Joseph Toulchin, *Argentina and the United States. A Conflicted Relationship* (Boston, 1980), pp. 46-52.
20 Hanson, *Argentine Meat*, p. 259.
21 *Economist*, 6 de septiembre de 1930, p. 446; Miller, *Britain and Latin America*, pp. 192-200.
22 *ASRA*, LXV:3 (marzo de 1931), pp. 135-138; *ASRA*, LXV:6 (julio de 1931), pp. 335-340.
23 Carl Taylor, *Rural Life in Argentina* (Baton Rouge, 1948), p. 401.
24 *ASRA*, LXVIII:9 (septiembre de 1934), pp. 8-10.
25 Maria Inés Barbero y Susana Felder, "Industriales italianos y asociaciones empresariales en la Argentina. El caso de la UIA (1887-1930)", *Estudios Migratorios Latinoamericanos*, 6-7 (1987); Jorge Schvarzer, *Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina* (Buenos Aires, 1991), pp. 56-57.
26 Stephen Haber, *Industry and Underdevelopment: The Industrialization of Mexico, 1890-1940* (Stanford, California, 1995), pp. 44-62; Jorge Schvarzer, "La implantación industrial", en José Luis Romero y Luis Alberto Romero, *Buenos Aires. Historia de cuatro siglos* (Buenos Aires, 1980), pp. 223-240; Fernando Rocchi, *Building a Nation, Building a Market: Industrial Growth and the Domestic Economy in Turn-of-the-century Argentina*, tesis doctoral inédita, Universidad de California, Santa Bárbara (1997), cap. II; Leandro Gutiérrez y Juan Carlos Korol, "Historia de empresas y crecimiento industrial en la Argentina. El caso de la Fábrica Argentina de Alpargatas", *DE*, 28:111 (1988), pp. 409-412.
27 Wilson Suzigan, *Indústria Brasileira. Origem e desenvolvimento* (San Pablo, 2000), pp. 51-61.
28 Guido Di Tella y Manuel Zymelman, *Las etapas del desarrollo económico argentino* (Buenos Aires. 1967), p. 428.
29 Javier Villanueva, "El origen de la industrialización argentina: la visión olímpica", *DE*, XII:47 (1972), pp. 451-476; Jorge, *Industria y concentración económica*, pp. 19-107; Roberto Cortés Conde, "Some Notes on the Industrial Development of Argentina and Canada in the 1920s", en D. C. M. Platt y Guido Di Tella, *Argentina, Australia and Canada. Studies in Comparative Development, 1870-1965* (Nueva York, 1985), pp. 149-160.
30 *BCACIP*, III:29, diciembre de 1926, pp. 564-565.
31 CACIP, *Actas de la Tercera Conferencia Económica Nacional* (Buenos Aires, 1928), p. 16.
32 Véase, por ejemplo, *BCACIP*, VII:72, abril de 1931, p. 1301.
33 *BUIA*, XLII:723, marzo de 1929, pp. 54-57.
34 *LN*, 5 de marzo de 1929, reproducido en *BUIA*, XLII:723, marzo de 1929, p. 40.
35 Luis Colombo, *Levántate y anda* (Buenos Aires, 1929), pp. 111-112.
36 Virginia Carreño, *Estancias y estancieros* (Buenos Aires, 1968), p. 50.
37 Enrique Williams Álzaga, *La pampa en la novela argentina* (Buenos Aires, 1955), p. 259.
38 Ramón Doll, "Segundo Sombra y el gaucho que ve el hijo del patrón", *Nosotros*, XXI:222-223, noviembre-diciembre de 1927, p. 277.
39 Cit. en Beatriz Sarlo, *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930* (Buenos Aires, 1988), p. 36. Véase también Williams Álzaga, *La pampa*, pp. 245-246.
40 Carlos A. Pueyrredón, introducción a C. N. Maciel, *Las grandes estancias argentinas* (Buenos Aires, 1934), p. iii.
41 Richard Walter, *The Province of Buenos Aires and Argentine Politics* (Cambridge, 1985), pp. 80-97.
42 O'Connell, "Argentina into the Depression: Problems of an Open Economy", en Rosemary Thorp (ed.), *Latin America in the 1930s: The Role of the Periphery in World Crisis* (Basingstoke, 1984), pp. 196-197; Javier Villanueva, "Economic

Development", en Mark Falcoff y Ronald Dolkhart (eds.), *Prologue to Perón. Argentina in Depression and War, 1930-1943* (Berkeley, Los Angeles y Londres), pp. 63-65.

43 *RRP*, 14 de octubre de 1932, pp. 9, 19.

44 Board of Trade, *Report of the Joint Committee of Inquiry into the Anglo-Argentine Meat Trade* (Londres, 1938), p. 37.

45 Sobre el acuerdo de Londres, véase David Rock, "Argentina, 1930-1946", en Leslie Bethell (ed.), *Argentina since Independence* (Cambridge, 1993), pp. 191-194.

46 *RRP*, 16 de junio de 1933, p. 5.

47 *BUIA*, XLVI:774, junio de 1933, pp. 22-30.

48 *RRP*, 16 de junio de 1933, p. 6.

49 *RRP*, 22 de diciembre de 1933, p. 5.

50 Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas* (Buenos Aires, 1998), p. 120.

51 *RRP*, 23 de junio de 1933; *LN*, 21 de junio de 1933.

52 *RRP*, 14 de julio de 1933, p. 7.

53 *Economist*, 5 de diciembre de 1936, p. 460.

54 De hecho, la evolución de las exportaciones británicas estuvo lejos de ser auspiciosa, y tras la firma del acuerdo bilateral de 1933 este país no logró incrementar significativamente su participación entre los socios comerciales de la Argentina. Se ha estimado que si bien las exportaciones estadounidenses cayeron de forma abrupta, las exportaciones británicas, que representaban algo menos del veinte por ciento de las importaciones argentinas en 1927, permanecieron por debajo del 25% durante la década de 1930. El valor de las exportaciones británicas cayó de 31,2 millones de libras en 1928 a 15,2 en 1935 y a 19,3 en 1938, favoreciendo con ello la expansión de la manufactura doméstica. Véase Miller, *Britain and Latin America*, p. 190.

55 Sobre la construcción de caminos, véase Raúl García Heras, *Automotores norteamericanos, caminos y modernización urbana en Argentina, 1918-1939* (Buenos Aires, 1985).

56 *BUIA*, XLVI:778, octubre de 1933, pp. 3-9.

57 *RRP*, 22 de diciembre de 1933, p. 11. También *RRP*, 27 de abril de 1934, p. 3.

58 Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, "Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina", en *Estudios sobre los orígenes del peronismo* (Buenos Aires, 1971), pp. 10-11.

59 *RRP*, 22 de junio de 1934, p. 5.

60 Villanueva, "Economic Development", p. 73.

61 Ibíd., pp. 67-72.

62 Gerchunoff y Llach, *El ciclo de la ilusión y el desencanto*, pp. 142-143.

63 Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence* (Cambridge, 1994), pp. 224-232.

64 Marcelo de Paiva Abren, "Argentina and Brazil during the 1930s: The Impact of British and American International Economic Policies", en Rosemary Thorp (ed.), *Latin America in the 1930s*, pp. 156.

65 *BUIA*, XLVII:783, marzo de 1934, p. 8

66 Ibíd., p. 17.

67 *BUIA*, XLVII:785, mayo de 1934, pp. 1-15.

68 La Depresión Mundial ofreció otro ejemplo de cómo el control de las firmas exportadoras sobre el mercado de carnes no podía desafiarse localmente. Durante la Depresión, los frigoríficos reaccionaron a la baja de las cotizaciones en Inglaterra transfiriendo la baja de precios a sus proveedores argentinos. En 1935, un comité parlamentario investigó el comercio de carnes y concluyó que las empresas eran culpables de prácticas monopólicas. El senador Lisandro de la Torre acusó al gobierno de proteger a los frigoríficos,

provocando un gran escándalo político que culminó con un asesinato en el propio recinto del Senado. A pesar de todo ello, los estancieros se mantuvieron a prudente distancia de todo el episodio, quizás porque percibieron que el "Debate de las Carnes" tenía fuertes motivaciones políticas, pero también porque en la década previa habían aprendido que poco podía obtenerse enfrentando a las firmas frigoríficas. Para un relato de los sucesos, véase Peter Smith, *Politics and Beef in Argentina: Patterns of Conflict and Change* (Nueva York, 1969), pp. 170-195.

69 *LP*, 21 de mayo de 1939.

70 Smith, *Politics and Beef*, pp. 178-192.

71 Ministerio de Agricultura, *Despacho de la Comisión Especial Designada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 5 de abril de 1933 para Estudiar el Régimen de los Arrendamientos Agrícolas y la Situación Económica de la Agricultura* (Buenos Aires, 1933), p. 12. Osvaldo Barsky, "La caída de la producción agrícola en la década de 1940", en O. Barsky y otros, *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales* (Buenos Aires, 1988), p. 66.

72 *The Economist*, 8 de febrero de 1936, p. 5; O'Connell, "Argentina into the Depression", p. 198.

73 *RRP*, 22 de septiembre de 1933, p. 5.

74 *LN*, 2 de junio de 1933; *RRP*, 13 de octubre de 1933, p. 22.

75 *LN*, 31 de mayo de 1933; 2 de junio de 1933.

76 First National Bank of Boston, "Argentine Cattle. A Study of the Present Size of the Herds", *Economic Series*, 2:1928 (Buenos Aires, 1928), p. 11.

77 Esta interpretación ha sido sostenida, entre otros, por Murmis y Portantiero en su "Crecimiento industrial y alianza de clases", p. 17.

78 Board of Trade, *Report of the Joint Committee*, pp. 59, 136.

79 Sucesión Mariano Cecilio Unzué, AGPJN.

80 Sucesiones Herbert Gibson, Ezequiel Ramos Mexía y Federico Lorenzo Martínez de Hoz, AGPJN.

81 Sucesión Rufino F. Luro, AGPJN, ff. 3, 24 y 26.

82 Estos cálculos están basados en información proveniente de la *Guía de Sociedades Anónimas* entre 1930 y 1940.

83 *RRP*, 23 de agosto de 1940, p. 7; 21 de agosto de 1942, p. 7.

84 *DSCDN*, II, 20 de agosto de 1935, p. 700.

85 Carlos F. Díaz Alejandro, *Essays on the Economic History of the Argentine Republic* (New Haven, 1970), pp. 144-146, 258.

86 Sucesión Mariano C. Unzué, AGPJN.

87 Sucesión Carlos Unzué, AGPJN.

88 *Guía de Sociedades Anónimas*, 1939-1940.

89 *DSCDN*, VI, 14 de septiembre de 1942, pp. 1048-1049.

90 Alberto Petrina y otros, *Buenos Aires. Guía de Arquitectura* (Buenos Aires-Sevilla, 1998), p. 177.

91 Véase Lucía E. Calcagno y otros, *Guía de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1992), pp. 58-69, 80-87, 168-169; y Petrina y otros, *Buenos Aires*, pp. 133-177.

92 Torcuato Di Tella, *Torcuato Di Tella. Industria y política* (Buenos Aires, 1993), pp. 121, 163.

93 "Montelén", en Casa Pardo, *Nuestras estancias. 30 estancias representativas de la República Argentina* (Buenos Aires, 1973) s.p.

94 Ruth y Leonard Greenup, *Revolution before Breakfast* (Chapel Hill, 1947), p. 129.

95 Otto Bemberg erigió un gran imperio empresario, basado en la industria cervecera, que también incluía gran cantidad de otros emprendimientos: malterías, diversas manufacturas, empresas rurales, estancias, colonias agrícolas, fábricas textiles, compañías de tranvías, y compañías hipotecarias.

Véase *DSCDN*, VI, 22 y 23 de septiembre de 1942, 440; Roque Paz, "El grupo Bemberg", *Argumentos*, febrero de 1939, pp. 304-313; Paul Lewis, *The Crisis of Argentine Capitalism* (Chapel Hill y Londres, 1990), pp. 165-168.

96 Se ha estimado que el ingreso per cápita declinó un 7% entre 1925-1929 y 1935-1939. O'Connell, "Argentina into the Depression", p. 210.

97 Austin F. Macdonald, *Government of the Argentine Republic* (Nueva York, 1942), p. 91.

98 *DSCDN*, 14 de septiembre de 1942, pp. 1026-1049, 22 y 23 de septiembre de 1942, pp. 381-478.

99 Juan José Llach, "Dependencia, procesos sociales y control del estado en la década del treinta", *DE*, 12:45 (1972), p. 181.

100 *RRP*, 30 de septiembre de 1932, p. 11.

101 *Censo Agropecuario 1937. Compendio*, p. 10.

102 Peter Alhadeff, "Public Finance and the Economy in Argentina, Australia and Canada During the Depression of the 1930s", en D. C. M. Platt y Guido Di Tella (eds.), *Argentina, Australia and Canada*, pp. 167-168.

103 A pesar del primitivismo de sus sistemas de almacenamiento, transporte y comercialización de granos, desde la década de 1890 la Argentina se convirtió en uno de los mayores exportadores de trigo, maíz y lino. La falta de graneros y elevadores locales y terminales obligaba a los productores argentinos a vender el grano apenas cosechado, aun si una oferta tan masiva podía causar una baja del precio en el mercado mundial. La ausencia de elevadores o de sitios en los que almacenar el grano también impidió el desarrollo de un sistema de "warrants" que hubiese colocado a los chacareros en mejor posición para acceder al crédito, así como también para especular, de acuerdo con la evolución de los precios mundiales, a la hora de vender su cosecha. Para el cambio de siglo, un puñado de grandes firmas –ejemplos tempranos de la gran empresa trasnacional– ya dominaban el comercio de granos. Las "Cuatro Grandes" no sólo se ocupaban del comercio internacional; también se vinculaban con los productores a través de agentes locales que adelantaban crédito y semillas, y que compraban el grano una vez recogido. Gracias a su capacidad para penetrar en el proceso de producción y para subordinar a los intermediarios, las grandes firmas no sólo obtenían elevadas ganancias sino que ejercían un fuerte control sobre la producción y la comercialización. La construcción de una red de elevadores hubiese colocado a los productores en mejor posición para negociar con estas empresas. Esta obra nunca llegó a realizarse, en parte porque su creación hubiese demandado enormes inversiones que, en las épocas de creciente penuria en las que se volvieron más urgentes, ni los terratenientes ni los agricultores estaban muy dispuestos a pagar. Por décadas, la agricultura argentina se las había arreglado bastante bien sin estas obras. Los bajos costos de producción compensaban el primitivismo de los sistemas crediticio, de almacenamiento y de comercialización. El hecho de que la pampa estuviese ubicada en el hemisferio sur también colaboraba, puesto que el grueso de la producción mundial tenía su sede en el otro hemisferio. En consecuencia, la Argentina colocaba su grano en el mercado durante el invierno boreal, cuando la oferta era escasa y los precios se encontraban en niveles habitualmente elevados. Por estos motivos, los llamados a reformar el comercio de granos no fueron escuchados hasta que fue demasiado tarde (la Sociedad Rural, por ejemplo, comenzó a ocuparse del tema recién en 1926). Se advierte aquí cierto paralelismo con la situación del mercado de carnes. Durante décadas, los agricultores y los comerciantes de grano obtuvieron ganancias muy elevadas, pero la baja de los precios desde la segunda mitad década de 1920 dejó a los chacareros en una situación de extrema debilidad, que se hizo manifiesta durante la Depresión.

En ese momento, una fuerte inversión para reformar el mercado de granos no se encontraba entre las prioridades del gobierno de la Concordancia, cuyos recursos, por otra parte, eran escasos. Al mismo tiempo, entonces se hizo evidente que no existían soluciones fáciles para el problema del comercio de granos, puesto que la raíz de este se encontraba en la superproducción a escala mundial. Significativamente, a comienzos de la década de 1930 el pool canadiense (al que a menudo se mentaba como el modelo a imitar para solucionar los problemas del grano argentino) cayó en la bancarrota. Ello seguramente contribuyó a disuadir al gobierno de intervenir en un mercado dominado por la demanda. Para un tratamiento más extenso, véase mi *The Landowners of the Argentine Pampas*, cap. V.

104 *RRP*, 18 de noviembre de 1938, p. 5. O'Connell, "Argentina into the Depression", p. 206.

105 *RRP*, 3 de febrero de 1933, p. 5.

106 *Revista de la Liga de Defensa Comercial*, VIII:17, 1° de diciembre de 1933, p. 389.

107 *DSCDN*, 5 de julio de 1933, p. 18.

108 Cit. en Williams Alzaga, *La pampa*, p. 291.

109 Roberto Campolieti, *La chacra argentina* (Buenos Aires, 1914), p. 79.

110 Díaz Alejandro, *Essays*, pp. 160-161.

111 *DSCDN*, 15 de julio de 1934, pp. 508-509, 523.

112 *DSCDN*, 15 de julio de 1934, p. 508.

113 Edward Malefakis, *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain. Origins of the Civil War* (New Haven), pp. 104-106. Para una descripción de la debilidad de los pequeños arrendatarios *vis-à-vis* los propietarios, véase Juan Manuel Palacio, "Arrendatarios agrícolas en una empresa ganadera. El caso de 'Cruz de Guerra', 1927-1938", *DE*, 32:127, pp. 395-405.

114 *RRP*, 2 de octubre de 1942, p. 9.

115 Rock, "Argentina", p. 198.

116 *DSCDN*, II, 23 de agosto de 1935, pp. 888-889.

117 *DSCSN*, 18 de julio de 1940, p. 627.

118 Ministerio de Agricultura, *Despacho de la Comisión*, p. 14.

119 Emilio Massone, "La colonización oficial en el problema agrario argentino", *Hechos e Ideas*, II:13 (1937), pp. 11-34. Estos cálculos están basados en chacras sembradas con trigo y lino y, por otra parte, no toman en cuenta a los subarrendatarios. La inclusión de subarrendatarios y de los productores de maíz seguramente hubiera elevado el número de arrendatarios.

120 Macdonald, *Government of the Argentine Republic*, p. 344; Ysabel F. Rennie, *The Argentine Republic* (Nueva York, 1945), pp. 320-321; Greenup y Greenup, *Revolution before Breakfast*, p. 129.

121 *DSCDPBA*, 7 de octubre de 1942, pp. 1762-1797.

122 *DSCDN*, 6 de julio de 1922, pp. 386-406; *DSCDPBA*, 7 de octubre de 1942, p. 1766.

123 Walter, *The Province of Buenos Aires*, pp. 153-166, 183-196.

124 *DSCSPBA*, 23 de octubre de 1942, p. 1209.

125 *DSCDPBA*, 7 de octubre de 1942, p. 1766.

126 *DSCSPBA*, 23 de octubre de 1942, p. 1210.

127 *DSCSPBA*, 23 de octubre de 1942, pp. 1205, 1213; *DSCDPBA*, 1° de octubre de 1942, p. 1766. La tendencia hacia la constitución de sociedades anónimas parece haber sido más lenta en el sector rural que en la economía urbana. Lewis, *The Crisis of Argentine Capitalism*, pp. 72-73.

128 *LN*, 19 de julio de 1939. También *LP*, 11 de diciembre de 1934.

129 *DSCDN*, 7 de julio de 1939, p. 208.

130 *LP*, 23 de mayo de 1939.

131 *DSCDN*, 1° de julio de 1939, p. 208.

132 *DSCDN*, 20 de julio de 1939, p. 530. Argumentos similares expresados por Nicolás Repetto en *DSCDN*, II, 4 de agosto de 1939, p. 764.
133 Barsky, "La caída de la producción agrícola", p. 47.
134 Véase Dirección de Economía Rural y Estadística, *Estadística Agropecuaria al 30 de Septiembre de 1942* (Buenos Aires, 1943).
135 *Crítica*, 29 de abril de 1940. Véase también la serie de artículos que este diario dedicó al tema entre el 11 de abril y el 6 de mayo de 1940.
136 Sobre las fuerzas armadas, véase Robert Potash, *The Army and Politics in Argentina, 1928-1945, Yrigoyen to Perón* (Stanford, California, 1969), y Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina* (Buenos Aires, 1982); sobre la relación entre el ejército y la iglesia católica, Loris Zanatta, *Del estado liberal a la nación católica* (Buenos Aires, 1996).
137 *LN*, 6, 15 y 16 de noviembre de 1943. En octubre de 1943 el gobierno también anunció una aumento considerable en los precios mínimos para el grano. *RRP*, 19 de noviembre de 1943, p. 5.
138 Véase Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), *Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socio-Económico del Sector Agrícola. Argentina* (Washington, 1965), pp. 104-105; Guillermo Flichman, *La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino* (México, 1977), pp. 111-113.
139 Osvaldo Barsky y Alfredo Pucciarelli, "Cambios en el tamaño y el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas", en O. Barsky (ed.), *El desarrollo agrario pampeano* (Buenos Aires, 1991), cuadros 43 y 47.
140 Rosemary Thorp, *Progress, Poverty and Exclusion. An Economic History of Latin America in the 20th Century* (Washington, 1998), p. 156.
141 *ASRA*, LXXVIII:12 (1944), p. 789.
142 Mario Lattuada, *La política agraria peronista* (Buenos Aires, 1986), pp. 40, 51-53.
143 James Bruce, *Those Perplexing Argentines* (Londres, 1954), pp. 246-247.
144 Ibíd., p. 247.
145 Juan José Llach, "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo", *DE*, 23:92 (1984).
146 Lattuada, *La política agraria peronista*, p. 59; Lewis, *The Crisis of Argentine Capitalism*, pp. 166-168.
147 Juan Carlos Torre, *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976* (Buenos Aires, 1983); Daniel James, *Resistencia e integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976* (Buenos Aires, 1993); Tulio Halperin Donghi, *La larga agonía de la Argentina peronista* (Buenos Aires, 1995).
148 Rennie, *The Argentine Republic*, p. 249.

VISIÓN EN PERSPECTIVA

1 Miguel Cané a Carlos Pellegrini, 17 de diciembre de 1887, cit. en Ricardo Sáenz Hayes, *Miguel Cané y su tiempo* (Buenos Aires, 1955) p. 367.
2 Gordon Ross, *Argentina and Uruguay* (Londres, 1917), p. 3.
3 *Gaceta Rural, Mercantil e Industrial*, IX:98, septiembre de 1915, p. 97.
4 José María Bustillo, *Mi rumbo cívico* (Buenos Aires, 1942), p. 31.
5 *RRP*, 4 de septiembre de 1942, p. 7.
6 John W. White, *Argentina. The Story of a Nation* (Nueva York, 1942), p. 189.
7 Carl Taylor, *Rural Life in Argentina* (Baton Rouge, 1948), p. 174.

Fuentes y bibliografía primarias

FUENTES MANUSCRITAS

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, BUENOS AIRES

Archivo Miguel Cané

Archivo López

Archivo Dardo Rocha

Archivo Adolfo Saldías

Archivo Roque Sáenz Peña

Archivo Senillosa

Archivo Roca

BIBLIOTECA TORNQUIST, BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, BUENOS AIRES

Archivo Tornquist

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA

Archivo General del Poder Judicial de la Nación

MUSEO MITRE, BUENOS AIRES

Archivo Mitre

COLECCIONES PRIVADAS

Archivo de Juan L. Fages, Buenos Aires

DOCUMENTACIÓN IMPRESA

FUENTES OFICIALES

Censo General de la Provincia de Buenos Aires, 1881

Segundo Censo Nacional, 1895

Censo Agropecuario Nacional en la República Argentina en 1908

Tercer Censo Nacional, 1914

Censo Agropecuario Nacional, 1937

Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación

Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación

Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires

COLECCIONES DE DOCUMENTOS

Arce, José (ed.), *Origen de "La Larga" con apéndice documental* (Buenos Aires, 1964).

Mabragaña, Horacio (ed.), *Los mensajes. Historia del desenvolvimiento de la Nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes* (Buenos Aires, 1910).

PERIÓDICOS, INFORMES Y GUÍAS

Anales de la Sociedad Rural Argentina

Boletín (luego *Revista*) *de la Liga Agraria*

Boletín de la Unión Industrial Argentina

Boletín del Departamento (luego *Ministerio*) *de Agricultura*

El Avisador. Guía General de Comercio y de Forasteros (1862)

El Campo y el Sport

El Diario

El Economista Argentino

El Nacional

Ernesto Tornquist & Co., Business Conditions in Argentina

Gran Guía del Comercio (1873)

Gran Guía de la Ciudad de Buenos Aires (1886)

Guía de Sociedades Anónimas

La Agricultura

La Época

La Nación

La Prensa

La Producción Argentina

La Semana Rural

La Tribuna

La Vanguardia

Libro de Oro. Guía de Familias (1899)

Periódico del Estanciero

Review of the River Plate

Revista Argentina de Ciencias Políticas

Revista de Derecho, Historia y Letras

Revista de Economía Argentina

Revista Económica

Standard

Tribuna

MATERIAL EDITADO

Aira, César, *Argentina. Las Grandes Estancias* (Nueva York y Buenos Aires, 1994).

Ayarragaray, Lucas, *Estudios históricos, políticos y sociales* (Buenos Aires, 1927).

Beaumont, J. A., *Viajes por Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Oriental (1826-1827)* (Buenos Aires, 1957).

Bioy, Adolfo, *Años de mocedad* (Buenos Aires, 1963).

Blanco, Eugenio, "Las finanzas de Buenos Aires", *Facultad de Ciencias Económicas. Investigaciones de seminario,* vol. IV (Buenos Aires, 1925).

Blaquier, Carlos, *La empresa agraria argentina. Biografía de un establecimiento de la provincia de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1967).

Board of Trade, *Report of the Joint Committee of Inquiry into the Anglo-Argentine Meat Trade* (Londres, 1938).

Boglich, José, *La cuestión agraria* (Buenos Aires, 1937).

Bosch, Mariano G., *Historia del Partido Radical. La UCR 1891-1930* (Buenos Aires, 1931).
—, *Buenos Aires. Guía de Arquitectura* (Buenos Aires y Sevilla, 1994).

Bunge, Alejandro E., *Los problemas económicos del presente* (Buenos Aires, 1920).
—, *Una nueva Argentina* (Buenos Aires, 1940).

Bustillo, José María, *Mi rumbo cívico* (Buenos Aires, 1942).

Bruce, James, *Those Perplexing Argentines* (Londres, 1954).

CACIP, *Actas de la Tercera Conferencia Económica Nacional* (Buenos Aires, 1928).

Calgagno Lucía E. y otros, *Guía de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1992).

Campolieti, Roberto, *La chacra argentina* (Buenos Aires, 1914).
—, *La organización de la agricultura argentina* (Buenos Aires, ¿1929?).

Cantilo, José Luis, *Intervención nacional en la provincia de Buenos Aires* (La Plata, 1918).

Cárcano, Miguel Ángel, "Principios de política agraria", *Revista de Ciencias Económicas,* X:10-11 (1922).

Cárcano, Ramón J., *Mis primeros ochenta años* (Buenos Aires, 1965).

Carpenter, Frank, *South America. Social, Industrial and Political* (Nueva York y Chicago, 1903).
—, *The Tail of the Hemisphere. Chile and Argentina* (Nueva York, 1923).

Carreño, Virginia, *Estancias y estancieros* (Buenos Aires, 1968).

Casa Pardo, *Nuestras Estancias. 50 estancias representativas de la República Argentina* (Buenos Aires, 1973).

Clemenceau, Georges, *Notas de viaje por América del Sur* (Buenos Aires, 1988).

Colombo, Luis, *Levántate y anda* (Buenos Aires, 1929).

Comisión Especial de Régimen de Elevadores de Granos, *Informe presentado a S.E. el Sr. Ministro de Agricultura Don Emilio Mihura sobre la implantación de un sistema general de elevadores de granos* (Buenos Aires, 1928).

Club del Progreso, *Datos históricos sobre su origen y desenvolvimiento* (Buenos Aires, 1902).

Coni, Emilio, *¿Arrendamiento o propiedad?* (La Plata, 1920).

Costa, Julio A., *Entre dos batallas* (Buenos Aires, 1927).

Daireaux, Emilio, *Vida y costumbres en el Plata* (Buenos Aires, 1888).
—, "Aristocracia de antaño", *RDHL*, vol. II (1898).

Daireaux, Godofredo, *La cría de ganado en la pampa* (Buenos Aires, 1886).
—, "La estancia argentina", en *Censo Agropecuario Nacional*, vol. III, *La ganadería y la agricultura en 1908* (Buenos Aires, 1909).

De la Torre, Lisandro, "El convenio de Londres" (Buenos Aires, 1933).

De Olariaga, Nemesio, *El ruralismo argentino* (Buenos Aires, 1942).

Dirección de Economía Rural y Estadística, *Estadística Agropecuaria al 30 de Septiembre de 1942* (Buenos Aires, 1943).

Doll, Ramón, "Segundo Sombra y el gaucho que ve el hijo del patrón", *Nosotros*, XX:222-223 (1927).

Duhau, Luis, *La revaluación en la provincia de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1927).
—, *El Doctor Ramón Saniamarina. Su vida y su obra* (Buenos Aires, 1909).

Elizalde, Fernando, *La heredad* (Buenos Aires, 1980).

Fernández, Francisco J., *Con motivo de los triunfos ganaderos obtenidos por el Ingeniero Pedro. T. Pagés* (Buenos Aires, 1916).

First National Bank of Boston, "Argentine Cattle. A Study of the Present Size of the Herds", *Economic Series*, 2 (Buenos Aires, 1928).

Fliess, Alois E., *La producción agrícola y ganadera de la República Argentina en el año 1891* (Buenos Aires, 1893).

Fors, Luis Ricardo, *1893. Levantamiento, revolución y desarme de la provincia de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1895).

Frers, Emilio, *El prohibicionismo y la política comercial argentina. Cartas a un hombre de estado* (Buenos Aires, 1902).
—, *El progreso agrícola de la nación y la Sociedad Rural Argentina* (Buenos Aires, 1916).

—, *Temas Diversos*, VII (Buenos Aires, 1919).
—, *Temas Diversos*, VIII (Buenos Aires, 1922).

Gálvez, Manuel, *Vida de Hipólito Yrigoyen*, en *Biografías completas* (Buenos Aires, 1962).

Gibson, Herbert, *The History and Present State of the Sheep-Breeding Industry in the Argentine Republic* (Buenos Aires, 1893).
—, "La evolución ganadera", en *Censo Agropecuario Nacional*, vol. III (Buenos Aires, 1909).
—, *The Land We Live On* (Buenos Aires, 1914).

Greenup, Ruth y Leonard Greenup, *Revolution before Breakfast* (Chapel Hill, 1947).

Guerrero, Carlos, *Prever es gobernar* (Buenos Aires, 1917).
—, *Publicaciones prácticas de ganadería, agricultura e higiene agropecuaria* (Buenos Aires, s.f. [ca. 1920]).

Guzmán, Yuyú, *Estancias de Azul* (Azul, 1978).
—, *El país de las estancias* (Buenos Aires, 1999).

Hernández, José, *Instrucción del estanciero. Tratado completo de la planeación y manejo de un establecimiento de campo destinado á la cría de hacienda vacuna, lanar y caballar* (Buenos Aires, 1882).

Heysen, Luis E., *Presente y porvenir del agro argentino* (Lima, 1933).

Hogg, Ricardo, *Yerba vieja. Episodios históricos y recuerdos del campo argentino* (Buenos Aires, 1940).

Huret, Jules, *La Argentina. De Buenos Aires al Gran Chaco* (Buenos Aires, 1913).

Ibarguren, Carlos, *La historia que he vivido* (Buenos Aires, 1955).
—, *La Argentina rural. Retrospecto anual de ganadería y agricultura* (Buenos Aires, 1911).

James, Bryce, *South America. Observations and Impressions* (Londres, 1912).

Koebel, W. H., *Modern Argentina* (Londres, 1910).
—, *The Great South Land* (Londres, 1919).
—, *The New Argentina* (Londres, 1923).

Larden, Walter, *Estancia Life. Agricultural, Economic, and Cultural Aspects of Argentine Farming* (Londres, 1911; reeditado Detroit, 1974).

Latham, Wilfrid, *The States of the River Plate: Their Industries and Commerce* (Londres, 1866).

Lavalle Cobo, Jorge, *Voces perdidas* (París, 1907).

Latzina, Francisco, *La Argentina. Considerada en sus aspectos físicos, social y económico* (Buenos Aires, s.f. [ca. 1904]).

Lemée, Carlos, *El estanciero argentino. Instrucciones para la organización de un establecimiento de campo* (Buenos Aires, 1887).

Lima, Miguel A., *El hacendado del porvenir* (Buenos Aires, 1885).
—, *Los centros agrícolas* (Buenos Aires, 1888).

Lloyd, Reginald (ed.), *Twentieth Century Impressions of Argentina* (Londres, 1911).

López, Lucio V., *Intervención a la provincia de Buenos Aires. Informe del interventor nacional de la provincia de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1894).
—, *Los establecimientos ganaderos de la sociedad anónima La Olivera* (Buenos Aires, 1911).

Maciel, Carlos N., *Las grandes estancias argentinas* (Buenos Aires, 1934).

Macdonald, Austin F., *Government of the Argentine Republic* (Nueva York, 1942).

Mansilla, Lucio V., *Rozas. Ensayo histórico-psicológico* (París, 1898).
—, *Mis memorias. Infancia, adolescencia* (París, 1904).

Massone, Emilio, "La colonización oficial en el problema agrario argentino", *Hechos e Ideas,* II:13 (1937).

Matienzo, José Nicolás, *El gobierno representativo federal en la República Argentina* (Buenos Aires, 1910).
—, *Nuevos temas políticos e históricos* (Buenos Aires, 1928).

Marotta, Pedro, "Tierra y población" (1924), en *Tierra y patria: los argentinos debemos realizar la segunda expedición al desierto* (Buenos Aires, 1932).
—, "El agro argentino en la historia y en la economía del país" (1927), en *Tierrra y patria: los argentinos debemos realizar la segunda expedición al desierto* (Buenos Aires, 1932).

Martínez, Alberto B., "Consideraciones sobre los resultados del censo ganadero", en *Censo Nacional 1914,* vol. IV, *Censo Ganadero* (Buenos Aires, 1917).
—, y Maurice Lewandowski, *Argentine in the Twentieth Century* (Londres, 1910).

Mendoza, Prudencio de la Cruz, *Historia de la ganadería argentina* (Buenos Aires, 1928).

Ministerio de Agricultura, *Despacho de la Comisión Especial Designada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 5 de abril de 1933 para Estudiar el Régimen de los Arrendamientos Agrícolas y la Situación Económica de la Agricultura* (Buenos Aires, 1933).

Monzó, Julio, "Las clases dirigentes", *RACP,* vol. VI (1913).
Mulhall, Michael G., y E. T. Mulhall, *Handbook of the River Plate* (Buenos Aires, 1869).
—, *Handbook of the River Plate* (Buenos Aires, 1875).
—, *Handbook of the River Plate* (Buenos Aires, 1892).

Nemirovsky, Lázaro, *Estructura económica y orientación política de la agricultura en la República Argentina* (Rosario, 1931).

Newton, Jorge y Lily de Newton, *Historia del Jockey Club de Buenos Aires* (Buenos Aires, 1966).

Newton, Ricardo y Juan Llerena, *Viajes y estudios de la comisión argentina sobre la agricultura y la ganadería, organización y economía rural en Inglaterra, Estados Unidos y Australia,* 6 vols. (Buenos Aires, 1882-1884).

Oddone, Jacinto, *La burguesía terrateniente argentina* (Buenos Aires, 1930).

Olivera, Eduardo, *Viaje agrícola en Francia, Alemania y Bélgica* (Buenos Aires, 1869).
—, *Miscelánea. Escritos económicos, adminstrativos, écónomo rurales, agrícolas, ganaderos, exposiciones, discursos inaugurales y parlamentarios, viajes, correspondencia, historia y legislación* (Buenos. Aires, 1910).

Pagés, Pedro T., *Crisis ganadera argentina* (Buenos Aires, 1922).
—, *Defensa de la producción agropecuaria* (La Plata, 1928).
—, *Primeras bases científicas y técnicas del progreso agropecuario del país* (Buenos Aires, 1937).

Paz, Roque, "El grupo Bemberg", *Argumentos* (febrero de 1939).

Pereda, Horacio V., *Tierra, propiedad, arrendamiento* (Buenos Aires, 1936).

Posada, Adolfo, *La República Argentina. Impresiones y comentarios* (Madrid, 1912).
—, *Ramón Santamarina y Valcárcel* (Buenos Aires, 1993).

Ramos Mexía, Ezequiel, *La colonización oficial y la distribución de tierras públicas* (Buenos Aires, 1921).
—, *Mis memorias* (Buenos Aires, 1936).

Ravelio, Carlos, *Eduardo Olivera* (reseña biográfica) (Buenos Aires, 1928).

Rennie, Ysabel F. *The Argentine Republic* (Nueva York, 1945).

Repetto, Nicolás, *Mi paso por la política (de Roca a Yrigoyen)* (Buenos Aires, 1956).

Richelet, Juan E., *La ganadería argentina y su comercio de carnes* (Buenos Aires, 1928).
—, *A Defense of Argentine Meat* (Londres, 1930).

Rivera Astengo, Agustín, *Carlos Pellegrini* (Buenos Aires, 1941).
—, *Juárez Celman* (Buenos Aires, 1944).

Ross, Gordon, *Argentina and Uruguay* (Londres, 1917).

Ross Johnson, Henry Charles, *A Long Vacation in the Argentine Alps or Where to Settle in the River Plate States* (Londres, 1868).

Rostagno, Miguel N., "La crisis ganadera", *Revista de Ciencias Económicas,* X:1011 (1932).

Rumbold, Horace, *The Great Silver River: Notes of a Residence in Buenos Aires in 1880 and 1881* (Londres, 1887).

Sáenz Hayes, Ricardo, *Miguel Cané y su tiempo* (Buenos Aires, 1955).

Saldías, Adolfo, *Civilia* (Buenos Aires, 1888).
—, *Buenos Aires en el centenario* (Buenos Aires, 1988).

Scardin, Francisco, *La estancia argentina* (Buenos Aires, 1908).

Scotto, Jorge Arturo, *Club del Progreso. Crónica Histórica* (Buenos Aires, 1902).

Scrivener, Juan H., *Impresiones de viaje: Londres, Buenos Aires, Potosí* (Buenos Aires, 1937).

Sebreli, Juan José, *Apogeo y ocaso de los Anchorena* (Buenos Aires, 1972).

Shaw, Arthur, *Forty Years in the Argentine Republic* (Londres, 1907).

Sociedad Rural Argentina, *Comercio Exterior de Carnes* (Buenos Aires, 1927).
—, *Memoria 1926-1927* (Buenos Aires, 1927).
—, *Anuario de la Sociedad Rural Argentina* (Buenos Aires, 1928).
—, *El pool de los frigoríficos. Necesidad de intervención del Estado* (Buenos Aires, 1928).

Taylor, Carl, *Rural Life in Argentina* (Baton Rouge, 1948).

Tenembaum, Juan L., *Orientación económica de la agricultura argentina* (Buenos Aires, 1946).

Turner, Frederick J., *The Frontier in American History* (Tucson, 1986).

Watson, David, *Los criollos y los gringos. Escombros acumulados al levantar la estructura ganadera-frigorífica* (Buenos Aires, 1941).

Weil, Felix J., *Argentine Riddle* (Nueva York, 1944).

White, John W., *Argentina. The Story of a Nation* (Nueva York, 1942).

Woodgate, Frederick, *Sheep and Cattle Farming in Buenos Ayres* (Londres, 1876).

Zeballos, Estanislao, *A través de las cabañas* (Buenos Aires, 1888).

Índice de nombres

C

M

N

O

P

Q

R

S